CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

"LAS PERSPECTIVAS DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO"

Por: Mgdo. Wilfredo Saénz F.
XVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal Penal

I. INTRODUCCIÓN

A través de congresos, seminarios, estudios de juristas sobre la realidad procesal de América Latina, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de una transformación o reforma del proceso penal para disminuir la cifra de los presos sin condena y la violación de las garantías procesales, además evitar que la detención preventiva constituya una sanción adelantada, ocasione perjuicios innecesarios y se convierta en un instrumento de injusticia.

En reiteradas ocasiones se ha planteado la necesidad de minimizar los efectos de tal medida cautelar personal circunscribiéndola a los delitos de mayor gravedad, también ese lineamiento es seguido con respecto a la pena privativa de libertad ambulatoria.

De acuerdo con estadísticas de las Naciones Unidas registradas en la obra titulada El Preso sin Condena en América Latina y el Caribe, bajo la responsabilidad de Elías Carranza, Mario Houed, Luis Paulino Mora y Eugenio Raúl Zaffaroni, estudios estadísticos realizados demostraron que en países como Antillas Holandesas, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Martinica y Panamá, la cifra del preso sin condena se ubica entre el 50% y el 70% y, en Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela tienen un porcentaje de más del 70%m además Bolivia y Paraguay registran más del 80%.

Las cifras citadas fueron confirmadas en el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, revelándose que los porcentajes críticos en cuanto a esta situación se observan en países tales como Argentina, Colombia, El Salvador, México, Ecuador, Panamá y Venezuela, en los que el promedio para el período comprendido del año 1972 a 1981 el del 60% al 70% de presos sin condenas.

La cifra crítica del preso sin condena se da en los países de América Latina con sistema continental europeo y ésta se registra en Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Panamá, por eso ese tema ofreció especial importancia en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas celebrado en La Habana en el año 1990. Aun cuando supuestamente esos internos están amparados por los principios de presunción de inocencia y garantía del debido proceso, entre otros, pareciera que en la realidad procesal se violentan los mismos.

Como premisa de partida debemos considerar que la cifra alarmante de personas guardando detención preventiva, transitando por las diferentes fases de los procesos sin recibir una decisión final, es decir, una sentencia, es alarmante y revela la necesidad de la reforma de los procesos penales aplicando institutos procesales como los de desprisionalización, despenalización, desjudialización y descriminalización, sin que ello represente fomentar la impunidad o desatender los derechos de la víctima, tal como quieren sostener quienes censuran la aplicación de sustitutos penales.

II CONCEPTO Y DEFINICIÓN

En términos generales el concepto "principio" indica el fundamento, la norma, el orden o las reglas a seguir para el mejor encauzamiento y tutela de los derechos, las garantías y oportunidades para las partes o sujetos partícipes de un proceso.

Ahora bien, el principio de presunción de inocencia, está recogido en la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia, promulgada el 27 de junio de 1776, la cual establecía que para ser declarado culpable se requiere el consentimiento unánime del jurado. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional en Francia el 26 de agosto de 1789, prevé que "todo hombre se presume inocente hasta que ha sido declarado culpable, y si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley." (1)

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes, del 2 de mayo de 1948, en su artículo 26, también lo contempla y esa línea de orientación sigue la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, aprobada en Panamá por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, mediante Ley 15 de 1977, promulgada en la Gaceta Oficial 18,468 de 30 de noviembre de 1977 e igual orientación se da en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo contempla en el artículo 14, convención aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, por medio de Ley 14 de 1976 publicada en la Gaceta Oficial N° 18,373 de 8 de julio de 1977.

Para el Tratadista Carlos J. Rubianés, representa lo siguiente:

> "El imputado es, pues, inocente durante toda la sustanciación del proceso, y tal estado sólo cambia por la sentencia final que lo declare culpable. Ello no impide que, en forma más o menos intensa, aparezca en el proceso una presunción de culpabilidad que justifique medidas en su contra." (2)

Contrario al planteamiento citado, el Tratadista Alfredo Vélez Mariconde considera que este principio no establece una presunción, más bien se trata del estado jurídico del imputado de su condición de inocencia hasta que no sea declarado culpable mediante una sentencia firme y, específicamente dice lo siguiente:

> "No se establece una presunción de inocencia; si fuera así, quizá no podría concebirse la coerción personal del imputado, que se basa en una presunción contraria, si no se advirtiera que se trata de dos tipos diferentes de presunción: una de la ley y otra del juez.
> ...
> Si éste es inocente hasta que la sentencia firme lo declare culpable, claro está que su libertad no puede ser restringida a título de cautela, y no de pena anticipada a dicha decisión jurisdiccional, siempre y cuando se sospeche o presuma que es culpable y ello sea indispensable para asegurar la efectiva actuación de la ley penal y procesal.
>
> Lo mismo que antes se ha dicho y se repite, la detención provisional (lato sensu) sólo podrá ser autorizada por la ley procesal cuando el juez compruebe, en el caso concreto, la necesidad efectiva y actual de evitar el peligro del daño jurídico." (3)

Esa misma línea de pensamiento, en cierta forma, la sigue Giovanni Leone, por cuanto expresa:

> "Sagrado e inviolable sin duda el derecho de defensa cierto e indiscutible el principio de que el imputado no se le puede considerar culpable antes de la sentencia irrevocable de condena; pero que se lo haya ce conceptuar inocente mientras se proceda contra él por serle imputado el delito, es una tal enormidad, una tan patente inversión del sentido lógico y jurídico, que no se puede admitir ni aun como forma retórica. Mientras hay un procedimiento en curso, no hay ni culpable ni inocente, sino únicamente indiciado: sólo en el momento en que recaiga en la sentencia, se sabrá si el indiciado es culpable o inocente." (4)

Según Mario I. Chichizola, debe observarse lo siguiente:

"El principio de inocencia, que surge del artículo 18 de la Constitución nacional (sic), establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no haya una sentencia condenatoria firme que así lo declare. Conforme a este principio, durante el juicio el imputado goza de una presunción de inocencia, que determina que se halle en legítima posesión de todos sus derechos, que sólo pueden serle restringidos en la medida en que resulte indispensable por las exigencias el proceso penal.

La actividad cautelar personal que se desarrolla en el proceso penal persigue tres objetivos fundamentales: asegurar la comparecencia del imputado al juicio, el impedirle que entorpezca la investigación, haciendo desaparecer los rastros del delito o atemorizando a los testigos o poniéndose de acuerdo con sus cómplices para eludir la acción de la justicia, y, finalmente, asegurar el cumplimiento de la pena que pueda imponérsele en la sentencia que se dicte." (5)

De acuerdo con el Profesor Silvio Guerra Morales, el principio de presunción de inocencia puede ser afectado a través de los medios de comunicación social y, sobre el particular, manifiesta:

"... en un gran número de casos, las divulgaciones que a través de los medios de comunicación de masas se hacen, siembran en ese seno social o comunitario, una denigrante y dañosa presunción de culpabilidad, aun cuando la presunción de inocencia en su aspecto personal o subjetivo permanezca inalterable; pero, los medios, mecanismos y métodos que suele usar esa presunción de culpabilidad para introducirse en los procesos jurídicos, sobre todo los penales, resultan ser los más rápidos e instantáneos, afectando así instituciones procesales como el beneficio del derecho de excarcelación, la concesión de medidas cautelares, la resolución positiva de un recurso de amparo de garantías constitucionales, de un habeas corpus, de una solicitud de libertad provisional, etc." (6)

El Dr. Hernando Londoño Jiménez expresa:

"Se desconoce cuando se legisla invirtiendo la carga de la prueba en cabeza del acusado, cuando es el Estado a quien incumbe, a través de sus jueces y fiscales, demostrar la responsabilidad del procesado. Si el reproche de culpabilidad esa apenas probable, mientras no se afirme definitivamente en una sentencia condenatoria, mal pueden las providencias anteriores presumir la culpabilidad del sujeto pasivo de la Ley Penal. Si ello pudiera ser así, el debate dialéctico dentro del proceso penal no sería otra cosa que una burla a la justicia." (7)

Luego de tomar en consideración una serie de planteamientos doctrinarios de diferentes corrientes, llegamos a la conclusión de que el status de la persona a quien se le formulan cargos en un proceso, es el de inocencia hasta tanto no se le demuestre en un juicio autónomo, legítimo e imparcial su culpabilidad, ofreciéndole todas las garantías y oportunidades, previa explicación, de acuerdo con su escolaridad, de las causas o motivos para someterlo a los rigores de ese juicio.

En parte no dejan de tener razón quienes consideran que no debe hablarse de inocencia o culpabilidad, porque eso será debatido en el proceso, pero tal afirmación es una consideración de fondo, sin embargo, en cuanto a los aspectos formales, es necesario mantener el criterio de presumir la inocencia como un concepto jurídico penal de advertencia, de que al Estado le corresponde la responsabilidad de demostrar la culpabilidad del imputado, tratándose de delitos perseguibles de oficio y aquellos de instancia privada esa responsabilidad la tiene la parte acusadora, que también la adquiere la acusación particular conjunta en los procesos oficiosos.

Sin lugar a dudas que el principio de presunción de inocencia no es violado

con motivo de detención preventiva, por cuanto ésta representa un indicio de culpabilidad demostrado a través de los medios probatorios idóneos, previa dictación de la resolución judicial respectiva con la debida notificación y permisión a la parte afectada de formular los recursos ordinarios o extraordinarios necesarios para cuestionar tal medida cautelar personal y enmendar los agravios producidos con la misma.

La tesis planteada por algunos maestros de que la detención preventiva es una sanción penal anticipada y violatoria del principio bajo estudio, no la compartimos porque ésta debe cumplir una serie de requisitos formales y de fondo, para acreditar los indicios de vinculación objetiva y subjetiva del imputado con el hecho punible, lo cual es denominado por los teóricos como indicios de presunción de culpabilidad, además está justificada, como bien lo indica Mario I. Chichizola y otros autores, siguiendo el planteamiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, para evitar que el imputado se sustraiga del radio de acción de la administración de justicia, fuesen presionados los testigos, desaparecer pruebas y otras medidas contrarias a la finalidad de los procesos penales en la búsqueda de la verdad real y material de los hechos.

III. CARACTERÍSTICAS

Garantiza que una persona no debe ser vinculada en forma objetiva y subjetiva con el hecho punible, hasta tanto el Estado no le compruebe, a través de los medios probatorios idóneos, al menos indicios de culpabilidad durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, intermedia o plenaria para justificar su detención preventiva.

Ese status es un principio universal de derecho constitucional, porque los textos constitucionales de los diferentes Estados lo incluyen como una de las garantías procesales o principios rectores de los procesos penales y esta categoría jurídica impide la violación y modificación, además se contemplan las acciones o recursos para enmendar los daños o violaciones al mismo.

Representa la necesidad consecuente de garantizar un proceso justo y evita las detenciones preventivas prolongadas en forma innecesaria, porque se contempla en la doctrina que cuando ésta es extendida más allá de lo que corresponde, el afectado debe ser indemnizado por el Estado.

No es incompatible con las medidas cautelares personales, ya fuese el sometimiento a vigilancia, la prohibición de abandonar el territorio de un Estado sin autorización jurisdiccional, el internamiento en la residencia del imputado o en un centro hospitalario y la detención preventiva, cuando se cumplen las formalidades legales establecidas en el derecho positivo.

Exige la conducción del proceso por una autoridad competente, ésto significa que está vinculado con el principio de juzgamiento de juez natural o legal, por cuanto la justificación de aplicación de una medida cautelar personal es función que le corresponde al funcionario judicial con facultades para administrar justicia.

Dentro de otro contexto exige una sentencia ejecutoriada de declaratoria de culpabilidad, para que el imputado pierda su status de inocencia y sea considerado una persona vinculada en forma objetiva y subjetiva con el hecho punible.

Persigue también que se le garantice al imputado el derecho a una defensa, privada o pública de acuerdo con sus condiciones económicas y la debida información según su escolaridad, de los cargos formulados en su contra.

Una norma procesal no debe desvirtuar este principio, porque sería contrario al texto constitucional, por esa razón garantiza la libertad personal.

Se pretende evitar perjuicio, un daño jurídico, el desprestigio ante la comunidad, los familiares y el entorno social dentro del cual debe desenvolverse el individuo.

IV. ELEMENTOS O PRESUPUESTOS

Debe estar consagrado en el texto constitucional y desarrollado por las normas procesales, para su eficacia y reconocimiento, en aplicación de las convenciones sobre derechos humanos.

Su efectividad exige como presupuesto indispensable que no existe contra determinada persona medios probatorios demostrativos de su responsabilidad y culpabilidad, por cuanto de existir indicios de culpabilidad debidamente comprobados, éstos justificarían la aplicación de una medida cautelar personal y, la existencia de plena prueba en su contra, una sentencia condenatoria.

Constituye un elemento fundamental la participación de autoridad competente para determinar si en efecto existe o no el estado de inocencia, éste es un presupuesto indispensable.

V. EVOLUCIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

En Panamá el principio de presunción de inocencia en forma expresa, bajo esa denominación es contemplado en la Constitución de 1972, en el artículo 22, cuyo texto es el siguiente: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad en un juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.

La ley reglamentará esta materia." (Subrayado nuestro)

No obstante, consideramos que en forma implícita o indirecta el texto constitucional de 1904, en sus artículos 22 y 24, al exigir el cumplimiento de formalidades legales para juzgar una persona o sentenciarla y someterla a detención preventiva, con ello estaba representando el reconocimiento del status de inocencia o su presunción, pues hemos explicado que la existencia de indicios de culpabilidad podría interrumpirla con la aplicación de una medida cautelar personal.

También el texto de la Constitución de 1941, en sus artículos 27, 28 y 29, al referirse a las exigencias del cumplimiento de formalidades legales, autoridad competente y de juzgamiento y sanción, previo cumplimiento de las normas procesales y sustantivas penales, con ello llevaba implícito el reconocimiento del principio de presunción de inocencia, porque ello proyecta las características y presupuestos del mismo.

Finalmente, debemos aplicar ese criterio con respecto a la Constitución de 1946, pues en sus artículos 22, 24, 31 y 32, exigía el cumplimiento de formalidades legales, ya fuese para juzgar, aplicar detención preventiva o declarar culpabilidad de una persona, es decir, obliga el estricto apego a las exigencias de las normas procesales y sustantivas penales e inclusive advertía la posible sanción y pérdida del empleo a quienes violasen esos preceptos.

Reiterada jurisprudencia existe en los tribunales en cuanto al cumplimiento de ese precepto, es decir, fallos sobre juicios especiales constitucionales de habeas corpus y resoluciones que han decidido la fase intermedia con sobreseimiento o la fase plenaria con sentencia absolutoria.

VI. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO JUDICIAL

El Código Judicial Panameño desarrolla el principio constitucional de presunción de inocencia en los artículos 1966 y 1974, Capítulo I, Título I, Libro Tercero del texto legal citado.

Tales normas prevén que toda persona tiene derecho a su libertad personal

y frente a toda denuncia se presume su inocencia, además la violación de ese principio es causa de nulidad del proceso y los jueces o funcionarios de instrucción que participaron en el mismo, podrían ser responsables civil y criminalmente por los daños o los perjuicios que resultasen del proceso ilegal.

Como mecanismo procesal para enmendar la violación del principio de presunción de inocencia, se ha instituido la demanda de habeas corpus y una de las causales para instaurar ese juicio, contemplada en el artículo 2566, ordinal 1°, del Capítulo I, Título II, Libro Cuarto del Código Judicial, es la de aplicar la medida cautelar personal de detención preventiva contra una persona con mermas de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de la República, una de las cuales es la violación del principio de la presunción de inocencia.

VII. MEDIDAS PROCESALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Las normas de procedimiento penal contemplan que durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial en el proceso penal panameño, debe respetarse el principio de presunción de inocencia, al igual que en las otras fases, y para la primera, se contempla la diligencia de procesamiento, en el artículo 2115 del Código Judicial, por cuanto exige al funcionario de instrucción que para darle la calidad de imputado a una persona y someterla a los rigores de una declaración indagatoria, debe dictar la diligencia respectiva debidamente razonada, sobre los presupuestos de la existencia del hecho punible y la probable vinculación del imputado, es decir, tiene que existir al menos prueba indiciaria en su contra.

Después de dictar la diligencia de declaración indagatoria y al momento de practicar ésta, deberá advertir al imputado que tiene derecho a la asistencia de un abogado, no debe declarar contra sí mismo ni contra sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no debe ser sometido a juramento y tampoco hacerle preguntas capciosas (Artículos 2112, 2114, 2116, 2117, 2119, 2120, 2123 y 2125 del Código Judicial), tampoco someterlo a coacción o amenazas ni hacerle promesas y debe leerle íntegramente su declaración.

Luego de constatada la vinculación objetiva y subjetiva con el hecho punible, podrá el funcionario de instrucción dictar la diligencia de detención preventiva la que debe razonar sobre los presupuestos del hecho imputado; los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona que se le aplica esa medida cautelar personal.

Cuando no se cumple con las formalidades expresadas anteriormente, la diligencia de detención preventiva es sancionada con nulidad absoluta y el artículo 1974 del Código Judicial prevé la posible responsabilidad civil y penal de los funcionarios respectivos.

Tratándose de una persona sorprendida en flagrancia, cuando su aprehensión es llevada a cabo por una autoridad de policía, ésta debe ponerlo a órdenes del funcionario competente dentro del término de 24 horas para que examine los elementos o presupuestos respectivos y determine si debe mantenerse la detención preventiva (Artículo 2158 del Código Judicial).

En Panamá no está permitida la detención preventiva para los delitos contra el honor y aquellos que tengan señalada pena mínima menor de 2 años de prisión, en estos casos debe aplicarse otra medida cautelar personal.

Las medidas cautelares personales las clasifica el artículo 2147-B del Código Judicial, en cuanto a su gravedad, de la siguiente forma:

a. La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial;
b. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública;
c. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente;

d. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso;
e. La detención preventiva.

De acuerdo con lo normado en la sección primera, Capítulo VI, Título II, Libro Tercero del Código Judicial, para la aplicación de estas medidas cautelares personales el juez o el funcionario de instrucción tiene discrecionalidad, pero debe tomar en consideración la personalidad del imputado; que no exista peligro evidente de intentar sustraerse del radio de acción de la administración de justicia; la pena mínima aplicable de acuerdo con la norma penal adecuada a la conducta reprochable; el peligro de que el imputado cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal y, no debe tomar en consideración la reincidencia.

Tampoco se permite aplicar detención preventiva, salvo exigencias cautelares de excepcional relevancia, a las mujeres embarazadas, o que amamanten a su propia prole o a una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los 65 años de edad.

De igual forma están excluidos de la aplicación de la detención preventiva, salvo exigencias cautelares excepcionales, los tóxico-dependientes o alcohol-dependientes, sometidos a un programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado y, debe el juez o el funcionario de instrucción comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de recuperación.

Para facilitar la excarcelación a las personas de escasos recursos económicos, está prevista la fianza personal y la juratoria (Artículo 2163 del Código Judicial) para los delitos cuya pena mínima no exceda de dos años de prisión.

El Código Penal Panameño, en su artículo 129, obliga al Estado a la reparación civil, cuando el procesado obtuviese sobreseimiento definitivo después de haber sufrido más de un año detención preventiva.

De acuerdo con el artículo 2297, ordinal 3°, del Código Judicial, constituye causal de nulidad absoluta en los procesos penales, no haberse notificado al imputado o a su defensor el auto de enjuiciamiento.

También el artículo 2298, ordinal 2°, del Código Judicial, contempla como causa de nulidad absoluta, la no intervención, asistencia y representación del imputado en los casos que la ley establece.

Precisamente, están contempladas como causales de casación penal en la forma, no haberse notificado al imputado y su defensor, el auto de enjuiciamiento; no haberse notificado a las partes la providencia en que se abre la causa a pruebas; y, no haberse celebrado la audiencia el día y hora señalados, siempre y cuando que la diligencia se haya practicado sin la asistencia de la parte que interpone el recurso (Artículo 2437 del Código Judicial).

Con respecto a los procesos contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, es necesario que quien promueve la denuncia o acusación, acompañe la prueba sumaria de su relato (Artículo 2471 del Código Judicial), de lo contrario será inadmisible la denuncia o acusación y debe archivarse el expediente.

Se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible y, según lo estipulado en el artículo 2073 del Código Judicial, éstos pueden ser los siguientes: El examen que se haga, por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean

contrarios a la moral y al orden público.

Finalmente consideramos oportuno explicar que el artículo 2099-A del Código Judicial, contempla que la presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga.

El Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de fallo de 30 de abril de 1991, declaró inconstitucional la fase que exigía tal reserva hasta tanto exista sentencia ejecutoriadas contra el imputado.

Por tanto, la reserva sólo existe durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, con excepción de los casos de reconocidos delincuentes comunes, de alta peligrosidad, cuya búsqueda y localización a través de los medios de comunicación social, sea autorizada por el Ministerio Público.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1° Los textos constitucionales panameños han reconocido el principio de presunción de inocencia, aunque de manera clara y expresa se consigna a partir de la Constitución de 1972.

2° La violación del principio de presunción de inocencia, constituye causal de nulidad y acarrea responsabilidad civil y penal a los funcionarios responsables.

3° No se permite la detención preventiva en los delitos contra el honor y, aquellos cuya pena mínima es menor de dos años de prisión.

4° Están excluidos de la aplicación de detención preventiva las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años, los sometidos a un programa terapéutico tóxico dependiente o alcohol dependiente, las mujeres que amamanten a su propia prole o quienes se encuentren en grave estado de salud.

5° Para dar la condición de imputado a una persona, debe dictarse la diligencia razonada de declaración indagatoria.

6° La detención preventiva debe cumplir formalidades legales, dictarse la diligencia por el funcionario de instrucción o la resolución por el tribunal competente y, el cumplimiento de las formalidades exigidas es sancionado con nulidad del acto y podría acarrear responsabilidad civil o penal a los funcionarios correspondientes.

7° Está contemplada la fianza personal y la juratoria para los delitos con pena mínima de dos años de prisión.

8° El Código Penal contempla los institutos de desprisionalización (suspensión condicional de la ejecución de la pena, conversión a días multa, amonestación pública o privada).

9° El Código Judicial contempla la suspensión condicional del proceso y la despenalización.

10° Una de las finalidades de la demanda de habeas corpus, es la de examinar si se ha violado el principio de presunción de inocencia.

11° A todo imputado se le debe garantizar la defensa técnica, sin excluirle la posibilidad de la defensa natural.

12° Durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial, la presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se

investiga, con excepción de los casos de reconocidos delincuentes comunes de alta peligrosidad, cuya búsqueda y localización a través de los medios de comunicación social, sea autorizada por el Ministerio Público y el incumplimiento de la disposición citada constituiría delito de calumnia.

B. RECOMENDACIONES

1° Los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial, responsable de los procesos penales, deben perfeccionar sus conocimientos sobre criminología, derecho penal, derecho procesal penal, psiquiatría forense, medicina legal y todas las ramas del derecho.

2° Debe instituirse la carrera judicial, como una garantía de la autonomía e independencia de los funcionarios y para seleccionar los profesionales competentes.

3° Es necesario implementar la legislación procesal y sustantiva penal con los sustitutos penales necesarios.

4° Debe reformarse los Códigos de procedimiento penal, para simplificar los procesos sin afectar los derechos de las partes.

5° Es necesario tomar en consideración los derechos de la víctima.

6° Sería conveniente la celebración periódica de congresos y seminarios entre los diferentes Estados, con la participación de funcionarios comprometidos con la administración de justicia, para intercambiar conocimientos y experiencias a objeto de perfeccionar la metodología de trabajo y la legislación.

7° Debemos superar el sistema inquisitivo y aplicar tanto el acusatorio como mixto, para procurar las investigaciones científicas.

8° Revisar los programas de derecho de las diferentes facultades, para actualizarlos a la realidad socio-económica y política de los Estados.

9° Es necesario educar a la comunidad sobre el sentido y alcance de los sustitutos penales.

10° Debe promoverse a través de institutos procesales y academias, el conocimiento científico y actualizado tanto del derecho penal, la criminología como el derecho procesal penal.

11° Deben instituirse las escuelas judiciales en la administración de Justicia.

CITAS

(1) RUBIANÉS, CARLOS J. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Ediciones Depalma. Buenos Aires. Pág. 77.

(2) Op. Citt. Pág. 79.

(3) VÉLEZ MARCIONDE, ALFREDO. Derecho Procesal. Tomo I. Editora Córdoba. Pág. 325.

(4) LEONE, GIONVANNI. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa-América. Pág. 464.

(5) CHICHIZOLA. MARIO I. Excarcelación y Eximición de Prisión. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1986. Pág. 18.

(6) GUERRA, MORALES, SILVIO. Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal. Editorial Lerner. Santa Fe de Bogotá. Colombia. Pág. 246.

(7) LONDOÑO JIMÉNEZ, HERNANDO. Estudios Procesales. Editorial Jurídica Bolivariana. Pág. 114.

BIBILOGRAFÍA

BURGOA, IGNACIO. Las Garantías Individuales. 25ª Edición. Editorial Porrúa, S. A. México. 1993.

CABANELLAS GUILLERMO. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta S. R. L. Argentina. 1983. Tomo IV.

CARRANZA, ELÍAS; Mario Hoed, Nicholas J. O. Liverpool, Luis P. Mora, Luis Rodríguez Manzanera. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1992.

CARRARA, FRANCESCO. Programa de Derecho Criminal. Ed. Temis. 7ª Edición, Trad. por Jorge J. Ortega Torres y Jorge Guerrero. Vol. 8. Bogotá, Colombia. 1972.

Código Judicial de la República de Panamá. Libros I, II, III y IV. Panamá. Octubre, 1991.

Compendio de Derecho Procesal. El Proceso Civil. Parte General. Tomo III, Volumen I. 6ª Edición. Biblioteca Jurídica Dike. 1988.

Constituciones Políticas de la República de Panamá, de los años 1904, 1941, 1946 y 1972.

CHICHIZOLA, MARIO I. Excarcelación y Eximición de Prisión. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1986. Pág. 18.

DE GREIFF, RESTREPO y ZAMORA, MARTA LUCIA. Nuevo Código de Procedimiento Penal Colombiano. 1ª Edición. 1992. Biblioteca Jurídica Dike.

DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike. 1987.

DÍAZ DE LEÓN, MARCO ANTONIO. Diccionario de Derecho Procesal Penal y de Términos Usuales en el Proceso Penal. Tomos I y II. 2ª Edición. Editorial Porrúa, S. A. México. 1989.

Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXIII. Bibliográfica Omeba. Buenos Aires. 1980.

FIX SAMUDIO, SERGIO. La Protección Jurídica y Procesal de los Derechos Humanos ante las Jurisdicciones Nacionales. Editorial Civitas, S. A. 1ª Edición. 1982.

GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. Curso de Derecho Penal. 5ª Edición. Editorial Porrúa, S. A. México. 1989.

GIMENO SENDRA, VICENTE; ALMAGRO NOSETE, JOSÉ; MORENO CATENA, VÍCTOR y CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN. Derecho Procesal. Tomo II. el Proceso Penal. 3ª Edición. Valencia. 1990.

GOLDSCHMIDT, JAMES. Principios Generales del Proceso. Editorial Obregón y Heredia, S. A. Impresora Gálvez, S. A. 1983.

GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, FERNANDO. El Proceso Penal. 2ª Edición. Oviedo. 1989.

GONZÁLEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. El Código Penal Comentado. Editorial Porrúa, S. A. México. 1992.

GUERRA MORALES, SILVIO. Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal. Editorial Lerner, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pág. 246.

HUACUJA, BETANCOURT, SERGIO. La Desaparición de la Prisión Preventiva. Editorial Trillas. 1ª Edición. 1989.

KAISER, GÜNTER. Introducción a la Criminología. 7ª Edición reelaborada y completa. Editorial Dikinson. Madrid. 1988.

LEONE, GIOVANNI. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa-América. Pág. 464.

LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La Reforma Procesal Penal (Un Análisis Comparativo Latinoamericano-Alemán). Agosto, 1993.

LONDOÑO JIMÉNEZ, HERNANDO. Derecho Procesal Penal. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1982.

MAIER, JULIO; TORELLO, LUIS; TAVOLARI, RAÚL; DABVVIS, WILLIAM; RIEGO, CRISTIAN; BINDER, ALBERTO y ARGUEDAS, OLMAN. Reformas Procesales en América Latina: La oralidad en los procesos. CPU. 1993.

MANZINI, VICENZO. Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. por Santiago Sentis y Marino Ayerra Redín. Editorial Ediciones Jurídicas. Europa-América. Tomo 5. Buenos Aires. 1951.

ORONOZ SANTANA, CARLOS M. Manual de Derecho Procesal Penal. 3ª Edición. Noriega Editores. México, España, Venezuela, Colombia.

OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliastas S. R. L. Argentina. 1974.

PÉREZ PINZÓN, ALVARO O. Curso de Criminología. 3ª Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1991.

RESTREPO FONTALVO, JORGE. Criminología, Un Enfoque Humanístico. Santa Fe, Bogotá, Colombia. 1993.

RUBIANÉS, CARLOS. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomos I, II y III. Ediciones Depalma., Buenos Aries. 1985.

SÁENZ F., WILFREDO. Compendio sobre Aspectos del Proceso Penal Panameño. Panamá. 1987. Tomo I.

Folleto de Criminología. Universidad Santa María La Antigua. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 1993.

Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión en América Latina y el Caribe.

Tesis por JULIA SÁENZ G. La Excitación de la Acción para el Inicio del Proceso Penal Panameño. 1990. Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO. Derecho Procesal Penal. Editora Córdoba. 1982. Tomos I, II y III.

VESCOVI, ENRIQUE. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1984.

ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL. En Busca de las Penas Perdidas. 2ª Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1990.

ÍNDICE

PONENCIA i

"LAS PERSPECTIVAS DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO" i

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARNULFO ESCALONA ÁVILA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO QUINTERO QUIÑONEZ, MARIO ALMENGOR, BRÍGIDO DE GRACIA, NÉSTOR RÍOS, BENJAMÍN MORCILLO, DOMINGO ÁVILA Y LUIS ANTONIO CEDEÑO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 7 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO TÉCNICO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FUENTES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO MEDINA BATISTA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° T-041-96, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN AROSEMENA VALDÉS, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES FORMULADA POR EL LICENCIADO JORGE FLORES, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE QUINTERO ALMENGOR, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° DG. PER-012-96, DE 22 DE ABRIL DE 1996, PROFERIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 6

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 11 DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 7

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE COSTARANGOS G. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 7 EL 30 DE MAYO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 10

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES,CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 12

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EMETERIO MILLER RAMÍREZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 227 DE 29 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN ARANCELARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE, (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 21

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCELIO MOJICA MOJICA, EN REPRESENTACIÓN DE OLIVER ERNESTO AIZPURÚA, BENJAMÍN GONZÁLEZ AGUDO Y MARINO DÍAZ, CONTRA LAS ORDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS S/N DE 4 DE ENERO DE 1995 Y DE 19 DE MARZO DE 1996, DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERMES ALVARADO ORTEGA CONTRA EL AUTO VARIO N° 55 DE 6 DE MARZO DE 1996 DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 26

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA MORAN, EN REPRESENTACIÓN DE JULISSA AIMEETT BROUWER CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1966, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE MORENO & FÁBREGA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1575 DEL 21 DE JUNIO DE 1995, DICTADO POR EL SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 30

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL DURAN CONTRA LA JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AIZPURÚA VELÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15/96 D. M. DEL 31 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

RECURSO DE HABEAS CORPUS 38

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL CORREA RUIZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO RUDAS JIMÉNEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 41

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANAIS TAMARA VARGAS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 43

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WING LEUNG YIP Y KWOK HUNG LEON NG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 45

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS AURELIO MATHEUS PALACIOS CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ANGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS Y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZELMA VANESSA DALEY CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO LEONARDO PEREA Y JANETH ADELAIDA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 51

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ORIEL PERALTA PERALTA CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LOS SANTOS, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABALLERO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO ISNEL SANCLEMENTE CONSSIU CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR DICKENSON CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MASTER PEÑA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TEÓFILO CHAMBER DACOSTA CONTRA LA MAGISTRADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO BATISTA GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 63

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTÓN JAÉN GÓNDOLA CONTRA EL FISCAL DELEGADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS PARA LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ Y SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 68

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES BRUNO BEMPORAD, SALVADOR MORALES RICO Y MARITZA RAMOS DE MATTADEN EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN HERNÁNDEZ QUINTERO CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 76

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL GUARDIA REYNA, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUGENIA GIL BERMÚDEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

DESISTIMIENTO EN LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO MORALES EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE EDGARDO ESCALANTE ESCOBAR, CONTRA EL DIRECTOR DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 82

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL Y EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NOEL WADES MOSES DOUGLAS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RENÉ NESIN GONZÁLEZ CHONG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO Y EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE GUERRERO SERRANO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO JAÉN DE LEÓN CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SALVADOR RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996). 95

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO SANDOVAL CONTRA LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS EDGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 100

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO AGUILAR MORENO, EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA JACINTA MARÍA HERNÁNDEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 102

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ MORÁN CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 104

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO ANTONIO QUINTANA LÓPEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR EN CONTRA DE LA FISCALÍA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 108

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LOS ARTÍCULOS 1230 Y 1235 DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 108

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO HUMBERTO E. RICORD, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA LEY N° 2 DE 3 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA CHANDEK EN NOMBRE DE SVEN VALDELAMAR WAGE CONTRA EL ACTO DE AUTORIDAD S/N DEL 13 DE JULIO DE 1994 EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. SIDNEY SITTÓN URETA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE JEANE JOHNSON JUSTINIANI EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 133 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO

HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 114

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICDO. JORGE LUIS PULIDO R. EN REPRESENTACIÓN DE ESMERALDA MARTÍNEZ, CONTRA EL DECRETO DE PERSONAL N° 737 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 115

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. RAFAEL MÁS VELASCO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Y EN CONTRA DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 11 DE 23 DE MAYO DE 1986. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 116

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 13 DE 27 DE JULIO de 1994, POR EL CUAL SE MODIFICO EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 23 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL, ESPECÍFICAMENTE LA FRASE "O LA INTENTE SACAR" MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR CARMEN RODRÍGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° DG/AL-045 DEL 6 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 126

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO A. ORTEGA CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1992 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DE UNA FRASE CONTENIDA EN LA PARTE FINAL DEL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 128

TRIBUNAL DE INSTANCIA 133

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 213-1307 DE 11 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 133

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSARIO ALFARO GRIMALDO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 13 P. A. C., EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES EL 25 DE ABRIL DE 1996, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ROGERIO DE MARÍA CARRILLO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 134

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ALVARO PINO, HUMBERTO RUIZ, JOSÉ R. BRENES, CELESTE DE ARAÚZ, LUIS SANTIZO, FIDEL MARTÍNEZ Y OTROS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA ARI/AG-DL/433-96 DE 22 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A.

FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 135

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LAS SUMARIAS INSTRUIDAS AL LCDO. JOSÉ ANTONIO SOSSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, EN VIRTUD DE DENUNCIA INTERPUESTA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ELIGIO A. SALAS DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE A. RIVERA AGUILAR, CONTRA LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY N° 20 DE 22 DE ABRIL DE 1975. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO CARLOS H. CUESTAS G. (SUPLENTE DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS) DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIHAELA GABRIELA STEGARU CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 138

INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDAD Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL FALCONETT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 139

SUMARIAS INSTRUIDAS AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, EN VIRTUD DE DENUNCIA INTERPUESTA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 141

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS, CONTRA EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO N° 11 DE 12 DE ENERO DE 1988, EXPEDIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, Y EL POSTERIOR ACTO DE ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4 CONTENTIVO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PROMOVIDO POR TOMÁS DE SEDAS RAMOS CONTRA EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 146

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 148

APELACIONES 149

LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA APELAN CONTRA EL AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 6448 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, INGRESADO AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 1333 DEL TOMO 244 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 151

ABIGAÍL SORIANO SOLÍS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE INTERDICCIÓN PROPUESTO POR CLÍMACO SORIANO SOLÍS, MANUEL SORIANO SOLÍS, OVIDIO SORIANO SOLÍS, ANTONIO SORIANO SOLÍS Y ELVIRA ESTHER SORIANO SOLÍS DE CERRUD.

MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

IVETTE SÁNCHEZ VEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA TROITIÑO DE FREIRE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

ROBERTO MOCK SAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INDIRA TALAVERA CONTRA ROBERTO MOCK E IRENEO ASPRILLA A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA PROPUESTO POR BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA L'ATELIER, S. A., IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

JUAN M. GODOY HERNÁNDEZ Y/O PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE OCTAVIO CAMILO PÉREZ PUELLO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN QUE PRESENTARA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A MARIO ISMAEL OSPINA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 160

EUGENE MCGRATH RENAULD RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

SANTIAGO BABUN SELMAN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSOLIDADA INTERAMERICANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 169

JUSTINIANO CÁRDENAS BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A MATADERO DE AZUERO, S. A. (R. L. FRANCISCO PABLO EPIFANIO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER Y LA SUCESIÓN DE ENRIQUE O. BENÍTEZ ESQUIVEL, REPRESENTADA POR ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA DE JESÚS PINZÓN DE BENÍTEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 171

PROINVEST, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHON BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD E INEXISTENCIA DEL TÍTULO PARA DEMANDAR EJECUTIVAMENTE, PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR VICENTE

ARCHIBOLD BLAKE CONTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 183

VALENTINA BAULE MEDINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE ANA MAGDALENA ÁBREGO DE CALLEJAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 188

LA NACIÓN Y HARMODIO BARRÍA GRIMALDO O FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE URYL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 190

ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A TITULO QUE LE SIGUE A INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 197

JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE HASSAN GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 198

ORO CENTER GOLD CENTER, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ORO CENTER GOLD CENTER, S. A. CONTRA BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 199

JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ERNESTO CHARTER DU SAIRE Y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 200

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., Y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 202

JUSTINO ACEVEDO VÁSQUEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FáBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 202

RAFAEL ANÍBAL ÁVILA FERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN A LA ADJUDICACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO QUE LE SIGUE A AURELIO FERNÁNDEZ, ZAIDA F. BOTELLO Y ADOLFO FERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

RAÚL TAPIA Y CÍA., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA INCOADA POR SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CONTRA ATLANTIC PACIFIC INSURANCE COMPANY OF PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 206

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORAZ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE HAKKA INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 207

RECURSO DE HECHO 208

EL LICENCIADO EDUARDO ALBERTO ESCOBAR DÍAZ RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN

DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR MENITZA CAJAR SIERRA CONTRA COMPAÑÍA BITE CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 208

JUAN RAMÓN CASTAÑEDA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR CRESCENCIA AIZPRÚA DE MARTÍNEZ CONTRA JUAN CASTILLO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS A. MORENO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 1996 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO QUE LA SOCIEDAD MILCIN CORPORATION, S. A. LE SIGUE AL SEÑOR AMÍLCAR SAMUDIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

RECURSO DE REVISIÓN CIVIL 212

MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 22 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INSTAURADO POR LIBRERÍA Y EDITORA INTERAMERICANA, S. A. CONTRA MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 213

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 214

ACUSACIÓN PARTICULAR 215

SUMARIO SEGUIDO A PEDRO SANJUR GUERRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE ENRIQUE AGUILAR BARRANCO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 215

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 216

APELACIÓN DEL AUTO ENCAUSATORIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN JOSÉ CASTILLO ÁBREGO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE RAFAEL CLEMENTE ÁBREGO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 216

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 218

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ÁNGEL SANTOS JIMÉNEZ BELLEZA, POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JORGE ISMAEL HERRERA GIL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 218

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA JUAN AYALA GONZÁLEZ Y OMAR GONZÁLEZ HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 219

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL, POR DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CHORRILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE KATHIA RODRÍGUEZ Y YENNY RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 224

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DANIEL GRANUCCI CASAL POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 225

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A EZEQUIEL CASTILLO PARDO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 226

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ATKINSON KINGSLEY CONNAD, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 227

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CLIFFORD ARTURO PATTERSON, JOSÉ ARMANDO PÉREZ GÓMEZ Y BOLÍVAR DELGADO VISSUETTE, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL LOCAL COMERCIAL "RECIBO, ACCIÓN Y RAPIDEZ". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 228

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, FELIPE CAMARGO AMAYA, RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON Y ALAÍN ARCENIO ODA, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS RODOLFO WORRELL BEST. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 229

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE MARXIO MARINO HERAZO A. Y JAVIER ROLANDO JURADO ARROCHA, POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PERJUICIO DE ROGELIO HERRERA, TRINIDAD CASTILLERO, LUCRECIA ESCALONA, VALENTÍN DOMÍNGUEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 234

CONTRAPROYECTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROMOVIDA POR YADIRA CUMMINGS DE CIPPONERI Y CARMEN DONNA AVEN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

CONFLICTO DE COMPETENCIA 244

CONFLICTO DE COMPETENCIA SURGIDO DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA PRESENTADO POR EL LCDO. OSCAR E. CHIRÚ OCHOA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN LAS SUMARIAS QUE SE LE SIGUEN A DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG Y OTROS POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 244

INCIDENTE 248

INCIDENTE DE OBJECIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

INCIDENTE DE CONTROVERSIA 249

INCIDENTE DE CONTROVERSIA CONTRA LA PROVIDENCIA DE 11 DE ABRIL DE 1996, PROFERIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE A JOSÉ LUIS NAVARRO Y EDWIN MORENO, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, COMETIDO EN PERJUICIO DE MANUEL SIMANCAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

INCIDENTE DE NULIDAD 249

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 252

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1996, PROFERIDA POR LA SALA PENAL, QUE NO ADMITE EL INCIDENTE DE OBJECIONES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

RECURSO DE REVISIÓN PENAL 252

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR ABELARDO ANTONIO PARRA MAECHA, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 253

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME LEE MACHADO, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 254

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO VARGAS BARRÍA, SINDICADO POR EL DELITO DE ESTUPRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA, POR SUPUESTO DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 256

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PERICLES ORIEL SÁENZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 257

SENTENCIA APELADA 258

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A FRANCISCO BALLESTEROS DELGADO, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE GEOVAD JACINTO GARCÍA CAJAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

JUICIO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO LINDO KING, ALDO AMAYA, Y OTROS, SINDICADOS POR

EL DELITO DE ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HUAN GUAN SHAN O HUANG GUOSHENG. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 259

PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ABELITA CABALLERO SALINA, SEGUIDO CONTRA DIOGENES GALLARDO GALLARDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 263

JUICIO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO Y OTROS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDILBERTO RIVERA HIDALGO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 268

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A WILFREDO SAMUDIO RODRÍGUEZ (A) JUANITO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE ROGELIO SAMANIEGO CASTRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 270

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A CELIO ORTIZ AGUILAR POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SU HIJO CARLOS VÍCTOR ORTIZ SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 272

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A MARTÍN EMILIO MOSQUERA Y CESAR CAICEDO ESPINOSA SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE CECILIA CORTES MARCIAGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 273

PROCESO SEGUIDO A ALFONSO LÓPEZ BARBA (A) "ALFONSITO", POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ARTURO RODRÍGUEZ (A) "ARTURITO" MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 277

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IVES ALAÍN BECERRA FLORES, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE ADOLFO MOHAMED SALINAS OROZCO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 279

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALFONSO RODRÍGUEZ, HERMÓGENES VÁSQUEZ Y ANDRÉS SANTOS, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CRISTINO BARRÍA CERRUD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 280

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 282

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS ALFREDO LOZANO, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE OSWALD LOZANO MENDOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 283

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO ANTONIO QUINTERO RIVAS Y VÍCTOR CÉSAR MÉNDEZ RIVAS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ATENCIO UBILLOS ESPINOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 285

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ALEXANDER ÁNGEL CAMARGO, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALVEO DE LA ROSA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

IMPEDIMENTO 288

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LA LICENCIADA MARCELA DE ANTINORI, JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 288

IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA QUERELLA PRESENTADA POR JAIME PADILLA BÉLIZ CONTRA EL DOCTOR CARLOS HUMBERTO CUESTAS POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 289

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN EL INCIDENTE DE CONTROVERSIA PROMOVIDO POR EL LCDO. ROLANDO VILLALAZ GUERRA CONTRA LA FISCALÍA 3ª SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL SUMARIO SEGUIDO A ROBERTO A. LÓPEZ VILLARREAL Y MELQUISIDEC DE LEÓN, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS HUERTAS DÁVALOS. (PONENTE J. M. FAÚNDES). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 290

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A RICARDO MARTINELLI, DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DEL DOCTOR ALEXIS MORÓN MALEK. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 290

TRIBUNAL DE INSTANCIA 291

SUMARIO INSTRUIDO CONTRA GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES Y ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MANEJO DE FONDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ARRAIJÁN-PANAMÁ Y DEL PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 291

DENUNCIA PENAL FORMULADA POR EL LCDO. GUILLERMO A. COCHEZ FARRUGIA CONTRA EL DOCTOR JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS, POR EL SUPUESTO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU DESTINO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 293

DENUNCIA INTERPUESTA POR MANUEL ANTONIO SIMANCA CONTRA JOSÉ LUIS NAVARRO Y EDWIN MORENO FUNCIONARIOS DE ADUANA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 295

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO VILLALAZ BARRIOS, CONTRA EL LICENCIADO ROLANDO QUEZADA VALLESPI, JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 296

SUMARIAS SEGUIDAS A LIC. RICARDO MARTINELLI POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES PÚBLICOS EN PERJUICIO DEL DR. ALEXIS MORÓN MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 302

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 303

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL RESULTO N° 59 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 303

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL COFCI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 138 DE 3 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 304

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONYS ULLOA EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL V. ORTIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A-I-16-94 D. G. A. DE 30 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ARRENDAMIENTOS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 305

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE CHEF'S CHOISE DE PANAMÁ, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3756-92-SUB-D. G. DE 12 DE JUNIO DE 1992, DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 306

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE MANGRAVITA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3622-92 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 307

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA DOCTORA ISIS TEJEIRA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° F. B. A. 714-95 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1995, SUSCRITA POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 309

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RUBÉN DARÍO COGLEY, EN REPRESENTACIÓN DE BRAULIO REYES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 008-94 DE 18 DE ENERO DE 1994, EMITIDA POR EL GERENTE DE LOS CASINOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 310

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE SERVICENTRO, S. A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A. Y COMISARIATOS, S. A. PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992 DICTADAS POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 313

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE KEVIN HOLMAN WHYLES BRAYAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 95-04-14100-355 DE 7 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y PLANILLAS DE LA CORPORACIÓN AZUCARERA LA VICTORIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE HERMANOS MANGRAVITA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 3615 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992 DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. (ACUMULADAS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. RITO TORRES GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE STANLEY PUSSEY BLAKENEY, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13-95V DE 17 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 318

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ÁLVAREZ, MIZRACHI & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR GERMÁN CASTILLO CHANIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 468 DE 20 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SATURIO SEGARRA EN REPRESENTACIÓN DE TRANSCOLPIMA, S. A., RUTA COLÓN COCO SOLO, S. A., EXPRESO PANAMÁ, COLÓN CENTROAMÉRICA S. A., TRANSPORTE UNIDO PORTOBELO-COLÓN, S. A. Y TRANSPORTE COLÓN UNIDO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 3 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 325

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉS EN REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 326

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ EDUARDO MORA SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 1796-94-DNP-S DE T DE 1° DE JUNIO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 328

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARDS DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 76-95 DE 17 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 333

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AGAPITO GUERRERO VEGA. EN REPRESENTACIÓN DE REGINO RESURA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 010 DE 19 DE ENERO DE

1996, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 335

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BENEDETTI Y BENEDITTI, EN REPRESENTACIÓN DE ASICS CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 231 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 336

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE GERRYS CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10-91 DE 11 DE ABRIL DE 1991, DICTADA POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 341

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ESTUDIO CORPORATIVO TRIBUTARIO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4667-93 DE 14 DE MAYO DE 1993, PROFERIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALEXIS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 15 DE ENERO DE 1996, SUSCRITO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, LA RESOLUCIÓN N° 169 DE 28 DE MARZO DE 1996 DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 180 DE 29 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 354

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. IRLENA BROWN VILLALOBOS, EN REPRESENTACIÓN DE AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 18 DE MAYO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 355

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ALEJANDRO QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DE DAVIS PERALTA CHECA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 98 DE 29 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 356

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 026.92 DE 1O. DE SEPTIEMBRE DE 1992, PROFERIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 358

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. JUAN M. CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN DE MARTÍN FERRARA, PARA QUE SE

DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 27 DE 15 DE MAYO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 362

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. HERNÁN GARCÍA APARICIO, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR O. ORTEGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 30 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 364

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO AMAYA A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4823-92 DE 3 DE JULIO DE 1992 DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 367

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CONSORCIO DE JURISTAS, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1404 DE 10 DE MARZO DE 1994, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 368

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 5/94 DEL 11 DE ENERO DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN N° 7/94 DEL 29 DE ABRIL DE 1994, DICTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERACLIO SANJUR MARCUCCI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 204 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 377

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC. PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 386

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE EN REPRESENTACIÓN DE EDITH M. DE GIROLDI, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORANDO IDENTIFICADO CON EL N° DAFP/026/96 DE 2 DE FEBRERO DE 1996 SUSCRITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 387

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAFAEL E. COLLINS EN REPRESENTACIÓN DE VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 95 (361-01)063 DE 4 DE

ABRIL DE 1995, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 388

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. LUIS FELIPE MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL OFICIO N° A. L. 1778-95 SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 1995, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 392

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ROGER, EN REPRESENTACIÓN DE VICTORIA FRANCO DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DNP-437-90, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ RUIZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE MATERIALES EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4058 DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE KINNEY SHOE CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 86 DE 26 DE MAYO DE 1992, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG 25-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 414

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. COCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO N° 18 DE 10 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 415

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE NORBERTO LEZCANO ROQUE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° DRH-437 DE 16 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDA POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 415

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICDO. RAMÓN ANDRADE EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN ARDINES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LOS FISCALES DE CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 419

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 421

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ISAAC LADRÓN DE GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D. N. 6-2024 DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 421

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EXPRESO VERAGÜENSE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 45 DE 9 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 427

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO MARIO CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA Y PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA DE 23 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE BALONCESTO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 430

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO O. CABREDO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS SAYAVEDRA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DE 26 DE ABRIL DE 1995, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PROVEEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 430

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 431

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ORLANDO MORENO Y EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL REGLAMENTO SOBRE SERVICIOS MÉDICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CITADA INSTITUCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 432

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARSENIO GARCÍA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE EMIGDIO MURILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 165 PROFERIDA POR EL CORREGIDOR DE CANTO DEL LLANO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 440

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS 441

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LCDO. DONALDO SOUSA GUEVARA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 362

DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 441

JURISDICCIÓN COACTIVA 442

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILE RA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 443

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE ORAFLA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS LE SIGUE A DARCY I. DICKERAY DE ISMAY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 445

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL DOCTOR JACINTO JAVIER ESPINOSA GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO HIPOTECARIO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE AHORROS LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 447

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALFONSO FRAGUELA EN REPRESENTACIÓN DE DANIEL A. CASTAÑEDA CAYÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, A DANIEL CASTAÑEDA C. Y BLANCA CONTRERAS DE CASTAÑEDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 447

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, PLAZO VENCIDO DE LA FIANZA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA LICDA. LENIS ORTEGA CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 449

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA DELTA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, CONTRA SANTIAGO JUSTO ARAÚZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 456

EXCEPCIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES MCGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 458

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DE BERNARDINO RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A BERNARDINO RODRÍGUEZ, JOSEFINA CORALIA DE RODRÍGUEZ Y CECILIA MARÍA RODRÍGUEZ ANGELINI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 459

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICDO. ROGELIO CRUZ EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 461

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL TEJEIRA ARAÚZ, EN

REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA TEZU, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 464

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERNESTO SELLES EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 467

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 468

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HIPÓLITO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORY BURICH, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GREGORY BURICH -VS- PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. Y PETROTERMINAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 468

IMPEDIMENTO 471

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL INTERPUESTA POR EL LICDO. JORGE PLATA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDAS EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HGO32-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA(HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA). DE 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 471

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTA POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A JOSÉ M. REDONDO, ANTONIO VILLARREAL, FLORENCIO DE LEÓN, ELIDA DE NEWELL, ARQUIMEDES RODRÍGUEZ, PEDRO A. JIMÉNEZ. (PAGOS INDEBIDOS A LA CORPORACIÓN OBARRIO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 472

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTA POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ALBERTO LACRESPO PURCELL Y JOSÉ MARÍA REDONDO (COBRO ILEGAL DE SALARIOS). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 473

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN MANUEL CASTULOVICH, EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO CÁCERES, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ROGELIO CÁCERES -VS- TEXACO PANAMÁ, INC. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 474

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTO POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A JOSÉ MARÍA REDONDO, ANTONIO VILLARREAL, FLORENCIO DE LEÓN, ELIDA PANIZA, ARQUÍMEDES RODRÍGUEZ, PEDRO JIMÉNEZ, GILBERTO COLOCHO Y OSVALDO AYALA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 475

IMPEDIMENTO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HC032-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA) DE 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 476

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 477

CARTA ROGATORIA 478

COMISIONES ROGATORIAS SIN NÚMERO DE 1° DE JUNIO DE 1995, LIBRADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE RIBEIRA LA CORUÑA, ESPAÑA, DENTRO DE LOS AUTOS DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA NÚMERO 469/94 PROMOVIDO POR DON ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA GANGERRAL ENTERPRISES, S. A. Y MELFAR MARITIME LTD. SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 478

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 5 DE IBIZA, ESPAÑA RELATIVA A TIRCAL HOLDING, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 479

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 481

SAMUEL A. BENT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DEL CONDADO DE NUEVA YORK, PARTE MATRIMONIAL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO ENTRE SAMUEL A. BENT Y ELICIA DUNCAN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 481

ERVIN E. GOLDSON, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO EXPEDIDA POR LA CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE LOS ÁNGELES, QUE DECLARA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA CON PATRICIA E. GOLDSON. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 483

MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ DE BLAKE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA 92-3-01365-2 FECHADA EL 7 DE JULIO DE 1993 LA CORTE SUPREMA DE WASHINGTON, CONDADO DE KITSAP, DECLARÓ DISUELTO EL MATRIMONIO DE LOS SEÑORES SHANE P. BLAKE Y MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 484

RAQUEL HOMSANY ESSES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE SANTA FE DE BOGOTÁ, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE MAX ABADI HARARI Y RAQUEL HOMSANY ESSES. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 485

ALEJANDRO MARTÍN DAWSON FIELDS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL DEPARTAMENTO PRIMERO I-90 EN LA PARTE MATRIMONIAL DE LA SUPREMA CORTE DEL ESTADO DE NEW YORK EN LA CORTE DEL CONDADO DE NEW YORK EL DÍA 22 DE JUNIO DE 1993, EL CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE EL SEÑOR DAWSON FIELDS Y GLADYS GONZÁLEZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 486

DIAMANTINA CHONG DE BAHRS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA N° 17875 PROFERIDA EN LA CORTE DE CIRCUITO DEL CONDADO DE MONTGOMERY MARYLAND, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 1986 QUE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE DAVID LEROY BAHRS Y DIAMANTINA CHONG DE BAHRS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 488

EXHORTOS 489

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE VALENCIA ESPAÑA, EN LOS AUTOS DE DIVORCIO CONTENCIOSO N° 01245/1995 PROMOVIDO POR D. MIGUEL RAMÍREZ SUÁREZ CONTRA D. EDICTA SOLÍS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 490

EXHORTO SIN NÚMERO DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR EL SUPUESTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES CONTRA EUGENIO PRADO BUGALLO Y ODALYS VIANETH RIVERA DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 491

APELACIONES 493

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR TOMÁS ARTURO GÓNDOLA DÍAZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 25-95 DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (1995), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 493

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 495

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR JORGE LUIS CALZUDES T. EN CONTRA DEL ACUERDO N° 353 DRH-96 DEL 12 DE MARZO DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE LE DESTITUYE DE SU CARGO DE INSTRUCTOR VOCACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 495

RECURSO DE HECHO 497

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR LESLIE SAAVEDRA GARCÍA, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96, DE FECHA 27 DE MARZO DE 1996, MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, ESTABLECE LA LISTA DE PERSONAS SELECCIONABLES, PARA LA POSICIÓN N° 198 PARA EL CARGO DE OFICIAL MAYOR II DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO, RAMO CIVIL DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 497

TRIBUNAL DE INSTANCIA 499

DENUNCIA INTERPUESTA POR LYDIETTE CASTRO CONTRA EL LICENCIADO ABDIEL GONZÁLEZ POR FALTAS A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 499

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

JUNIO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARNULFO ESCALONA ÁVILA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO QUINTERO QUIÑONEZ, MARIO ALMENGOR, BRÍGIDO DE GRACIA, NÉSTOR RÍOS, BENJAMÍN MORCILLO, DOMINGO ÁVILA Y LUIS ANTONIO CEDEÑO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 7 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO TÉCNICO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ARNULFO ESCALONA ÁVILA**, en representación de **NÉSTOR HUMBERTO RÍOS y Otros**, ha interpuesto ante el Pleno de esta Corporación de Justicia **Recurso de Apelación** contra el fallo de 17 de mayo de 1996 proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (Las Tablas), que decidió la acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** propuesto por dicho apoderado en nombre de **NÉSTOR HUMBERTO RÍOS OSORIO**, **MARIO ALCIDES ALMENGOR**, **LUIS ANTONIO CEDEÑO y BRÍGIDO DE GRACIA** contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 1 de 7 de mayo de 1996, emitida por el representante legal del Consejo Técnico de Transporte de la Provincia de Herrera.

Luego de cumplidas las reglas de reparto, el apoderado especial de los amparistas presentó en la Secretaría General de la Corte un escrito (fs. 52) mediante el cual manifiesta que **DESISTE** del recurso de apelación que interpuso contra la resolución de 17 de mayo de 1996 que decidió el proceso de amparo.

El Pleno de la Corte considera procedente acceder al **desistimiento** solicitado y en tal sentido ha de pronunciarse.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el DESISTIMIENTO manifestado por el licenciado ARNULFO ESCALONA ÁVILA del recurso de apelación contra el fallo de 17 de mayo de 1996, dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en el proceso de Amparo de Garantías instaurado por NÉSTOR HUMBERTO RÍOS y Otros.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FUENTES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO MEDINA BATISTA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° T-041-96, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES RODRÍGUEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Fuentes y Asociados, en representación de **EDUARDO MEDINA BATISTA** contra la orden de hacer contenida en la resolución N° T-041-96 del 1° de marzo

de 1996, dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, la cual modificó la N° 35 del 18 de enero de 1996, emitida por la Alcaldía de Chame, que resolvió multar con quince (B/.15.00) balboas a **MEDINA BATISTA** por la infracción cometida, y culpó a **MANUEL A. GUERRERO** del accidente ocurrido entre ambos el 21 de diciembre de 1995 en Bejuco, así como a pagar los daños causados al precitado.

La resolución apelada sancionó al ampariste a pagar una multa de cincuenta (B/.50.00) balboas por conducir en exceso de velocidad dentro de un poblado; y sancionó a **MANUEL A. GUERRERO C.** a pagar quince (B/.15.00) balboas de multa por interferir el paso y no tomar precauciones al realizar un giro.

Finalizó señalando la resolución impugnada que cada conductor era responsable por sus daños y perjuicios ocasionados.

La acción de amparo se basó en que el artículo 32 de la Carta Magna que consagra el principio del debido proceso fue transgredido "por omisión y por partida doble", toda vez que contra **EDUARDO MEDINA BATISTA** se dictó la orden de hacer impugnada sin que ninguna autoridad de tránsito ni jefe de Policía le formulara cargo alguno; el cargo de exceso de velocidad fue "creación tardía exclusiva" de la Gobernación, dejando al actor en "la más absoluta indefensión".

Consideró el ampariste que el diagrama del propio parte de tránsito desmiente esa invención del exceso de velocidad.

La otra violación al principio del debido proceso estriba en la omisión de la audiencia oral que debió celebrarse.

La resolución impugnada colige que de los tres aspectos que recoge el artículo 32 Constitucional, el caso que nos ocupa atañe al aspecto del debido proceso, referente a ser juzgado conforme a los trámites pertinentes, pues el impugnante señaló que fue juzgado sin que se le atribuyera ningún cargo, que el cargo de exceso de velocidad fue inventado por la Gobernación, así como la omisión de la audiencia oral.

Considera el Primer Tribunal Superior que no puede el ampariste afirmar que ninguna autoridad de Tránsito le formulara cargos, cuando él mismo -amparaste- participó en la elaboración del parte policivo.

También asevera dicha Colegiatura que los cargos imputados a la resolución impugnada se relacionan con "trámites propios de primera instancia" -Alcaldía de Chame-, en especial el cargo de la omisión de la audiencia oral. Concluyó la resolución, negando la solicitud presentada.

A consecuencia de dicha decisión, el ampariste apeló la resolución en comento, aduciendo que -en lo referente a que al iniciarse la actuación con el parte policivo preparado por el Cabo II Carlos Moreno, no se puede hablar que hay falta de cargos formulados contra el amparaste- "una cosa es un parte policivo que da cuenta de un accidente y otra es el cargo legal indiciario que en él pueda establecer para la posterior determinación de responsabilidades."

Es decir, que el parte policivo revela que **EDUARDO MEDINA** fue víctima la imprudencia del otro conductor; por ello, no existe en dicho parte, cargo contra éste último.

También señaló el apelante que -en lo atinente a que los cargos formulados por el apelante a la Gobernadora se refieren a trámites propios de la primera instancia- el cargo de exceso de velocidad es creación exclusiva de la Gobernadora, en el fallo final del proceso administrativo.

Por ello, no se le puede atribuir al Alcalde de Chame algo que nunca dijo.

Vertidos los principales elementos del presente negocio, se dispone el Pleno a emitir su dictamen, previa las siguientes consideraciones.

Atendiendo al primer punto apelado, considera esta Superioridad que el

ampariste incurre en el yerro de denunciar un error in iudicando por parte de la Gobernadora, consistente en la errónea valoración de los hechos plasmados en el parte policial, porque señala que "En concreto, el presente parte policivo lo único que revela es que EDUARDO MEDINA fue víctima de la imprudencia del otro conductor. Reiteramos entonces, que no hay ningún cargo contra Medina."

Es decir, el actor afirma que la Gobernadora valoró equívocamente los hechos plasmados en el parte policivo, que es el único elemento de prueba para tomar las decisiones en estos casos.

Esa aseveración -en el fondo- lo que pretende es que la Corte se erija en una tercera instancia, cosa totalmente ajena a la naturaleza de la acción presentada.

En cuanto al segundo aspecto apelado, en el sentido de que el cargo concreto de "exceso de velocidad" es creación exclusiva de la Gobernadora advierte esta Corporación de Justicia que la incorporación de ese elemento en la resolución de la Gobernadora es el resultado del análisis hecho por funcionaria; el recurso de apelación permite al funcionario analizar la totalidad del proceso, y emitir una decisión en base a su criterio, el cual puede interpretar los hechos de diferente manera que la autoridad inferior.

En el presente caso, sencillamente la Máxima Autoridad de la Provincia vertió una interpretación de los mismos hechos, distinta a la del Alcalde de Chame, pues éste no dedujo exceso de velocidad.

Por consiguiente, no prospera el argumento del amparaste, y por lo tanto, no puede esta Colegiatura acceder a lo pedido.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución del 6 de mayo de 1996, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN AROSEMENA VALDÉS, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia del 23 de mayo de este año, se admitió la demanda de acción de amparo de garantías constitucionales, presentada por el licenciado Humberto Hernández Jiménez, apoderado judicial de RUBÉN AROSEMENA VALDÉS, en su condición de presidente y representante legal del Partido Demócrata Cristiano contra la resolución del 7 de mayo de 1996, proferida por Junta de Conciliación y Decisión N° 16.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Sostiene el accionante, que el auto impugnado, al rechazar en su parte resolutiva el incidente de nulidad promovido dentro del proceso laboral

interpuesto por Leonidas Nereida Calderón contra el Partido Demócrata Cristiano, ha infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, porque viola el debido proceso, dejando en estado de indefensión a su representado.

Indica además, que la Junta de Conciliación y Decisión N° 16 tenía que estudiar las causales de nulidad invocadas y que rechazar el recurso por extemporáneo e improcedente es una manera fácil de no entrar al fondo de la controversia, dado que el incidente de nulidad fue presentado en término y debidamente según la ley.

Mediante nota PJ16 de 24 de mayo (f. 23) el licenciado José Lasso Perea, Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión Número 16 procedió a enviar el expediente contentivo del proceso laboral promovido por Leonidas Nereyda Calderón contra el Partido Demócrata Cristiano, integrado por 54 fojas útiles, que recoge la documentación que da cuenta de los trámites y procedimientos que se le imprimieron al caso desde el 29 de enero de 1996 a la fecha.

ANÁLISIS DE FONDO

En primer lugar, cabe recordar que el objetivo de la acción de amparo, es desvirtuar una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra (art. 2606 del Código Judicial).

En ese sentido, se advierte que la resolución impugnada por la presente acción de amparo, en su parte resolutiva no contiene orden alguna, que se limita a rechazar un incidente de nulidad por vicios de extemporaneidad. Por otra parte, el accionante pretende que por esta vía legal se deje sin efecto el auto de 7 de mayo de 1996 que resuelve el incidente de nulidad y que en su lugar se admita, basado en hechos que resumen alegaciones en torno a normas laborales.

El Pleno ha reiterado que la acción de amparo no es un mecanismo procesal orientado a la revisión de lo actuado por la autoridad correspondiente porque no es una tercera instancia.

En el presente caso, si bien es cierto que la resolución que decide un incidente es irrecurrible, el Código de Trabajo en aras del derecho de defensa de las partes, autoriza al superior que examina una sentencia apelada a revocar lo resuelto y subsanar lo actuado, si observa que se ha vulnerado ese derecho (art. 629).

Por tanto, el mecanismo procesal invocado es improcedente.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO VIABLE la acción de amparo de garantía constitucional interpuesta por el licenciado Humberto Hernández Jiménez, en representación de Rubén Arosemena Valdés, presidente y representante legal del Partido Demócrata Cristiano.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES FORMULADA POR EL LICENCIADO JORGE FLORES, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE QUINTERO ALMENGOR, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° DG. PER-012-96, DE 22 DE ABRIL DE 1996, PROFERIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA

ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Flores, en representación de Enrique Quintero Almengor, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° DG. PER-012-96, de 22 de abril de 1996, emitida por el Director de la Policía Técnica Judicial.

Mediante el acto impugnado, el Director de la Policía Técnica Judicial resolvió rechazar por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Detective Enrique Quintero Almengor, contra la Resolución N° 16 de 10 de abril de 1996, en la cual se le suspendió del cargo que ocupa en dicha institución, por la pérdida de un artículo propiedad de la Policía Técnica Judicial (arma de reglamento AK-47).

Considera el apoderado judicial del demandante que dicha orden viola, en forma directa por omisión, el artículo 32 de la Constitución Nacional, porque el reglamento interno de la Policía Técnica Judicial establece el derecho del sancionado a interponer el recurso de reconsideración en contra de la resolución que ordena la suspensión del cargo que ocupaba en dicha institución, y el Director General rechazó por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto, causándole daño al amparista por no permitirle hacer los descargos correspondientes, dejándolo en estado de indefensión.

El amparista solicita la revocatoria de la orden de hacer contenida en el Decreto de Personal dictado el 22 de abril de 1996, mediante el cual el Director de la Policía Técnica Judicial rechazó por improcedente el recurso de reconsideración promovido por el amparista Enrique Quintero Almengor contra la Resolución N° 16 de 10 de abril de 1996 mediante la cual se resolvió suspenderlo del cargo que desempeña, hasta tanto se investigue en el Departamento de Responsabilidad Profesional los cargos que se le imputa.

En reiteradas resoluciones el Pleno de esta Corporación ha sostenido que no proceden los amparos de garantías constitucionales contra actos administrativos que constituyen acciones de personal como la presente, excepto en aquellos casos de funcionarias amparadas por fuero de maternidad (sentencias de 25 de junio de 1993, 1° de febrero de 1991 y de 18 de julio de 1990).

Al respecto es ilustrativo lo expresado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 29 de marzo de 1996:

> "Los actos administrativos que contienen acciones de personal son impugnables en la vía gubernativa (salvo excepciones expresas) con los recursos de reconsideración ante el funcionario que expidió el acto y cuando sea procedente, con el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Una vez agotada esta vía, los actos o resoluciones administrativos que tienen el carácter de definitivos o las providencias de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto de modo que pongan término o hagan imposible su continuación, son acusables, excepto en los casos expresamente prohibidos por la ley, ante la jurisdicción contencioso-administrativa." (Paréntesis y subrayado agregado).

Siendo esta la situación, la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Jorge Flores en representación de Enrique Quintero Almengor, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° DG. PER-012-96, de 22 de abril de 1996, proferida

por el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 11 DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia del 9 de mayo de 1996 esta Corporación de Justicia admitió la acción de amparo de garantías constitucionales promovida en nombre y representación del señor **ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ** contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 11 de 6 de octubre de 1995, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se concede su extradición hacia los Estados Unidos de América.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

El licenciado Jacinto Cerezo Góndola, apoderado legal del señor López Rodríguez, fundamenta la acción de amparo en trece hechos, que sintetizamos así:

1. El 6 de julio de 1995 el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió vía fax, la Nota N° 596 de fecha 3 del mismo mes, que le enviara la embajada de los Estados Unidos de América solicitándole la detención preventiva de López Rodríguez.

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota A. J. N° 514 de 6 de julio de 1995 informó a la Procuraduría General de la Nación el contenido de la nota recibida.

3. La Procuraduría General de la Nación ese mismo día ordenó la detención preventiva de López Rodríguez poniéndolo a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. El 6 de julio de 1995 es detenido por miembros de la Policía Técnica Judicial el señor López Rodríguez en el aeropuerto Internacional de Tocumen.

5. Producida la detención de López Rodríguez a objeto de guardar las formalidades, la Procuraduría General de la Nación envió Nota DPG- 1024-95 del 6 de julio de 1995 al director de la Policía Técnica Judicial, solicitando la captura de su defendido, siendo que ya se le había detenido e incomunicado.

6. La Procuraduría General de la Nación remite el 6 de julio de 1995 el cuadernillo contentivo de la solicitud de extradición, incluyendo la orden de detención provisional.

7. El Ministerio de relaciones Exteriores en Nota A. J. N° 569 de 25 de julio de 1995, le comunicó a la embajada de los Estados Unidos de América, que se había detenido al señor López Rodríguez y que tenían sesenta días desde ese momento para formalizar la solicitud de extradición.

8. La embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de López Rodríguez el 5 de septiembre de 1995.

9. En Nota A. J. N° 697 del 12 de septiembre de 1995 el Ministerio de Relaciones Exteriores le comunicó al Procurador General de la Nación de la formalización de la solicitud de extradición.

10. Que a la fecha anterior habían pasado 62 días desde la detención de López Rodríguez, no produciéndose su libertad porque tanto la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores aducen que el plazo era de 2 meses y no de 60 días.

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante resolución N° 11 del 6 de octubre de 1995, concede la extradición de López Rodríguez, habiendo expirado el plazo que la ley concede a esa dependencia oficial para pronunciarse.

12. Que al expedir esa resolución de manera extemporánea se ha vulnerado la garantía del debido proceso porque el proceso de extradición establece un plazo fatal de quince días para que el Ministerio de Relaciones Exteriores resuelva dicha solicitud, por lo que se debe conceder la liberad inmediata de su defendido.

13. Que la resolución le fue notificada a López Rodríguez hasta el 12 de octubre y nunca se le notificó a su abogado.

Menciona como disposiciones constitucionales violadas los artículos 18, 32 y 189.

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Mediante Nota N° 461 de 10 de mayo de 1996, el licenciado Ricardo Alberto Arias, Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, informa acerca de los hechos.

1. Explica el contenido de la nota que enviará el 6 de julio de 1995 al Ministerio que representa, la embajada de los Estados Unidos de América, solicitando la detención preventiva de Alfredo T. López Rodríguez.

Sobre ello explica, que tal solicitud es procedente de acuerdo con lo establecido en el artículo IV del tratado de Extradición suscrito entre la república de Panamá y los Estados Unidos de América, el 25 de mayo de 1904.

2. Que en esa misma fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Procuraduría General de la Nación la solicitud de la detención preventiva en referencia; y ésta ordenó ese mismo día la detención preventiva con fines de extradición de López Rodríguez poniéndolo a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta días contados a partir de la fecha en que se produjera la detención, período dentro del cual el Estado requiriente debe formalizar la solicitud.

Sobre ello manifiesta, que si bien el Texto Único de 29 de agosto de 1994 que contiene las disposiciones especiales sobre delitos relacionados con drogas, establece un término de hasta sesenta días contados a partir de la fecha de detención preventiva para que sea presentada por el Estado Requiriente la solicitud formal de extradición; el tratado de Extradición ya aludido, establece que la solicitud se deberá formalizar dentro de dos meses contados a partir de la fecha de detención, la cual constituye una norma internacional e interna de obligatorio cumplimiento para los dos Estados.

3. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 41 de la Ley N° 101 de 29 de agosto de 1994, por la cual se adopta el Texto Único de la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986, la Cancillería procedió a remitir a la Procuraduría General de la Nación la nota recibida con los documentos que sustentan la misma en idioma inglés con su traducción.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el 15 de septiembre de 1995 la Nota DPG-1450-95 del 12 de ese mes en la cual la Procuraduría General

de la Nación le remite la providencia del 7 de septiembre en la que expresa que la solicitud formal de extradición fue presentada en tiempo, de conformidad con el tratado de Extradición y los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada, modificada y adicionada mediante Ley N° 13 de 27 de julio de 1994.

5. Que dentro del período de quince días hábiles establecidos en la Ley, que se extiende del lunes 18 de septiembre al viernes 6 de octubre, el Órgano Ejecutivo dictó la resolución Ejecutiva N° 11 de 6 de octubre de 1995 concediendo la extradición de López Rodríguez.

Por esas razones, estima se debe desestimar el recurso de garantías constitucionales presentado.

ANÁLISIS DE FONDO

Primeramente en cuanto a la extemporaneidad de la formalización de la solicitud de extradición, en donde el amparista sostiene por un lado que transcurrieron 62 días y la autoridad demandada alega que el plazo es de 2 meses, de conformidad con el tratado de Extradición celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, esta corporación de justicia ha manifestado:

> "La Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 que se refiere en parte de su articulado a la extradición en materia de delitos relacionados con drogas, entró a regir desde su publicación en la Gaceta oficial N° 20710 de 30 de diciembre de 1986. Por su parte, el Código Judicial con su texto único que comprende las leyes 29 de 25 de octubre de 1984 y la N° 18 de 8 de agosto de 1986, entró a regir en abril de 1987 y dedica el capítulo V del Título IX del Libro III sobre Procedimiento Penal a la extradición. En esta materia de cooperación internacional sobre prevención y represión de la delincuencia, existen dos sistemas legales, a saber: el que contienen los Tratados públicos de los que sea parte nuestro país y el que regula el ordenamiento jurídico interno, el cual puede operar a título de reciprocidad. Tratándose de una extradición solicitada por Estados Unidos de Norteamérica, rige el Tratado firmado con nuestro país y que contiene la Ley 75 de 1904. No obstante, el procedimiento a seguir y demás trámites que no aparezcan en el tratado bilateral mencionado se rige por la legislación interna. En asuntos adjetivos o de carácter procesal no cabe el paralelismo normativo por cuanto devendría en confusión, de allí que deba recurrirse al texto del artículo 32 del Código Civil, que establece la prevalencia de la ley posterior. De manera que el cómputo del término para objetar o proponer incidencias contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que decide favorablemente la petición de extradición, es el que establece el Código Judicial" (Resolución del 19 de diciembre de 1995).

El Pleno se percata que la formalización de la solicitud de extradición fue presentada de manera oportuna, toda vez que de conformidad con la ley procedimental, los términos de días, se refieren lógicamente a días hábiles. Es así, que si la detención de López Rodríguez se efectuó el 6 de julio de 1995 y la embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud respectiva el 5 de septiembre de ese año, sólo transcurrieron 43 días hábiles.

Por otra parte, no se observa actuación alguna que viole las garantías constitucionales de Alfredo López Rodríguez.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la acción de amparo de garantía constitucionales interpuesto por el licenciado Jacinto Cerezo Góndola en representación de ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE COSTARANGOS G. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 7 EL 30 DE MAYO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JORGE COSTARANGOS G.**, actuando en virtud del poder otorgado por **CARLOS MEANA**, en su calidad de representante legal de la sociedad **AT&T GLOBAL INFORMATION SOLUTIONS DE PANAMÁ S. A.**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la sentencia de 30 de mayo de 1995 proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 7, y contra la sentencia de 16 de mayo de 1996 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Mediante la expedición de la sentencia de 30 de mayo de 1995 se declaró injustificado el despido del trabajador Teodoro Cianca y se condenó a la empresa antes mencionada al reintegro del trabajador y al pago de salarios caídos. Esta resolución fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la sentencia de 16 de mayo de 1996.

Procede el Tribunal al examen del escrito contentivo de la acción incoada a fin de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos legales que hacen viable su admisión, percatándose en este punto que la acción instaurada adolece de una serie de defectos que impiden darle curso legal a la misma, tal como se evidencia de seguido:

Se advierte, en primer término, que el actor no ha cumplido con los requisitos formales contenidos en los artículos 2606 y 2610 del Código Judicial, al encaminar la acción de amparo a obtener la revocatoria, por supuesta "ilegalidad e inconstitucionalidad", de dos órdenes de hacer. Aunque la segunda orden impugnada es el acto confirmatorio de la decisión de la Junta de Conciliación y Decisión, el amparista no debe dirigir la acción contra varias órdenes de manera simultánea (lo que involucra distintas autoridades acusadas), y tampoco contra actos confirmatorios.

Por otro lado, aunque quedara claramente establecido que la acción se encuentra instaurada contra la sentencia de 30 de mayo de 1996, el amparista plantea sin orden ni concierto, y dentro del renglón de los hechos de la demanda, una mención indirecta de la Corporación que emite el acto acusado, contraviniendo reiterados pronunciamientos de la Corte en el sentido de que esta mención debe hacerse de manera clara y en un renglón específico: "**Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que imparte la orden impugnada**".

Esta exigencia obedece a que es precisamente contra este funcionario o corporación que el Tribunal que conoce de la acción de Amparo debe girar instrucción, a fin de que emita un informe explicativo sobre las razones que le llevaron a la expedición de la actuación impugnada.

Adicionalmente se incluye en el renglón de los "hechos", las disposiciones constitucionales que estima la empresa amparista le han sido conculcadas, sin explicar de manera desglosada e individual en qué concepto se produce la violación a sus garantías fundamentales, e incluyendo dentro de estos planteamientos,

la supuesta vulneración del artículo 17 de la Constitución Nacional, norma cuyo contenido programático ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en numerosas oportunidades, resaltando su carácter de **generalidad y el valor jurídico** declarativo que encierra.

Se observa por otra parte, que la disconformidad del amparista se centra en la aplicación de los principios de **apreciación y valoración de los medios probatorios** por parte del juzgador al decidir la pretensión laboral, aspectos que no son susceptibles de ser analizados dentro de una acción de amparo de garantías constitucionales, que no debe ser considerada como una tercera instancia de proceso alguno.

Finalmente se constata que la acción que nos ocupa ha sido dirigida de manera global a los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia en Pleno, y no al Magistrado Presidente de esta Corporación Judicial, contraviniendo con esta omisión, lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial, norma legal que es del tenor siguiente:

> "Artículo 102. Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Sala Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto." (Subrayado es nuestro).

En virtud de todo lo expuesto, y concretamente a raíz de los defectos indicados, este Tribunal debe negarle viabilidad a la acción de Amparo de Garantías presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado JORGE COSTARANGOS G. en representación de la empresa AT&T GLOBAL INFORMATION SOLUTIONS DE PANAMÁ S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES,CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. AURELIO ALÍ BONILLA actuado como apoderado especial del **Licdo. CARLOS STRAH CASTRELLÓN, Juez Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá,** ha interpuesto ante el Pleno de la Corte **Recurso de Apelación** contra la Resolución de 15 de abril de 1996 dictada por el Primer

Tribunal Superior de Justicia en virtud de la acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** propuesta por **RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES** contra **la orden de hacer** contenida en la resolución de 28 de marzo de 1996 proferida por el apelante, Juez Segundo de Circuito, que decreta una medida cautelar de conservación.

La resolución apelada, que consta de foja 16 a foja 27, resolvió **CONCEDER** el amparo de garantías "y, en consecuencia, **REVOCA** la orden de hacer contenida en el Auto N° 578, proferido el 25 de marzo de 1996 por el Juez demandado y ejecutada el 28 de marzo de 1996 por la Alguacil Ejecutora de dicho Juzgado".

Posteriormente al ingreso del presente expediente de amparo bajo el número 360-96, se recibió en la Secretaría General de esta Corporación otro recurso de apelación propuesto, esta vez, por RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES contra otra resolución dictada por el Primer Tribunal Superior que decidió una segunda acción de amparo interpuesta por la apelante (amparista) contra el Auto N° 611 de 29 de marzo de 1996, por medio del cual el Juez Segundo del Primer Circuito, adiciona el auto N° 578 de 25 de marzo de 1996 (que decretó la medida de conservación), decretando otra medida, la de suspensión, que ordenaba a los destinatarios abstenerse de realizar una serie de actos en relación a la sociedad PRISCO, S. A.

A este segundo expediente se le designó el N° 361-96 y, a diferencia del primero en que el apelante es el funcionario demandado, en este lo es la misma amparista (RITA TYPALDOS DE OZORES) y el recurso está dirigido contra la sentencia de 22 de abril de 1996 dictada, también, por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que le fue adversa al decidir:

> ".... **DENIEGA** el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la señora Rita Irene Typaldos de Ozores en contra del Juez Segundo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, respecto de la Resolución N° 611 de 29 de marzo de 1996; respecto de la resolución N° 578, de 25 de marzo de 1996, **DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA**, y al mismo tiempo **DENIEGA** la petición de acumulación impetrada, por cuanto que se trata de dos órdenes distintas: una de hacer y otra de no hacer. ...".

A pesar de haberse presentado dos recursos de apelación contra fallos judiciales que resolvieron los amparos en forma opuesta, a juicio de la Corte en ambos casos los amparos (aunque se dirigían contra órdenes diferentes -de hacer y de no hacer-) tratan de la misma materia o situación de hecho y de derecho, entre las mismas partes. Por ello, mediante resolución de 23 de mayo de 1996, la Corte Suprema en Sala Unitaria **"DECRETA LA ACUMULACIÓN** del proceso de amparo identificado con el número 361-96 con el que lleva el número 360-96" y, en consecuencia, lo que se resuelva en un caso determinará la suerte del otro.

En tal sentido la Corte procede a examinar el recurso de apelación interpuesto por motivo del primer amparo propuesto por la señora Typaldos de Ozores, decidido mediante fallo de 15 de abril de 1996.

Como se mencionó previamente, el funcionario demandado en amparo anunció apelación contra la decisión recaída en dicha acción constitucional, recurso que fue sustentado en el escrito que se lee de fojas 32 a 35. Por su parte el amparista, manifestó su oposición a la apelación mediante escrito que consta de fojas 41 a 64.

Veamos, en síntesis, las consideraciones expresadas por el juez apelante, sobre la resolución del Tribunal Superior que decidió la acción de amparo.

RECURSO DE APELACIÓN

Los cargos formulados contra la citada resolución, según se lee en el Recurso de Apelación, consisten en los siguientes:

1. Se sostiene que la resolución atacada debió declarar improcedente la acción

de amparo a tenor de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que establece su viabilidad cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la respectiva resolución.

Considera el apelante que dicho presupuesto no se cumplió, por lo que no comparte el criterio del Tribunal Superior que conoció el amparo, quien sostuvo, que debido a que la amparista no era parte en la medida cautelar decretada por el juez, no tenía recurso alguno contra la misma, sino solamente el de amparo.

En tal sentido, expresa el funcionario judicial recurrente que conforme a los artículos 1118 y 1119 del Código Judicial, el derecho de apelar no solo es potestativo del que es parte en el proceso, sino también de aquel a quien de alguna manera afecte la resolución respectiva. Por tanto, el amparista, aunque no fuera parte, podía apelar contra la resolución cautelar.

Se argumenta que además del aludido recurso de apelación, la amparista podía utilizar el mecanismo legal que establece el artículo 544 ibídem., ya que, de acuerdo con lo que ella misma sostiene, si es la propietaria de las acciones al portador cauteladas de la sociedad **PRISCO, S. A.**, la citada norma resultaría aplicable, pues en su parte pertinente señala "cuando fuere depositada cosa ajena el interesado podrá reclamarlo mediante incidente".

2. El siguiente cargo se hace consistir en que el fallo del Tribunal Superior debió declarar NO VIABLE el amparo debido a que el amparista no precisó la orden atacada. A pesar de ello, continúa expresando la censura, el Tribunal de amparo sostuvo que la imprecisión en calificar la orden como de secuestro, después de embargo y finalmente como medida cautelar "no le es imputable por ser una medida cautelar inoída parte ...".

Según manifiesta el juez segundo apelante, en este caso el amparista sostuvo que la orden atacada es la "que decreta embargo y ordena a la Sra. Ozores la entrega de las acciones de la Sociedad **PRISCO, S. A.**" Sin embargo, dicha orden nunca fue de embargo, ni de secuestro, sino que la orden que se dictó "es una medida de conservación contenida en el Capítulo II, Título II, Capítulo IV, del Código Judicial, específicamente en la norma 558, que tenía por objeto el depósito de la acciones comunes o al portador de la Sociedad **PRISCO, S. A. ...**".

3. Finalmente, se hace referencia a lo expresado por el Tribunal de amparo sobre la infracción de la garantía constitucional del debido trámite legal, en cuanto a que cualquier medida cautelar debió ser decretada contra los bienes de la sucesión y no contra los bienes de la Sra. Ozores. Esto, en virtud de lo preceptuado por el artículo 521 y siguientes del Código Judicial, en cuanto a que "a los procesos no contenciosos no les es aplicable ninguna de las medidas cautelares, por razón de que el artículo 1539 del Código Judicial al hablar que aquel que tenga interés en la sucesión podrá pedir al juez que los papeles y bienes muebles de la sucesión sean guardados bajo llave y sello hasta tanto se realice el inventario".

En primer lugar, alega el apelante que la medida en cuestión no ha sido decretada contra bienes de la señora Ozores sino contra acciones de la sociedad PRISCO, S. A., "específicamente sobre las acciones que fueron depositadas y que se encontraban en posesión de la Amparista". Respecto al artículo 521 en concordancia con el artículo 1539 ibídem, expresa que este último en materia de sucesión sí permite decretar medidas cautelares, pues lo que se desprende de esta última norma "constituye una medida cautelar".

CRITERIO DE LA CORTE

El amparo de garantías constitucionales, sobre el cual se pronunció el Tribunal Superior en el fallo (ahora apelado) de 15 de abril de 1996, estableció como orden de hacer impugnada la contenida en "la Resolución de 28 de marzo de 1996, por medio de la cual el JUEZ SEGUNDO, funcionario con mando y jurisdicción en el Primer Circuito Judicial de Panamá, decreta embargo y ordena la entrega a LA SEÑORA OZORES de acciones al portador emitidas por PRISCO, S. A. Que le pertenecen y que se encuentran en su poder.".

La orden atacada en amparo tuvo su origen en la solicitud que hiciera el apoderado judicial de TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE Y OTROS, "en calidad de medida conservatoria, a la vez que para que sirva oportunamente como prueba en juicios de sucesión que nuestros mandantes adelantarán, que se lleve a cabo un inventario provisional de las acciones" que DON FÉLIX CARLOS DUQUE GÓMEZ (q. e. p. d.) y de DOÑA CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ (q. e. p. d.) tenían en la sociedad PRISCO, S. A., debido a que "son los bienes más conocidos de dichos señores DUQUE GÓMEZ (q. e. p. d.), y se designe o nombre un depositario o administrador de tales acciones". En tal sentido, como presuntos herederos y previamente a la apertura del juicio de sucesión, pidieron al juez declarar dicha medida, a fin de preservar dicho patrimonio de manera apropiada. (Fs. 31 a 37 antecedentes).

Por ello el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial dictó el Auto 578 de fecha 25 de marzo de 1996, visible de fojas 61 a 62 de los antecedente adjuntos al proceso de amparo, por medio del cual se decretó la medida de la siguiente manera:

1. Se ordenó levantar inventario provisional de las acciones que poseían los señores FÉLIX CARLOS DUQUE GÓMEZ y CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ en la sociedad PRISCO, S. A. y "para el evento de que tales acciones hayan sido emitidas al portador, se inventaríen provisionalmente las dos terceras (2/3) partes de tales acciones y el depósito de los mismos";

2. Se designaron los depositarios y administradores de los bienes a inventariar; y,

3. Se ordenó llevar a cabo la práctica de la diligencia de inventario y avalúo de las referidas acciones, de acuerdo al artículo 525 del Código Judicial.

Posteriormente, como se infiere de fojas 72 a 74, la referida orden del juzgado segundo fue ejecutada por su Alguacil Ejecutor mediante la Diligencia de Inventario Avalúo y Depósito fechada 28 de marzo de 1996.

Como se colige de lo antes reseñado la orden impugnada en amparo la constituyen el Auto que accede a la solicitud cautelar y la posterior diligencia de ejecución que la complementa, siendo que ambas actuaciones fueron revocadas por la sentencia del Tribunal Superior por considerar que infringían la garantía fundamental del debido proceso, no sin antes pronunciarse sobre la viabilidad o procedencia de la acción de amparo de garantías.

En primer término, al aludir a la procedencia de este remedio constitucional, la sentencia recurrida da por sentado, la imposibilidad de la amparista de interponer recurso ordinario, en este caso el de apelación, a que alude el numeral 10 del artículo 521, por el hecho de que el mismo está instituido para las partes y en este caso la medida cautelar no está dirigida a la amparista, RITA TYPALDOS DE OZORES. Advierte además, que estas medidas se practican inoída parte, debido a lo cual señala que la imprecisión en cuanto a la determinación de la orden no es imputable a la amparista, quien alegó que por tal razón no había podido tener acceso al cuaderno contentivo de la medida.

Entre las consideraciones de fondo que el a-quo expresó en el presente proceso de amparo, se encuentran las siguiente:

> "Establecido de que se trata de una medida cautelar genérica, debe señalarse que, en efecto, el artículo 521 del Código Judicial dispone que "En los procesos no contenciosos sólo proceden las medidas cautelares expresamente determinadas por la Ley". Si bien la disposición transcrita no se refiere a qué ley, lógico es pensar que las medidas cautelares que proceden en los procesos no contenciosos son las medidas cautelares que están establecidas específicamente para un determinado proceso no contencioso. Pensar que son las establecidas en cualquier ley, sería concluir que en los procesos no contenciosos caben todas las medidas o acciones cautelares o preventivas o asegurativas o provisionales establecidas en la ley, y no tendría ningún sentido la disposición transcrita.

> A contrario sensu, la norma transcrita debe ser interpretada en el sentido de que las medidas o acciones cautelares que de manera general se regulan en los artículos 521 y siguientes del Código Judicial sólo caben en los procesos de conocimientos. ...
>
> De otro lado, debe señalarse que existiendo una medida específica o típica instituida en el artículo 1539 del Código Judicial para los procesos sucesorios, no deben los tribunales sustituir la acción preventiva típica por una genérica, dado el carácter de inintercambiabilidad de las medidas cautelares. Es decir, existiendo una medida específica no se debe aplicar una general.
>
> Siendo que el proceso de sucesión en un proceso no contencioso, en los cuales no cabe cualquier medida cautelar, y siendo que la medida cautelar genérica practicada no está instituida para los procesos de sucesión, esta Superioridad debe concluir que el Juzgador a-quo no imprimió el trámite legal al decretar una medida cautelar genérica accesoria a un proceso de sucesión y que, por ende, conculcó la garantía del debido proceso.
>
> Asumiendo en vías de discusión que la medida cautelar decretada y practicada hubiese sido la medida de oposición de sellos a que se refiere el artículo 1539 del Código Judicial, la cual sí está instituida específicamente para los procesos sucesorios, debe advertirse, según se desprende de la citada norma, que tal medida debe ordenarse una vez abierta la sucesión y no antes y que la misma está dirigida a guardar bajo llave y sello los papeles y muebles de la asociación o sea del causante. Ya también pareciera desprenderse de dicha norma que tal medida se practica en la residencia o domicilio del causante, y no en el domicilio de un tercero como aconteció en el presente caso."

Luego de analizar los planteamientos del caso, la Corte observa:

Al considerar que estamos ante las denominadas **"MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN EN GENERAL"**, que consagra el artículo 558, Capítulo IV, del TÍTULO II (MEDIDAS CAUTELARES), Libro II del Código de Procedimiento Civil, veamos en primer lugar el contenido textual del referido precepto que las regula:

> "ARTÍCULO 558. Además de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al Juez las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios.
>
> La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo a las reglas de este Título."

En atención a la parte final de la norma transcrita, a este tipo de medidas conservatorias o de protección les son aplicables las reglas del citado Título II denominado MEDIDAS CAUTELARES. En el mismo se observan inicialmente las Normas Generales establecidas por artículo 521, en once numerales.

Desde el punto de vista de los medios de impugnación contra estas resoluciones cautelares y, tal como lo expresó el tribunal de amparo, ciertamente el numeral 10 de la citada norma, admite en forma específica el recurso de apelación "contra las resoluciones que decretan o rechacen las medidas cautelares". En iguales términos lo establece el artículo 1116 (numeral 1). Sin embargo, en este caso al no ser parte la amparista el sentenciador consideró que no podía utilizar dicha vía y sólo le quedaba a su alcance el amparo de garantías constitucionales en defensa de sus derechos.

Las normas mencionadas que establecen la apelación contra los autos que deciden medidas cautelares, no demandan en el proponente la condición de parte; condición si contemplada por el numeral 8 del artículo 521, al referirse a las oposiciones e impugnaciones incidentales que pueden manifestarse en forma oral al momento de ejecutar la medida, cuando expresa "... permitiendo a las partes presentar sus pruebas y alegaciones ...".

Entre las reglas del Título referente a medidas cautelares, además de las aludidas normas generales del capítulo I, se observan entre otras las que regulan la figura del secuestro (capítulo II). Esta medida presenta varias características comunes con la medidas conservatorias y de protección, aunque su regulación es más extensa y su utilización es más común en nuestro medio. Sin embargo, la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la resolución que decrete o rechace el secuestro, también se encuentra contemplada en las normas generales (artículo 521, numeral 10, y artículo 1116, numeral 1). En atención a la legitimación para recurrir en apelación que podría tener un tercero afectado por la medida, se ha dicho:

> "... Puede recurrir el tercero afectado por un secuestro en un proceso en que no es parte? Debemos distinguir:
>
> a) **Si de la actuación se desprende que procede levantar el secuestro, no vemos porqué no pueda apelar (Art. 1104, C. J.);**
> b) Si la injuridicidad no surge de la actuación, entonces requiere el tercero proponer incidente;
> c) Mediante mera petición si la formula el depositario al momento de llevarse a cabo el depósito (Art. 546). (Fábrega P., Jorge, "ESTUDIOS PROCESALES", Capítulo L (El Secuestro), pp. 613-614, Tomo III, 1990). (Énfasis de la Corte).

Lo que se quiere hacer notar de lo antes expuesto es que el derecho de impugnación (en apelación) respecto a una resolución que decrete o rechace una medida cautelar está entre las reglas generales que regulan la materia, por lo que también incluye a las que deciden las medidas conservatorias o de protección. Y en lo que concierne a un tercero que no sea parte y se vea afectado por tal medida, no es necesario acudir a lo normado por los artículos 1118 y 1119 del Código Judicial ya que para observar dicho derecho también la impugnación puede ser utilizada por éstos, pues el artículo 1104 ibídem.(normas generales sobre los medios de impugnación), claramente señala:

> **"1104**. ...
>
> Las resoluciones dictadas en procedimientos cautelares son igualmente recurribles, con arreglo a las disposiciones de este Título. En este caso el recurso no suspende la medida cautelar, mientras no se ejecutorie la resolución que lo decida favorablemente.
>
> **Los recursos pueden ser interpuestos** por la parte agraviada, **por el tercero agraviado** o por el respectivo agente del Ministerio Público en los casos en que por disposición de la ley intervienen. ...". (Énfasis subrayado es de la Corte).

Aunada a la facultad de apelar, a juicio de la Corte, en concordancia con lo expresado por el Juez Segundo y conforme lo ha reiterado la jurisprudencia, la amparista pudo haber reclamado mediante el incidente, referente al depósito de cosa ajena que consagra el artículo 544 del Código Judicial. Sobre esta norma, específica para la reclamación del tercero titular de bienes sobre los que recae la medida, ha dicho la Corte:

> "`... Esta regla que rige para los bienes inmuebles se aplica por analogía a los muebles, desde que tanto de los unos, como de los otros cabe la simulación, y porque según el aforismo jurídico donde existe la misma razón de derecho, debe existir la misma disposición de la Ley . (Herrera, L. T. I. N° 465. pág 93)". (Fábrega P. Jorge,

Ob. cit. pág. 668).

En consecuencia, la Corte comparte el criterio del juez apelante, en el sentido de que la amparista tenía otros remedios ordinarios para impugnar la injuridicidad que atribuye a la resolución que decreta la medida cautelar sobre bienes muebles (acciones) de su propiedad.

Los anteriores razonamientos, a juicio de esta Superioridad son suficientes para considerar la improcedencia de la acción de amparo contra la resolución cautelar cuestionada, sin embargo el Pleno considera importante hacer referencia a otros aspectos también señalados en el recurso de apelación y refutados por el opositor-amparista.

Fundamentalmente, la violación del debido proceso se atribuyó al hecho de que el juez no contempló ciertas limitaciones que "debe respetar cabalmente al momento de autorizar la práctica de una medida cautelar". Como por ejemplo: el principio de que la medida cautelar es accesoria, por lo que corre la suerte de la acción principal a cuyos resultados obedece; que en los procesos no contenciosos sólo proceden las medidas cautelares expresamente determinada por la ley (art. 521, núm. 1), etc.

En este caso, según se indicó previamente, la medida cautelar fue solicitada para proteger bienes que podrían formar parte del caudal de una sucesión, por lo que el juzgador la declaró, a fin de que el proceso de sucesión no fuese ilusorio.

Sobre la argumentación de que la medida cautelar conservatoria o de protección general no cabía en este caso, por estar relacionada con un proceso no contencioso de sucesión, para efectos del cual las normas especiales que lo regulan (artículos 1503, numerales 2 y 3 y artículo 1539 del C. J.) establecen otras medidas, la Corte ha podido apreciar que la medida practicada en términos generales es muy similar a la que describe el citado artículo 1539, que consiste en solicitar al juez que ordene que se guarden papeles y muebles de la sucesión, hasta que se proceda al inventario de los efectos hereditarios. Sin embargo, la norma señala que tal medida se podrá pedir desde "el momento en que sea abierta una sucesión", presupuesto que no se dio en este caso. Pues bien, a pesar de la falta de este presupuesto hay que destacar que entre las normas generales sobre procesos no contenciosos, el artículo 1447, numeral 10, expresa lo siguiente:

> "El Juez tiene amplias facultades de dirección del proceso y no está obligado por los hechos alegados por las partes. Debe tomar en cuenta todas las circunstancias esenciales de hecho para la decisión y **debe asimismo practicar cualquier diligencia que estime conveniente o aconsejable**. ... (Énfasis de la Corte).

En virtud de lo expuesto el juez practicó la medida conservatoria de carácter provisional, ya que la estimó conveniente para el aseguramiento de los bienes que podrían llegar a formar parte de la sucesión, por lo que la Corte considera que en su actuación no ha incurrido en excesos o arbitrariedades en perjuicio de la amparista.

Para concluir, la Corte debe señalar, en relación con el cargo formulado por el amparista acerca que se le ha privado de la propiedad de sus bienes, que ello no es cierto, pues lo decretado es una medida cautelar de las frecuentemente usadas para impedir la disipación o pérdida de los bienes que pudieran estar comprendidos en el patrimonio que es o será objeto de una futura decisión judicial. Además, la medida se acompañó de la fijación de una fianza que obra como garantía, aparte de que los bienes cautelados (las acciones) no corren ningún peligro en razón de la medida decretada.

Por tanto, la Corte no comparte el criterio expresado por el fallo apelado, pues la actuación del juez segundo, en este caso, no puede señalarse violatoria de garantía constitucional alguna en afectación de los derechos del amparista. Por lo que se impone la revocación de la sentencia proferida por el Tribunal Superior.

Finalmente, con respecto al expediente acumulado a este proceso de amparo y en atención al criterio que se deja expuesto, el Pleno de la Corte rechaza los cargos planteadoS por la amparista, RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES (en su calidad de apelante) contra la resolución de 22 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior para decidir la acción de amparo propuesta contra orden de no hacer contenida en el Auto N° 611 de 29 de marzo de 1996, que decreta la medida cautelar de suspensión con respecto a determinado número de acciones de PRISCO, S. A. En tal sentido, resulta obvio que dicha orden de no hacer complementa y adiciona la medida de conservación decretada mediante el Auto N° 578 de 25 de marzo de 1996, por lo que no es arbitraria, ni violatoria de la garantía del debido proceso y de la propiedad privada. Por tanto, la Corte comparte la decisión del a-quo en cuanto a la improcedencia del amparo contra la aludida medida de suspensión.

Para concluir, reiterando lo señalado en relación a los otros remedios que tenía a su disposición la parte demandante-amparista, se debe resolver en el sentido de declarar la no viabilidad de las demandas de amparo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2606 en concordancia con el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 15 de abril de 1996 y la de 22 de abril de 1996 dictadas por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y en su lugar, DECLARA NO VIABLES las demandas de Amparo de Garantías Constitucionales interpuestas por RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES, contra la orden de hacer contenida en el Auto N° 578 de 25 de marzo de 1996 y contra la orden de no hacer contenida en el Auto N° 611 de 29 de marzo de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A.FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Respetuosamente difiero del criterio de mayoría. Explico como conceptúo la situación.

El 7 de diciembre de 1995 el Licenciado Tomás Altamirano Duque y otros, por medio de apoderados, solicitan:

> "... en calidad de medida conservatoria, a la vez que para que sirva oportunamente como prueba en juicios de sucesión que nuestros mandantes adelantarán, que se lleve a cabo un inventario provisional de las acciones que Don Félix Carlos Duque Gómez (q. e. p. d.) ... y que se designe o nombre un depositario-administrador de tales acciones" (f. 32 del cuaderno de antecedentes).

El 5 de febrero de 1996 presentaron otro escrito que adiciona el anterior, en que se expresa que:

> "... para los propósitos de comprobar la titularidad que sobre las acciones de PRISCO, S. A. tenían los señores Don Félix Duque Gómez (q. e. p. d.) y Doña Carmina Duque Gómez (q. e. p. d.) venimos respetuosamente a acompañarle copia autenticada de las siguientes Escrituras Públicas" (fs. 54 ibídem) (no subrayado).

Se trata de las Escrituras Públicas N° 1136, de "11 de septiembre de 1978, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá; N° 2843, de 22 de marzo de 1982, de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá; y, N° 12,872, de 26 de agosto de

1985 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá.

Ninguna de ellas evidencia la titularidad de acciones de Don Félix Duque o de Doña Carmina Duque Gómez. En todo caso la más reciente de las Escrituras era de 1985.

El 20 de marzo de 1996 se presenta un tercer escrito que igual que el segundo, adiciona al primero:

> "Pedimos ... que se lleve a cabo un inventario provisional de las acciones que Don Félix Carlos Duque Gómez (q. e. p. d.) ... y Doña Carmina Adela Duque Gómez (q. e. p. d.) ... tenían en la sociedad PRISCO, S. A... que son los bienes más conocidos de dichos señores Duque Gómez (q. e. p. d.) y se designe o nombre depositarios - administradores de tales acciones; y para el evento de que tales acciones hayan sido emitidas al portador, se inventaríe provisionalmente las dos terceras (2/3) partes de dichas acciones y éstas sean puestas en depósito y administración de los depositarios y administradores designados" (f. 57 ibídem).

En esta ocasión se mencionan también escrituras públicas como prueba; pero no se presentaron.

El Juez Segundo del Primer Circuito de Panamá, Civil, se pronunció por Auto de 25 de marzo de 1996, en el cual dispone "decretar la medida de conservación a favor de los solicitantes como presuntos herederos de Félix Carlos Duque Gómez (Q. E. P. D.) y Carmina Adela Duque Gómez (Q. E. P. D.) de la siguiente manera: 1) Ordenar un inventario provisional de las acciones que poseían los señores Félix Carlos Duque Gómez y Carmina Adela Duque Gómez en la sociedad PRISCO, S. A., y para el evento lo que tales acciones hayan sido emitidas al portador, se inventaríen provisionalmente las dos terceras (2/3) partes de tales acciones y el depósito de las mismas. 2) Nombrar depositarios y administradores".

Sobre esta base, la Alguacil Ejecutora del Juzgado Segundo del Primer Circuito de Panamá, Civil, acompañada de los depositarios-administradores, en número de dos; de un perito evaluador de los solicitantes y un perito del Tribunal; y de tres apoderados de los solicitantes, dice ella misma en el Acta correspondiente:

> "Comparecimos a donde se encuentra (sic) localizadas las acciones de la Empresa PRISCO, S. A."

También según manifiesta el Acta, fechada el 28 de marzo de 1996, en el lugar:

> "Una vez dentro se le informó a la Sra. Rita Irene Typaldos de Ozores el objeto de nuestra diligencia, manifestando que ella es la custodia de tales acciones y que no iba a entregar las mismas; que las acciones se encuentran actualmente localizadas en el Pribanco, en una cajilla de seguridad" (f. 73).

De allí se trasladaron al Primer Banco de Ahorros, todo según el Acta:

> "La Sra. Rita Irene Typaldos de Ozores solicitó se le abriera la cajilla y permitió el acceso a la suscrita quien se cercioró de las acciones y cómo se extrajeron de la cajilla" (f. 74).

Se trata de dos certificados, uno por 600 y otro por 400, al portador, de la PRISCO, S. A., de los cuales, según el Acta, se inventarían las dos terceras (2/3) partes; o sea 666.66 acciones.

En el Acta no aparece la firma de la Sra. Rita Irene Typaldos de Ozores ni de apoderado de ella, aún cuando se menciona la presencia de asesor legal en el lugar antes de arribar al Banco.

Esos son los hechos a los cuales se refieren los recursos de amparo de

garantías constitucionales acumulados, presentados uno el día siguiente de la práctica de las diligencias llevadas a cabo por la Alguacil Ejecutor (29 de marzo de 1996), contra la orden del Juez Segundo del Primer Circuito de Panamá, Civil, de inventariar y depositar acciones de PRISCO, S. A. El otro contra la orden adicional de abstenerse de realizar una serie de actos respecto a PRISCO, S. A.

El primer recurso alude a Resolución de 28 de marzo cuando su fecha es 25 de marzo; y se refiere a que "se decreta embargo" de las acciones; lo que se explica por la naturaleza de la gestión de interponer un recurso de amparo de garantías constitucionales que tiene por objeto conjurar un daño grave e inminente que requiere una revocación inmediata, situación que la afectada vive no como actuación en un proceso de conocimiento, sino como ejecución.

El amparo se refiere, pues, a la Resolución de 25 de marzo de 1996 dictada por el Juez Segundo del Primer Circuito de Panamá, Civil, en el expediente caratulado "MEDIDA CAUTELAR - SUCESIÓN INTESTADA POR FÉLIX CARLOS DUQUE GÓMEZ (Q. E. P. D.)".

Como se ha dejado expresado, los solicitantes de la medida de conservación de las acciones de PRISCO, S. A. dicen que lo hacen en relación con los juicios de sucesión de los señores Don Félix Carlos Duque Gómez y Carmina Adela Duque Gómez que "adelantarán" (f. 32 de antecedentes).

Las constancias procesales revelan que sin razón alguna el Juzgado Segundo del Primer Circuito de Panamá ha actuado de tal manera que dos tercerios (2/3) de las acciones al portador de PRISCO, S. A. representadas por los Certificados N° 1 y N° 2, por 600 y 400 acciones respectivamente, han quedado calificados como bienes sucesorios de las sucesiones de Don Félix Carlos Duque Gómez y Doña Carmina Adela Duque Gómez, quienes fallecieron, Don Félix en el mes de septiembre de 1978, y Doña Carmina en octubre de 1993. La medida de aseguramiento de bienes se presentó, como se ha visto, el 7 de diciembre de 1995.

Por otra parte se ha mencionado en este proceso de amparo, por parte del apoderado de la recurrente en amparo, que el juicio de sucesión de Don Félix Duque ya se tramitó y se adjudicaron bienes en el año de 1981.

En cuanto a aseguramiento de bienes herenciales, nuestro derecho tiene establecidas las medidas que aparecen en el artículo 1503 del Código Judicial, que autoriza al Juez Municipal para actuar de oficio tan pronto tenga noticia de que dentro de su circunscripción ha muerto una persona y que no hay quien se encargue del cuidado y administración de sus bienes.

Y el artículo 1539 ibídem que se refiere al momento de la apertura de la sucesión, que es el acto inicial del juicio sucesorio, a partir del cual todo el que tenga interés en la sucesión o se presuma que pueda tenerlo, puede pedir el aseguramiento de bienes hereditarios. Pero es evidente que siempre se trata de bienes de la sucesión.

No se puede, como es lógico, pedir que bienes que no lo son o que aparezcan como ajenos, sean asegurados como tales. Para tales efectos deberá promoverse las acciones pertinentes para reivindicar bienes que se pretenda que tengan el carácter de herenciales.

Por estas razones resulta arbitrario lo ordenado y actuado por el Juez Segundo del Primer Circuito de Panamá, a tal grado que justifica, por la gravedad de su actuación, el reconocimiento del amparo de garantías constitucionales a la tenedora de las acciones.

Parece evidente que la forma fuera de todo contexto procesal como actúa la autoridad, anula la eficiencia de los remedios ordinarios, a los cuales pertenece el recurso de apelación; remedios que en tan extrañas circunstancias resultan ineficaces; lo que justifica el recurso de amparo constitucional; que a juicio mío ha debido concederse.

Salvo, pues, el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EMETERIO MILLER RAMÍREZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 227 DE 29 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN ARANCELARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE, (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En etapa de admisibilidad se encuentra la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licdo. **EMETERIO MILLER RAMÍREZ**, en su propio nombre y representación, contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 227 del 29 de marzo de 1996, emitida por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La resolución impugnada -emitida por motivo de recurso de apelación- revocó la resolución N° 10/96 del 8 de febrero de 1996, emitida por la Dirección General de Aduanas, que determinó clasificar un saco de fibra sintética en la Partida Arancelaria Sistema Armonizado 6035.31.00. Partida Arancelaria NAUCA II 6203.80.00 Partida Arancelaria NCCA 6203.00.00, con Gravamen Arancelario Libre y que dicho producto está amparado bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Panamá y Honduras.

También clasificó la resolución revocada una bolsa plástica que se encontraba adentro del saco en mención, en la Partida Arancelaria 3923129.90 Gravamen Arancelario 40% A/V., el cual debía pagar el arancel de importación, por no acogerse al Tratado de Libre Comercio ya señalado.

Es necesario dilucidar si la presente acción cumple con los requerimientos de los artículos 2606, numeral 2° y 2610 del Código Judicial.

A todas luces es evidente que la presente acción no puede ser admitida, toda vez que por tratarse de un acto gubernativo y al haberse agotado la vía gubernativa, el demandante tenía a su disposición la vía contencioso-administrativa, que debió ser utilizada antes de interponer la presente acción.

Por ello, no cumple la acción con el requisito establecido por el artículo 2606 del Código Judicial, que preceptúa la necesidad de que se hayan agotado todos los medios impugnativos para que sea admisible la acción de amparo de garantías constitucionales.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales presentado por el Licdo. EMETERIO MILLER contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 227 del 29 de marzo del 996, dictada por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARCELIO MOJICA MOJICA, EN REPRESENTACIÓN DE OLIVER ERNESTO AIZPURÚA, BENJAMÍN GONZÁLEZ AGUDO Y MARINO DÍAZ, CONTRA LAS ORDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS S/N DE 4 DE ENERO DE 1995 Y DE 19 DE MARZO DE 1996, DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ARCELIO MOJICA MOJICA, actuando a nombre y en representación de OLIVER ERNESTO AIZPURÚA, BENJAMÍN GONZÁLEZ AGUDO y MARINO DÍAZ, ha promovido acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, contra dos autos proferidos por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso sumario de impugnación de actos o decisiones de asamblea Generales de personas jurídicas, por contravención a la ley, al pacto social o a los estatutos de dichas entidades, instituido por el artículo 1335, numeral 13 del Código Judicial. Por considerar que el recurso de amparo había cumplido los requisitos que, para su admisión, exige el artículo 2606 del Código Judicial, el Magistrado Sustanciador, mediante providencia de 22 de mayo de 1996 admitió el referido recurso, y se requirió a la autoridad acusada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el envío de la actuación que motivaba el recurso o, en su defecto, un informe sobre los hechos materia de esta acción, ordenado mediante Nota N° 761-96, de 22 de marzo de 1996, la que fue cumplida con la remisión del expediente que contiene el proceso sumario de impugnación de la Asamblea General del SINDICATO DE CONDUCTORES DE TAXI INDEPENDIENTES DE VERAGÜAS.

Estando, por tanto, el recurso en estado de decidir, a ello procede la Corte, previas las siguientes consideraciones:

El objeto de la acción extraordinaria de naturaleza constitucional, persigue la anulación de dos actos de naturaleza jurisdiccional, los Autos S/N de 4 de enero y de 19 de marzo de 1996, dictados dentro de un proceso sumario de impugnación de un acuerdo de la Asamblea General del SINDICATO DE CONDUCTORES DE TAXIS INDEPENDIENTES DE VERAGUAS (SINCOTIVE), por estimar que dichos actos, contentivos de órdenes de hacer, violan los derechos fundamentales de los poderdantes, contenidos en los artículos 17, 32 y 44 de la Constitución Política, ubicados en el Capítulo I del Título III de la Constitución Pública relativos a las garantías fundamentales de los derechos y deberes individuales y sociales.

Los hechos en que se apoya esta acción constitucional, han sido planteados por el recurrente en la forma que se transcribe:

> "**PRIMERO:** En una amplia Asamblea General del Sindicato de Conductores de Taxis Independientes de Veraguas (SINCOTIVE) que contó con la presencia de representante del ente regulador de tránsito, en la primera asamblea celebrada después de la dictación de la ley 14 del 26 de mayo de 1993, dicho sindicato aprobó solicitar (sic) al ente regulador que expidiese a favor de mi representados los correspondientes CUPOS DE TAXIS por haber reunido los requisitos correspondientes y ocupar los primeros cuatro lugares.
>
> **SEGUNDO:** En base a lo anterior el ente regulador expidió los correspondientes cupos de taxis cuyas propiedades sociales han ostentado hasta el presente.
>
> **TERCERO:** La referida aprobación de lista (sic) de lista de aspirantes a cupos de taxis hecha por el referido sindicato en la mencionada Asamblea General, cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 33 de la ley número 14 del transporte, y con las normas estatutarias de dicho sindicato y con las normas del

Código de Trabajo.

CUARTO: En el listado aprobado por la referida asamblea General, señor DIOMEDES CASTILLO ocupó el sexto lugar por no reunir las condiciones correspondientes; pero no impugnó dicha decisión ante ese organismo sino que se sintió afectado y acudió a los Tribunales Civiles a impugnar dicha decisión cuando en vez de ello debió acudir a los Tribunales de Trabajo o al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social que son los Tribunales Naturales y Especializados respecto de asociaciones Sindicales, con lo cual rompió con el orden natural de dicho sindicato.

QUINTO: El Juzgado Segundo del Circuito Civil de Veraguas tramitó dicha demanda y negó la pretensión del señor DIOMEDES CASTILLO.

SEXTO: El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial revocó el fallo del referido Juzgado Segundo mediante el auto S/N del 4 de enero de 1995 y mediante el auto S/N del 19 de marzo de 1996 que lo ratificó, a través de los cuales anuló los cupos de taxis otorgados a favor de los amparistas.

SÉPTIMO: Mediante dichas resoluciones, el Tribunal Superior dictó órdenes de hacer cancelatorias que han desposeído a los amparistas del derecho de propiedad que poseían sobre los cupos de taxis.

OCTAVO: A dicho proceso civil no fueron citados los amparistas, porque se aplicó el proceso civil, en vez del proceso laboral, que era el competente, a pesar de que ellos eran litisconsortes necesarios y que debieron ser llamados de oficio por el juez laboral 592 del Código de Trabajo.

NOVENO: El proceso sumario civil de donde surgieron las órdenes impugnadas está terminado sin posibilidad alguna de medios de defensa para los amparistas **quienes fueron condenados en un proceso sin ser oídos por haberse presentado la demanda ante un juez de otra jurisdicción que no era la competente.**

DÉCIMO: Mediante un absurdo razonamiento el tribunal superior referido desconoció la validez de los cupos otorgados a nuestros representados, pues con un sofisma afirmó que la escogencia hecha por la decisión de la referida asamblea de la SINCOTIVE no era una decisión de la asamblea, porque un comité ejecutivo del SINCOTEVE había examinado las credenciales de los postulantes, perdiendo de vista el Tribunal Superior que la decidido (sic) por la Asamblea General es lo que tiene valor jurídico y no el cumplimiento de rituales imposibles de cumplir que la ley no exige como pretende hacer ver dicho tribunal superior al desconocer la ley laboral.

UNDÉCIMO: El Código de Trabajo tiene principios sociales que fueron desconocidos por los jueces civiles que dictaron las órdenes impugnadas.

DUODÉCIMO: Las órdenes impugnadas vilaron (sic) flagrantemente las sagradas garantías constitucionales del debido proceso, seguridad y efectivad (sic) de los derechos y la del derecho de propiedad reconidos (sic) por nuestra constitución política.

DECIMOTERCERO: Con las órdenes impugnadas se le están causando graves daños a humildes panameños del timón que hoy ven arruinado su trabajo por el capricho de autoridades civiles que usurparon la competencia de los jueces naturales de la esfera laboral que luego de dos años de juicio dictaron fallos tan absurdos como arbitrarios, lo cual no habrían hecho los jueces laborales o autoridades de trabajo ya que se habrían respetado principios de derecho laboral de carácter social que las normas civiles no contienen".

Los derechos fundamentales que se consideran merecedores de esta acción constitucional de tutela de los derechos fundamentales, en estimación del recurrente, son los derechos fundamentales contenidos en los artículos 17, 32 y 44 de la Constitución Política.

La Corte no entra a analizar la infracción al artículo 17 de la Constitución Política, por entender que, con arreglo a constante jurisprudencia de la Corte en esta materia, el contenido de dicho artículo, aún a pesar de encontrarse en el Título III, constituye una norma programática que no otorga derecho subjetivo alguno susceptible de ser desconocido por una autoridad pública, y que sólo puede ser vulnerada en asocio de otras normas constitucionales que otorgan, con el rango de disposición fundamental, derechos subjetivos de naturaleza constitucional. La Corte, siendo que se ha pronunciado en tantas ocasiones sobre el alcance del artículo 17 de la Constitución Política en el sentido apuntado, considera innecesario reiterar su doctrina sobre el referido artículo.

El segundo derecho fundamental que se considera infringido por el recurrente, es el artículo 32 de la Constitución Política, que es el precepto constitucional que incorpora a la Constitución, el denominado principio del debido proceso, de rancio abolengo en todas las constituciones de los Estados democráticos de derecho. Dicha disposición ha sido objeto de abundantes pronunciamientos, que han logrado llenar de contenido dicho principio, y, en general, ha hecho suyo el concepto que, sobre tan importante norma fundamental indispensable para la tutela de los derechos fundamentales, ha externado el doctor ARTURO HOYOS, que se transcribe:

> "De esta forma, nosotros entendemos que la garantía constitucional del debido proceso es "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos"".
>
> (El Debido Proceso. ARTURO HOYOS, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá (Colombia), 1996. Pág. 54)

El recurrente, al exponer el concepto del debido proceso, no se refiere, de manera clara, en la forma en que tal derecho fundamental ha podido ser vulnerado por los actos jurisdiccionales impugnados, salvo el de señalar que los recurrentes no fueron llamados al proceso, a pesar de que la decisión afectó sus derechos, en la especie, el "cupo" para brindar el servicio público de transporte de taxis, pero sí cuestiona la competencia del tribunal en la materia. Conceptúa el recurrente que el Tribunal Superior carece de competencia, ya que ella le corresponde a las autoridades jurisdiccionales especiales de trabajo. Es evidente que, mas que una falta de competencia, constituye mas bien falta de jurisdicción, que, de existir, obviamente constituye una vulneración del principio del debido proceso. La polémica, en este punto, está contenida en los hechos 3° y 4° de los fundamentos de hecho del recurso, y reiterado también en el concepto a la infracción del artículo 32, en la forma que se transcribe:

> "La garantía antes transcrita fue violada flagrantemente por las órdenes impugnadas, porque fueron dictadas en un procedimiento viciado, ya que no se citó a comparecer como partes a los dueños de los cupos de taxis que se pretendían cancelar mediante la anulación de la desición (sic) adoptada por la asamblea de sindicato SINCOTIVE.
>
> El debido proceso que consagra este artículo también fue violado

> poruqe (sic) los tribunales civiles forzaron el texto del artículo 1335 ordinal 13 del Código Judicial para conocer de la impugnación de una decisión por un sindicato regido por el Código de Trabajo, cuando ello correspondía a los Tribunales Laborales o a las autoridades de trabajo por tratarse de una asociación sindical de trabajadores del transporte. Mediante esa extraña usurpación de competencia los tribunales civiles violaron todos los principios sociales contenidos en el Código de Trabajo el cual le da un tratamiento especial a las Asociaciones sindicales a las cuales les brinda su reconocimiento".

Este aspecto no ha sido extraño al proceso dentro del cual se produjeron supuestamente las violaciones constitucionales, toda vez que el recurrente, propuso incidente de falta de competencia (sic), visible a foja 162 del expediente contentivo del proceso sumario, incidente que fue decidido por el Juez 2° del Circuito de Veragüas, negando las pretensiones de falta de competencia, recurso que fue apelado por el recurrente, y que, no obstante, no fue sustentado por el recurrente, por lo que el Tribunal de la causa, y esta Corte, se han visto privados de conocer las razones por las cuales se consideraba que el Tribunal carecía de competencia para conocer esta causa. En efecto: se comprueba que el recurrente, en el acto de la notificación, apeló del citado auto, y, posteriormente, antes de que se realizase trámite alguno, desistió del recurso de apelación (foja 184) desistimiento que fue admitido por el tribunal a-quo.

La Corte observa que el artículo 597 del Código Judicial contempla el llamamiento de terceros al proceso, pero lo supedita a que ese tercero tenga derecho legal o contractual a exigir de un tercero la indemnización de perjuicios que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia, supuestos de hecho que no se enmarcan dentro de las pretensiones del proceso.

No obstante, los actos jurisdiccionales acusados no se limitaron a anular la decisión corporativa adoptada, con respecto a los que tenían derecho, sino que, además, anularon los "cupos" que se habían expedido a favor de los recurrentes, con lo que, además, el Tribunal Superior incursionó en materia que no es objeto de pronunciamiento jurisdiccional, sino que cae en la rama administrativa, que regula en forma adecuada, tanto la concesión de cupos, como su cancelación, y supedita esta ultima decisión, que le corresponde al ente regulador, es decir, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia. La Ley 14, de 26 de mayo de 1993, en efecto, en su artículo 29, tras tipificar las causales de cancelación de los cupos o certificados de operación, señala lo que a continuación se transcribe:

> "Artículo 29. La rescisión de cualquier contrato de concesión de línea, ruta o piquera por cualquiera de las causales establecidas en el artículo anterior, se hará de acuerdo con los procedimientos administrativos, legales y reglamentarios."

Es evidente, por lo tanto, que la medida de cancelación de la facultad, otorgada por el Estado, de prestar el servicio público de transporte, está sujeta a los procedimientos administrativos que se establezcan por las autoridades competentes sobre la materia, los cuales deben incorporar a tales procedimientos los principios de la garantía constitucional invocada por el recurrente. (Véase "El debido proceso", del Dr. Arturo Hoyos, pgs. 94 y 95).

En consecuencia, que si la cancelación de los cupos, lo mismo que su otorgamiento, constituyen materias cuya competencia le corresponde a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, que ha de ejercitar con arreglo a los procedimientos establecidos al efecto, los cuales deben contener los principios del debido proceso matizados por la naturaleza de la función administrativa que el ordenamiento jurídico le atribuye al referido ente regulador, que la incursión del Tribunal Superior en esta materia, constituye una violación al artículo 32, que instituye y tutela de las garantías constitucionales por parte de los entes administrativos, integrados en el haz de derechos de naturaleza procedimental, que integran la garantía constitucional del debido proceso.

Admitida la vulneración del artículo 32, constitucional, resulta innecesaria la confrontación de los actos acusados con la garantía fundamental de la propiedad privada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado ARCELIO MOJICA MOJICA, y, REVOCA los autos S/N de 4 de enero de 1995 y de 19 de marzo de 1996, dictados por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERMES ALVARADO ORTEGA CONTRA EL AUTO VARIO N° 55 DE 6 DE MARZO DE 1996 DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Hermes Alvarado Ortega, actuando en su propio nombre, contra el Auto N° 55 de 6 de marzo de 1996, proferido por el Juez Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por considerar que vulnera los artículos 17, 31, 32 y 40 de la Constitución Nacional.

El recurso, que fuera sustentado oportunamente, se dirige contra sentencia de 28 de mayo de 1996, mediante la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia denegó la presente iniciativa constitucional.

BREVES ANTECEDENTES

En el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, se sigue proceso contra Gumercindo Quintero, quien se encuentra sindicado por delito contra la administración pública, y se hace representar por el licenciado Alvarado Ortega. En el mencionado negocio el tribunal de la causa fijó fecha de audiencia para el 6 de marzo del año en curso, mediante auto N° 412 de 25 de octubre de 1995, resolución que se intentó notificar al amparista en varias ocasiones. Llegado el día señalado para la celebración de la audiencia, el licenciado Alvarado Ortega no se presentó ante el tribunal, lo que motivó que, por medio del Auto N° 55 de 6 de marzo de 1996, le fuera impuesta multa de mil Balboas, con fundamento en el numeral 15 del artículo 199 del Código Judicial, decisión que fue mantenida por el juzgador mediante auto N° 104 de 25 de abril de 1996.

DECISIÓN DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR

En sentencia de 28 de mayo de 1996 sostiene el a-quo que la orden impartida por el juzgador en nada guarda relación con los señalamientos que formula el demandante en cuanto a las disposiciones consideradas infringidas, que los razonamientos vertidos por el juzgador "no dicen razón ni con procedimiento penal, ni con delito alguno como deja ver el amparista" ni tampoco "resulta producto de la no notificación al amparista de la resolución que señalaba la

fecha de audiencia" (f. 67), sino que la sanción impuesta a Alvarado Ortega fue proferida en uso de las facultades otorgadas a los magistrados y jueces "en aras de lograr los principios generales rectores del proceso" (f. 68).

Agrega que no ha sido violado el artículo 32 de la Constitución, "pues la multa fue impuesta por autoridad competente y conforme a los trámites legales pertinentes, tal como claramente se desprende de las disposiciones que sirvieron de fundamento al juez demandado para tomar la decisión" (f. 68). Concluye el tribunal de amparo de primera instancia manifestando la inexistencia de vulneración de los derechos y garantías que consagra la Ley Superior.

DECISIÓN DE LA CORTE

La Corte no comparte la decisión del a-quo. El licenciado Hermes Alvarado no fue notificado del Auto N° 412 de 25 de octubre de 1995 (fs. 1401-1404, sumarias), por medio del cual se fijó como fecha de audiencia el 6 de marzo del año que decurre, tal como se observa claramente en el sello de notificación respectivo, visible al reverso del folio 1404 de las sumarias. Lo anterior es aceptado por el propio funcionario cuando manifiesta en la resolución atacada que "pese a las diligencias realizadas tal como consta a fojas 1517, 1518, 1519 y 1520, fue imposible notificar tanto al Licenciado Hermes Alvarado así como a su defendido Gumercindo Quintero" (f. 1530 del cuaderno de antecedentes, subraya la Corte).

En tales circunstancias, dentro de nuestro sistema de garantías procesales no puede tenerse como probado que la inasistencia del abogado al referido acto responde a conducta reprochable por falta de lealtad procesal, y no a la falta de notificación personal.

El artículo 2304 del Código Judicial dispone la forma como se notifica la resolución que fija la fecha de la audiencia, en los siguientes términos:

> "Durante el plenario, al imputado y a su defensor se les notificará **personalmente** las siguientes resoluciones:
> ...
> 2. La providencia que señala el día para la celebración de la audiencia; y,
> 3 ...
> Para los efectos de la notificación al defensor, la resolución permanecerá en secretaría por tres días y, transcurrido ese término, se le enviará copia de la resolución por correo certificado a la oficina señalada para recibir notificaciones, de lo cual se dejará constancia en el expediente. La notificación se tendrá por legalmente surtida tres días después de enviada la copia por correo".

Similar exigencia establece el artículo 2306 de la misma excerta.

A falta de la notificación personal, tampoco consta en el proceso que se hubiere hecho por correo certificado, como lo autoriza la ley, contrariamente a la afirmación del juzgador en el sentido de que "se mandó también una documentación vía correo" (f. 1526, antecedentes), como tampoco consta que se hubiere procedido a la fijación de edicto de puerta, en los términos del artículo 995 del Código Judicial.

La notificación, como **acto de comunicación** cuyo cumplimiento atañe al tribunal (artículos 183, numeral 5, 199, numeral 1 y 460 del Código Judicial), reviste suma importancia dentro del proceso, toda vez que le imprime publicidad a los actos del proceso, brinda a las partes la oportunidad de impugnar los actos jurisdiccionales y sirve de punto de referencia para el cómputo de los términos judiciales. La ausencia del trámite de notificación personal, cuando la ley así lo requiere, constituye, como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este máximo tribunal de amparo, una franca vulneración del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 32 del Estatuto Fundamental.

Por otra parte, como comentario tangencial dentro de la alzada, no comparte la Corte afirmación del a-quo en el sentido de que el artículo 40 de la Carta "por ser de carácter programático no es susceptible de ser atendida en demandas de amparos de garantías constitucionales" (f. 68). Por el contrario, el mencionado precepto consagra en forma diáfana la llamada libertad de profesión u oficio a que tiene derecho todo individuo, de donde resulta su carácter normativo y, por ende, justiciable.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de amparo apelada, de 28 de mayo de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar, CONCEDE el amparo demandado por el licenciado Hermes Alvarado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS HERRERA MORAN, EN REPRESENTACIÓN DE JULISSA AIMEETT BROUWER CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1966, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán, interpuso acción de amparo de garantías constitucionales en nombre y representación de **JULISSA AIMEETT BROUWER**, Administradora-Depositaria de la Caja de Seguro Social asignada a la empresa **MANDATARIO SECURITY, S. A.** -en virtud de secuestro decretado por el Juzgado Ejecutor de la mencionada entidad pública-, contra la orden de hacer contenida en la Resolución del 8 de abril de 1996, dictada por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en la cual se le notificó a la empresa en mención y se le corrió traslado por el término de cinco (5) días del pliego de peticiones que en su contra interpuso el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD.**

Cuentan los hechos de la acción que nos ocupa, que el 8 de abril del año que decurre, el sindicato en comento presentó un pliego de peticiones ante la Dirección General de Trabajo contra **MANDATARIO SECURITY, S. A.**, en demanda de beneficios económicos, sociales y jurídicos.

La autoridad demandada mediante la resolución impugnada, ordenó notificar y dar traslado por el término de cinco (5) días, así como hacerle llegar el pliego de peticiones ya mencionado.

Previamente, el 3 de abril del presente año, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social secuestró la administración y bienes de la empresa citada, designando como administradora y depositaria de dicha medida precautoria a la poderdante de la presente acción, en virtud de una deudas que asciende -según el accionante- a la suma de veintidós mil setecientos cincuenta y un balboas B/.22,751.32 con treinta y dos centésimos, más los intereses legales.

La orden de hacer en controversia viola -a juicio del actor- el principio

del "debido proceso legal" en perjuicio de la Caja de Seguro Social, quien mantiene el secuestro contra la empresa cuyos trabajadores le plantean el pliego de peticiones, ya que debió ser tomada en cuenta como parte legítimamente interesada en dicho proceso colectivo contra dicha empresa.

Considera el amparista que se infringió el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece el precitado principio, ya que la Dirección General de Trabajo violó el debido proceso porque "omitió notificar la misma a la Caja de Seguro Social, en su condición de secuestre de la empresa Mandatario Security, S. A. ...", de conformidad con lo estatuido por los artículos 435, 557, 582, 591 y 592 del Código de Trabajo.

Por otro lado, consideró el accionante otra circunstancia violatoria de la misma excerta constitucional, y es que conforme a la Ley N° 8 de 1981, la empresa demandada no alcanza los dos (2) años de estar operando, razón por la que no puede en opinión del Licdo. Herrera Morán celebrar contratación colectiva con dicho sindicato.

Vertidos los elementos más sobresalientes del negocio, se dispone esta Colegiatura a emitir su decisión, no sin antes emitir las siguientes consideraciones.

Observa el Pleno que el objetivo del amparista es anular la resolución del 8 de abril del año que decurre, para que mediante una nueva decisión de dicho trámite, se proceda a incluir a la administradora-depositaria de la Caja de Seguro Social, y se le de traslado y copia del pliego de peticiones.

Considera el Licdo. Herrera que la resolución del 8 de abril de 1996 infringe el artículo 32 constitucional, que dice:

> "ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y **conforme a los trámites legales**, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria." (Negrilla de la Corte).

Es decir, que al pretermitírsele a la Sra. **JULISSA AIMEETT BROUWER** la notificación y traslado del pliego de peticiones del **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIAS DE SEGURIDAD**, se le perjudica al no poder intervenir en dicha negociación, como depositaria-administradora de la Caja de Seguro Social en dicha empresa.

Sin necesidad de entrar a analizar las normas del Código de Trabajo que considera el amparista que obligan a la Dirección General de Trabajo a notificar y correrle traslado a la depositaria-administradora -por parte del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social- **JULISSA AIMEETT BROUWER**, conceptúa que no es viable resolver la presente acción, toda vez que el artículo 2606 del Código Judicial señala que la acción que nos ocupa se interpondrá contra todo acto que vulnere los derechos y garantías consagradas en la Carta Magna, "que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer", cuando por la inminencia del daño requieren de una revocación inmediata.

Advierte esta Colegiatura que la resolución del 8 de abril del presente año, hace entrega del pliego de peticiones a **MANDATARIO SECURITY, S. A.**, y se le corre traslado por cinco (5) días para contestarlo; por consiguiente, no se observa ninguna orden de hacer o no hacer en dicha actuación, razón por la que no se satisface el requerimiento de la norma señalada, para decidir la acción.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales promovido por el Licdo. Carlos Herrera Morán en representación de JULISSA AIMEETT BROUWER contra la orden de hacer contenida en la resolución del 8 de abril de 1996, dictada por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.)ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE MORENO & FÁBREGA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1575 DEL 21 DE JUNIO DE 1995, DICTADO POR EL SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Fábrega, actuando en nombre y representación de la sociedad **LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A.**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Sentencia del 31 de enero de 1996, mediante la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, resolvió la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la recurrente contra el Auto N° 1575 del 21 de junio de 1995, dictado por el Juez Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El apelante impugnó la Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior, fechada el 31 de enero de 1996, por estimar errónea la interpretación que hizo este Tribunal en el sentido de que el artículo 1764 del Código Judicial, que fue advertido de inconstitucional ante el Juez Segundo de Circuito de lo Civil, había sido aplicado en el Auto N° 1575 del 21 de junio de 1995, objeto de la acción de amparo. A juicio del recurrente, tal apreciación no es correcta, ya que contra el Auto in comento se interpuso un recurso de reconsideración y, por este motivo, no estaba en firme.

El recurrente considera que el hecho de "separar al liquidador de la administración de las propiedades de la sociedad en liquidación judicial sí afecta los intereses de terceros en la liquidación pues de los frutos obtenidos del arrendamiento de dicho locales se veneficiarian (sic) los acreedores comparecientes a la masa al momento de efectual (sic) la liquidación de los mismos todo esto como consecuencia del pago efectuado y alegado por la parte ejecutada en este proceso" (fs. 41-46).

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La parte medular de la sentencia objeto del recurso de apelación expresa lo siguiente:

> "Para que la remisión a la Corte Suprema de Justicia, se produzca de manera rápida, la advertencia debe estar revestida de ciertos requisitos de la esencia del nivel constitucional a la que va a ser sometida.
> ...
> En el presente caso, la advertencia fue formulada por el amparista, luego del pronunciamiento de rigor por parte del tribunal, siendo que la disposición que dice le afecta ya fue aplicada por el Juez acusado. De donde emerge a todas luces la improcedencia de la advertencia, en los términos formulados, por lo que era contrario a derecho darle curso a la advertencia.
>
> En cuanto haberle concedido el depósito y la administración de los

bienes de propiedad de la demandada al ejecutante por razón del embargo, tal medida está permitida como lo preceptúa la norma aplicada por el juzgador acusado; además, tales bienes están excluidos de la liquidación forzosa, toda vez que fueron embargados desde el 8 de noviembre de 1993; y por otra parte la exigencia del pago del crédito por separado de la liquidación forzosa está permitida en los términos del artículo 1873 del Código Judicial como bien lo acepta la amparista." (F. 38).

III. DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

En la presente acción de amparo de garantías constitucionales se discuten dos aspectos fundamentales. El primero de ellos guarda relación con la supuesta infracción de los artículos 32 y 203, numeral 1°, de la Constitución Política, por parte del Juez acusado quien, de acuerdo con la amparista, no dio el trámite respectivo a la advertencia de inconstitucionalidad formulada en el mismo escrito en que se pidió la reconsideración del Auto N° 1575 del 21 de junio de 1995, objeto de la presente acción de amparo.

A juicio del Pleno de la Corte la apreciación de la amparista es errónea, pues, de acuerdo con las constancias procesales, el Auto N° 1575 fue dictado el **21 de junio de 1995**, mientras que la referida advertencia se presentó el **30 de junio** del mismo año, es decir, con posterioridad a la fecha en que se dictó la resolución que en el presente caso se demanda, por lo cual, mal ha podido infringir las normas constitucionales que se citan como violadas. Por tanto, debe desestimarse el cargo de violación del debido proceso que se hace a la resolución impugnada.

El segundo aspecto sometido a la consideración del Pleno de la Corte en el presente caso, se refiere a que el Juez demandado, por medio de la resolución impugnada, concedió la administración y depósito de las Fincas N° 17,777, inscrita al folio 312 y 518, Tomo 439, Asiento 8, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá y N° 2353, inscrita al Tomo 56, Folio 446, Asiento 2, Sección de Propiedad Horizontal de la provincia de Panamá, ambas de propiedad de ECSSA Holding Company, S. A., garante hipotecaria de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., a la ejecutante Bancafé-Panamá, S. A., dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario que el Banco Cafetero (Panamá), S. A. le sigue a la amparista y ECSSA Holding Company, S. A. En opinión de la apoderada judicial de la amparista, mediante dicha orden de hacer se privó al liquidador judicial de la empresa LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. de la administración de las fincas que venía ejerciendo, con lo cual también se violó el debido proceso, en perjuicio de los intereses de terceros en la liquidación.

Estima el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que le asiste razón a la amparista cuando afirma que privando al liquidador de LARSA de la administración de las aludidas Fincas se violó el debido proceso, tal como veremos a continuación. En efecto, de acuerdo con las constancias de autos, mediante Resolución N° 4 del 6 de abril de 1990, la Comisión Nacional de Reaseguros resolvió intervenir los negocios de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., nombrándose al señor Guido Xavier Ballivian en el cargo de interventor de dicha sociedad.

Posteriormente, dicha Comisión decretó la reorganización de la referida empresa a través de la Resolución CNR del 6 de septiembre de 1991, dándose por terminado este período mediante la Resolución N° CNR-17 del 7 de julio de 1993, procediendo luego a solicitar a la autoridad judicial la liquidación de la sociedad LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., la cual fue decretada mediante Auto N° 848 del 28 de abril de 1994, en el que se nombró al señor Edgardo Lasso Valdés como liquidador (fs. 89-96).

Asimismo, consta en autos que el Banco Cafetero (Panamá), S. A. instauró contra LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. proceso ejecutivo hipotecario en virtud de demanda presentada ante el juzgado de Circuito de turno, el día 18 de octubre de 1993. Una vez repartido el negocio al Juzgado Segundo de Circuito Civil, del Primer Distrito Judicial, se libró mandamiento de pago contra la

mencionada empresa reaseguradora y contra Ecssa Holding Company, S. A., mediante Auto Ejecutivo fechado el ocho de noviembre de 1993 y a favor del Banco Cafetero (Panamá), S. A., por la suma de B/.2,153,576.48 y se decretó también embargo sobre las Fincas N° 17,777, inscrita al folio 312 y 518 del Tomo 439, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá y N° 2353, inscrita al Tomo 56, folio 446, asiento 2, de la Sección de Propiedad Horizontal de la Provincia de Panamá, de propiedad de la garante hipotecaria ECSSA Holding Company, S. A.

Como resultado del embargo previamente decretado y en virtud de la petición hecha por la firma apoderada del Banco Cafetero (Panamá), S. A., el Juzgado Segundo antes mencionado, dictó el Auto N° 1575, del 21 de junio de 1995, a través del cual concedió el depósito y la administración de la aludidas Fincas, nombrando como administrador de las mismas a la señora Elda Sanson. Esta decisión es la orden de hacer impugnada en el presente proceso.

De los hechos expuestos se desprende, que con la expedición del Auto N° 1575 del 21 de junio de 1995 se violó el debido proceso porque el depósito y administración de las fincas aludidas se concedió como consecuencia de un embargo decretado el 8 de noviembre de 1993, es decir, mientras que LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. estaba legalmente intervenida por razón de que su grave estado de urgencia financiera no había cesado, y la Comisión Nacional de Reaseguros estaba encargada de la administración y custodia de sus bienes mientras se resolvía judicialmente su solicitud de liquidación forzosa o de declaratoria de quiebra de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A.

A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, este proceder del Juzgado Segundo de Circuito Civil violó el artículo 52 de la Ley N° 56 de 1984, que prohíbe la tramitación de cualesquiera acciones judiciales que se sigan contra la empresa que haya sido **intervenida** o se encuentre en período de reorganización. El precepto aludido es del contenido siguiente:

> "Artículo 52. Durante la intervención o reorganización, según el caso, no procederá solicitud alguna de quiebra o de liquidación forzosa de la empresa y se suspenderá la prescripción de los créditos y deudas de la misma, así como la tramitación de cualesquiera acciones en su contra o de ejecución de sus bienes, con respuesta a obligaciones adquiridas con anterioridad al plan de reorganización.
>
> Tampoco podrá pagarse ninguna deuda de la empresa intervenida, creada antes de la intervención, sin autorización de la Comisión Nacional de Reaseguros."

El artículo 53 de la misma Ley también establece a este respecto, que mientras dure la **intervención**, ningún bien de la empresa intervenida podrá ser secuestrado o embargado. Considera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que a pesar de que el Auto N° 1575 del 21 de junio de 1995 impugnado se dictó después de decretada la liquidación forzosa de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (el 28 de abril de 1994), ello en modo alguno descarta la aludida infracción del debido proceso, pues, como se indicó anteriormente, el depósito y la administración de los bienes de esta empresa se otorgó al Banco Cafetero (Panamá), S. A., con fundamento en un auto expedido durante el período de intervención, en el que, por ministerio de la Ley, estaba suspendida la tramitación de toda clase de acciones en contra de aquella empresa reaseguradora.

Por otra parte, está la circunstancia de que al dictarse el Auto Ejecutivo, que decretó el embargo y remate de aquellas fincas, fechado el 8 de noviembre de 1993, se procedió a emplazar por edicto al señor Laurencio Jaén Ocaña, representante legal de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. y de Ecssa Holding Company, S. A., cuando, para esa fecha, **aquella empresa aún estaba intervenida por la Comisión Nacional de Reaseguros**, mientras se decretaba judicialmente la liquidación forzosa, y el representante legal de la empresa no tenía su representación. Dicho Auto fue notificado posteriormente al Defensor de Ausente de la sociedad en referencia el día 29 de diciembre de 1993.

Cabe señalar, que aún cuando todas estas circunstancias fueron debidamente advertidas dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario seguido por el Banco Cafetero (Panamá), S. A. a LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., por la apoderada judicial del liquidador de ésta última mediante memorial en el que se solicitó la nulidad de todo lo actuado, (fs. 139-140), el Juzgado Segundo de Circuito Civil no acogió esta petición de nulidad, fundamentándose en el artículo 1768 del Código Judicial, que establece que en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámite no podrán proponerse incidentes ni presentar otra excepción que la de pago o prescripción. A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto que el artículo en cita prohíbe la presentación de incidentes y de excepciones distintas de la prescripción o del pago, también lo es, el hecho de que en el memorial presentado por la apoderada judicial del liquidador de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. se alegaban vicios de nulidad insubsanables dirigidos a enervar el proceso ejecutivo hipotecario por haberse promovido éste contra la expresa prohibición de los artículos 52 y 53 de la Ley N° 56 de 1984 y por haberse notificado el auto ejecutivo a quien legalmente no ostentaba la representación de LARSA, porque esta empresa estaba intervenida, situaciones que, dada su naturaleza y gravedad ameritaban el saneamiento del proceso.

Considera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que en el presente caso, la interpretación del artículo 1768 del Código Judicial no puede hacerse con absoluta abstracción de los artículos 52 y 53 de la Ley 56 de 1984, pues, precisamente, lo que pretenden estas dos normas "**de orden público**" es evitar que durante el período de intervención o reorganización de una empresa reaseguradora se promuevan o sustancien acciones de cualquier clase en su contra, **incluyendo las acciones ejecutivas hipotecarias como la instaurada en el presente caso**.

El Pleno de la Corte considera necesario recordar, que los preceptos de la Ley N° 56 de 1984, sobre empresas reaseguradoras, además de ser disposiciones especiales, tienen el carácter de normas de orden público, por lo que las prohibiciones consagradas en los artículos en cita, prevalecen sobre las disposiciones que se utilizaron como fundamento para dictar auto ejecutivo contra LARSA y decretar el embargo y remate de las Fincas 17,777 y 2353 ya mencionadas, de propiedad de su garante hipotecaria ECSSA Holding Company, S. A.

Sobre la garantía constitucional del debido proceso debemos recordar, que la misma está integrada por una serie de elementos e intereses que la misma protege, cuyo observancia permite a las partes la efectiva defensa de sus derechos en el juicio. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte, esta garantía consiste en el derecho que tienen las partes de "ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (HOYOS, Arturo. "La garantía constitucional del debido proceso legal", en Estudios de Derecho Constitucional Panameño. Compilación del Dr. Jorge Fábrega. Editora Jurídica Panameña. Panamá. 1987. pág. 388).

En conclusión, el Pleno de la Corte considera que en virtud de los dispuesto en los tantas veces mencionados artículos 52 y 53 de la Ley N° 56 de 1984, no era posible tramitar el proceso ejecutivo hipotecario que el Banco Cafetero promovió contra LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., y su garante hipotecaria ECSSA Holding Company, S. A. en forma simultánea con la intervención de que era objeto esta empresa, debiendo los acreedores hipotecarios esperar hasta que se decretara su liquidación forzosa o su quiebra, según el caso y, con fundamento en el artículo 1873 del Código Judicial, exigir el pago de su derecho por separado o presentarlo en el respectivo concurso.

Por las razones anotadas, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la Sentencia del 31 de enero de 1996, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial; CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense Moreno y Fábrega en nombre y

representación de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A.; y en consecuencia, REVOCA el Auto N° 1575 de 21 de junio de 1995, dictado por el Juez Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese y Remítase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H.CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

No comparto el criterio de mayoría. Paso a enumerar los hechos de que se trata, los cuales definen el problema en el significado que le es propio:

1. En este recurso de amparo el Pleno conoce de apelación contra sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de enero de 1996.

2. El amparo fue interpuesto por Latino Americana de Reaseguros, S. A. (LARSA) contra el Auto del Juzgado Segundo del Primer Circuito de Panamá, N° 1575 de 21 de junio de 1995, dictado en el juicio ejecutivo hipotecario propuesto por Banco Cafetero (Panamá), S. A. vs. LARSA y ECSSA HOLDING COMPANY, S. A.

3. El auto 1575 se limita a ordenar el depósito y dar la administración de las Fincas de cuya venta trata en el proceso ejecutivo hipotecario, al ejecutante.

4. El auto ejecutivo, ordenando el pago y la venta en pública subasta había sido dictado con mucha anterioridad, el 8 de noviembre de 1993 (f. 54).

5. Las Fincas habían sido rematadas y se habían adjudicado provisionalmente al ejecutante, el 28 de septiembre de 1994 (f. 127).

6. El recurso de amparo de LARSA, contra el auto 1575 se refiere sólo a dos puntos: a) que había advertido la inconstitucionalidad de una disposición legal sin que la advertencia hubiera sido remitida a la Corte; y b) que el depósito de las Fincas no procede en derecho.

7. En cuanto al primer punto, hay acuerdo en desecharlo porque la advertencia de inconstitucionalidad se presentó después de dictado el auto 1575; por tanto, la actuación del Tribunal respecto a la advertencia de inconstitucionalidad, no puede ser vicio del auto 1575.

8. En cuanto a que jurídicamente no procede el depósito de las Fincas, el beneficiario del amparo invoca las siguientes razones:

a) Que el depósito se concede a pesar de estar pendiente una excepción de pago de LARSA.

b) Que priva de la propiedad de las fincas "al propietario del inmueble".

c) Que LARSA queda en estado de indefensión porque "de declararse probada la excepción de pago, no podría accionar contra el ejecutante por daños y perjuicios, porque se encuentra en liquidación judicial.

d) Que hay recurso de reconsideración; pero no obstante se quiere que los frutos de las Fincas los reciba el ejecutante.

e) Que el depósito y la administración, en concepto de anticresis, no se podía constituir a favor del ejecutante porque ya se habían rematado las Fincas.

Repito, estos puntos detallados revelan en qué consiste el recurso de amparo que el Pleno debe decidir en apelación.

La cuestión se reduce a determinar si procede o no el depósito de las Fincas hipotecadas, dadas en anticresis, embargadas, rematadas y adjudicadas provisionalmente al ejecutante.

Ante todo, debe indicarse que lo planteado es ajeno completamente a cuestiones de garantías constitucionales, propias de los amparos. Los amparos de garantías constitucionales no constituyen una instancia más. Razón suficiente para declararlo no viable, a juicio mío.

LARSA, por lo que consta en el cuaderno principal del juicio ejecutivo hipotecario, compareció y viene actuando en el proceso ejecutivo hipotecario desde antes de que se dictara el auto 1575; es decir, se le ha oído y ha tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.

En un recurso de amparo contra el auto 1575, dictado el 21 de junio de 1995, invocando las razones antes expuestas, la Sentencia virtualmente, en la parte motiva, declara la nulidad del auto ejecutivo, contentivo de las órdenes de pago y de venta en pública subasta de las Fincas; auto contra el cual no se dirige el amparo, dictado y notificado en noviembre de 1993.

Las razones que invoca la Sentencia son:

1. Que cuando se dictó el auto ejecutivo LARSA, empresa de reaseguros, estaba legalmente intervenida por la Comisión Nacional de Reaseguros.

2. Que la Comisión estaba encargada de la administración y custodia de sus bienes mientras se resolvía judicialmente su solicitud de liquidación forzosa o de declaratoria de quiebra de dicha compañía (Pág. 5).

3. Que el auto ejecutivo viola el artículo 52 de la Ley 56 de 1984, que prohíbe tramitar cualquiera acción contra empresas intervenidas o en reorganización, o ejecución de sus bienes, con respecto a obligaciones anteriores al plan de reorganización (Pág. 5).

4. Que también viola el artículo 53 ibídem, que se refiere a que mientras dure la intervención, ningún bien de la empresa podrá ser secuestrado o embargado (Pág. 6).

5. Considera la Sentencia que el auto ejecutivo se dictó durante el período de intervención. (Acoto que no obstante, sin que signifique que se debe discutir el punto en esta oportunidad, puede observarse (f. 91) que la Comisión Nacional de Reaseguros dictó la Resolución CNR-17, de 7 de julio de 1993, que da por terminada la reorganización de LARSA y dispone solicitar la declaratoria de quiebra o liquidación. La demanda ejecutiva hipotecaria se interpuso el 18 de octubre de 1993. Habría que ponderar cual era el verdadero estado de LARSA en el momento en que se dictó el auto ejecutivo. Además, tomar en consideración que ello se hace en relación con un crédito hipotecario. Por último, que las Fincas no son de LARSA, sino de ECSSA HOLDING COMPANY, S. A. (f. 25 vta.). Pero el recurso de amparo no trata de estas cosas).

Quisiera señalar igualmente que las consideraciones de la Sentencia no son cuestiones de garantías constitucionales. Ocurre lo mismo que con la demanda de amparo de garantías constitucionales, cuyas consideraciones son también ajenas a lo que se debate en un amparo, aunque distintas a la de la Sentencia.

Insisto en que las consideraciones de la Sentencia son ajenas a lo planteado en el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto.

De esa manera se pone de relieve que carecemos no sólo de competencia para hacerlo, porque decidimos sobre lo que no se debate; sino que desbordamos la jurisdicción constitucional para decidir cuestiones propias de la jurisdicción civil ordinaria (mercantil), no planteadas por las partes, como ocurre cuando en la Sentencia se expresa que "no era posible tramitar el proceso ejecutivo

hipotecario que el Banco Cafetero promovió contra Latinoamericana de Reaseguros, S. A., en forma simultánea con la intervención de que era objeto esta empresa ..." (Pág. 9).

En resumen, soy de opinión que la sentencia recurrida debe confirmarse.

Respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL DURAN CONTRA LA JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor MIGUEL ÁNGEL DURAN ha presentado, por intermedio de su apoderado judicial especial el Licenciado GIOVANI A. FLETCHER H., recurso de apelación contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 3 de junio de 1996 que no admite la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la parte actora contra el Juzgado Cuarto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En la demanda se formula una pretensión consistente en una petición dirigida al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá para que éste revoque la orden contenida en la Resolución de 8 de noviembre de 1995, expedida por el Juzgado Cuarto de Circuito, De lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá. El Primer Tribunal Superior no admitió el recurso de amparo en estudio por cuanto entre la orden impugnada y la acción de amparo (presentada el 29 de mayo de 1996) existe un lapso de seis meses y 21 días, es decir, que no se dan las condiciones de gravedad e inminencia del daño que representa la orden impugnada, para requerir de una revocación inmediata.

Efectivamente, la Corte observa que la presente acción de amparo pretende enervar una resolución dictada hace más de 6 meses. Ha dicho la Corte en diversas ocasiones que la acción de amparo, según el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia y, por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 3 de junio de 1996 que NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Giovani Fletcher H. en representación de Miguel Ángel Durán contra el Juez Cuarto de Circuito, del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AIZPURÚA VELÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15/96 D. M. DEL 31 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Aizpurúa Velásquez, actuando en nombre y representación de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra la Resolución N° 15/96 D. M., del 31 de mayo de 1996, expedida por el Señor Ministro de Trabajo y Bienestar Social.

Mediante la Resolución acusada, dicho Ministerio resolvió "MANTENER en todas sus partes la Auditoría que aparece contenida en el informe denominado AJUSTE DE SALARIO N° 30-DA-95, de 31 de agosto de 1995."

Al resolver la admisibilidad de la presente acción de amparo de garantías constitucionales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la misma no debe admitirse, ya que no se dirigió contra la resolución creadora de la situación jurídica que supuestamente constituye una orden de hacer que conculca o viola derechos de la demandante. Aún cuando el apoderado judicial de la demandante afirma que contra su representada no se dictó o no se le notificó ninguna resolución de primera instancia, se desprende de la propia resolución impugnada que el Departamento de Auditoría de la Dirección General de Trabajo realizó una investigación en las boletas de pago de salario del Departamento de Exportación Muelle, de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY y que, como consecuencia de dicha investigación, **"se procedió a ordenar una Auditoría con el propósito de determinar el monto dejado de pagar a los trabajadores"** de dicho Departamento, por no haberse considerado el aumento decretado por la Ley N° 13 del 15 de junio de 1981.

Mediante las acciones de amparo solamente son impugnables las órdenes de hacer violatorias de las garantías constitucionales y en estas acciones debe tenerse como demandada a la autoridad que dicta la orden y no a la que la confirma. Reiterada jurisprudencia del Pleno de la Corte ha sostenido que la acción de amparo sólo puede promoverse contra las órdenes que crean, modifican o extinguen un determinado estado de derecho y que, por tanto, pueden afectar derechos del demandante (Cfr. Sent. del 25 de marzo de 1994, Reg. Jud. de marzo de 1994, pág. 28; Sent. del 9 de agosto de 1993, Reg. Jud. de agosto de 1993, págs. 10-11 y Sent. del 8 de septiembre de 1995, Reg. Jud. de septiembre de 1995, págs. 10-13).

Por estos motivos, el Pleno considera que al tenor del artículo 2611 del Código Judicial, no debe darse curso a la presente acción de amparo porque es manifiestamente improcedente.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado Manuel Aizpurúa Velásquez, en nombre y representación de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, contra la Resolución N° 15/96 D. M., del 31 de mayo de 1996, dictada por el señor Ministro de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIGUEL CORREA RUIZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano **MIGUEL CORREA RUIZ** ha interpuesto a su favor **Acción de Habeas Corpus** contra el **DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN**, por el hecho de no haberle concedido su derecho de libertad condicional.

Admitida la acción de habeas corpus de inmediato se libró el respectivo mandamiento contra la autoridad acusada, conforme lo estatuye el artículo 2578 del Código Judicial, quien rindió el informe de conducta requerido que corre a fs. 14 del expediente, y es del tenor siguiente:

"...

a. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **MIGUEL CORREA RUIZ.**

b. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

c. El recurrente, señor **MIGUEL CORREA RUIZ**, con cédula de identidad personal N° 4-60-466, se encuentra bajo custodia de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención, con la supervisión del Director de la Cárcel Pública de David; toda vez que se encuentra condenado mediante sentencia de fecha 30 de noviembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito, a siete (7) años de prisión, por el caso de Homicidio en perjuicio de Alcibiades Chávez Lara. De conformidad al Mandamiento N° 114-DNC, de fecha 28 de febrero de 1994, confeccionado por esta Dirección, el señor **MIGUEL CORREA RUIZ**, concluirá la precitada pena el día 12 de julio de 1998, toda vez que el mismo según informes remitidos por la Dirección Regional de Corrección de Chiriquí-Bocas del Toro comenzó a cumplirla el día 12 de julio de 1991. ..."

Según se desprende del informe transcrito el favorecido con esta acción de habeas corpus se encuentra detenido, cumpliendo condena de siete (7) años por el delito de homicidio, cuyo cumplimiento finaliza el 12 de julio de 1998.

Por su parte, el accionante alega que está por cumplir cinco (5) años de condena, sobrepasando las 2/3 partes de la pena, durante ese tiempo ha realizado diversos trabajos siempre con buena conducta. Sin embargo, a pesar de haberle solicitado al Director de Corrección su libertad condicional en tres ocasiones mediante defensor de oficio, no ha recibido dicho beneficio o derecho que consagra el artículo 85 del Código Penal. Considera entonces, que el funcionario demandado al no acatar dicha disposición viola sus derechos humanos, lo que constituye abuso de autoridad y extralimitación de funciones (Art. 336 C. Penal).

Finalmente alega el sindicado que la Corte Suprema se pronunció sobre un

caso similar en reciente fallo, cuya copia adjunta como prueba, por lo cual espera que se acceda a lo pedido.

Del examen del expediente se colige que el demandante presentó una serie de documentos, que acreditan que en efecto ha solicitado a la autoridad de corrección su libertad condicional, entre los cuales se lee a fojas 7 una nota suscrita por la sub-directora de Corrección, en la que explica lo siguiente:

"...
La libertad condicional no es un derecho sino un beneficio que se otorga a discreción por el Órgano Ejecutivo, lo que quiere decir que una vez cumplida las 2/3 partes de la condena el interno tiene la opción de ser beneficiado con tal medida, para ello se toma en consideración a aquellos internos que mantengan buena conducta, que muestran índices de readaptación y cumplimiento de los demás requisitos indicados por el señor Presidente de la República quien es, el que concede dicho beneficio.

Llegado el momento, es decir, posterior al 12 de marzo de 1996, fecha en que cumplirá las 2/3 partes, usted será evaluado, y dependiendo del resultado de dicha evaluación será o no beneficiado con la libertad condicional; de no ser aprobada la misma usted cumplirá la totalidad de la pena impuesta el 12 de julio de 1998.
...".

En el fallo de la Corte al cual se alude en el libelo de habeas corpus, dictado el 12 de diciembre de 1995 en virtud de un habeas corpus, se expresan algunas consideraciones sobre los presupuestos necesarios (art. 85 del Código Penal) para la eficacia de "esta modalidad concreta de la tutela legal, instituida en respeto del bien jurídico de la libertad individual", comprendiéndose claramente que su reconocimiento o concesión es una atribución presidencial (art. 179, núm. 12 Const. Nal.).

El beneficio penal denominado libertad condicional está regulado en los artículos 85 al 89 del Código Penal. Los factores condicionantes para su otorgamiento y quién es la autoridad competente para conceder ese beneficio se encuentran determinados en los preceptos que a continuación se transcriben:

ACERCA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

"Artículo 85: El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional.

Artículo 86: La libertad condicional, otorgada por el Órgano Ejecutivo, mediante Resolución, conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
...". LIBERTAD CONDICIONAL. (Código Penal).

ARTÍCULO 179. **Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo**:
...
12. Decretar indultos por delitos políticos rebajar penas y **conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes**. ..." (Constitución Política de la República).

En primer lugar, el Pleno de la Corte debe recordar que el instituto del habeas corpus es el remedio que tiene a su alcance todo aquel que considera que ha sido privado de su libertad, fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley, para que se resuelva si es fundada su detención. En tal sentido, el Código Judicial en su artículo 2566 enumera cinco actos, que entre otros, se consideran sin fundamento legal, que son:

1. La detención de una persona con merma de las garantías establecidas por el artículo 22 de la Constitución;

2. La detención de una persona a quien se intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito;
3. La detención de una persona por orden de una autoridad incompetente;
4. La detención de una persona amparada por una Ley de amnistía o un decreto de indulto; y,
5. El confinamiento, expatriación y deportación sin causa legal.

El caso concreto, no se ajusta ninguno de los supuestos antes transcritos, pues la persona se encuentra legalmente detenida, cumpliendo una pena de prisión luego de haber sido juzgada y condenada. Lo que pretende el accionante-detenido es que se le otorgue el beneficio legal de la libertad condicional a través de esta acción constitucional, que no constituye el medio procedente, como tampoco su decisión es de competencia de la Corte (como tribunal de habeas corpus), salvo que se diera el caso en que la autoridad correspondiente (Presidente de la República) hubiese concedido dicha libertad y a pesar de ello se mantuviera detenido al individuo.

Recientemente el Pleno de la Corte sostuvo en caso similar al presente, sobre solicitud de libertad condicional mediante un habeas corpus, que la detención resulta legal pues la persona se encuentra privada de su libertad "en cumplimiento de una sentencia proferida por un tribunal competente". (Sentencia de 10 de mayo de 1996, Habeas Corpus a favor de **JUAN CARLOS LOAIZA STEVENS** contra **Director de Corrección).**

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de MIGUEL CORREA RUIZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANAUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO RUDAS JIMÉNEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Asunción Alonso de Montalvo ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus, a favor de Amado Rudas Jiménez y contra el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifiesta la parte actora que Amado Rudas Jiménez fue detenido preventivamente el 25 de septiembre de 1995 por la supuesta comisión de delito contra la salud pública. Señala también, que en la declaración indagatoria su representado declaró que la droga a él incautada era de su propiedad y para su consumo.

La defensora de oficio afirma que, si bien es cierto que la cantidad de sustancia ilícita incautada (2.49 gramos de cocaína) sobrepasa la medida posológica establecida por el Instituto de Medicina Legal, a su juicio, no existen evidencias en el sumario que determinen que Amado Rudas Jiménez pretendiese vender o traspasar dicha droga, lo que indica que el delito cometido por su representado es el de posesión ilícita de drogas cuya penalidad no

conlleva detención preventiva.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

> "**PRIMERO:** Si es cierto que ordenamos la detención del señor **AMADO RUDAS JIMÉNEZ.** Dicha decisión fué emitida mediante **Resolución de fecha veinticinco (25) de Septiembre de 1995,** la cual se encuentra acopiada a foja 11 y 12 del Sumario.
>
> **SEGUNDO:** Los Fundamentos de Hecho y de Derecho que motivaron la actuación atacada, lo exponemos a continuación:
>
> A. FUNDAMENTO DE HECHO:
>
> Los hechos se dieron el día 22 de septiembre del año en curso, a las 22:30 Hrs. cuando Unidades de la Policía Nacional Metropolitana del Área "G", Don Bosco, encontrándose de recorrido por los alrededores de San Pedro, visualizaron a un (1) sujeto en actitud sospechosa en una vereda de dicho sector, los Agentes lo detuvieron y procedieron a solicitarle su cédula de identidad personal y el mismo trató de darse a la fuga, agrediendo a su vez a uno de los agentes, el mismo fue neutralizado y mantuvo un forcejeo con los policías y al efectuarle el registro de rigor, se le encontró en el bolsillo izquierdo de la parte delantera del pantalón, envuelto en un pañuelo blanco una (1) bolsa plástica transparente con una pequeña abertura cubierta con un tape transparente que en su interior contiene un polvo color blanco que se presume sea Droga conocida como **COCAÍNA, cuyo peso es de 2.49 gramos.**
>
> El ciudadano, responde al nombre de **AMADO RUDAS JIMÉNEZ,** de 31 años de edad, reside en el Corregimiento de Juan Díaz, Barriada San Pedro N° 1, Casa N° C-44.
>
> En su indagatoria negó toda vinculación con el hecho ilícito investigado, manifestando que dicha sustancia no se le incautaron a él, negando así la tenencia y pertenencia de la misma. Luego en la Ampliación Indagatoria del prenombrado manifestó que dichas sustancias ilícitas encontradas en su poder eran de su propiedad y para su consumo.
>
> B. FUNDAMENTO DE DERECHO:
>
> En las presentes sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un Delito **CONTRA LA SALUD PÚBLICA, Relacionado con Drogas,** se encuentra plenamente acreditado en los siguientes puntos:
>
> **PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas,** procedió a ORDENAR LA DETENCIÓN PREVENTIVA, del prenombrado en base a los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y la Ley N° 13 del 27 de junio de 1994."

A foja 2 del sumario reposa informe fechado el 22 de septiembre de 1995, el cual se refiere a la captura del señor Amado Rudas Jiménez por los agentes de policía José Berrío y Bolívar Nieto. Además se informa que al momento de la detención, el señor Jiménez estaba en actitud sospechosa por lo que procedieron a su registro encontrándole, en el bolsillo izquierdo delantero del pantalón, una bolsa plástica transparente envuelta en un pañuelo que en su contenía un polvo blanco que se presumió era cocaína.

El funcionario instructor, mediante Providencia del 25 de septiembre de 1996, ordenó la indagatoria de Amado Rudas Jiménez, diligencia en la que el imputado negó la posesión de la sustancia ilícita y afirmó que la droga fué encontrada por los policías cerca del lugar donde lo detuvieron. (Fs. 8 a 10).

A foja 17 del sumario se lee el Dictamen Pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual consta que la sustancia incautada es **COCAÍNA** con un peso de 2.49 gramos.

De la foja 22 a 27 se leen las declaraciones de los agentes de policía José Abel Berrío Castillo y Bolívar Enrique Nieto Hernández, en las cuales ratifican el informe que rindieron con motivo de la detención de Amado Rudas Jiménez.

Posteriormente el señor Amado Rudas Jiménez, en diligencia de ampliación a su indagatoria a foja 35 del expediente, manifiesta que es propietario de la sustancia ilícita incautada cuando dice: "uno de ellos metió la mano en mi bolsillo sacando un pañuelo, dentro del cual había un sobre contentivo de COCAÍNA y me arrestaron". igualmente acepta ser consumidor de drogas cuando expresa: "Señor Fiscal, yo consumo drogas los sábados y consumo aproximadamente cinco, seis o siete (5, 6 o 7) gramos de COCAÍNA. De vez en cuando consumo durante la semana."

Los hechos investigados configuran el delito de posesión de drogas ilícitas tipificado en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa; y al detenido se le ha vinculado claramente con la comisión de este delito. Esto es así porque en su poder se encontró una sustancia que después de ser analizada por el laboratorio Técnico Especializado en drogas de la Policía Técnica Judicial resultó ser cocaína con un peso de 2.49 gramos, a pesar de que tal cantidad sobrepasa el límite que establece el Instituto de Medicina Legal para una dosis de consumo mínima en los adictos, los hechos que rodearon la detención del imputado no revelan en forma alguna que la droga poseída fuera a ser traficada.

Ante los elementos de prueba examinados debe concluirse que la orden de detención examinada infringe el artículo 2148 del Código Judicial el cual establece que se podrá decretar la detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la ley procesal, **cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión**, y el delito de simple posesión de drogas ilícitas está sancionado con prisión cuyo mínimo es de un año.

En reiterados fallos el Pleno de esta Corporación de Justicia ha expresado que es legal la detención de una persona sorprendida en flagrante delito, pero que al ponderar la autoridad competente la actuación para determinar si debe o no mantener esta medida cautelar, la misma debe revocarse en aquellos casos en que, como el que nos ocupa, el delito investigado está sancionado con prisión cuyo mínimo sea menos de dos años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor AMADO RUDAS JIMÉNEZ, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante diligencia fechada el 25 de septiembre de 1995 por el Delito contra la Salud Pública, y ORDENA su libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANAIS TAMARA VARGAS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Héctor Rodríguez Ureña, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de ANAIS TAMARA VARGAS, contra el Fiscal Especial de los Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial de los Delitos Relacionados con Drogas, quien mediante Oficio N° 4270 de 14 de mayo de 1996 expuso lo siguiente:

> "A. La orden de detención de la ciudadana ANAIS TAMARA VARGAS, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de fecha nueve (9) de abril de 1996. (Fs. 19-20)
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de ANAIS TAMARA VARGAS, se reflejan en que el día 5 de abril de 1996, siendo las 5:20 de la tarde, se recibió una llamada anónima en las oficinas del SUB-DIIP de Balboa, en donde informaban que en la vieja piquera de taxis del muelle 18 se encontraban una mujer apodada la china y un sujeto apodado pato, los cuales se dedicaban a la venta de drogas. Luego de eso las unidades del DIIP se dirigieron al área antes mencionada, los cuales procedieron a rodear la misma, se procedió a un registro donde se encontraban sentados los sujetos antes mencionados, encontrándosele en la defensa del vehículo NISSAN, SUNNY, color blanco, matrícula N° 319920 un paquetito de cigarrillos de marca KOOL con (25) veinticinco envoltorios en papel blanco en forma de cigarrillo que en su interior contiene una hierba seca que se presumía era marihuana y (18) dieciocho balboas en efectivo.
>
> Al momento de rendir declaración indagatoria ANAIS TAMARA VARGAS, niega la vinculación con la droga incautada.
>
> El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de la señora ANAIS TAMARA VARGAS, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> El resultado de la muestra analizada resultó POSITIVO, para la determinación de la MARIHUANA.
>
> C. La señora ANAIS TAMARA VARGAS, se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación, a órdenes de este despacho, mediante oficio N° 4453 de 14 de mayo de 1996." (Fs. 4-5).

Por su parte, el licenciado Héctor Rodríguez Ureña afirma que la detención preventiva de la cual es objeto su representada, no cumple con las formalidades legales, pues, señala que nuestro ordenamiento jurídico impide la detención de mujeres en estado de embarazo con el fin de preservar el mejor desarrollo del que está por nacer, independientemente de los motivos que provocaron la detención de la madre.

En relación al argumento planteado por el apoderado judicial de la señora Vargas, observa el Pleno que, efectivamente, el artículo 2147D del Código Judicial no permite la detención preventiva de las mujeres en estado de gestación, siempre que no exista exigencia cautelar de excepcional relevancia.

Después del estudio de las circunstancias procesales, el Pleno concluye que en el presente caso no concurren tales exigencias cautelares, ya que no hay evidencias de que exista peligro de que la imputada intente darse a la fuga, debido a que se trata de una ciudadana panameña, con domicilio en este país.

Dado que el artículo 75 numeral 2° del Código Penal, dispone que la ejecución de la pena sea diferida si se trata de una mujer embarazada o que haya

dado a luz recientemente, el Pleno considera que la medida cautelar de detención preventiva de la señora Vargas en el Centro de Rehabilitación Femenino debe ser sustituida por otra medida cautelar de carácter personal.

Finalmente, es preciso indicar que el artículo 2595 del Código Judicial señala literalmente lo siguiente:

> "ARTÍCULO 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandamiento de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten."

En el presente caso existen elementos de prueba que vinculan a la recurrente con el ilícito que se investiga. Consecuentemente, debe entenderse que la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar distinta, no desvincula a la señora Anais Tamara Vargas de su posible responsabilidad en el delito que se investiga ni de que, posteriormente, se le llame a juicio por el mismo, si existieran méritos suficientes.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva de ANAIS TAMARA VARGAS y la REEMPLAZA por las medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a, b, y c del artículo 2147B del Código Judicial, consistentes en la prohibición a la imputada de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá y el deber de presentarse cada quince días ante el juez de la causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE WING LEUNG YIP Y KWOK HUNG LEON NG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado César Guardia González ha promovido Acción de Habeas Corpus a favor de los señores Wing Leung León Yip y Kwok Hung León NG los cuales están detenidos desde el 27 de marzo de 1996, bajo la custodia del Director de la Policía Técnica Judicial.

Señala la parte actora que la detención de los señores Wing Leung León Yip y Kwok Hung León NG, se dio a raíz de una investigación adelantada por la Policía Técnica Judicial; sin embargo, a la fecha no existe ningún expediente en donde dichos señores aparezcan investigados, sino que las autoridades mantienen la detención con base en que sus inscripciones de nacimiento como panameños nacidos en el exterior fueron suspendidas por la Dirección General del Registro Civil, razón que no es fundamento para mantener detenidos dos ciudadanos panameños alegando status ilegal.

Acogida la acción interpuesta se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente, y se solicitó un informe de conducta al funcionario demandado, quién lo rindió mediante nota A. L.-0583-96 de 30 de abril de 1996, en la que

expresó que no ordenó la detención de los señores Wing Leung León Yip y Kwok Hung León NG, sino que los mismos permanecen bajo su custodia pero a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización.

La Subdirectora Nacional de Migración y Naturalización rindió el informe solicitado mediante nota N° DNMYN-138-96, de 6 de mayo de 1996, señalando entre los hechos fundamentales que motivaron la detención los siguientes:

1. Los ciudadanos en mención fueron remitidos y puestos a órdenes de esta Dirección por la Policía Técnica Judicial para verificar su status migratorio.

2. Que por medio de nota enviada por el Tribunal Electoral se conoció que Wing Leung León Yip y Kwok Hung León NG, ambos de nacionalidad china, están actualmente indocumentados, porque sus respectivas inscripciones de nacimiento y cédulas de panameños nacidos en el extranjero fueron canceladas, por no cumplir con los requisitos exigidos por ley, es decir, no han probado el vínculo de parentesco con sus respectivos padres panameños.

3. Dichos detenidos se han visto involucrados en los secuestros de los señores Víctor Chong y Linfa Chong Tay, por lo que son un peligro inminente para la sociedad panameña ya que atentan contra la seguridad y el orden público de la comunidad.

4. Que los señores Wing Leung León Yip y Kwok Hung Leon NG continúan a órdenes de la Dirección Nacional de Migración esperando ser deportados conforme a la Resolución N° 1201 de 25 de marzo de 1996.

Como fundamento de derecho de la Resolución N° 1201 antes mencionada, la funcionaria acusada señaló el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por la Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y los Artículos 36, 58, 65 y 85, de la Ley N° 6 de 5 de marzo de 1980, en concordancia el Artículo 14 de la Constitución Nacional de Panamá.

Evacuados los trámites de Ley el Pleno de la Corte Suprema de Justicia procede a resolver el presente negocio, previas las siguientes consideraciones.

A foja 17 del sumario consta la nota N° DG-01-079 de 27 de marzo de 1996, por medio de la cual el Director de la Policía Técnica Judicial pone a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización a los señores Wing Leung León Yip y Kwok Hung León NG, ambos indocumentados por tener suspendida y cancelada la inscripción de su nacimiento en el libro del Registro Civil de nacimiento de panameños en el exterior. Consta además, dos certificaciones expedidas por el Director General de Registro Civil, ambas del 19 de abril de 1996, en las cuales certifican que la partida N° 914 del Tomo N° 8 y la partida N° 1162 del Tomo N° 9 a nombre de los señores Kwok Hung León NG y Wing Leung León Yip respectivamente, están cancelada la primera y suspendida la segunda (fs. 18 y 19). Posteriormente, el Sub-Director General del Registro Civil, mediante nota N° 747/SGRC de 14 de mayo de 1996, dirigida al Secretario de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que la inscripción de nacimiento PE-9-1162 a nombre de Wing Leung León Yip fue cancelada también, mediante la resolución N° 760 de 1 de abril de 1996, notificada mediante edicto N° 487 de 12 de abril de 1996. (Fs. 31).

Observa esta Superioridad, que la cancelación de las inscripciones de nacimiento de los señores Kwok Hung León NG y Wing Leung León Yip por parte de la Dirección General de Registro Civil tuvo lugar, en ambos casos, por no presentar los documentos idóneos acreditativos de sus nacimientos, expedidos por las autoridades del país de origen, con los cuales debían probar que en efecto son hijos de panameños nacidos en el extranjero (fs. 32). Esta resolución fue dictada con fundamento en la Ley 100 de 1974. De conformidad con el artículo 69 de esta Ley el Director General del Registro Civil "podrá ordenar, aún de oficio, por la vía administrativa, la rectificación de partidas que contengan omisiones o errores manifiestos", y se entenderá por tales "aquellos que se desprenden de la sola lectura de la respectiva anotación de la inscripción de los antecedentes que le dieron origen o la complementan." Es por tanto errada la afirmación que hace el demandante en cuanto a que hecha una inscripción sólo puede ser adicionada, alterada o modificada mediante sentencia judicial ejecutoriada, de acuerdo con

el artículo 68 de la Ley 100 1974.

La Resolución N° 1201 de 25 de marzo de 1996, dictada por la Subdirectora Nacional de Migración y Naturalizaciónresuelve: "DEPORTAR del territorio nacional a los ciudadanos KWOK HUNG LEON NG Y WING LEUNG LEON YIP, ambos de nacionalidad china, por razones de Seguridad, Orden Público y de no portar documentos que acrediten su residencia legal en el país" (fs. 20), facultad que le concede el artículo 36 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1990, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley N° 6 de 5 de marzo de 1980.

A juicio de la Sala Plena de esta Corporación de Justicia, esta resolución se ajusta a derecho y podrá ser ejecutada después de notificada personalmente a los afectados con la misma, quienes podrán impugnarla mediante los recursos legales pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de los señores Wing Leung Yip y Kwok Hung Leon NG.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS AURELIO MATHEUS PALACIOS CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus a favor del señor CARLOS AURELIO MATHEUS PALACIOS, contra la Juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial.

La acción de habeas corpus ha sido interpuesta contra la resolución de 14 de mayo de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que resolvió lo siguiente: "... DECLARA LEGAL la detención de CARLOS AURELIO MATHEUS PALACIOS y, en consecuencia fíliese nuevamente a órdenes del funcionario de origen" (f. 14).

Antes de arribar a esta conclusión, el a-quo realizó un recuento de los antecedentes del caso, en que destaca:

Las constancias procesales demuestran que el sindicado estaba en el inmueble allanado, en el que se encontraron catorce (14) sobrecitos confeccionados en papel plástico transparente, que en su interior contenían cierta cantidad de polvo blanco, y al realizarse la prueba de campo por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, resultó ser COCAÍNA, en la cantidad de QUINCE PUNTO CUARENTA Y CUATRO (15.44) gramos. Al ser revisado el señor MATHEWS PALACIO se le encontró dentro del bolsillo la suma de CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON CUARENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.46.45) (fojas 2, 4 y 7).

En la diligencia de indagatoria rendida por el señor CARLOS AURELIO MATHEWS PALACIO, y quien se encontraba debidamente asistido por su defensora particular,

(fs. 36-38), manifiesta que acepta lo expuesto en la diligencia de allanamiento, en el sentido de que la droga encontrada era de su propiedad y que la consume desde los doce años.

Observa el Pleno que en el escrito de apelación formulado por la apoderada judicial de MATHEWS PALACIO, se acepta todo lo expuesto por su representado y que sirvió de base al tribunal competente para decretar la detención preventiva, con la única salvedad de que considera que a su patrocinado se le debe dar el beneficio que establece el artículo 263-F del Código Penal. El referido artículo contiene los siguientes presupuestos:

> "Artículo 263 F: Si el que adquiere o posee drogas, depende física o psíquicamente de las mismas y la cantidad es escasa, de modo que acredite que son para su uso personal, se le aplicarán únicamente medidas de seguridad.
>
> Se entenderán por cantidad escasa destinada para su uso personal, la medida posológica limitada a una dosis, la cual será establecida por el médico forense del Ministerio Público."

Luego de lo expuesto, la Corte procede a verificar si en efecto, la detención preventiva decretada en este caso, se encuentra dentro de los casos y forma que prescriben la Constitución y la ley.

El Pleno advierte que para ordenar la detención preventiva de una persona, es necesario que se cumplan los presupuestos que determinan los artículos 2148 y 2159 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que se trate de delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión o el autor haya sido sorprendido en flagrante delito y, que la decrete autoridad competente mediante diligencia motivada.

Es indudable que en el caso en estudio, se cumplen las formalidades que exige la ley para la detención preventiva.

Así las cosas, el examen objetivo de los aludidos antecedentes revelan que, a pesar de los razonamientos esgrimidos por la apoderada judicial del beneficiado con esta acción de habeas corpus, en el sentido de que su representado presenta un severo cuadro de abuso de drogas, esto es, que es un adicto, ello no aporta ningún elemento de convicción nuevo que tienda a desvirtuar, las constancias en autos. Por otra parte, mal puede atenerse el presente negocio en lo enmarcado en el artículo 263-F antes transcrito, cuando la droga encontrada en el allanamiento y aceptada por el sindicado como de su propiedad, está muy por encima de la dosis reconocida como para consumo personal según el Instituto de Medicina Legal, por lo que su presencia se presume para fines de tráfico mientras no sea desvirtuada por otros medios de prueba en contrario.

Más aún, en la ratificación de la declaración jurada rendida por TEODORO AURELIO ROOSEVELT ANDERSON, (f. 55) quien labora en la Policía Técnica Judicial, División de Estupefacientes y participó en la diligencia de allanamiento a la vivienda de MATHEWS PALACIO, manifestó lo siguiente: "... si tengo conocimiento de que en el lugar se había efectuado con anterioridad vigilancia, ya que se tenían denuncias en nuestro despacho de que un sujeto se dedicaba a vender drogas en la terraza de la casa, percatándonos de que era la casa D-47 en San Joaquín, Pedregal ...", siendo esta vivienda objeto del allanamiento antes descrito.

En resumen, el Pleno de la Corte estima que figuran contra el detenido elementos de convicción que justifican la detención preventiva, con lo cual se cumple con los requisitos del artículo 2148 del Código Judicial y, en consecuencia, la resolución apelada debe mantenerse.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 14 de mayo de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTORIANO MINOTA ANGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS Y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **BORIS E. BARRIOS G.**, interpuso acción de habeas corpus a favor de los ciudadanos colombianos **VICTORIANO MINOTA ANGULO, LUIS AMARILDO BARBOSA LAMOS y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA**, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado contestó mediante oficio visible de fojas 23 a 26 de este expediente.

Encontrándose el expediente para la lectura de los demás Magistrados del Pleno, el proponente del habeas corpus, presentó escrito donde manifiesta su DESISTIMIENTO de la presente acción constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado BORIS E. BARRIOS G. de la acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de los señores VICTORIANO MINOTA ANGULO, AMARILDO BARBOSA LAMOS y JUAN CARLOS PAREDES IBARRA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ZELMA VANESSA DALEY CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor Egbert N. Wetherborne M. ha presentado acción de habeas corpus a favor de la señora **ZELMA VANESSA DALEY**, contra el Director Nacional de Corrección.

Consecuentemente, se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Nota 1836-DNC. 96. s. de 23 de mayo de 1996, en la que informa lo siguiente:

"A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención de la señora **ZELMA VANESSA DALEY.**

B. No podemos hacer referencia a los motivos o fundamentos de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

C. La recurrente, señora ZELMA VANESSA DALEY, con cédula de identidad personal N° 8-477-296, se encuentra bajo la custodia de la Dirección Nacional de Corrección guardando detención con la supervisión de la Dirección del Centro Femenino de Rehabilitación; toda vez que se encuentra condenada, mediante sentencia de fecha 26 de enero de 1994, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, a ocho (8) meses de prisión, por la comisión del delito de Lesiones Personales en perjuicio de Francisco Javier Núñez Vergara.

De conformidad al Mandamiento N° 540-DNC de fecha 18 de abril de 1996, confeccionado por esta Dirección, la señora Zelma Vanessa Daley, concluirá la precitada pena el día 4 de diciembre de 1977 (sic); toda vez que el mismo según informes remitidos por la sección judicial del Centro Femenino de Rehabilitación, comenzó a cumplirla el día 18 de abril de 1996." (Foja 6).

Como fundamento de la acción el Doctor Wetherborne señala que la señora DALEY fue condenada a ocho meses de prisión, mediante sentencia de 26 de enero de 1994. Sin embargo, no fue hasta el 4 de abril de 1996 cuando se detuvo a la mencionada señora, para que cumpliera dicha condena. Por tanto, la detención de la beneficiada con el presente habeas corpus es ilegal, porque la pena impuesta ya prescribió.

Con el objeto de determinar si, efectivamente, se encuentra prescrita la pena, el Magistrado Sustanciador solicitó al Juzgado Octavo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el expediente que contiene el proceso penal seguido a la señora ZELMA VANESSA DALEY, sindicada por delito de lesiones personales en perjuicio del señor FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ VERGARA.

De foja 73 a 77 de ese expediente consta la sentencia que decide el proceso, fechada 26 de enero de 1994, que condenó a la señora DALEY a la pena de ocho (8) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término. Dicha sentencia fue notificada de conformidad con los artículos 2309, 2310 y 2312 del Código Judicial y quedó ejecutoriada el 11 de mayo de 1994.

En relación con la prescripción de la pena, los artículos 97 y 98 del Código Penal señalan lo siguiente:

"**ARTÍCULO 97:** La pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al doble de la pena señalada en la sentencia sin que exceda de 25 años.

Si fuere pecuniaria, en el plazo de 5 años.

La prescripción de penas de diferentes clases impuestas en una misma sentencia, se cumple en el plazo fijado para la más grave."

"**ARTÍCULO 98:** La prescripción de la pena correrá desde el día en que la sentencia quede ejecutoriada, o desde el día en que se interrumpa por cualquier causa la ejecución de la condena ya empezada a cumplir.

En caso de interrupción de la ejecución de la pena, la parte de la pena cumplida se computará a favor del reo."

De acuerdo con las normas transcritas, en el caso que nos ocupa, la prescripción de la pena empezó a correr el 11 de mayo de 1994, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria. La pena de prisión impuesta a la señora

DALEY fue de ocho (8) meses, por lo que los dieciséis (16) meses que constituyen el doble de ella, se completaron el 11 de septiembre de 1995.

Por lo que señala la Dirección Nacional de Corrección en el informe rendido, consultable a fojas 6 y 7 del cuadernillo de habeas corpus, la señora ZELMA VANESSA DALEY empezó a cumplir la pena de prisión impuesta por la sentencia de 26 de abril de 1994, el día 18 de abril de 1996. Consecuentemente, la detención que sufre es ilegal, porque al momento en que se inició la ejecución de la pena, ésta ya había prescrito.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de la señora ZELMA VANESSA DALEY, por encontrarse prescrita la pena impuesta y ORDENA que sea puesta inmediatamente en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO LEONARDO PEREA Y JANETH ADELAIDA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Humberto Mosquera Berthancourt, mediante escrito presentado en la Secretaría General de esta Corporación el 31 de mayo de año en curso, promovió acción de habeas corpus a favor de **PEDRO LEONARDO PEREA y YANETH ADELAIDA RODRÍGUEZ** y contra la orden de detención preventiva dictada por la **FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.**

Cumplidas las diligencias de reparto, se libró el mandamiento correspondiente contra la autoridad acusada, a fin de que informara a este Tribunal si ordenó la medida cautelar personal contra los accionantes, los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y cualquier otra información que nos indique las razones por las cuales ordenó las detenciones cuestionadas. Como respuesta al mandamiento mencionado, por Secretaría se recibió, el 5 de junio el Oficio 6008, firmado por el licenciado Rosendo Miranda, Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, en el que acepta haber emitido la orden de detención preventiva contra YANETH ADELAIDA RODRÍGUEZ y PEDRO LEONARDO PEREA, mediante providencia de 29 de abril de 1996, la cual se fundamenta en el informativo procedente de la Policía Nacional que sindica a los detenidos como las personas que habían sido previamente identificados asumiendo una actitud sospechosa y en el momento en que se apersonaron los agentes de la Policía, uno de ellos pudo observar que la joven Yaneth Adelaida Rodríguez dejó caer una bolsa plástica en la que encontraron 15 sustancias sólidas de color crema, que se presumía era droga.

Al informe mencionado se adjuntó copia del expediente de 47 folios, que contiene las diligencias realizadas hasta el presente en la fase instructoria y en el que constan las declaraciones indagatorias de los sindicados y el informe procedente del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas (f.40) en el que se certifica que las muestras de las 15 sustancias sólida de color crema analizadas, determinaron que se trataba de la sustancia conocida como cocaína, en su

modalidad de crack, en la entidad de 2.07 gramos.

Con relación a la situación procesal que emerge del expediente, Pedro Leonardo Perea Pérez no se encuentra vinculado al hecho que se investiga, pues si bien acompañaba a su concubina Yaneth Adelaida Rodríguez al momento de la requisa personal que se le hizo, no se le encontró que portara sustancia ilícita alguna y ha comprobado que a esa fecha tenía un contrato de trabajo con Industrias Metalúrgicas de Panamá, S. A., con un salario de B/.1.75 por hora, desempeñando el oficio de soldador.

En cuanto a la conducta de Yaneth Adelaida Rodríguez, en su indagatoria manifestó que es madre de 3 niños menores de edad, entre ellos uno de 11 meses, que cargaba el día de su detención y que se encontraba en estado de embarazo de alto riesgo. Dada la tutela que recibe por mandato constitucional y por ministerio de la ley, todo niño desde su gestación, es imprescindible que el funcionario de instrucción verifique si en efecto la detenida se encuentra en estado de embarazo. Por otra parte, la cantidad de sustancia ilícita incautada, si bien excede de la dosis posológica que el Instituto de Medicina Legal ha señalado como unidad de consumo para los adictos, ante la ausencia de otro indicador probatorio que demuestre que la posesión de la droga era con propósito de venta, tal como se ha señalado en precedentes establecidos por esta Corporación, debe presumirse tal conducta subsumida en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, cuya penalidad, en su tramo mínimo, es inferior a dos años de prisión y por tanto, no conlleva detención preventiva.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de PEDRO LEONARDO PEREA y YANETH ADELAIDA RODRÍGUEZ y ORDENA su inmediata libertad, siempre que no medie otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ORIEL PERALTA PERALTA CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LOS SANTOS, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación llegó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema la acción de habeas corpus presentada en favor de Juan Oriel Peralta Peralta y contra el Juez Primero del Circuito de los Santos.

Le correspondió conocer en primera instancia de este proceso constitucional al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, quien dictó sentencia mediante la cual declaró legal la detención de Peralta.

El negocio ha ingresado al Pleno sin la debida sustentación del recurso interpuesto, por lo que se desconocen las razones que lo motivan. Así las cosas, la lectura de la sentencia recurrida no pone en evidencia que existan razones que sustenten la impugnación. Se trata de apremio corporal que fuera decretado contra Peralta, luego que, mediante decisión jurisdiccional, se le intimara para que se abstuviera de realizar actos de perturbación de dominio, orden que no acató.

En los antecedentes de esta causa que fueran enviados por la autoridad

demandada, se encuentra comprobada la circunstancia del desacato y la imposición de la medida restrictiva de la libertad, y el agotamiento, por Peralta de los medios ordinarios de impugnación. De igual manera, a folio 104 aparece la resolución que ordena la medida, por todo lo cual el juez constitucional a-quo estimó cumplidos los requisitos para decretar la medida y, consiguientemente, declaró legal la detención de Peralta (f. 44), decisión que el Pleno de la Corte comparte.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABALLERO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Víctor M. Harding concurrió ante esta Corporación de Justicia a fin de presentar acción de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y en favor de Luis Enrique Caballero, quien se encuentra detenido preventivamente por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad acusada informó, mediante oficio N° 5948-96 de 10 de junio del año que decurre, "... que las sumarias seguidas en contra del señor LUIS ENRIQUE CABALLERO, fueron enviadas al Juzgado Segundo en Turno, con el Oficio N° 6107-96 fechado 7 de junio de 1996" (f. 6).

Con vista de esta circunstancia, resulta entonces obvio que la Corte carece de la competencia para conocer de este negocio constitucional, función que ahora corresponde al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en virtud de lo preceptuado por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el conocimiento de esta acción de habeas corpus, y ORDENA que Luis Enrique Caballero sea puesto a órdenes de dicho Tribunal de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO ISNEL SANCLEMENTE CONSSIU CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de acción de habeas corpus interpuesta por Abdiel Manuel Abreu Cuevas en favor de AMADO ISNEL SANCLEMENTE, quien se encuentra sindicado por delito contra la vida y la integridad personal cometido en perjuicio de Alejandrina Alvarez Córdoba, y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Luego de acogida la acción, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante Oficio N° 8492, de 29 de mayo de 1995. El funcionario de instrucción acepta haber ordenado la detención de Sanclemente, ello mediante resolución de 24 de mayo del año en curso, e informa sobre las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la medida restrictiva de la libertad ambulatoria.

Procede la Corte a determinar si la medida privativa de la libertad de Sanclemente se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 21 de la Carta Política.

El examen del cuaderno de habeas corpus, así como de sus antecedentes, evidencia el claro cumplimiento, por la autoridad acusada, de todos los requisitos contemplados en la ley para fundamentar la orden de detención que se impugna. Así, la diligencia que ordena la medida indica: a) el hecho imputado, que es el delito de homicidio cometido en perjuicio de Alejandrina Alvarez Córdoba, a quien se le vio con vida por última vez el domingo 12 de mayo de 1996; b) los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, como lo son la diligencia de levantamiento y reconocimiento del cadáver efectuada por la Fiscalía Auxiliar de la República el 15 de mayo de 1996 (fs. 2-4, sumarias) y c), los elementos probatorios, de naturaleza vinculante, que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena, resultantes, entre otras, de la declaración jurada rendida por Iris Argelis Lasso Ramos, visible a folios 88 a 91 de las sumarias, quien manifiesta haber visto a Sanclemente junto a la occisa "a menos de tres pies de distancia entre ambos" (f. 90), cerca de la una de la mañana del lunes 13 de mayo recién pasado.

Aunado a lo anterior, Ana Robledo García sostiene en declaración jurada lo siguiente:

> "ví por última vez a mi amiga ALEJA, el día domingo doce de mayo de 1996, a eso de las siete de la noche, se encontraba en el comisariato AUGUSTO; estaba acompañada de un sujeto de tez morena, de aproximadamente 1.85 metros de estatura, cabello lanoso (sic), color negro, corte bajo, vestía un pantalón largo de color negro, zapatos de color negro ... se fue con él (sic) hombre para o hacia abajo, con dirección sector el Nance" (fs. 43 y 44, sumarias).

Esta versión es corroborada por Armando Robledo García (fs. 40-42, de los antecedentes), quien también manifiesta haber visto el mismo día a Alvarez Córdoba junto al individuo cuya descripción física concuerda con la del imputado.

De lo anotado se desprende que pesan sobre el imputado graves indicios de presencia y oportunidad que justifican la aplicación de la medida cautelar de carácter personal atacada.

En cuanto a la exigencia del artículo 2148 del Código Judicial, que condiciona la imposición de la medida privativa de libertad a la pena imponible, se tiene por cumplido este requisito, toda vez que el delito cuya autoría se le atribuye a Sanclemente es el de homicidio simple, que tiene señalada pena mínima de cinco años de prisión, según el artículo 131 del Código Penal.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Amado Isnel Sanclemente, decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de ésta autoridad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR DICKENSON CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gonzalo A. Moncada Luna ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de OSCAR DICKENSON y contra el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifiesta la parte actora que el señor Dickenson fue detenido el 9 de febrero de 1996, por agentes de la división de estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, en un pequeño local comercial donde laboraba como administrador ubicado en Balboa. Señala el licenciado que dicha detención es ilegal y violatoria del artículo 22 de la Constitución Política Nacional, ya que los dos envoltorios de marihuana que fueron incautados en diligencia de allanamiento al local por agentes de la policía Técnica Judicial no pertenecían a su representado, sino al señor que también labora en el kiosco llamado Longino Muñoz, quien aceptó en su declaración ser consumidor de dicha droga y que ésta había sido escondida por él en el local para su posterior consumo.

Finalmente agrega el apoderado judicial, que a pesar de no existir a su juicio ningún elemento probatorio que vincule a su representado con el presente delito, el mismo actualmente permanece detenido en la cárcel Modelo por orden del Fiscal Especial de Delitos Relacionados con Drogas.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

> **"PRIMERO:** Si es cierto que ordenamos la detención del señor **OSCAR DICKENSON**. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución de fecha 13 de febrero de 1996, la cual se encuentra acopiada a fojas 35 a 37 del Sumario.
>
> **SEGUNDO:** Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la actuación atacada, lo exponemos a continuación.
>
> A. FUNDAMENTOS DE HECHO:
>
> Los hechos tienen sus inicios, desde el pasado treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), fecha en que se han venido recopilando informes de inteligencia, debido a una denuncia que se le efectúa a un sujeto conocido como **OSCAR**, según la

cual éste se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas a menores de edad que en su mayoría son estudiantes de la escuela secundaria de Balboa, utilizando como fachada la venta de comida como Hot Dog, sodas, galletas, etc.

Para tal fin se solicita autorización al Despacho a fin de obtener autorización para efectuar una compra controlada, en la cual se utilizaran para la compra de la droga cinco (5) billetes de un (1) dolar con las siguientes series I87511448G, F01473741E, F93368209D, B100068743N, y F92932978D.

Una vez efectuado las vigilancia al sujeto conocido como **"OSCAR"**, se coordina para el ocho (8) de febrero del año en curso, realizar la compra controlada, con la participación de un informante de la División, a quien se le hace entrega de los cinco dólares los cuales fueron fotocopiados por este Despacho, y realizara la compra al sujeto conocido como **"OSCAR"**, se da la señal, para que se evacue la diligencia de allanamiento, en el lugar encontraron sobre el mueble donde guardan los hot dog, dos (2) envoltorios similares al que se le incautó sobre el mueble en el Kiosco (SIC.) conteniendo la misma sustancia y que se la diera el señor OSCAR DICKENSON PÉREZ.

Al revisar un Van Chevrolet color blanco, con matricula 093014, de propiedad del señor Dickenson se le detectó la cantidad de ciento ochenta y seis (B/.186.00), en monedas fraccionadas. Dentro del Kiosko se detecta la cantidad de mil setenta y cuatro dólares (B/.1074.00) en billetes de diferentes denominaciones, además de una cámara fotográfica Cannon Futura, con serie 3157121.

Al ser indagado el imputado **OSCAR DICKENSON PÉREZ**, niega que se dedica a la venta de sustancias ilícitas y negó que le vendió los cinco (5) envoltorios con marihuana a nuestro informante, con relación a los dos (2) envoltorios con marihuana encontrados sobre el mueble donde se guardaban los hot dog, el mismo niega su propiedad, manifestando que alguien lo puso en el lugar.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

En las presentes sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un **Delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas**, se encuentra plenamente acreditado en el siguiente punto;

PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) las sustancias ilícitas encontrada en el Kiosco (sic.) de propiedad de Oscar Dickenson, para su análisis y peso, donde dio resultados positivos para la determinación de **MARIHUANA**, en la cantidad de 4.16 gramos, (fs. 56).

Con todos estos elementos, y de las piezas procesales que conforman el presente cuaderno penal, resalta el hecho, que se ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable, dado los indicios presentes como lo son el acta de allanamiento, el informe de los agentes captores, los informenes (sic.) de inteligencia, donde se resalta el hecho de que se tenía información de antemano de que en este lugar el señor Oscar se dedicaba a vender sustancias ilícitas a los estudiantes de la escuela Balboa, se dan los presupuesto legales que establece los Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención preventiva de Oscar Dickenson.

Le informo además, que mediante Oficio N° 4217 de fecha 16 de mayo del presente año dirigido al Director de la Modelo, ponemos a su

disposición al ciudadano **OSCAR DICKENSON PÉREZ."**

En el sumario consta como elemento de prueba de la comisión del hecho punible la nota de 27 de diciembre de 1995, por la cual el inspector Rolando Reina de la Policía Técnica Judicial informó al señor Fiscal acerca de una denuncia recibida en su despacho sobre un sujeto llamado Oscar, que se dedica a la venta de estupefacientes en un puesto de comida cercano a la escuela secundaria de Balboa. Además reposan informes de vigilancia de fechas 5 y 30 de enero de 1996, rendidos por inspectores de la policía Técnica Judicial en predios cercanos al Kiosco, con los cuales se logró identificar al sujeto denunciado (fs. 1-3). A foja 7 encontramos la Providencia de 7 de febrero de 1996, a través de la cual el señor Fiscal otorga autorización a los agentes de la Policía Técnica Judicial para practicar diligencia de compra controlada y arresto del sujeto conocido como Oscar propietario del kiosco de venta de Hot Dogs.

Ente los elementos probatorios que obran en el proceso contra el detenido está el acta de la diligencia de allanamiento de 8 de febrero de 1996, que se realizó en los puestos de comida, la cual señala que efectivamente se detectó en el lugar, dos (2) envoltorios de papel color amarillo que contenían una hierba seca que se presumió era marihuana como también se le decomisó al agente informante de la policía técnica judicial cinco (5) envoltorios iguales a los anteriormente descritos contentivos de la misma sustancia ilícita, que le habían sido despachados por el señor Oscar Dickenson y dinero fraccionado de diferentes denominaciones (fs. 12-16).

En la declaración indagatoria rendida por Oscar Dickenson Pérez, éste niega toda vinculación con el hecho punible investigado e incluso declara no tener conocimiento de la procedencia de la droga incautada de su negocio. Cuando el señor Fiscal le preguntó si conocía al propietario y la procedencia de los envoltorios encontrados en la diligencia de allanamiento el imputado contestó: "Señor Fiscal, no conozco el propietario ni la procedencia, yo pensé que el que lo había puesto allí era el sujeto al que le habían decomisado los cinco del bolsillo" (fs. 24-26).

A foja 56 del expediente se lee el Dictamen Pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual consta que la muestra incautada es **MARIHUANA** y que pesa 4.16 gramos.

Los elementos probatorios examinados vinculan al señor Oscar Dickenson Pérez con el delito contra la Salud Pública que se investiga, configurado en el artículo 258 del Código Penal, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Por lo tanto, a juicio del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, la orden de detención decretada contra el señor Dickenson no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad ambulatoria y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor Oscar Dickenson decretada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Droga, mediante providencia fechada el 13 de febrero de 1996 y ORDENA que el mismo sea puesto nuevamente a órdenes del señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MASTER PEÑA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos M. Herrera Morán, ha interpuesto, ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus a favor del señor JOSÉ MASTER PEÑA y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Manifiesta la parte actora que el señor José Master Peña de nacionalidad colombiana, fue detenido por agentes de la Policía Técnica Judicial, el 8 de mayo de 1996, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sin tener orden de autoridad competente. Agrega también el recurrente que al momento de la detención de su representado no se le notificó sus derechos, ni la causa de su detención, violando sus garantías procesales y sus derechos humanos.

Acogida la acción interpuesta se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente, y se solicitó un informe al funcionario demandado, quien lo rindió mediante nota A. L.-0636-96 de 10 de mayo de 1996, en la que expresó que no ordenó la detención del señor José Master Peña, sino que la misma fue solicitada por el señor Procurador General de la Nación, mediante oficio DPG-561-96 de 8 de mayo de 1996 y que el prenombrado señor no está bajo su custodia ya que se encuentra a órdenes del Señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Ante esta afirmación se libró nuevo mandamiento contra el señor Ministro encargado de Relaciones Exteriores quien rindió el informe que se le solicitó mediante nota A. J. N° 472 de 14 de mayo de 1996, en los siguientes términos:

> "A) Si es o no cierto que ordenó la detención del recurrente y de serlo, si la ordenó verbalmente o por escrito;
>
> Respuesta: La Embajada de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal N° 381 de 8 de mayo de 1996, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de JOSÉ MASTER-PEÑA, lo cual, es procedente de acuerdo a lo establecido en el artículo IV del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América. El referido ciudadano colombiano es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos de América para el Distrito Este del Estado de Nueva York, para comparecer a juicio por un (1) cargo de lavado de dinero procedente del narcotráfico en violación del artículo 18 U. S. C. 1957, de acuerdo a la denuncia criminal N° 96-648-M de 3 de mayo de 1996 y contra quien el Magistrado de los Estados Unidos, John L. Caden de la Corte antes mencionada, dictó orden de detención el 3 de mayo de 1996.
>
> Mediante nota A. J. N° 460 de 8 de mayo de 1996, la Cancillería remitió a la Procuraduría General de la Nación la solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por la Embajada de los Estados Unidos de América, para los fines pertinentes. La Procuraduría General de la Nación, mediante providencia de 8 de mayo de 1996, ordenó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano **JOSÉ MASTER-PEÑA**, poniéndolo a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la detención, período dentro del cual el Estado Requiriente deberá formalizar la solicitud de extradición.
>
> B) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello;
>
> Respuesta: El fundamento de hecho es la Nota Verbal N° 381 de 8 de

mayo de 1996, en la que la Embajada de los Estados Unidos de América solicita la detención preventiva con fines de extradición,en virtud de la orden de detención dictada por el Magistrado de la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este del Estado de Nueva York, John L. Caden.

Los fundamentos de derecho son:
1. La solicitud de detención preventiva con fines de extradición que se encuentra amparada por el artículo IV del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América el 25 de mayo de 1904.

2. Los delitos de drogas imputados a **JOSÉ MASTER-PEÑA** que no se encuentran establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países, están amparados bajo el artículo 36 de la Convención Única sobre Estupefacientes, hecha en Nueva York el 30 de marzo de 1961, como fuera enmendada por el Protocolo de la Naciones Unidas de 25 de marzo de 1972. Ambos países somos parte de dicha Convención.

3. La incautación de bienes se encuentra amparada por el artículo IX del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América.

4. Los delitos por los cuales está siendo requerido el ciudadano en referencia se encuentran también incluidos en el artículo 3 (1) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, de la cual ambos países somos parte.

C) Si tiene bajo su custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha mandado a presentar y en caso de haberla transferido a otro, que indique exactamente, a quién en qué tiempo y por qué causa.

Respuesta: La Providencia de 8 de mayo de 1996, mediante la cual el Procurador General de la Nación ordenó la detección preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano **JOSÉ MASTER-PEÑA**, puso a órdenes de este Ministerio al prenombrado Peña por un período de sesenta (60) días contados a partir de la detención."

Para resolver acerca de la legalidad de la orden de detención con fines de extradición impugnada, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe determinar, si esta ha sido encausada por los canales diplomáticos idóneos y si está amparada por la ley.

El artículo IV del Tratado de Extradición de 1904 suscrito ente los Estados Unidos de América y la República de Panamá, prevé la extradición de criminales y en los siguientes términos:

"Artículo IV: Si el arresto o detención de un prófugo se desearen por parte telegráfico ó de otro modo, anticipándose a la presentación de las pruebas formales, la vía adecuada en los Estados Unidos consistirá dirigirse a un Juez u otro Magistrado autorizado para librar órdenes de arresto, en causas de extradición, y, en presentar una querella bajo juramento, según lo disponen las leyes de los Estados Unidos. Cuando en virtud de las prescripciones de este artículo, el arresto y detención de un prófugo se desearen en la República de Panamá la vía adecuada consistirá en dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual dispondrá abiertamente que se den los pasos necesarios para asegurar el arresto ó detención provisional del prófugo.

La detención provisional del prófugo cesará, y el preso será puesto en libertad, si dentro de dos meses contados desde la fecha de su arresto ó detención provisionales, no se hubiere formalizado, según las estipulaciones de este Tratado, la reclamación de su entrega

acompañada de las pruebas necesarias de su culpabilidad".

Los delitos relacionados con drogas son aquellos que permiten la extradición de sus autores de conformidad con el artículo 36 de la Convención Única de la Naciones Unidas sobre Narcotráfico, celebrada en Nueva York, el 30 de marzo de 1961 (Gaceta Oficial N° 14.832), la cual fue enmendada por el Protocolo de las Naciones Unidas fechado el 25 de marzo de 1972 (Gaceta Oficial N° 17.193); y tanto Panamá como los Estados de América son signatarios de la citada Convención Única de 1961 modificada por el Protocolo de 1972. El artículo 36 (2) (b) (i) de la citada Convención expresa que cada delito relacionado con drogas, incluyendo el delito de conspiración u ofensas de asociación ilícita para delinquir serán considerados como parte de delito sujeto a extradición en cualquier tratado de extradición entre las partes, adicional a lo estipulado en el artículo 6 de la Convención de Viena de 1988, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Sicotrópicas. En Panamá, son delitos el lavado de dinero que proviene del narcotráfico y la asociación ilícita para cometer delitos en general y delitos relacionados con drogas en particular.

En el expediente reposa la copia autenticada de la traducción extraoficial de la nota verbal N° 381 de 8 de mayo de 1996, por la cual la Embajada de los Estados Unidos de América, tal como lo estipula el artículo 4 del Tratado de Extradición de 1904, solicitó a través de la vía diplomática idónea para este tipo de requerimiento, la detención preventiva de José Master Peña con fines de extradición. Dicha nota señala lo siguiente:

> "Los hechos en este caso indican que en abril, 1996, José Master-Peña, junto con David Bright, produjeron aproximadamente 2.2 millones de dólares procedentes del narcotráfico para que fueran blanqueados a través de numerosas cuentas bancarias en los Estados Unidos por medio de transferencias telegráficas."

Consta a foja 1 del expediente de solicitud de extradición, la nota A. J. N° 460 de 8 de mayo de 1996, por medio de la cual el Ministro de Relaciones Exteriores solicitó al señor Procurador General de la Nación, la detención preventiva del ciudadano colombiano José Master-Peña, por el término de 60 días, contados a partir de la fecha que se produjera la detención con fines de extradición, tiempo en el cual el Estado requiriente debe formalizar su solicitud de extradición. (Cfr. Resolución 101 de 29 de agosto de 1994 por la cual se adopta el Texto Único de las Leyes 23 de 1986 y 13 de 1994).

En mérito de lo expuesto, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha llegado a la conclusión que la orden de detención con fines de extradición que sufre el señor José Master-Peña, no viola las normas constitucionales y legales que garantizan la libertad personal, ya que fue solicitada por los canales diplomáticos correspondientes, con fundamento en Convenciones Internacionales de las cuales la República de Panamá y los Estados Unidos de América son signatarios, y además de conformidad con la Resolución 101 de 29 de agosto de 1994, mediante la cual se adopta el Texto Único de las Leyes 23 de 1986 y 14 de 1994, antes citadas.

Los custodios del detenido José Master Peña deberán permitirle que se comunique con sus familiares y que reciba la atención médica necesaria, todo conforme a lo dispuesto en los reglamentos vigentes de seguridad y atención de los reclusos.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor José Master-Peña solicitada por el Ministro de Ralaciones Exteriores y que mantiene el Procurador General de la Nación mediante diligencia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TEÓFILO CHAMBER DACOSTA CONTRA LA MAGISTRADA SANDRA HUERTAS DE ICAZA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Samuel Mathews, ha presentado acción de habeas corpus en representación de JAIME TEÓFILO CHAMBERS DACOSTA en contra de la Magistrada Sandra T. Huertas de Icaza.

El señor Mathews fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

"PRIMERO: El joven JAIME TEÓFILO CHAMBERS DACOSTA, se encuentra desde el mes de octubre de 1995, bajo la detención preventiva a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia en atención al artículo 2588 y 2602.

SEGUNDO: El joven JAIME TEÓFILO CHAMBERS DACOSTA, se encuentra actualmente detenido en la Cárcel Pública de Colón de la Ciudad de Colón.

TERCERO: Desde el día 30 de noviembre de 1995, se presentó Recurso de Habeas Corpus a favor de JAIME CHAMBERS, hasta la fecha no se ha resuelto por el Tribunal Superior siendo violatorio a las garantías procesales previstas en su artículo 2579 del Código Judicial y las garantías constitucionales previstas en su artículo 21 siendo ilegal la detención preventiva.

CUARTO: En el caso que nos ocupa al librarse mandamiento de habeas corpus en contra del Fiscal Primero de Circuito de Colón Licenciado Manuel Suecari, contestó que fue dictado auto inhibitorio, toda vez que los involucrados son menores de edad.

QUINTO: En principio de las reglas fundamentales la Fiscalía Primera de Colón no es competente para juzgar a ningún menor de edad.

SEXTO: Y por lo tanto nos encontramos frente a un alto (sic) sin fundamento legal según el artículo 2566 del Código Judicial numeral 3°."

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra la Magistrada Sandra Huertas de Icaza del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, quien contestó mediante Oficio N° 198-I de 27 de mayo de 1996 lo siguiente:

"A) No ordené la detención de TEÓFILO CHAMBER DACOSTA.

B Y C) La respuesta va implícita en el punto A.

Ante este Tribunal el señor SAMUEL MATHEWS promovió demanda de Habeas Corpus contra el Fiscal Primero de Circuito de la Provincia de Colón y a favor de TEÓFILO CHAMBER DACOSTA, lo que motivó que el 1° de diciembre de 1995 se librase contra dicho funcionario el mismo.

La respuesta del funcionario acusado reposa a folio 5 de este cuaderno, razón por la cual es la misma fecha en que se puso de

> conocimiento a la Suscrita, esto es el 15 de marzo de 1996, se enderezó la demanda de habeas corpus contra el Juez Tercero de Circuito Penal de Colón (fs. 6). Incorporando dicho funcionario informes secretariales que reposan a fojas 7 y 8 del día 28 de marzo de 1996 dispone devolver la demanda de habeas corpus a este Segundo Tribunal Superior de Justicia (ver. fs. 9-10) este que es incorporada al cuaderno pertinente en la fecha.
>
> No es hasta el día de hoy con motivo de la demanda de habeas corpus relacionado con este caso en contra de mi persona y al hacerse las averiguaciones en secretaría que pasó el cuaderno pertinente al despacho de la ponente, con informe del Oficial Johnnie E. Guerra T., que se explica por sí solo (fs. 12-13)."

En relación con lo antes anotado observa el Pleno el Oficio N° 3231 de 7 de diciembre de 1995, rendido por el Fiscal Primero del Circuito de Colón para la Magistrada Sandra Huertas de Icaza en el que expone lo siguiente:

> 1. Mediante Oficio N° 3208, fechado 5 de los corrientes, remitió al Juzgado Segundo del Circuito de Colón, Ramo Penal, de Turno, el sumario seguido a JAIME TEÓFILO CHAMBERS DACOSTA y Otros, en donde solicitó fuera dictado AUTO INHIBITORIO, toda vez que los involucrados en este delito Contra la Salud son menores de edad.
>
> 2. No está demás expresarle que nuestro despacho, no decretó la detención preventiva de ninguno de los involucrados."

Finalmente, el Pleno también observa que en informe rendido por el Oficial Mayor de la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia visible a fojas 12 y 13 del expediente adjunto, se señala que mediante llamada telefónica efectuada a la Cárcel Pública de Colón, se pudo constatar que JAIME TEÓFILO CHAMBER DACOSTA está filiado desde el 29 de marzo de 1996 a órdenes del Juez del Tribunal Tutelar de Menores de Colón a través del Oficio N° 574.

Frente a la situación planteada, se deduce que en el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo como quiera que según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina.

Procede entonces, declinar el conocimiento de la presente acción de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Menores.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus interpuesta por el señor SAMUEL MATHEWS en representación de JAIME TEÓFILO CHAMBER DACOSTA. y DECLINA su conocimiento a el Tribunal Superior de Menores, para que se le dé el trámite que la ley establece.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con salvamento de voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ.

El recurso de habeas corpus está interpuesto contra la Magistrada Huertas.

Se trata de que la Magistrada Huertas conoce de otro recurso de habeas corpus y no lo ha decidido, como ponente, a pesar del tiempo transcurrido desde su interposición.

Es decir, estamos frente a "un habeas corpus de habeas corpus", que, obvio, no procede.

Debe, creo, rechazarse. En caso de una demora excesiva en la tramitación del primer habeas corpus, sería materia de queja y proceso disciplinario.

Por estas consideraciones salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO BATISTA GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Lilia María Casanova ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de JOSÉ ANTONIO BATISTA GONZÁLEZ, quien dice se encuentra detenido en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogido el negocio constitucional, **se libró el mandamiento de habeas corpus el 12 de abril de 1996** (f. 5), el que fuera contestado por la autoridad acusada mediante informe en el que simplemente se comunica que:

> "... nos corresponde únicamente indicar que este despacho de instrucción en ningún momento ha emitido orden de detención en contra del prenombrado ciudadano" (f. 9, subraya la Corte).

Aunado a lo anterior, aparece en el cuaderno informe rendido por el Secretario General de la Corte Suprema en el que se comunica que "ni en la sede de la Policía Técnica Judicial en la ciudad de Panamá, ni en la sede de la Policía Técnica Judicial en Colón, se encuentra detenida ninguna persona con el nombre de JOSÉ ANTONIO BATISTA GONZÁLEZ" (f. 11).

En mérito de la información anterior resulta imperativa la aplicación del artículo 2572 del Código Judicial, que señala que el procedimiento "cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal", lo que, en este caso, equivale a la comprobación de que no se encuentra detenido.

Por otro lado, no puede pasar por alto el tribunal de habeas corpus el hecho de que no fue sino hasta el **6 de junio** cuando la autoridad acusada rindió, en las tres líneas antes vistas, el informe que le fuera solicitado, esto es, casi **dos meses** después de librado el mandamiento, sin justificación alguna, lo que da cuenta de una conducta que infringe de manera flagrante los artículos 2580 y 2597 del Código Judicial, pero principalmente todo el fundamento filosófico de esta tutela extraordinaria del bien supremo de la libertad individual, con lo que el funcionario moroso se hace inclusive pasible de las sanciones previstas por la ley, cuando menos a una severa amonestación.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE de este procedimiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTÓN JAÉN GÓNDOLA CONTRA EL FISCAL DELEGADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS PARA LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ Y SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, ha ingresado a esta Superioridad, en grado de apelación, la acción de habeas corpus promovida a favor de ANTÓN JAÉN contra el Fiscal Delegado en Delitos Relacionados con Drogas, por el supuesto delito contra la Salud Pública.

Mediante fallo de 20 de mayo de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención preventiva de ANTÓN JAÉN. Contra la referida sentencia, el Licenciado VICTORIANO ARTURO GAVIDIA promovió recurso de apelación y lo sustentó en escrito que corre de fojas 18 a 20 de expediente principal, realizando un recuento cronológico de los hechos:

El accionante manifiesta que el 6 de mayo de 1996, aproximadamente a las 9:00 p. m., se realizó un allanamiento y registro en el cuarto N° 13 de la casa 7032, ubicada en Calle 9 y Avenida Central y Meléndez, de la Ciudad de Colón, por agentes del D. I. I. P. Continua relatando que el día 7 de mayo de 1996, le fue otorgado el poder por el sindicado JAÉN, y que hasta ese momento no se había dictado la providencia que ordenara la detención preventiva de su representado, por tanto, se apersonó al despacho de la Fiscalía el día 9 de mayo del año en curso, para solicitar copia formal del expediente. Finalmente expresa que el 10 de mayo de 1996, la Fiscal Delegada en delitos relacionados con Drogas se informa de la acción por él solicitada y dicha funcionaria presentó el informe respectivo, el 14 de mayo. Por último, se refiere a las testigos MARITZA TIOFIL y MARÍA TIOFIL que dan fe que el sindicado estuvo residiendo en el cuarto allanado. Así como también cita al otro testigo PETRA RODRÍGUEZ, ocupante del cuarto N° 12 del inmueble allanado, quien no sabía el nombre de su defendido pero, declaró que éste tenía llave del cuarto N° 13 antes comentado.

Por su parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fundamentó su fallo en las siguientes razones:

"...
El día 6 de mayo de 1996, funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de San Blas, realizaron un allanamiento en la residencia N° 7032, Cuarto N° 13, ubicada en la calle 9, avenida Central y Meléndez. Al frente de dicha residencia se encontró al Sr. Antón Jaén en actitud sospechosa.

Negó que viviese en ese cuarto. En el inmueble citado fueron encontradas cuatro cajetas de fósforos con 75 sobrecitos transparentes que contenían una sustancia presumiblemente droga y B/.18.00 en efectivo.

Maritza Tiofil Romero (fs. 25-28) señaló que tiene 20 años de conocer al Sr. Antón Jaén. Agregó que en el cuarto vivió su madre

hasta el 27 de abril de 1993, luego el Sr. Antón le solicitó un lugar para vivir porque tenía problemas con su esposa, ella se lo prestó, pero en abril le notificó que no vivía ya en dicho lugar, pero no le entregó las llaves.

María Tiofil (fs. 29-30) reitera los conceptos vertidos por Maritza Tiofil en el sentido de que le prestaron la llave del cuarto de su madre a Antón Jaén. Agregó que para el mes de abril, el señor ya no residía en el cuarto, pero se enteró que en la noche llegaba y estaba siempre en actitud sospechosa.

Petra Rodríguez Meléndez (fs. 31), vecina del lugar, señaló que Antón Jaén tiene dos años de estar entrando y saliendo del cuarto que fue allanado.

Luego de analizadas las constancias procesales, se procederá a resolver la encuesta.

Los argumentos esgrimidos por el Licdo. Gavidia no sólo resultan endebles sino que carecen de veracidad, al afirmar que el inmueble allanado no es la residencia del imputado y que no se encontraba en el lugar ya que, de acuerdo al acta de allanamiento, el procesado fue encontrado en las cercanías del cuarto y vecinos del lugar han señalado que tenía alrededor de dos años de visitar el cuarto e incluso las hermanas Tiofil señalaron que le habían prestado el cuarto a Jaén".

En cuanto al funcionario acusado con la presente acción de habeas corpus, al rendir el informe que se le requirió acerca de su actuación, expresó lo siguiente:

"**PRIMERO:** Que en efecto, esta Fiscalía Delegada de Drogas ordenó la DETENCIÓN PREVENTIVA DE ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, mediante Providencia fechada seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), por la comisión del delito "CONTRA LA SALUD PÚBLICA".

SEGUNDO: Los hechos que fundamentan la detención se basan en la Diligencia de Allanamiento realizada por este Despacho en compañía de la Sub-Diip de la Zona de Policía de Colón, en la residencia 7032, cuarto N° 13, ubicada en calle 9 Ave. Central y Meléndez, donde un tal "ANTÓN", en la cual se incautó setenta y cinco (75) sobrecitos plásticos transparentes contentivos de polvo blanco que se presume sea "COCAÍNA", deteniéndose en los predios de la misma al Sr. ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, supuesto habitante del inmueble allanado.

TERCERO: Actualmente ANTÓN JAÉN GÓNDOLA se encuentra a órdenes de este Despacho y a partir de la fecha se encuentra a su disposición.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Debemos hacer la salvedad al Tribunal Sustanciador de la Presente Acción, que como se desprende de la Diligencia de Allanamiento y Registro practicada el día seis (6) de mayo del año en curso, el imputado manifestó en dicha diligencia que no vivía en dicho lugar; situación ésta, que fuere desmentida con posterioridad por la señora MARITZA TIOFIL ROMERO, quien expresó que el encartado vivía en el cuarto en el cual se incautó la sustancia presuntamente ilícita; toda vez que éste, por supuestos problemas con su mujer, le pidió a aquella el favor de dejarle su cuarto, concediéndole la misma sus llaves (Fs. 25-28)".

Consta a foja 2 del expediente la providencia decretada por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de fecha 6 de mayo de 1996, por medio de la cual se ordena la diligencia de allanamiento y registro en la Calle 9 entre Central y Meléndez, casa 7032, cuarto N° 13, Ciudad de Colón.

Al momento de verificarse la diligencia, tal como consta en el expediente que contiene las sumarias intruídas contra ANTÓN JAÉN, se lee a foja 6 que el agente ADONIO CASTAÑEDA:

> "... señaló al sujeto el cual era sospechoso, el cual procedimos a su registro no encontrándosele nada en el momento, más tenía una actitud de nerviosismo y al decirles que nos llevara a su vivienda se negó diciendo que el no vivía ahí que vivía en otro lugar, más en dicha residencia el candado de la puerta estaba abierto y la luz del cuarto estaba prendida, también había un abanico prendido, viejo; ya en el lugar procedimos a tocar la puerta para ver si había alguna persona más nadie respondía procedimos a entrar sin utilizar la fuerza y al empezar el registro encontramos una cajeta de fósforo marca El Gavilán, con seis (6) envoltorios plásticos transparentes que en su interior contienen una sustancia blanca que presumiblemente sea la droga conocida como cocaína, puesta en un aparador de madera pequeño que está al lado de la puerta, prosiguiendo la búsqueda se encontró, tres cajetitas más de fósforo, una marca LUCKY STRIKE con doce (12) envoltorios plásticos con una sustancia blanca que se presume sea la droga conocida como cocaína, una cajetita marca Malboro había la cantidad de 24 envoltorios cuatro (4) grandes y veinte (20) más chicos todos transparentes y con una sustancia blanca que se presume sea la droga conocida como cocaína otra con 33 envoltorios treinta y tres, en una cajetita de fósforos Malboro Lights color blanco con verde, en total se encontraron 75 pases de cocaína setenta y cinco, las tres últimas cajetas fueron encontradas en una repisa de madera de dos tablillas en una taza plástica color rosado, el secretario ad-hoc encuesta al sujeto el cual es sospechoso y señala lo siguiente: se llama ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, céd. 3-66439, el sujeto tenía en su poder al momento de su aprehensión dieciocho (18) balboas detallados de la siguiente manera: trece (13) billetes de a un balboa y un billete de cinco (5) balboas el sujeto ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, el cual manifestó que no vive en ese lugar y no es el dueño de la misma ...".

Para resolver acerca de la legalidad de la orden de detención impugnada, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, debe determinar si la misma ha sido emitida de conformidad con lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y las normas constitucionales que garantizan la libertad personal.

Los artículos 2148 y 2159 de la citada excerta legal, disponen que sólo se podrá decretar detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades legales, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos (2) años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, y que la detención preventiva haya sido decretada por el funcionario competente en diligencia por escrito, en la cual el funcionario de instrucción deberá expresar el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y aquellos que figuren en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

Esta Corporación de Justicia estima que se han cumplido los presupuestos señalados en los artículos 2149 y 2159 del Código Judicial. La Fiscal Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón, Licenciada AMINTA MARIELA CORRO N., decretó la detención preventiva del señor ANTÓN JAÉN GÓND0LA, mediante diligencia de 8 de mayo de 1996 (fs. 12-13). En dicha diligencia se expresa la comisión del delito contra la Salud Pública. cuya pena tiene señalada de dos a cinco años de prisión; los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; la incautación de un total de SETENTA Y CINCO (75) envoltorios plásticos transparentes que contienen en su interior una sustancia blanca que se presume sea la droga conocida como "COCAÍNA"; los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena; la diligencia de allanamiento practicada por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en asocio con el Oficial Mayor del Despacho, VÍCTOR MARTÍN QUIJADA, actuando como Secretario Ad-hoc y en compañía de los agentes Placa 7112 MARIO CABRERA y 7257 CASTAÑEDA ADONIO, quienes fungieron como testigos actuarios.

Cabe señalar también las declaraciones de las señoras MARITZA TIOFIL ROMERO (fs. 25-28), MARÍA ANTONIO TIOFIL ROMERO (fs. 29-30), y PETRA RODRÍGUEZ MELÉNDEZ (fs. 31-32) quienes señalan a ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, como la persona que habitaba el cuarto 13 allanado y en la cual se incautó droga, asegurando que el prenombrado JAÉN GÓNDOLA tenía llave del referido inmueble.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia se ajusta a derecho y debe ser confirmada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 20 de mayo de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual DECLARA LEGAL la detención de ANTÓN JAÉN GÓNDOLA, ordenada por la Fiscal Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de San Blas, mediante providencia de 6 de mayo de 1996 y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de San Blas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIO Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Daniel Ramírez Lasso ha presentado acción de habeas corpus preventivo a favor del señor **NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIO**, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

El apoderado judicial del señor URRIOLA alega que la orden de detención fue proferida por la autoridad acusada, "en virtud de petición elevada por la Agencia de la Policía Técnica Judicial en Vacamonte, dentro del expediente sumarial que se sigue en virtud de la denuncia por robo interpuesta por los representantes de la empresa COISA, S. A.", orden que aún no se le ha presentado al señor URRIOLA.

Se libró mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Auxiliar de la República, quien respondió mediante Oficio N° 8979 de 6 de junio de 1996, en el que informa lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención preventiva del señor **NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIOS.**
>
> 2. No tiene razón de ser, en base a la respuesta anterior.
>
> 3. No tenemos bajo nuestra custodia ni órdenes a la persona supra señalada. Pero es de señalar que, mediante investigaciones realizadas por el Despacho, esta persona es requerida por la Policía Técnica Judicial, Agencia de Vacamonte, en virtud de las sumarias iniciadas por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, según denuncia N° SAV-

2A-035-96." (Foja 5).

Del informe transcrito se colige que el señor NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIOS es requerido por la Policía Técnica Judicial del área de Vacamonte, por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio, razón por la cual la Corte carece de competencia para conocer de la presente acción constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor NÉSTOR ARIEL URRIOLA PALACIOS, ante el Juzgado Municipal de Arraiján, para los fines legales pertinentes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES BRUNO BEMPORAD, SALVADOR MORALES RICO Y MARITZA RAMOS DE MATTADEN EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de esta Máxima Corporación Judicial conoce de la Acciones de Habeas Corpus presentadas a favor de los señores **BRUNO BEMPORAD**, **SALVADOR MORALES RICO y MARITZA RAMOS DE MATTADEN**, directivos del Banco Agro-Industrial de Panamá, contra el señor Procurador General de la Nación, por considerar que la orden de detención preventiva dispuesta por el citado funcionario del Ministerio Público a través de la Resolución de 6 de junio de 1996, es ilegal.

Las acciones incoadas fueron acumuladas por orden del Magistrado Sustanciador mediante proveído de 11 de junio de los corrientes, con el fin de mantener la unidad de la causa, toda vez que recaen en el mismo objeto procesal.

Una vez acogidas las acciones y librado el mandamiento de Habeas Corpus respectivo en cada caso, mediante memorial N° DPG. 724-96 de 11 de junio de 1996 se contesta el libramiento en el caso del Señor **BRUNO BEMPORAD MAESTRE**; mientras que mediante memorial DPG-735-96 de 12 de junio de 1996 se contesta el libramiento de habeas corpus en el caso de MANUEL SALVADOR MORALES y MARITZA RAMOS DE MATTADEN.

A. ORDEN DE DETENCIÓN DE BRUNO BEMPORAD

a) Imputaciones específicas en las sumarias

El señor **BRUNO BEMPORAD MAESTRE**, quien hasta inicios del año 1996 se desempeñaba como Gerente General del Banco Agro-Industrial de Panamá, había sido sometido a las medidas cautelares contenida en los literales **b) y c)** del artículo 2147-B del Código Judicial, esto es, la de comparecencia periódica al Despacho de la Procuraduría General de la Nación y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Estas medidas fueron dispuestas mediante resolución de 22 de marzo de 1996 por el Procurador General de la Nación, por razón de las sumarias iniciadas para

establecer la probable comisión de hechos delictivos relacionados con las actividades desarrolladas por altos directivos y dignatarios del banco Agro-Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO), en perjuicio de los cuentahabientes de dicha institución bancaria.

La noticia criminis sobre la probable comisión del delito genérico de Estafa y otros fraudes se produce a raíz de la intervención bancaria decretada en relación a BANAICO el 23 de enero de 1996, y de informes de auditoría realizados en la citada institución bancaria, a partir de los cuales se pudo detectar que a través de sus mandos directivos y gerenciales se realizaban actividades tendientes a la alteración de los estados financieros del banco que fueron publicados y que revelaban operaciones que motivaban mayor confianza en la institución bancaria, como lo eran las operaciones de window dressing, back to back y de booking, prácticas restringidas por la Comisión Bancaria Nacional.

Según se desprende de las investigaciones iniciales, la inducción dolosa al error fue realizada, entre otras, por el señor **BRUNO BEMPORAD** mediante los mecanismos antes expresados, valiéndose de su posición gerencial en la institución para llevar a cabo situaciones que aparentemente eran de tipo bancario, pero que en realidad constituían una acción delictiva en perjuicio de los cuentahabientes, tales como entrega de préstamos sin garantías lo que incidió en la descapitalización del banco, autorización de sobregiros en favor de empresas de BANAICO y del señor SALVADOR MORALES (Presidente del Banco), concesión de préstamos personales por importantes sumas de dinero al señor MORALES y a la señora DE MATTADEN (Sub-gerente), aperturas de cuentas corrientes, de ahorro y de plazo fijo sin el debido respaldo documental, etc.

b) Fundamentos de la Acción de Habeas Corpus

La señora GRACIELA DE BEMPORAD, esposa del detenido, presentó Acción de Habeas Corpus a favor del prenombrado **BRUNO BEMPORAD**, invocando en lo medular las circunstancias de que su esposo había cumplido con las medidas cautelares dispuestas por el Señor Procurador hasta el momento en que, de manera inexplicable, se ordenó su detención preventiva, imputándosele los delitos de Estafa y de Asociación Ilícita para delinquir.

Según narra la promotora de la acción, estos delitos no tienen contemplada pena mínima de dos años de prisión, por lo que la medida adoptada resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial, norma legal que prevé la procedencia de la medida cautelar de detención preventiva sólo en aquellos casos en que el delito investigado tenga pena mínima de prisión de dos años.

Adicionalmente se argumenta que la medida adoptada no sólo es ilegal sino también injusta, por cuanto no existen evidencias sobre la vinculación objetiva o subjetiva del señor **BRUNO BEMPORAD** con los delitos investigados.

c) Fundamento legal de la medida de detención preventiva

El Señor Procurador General de la Nación, al contestar el libramiento de Habeas Corpus, ha señalado que la medida de detención preventiva ha sido dispuesta en este caso, por las consideraciones que se reproducen de seguido:

> "Como resultado de esta investigación, se ha podido determinar que los directivos y ejecutivos de BANAICO, en detrimento de los cuentahabientes, ejecutaron de manera continuada una serie de acciones dolosas las cuales llevaron al estado de liquidez al banco en beneficio de terceros, e incluso como podrá observarse del estudio del dossier, se realizaron operaciones criminosas bancarias, tendientes a proteger dineros que provenían del narcotráfico, lo que nos ha hecho ver la existencia de una ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, por parte de los imputados, entre ellos el señor **BEMPORAD MAESTRE**, quien en su condición de Gerente General, participó en los ilícitos ya antes mencionados.

> Tomando en consideración la gravedad de las figuras ilícitas observadas, y en virtud de que existe conexidad entre ellas, conforme a lo establecido en el artículo 2001 del Código Judicial, conceptuamos oportuno ordenar DETENCIÓN PREVENTIVA, en contra de aquél a efecto de garantizar su presencia durante el proceso."

B. ORDEN DE DETENCIÓN DE MARITZA RAMOS DE MATTADEN Y MANUEL SALVADOR MORALES RICO

El Señor MANUEL SALVADOR MORALES RICO fungía como Presidente de BANAICO al momento de su intervención, mientras que la señora DE MATTADEN se desempeñaba como la Sub-gerente de la institución bancaria.

En las sumarias, los prenombrados han sido igualmente vinculados a la comisión de delitos de estafa, otros fraudes y Asociación Ilícita para Delinquir, por ser el señor MORALES quien de manera absolutista dominaba la Junta de Accionistas de BANAICO y trazaba las políticas del mismo. La señora Sub-gerente, dado su alto puesto directivo, colaboraba con la instrumentalización de las operaciones realizadas.

a) Fundamentos de la Acción de Habeas Corpus

La defensa técnica de los señores **MATTADEN y MORALES RICO**, ejercida por la firma forense **RUBIO, ALVAREZ, MIZRACHI & DÍAZ**, ha fundado la acción presentada con base en los siguientes puntos:

1. Que sin existir suficientes elementos de prueba que vincularan a los prenombrados con los delitos de Estafa y otros fraudes cuya investigación inició la Procuraduría General de la Nación a raíz de la intervención de BANAICO el 23 de enero de 1996, éstos fueron llamados a declaración indagatoria y sometidos a medidas cautelares que restringían su libertad ambulatoria.

2. Que pese a manifestarse inconformes con las providencias tomadas por el Ministerio Público, la señora DE MATTADEN y el señor MANUEL SALVADOR MORALES habían venido cumpliendo de manera cabal con las medidas cautelares impuestas, hasta el momento en que de manera sorpresiva se dispone ordenar la detención preventiva de los prenombrados.

3. Que la imposición de esta medida resulta abiertamente violatoria a lo previsto en el artículo 2148 del Código Judicial, por cuanto los delitos en los cuales se encuentran sindicados sus patrocinados, esto es: Estafa y Asociación Ilícita para Delinquir, tienen penas de prisión que oscilan entre 6 meses a 2 años y de 1 a 3 años de prisión, respectivamente.

4. Se citan numerosos precedentes jurisprudenciales de esta Máxima Corporación Judicial en los cuales se ha establecido de manera general y reiterativa, que conforme al artículo 2148 del Código de procedimiento penal, sólo es susceptible la aplicación de detención preventiva como medida cautelar, cuando se trate de delitos cuya sanción mínima imponible supera los dos años de prisión.

5. Como aspectos de fondo relacionados con los delitos que se les imputan, la defensa técnica ha manifestado que las operaciones realizadas por la directiva de BANAICO sólo eran prácticas bancarias encaminadas a mejorar la imagen financiera del banco, y a tratar de lograr mantener la liquidez del mismo evitando su colapso, pero que no constituyen delito alguno.

6. Finalmente realizan una petición formal a esta Superioridad, en el sentido de que se revoque la medida cautelar personal de detención preventiva, arguyendo que **"tanto el señor Manuel Salvador Morales Rico como la señora Maritza Ramos de Mattaden residen con su familia en Panamá y tienen la firme voluntad de hacerle frente a la presente investigación y demostrar que no han cometido delito ni han tenido la intención de causar perjuicios económicos a los cuentahabientes de BANAICO, por lo que la medida decretada no tiene razón de ser, es más, consta en el expediente toda la cooperación que han ofrecido y brindado en el proceso de intervención e igualmente su cooperación y lealtad procesal"**

b) Fundamentos de la detención preventiva ordenada por el Procurador General de la Nación.

El señor Procurador General de la Nación, al contestar el libramiento de habeas Corpus, ha manifestado al Tribunal lo siguiente:

> "Como resultado de esta investigación, se ha podido determinar que tanto **RAMOS DE MATTADEN como MORALES RICO**, en su condición de Sub Gerente y Presidente de BANAICO respectivamente, ocultaron la realidad sobre el encaje legal que debía remitirse mensualmente a la Comisión Bancaria. Igualmente, éstos imputados, en virtud de las posiciones que ejercían en la entidad bancaria, lograron en beneficio de sus propios intereses y de terceros utilizar de manera dolosa, mucho más allá de una simple `transacción bancaria', los dineros que de buena fe los cuentahabientes depositan en BANAICO. Se observa además tal cual como consta en el dossier, que tanto **RAMOS DE MATTADEN Y MORALES RICO**, forman parte del Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá, (BANAICO) S. A., desde sus inicios, escalando posiciones de suma confianza al grado tal que la llevaron a realizar acciones no propias de su cargo, como se desprende de la declaración del señor Aurelio Alonso Mójica.
>
> En el dossier, así mismo, se aprecia que el Banco presidido y dirigido por los imputados, ejecutaban de manera continuada acciones tendientes a resguardar dineros provenientes del narcotráfico; como podrá observarse de la certificación que remitiera la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionadas con Drogas a este Despacho Superior del Ministerio Público, ubicando inmediatamente la conducta de estos sumariados en la de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, vinculada con los delitos de ESTAFA y CONTRA LA SALUD PÚBLICA."

EXAMEN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Una vez atendidos los argumentos de las partes interesadas, así como la del funcionario que ordenó la medida cautelar impugnada, esta Superioridad está en condiciones de externar lo siguiente:

En primer término ha de quedar establecido que la detención preventiva dispuesta el 6 de junio de 1996 tenía como fundamento legal, la vinculación de los detenidos **BEMPORAD**, **MORALES Y DE MATTADEN** con los delitos genéricos de Estafa y Asociación Ilícita para delinquir en perjuicio de los cuentahabientes de BANAICO.

Se presentan en la extensa resolución que dispone la detención preventiva, un serie de argumentaciones relativas a irregularidad de las operaciones bancarias realizadas por BANAICO a través de sus principales directivos, especialmente del señor MANUEL SALVADOR MORALES, Presidente de BANAICO, quien ha sido identificado como el eje o control de la sociedad bancaria. Esta llamadas "operaciones bancarias irregulares" fueron descubiertas a raíz de la intervención bancaria, que fue solicitada por la propia directiva de BANAICO, y la documentación que dice relación con dichas operaciones reposa en los seis tomos que componen el legajo sumarial.

Según manifestare el señor Procurador al momento de adoptar la medida de detención preventiva contra los prenombrados y ahora detenidos, a los delitos ya mencionados les corresponde una sanción punitiva cuyo mínimo no superaba los dos años de prisión; sin embargo, en aplicación de una interpretación realizada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y de un precedente de la propia Corte Suprema calendado 3 de marzo de 1995, consideró perfectamente aplicable la detención preventiva en este caso.

Examinemos la situación jurídica debatida en la resolución de 3 de marzo de 1995, cuando el Pleno de la Corte Suprema, dentro de una acción de habeas corpus, declaró legal la detención preventiva dispuesta dentro de sumarias seguidas por un delito calificado provisionalmente como "actos libidinosos" y al

cual corresponde una penalidad cuyo quantum mínimo no supera los dos años de prisión: Se trataba de un sujeto activo que realizó, mediando violencia e intimidación, una serie de actos de carácter sexual contra una ciudadana, además de perpetrar robo contra su víctima. Esta persona tenía a su haber, un prontuario de querellas penales en su contra por variados delitos de agresión física y de orden sexual, incluyendo violación carnal.

Como quedó claramente expuesto en la resolución comentada, se trataba de una persona con evidentes rasgos de peligrosidad, quien mediante engaños, sometía a sus víctimas a abusos bajo intimidación, amenazas y el uso de la fuerza física. De allí, la necesidad imperiosa de adoptar una medida cautelar cónsona con la personalidad del sumariado. Por ello, se mantuvo la medida de detención preventiva en aplicación del texto del artículo 2147-C del Código Judicial, específicamente del literal c) que establece la permisibilidad de aplicar medidas cautelares cuando **"por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal".**

Evidentemente, el texto legal aplicado (a. 2147-C del Código Judicial) encaja de manera armoniosa con las características específicas del caso que se ventilaba en ese momento. Por lógica-jurídica, este precedente no puede resultar aplicable a todos los casos en que el delito imputado tiene una penalidad mínima inferior a los dos años de prisión, máxime cuando existe una norma legal posterior y especial, que regula específicamente cuándo y en qué condiciones es procedente la aplicación de la medida cautelar personal de mayor severidad, esto es, la detención preventiva.

Los criterios para la aplicación de medidas cautelares por parte de las autoridades jurisdiccionales o las de instrucción, se encuentran trazadas en el propio Código de procedimiento penal (a. 2147-D y a. 2148); entre algunos lineamientos importantes contenidos en dichas normas podemos extraer:

1. que al aplicar las medidas cautelares tanto el juez como el funcionario de instrucción deben evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto;

2. debe existir cierta proporcionalidad entre la medida cautelar que se disponga y la sanción que podría ser impuesta al imputado;

3. la detención preventiva en centros carcelarios sólo deberá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resulten inadecuadas;

4. sólo en caso de que el delito imputado tenga señalada pena mínima de prisión inferior a dos años, o exista flagrancia en el delito, puede decretarse la detención preventiva.

A esta Superioridad no escapa la profunda trascendencia que en el ámbito social y comercial del país ha tenido el descalabro de la entidad bancaria intervenida, donde los principales perjudicados resultan ser los cuentahabientes de la entidad. La gravedad de las imputaciones contra los directivos de BANAICO, y la importancia del bien jurídico tutelado es innegable.

Sin embargo, las garantías contra la privación de libertad corporal establecidas a través de la Constitución y la Ley, merecen una tutela igualmente efectiva.

La Corte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial y de los lineamientos generales contenidos en el artículo 2147-D del mismo cuerpo legal, ya comentados, ha venido reiterando de manera homogénea, salvo aquellas variantes que estén permitidas y encajen en los supuestos legales a manera de excepción, como sería el ventilado en la resolución de 3 de marzo de 1995, que cuando se trate de delitos cuya sanción mínima no supere los dos años de prisión, la medida privativa de libertad se encuentra falta de legitimidad.

Los delitos de Estafa y Asociación Ilícita que se les imputaron a los

señores **BEMPORAD, DE MATTADEN Y MORALES**, y por los cuales se ordenó la detención preventiva, tienen asignada una pena mínima que en ninguno de los casos supera los dos años de prisión. Por ende, la medida cautelar de detención preventiva no tiene procedencia.

En la contestación del libramiento, el Procurador General introduce dos elementos para justificar la adopción de la medida de detención preventiva, no contemplados en la resolución que ordenó la misma: esto es, que por existir conexión y pluralidad delictiva, el quantum acumulativo de las penas implicaría una sanción mínima que supera los dos años de prisión; y el otro elemento, singularmente importante, es la de incluir entre los delitos imputados a los prenombrados, los delitos contra la salud pública, por cuanto se vincula las operaciones dirigidas por los directivos de BANAICO con las actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

En cuanto al primer punto esbozado cabe señalar, que este Tribunal, mediante sentencia de habeas corpus de 22 de abril de 1994, y en aplicación al parámetro previsto en el artículo 2147-A del Código Judicial en el sentido de que no deben aplicarse medidas cautelares tomando en consideración la pena que pudiera ser impuesta a un imputado, indicó: **"la ponderación de la penalidad aplicable sólo puede hacerla el juez al momento de analizar las circunstancias concretas del caso, y aplicar las disposiciones de acumulación jurídica de la pena contemplada en el artículo 64 del Código Penal para los casos de concurso real o material de hechos punibles"**

Tal y como hemos indicado con anterioridad, no corresponde a esta instancia realizar cálculos proyectivos ni ponderaciones sobre cuál sería la penalidad aplicable en el evento de que los ahora sindicados resultaren condenados; ello es una actividad propia, única y exclusiva del juzgador, quien al momento de declarar la responsabilidad criminal tiene consigo la evaluación objetiva y subjetiva de las circunstancias agravantes o atenuantes que concurren en la comisión del ilícito.

Surgen en esta etapa, las imputaciones concretas de que los sindicados han ejecutado acciones tendientes a resguardar dineros provenientes del narcotráfico y que tienen relación directa con la organización criminal dirigida por el ciudadano colombiano JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, circunstancia que según la Máxima autoridad del Ministerio Público se desprende de una certificación acopiada al expediente sumarial, aportada por la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas.

La referida certificación obra a folios 2215 y siguientes del Tomo VI del legajo sumarial. Por su evidente trascendencia, procedemos a reproducir el contenido del documento:

> "Las investigaciones, hasta ahora adelantadas, reflejan que esta organización usó los servicios de instituciones bancarias en las cuales se abrían cuentas de diferentes clases con la finalidad de depositar los dineros producto de sus actividades ilícitas.
>
> En este mismo sentido, las investigaciones nos indican que en el BANCO AGRO-INDUSTRIAL DE PANAMÁ (BANAICO), se registró el mayor número de cuentas pertenecientes a esta Organización Criminal, donde hasta el momento se han acreditado la existencia de 35 cuentas, todas a nombre de personas vinculadas a la organización de Castrillón Henao.
>
> También, es importante señalar que algunas de esta cuentas fueron abiertas con nombres distintos, pertenecientes a la misma persona, como es el caso de la cuenta abierta a nombre de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, JORGE CORTEZ, y RUBÉN BURCIAGA, nombres falsos usados por Castrillón Henao.
>
> La mayoría de las cuentas identificadas en BANAICO fueron manejadas por IRASEMA SUBIA a quien este despacho, mediante providencia

fechada 27 de mayo, ordenó recibirle declaración indagatoria.

Muchas de las cuentas pertenecientes a los miembros de esta Organización Criminal están incompletas, pues los documentos que amparan su movimiento o actividad desaparecieron presumiblemente antes de su intervención."

Toda la documentación relativa a la apertura de cuentas por parte del señor CASTRILLÓN HENAO reposaba en las oficinas y archivos de la señora IRASEMA SUBIA (f. 2243 Tomo VI), quien manifestó ser la custodia dichos documentos.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas dispuso recibirle declaración indagatoria a la señora SUBIA (fojas 2247 y siguientes del expediente), quien ha manifestado ser la encargada de apertura y manejo de cuentas, y que dichas operaciones se realizaron siguiendo el curso normal de los negocios de la entidad bancaria, con apego a las reglamentaciones y políticas bancarias.

La única mención o asociación que se realizó entre BANAICO y las actividades de narcotráfico en la resolución que ordenó la detención de los señores directivos del Banco, es precisamente que se había allegado proveniente de la Fiscalía de Drogas, información de que en BANAICO se encontraban cuentas relacionadas con el narcotráfico.

De lo anterior se desprende que en esta instancia, aún no se establece una conexión directa entre los directivos del banco y las cuentas abiertas por JOSÉ CATRILLÓN HENAO.

De cualquier forma, es un hecho público que la organización criminal investigada mantenía cuentas en otras instituciones bancarias, y la procedencia de los fondos se encuentra en una fase de investigación.

Consideramos que es procedente, al menos en esta etapa, separar las imputaciones que se endilgan a las personas detenidas, por cuanto los cargos que se presentaron para justificar la adopción de la medida cautelar de detención preventiva cuya legalidad se examina, decían relación con operaciones irregulares de los directivos de BANAICO que podían configurar los delitos de Estafa y Asociación Ilícita para delinquir en perjuicio de los cuentahabientes del mismo.

Con posterioridad, se allegan al sumario ciertas piezas de la investigación que adelanta la Fiscalía Especializada en Drogas en relación con la presunta organización criminal de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, y a partir de la cual se ha establecido la existencia de cuentas bancarias de personas relacionadas con el prenombrado en BANAICO.

En estricto derecho se advierte, con base a los documentos que reposan en el legajo sumarial remitido por la Procuraduría General de la Nación, que la investigación sobre la participación de BANAICO en las actividades de la organización criminal se encuentran en una fase incipiente, sin que se hayan establecido hasta el momento factores de conexión entre las actividades presuntamente delictivas de la organización y los directivos de BANAICO.

En este contexto, corresponde a la agencia de instrucción ahondar en estos aspectos, para determinar si efectivamente las cuentas bancarias fueron abiertas por instrucciones de los altos mandos de BANAICO con conocimiento de la posible procedencia ilícita de los dineros depositados, o si de alguna manera la entidad bancaria fue sorprendida en su buena fe, por tratarse de operaciones corrientes realizadas por todas las entidades de crédito.

Nada impide sin embargo, que estas consideraciones sean nuevamente evaluadas, de allegarse nuevos y más concluyentes elementos de convicción que asocien a los señores BEMPORAD, MORALES y DE MATTADEN con delitos contra la salud pública.

En estas condiciones, esta Superioridad conceptúa que la medida de detención preventiva no se justifica, al menos en esta etapa, dado que los

delitos imputados a los sindicados de manera concreta: Estafa y Asociación Ilícita, efectivamente no tienen asignada pena mínima de dos años de prisión, siendo que su penalidad oscila entre los seis meses y dos años de prisión y entre uno y tres años de prisión, respectivamente. Por ello, la Corte Suprema, en estricto apego a la ley, está obligada a considerar sin fuerza legal la medida cautelar de detención preventiva aplicada, por resultar contraria a lo previsto en el artículo 2148 del Código Judicial en concordancia con los artículos 190 y 242 del Código Penal.

Por otro lado, la preocupación del señor Procurador General en cuanto a asegurar la comparecencia de los imputados a un eventual proceso puede solventarse, en la medida de que se mantengan las medidas cautelares previamente aplicadas y que se habían venido cumpliendo de manera cabal, o incluso disponiéndose una de mayor rigurosidad, como lo sería la obligación de mantener recluido a los sindicados en su propia residencia. Esta última decisión puede ser perfectamente asumida por el Máximo Despacho del Ministerio Público, sin perjuicio de lo que se dispone en esta resolución judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la orden de privación de libertad de los señores BRUNO BEMPORAD MAESTRE, MARITZA RAMOS DE MATTADEN y MANUEL SALVADOR MORALES RICO, y ORDENA que se mantengan las mediadas cautelares personales contenidas en los literales a) y b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN HERNÁNDEZ QUINTERO CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al ingresar a esta Corporación de Justicia la acción de Habeas Corpus propuesta por **EDWIN HENRÍQUEZ QUINTERO** a su favor contra **LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN**, se libró mandamiento contra dicha funcionaria, quien respondió lo siguiente:

No ordenó la detención de **Edwin Henríquez Quintero** y por tal motivo no puede hacer referencia a los fundamentos de hecho y de derecho que la autoridad competente tuvo para ello. Pero que el señor Henríquez sí se encuentra bajo su custodia porque fue condenado por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá a cumplir pena de dos años de prisión por la comisión del delito de **FALSEDAD** de Documentos en General en perjuicio del señor **SERGIO CAMAÑO**, mediante sentencia de 30 de septiembre de 1993. La sentencia de marras señala que el imputado fue declarado en rebeldía, por lo que el tribunal ordenó notificarle la sentencia según lo previsto en el artículo 2419 del Código Judicial.

Agrega la Directora de Corrección que del Centro Penitenciario **La Joya** se le informó que el sindicado ingresó a la Cárcel Modelo el 1° de febrero de 1995 a cumplir su condena. Las dos terceras de la apena las cumple el 1° de junio de 1996 y su totalidad el 1° de febrero de 1997.

Por su parte el accionante señala que fue ilegalmente detenido desde el 9 de enero de 1995, por el supuesto delito de falsedad; que el Juzgado Décimo Segundo ha cometido una injusticia en su contra, pues se le juzgó en ausencia, sin que se le haya hecho ningún tipo de notificación, sin pruebas legales violándose con ello el debido proceso.

A juicio de la Corte para efectos de este caso la acción de habeas corpus resulta improcedente e ineficaz, pues la persona ya fue juzgada y condenada, por lo que su detención está legalmente fundamentada en el fallo judicial dictado por autoridad competente. Las argumentaciones del recurrente tampoco son coherentes con los presupuestos mínimos necesarios para acceder a este tipo de acción constitucional, según los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución y los artículos 2565, 2566 y concordantes del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor EDWIN HENRÍQUEZ QUINTERO y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL GUARDIA REYNA, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Horacio Ramsey Morales, en representación de **GABRIEL GUARDIA REYNA**, presentó acción de habeas corpus contra la orden de detención emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, alegando que desconoce la razón de la detención de GABRIEL GUARDIA REYNA, a quien se le confunde con un sindicado de nombre **RAFAEL BONILLA REYNA**, a quien se le encausa por el delito de homicidio de **RAÚL GIOVANY CEDEÑO** y **EVARISTO JURADO.**

Por cumplidas las reglas de reparto, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada a fin de que dentro del término de dos horas, rindiera el informe a que se refiere la ley que regula esta materia.

El 10 de junio, mediante oficio N° 143-SF, el licenciado Wilfredo Sáenz, en su calidad de Magistrado Ponente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, informó que si bien no había ordenado la detención preventiva de GABRIEL GUARDIA REYNA, quien responde también al nombre usual de RAFAEL BONILLA REYNA, alias "Tito Capito", mediante auto de 31 de agosto de 1995, mantuvo la detención al llamarlo a responder por violación de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, o sea, por el delito de homicidio doloso.

Además del informe al que se ha hecho referencia, se remitió el expediente contentivo del proceso que consta de 151 fojas útiles y en el que se puede apreciar el contenido del oficio AL-272-96 de la Gobernación de la Provincia de Panamá, en el que pone a órdenes del Ministerio Público al ciudadano GABRIEL GUARDIA REYNA, con cédula de identidad personal N° 8-481-887, por estar sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de RAÚL GIOVANY CEDEÑO y EVARISTO JURADO.

También aparece copia de la nota de 5 de junio del año en curso remitida por el Capitán Omar Alvarado, Jefe de la Unidad de Control de Multitudes de la Dirección Nacional de la Policía Nacional, dirigida a la Fiscalía Segunda Superior, del Primer Distrito Judicial en la que le pone en conocimiento que José Rivas, alias "Barry", de 25 años de edad y con cédula N° 8-428-589, al igual que GABRIEL GUARDIA REYNA (nombre legal) o RAFAEL BONILLA REYNA (nombre usual) alias "Tito Capito", de 21 años de edad, habían sido capturados en la Multi N° 2, cuarto N° 8 de Llano Bonito, momentos después de darse un tiroteo entre el sector de Caboverde y Llano Bonito y al que acudieron autoridades competentes del Juzgado Nocturno de Policía.

A pesar de que el accionante, en su calidad de abogado defensor de GABRIEL GUARDIA REYNA, sostiene que no es la misma persona identificada como RAFAEL BONILLA REYNA, a quien se le encausó por el Segundo Tribunal Superior de Justicia para responder por la infracción de las normas contentivas en el Capítulo I, Título I, del Libro II, del Código Penal, el informe procedente de la Gobernación de la Provincia de Panamá y de la Policía Nacional contradice dicha afirmación, pues identifican a GUARDIA REYNA con la persona de RAFAEL BONILLA REYNA, pues la diferencia radica que en el primero se trata del nombre legal y el segundo del nombre usual.

Como quiera que el delito que ha dado lugar a la privación de libertad de GABRIEL GUARDIA REYNA, tiene pena mínima superior a dos años, e incluso es inexcarcelable, se sustenta en derecho la orden expedida por la Fiscalía Superior y mantenida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de GABRIEL GUARDIA REYNA (nombre legal) o RAFAEL BONILLA REYNA (nombre usual) alias "Tito Capito".

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUGENIA GIL BERMÚDEZ EN CONTRA DEL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **Guillermo Guerrero Salazar** ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus en favor de **MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ**, contra el Director de Migración por considerar que la detención que sufre la prenombrada es ilegal.

Una vez acogido el recurso en mención, mediante providencia fechada 17 de junio de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el que fue contestado por el señor Director de Migración mediante Oficio N° 185-96 del 19 junio de 1996 en los siguientes términos:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora EUGENIA GIL BERMÚDEZ, de nacionalidad colombiana. Dicha detención se efectúo durante el operativo conjunto realizado entre la Policía Nacional del Área A, San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, el día

7 de junio de 1996.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que, el día 7 de junio la ciudadana EUGENIA GIL BERMÚDEZ, de nacionalidad colombiana, fue detenida en el operativo conjunto efectuado entre la Policía Nacional del Área A, San Felipe y la Dirección Nacional de Migración, dentro de la Cantina La Bocatoreña, tal cual consta en los informes presentados por la Policía Nacional y esta institución.

SEGUNDO: Que, la señora EUGENIA GIL BERMÚDEZ, de nacionalidad colombiana, posee en nuestros archivos, registros que demuestran que lleva realizando esta actividad desde hace mucho tiempo.

TERCERO: Que, si bien es cierto que en la actualidad dicha ciudadana ha aplicado para el Convenio Colombo-Panameño, a fin de optar por la Permanencia Definitiva en nuestro país, es más cierto aún, que de acuerdo a nuestra ley migratoria, la inmigración al país de extranjeros que se dediquen a este tipo de actividades está totalmente prohibida.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ta., del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 37 literal a), 65, ..."

Encontrándose en este estado el proceso de Habeas Corpus, el proponente de la acción se presentó al despacho del Magistrado Ponente a fin de refutar oralmente, los hechos y demás circunstancias que constan en el Informe del Director de Migración y alegar otros argumentos a favor de su patrocinada, tal como lo permite el artículo 2584 del Código Judicial.

La diligencia que contiene la refutación oral del señor **GUILLERMO GERARDO GUERRERO SALAZAR**, que fue incorporada al expediente, es del siguiente tenor:

"Desde el año 1977 ella dejó de trabajar como alternadora y se fue para Colombia. Allá se quedo hasta el año 1992 y regreso a Panamá, que fue cuando yo la conocí, que se dedicaba a la venta de zapatos, comésticos y carteras que traía de Colombia para venderlas en Panamá. Tengo de vivir con ella como marido y mujer 3 años y 2 meses, de los cuales tengo 2 años y medio de vivir en el Hotel Central en el cual pagamos Ciento Sesenta Balboas Mensuales (B/.160.00) y de ser necesario puedo probar este hecho. Mi mujer tiene 46 años y es una mujer enferma, sufre de diabetes y necesita insulina, 15cc en la mañana, 25cc al mediodía y 15cc en la noche, constancia hay en Migración de que ella se tiene que inyectar. Yo propiamente he llevado las jeringuillas se las he dado al Inspector CÓRDOBA, para que se las facilite a ella.

Ella también tiene una hija panameña de 7 años, que vive en Colombia con su hija mayor de 22 años de edad. Esta niña la tuvo con un señor que ya murió y la niña nació en Chitré.

Yo trabajo de Salonero en el Club Unión, y ganó un 1.05 la hora a parte de las propinas diarias, y yo soy el principal sustento de la casa y las gastos personales de mi señora MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ, que aunque no estamos casados convivimos como marido y mujer.

Mi señora tiene un permiso provisional con N° 5666 el cual le pongo de presente, para demostrar que esta legalmente en el país y es un acuerdo entre Colombia y Panamá firmado por un funcionario de

Migración y el Cónsul Colombiano.

De esta diligencia se deja constancia escrita para agregarla a los Autos, tal como lo exige el artículo 2584 del Código Judicial y los firman los que en ella han intervenido".

Un examen del Tribunal de Habeas Corpus de las constancias procesales que existen hasta el momento, nos permiten hacer las siguientes consideraciones.

La señora **MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ**, tiene un permiso de residencia provisional N° 5666 extendido porque ha solicitado permanencia definitiva, que se funda en un acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá, que fue aprobado mediante Ley N° 17 de 10 de agosto de 1994 y publicado en la Gaceta Oficial N° 22.602 de 17 de agosto de 1994. La expedición de este permiso provisional demuestra que se consideró que la mencionada señora no estaba comprendida dentro del artículo 6 de la mencionada Ley, que es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO SEXTO: No podrán acogerse a los beneficios de la regularización migratoria, los nacionales de ambos países que al entrar en vigencia este Acuerdo, se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones: Asilados, refugiados, titulares de visa diplomática, oficial, de servicio, de cortesía, visitantes temporales, inmigrantes en trámite de residencia, y quienes se encuentren en las prohibiciones establecidas en las respectivas legislaciones migratorias".

Igualmente el artículo 11 de la mencionada Ley suspende las medidas de expulsión y deportación de los nacionales de uno o el otro país que puedan hacer uso del presente Convenio, mientras este se encuentre vigente. Consta en el expediente de Habeas Corpus a foja 20 que se ordenó la deportación de la señora **MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ**, a pesar de la existencia de la norma transcrita. El proponente del Habeas Corpus nos entregó en el momento que refutaba oralmente el Informe del Director de Migración una copia de la Nota N° DP 193-95 de 30 de octubre de 1995, firmada por el Presidente de la República **Dr. ERNESTO PÉREZ BALLADARES**, y que se incorpora al expediente, que es del tenor siguiente:

"Tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de informarle sobre algunos puntos tratados con el Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia **ERNESTO SAMPER**, en reunión celebrada en fecha reciente en ese hermano país.

Debo indicarle que en esta reunión se acordó extender por un año más el Convenio existente para la legalización del status migratorio de los ciudadanos colombianos que se encuentran ilegales en la República de Panamá.

Es por ello señor Director, que le agradezco adoptar las acciones propias tendientes al cumplimiento de este compromiso".

Las consideraciones anteriores nos permiten arribar a la conclusión de que la señora **MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ**, se encuentra residiendo legalmente en territorio panameño, tal como consta con el permiso expedido conjuntamente por los funcionarios de Migración panameña y el Cónsul General de Colombia en Panamá, con base en el acuerdo de ambas Naciones, aprobado por Ley 17 de 10 de agosto de 1994.

Que igualmente el señor **GUILLERMO GERARDO GUERRERO SALAZAR** ha dejado constancia que la detenida es su señora y que se dedica a la Buhonería, y que en el momento de ser detenida se encontraba cobrando unas cuentas que le debían sus clientes, tal como ha quedado transcrito en la diligencia de refutación oral a que hemos hecho referencia anteriormente.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención

de la señora MARÍA EUGENIA GIL BERMÚDEZ y ORDENA su inmediata libertad por este caso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DESISTIMIENTO EN LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁLVARO RODRÍGUEZ, JENNY NIETO ROJAS Y JORGE MONTOYA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado el Pleno de Corte Suprema, el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada por el Licenciado MARIO VAN KWARTEL a favor de ÁLVARO RODRÍGUEZ, JORGE MONTOYA y JENNY NIETO CASTRO, en contra del Director de la Policía Técnica Judicial.

No obstante en el cuadernillo de habeas corpus respectivo se lee la resolución que este Pleno emitió el día 27 de mayo pasado, en la cual se DECLINA COMPETENCIA ante los Jueces de Circuito para conocer de la presente acción, en razón de que las sumarias seguidas a los recurrentes fueron remitidas a la Personería Segunda Municipal de Panamá mediante oficio N° 7895 de 16 de mayo de 1996.

En vista de que esta Corporación no tiene ya competencia para conocer de ningún trámite relacionado con la presente acción de habeas corpus, lo procedente es inhibirnos de resolver el desistimiento presentado por el licenciado VAN KWARTEL, y remitir nuevamente el expediente ante los Juzgados de Circuito a fin de que ellos se pronuncien al respecto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer del desistimiento presentado en la acción de habeas corpus a favor de ÁLVARO RODRÍGUEZ, JORGE MONTOYA y JENNY NIETO CASTRO, y en consecuencia, REMITE el expediente a los Jueces de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO MORALES EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Migdalia de Morales presentó acción de habeas corpus a favor del señor **PABLO MORALES**, quien se encuentra a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Durante la tramitación del habeas corpus se presentó escrito de desistimiento ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que el señor PABLO MORALES fue puesto en libertad. Consecuentemente, debe admitirse el mismo y ordenarse el cese del procedimiento, en atención a lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor PABLO MORALES y ORDENA el cese del procedimiento.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE EDGARDO ESCALANTE ESCOBAR, CONTRA EL DIRECTOR DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 5 de junio del año en curso, la licenciada Ana Lola Blaisdell Núñez en representación del señor **EDGARDO ESCALANTE ESCOBAR**, presentó acción de habeas corpus a fin de que se declare ilegal la orden emanada del Ministerio Público que lo privó de su libertad desde el 6 de marzo de 1996.

Librado el mandamiento de habeas corpus, en primera instancia contra el Director de Información e Investigación Policial del Ministerio de Gobierno y Justicia, se recibió la nota AL 0483-96 de 7 de junio, mediante la cual se informó que su oficina se limitó a capturar al señor Escalante Escobar y fue puesto a órdenes de la Secretaría de Drogas de la Provincia de Los Santos. Esto dio lugar a que se librara un nuevo mandamiento de habeas corpus, esta vez a la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, quien funge también como Secretaría Especializada en Delitos relacionados con Drogas del Cuarto Distrito Judicial.

Mediante Oficio N° 506, recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 11 de junio, se suministró la siguientes información:

> "Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de informar dentro del término legal, lo solicitado dentro del mandamiento de HABEAS CORPUS propuesto a favor del señor EDGARDO ESCALANTE ESCOBAR en contra de la Suscrita.
>
> En consecuencia, se señalo lo siguiente:

a) Sí, es cierto que ordené mediante la resolución fechada 22 de febrero de este año y visible de folio 53 a 55 del proceso principal seguido a los señores AGUSTÍN RAMÓN SELLHONR BRANDAO y a EDGARDO ERNESTO ESCALANTE ESCOBAR, la detención de este último.

b) Los motivos de hecho que sirvieron de base para dictar la medida cautelar de carácter personal sobre el señor ESCALANTE ESCOBAR se dieron en la siguiente forma:

El día 19 de febrero del presente año unidades de la SubDirección de Información e Investigación Policial de la Policía de Los Santos lograron la captura del señor Ramón A. Sellhonr B. quien mantenía bajo su posesión sustancias ilícitas como lo son las drogas conocidas como Cocaína y Marihuana.

Al momento de ser requerido en la indagatoria correspondiente el señor Sellhorn Brandao aceptó ser el poseedor de los estupefacientes encontrados en su persona e indicó tener adicción a los mismos. Con respecto a la persona que le suministrase los mismos, indicó que se llamaba EDGARDO ESCALANTE, de domicilio en la calle 50, edificio El Señorial 50, y lo describió físicamente.

En vista de tal situación se coordinó con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga la cual realizó diligencia de allanamiento a la residencia del señor EDGARDO ESCALANTE en el lugar antes señalado y en donde se logró la ocupación de gran cantidad de municiones, armas, pistolas de Bengala, pruebas para la determinación de estupefaciente, material para su elaboración como bolsas plásticas y una pesa en gramos marca TANITA con capacidad para 100 gramos, según se desprende de las diligencias de folio 77 a 85 del cuaderno principal.

Tanto a la droga incautada al señor SELLHORN BRANDAO como a la pesa en gramos TANITA ya señalada se les practicó peritajes técnicos de el Departamento de Criminalística, Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la P. T. J. y dieron resultados positivos para la determinación de 46.52 gramos de Cocaína y Marihuana los primeros y .02 gramos recolectados de la pesa TANITA arriba indicada.

En vista de esta situación consideramos se cumplen los requisitos legales establecidos en los artículo 2147 A, 2148 y 2159 del Código Judicial, en asocio al Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994, para proceder y en esta instancia mantener la detención preventiva del precitado EDGARDO ESCALANTE.

c) En efecto, el señor EDGARDO ERNESTO ESCALANTE ESCOBAR se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de la ciudad de Las Tablas, pero, inmediatamente giramos las instrucciones necesarias para que el mismo sea puesto a disposición de la Honorable Corte Suprema de Justicia por motivos de la presente acción Constitucional".

De la transcripción que antecede se colige que contra Edgardo Escalante Escobar existe un señalamiento cierto y debidamente individualizado que le hace Agustín Ramón Sellhorn Brandao y aunque se trata de un sindicado a quien se le decomisó 42.28 gramos de marihuana y 4.24 gramos de cocaína, en el allanamiento de domicilio del accionante además de armas y municiones, los agentes policiales encontraron material para la elaboración de bolsas plásticas y una pesa en gramos marca Tanita con capacidad para 100 gramos, de las que usan los expendedores de sustancias ilícitas como la decomisada a Sellhorn quien aseguró, bajo juramento, que ésta había sido suministrada por Escalante Escobar. Cabe añadir, que la pesa decomisada, según lo argüido por el detenido la usaba para pesar oro, no obstante en los exámenes de laboratorio se comprobó que tenía partículas de cocaína (cfr. Fs. 99).

Como es de todos conocido, en materia de drogas existen regulaciones procesales de carácter especial, que introducen cambios sustanciales sobre los principios de presunción de inocencia y materia probatoria, por ello la medida cautelar adoptada es acorde a esa legislación y en consecuencia no adolece de los vicios que le endilga la licenciada Blaisdell en su escrito.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de EDGARDO ESCALANTE ESCOBAR y DISPONE que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL Y EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano CÉSAR VILLAMONTE DUARTE interpuso acción de Habeas Corpus a favor de RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL, de nacionalidad peruana contra el Director Nacional de Migración.

Ingresado el expediente a esta Corporación se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus contra el prenombrado funcionario, quien al rendir el informe requerido respondió lo siguiente:

"...
A) No es cierto que ordenamos la detención del ciudadano RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL, de nacionalidad peruana.

B) No existen al momento motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención del señor RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL.

C) No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes al ciudadano peruano RODOLFO JOAQUÍN BERROCAL. El mismo fue deportado mediante Resolución N° 3228 del 12 de junio de 1996.

Atentamente,

(fdo.) LCDO. GERMÁN G. SÁNCHEZ T.
DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN."

Según se desprende del informe transcrito, la autoridad demandada no ha ordenado la detención del favorecido con esta acción ni se encuentra bajo sus órdenes, toda vez que fue deportado, por lo que se encuentra fuera de la jurisdicción panameña.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento de habeas corpus presentada a favor de RODOLFO JOAQUÍN MISAJEL BERROCAL y, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NOEL WADES MOSES DOUGLAS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Reyes Martínez interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de NOEL WADES MOSES DOUGLAS, quien se encuentra sindicado por delito contra el patrimonio, y contra el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado remitió el informe de conducta, mediante oficio N° A. L.-0814-96 de 18 de junio de 1996, en el que señala que no ha ordenado la detención de Moses Douglas, como tampoco lo tiene bajo custodia, a la vez informa "El mismo se encuentra actualmente gozando de libertad, por así disponerlo el Fiscal Auxiliar de la República" (f. 6).

Por acreditada esta circunstancia, es pertinente la aplicación del mandato del artículo 2572 del Código Judicial, a lo que se procede.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RENÉ NESIN GONZÁLEZ CHONG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano RIQUELME ASFALL, ha solicitado ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus a favor del señor RENÉ NESIN GONZÁLEZ CHONG, por considerar que la detención es ilegal.

El habeas corpus fue enderezado primeramente contra el Jefe del Área "A" de San Felipe, por tal motivo tuvo conocimiento de esta petición, el Juzgado Cuarto Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, quien libró el mandamiento de habeas corpus, contra este funcionario, mediante providencia que corre a foja 2 del expediente. El funcionario demandado contestó de la siguiente manera:

"HONORABLE SEÑORA JUEZ:
El que suscribe LUIS A. GORDÓN, varón, panameño, con cédula de identidad personal 8-163-2251 en mí condición de Jefe de Policía del Área a, San Felipe, acudo ante usted, con el respeto acostumbrado, para responder el informe solicitado en atención a mandamiento de HABEAS CORPUS librado en mí contra, a favor del Señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG.

Absuelvo el Cuestionario solicitado en los términos siguientes:

1. NO ES CIERTO QUE HAYA ORDENADO LA DETENCIÓN DEL RECURRENTE; NI VERBAL NI POR ESCRITO.

2. QUEDA EXPLICADO EN EL LITERAL ANTERIOR.

3. NO TENGO BAJO MI CUSTODIA AL RECURRENTE, EL MISMO FUE REMITIDO A LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE ACUERDO A LA ORDEN DADA POR LA AUTORIDAD DE POLICÍA.

El señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG, fue aprehendido en compañía del Señor GIOVANI GARCÉS SERRANO, por unidades de Ronda en el Grupo "OPERATIVO ÁGUILA", el día 6 de junio a las 9:15 de la noche, en Calle N, San Miguel, Calidonia, cuando estos efectuaron detonaciones de las cuales resultó herido el Señor JULIO MARMOLEJO LOZANO, recluido en el Hospital Santo Tomás. Afirmado por la Señora NEREYDA WHITE LÓPEZ, testigo de los hechos.

A los mismos se les encontró un arma SMITH & WESSON, serie 984641, con cinco (5) municiones sin detonar, una detonada y sin el permiso del arma.

De acuerdo a los registros policiales el Señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG, es solicitado mediante Oficio 2673, del 28 de septiembre de 1995, por la Policía Técnica Judicial por el delito de ROBO A MANO ARMADA.

La detención preventiva tanto del Señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG, como del Señor GIOVANI GARCÉS SERRANO, fue dictada por la Autoridad de Policía, Corregidora de Santa Ana". (Págs. 3 y 4).

En virtud de que en el informe transcrito se expresa que el detenido se encuentra a disposición de la Policía Técnica Judicial, la Juez Cuarta Municipal se Inhibe de conocer el negocio y lo remite a la Corte Suprema de Justicia.

Una vez ingresado el expediente a esta Superioridad y sometido al reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial y éste informó mediante Nota N° A. IL.0786-96 de 12 de junio de 1996, lo siguiente:

"Honorable Señor Magistrado:
Respetuosamente me dirijo a Usted para dar contestación a Mandamiento de HABEAS CORPUS presentado a favor del señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG en contra del suscrito Señor Director General de la Policía Técnica Judicial.

De acuerdo a lo establecido mediante el Artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el presente informe:

1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tenemos bajo custodia, ni a nuestras órdenes al prenombrado RENÉ NASSIN GONZÁLEZ CHANG. El prenombrado se encuentra actualmente a órdenes de la Licenciada MARIBEL CORNEJO DE LÓPEZ, Fiscal Cuarta

Superior de la República.

De esta forma damos contestación a la providencia calendada 12 de junio del presente año emitida por esa Máxima Autoridad de Justicia.

Del Honorable Magistrado, con muestras de mi distinguida consideración". (Pág. 15).

De la lectura del informe antes transcrito se colige que el sindicado se encuentra a órdenes del Fiscal Cuarto Superior de la República, por tal motivo este Despacho solicita a dicho funcionario que ponga a órdenes de esta Corporación de Justicia al detenido y que informara lo siguiente: a) Si ordenó la detención del ciudadano RENÉ NESIN GONZÁLEZ CHONG; b) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello; c) Si tiene bajo custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha ordenado presentar y, en caso de haberlo transferido a otro, que indique exactamente a quién, en qué tiempo y por qué causa o motivo.

EL funcionario requerido dio el informe que se encuentra a foja 17 del expediente, el cual nos permitimos transcribir textualmente:

"Señor Cuestas:
Adjunto las fotocopias debidamente autenticadas de la Acción de Habeas Corpus a favor de Rene Nesin González Chong contra el Director de la Policía Técnica Judicial, por cuanto que el mismo no se encuentra radicado en éste despacho, tenemos conocimiento que esta a disposición del Fiscal Cuarto del Circuito.

Atentamente,

(fdo.)
Licdo. Dimas E. Guevara G.
Fiscal Cuarto Superior Primer
Distrito Judicial".

El artículo 2602 del Código Judicial establece que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, conocerán de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia. De igual forma señala el artículo 2588 de la misma excerta legal, que cuando la persona contra quien se dirige el mandamiento de habeas corpus no tiene bajo sus órdenes al detenido y manifestare que el mismo se encuentra a órdenes de otro funcionario, si el Tribunal no es competente para seguir conociendo de la acción, deber enviar, sin dilación, los autos al funcionario judicial competente. Es obvio que la situación aquí planteada se da en este caso, por tanto es procedente el envío de la acción de habeas corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que continúe su tramitación y resuelva la acción constitucional.

En mérito de la expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA EL CONOCIMIENTO del presente habeas corpus interpuesto a favor de RENÉ NESIN GONZÁLEZ CHONG ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO Y EN

CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Horacio Ramsey Morales ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO**, quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El apoderado judicial del señor RIVAS MURILLO sostiene que la detención preventiva que sufre su representado es ilegal, ya que no existe señalamiento alguno que lo vincule con el delito arriba mencionado, en vista de que el auto de llamamiento a juicio se dictó contra un sujeto de apellido RIVAS (a) "BARRY" y no contra su defendido.

Se libró mandamiento de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, quien mediante Oficio N° 144-SF de 11 de junio de 1996, informó lo siguiente:

> "A. Este Tribunal no ordenó la detención preventiva del señor procesado JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO, pues por medio de resolución con fecha de 31 de agosto de 1995, registrada de fojas 121 a 128, el señor RIVAS MURILLO, identificado en las sumarias sólo por el apellido y el apodo, es decir RIVAS (a) "Barry" y otras personas, han sido enjuiciados como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro Segundo del Código Penal, es decir, por el delito genérico de Homicidio Doloso cometido en perjuicio de los jóvenes RAÚL GIOVANI CEDEÑO GONZÁLEZ y EVARISTO JURADO AYALA, manteniendo la detención preventiva que había sido decretada por el funcionario de instrucción durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial.
>
> B. Contra el procesado FRANCISCO RIVAS (a) "Barry" constan graves indicios de responsabilidad penal que lo vinculan en forma objetiva y subjetiva con el delito imputado, por ello ha sido enjuiciado para someterlo a la fase plenaria con intervención de Jurados de Conciencia lo referente a su culpabilidad.
>
> C. El señor FRANCISCO RIVAS, sólo se conocía su apellido RIVAS y el apodo de "Barrys", con generales desconocidas, por eso esta Sala integrada por nuestra suplente, la Magistrada Mirtha V. de Pazmiño y el Magistrado Andrés Almendral C., abrieron causa criminal en su contra con el apellido y el apodo." (Foja 7).

La presente acción constitucional guarda relación con las sumarias adelantadas contra los señores RAFAEL BONILLA REYNA (a) "TITO CAPITO" y RIVAS (a) "BARRY", por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de los jóvenes RAÚL GIOVANY CEDEÑO GONZÁLEZ y EVARISTO JURADO AYALA.

De acuerdo con las constancias procesales, los hechos que concluyeron con la muerte de CEDEÑO y JURADO tuvieron lugar el día 21 de julio de 1994, en el sector de Llano Bonito. El señor DOMINGO LENÍN CEDEÑO GONZÁLEZ, hermano de uno de los occisos, rindió testimonio consultable a fojas 19-21 de las sumarias, en el que refiere que se encontraba presente cuando el sujeto conocido como "TITO CAPITO" le disparó por la espalda a EVARISTO JURADO, luego de haber discutido con éste, procediendo después a darse a la fuga. Cuando su hermano RAÚL CEDEÑO trató de auxiliar a JURADO, el otro sujeto conocido como "BARRY", le hizo dos disparos que le produjeron la muerte.

Una vez concluida la etapa de investigación, la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Vista N° 142 de 30 de junio de 1995 recomendó abrir causa criminal contra los señores RAFAEL BONILLA REYNA (A) "TITO

CAPITO" y RIVAS (A) "BARRY", por infractores de las disposiciones contempladas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal. Mediante auto fechado 31 de agosto de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, abrió causa criminal contra los mencionados sujetos, por el delito genérico de Homicidio Doloso cometido en perjuicio de los menores RAÚL GIOVANI CEDEÑO GONZÁLEZ y EVARISTO JURADO AYALA.

El análisis de la presente acción pone de manifiesto que la detención preventiva del señor JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO, es legal.

En primer lugar, existe orden de detención proferida por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial el 1° de noviembre 1994, contra el imputado.

En segundo lugar, el hecho punible se encuentra acreditado con los siguientes elementos probatorios: 1) Las diligencias de reconocimiento de los cadáveres (fs. 2-3 y 5-6); 2) los protocolos de necropsia (fs. 43-54 y 65-76), 3) los certificados de defunción (fs. 98 y 99) y 4) fotografías (fs. 10-15 y 80-83).

En tercer lugar, existen elementos probatorios que vinculan al señor RIVAS con el delito que se le imputa. Así, consta el señalamiento directo del señor Domingo Lenín Cedeño González y el señor Héctor Espinoza Torrero, testigos presenciales del hecho delictivo, quienes declararon que vieron al señor RIVAS y al señor BONILLA REYNA, disparar contra los jóvenes CEDEÑO y JURADO.

Por último, cabe señalar que aún cuando el apoderado judicial del detenido alega "que no existe señalamiento alguno que demuestre que nuestro defendido JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO, sea BARRY RIVAS", esta corporación de justicia advierte que ese debate constituye materia de fondo que debe ser dilucidada dentro del proceso penal, ya que la acción de habeas corpus no es la vía idónea para hacerlo.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor JOSÉ FRANCISCO RIVAS MURILLO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE GUERRERO SERRANO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ameglio Moncada ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **VICENTE GUERRERO SERRANO**, quien se encuentra detenido preventivamente en el centro penitenciario La Joya, por la supuesta comisión de delito contra la vida e integridad personal en perjuicio del señor FRANK ERNEST STUART HILTON.

Se libró mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Auxiliar de la República, quien respondió mediante Oficio N° 9263-FAR de 12 de junio de 1996,

en el que informa lo siguiente:

> "Relacionado con Recurso de Habeas Corpus, distinguido con el número de entrada 448-96 del 11 de los presentes, interpuesto en contra del suscrito, a favor del señor **VICENTE GUERRERO SERRANO**, sindicado en la comisión de delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas, en perjuicio de quien en vida se llamara **FRANK ERNEST STUART HILTON**, ultimado para la noche del 25 de enero del año en curso, por los alrededores del Parque Industrial de Bethania y presuntamente con armas de fuego y punzo cortantes, tengo a bien informarle que mediante Oficio N° 2593-FAR, calendado el 16 de febrero del año que decurre y dirigido a su persona, dimos contestación a mandamiento de Habeas Corpus, presentado a favor del prenombrado **GUERRERO SERRANO** y por la causa antes señalada.
>
> Referente al hecho mencionado en líneas anteriores, recibimos Nota N° SGP-405-96, suscrita por el Doctor **CARLOS H. CUESTAS**, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual nos remitía Resolución fechada el 8 de marzo de 1996, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción interpuesta a favor de **VICENTE GUERRERO SERRANO**, contra el suscrito y en la cual se declaró legal la detención del recurrente.
>
> Ahora bien, en cuanto a lo expuesto en esta ocasión por el defensor del encartado y referente a los dígitos de la matrícula que portara el vehículo utilizado la noche de los hechos, se acredita en el sumario que la misma era la correspondiente a la numeración **000409**, asignada a los Casinos Nacionales y no a otra entidad del Estado, tal y como se ha querido hacer ver en esta ocasión por parte del Abogado defensor.
>
> Relacionado con los señalamientos que efectúa la defensa, de las fojas 252 a 255, observamos declaración jurada que rindiera el señor **RAFAEL ALBERTO TORRES HIM**, calendada el cinco (5) de febrero del año en curso, testigo en la escena del crimen y durante el curso de la misma, expuso que los últimos dígitos de la matrícula del vehículo utilizado por las personas que cometieran el hecho, correspondían a los números **409** y de uso oficial." (Fojas 17 y 18).

Por su parte, el Licenciado Ameglio Moncada sostiene que la detención que sufre el señor VICENTE GUERRERO SERRANO es ilegal, ya que "no existen graves indicios de responsabilidad en contra de mi defendido ni existen elementos probatorios en su contra que lo vinculen al homicidio investigado", por lo que solicita a esta corporación judicial que una vez evaluadas las pruebas que constan en el proceso, se ordene la libertad de su representado.

Al respecto, es preciso señalar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió otra acción de habeas corpus a favor del señor GUERRERO SERRANO, mediante resolución fechada 8 de marzo de 1996, consultable de foja 497 a 501 del expediente contentivo de las sumarias que se adelantan en el presente proceso. En esa ocasión, la Corte declaró legal la detención preventiva del mencionado señor, por considerar que cumplía con los requisitos establecidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En esta ocasión, el apoderado del señor GUERRERO alega que el Pleno debe analizar los medios probatorios allegados al proceso y que, a su juicio, demuestran la ilegalidad de la detención preventiva del beneficiario de la presente acción constitucional.

Sin embargo, la lectura de las constancias procesales pone de manifiesto que la situación del imputado no ha variado desde el momento en que se decidió el primer habeas corpus presentado en su favor. Como ha manifestado esta corporación judicial en múltiples ocasiones, la valoración de los elementos probatorios de fondo es tarea del funcionario de instrucción y del juez de la causa y, consecuentemente, este tribunal no tiene competencia para evaluarlos en

esta clase de acción.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor VICENTE GUERRERO SERRANO y ORDENA, que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO JAÉN DE LEÓN CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Miguel Deen R. ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **FERNANDO JAÉN DE LEÓN**, contra el Director General de Corrección.

Encontrándose pendiente de resolver el presente negocio, el Secretario General de la Corte rindió informe en el que le comunicó al Magistrado Sustanciador que se había presentado otra acción de habeas corpus a favor del señor JAÉN DE LEÓN, por lo que se procedió a acumular ambas acciones.

Se libró mandamiento al Director Nacional de Corrección, quien respondió mediante Oficio N° 1746-D. N. C. de 15 de mayo de 1996, en el que informa lo siguiente:

> "A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **FERNANDO JAÉN DE LEÓN**.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o derecho de la detención, dado que esta Dirección no la ha ordenado.
>
> C. El señor **FERNANDO JAÉN DE LEÓN**, ingresó a la Cárcel Modelo el 2 de junio de 1995, a órdenes de la Fiscalía Quinta de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial por el delito contra el Patrimonio en perjuicio de Hideo Sakuyori; no obstante, en la actualidad se encuentra bajo la custodia de la Directora del Centro Penitenciario El Renacer en el precitado centro penal.
>
> Cabe hacer mención, de que el citado interno, registra en nuestros archivos los siguientes procesos penales:
>
> 1. El **Juzgado Primero de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá**, abre causa penal por el delito de Estafa en perjuicio de Humberto Lucas Macrini. Por esta causa el citado interno es condenado a cumplir la pena de (2) dos años de prisión y (50) cincuenta días multa. No obstante, en virtud de recurso de apelación interpuesto por el sindicado; el Tribunal Superior de justicia **REVOCA** dicha sentencia y **REEMPLAZA** la pena de prisión impuesta por (100) cien días multa, a razón de veinticinco balboas (B/.25.00) el día multa. Por lo antes expuesto, mediante Oficio N° 96 de 12 de enero de 1996, se ordena su inmediata libertad.

2. El **Juzgado Segundo de Circuito Penal de Colón**, le sigue proceso contra el Patrimonio en prejuicio de Hideo Sakayori. Por este proceso se le concede **MEDIDA CAUTELAR**, mediante oficio N° 725 del 26 de abril de 1996.

3. El **Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá**, le sigue proceso por el delito de Expedición de Cheques sin suficiente provisión de fondos en perjuicio de Guy Pierre Canavagio. Por esta causa se le concede **MEDIDA CAUTELAR**, mediante Oficio N° 46 del 31 de julio de 1995.

4. El **Juzgado Segundo del Circuito de Coclé**, le sigue proceso por delito contra la Salud Pública y mediante Auto N° 833 de 30 de agosto de 1994 (sic). Sin embargo, mediante Sentencia del 31 de agosto de 1995, lo condenan a cumplir la **pena de 24 meses de prisión y cien (100) días multa**, a razón de dos balboas (B/.2.00) el día, e igual tiempo de Inhabilitación, igualmente, se le niega la Suspensión y el Reemplazo de la pena impuesta por no cumplir con lo preceptuado en los artículos 77 y 82 del Código Penal. El Segundo Tribunal Superior de Coclé, mediante sentencia de 8 de marzo de 1996, **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia, y fue puesto a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección mediante telegrama Oficial N° 155 del 10 de mayo de 1996." (Fojas 6-8).

En primer lugar, el habeas corpus presentado por la Licenciada Danitza Vásquez, tiene como argumento fundamental que el señor JAÉN DE LEÓN se encuentra detenido ilegalmente por el proceso que se adelanta en su contra ante el Juzgado Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal, en vista de que desde el 26 de abril de 1996 ese juzgado ordenó la libertad del imputado, en virtud de medida cautelar concedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Al respecto, la Fiscalía Segunda del Circuito de Colón, mediante Oficio N° 1204 de 11 de junio de 1996, informa lo siguiente:

"A través del presente Oficio, remito a usted, copias autenticadas de las sumarias seguidas a FERNANDO JAÉN DE LEÓN, sindicado por el supuesto delito Contra el patrimonio, en detrimento de Prominent Limited (Hideo Sakajori); en dicho sumario se le concedió una medida cautelar al prenombrado JAÉN DE LEÓN, y desde el día 26 de abril de 1996, se le notificó de tal resolución. A la fecha el sumariado judicial DE LEÓN, no se encuentra a órdenes de nosotros, por las presentes sumarias." (Foja 23 del cuaderno de habeas corpus).

Del informe transcrito se colige que no existe orden de detención contra el señor JAÉN DE LEÓN, por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio, ya que se le otorgó otra medida cautelar.

Por su parte, el Licenciado Deen alega que la detención que sufre el señor FERNANDO JAÉN DE LEÓN por delito contra la salud pública es también es ilegal, ya que a éste se le había impuesto medida cautelar distinta a la detención preventiva, mediante auto de 11 de abril de 1994. Por tanto, el Juez Segundo Penal del Circuito de Coclé no debió filiar al imputado a órdenes de la Dirección de Corrección, en vista de que la sentencia condenatoria no está ejecutoriada, pues contra ella se ha interpuesto recurso de casación.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, se solicitó el expediente contentivo del proceso penal seguido al señor FERNANDO JAÉN DE LEÓN por delito contra la salud pública, ante el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal.

A foja 414 del mismo, es visible escrito de la apoderada judicial del recurrente por medio del cual se da por notificada de la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que confirmó la sentencia condenatoria del señor JAÉN DE LEÓN. Igualmente, en ese mismo escrito, anuncia que interpondrá recurso de casación contra la mencionada decisión dictada por el

Tribunal Superior, el cual se encuentra pendiente de resolver.

El Pleno advierte que, en efecto, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal, mediante la cual se condenó al señor FERNANDO JAÉN DE LEÓN a veinticuatro meses de prisión y cien días multa no se encuentra ejecutoriada, ya que de acuerdo con el artículo 2457 del Código Judicial, el recurso de casación se entiende conferido en el efecto suspensivo.

El señor JAÉN DE LEÓN no se encontraba detenido preventivamente por este delito y fue como consecuencia de la sentencia condenatoria que el Juez Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal lo puso a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, mediante Telegrama Oficial N° 155 de 10 de mayo de 1996.

De lo anteriormente expuesto se colige que es ilegal la detención del señor JAÉN DE LEÓN, en vista de que la sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor FERNANDO JAÉN DE LEÓN y RESTITUYE las medidas cautelares que le fueran impuestas por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Ramo Penal, mediante auto N° 249 de 11 de abril de 1994, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial y el deber de presentarse los días once (11) de cada mes ante esa autoridad judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SALVADOR RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Fernando Bustos ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 28 de mayo de 1996 mediante la cual se declara legal la detención preventiva de la cual es objeto el ciudadano SALVADOR RODRÍGUEZ.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial decretó legal la detención preventiva del señor Rodríguez, dado que a su criterio, dentro de la investigación figuran graves evidencias en su contra como lo son diversos informes de seguimiento que indican que se le tiene como uno de los vendedores de droga en el sector de la Peña de Santiago y que, incluso, fue condenado por un caso similar, tal como el propio sindicado lo acepta en su declaración indagatoria.

Sostiene el recurrente, que el señor Salvador Rodríguez se encuentra sindicado por el delito de Posesión Marihuana, sin haberse establecido la cantidad ni la calidad de la misma y que la posible norma violada es el artículo 260 del Código Penal cuya pena oscila entre uno (1) a tres (3) años de prisión y cincuenta (50) a doscientos (200) días-multa.

Acogida la acción por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, se libró mandamiento de habeas corpus en contra del Fiscal Primero del Circuito

de Veraguas, quien mediante oficio calendado el 22 de mayo de 1996 sostuvo lo siguiente:

> "PRIMERO: Es cierto que este Despacho ordenó la detención en contra del señor SALVADOR RODRÍGUEZ PALMA, mediante escrito de Providencia calendada 22 de abril de 1996 y consultables a fojas 31 al 33.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos fueron en derecho tal como se aprecian en la diligencia donde se ordenó la detención.
>
> La detención se decretó, toda vez que mediante Diligencia de Prueba de campo la sustancia incautada dio resultado positivo como MARIHUANA, tal como consta a fojas 9 al 10.
>
> A pesar de que la sustancia no se ha establecido su calidad, pureza, y peso tenemos que a simple vista se observa una cantidad considerable, desprendiéndose de ello que no es para consumo; aunado a ello tenemos que en el presente negocio se han incorporado copias autenticadas de seguimiento; informes de comisión sobre la aprehensión del prenombrado RODRÍGUEZ PALMA, e incorporado copias de fotografía donde el mismo aparece mostrando el material ocupado que según los informes dieron un resultado como MARIHUANA (ver fojas 38 al 45), y por último en generales al rendir Declaración indagatoria el (sic) RODRÍGUEZ PALMA, manifiesta que fue condenado en el año 1992 por la comisión de el delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, por el Juzgado del Circuito de Veraguas.
>
> Todo lo anterior indica que la sustancia decomisada era para la venta y no para el consumo, adicionalmente de que lo manifestado por el imputado no se ha podido establecer por el momento esto de que lo decomisado lo compró para la venta y no para su consumo. Se desprende de su actuar, la cual se cae de su peso con los seguimientos estos hechos al mismo y la condena que pesa en su contra.
>
> TERCERO: Efectivamente a órdenes de este Despacho se encuentra detenido el señor SALVADOR RODRÍGUEZ , quien mediante oficio de esta fecha se ha puesto a disposición de dicho Tribunal para lo que estime pertinente."

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor SALVADOR RODRÍGUEZ se le vincula a delito relacionado Contra la Salud Pública.

La Corte observa de fojas 3 a 7 de las sumarias, el informe de aprehensión y la diligencia de registro personal en los cuales se informan las circunstancias que culminaron con la detención del ciudadano SALVADOR RODRÍGUEZ. Lo anterior se efectuó a raíz de una llamada telefónica que se realizó a la Policía Técnica Judicial, Agencia de Veraguas el 22 de abril de 1996, y en la cual se manifestó que en un bus de la ruta Chitré-Santiago iba de pasajero un señor que fue debidamente descrito y que se dedicaba a la venta de droga. (Ver foja 2 de las sumarias)

Finalmente, el Pleno de esta Corporación considera que el delito que se le imputa al señor Rodríguez tiene fijada pena mínima superior a dos años. Existe además, orden de detención escrita expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Primero del Circuito de Veraguas visible de fojas 31 a 33 de las sumarias.

Una vez efectuado el estudio de las sumarias, el Pleno de esta Corporación coincide con los criterios expuestos en la sentencia del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dado que, efectivamente existen fuertes indicios que lo vinculan con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, por un lado, toda vez que de la diligencia de registro se infiere que el señor Rodríguez al momento de su aprehensión, efectivamente tenía en su poder la sustancia ilícita y, por otro lado, pesa igualmente en su contra, una serie informes de seguimiento visibles de fojas 20 a 28 de las sumarias efectuados entre abril de 1995 y

febrero de 1996, que indican que al sindicado Rodríguez se le tiene como uno de los vendedores de drogas de la Peña de Santiago.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno concluye que en la aprehensión y posterior detención preventiva de la cual es objeto Salvador Rodríguez, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas que regulan la detención preventiva que fue ordenada por autoridad competente, razón por la cual lo procedente es, pues, confirmar la decisión del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 28 de mayo de 1996, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor SALVADOR RODRÍGUEZ y dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Rosario Granda de Brandao, Defensora Técnica del señor FLORENCIO ARMODIO GRAJALES, ha presentado, en representación de este último, recurso de habeas corpus en contra de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, dicho funcionario contestó, mediante Oficio N° 6159-96 de 12 de junio de 1996, lo siguiente:

> "PRIMERO: Si es cierto que ordenamos la detención del señor FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CASTRELLÓN. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución de fecha Dieciséis (16) de abril de 1996, la cual se encuentra acopiada a fojas 15 y 16 del sumario.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de Derecho que motivaron la actuación atacada, lo exponemos a continuación:
>
> A. FUNDAMENTO DE HECHO:
>
> Los hechos se dieron el día 14 de abril del año en curso, a las 04:20 hrs. cuando unidades de la Policía Nacional del Área "G", ALCALDE DÍAZ, encontrándose de servicio en una actividad bailable en el Sector de Pedernal, Casa Local, en el cual visualizaron a un (1) sujeto en actitud sospechosa, los Agentes le dieron la voz de alto policía y el sujeto se introdujo la mano en el bolsillo derecho del pantalón, tirando al suelo una bolsita de color blanco, que al verificar la misma, se pudieron percatar los Agentes de Policía, que se trataba de una (1) bolsita plástica de color blanco que en su

interior contenía un vaso de cartón color azul y en su interior mantenía la cantidad de trece (13) carrizos plásticos, los cuales en su interior mantenían una sustancia en forma de polvo color blanco que se presume sea Droga conocida como **COCAÍNA.**

El ciudadano, responde al nombre de **FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CASTRELLÓN**, de 20 años de edad, reside en el Corregimiento de Alcalde Díaz, Calle Las Tablas, Casa N° s/n.

Al rendir declaración indagatoria, el ciudadano **FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CASTRELLÓN**, manifestó que dichas sustancias ilícitas encontradas en su poder por los Agentes de Policía, eran de su propiedad y para su consumo, las mismas la había comprado en el Alto de Quebrada Ancha a un sujeto apodado "CACIQUE".

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

En las presentes Sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un Delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, Relacionado con Drogas, se encuentra plenamente acreditado en los siguientes puntos:

PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) las sustancias ilícitas encontradas en poder del sindicado certificando que las muestras analizadas resultaron POSITIVA, para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 1.04 gramos.

Con todos estos elementos expuestos se dan los presupuestos legales que establece el Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención del prenombrado."

Se trata de un proceso iniciado de oficio por delito contra la salud pública, por cuanto al señor FLORENCIO ARMODIO GRAJALES CASTRELLÓN se le imputa el supuesto delito contra la salud pública relacionado con drogas. La defensora técnica del señor Grajales considera que la detención preventiva de la cual es objeto este último es ilegal por cuanto la cantidad de droga incautada es escasa, y el señor Grajales ha admitido ser consumidor y que la droga es para su uso personal. Agrega la Licenciada Granda que no hay evidencia de que lo que se pretendía fuese el traspaso de la droga ilícita a cualquier título. Finalmente, se señala que el tipo penal concretado tiene como pena mínima la de un año de prisión por lo que no procede la detención preventiva.

Consta en el expediente contentivo de las sumarias el informe de novedad expedido por el Agente 11662 José Guerra, de servicio en el Área "G" de Alcalde Díaz en el cual se señala lo siguiente:

"Señor Capitán:
...
Siendo aproximadamente las 04:20 hrs, del día 14 de abril del presente, encontrándonos los suscritos Cabo 2do 12227 Sánchez; Agente 11662 GUERRA; Agente 6685 GONZÁLEZ; de servicio en Puesto Pagó (Baile), en el sector del Pedernal, Casa Local, en el momento en que nos encontrábamos sacando a los menores de edad de la actividad bailable, Yo el agente 11662 GUERRA, visualicé a un ciudadano que se encontraba en actitud sospechosa y al acercarnos al mismo dándole voz de alto él se introdujo la mano en el bolsillo derecho delantero del pantalón, tirando al suelo una bolsita de color blanco, al verificar lo que el ciudadano había tirado al piso, nos percatamos que era una bolsita plástica de color blanca (de cumpleaños), con un diseño de muñeca, al verificar en su interior la misma mantenía en su interior trece (13) carrizos plásticos transparente que en su interior mantienen una sustancia blanca en polvo que se presume sea droga.

> Motivo por el cual procedimos con la retención de dicho ciudadano, el mismo responde al nombre de FLORENCIO ARMODIO GRAJALES, de 20 años de edad, cédula de identidad personal 4-229-570, residente en Calle Las Tablas Alcalde Díaz, casa de alquiler. Este sujeto mantenía vestimenta de suéter de rayas rojas con amarilla y azul pantalón hasta las rodilla de color celeste, rosado y amarillo. Al mismo tiempo se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladado en el Pol. 8513, al mando del Cabo. 1º 7533 J. DE GRACIA, a la Base de Chilibre para sus respectivos trámites."

También consta, a foja 31 del expediente, el informe de laboratorio que certifica que, efectivamente, la sustancia incautada es la droga conocida como COCAÍNA en la cantidad de 1.04 gramos. Igualmente se observa, a foja 23 del expediente contentivo de las sumarias, el Oficio 51-2031 de 26 de enero de 1995 suscrito por el Dr. Humberto L. Mas C., Médico Forense General-Director del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y dirigida al Licenciado Rosendo Miranda, Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, en el cual se indica que si bien la dosis de cocaína que produce efectos por vía oral es de 0.2 a 0.4 gramos, y la dosis media es de 0.2 a 0.3; y que la dosis por inhalación que produce efectos es de 0.03 a 0.05 gramos, en los adictos la dosis por ingestión es de 1 a 1.5 gramos.

Por otro lado, la Corte observa una orden de detención escrita, visible a fojas 15 y 16 del expediente contentivo de las sumarias, expedida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas mediante la resolución fechada el 16 de abril de 1996.

Finalmente, el Pleno de esta Corporación considera que el informe de novedad y el informe de laboratorio, aunado a las declaraciones indagatorias rendidas por José Fabián Guerra Hurtado, Gustavo Hernán González Quintero y el propio Florencio Armodio Grajales constituyen hechos probatorios suficientes para vincular al señor FLORENCIO ARMODIO GRAJALES con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que el mismo fue detenido in fraganti, pues la droga fue tirada en el piso por el señor Grajales al momento de la detención, justifica la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro al señalar que la misma sólo procede por delito que tenga señalado pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito. Sin embargo, esta Corporación estima que la medida cautelar de detención preventiva aplicada por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, una vez se comprobó que la cantidad de droga incautada era mínima, no es legal, por cuanto el delito de posesión ilícita de droga no conlleva pena mínima de dos años de prisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor FLORENCIO ARMODIO GRAJALES y, por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto en libertad, si no hay otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO SANDOVAL CONTRA LA FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Alcides Zambrano, actuando en representación de EDUARDO ANTONIO SANDOVAL, ha interpuesto acción de habeas corpus contra la Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Acogido el recurso de libró mandamiento de habeas corpus contra la Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, quien mediante Oficio N° 488 de 5 de junio de 1996, rindió el siguiente informe:

"A. Sí, es cierto que ordené la detención del señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL TEJADA, por escrito mediante Resolución fechada cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), y visible a fojas 45, 46 y 47 del proceso, que por delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Drogas), se instruye al precitado SANDOVAL TEJADA, en este despacho.

B. Los motivos de hecho que originaron la anterior Resolución tuvieron su génesis, en virtud de solicitud efectuada por parte de la Policía Técnica Judicial, de la Provincia de Herrera, donde refería se llevara a cabo una Compra Controlada de Drogas al señor NATIVIDAD BATISTA TREJOS, de quien se tenía información, mediante gran cantidad de informes, que se dedicaba a la venta de drogas, conjuntamente con el señor Eduardo Antonio Sandoval, mismo al que tenían ubicado los funcionarios de la Policía técnica Judicial, y que referían residía en una casa de color verde, misma detrás de la que se ubicaba la Abarrotería del señor Batista, de nombre Edwin, y tal como se encuentra plasmado en el proceso dichos informes en donde se vincula directamente al señor SANDOVAL TEJADA, como colaborador del precitado BATISTA TREJOS (a) TIVA, en la venta y tráfico de drogas.

Por otra parte al prenombrado SANDOVAL TEJADA, se le comprueba su participación delictiva en el hecho motivo de la investigación, en virtud del hallazgo de un billete de un balboa (B/.1.00) el cual fue ocupado en poder del sindicado SANDOVAL (A) CHOLO, y mismo que se encontraba debidamente autorizado por la Fiscalía para llevar a cabo la mencionada y referida Compra Controlada de Drogas, este fue ubicado en su poder en diligencia de Allanamiento y Registro efectuada en su residencia y la cual corre a fojas 22 a 24 del expediente.

Por lo expuesto, se describe ahora, que los motivos de derecho en que se fundamenta la detención del señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL TEJADA, están recogidos en el Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994, que tipifican y sancionan las actividades relacionadas con delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Drogas) y de igual forma en cumplimiento de lo normado por los artículos 2147, 2148 y 2159 del Código Judicial; además el tipo de colaboración y participación que atañe al imputado, así como la responsabilidad penal que le corresponde se verifica dentro de lo anotado y tipificado por el Código Penal en sus artículos 39 y 40 específicamente, donde en realidad revela dicha participación delictiva que lo ubica ante una conducta típica y antijurídica, razón por la cual se presume conforme parte de una Organización delictiva de venta y tráfico de drogas actividad ésta de la que se lucra ilícitamente, el señor SANDOVAL TEJADA.

C. En efecto hasta este momento el señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL TEJADA, se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Policía Nacional de Herrera, a nuestras órdenes ...

Por todo lo anotado, consideramos se debe declarar la legalidad de la detención del señor EDUARDO SANDOVAL."

En efecto, observa el Pleno que de a fojas 45 a 47 de las sumarias, reposa

la resolución fechada el 5 de enero de 1996 mediante la cual la Fiscal Primera Superior del Cuarto Circuito Judicial, una vez efectuado una análisis inicial de los hechos, estimó que los mismos vinculan al señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL razón por la cual se decretó su detención preventiva.

Por su parte, el Lcdo. Zambrano en escrito recibido en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el 31 de mayo de 1996, niega todo lo que se le imputa a su representado y solicita se declare ilegal la detención preventiva de la cual es objeto el señor SANDOVAL. (Ver de foja 1 a 3 del expediente).

Observa el Pleno, que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL TEJADA se le imputa a delito relacionado Contra la Salud Pública.

Una vez analizadas las constancias procesales que figuran en las sumarias, observa el pleno que existen fuertes indicios que vinculan al señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL TEJADA con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, toda vez que, efectivamente, obran en el expediente una serie de informes expedidos por la Policía Técnica Judicial (Agencia de Herrera), que revelan la existencia de un grupo de personas en la ciudad de Chitré que se dedica a la venta y distribución de sustancias ilícitas, y entre ellas figura el nombre EDUARDO ANTONIO SANDOVAL, en cuya residencia se efectuaban dichas operaciones ilícitas (Ver de fojas 2 a 9 de las sumarias).

Aunado a ello, observa igualmente el Pleno, que a raíz de la información antes recabada, se efectuó una operación encubierta consistente en una compra controlada de droga, que fue debidamente autorizada por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial y se destinó para ello la suma de B/.40.00 en billetes detallados en su numeración. Como resultado de lo anterior, se pudo detectar al momento de allanar la residencia del señor SANDOVAL, que éste tenía en su poder un billete de un balboa (B/.1.00), uno de los cuales estaba autorizado por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial para la operación encubierta (Ver de fojas 22 a 26 de las sumarias).

Por último, dado que el delito de tráfico ilícito de drogas tiene fijada pena mínima de prisión superior a dos años según la Ley 23 de 1986, el Pleno considera que en la orden de detención preventiva del señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, razón por la cual lo procedente es, pues, declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor EDUARDO ANTONIO SANDOVAL y, por tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS EDGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Orlando Alonso Rodríguez**, interpuso acción de Habeas Corpus a favor del ciudadano **ALEXIS EDGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ** contra del señor **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA.**

Por librado el mandamiento de habeas corpus el Fiscal Auxiliar de la República, en el informe de conducta visible a fojas 6 expresa lo siguiente:

"OFICIO N° 9587

Panamá, 19 de junio de 1996

Doctor
ELIGIO SALAS
Honorable Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Honorable Magistrado:

Con relación a darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de ALEXIS ADGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, informo a usted, que el expediente fue remitido a la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 5403, el 28 de junio de 1994, en Turno, quedando radicado en la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Además le comunico que actualmente el sumario seguido a ALEXIS EDGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ se encuentra radicado en el Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

De usted Atentamente,

(fdo.) Licdo. Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República."

Del contenido del informe anteriormente transcrito se colige que el sumario relacionado con la detención preventiva de **ALEXIS EDGARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ** fue remitido, en primera instancia, a la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial y, que actualmente se encuentra radicado en Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial, por lo que el Pleno de la Corte debe en consecuencia **declinar** el conocimiento de esta acción ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por razón de la competencia.

Por lo expuesto, La Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus ante el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO AGUILAR MORENO, EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y

JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de 30 de mayo de 1996 (fs. 9 a 11), se abstuvo de conocer de la acción de habeas corpus promovida por el señor Ricardo Aguilar Moreno, en su propio nombre y contra la Juez Séptima de Circuito Penal de Panamá, porque el detenido está a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ordenó remitir el negocio ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, previa la siguiente consideración: "... carecemos de competencia funcional para conocer del negocio bajo examen, porque la autoridad responsable de la privación de libertad ambulatoria del procesado Ricardo Aguilar Moreno, es la Dirección Nacional de Corrección y ello nos impide hacer pronunciamiento al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 2602, ordinal 1°, del Código Judicial ...".

Acogido el presente recurso de habeas corpus, por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento correspondiente contra el Director Nacional de Corrección. La licenciada Rosa E. Cárdenas V., Directora interna de esta Institución, mediante nota 2067-DNC de 7 de junio de 1996, rindió oportunamente el informe de conducta requerido, en los siguiente términos:

> "A. En ningún momento la suscrita ha ordenado la detención del señor RICARDO AGUILAR MORENO ni verbalmente ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> C. El recurrente, señor RICARDO AGUILAR MORENO con cédula de identidad N° 8-164-259 se encuentra guardando detención en el Centro Penitenciario La Joya, a órdenes de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1993 proferida por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, la cual fuera reformada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución de fecha 20 de junio de 1994, y se le condenara a DIEZ AÑOS DE PRISIÓN por el delito de FALSIFICACIÓN de cheques privados en perjuicio de Compañía Semega; Moarma, S. A.; Importadora y Exportadora Lizman, S. A.; Tambor, S. A.; Carsi, S. A.; Distribuidora Moderna, S. A.; Rapid Mufler, S. A.; Reprico, S. A. y Distribuidora Germor, S. A. (Foja 15)."

El informe rendido por la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, pone de manifiesto que el señor Aguilar Moreno fue condenado a 10 años de prisión por el delito de falsificación de cheques privados mediante sentencia de segunda instancia, dictada el 20 de junio de 1994 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del primer distrito judicial, contra la cual se interpuso recurso de casación.

Adicionalmente la foja 167 del expediente es un certificado, el número 631-DNC expedido por la Directora Nacional de Corrección, del Ministerio de Gobierno y Justicia fechado el 5 de agosto de 1995, en el cual consta que RICARDO AGUILAR MORENO está cumpliendo pena de 26 meses de prisión por el delito de Falsificación de Documentos Privados y Estafa, impuesta por la Jueza Séptima del Primer Circuito Judicial mediante Sentencia fechada 11 de marzo de 1993, confirmada por el Segundo Tribunal de Justicia, por medio de Resolución dictada el 21 de junio de 1996 (fs. 150 a 155).

De lo expuesto hasta el momento, se desprende que Ricardo Aguilar Moreno está a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, cumpliendo dos penas que le fueron impuestas por sendas sentencias.

La acción de habeas corpus está destinada a preservar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la Constitución y la Ley señalan y en el presente negocio la parte actora está cumpliendo penas de prisión en el Centro Penitenciario La Joya (f. 16), que le fueron impuestas de conformidad con las normas procesales vigentes.

De consiguiente, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de Ricardo Aguilar Moreno y ORDENA que sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA JACINTA MARÍA HERNÁNDEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Antonio Moncada en representación de **JACINTA MARÍA ABREU HERNÁNDEZ**, interpuso Acción de Habeas Corpus contra el Director General de Migración, por considerar que la privación de libertad que sufre la prenombrada es ilegal.

En la demanda se expresa que la señora **Jacinta María Abreu Hernández** se encuentra detenida desde el día 7 de junio de 1996, bajo la acusación de ejercer la prostitución clandestina. Este hecho lo generó el informe operativo presentado por los inspectores Gilberto Nixon y Carlos González donde se deja constancia a foja 24-26 que la prenombrada señora fue detenida dentro de la cantina la "Interiorana".

Al exponer el Lic. José Antonio Moncada los fundamentos de su recurso expresa:

> "El delito de prostitución ilegal no es competencia de la Autoridad de Migración quienes sólo deben velar por el Status de las personas, sino corresponde a los corregidores y Alcaldes".

Librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha 14 de junio de 1996, el Director Nacional de Migración y Naturalización procedió rendir el informe de actuación el 18 de junio de 1996, que fue recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema, el día 19 de junio de 1996, cuyo tenor es el siguiente:

> "a) Es cierto que ordenamos la detención de la señora Jacinta María Abreu Hernández, de nacionalidad dominicana. Dicha detención se efectuó en el operativo conjunto realizado entre la Policía Nacional del Aerea (sic) A, San felipe y la Dirección Nacional de Migración el día 7 de junio de 1996.
> b) Los motivos de hechos en que se funda la detención de dicha ciudadana son: ...
>
> SEGUNDO: Que la detención de la señora Jacinta María Abreu

Hernández, de nacionalidad dominicana, se debió a que la misma fue sorprendida ejerciendo la prostitución clandestina, utilizando como identificación un carnet de estudiante expedido por esta institución.

TERCERO: Que, tal cual consta en nuestros archivos, que la señora JACINTA MARÍA ABREU HERNÁNDEZ, de nacionalidad dominicana posee antecedentes de haber ejercido la prostitución en ocasiones anteriores.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ta., del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 36, 37,literal a), 65, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones se seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 37: Queda prohibida la inmigración al país de los extranjeros que se encuentran en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:

a) Las mujeres que se dediquen a la prostitución, los que trafiquen con la prostitución o con la estufacientes y las personas de conducta inmoral;..."

Según el actor la medida de privación de libertad que sufre la ciudadana **Jacinta M. Abreu H.** de nacionalidad dominicana es ilegal, por no ser de competencia del Departamento de Migración los delitos de prostitución. (f. 1). Por su parte el Departamento de Migración y Naturalización sostiene que la detención es legal, ya que en sus archivos consta los antecedentes sobre el ejercicio de la prostitución de la señora Jacinta Abreu.

Esta Superioridad, al adentrarse en el examen del legajo contentivo de los documentos relacionados con la detención de la señora **Jacinta M. Abreu H.** advierte que el día 7 de junio del año que decurre, la Policía Nacional de Área A de San Felipe, con la participación de la Dirección Nacional de Migración, llevó a cabo un operativo para localizar personas indocumentadas en el área de Calidonia y San Felipe. En dicho operativo es detenida la señora **Jacinta María Abreu H.** la cual se encontraba en la cantina la "Interiorana", y luego conducida a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización de el Ministerio de Gobierno y Justicia.

La señora Abreu ingresó al país el día 11 de noviembre de 1991, en ese entonces obtuvo varios permisos de transeúnte para trabajar como alternadora en los años de 1992, 1993 y 1994 en diversas cantinas como la "Gloria" y el "Gavilán", tal como consta a fojas 8-9 del expediente. Posteriormente el día 4 de agosto de 1995 presentó solicitud de visa de visitante temporal en calidad de estudiante, ante la Dirección de Migración, la cual le fue aprobada hasta el 6 de octubre de 1996 (f. 11).

De lo expuesto se concluye que aunque la prostitución no constituye delito tipificado en nuestra legislación positiva, es competencia de la Dirección General de Naturalización y Migración prohibir la entrada al país de inmigrantes por razones de salubridad, seguridad y orden público. No obstante advierte el Magistrado Sustanciador que en el expediente no consta la orden escrita de detención preventiva emitida por el Director de Migración y Naturalización, la cual es un requisito formal indispensable para privar de su libertad a una persona, tal como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Nacional cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 21: Nadie puede ser privado de su libertad, **sino en virtud de un mandamiento escrito** de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley ...

En estas circunstancias, esta Corporación Judicial considera que la medida de privación de libertad de **Jacinta María Hernández** es ilegal por no ajustarse a la disposición constitucional citada.

En consecuencia, la Corte Suprema Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de la señora Jacinta María Abreu Hernández y ORDENA su inmediata libertad por este caso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
(fdo.) Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ MORÁN CONTRA LA FISCAL TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Danilo Montenegro ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ MORÁN**, contra la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial. El beneficiario de la presente acción se encuentra detenido preventivamente, por la supuesta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio del señor IVÁN ABDIEL ABADÍA CASTRO.

El apoderado judicial del señor GONZÁLEZ MORÁN sostiene como argumento principal, que la detención de su defendido es ilegal, en vista de que los hechos que motivaron dicha privación de libertad no constituyen delito sino falta administrativa, como lo reconoce la propia funcionaria de instrucción en la vista fiscal que enviara al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien informó que el detenido fue puesto a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Oficio N° 1654 de 11 de junio de 1996. Consecuentemente, se libró mandamiento contra dicho tribunal, quien respondió mediante Oficio N° 119-B. S. de 18 de junio de 1996, lo siguiente:

> "A) No ordenamos la detención del ciudadano **GONZÁLEZ MORÁN**. Esta fue dispuesta por la Fiscalía Tercera Superior mediante resolución motivada de fecha seis (6) de noviembre de 1995, visible de fojas 25 a 28 del expediente respectivo.
>
> B) Las razones de hecho y de derecho en que se basó dicha agencia de instrucción para disponer tal detención, se fundamentó en el señalamiento directo sostenido en contra del ciudadano **GONZÁLEZ MORÁN** por el señor **IVÁN ABDIEL ABADÍA CASTRO**, quien lo acusa de haberlo perseguido con un arma de fuego, efectuándole varios disparos. El fundamento legal emanó del contenido de los artículos 2115, 2116 y 2148 del Código Judicial." (Foja 25).

La presente acción guarda relación con la denuncia interpuesta por el señor IVÁN ABDIEL ABADÍA CASTRO contra el señor RICARDO PERALTA CORTEZ, por haberlo agredido el día 7 de octubre de 1995, en la Bodega Chavale, Barrio de San Martín, Corregimiento de Pedregal, lo que provocó una riña entre ambos. Luego, un sujeto apodado "Pitty" lo pateó en el rostro y otras personas lo persiguieron, disparándole con un arma de fuego, sin lograr herirlo.

Posteriormente, amplía su declaración indicando que los sujetos que lo persiguieron fueron OSCAR BATISTA MARTÍNEZ (A) "YIYO", RAMÓN GONZÁLEZ MORÁN (A) "PITTY" y los dos hermanos de este último, que son menores de edad.

De foja 25 a 28 del expediente contentivo de las sumarias que se adelantan por el presente delito, consta providencia proferida por la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial el 6 de noviembre de 1995, por medio de la cual se ordena la detención preventiva del señor RAMÓN GONZÁLEZ MORÁN (A) "PITÍ" y dispone "someterlo inmediatamente a los rigores de la declaración indagatoria, a fin de que responda a los cargos y señalamientos que se le hacen por el HOMICIDIO en grado de TENTATIVA en perjuicio de IVÁN ABDIEL ABADÍA CASTRO."

Significa, entonces, que estamos en presencia del delito de homicidio, pero en la figura autónoma de la tentativa, contemplada en el artículo 44 del Código Penal, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 44: Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un hecho punible por actos idóneos encaminados a su consumación y que no se produce por causas independientes del agente."

El artículo 131 del Código Penal sanciona el delito de homicidio con prisión de cinco (5) a doce (12) años. Por su parte, el artículo 60 de ese mismo código dispone que en los casos de tentativa de delito se disminuirá a un tercio, la pena prevista para el delito principal, que en el caso que nos ocupa sería de un (1) año y seis (6) meses.

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que la detención preventiva decretada contra el señor RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ MORÁN, no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 2148 del Código Judicial, ya que el delito por el cual se encuentra privado de su libertad, no tiene pena mínima de prisión de dos años.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ MORÁN y ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO ANTONIO QUINTANA LÓPEZ EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada por el Licenciado Narciso Herrera Grau, a favor del señor **RODOLFO ANTONIO QUINTANA LÓPEZ**, quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo

por la supuesta comisión de delito de hurto.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien mediante Oficio N° 9692-FAR de 20 de junio de 1996, señaló los fundamentos de hecho y de derecho de la detención preventiva del señor QUINTANA LÓPEZ. Además, indicó que éste ya no se encuentra a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, toda vez que mediante Oficio N° 9515 de 17 de junio de 1996, dirigido al Director de la Cárcel Modelo, se solicitó que el señor QUINTANA LÓPEZ fuera puesto a disposición de la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial.

De lo anteriormente señalado se colige que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer de la presente acción constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor RODOLFO ANTONIO QUINTANA LÓPEZ, ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR EN CONTRA DE LA FISCALÍA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 17 de mayo de 1996, la Corte Suprema, PLENO, DECLINÓ al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, la acción de habeas corpus propuesta a favor del señor RICAUTER EURÍPIDES SINCLAIR, dado que el mismo se encontraba a órdenes de la Fiscalía Tercera de Colón, de conformidad con lo expresado por la autoridad demandada, por medio del oficio del 18 de abril de 1996.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 11 de junio de 1996 SE INHIBE de conocer el recurso de habeas corpus y lo remite a esta Alta Corporación de Justicia, en base a la nota enviada por la autoridad demandada, en la cual señala que el detenido se encuentra a órdenes de la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Turno.

Ingresado, nuevamente, el expediente que contiene la acción de habeas corpus a favor de RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ, el Magistrado Sustanciador solicitó mediante providencia de 21 de junio de 1996, el informe del funcionario acusado, este es, el Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial. Dicho funcionario en nota fechada el 21 de junio de 1996, expresó que no tiene bajo sus órdenes a SINCLAIR, sin embargo, señala que está en capacidad de informar a esta Superioridad que el señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR, se encuentra a órdenes de la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. Inmediatamente se libró mandamiento de habeas corpus en contra de dicha autoridad, la cual en escrito fechado el 24 de junio de 1996 expresa:

"Recibida nuevamente, y por tercera vez, en este Despacho Acción de Habeas Corpus interpuesta por CARLOS P. BROWN a favor del señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR (A) REY, quien se encuentra detenido en relación a investigación por el Delito Contra el Patrimonio y Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de LUIS FERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, procedemos a dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por esa Corporación de Justicia:

1. No es cierto que este Despacho haya ordenado la detención del recurrente. La detención del señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY, fue ordenada mediante providencia fechada el día 30 de agosto de 1995, emitida por la Fiscalía Tercera de Circuito de la Provincia de Colón (ver foja 49).

2. Según se desprende de la providencia en comento, la detención de RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY tuvo como fundamento lo siguiente:

"... denuncia suscrita por EDWIN CABAL MARÍN, en la P. T. J. de Cristóbal, el día 21 de julio, de 1995; por el asalto cometido en horas de la noche del veinte (20) de ese mismo mes y año, por dos sujetos en la residencia del prenombrado FERNANDO MARÍN, quien resultó herido con arma de fuego, debido a los disparos hechos por los asaltantes. Posteriormente rindió declaración jurada en al P. T. J. de Cristóbal, la señora RUBIELA MARÍN GUTIÉRREZ, hermana de Fernando Marín, quien dijo que al ir lo a visitar en la sala de cuidados intensivos, del hospital Manuel Amador Guerrero, éste le dijo que los sujetos que lo atacaron fueron, el hijo de Gisela que le dicen ADI y otro de apodo REY, con residencia en Coco Solo, quienes tenían capuchas en el rostro, logrando quitarle a uno de ellos la que tenía puesta ..."

3. En la actualidad el señor RICAURTER EURÍPIDES SINCLAIR PÉREZ (A) REY, con cédula de identidad personal N° 3-701-2333 y con residencia en al Barriada Coco Solo, se encuentra detenido en la Cárcel Pública de Colón, a órdenes de este Despacho Instructor, en virtud de nota N° 2677 del 13 de noviembre de 1995 mediante la que el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial solicitó fuera filiado a órdenes de este Despacho al Director de Corrección de la provincia de Colón. No obstante, a fin de verificar esa información en aquella ocasión se llamó vía telefónica a la Cárcel Pública de Colón en donde se nos manifestó que el detenido se encontraba a órdenes de la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón por el mismo hecho delictivo ...".

El artículo 2602 del Código Judicial establece que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial conocerán de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando o jurisdicción en una provincia. Así también, el artículo 2588 de ese mismo cuerpo de leyes establece que cuando la persona contra quien se dirige el mandamiento de habeas corpus no tiene bajo sus órdenes al detenido y manifiesta que el mismo se encuentra a órdenes de otro funcionario, si el tribunal no es el competente para seguir conociendo la acción, deberá enviar, sin dilación alguna, los autos al funcionario judicial competente. En consecuencia, siendo esta la situación que se plantea en el presente negocio, es procedente declinar la acción de habeas corpus al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA EL CONOCIMIENTO de la acción extraordinaria de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. MABEL DEL C. ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LOS ARTÍCULOS 1230 Y 1235 DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **JULIO C. LEDEZMA**, en su calidad de Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, ha remitido al Pleno de esta Máxima Corporación Judicial, la advertencia de inconstitucionalidad que contra los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal, formulara la licenciada **MABEL ATENCIO** en su calidad de apoderada judicial del señor JAIME PADILLA.

Esta incidencia reposa dentro del proceso que por defraudación fiscal se surte en la Administración Regional de Ingresos en relación con la empresa **FOXY LUXY NAVIGATION CO. S. A.** de la cual el licenciado **PADILLA** funge como su representante legal.

Procede esta Superioridad en primer término, al análisis de la advertencia presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los requerimientos exigidos por el Tribunal, que condicionan la viabilidad de la misma.

Examinado el legajo se advierte de inmediato que la advertencia de inconstitucionalidad en estudio no puede ser admitida, por las razones que se expresan de seguido:

El artículo 203 de la Constitución Nacional prevé la posibilidad de que el funcionario público encargado de administrar justicia, eleve al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sea por iniciativa propia (consulta de Constitucionalidad) o porque así se lo advirtiese una de las partes del proceso (Advertencia de Inconstitucionalidad), el conocimiento o decisión en cuanto a si una disposición legal o reglamentaria **que es aplicable al caso** que ventila, es inconstitucional. La **aplicabilidad** en el proceso de la norma advertida es pues, uno de los requisitos condicionantes para la viabilidad de la advertencia.

Sin embargo se constata, que la iniciativa procesal de naturaleza incidental presentada por la licenciada **ATENCIO** recae en dos disposiciones legales que no son aplicables al proceso que se sigue en relación a la empresa **FOXY LUXY NAVIGATION CO. S. A.**

En efecto, como se desprende del escrito de advertencia presentado, el advirtiente considera que la Administración de Regional de Ingresos pretende hacer comparecer al proceso e imputarle cargos por defraudación a la empresa **FOXY LUXI NAVIGATION CO. S. A.** mediante la utilización de los procedimientos de notificación por vía de correo o edicto, contenidos en los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal, los que considera violatorios de los artículos 22 y 32 de la Constitución Nacional, al estimar que tal proceder merma claramente su derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Sin embargo, y conforme a la información suministrada por el señor Administrador Regional de Ingresos (fs. 8-9), la formulación de cargos por supuesta defraudación fiscal en relación con la empresa **FOXY LUXY NAVIGATION CO. S. A.** le fue notificada al representante legal de la misma, señor PADILLA BELIZ de la

manera prevista en los artículos 1330 y 1331 del Código Fiscal, **normas especiales y directamente aplicables a los procesos de contrabando y defraudación fiscal.**

Estas dos disposiciones legales establecen de manera expresa el trámite de notificación personal, y de manera supletoria la notificación por vía de edicto emplazatorio para comunicar a un contribuyente la formulación de cargos por defraudación, no así por correo u otros medios.

El Magistrado Sustanciador, con vías a esclarecer la situación que se presentó en este caso con respecto a la notificación por vía de edicto y las citaciones a las que hace referencia el advirtiente, se comunicó con el señor Administrador Regional de Ingresos, quien aclaró que se han expedido otras **citaciones** en vías de que el señor JAIME PADILLA comparezca ante la Administración Regional de Ingresos, pero las mismas guardan relación con otras investigaciones que se adelantan por presunta transgresión de las leyes tributarias, en relación al contribuyente JAIME PADILLA como persona natural, y a otras empresas de las que funge como representante legal, investigaciones distintas al caso de la empresa **FOXY LUXY NAVIGATION CO. S.** A., en el que sí se han formulado cargos por defraudación.

En estas circunstancias, se evidencia por una parte, que los artículos advertidos (1230 y 1235 del Código Fiscal) **no son aplicables para decidir el caso de FOXY LUXY NAVIGATION CO. S. A.**, y que las normas que sí son aplicables para el trámite de notificación (1330 y 1331 Cód. Fiscal) ya han sido aplicadas por la autoridad respectiva, situaciones que examinadas a la luz del artículo 203 de la Constitución Nacional conducen a la no admisión del escrito de advertencia, toda vez que este Máximo Tribunal de Justicia ha sido reiterativo en negarle curso legal a aquellas advertencias de inconstitucionalidad que recaen en normas no aplicables para decidir el caso. (v.g. resoluciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 31 de diciembre de 1991; 21 de febrero de 1992 y de 8 de junio de 1993.)

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad que contra los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal, formulara la Licenciada MABEL ATENCIO en su calidad de apoderada judicial del señor JAIME PADILLA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO HUMBERTO E. RICORD, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA LEY N° 2 DE 3 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Humberto E. Ricord ha presentado demanda en la cual pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare que es inconstitucional la Ley N° 2 del 3 de enero de 1996 expedida por la Asamblea Legislativa.

Sostiene el demandante que la mencionada Ley N° 2 de 3 de enero de 1996 viola los artículos 101 -numerales 3 y 4, 105, 117, 132 -incisos 1° y 3°, 153

inciso 1°, numeral 16 inciso 1° y 2°, 160, 169 y 173 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa.

De manera preliminar debe el Pleno hacer ciertos señalamientos en relación con el presente negocio. Cabe destacar que el artículo 153 numeral 16 establece como una de las funciones legislativas ejercidas por la Asamblea Legislativa conceder al Órgano Ejecutivo cuando éste así lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas durante el receso de la Asamblea Legislativa, a través de Decretos-Leyes. En este sentido, el inciso segundo del numeral 16 antes mencionado es claro al señalar que "la ley de facultades extraordinarias expira al iniciarse la legislatura ordinaria subsiguiente".

El acto impugnado lo constituye la Ley N° 2 de 3 de enero de 1996 publicada en la Gaceta Oficial N° 22,944 de 4 de enero de 1996, a través de la cual se concede al Órgano Ejecutivo Facultades Extraordinarias para que, mediante decretos-leyes, dicte disposiciones relativas al régimen jurídico de las zonas procesadoras para la exportación. Esta ley comenzó a regir, según lo indica su artículo 2, a partir de su promulgación, es decir, el 4 de enero de 1996. El demandante presentó su demanda de inconstitucionalidad ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 29 de febrero de 1996. Es un hecho por todos conocido que la Asamblea Legislativa inició su legislatura ordinaria el día 1° de marzo de 1996. De todo lo antes expuesto se colige que a partir del 1° de marzo del año en curso, la Ley N° 2 de 3 de enero de 1996 expiró, tal como lo dispone el Artículo 153 - numeral 16 - inciso segundo de la Constitución Política de la República de Panamá.

El demandante incurre en un error de interpretación al señalar que dicha ley sigue vigente porque el término "expira" contenido en el artículo en cuestión debe entenderse como que expira el uso de las facultades extraordinarias mas no así la ley que las concede. Ello no es cierto por cuanto el texto constitucional es claro al señalar que "**la Ley de facultades extraordinarias expira al iniciarse la legislatura ordinaria subsiguiente**" por lo que, en el caso que nos ocupa, la Ley N° 3 de 4 de enero de 1996 expiró el 1° de marzo de 1996 al iniciarse la legislatura ordinaria de la Asamblea Legislativa. Lo que no expira son los decretos-leyes expedidos por el Órgano Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias concedidas mediante la Ley N° 3 de 4 de enero de 1996. Esos decretos-leyes siguen vigentes hasta tanto la Asamblea Legislativa legisle sobre la materia de que se trate, posibilidad esta contemplada en el inciso segundo del numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política al señalar que "todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en ejercicio de las facultades que se le confieren deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate. El Órgano Legislativo podrá en todo tiempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-Leyes así dictados." Definitivamente que mientras estos Decretos-Leyes así emitidos no sufran derogación alguna por parte de la Asamblea Legislativa, los mismos pueden ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. No ocurre igual con la ley de facultades extraordinarias que le dio origen. La misma era susceptible de impugnación mediante una demanda de inconstitucionalidad desde el momento de su promulgación hasta el inicio de la legislatura ordinaria siguiente de la Asamblea Legislativa, es decir, hasta el 1° de marzo de 1996.

Dado que la ley impugnada en la presente demanda ha cesado en su vigencia, la Corte Suprema es del criterio que la solicitud de la parte demandante deviene sin objeto por lo cual lo procedente es declarar que en el presente negocio ha ocurrido el fenómeno jurídico de sustracción de materia.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente negocio ha ocurrido el fenómeno jurídico de SUSTRACCIÓN DE MATERIA y en consecuencia ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

Después de leer la demanda de inconstitucionalidad presentada por el doctor HUMBERTO E. RICORD contra la Ley N° 2 de 3 de enero de 1996, he podido percatarme que la misma fue presentada el 28 de febrero de 1996, o sea, dos días antes del inicio de la legislatura ordinaria de la Asamblea Legislativa y por tanto, la ley que otorgó facultades extraordinarias al Órgano Ejecutivo para legislar sobre determinadas materias, era susceptible de impugnación mediante una demanda de inconstitucionalidad, tal como lo sostiene la resolución judicial que antecede, al final del penúltimo párrafo.

Si ello es cronológicamente así, procedía su admisión y traslado a la Procuraduría de turno para el impulso procesal inicial que viabilizaría el análisis de fondo de la pretensión en el momento procesal correspondiente. En materia constitucional contra actos consumados o ejecutoriados cabe una acción de inconstitucionalidad.

Como este criterio no es compartido por la mayoría de los miembros de la Corte que integran la Sala Plena como Tribunal Constitucional, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA CHANDEK EN NOMBRE DE SVEN VALDELAMAR WAGE CONTRA EL ACTO DE AUTORIDAD S/N DEL 13 DE JULIO DE 1994 EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución proferida el 29 de marzo de 1996 declaró inconstitucional el acto de autoridad s/n de 13 de julio de 1994, dictado por la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Esta Corporación se ha podido percatar que la citada sentencia presenta un error en su parte resolutiva, al expresar: "En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República ...".

Evidentemente el error consiste en que, en la parte resolutiva de esta sentencia de inconstitucionalidad, aparece una de las Salas de la Corte como el tribunal que la dictó, cuando realmente la suscribió el PLENO de la Corte, que es a quien compete decidir sobre esta materia.

A pesar que la citada sentencia se encuentra ejecutoriada, resulta procedente su corrección, en cuanto al tipo de error incurrido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 986 del Código Judicial que faculta al juzgador respectivo, de oficio, a realizar la enmienda pertinente en cualquier tiempo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, CORRIGE la parte resolutiva de la sentencia de 29 de marzo de 1996 dictada por esta Superioridad, la cual quedará de la siguiente manera:

"En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el acto de autoridad s/n del 13 de julio de 1994, expedido por la Gobernación de la Provincia de Panamá".

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. SIDNEY SITTÓN URETA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO DE 1996, PROFERIDA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Sidney Sittón Ureta presentó acción de inconstitucionalidad contra "la Resolución fechada 2 de enero de 1996 proferida por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal", acto jurisdiccional en el que "se tiene como EXTEMPORÁNEA la Solicitud de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena impuesta a LUIS ALBERTO GONZÁLEZ y ROSARIO DEL SOCORRO BÁEZ DE GONZÁLEZ, la cual fue recibida a INSISTENCIA DE PARTE en la Secretaría del Tribunal" (f. 5).

Le correspondió a la Procuradora de la Administración contestar el traslado que fuera corrido de la demanda, lo que hizo oponiéndose a la pretensión anunciada. En la Vista correspondiente se expresa lo que sigue:

> "No podemos concluir este escrito, sin antes llamar la atención de que, el proceso de Inconstitucionalidad, es un proceso especialísimo destinado a la guarda de los principios constitucionales, por lo que el mismo no puede ser empleado por los letrados del derecho con el propósito de convertirlo en una instancia más adentro del proceso jurisdiccional".

A juicio del demandante, el acto atacado infringe los artículos 28 y 32 se nuestra Carta Magna. El concepto de la violación del artículo 28 lo expresa señalando que "el Juez al dictar esta resolución le anula el derecho a los condenados de verse beneficiados con una Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena"; en cuanto al artículo 32, el cargo consiste en que a los condenados "se le conculcan sus derechos al negarse en la resolución demandada la opción de solicitar la Suspensión de la Pena ante el Juez de la causa, contraviniendo así los principios de readaptación social y limitando el derecho de pedir ante el Juez natural un pronunciamiento de fondo" (f. 6).

El artículo 28 de la Constitución Nacional reza así:

> "ARTÍCULO 28. El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y de defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad, estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación".

Su lectura pone inmediatamente de manifiesto que el cargo de infracción que a este respecto se formula es extraño al tenor literal de ese precepto, que nada tiene que ver con la institución de la suspensión condicional de la pena.

Igual ocurre con el cargo relativo a la supuesta infracción del artículo 32 constitucional, precepto éste que, entre las garantías procesales que tutela, no comprende, ni de soslayo, la materia concerniente a la suspensión condicional de la pena.

Es preciso destacar que el acto demandado es técnicamente un **proveído de mero obedecimiento**, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Judicial, y que lo que en él se resuelve nada tiene que ver con el fondo de la pretensión que le da origen, cual es la de que se le reconozca a unos condenados el beneficio de la libertad condicional. Lo resuelto en ese proveído recae exclusivamente sobre la oportunidad de la presentación de la solicitud, declarándola **extemporánea**, toda vez que al momento de su presentación la causa ya se encontraba archivada y en etapa de ejecución de sentencia, por lo que de manera alguna se le puede atribuir a la decisión jurisdiccional el efecto de **anular** el derecho de los condenados al reconocimiento del beneficio impetrado, como tampoco la vulneración de sus derechos procesales.

Se trata a todas luces de un proceso "inventado", con el propósito de "convertirlo en una instancia más dentro del proceso jurisdiccional", como lo afirma la Procuradora de la Administración.

Por las razones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que el Proveído de Mero Obedecimiento dictado por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, el 2 de enero de 1996, NO INFRINGE LOS ARTÍCULOS 28 Y 32, COMO NINGUNO OTRO, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE JEANE JOHNSON JUSTINIANI EN CONTRA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 133 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rubén Moncada Luna ha presentado escrito mediante el cual se solicita aclaración de la resolución expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 17 de mayo de 1996 en atención a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Rubén Moncada Luna contra el Decreto Ejecutivo N° 133 del 30 de noviembre de 1994.

En el escrito mediante el cual se solicita la aclaración de sentencia, el

apoderado judicial de la parte actora formula una serie de consideraciones sobre la parte motiva de la sentencia de la Corte, lo cual es ajeno a la solicitud de aclaración y corrección de las resoluciones reguladas por el artículo 986 del Código Judicial. En este sentido, el Licenciado Moncada Luna pretende que esta Corporación se pronuncie nuevamente sobre el fondo del negocio que nos ocupa y en consecuencia se manifieste en torno a la observación que se hace en el último párrafo de la parte motiva.

El Pleno de esta Corporación considera que no es pertinente aclaración alguna del fallo de 17 de mayo de 1996 por cuanto del examen realizado sobre la resolución en cuestión no observamos la necesidad de aclaración en lo que respecta a frutos, intereses, daños, perjuicios o costas, no se perciben frases oscuras o de doble sentido en la parte resolutiva, ni mucho menos errores aritméticos, o de escritura o de cita, que son los aspectos que nuestro Código Judicial permite corregir. El mismo es claro al indicar que la aclaración de sentencia no puede alterar la resolución original que es lo que en realidad pretende y solicita la parte demandante.

En vista de que la sentencia antes aludida no presenta frases oscuras en su parte resolutiva, el Pleno considera improcedente la presente solicitud de aclaración de sentencia.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de sentencia presentada por el Licenciado Moncada Luna contra la sentencia de 17 de mayo de 1996 expedida por el Pleno de esta Corporación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICDO. JORGE LUIS PULIDO R. EN REPRESENTACIÓN DE ESMERALDA MARTÍNEZ, CONTRA EL DECRETO DE PERSONAL N° 737 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JORGE LUIS PULIDO R.** actuando en representación de **ESMERALDA MARTÍNEZ DE GONZÁLEZ,** ha presentado acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 737 de 21 de diciembre de 1994 emitido por conducto del Ministro de Educación, mediante le cual se deja sin efecto el nombramiento de la señora **DE GONZÁLEZ** del cargo que venía ocupando como Trabajadora Manual III en el Canal de Televisión Educativa (Canal Once).

El Pleno de la Corte procede a examinar la acción presentada, en vías de determinar si el libelo cumple con los requisitos formales de admisión exigibles para este tipo de procesos.

En este punto se percata este Cuerpo Colegiado, que se ha planteado la inconstitucionalidad de un acto de **carácter administrativo**, mediante el cual se dispone la insubsistencia del nombramiento de una funcionaria adscrita al Ministerio de Educación.

Sobre el particular es de advertir, que de la exposición del recurrente se desprende la circunstancia de que desde el momento de la destitución (año 1994) a esta fecha, no se han incoado los recursos que la Ley prevé para enervar este tipo de medidas administrativas de personal, sean estos los recursos en la vía gubernativa, y el proceso Contencioso Administrativo, produciéndose el agotamiento de los referidos medios de impugnación.

Sin embargo, esta Superioridad fue puesta en conocimiento, a través de la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte, que mediante auto de 17 de marzo de 1995 se le negó la **admisión** a la demanda contencioso administrativa presentada contra el decreto de destitución de ESMERALDA DE GONZÁLEZ, por cuanto la misma se había interpuesto de manera extemporánea.

El demandante en ningún momento hace alusión a esta circunstancia dentro de la acción de inconstitucionalidad, pero se infiere que ésta se interpone precisamente por la imposibilidad de recibir un pronunciamiento de fondo para su pretensión dentro del proceso contencioso administrativo, por haber prescrito la oportunidad de presentar la acción.

Debemos indicar al actor que esta Superioridad ha venido reiterando con insistencia la imperatividad del **agotamiento de los medios de impugnación** que la ley ha previsto para enervar actos, sean de carácter administrativo o jurisdiccional, previos a la presentación de la acción de inconstitucionalidad, tal como se colige, entre otras, de las resoluciones calendadas 16 de mayo de 1996; 22 de septiembre de 1995; 2 de julio de 1994; 12 de mayo de 1993 y 10 de diciembre de 1993. Para mayor ilustración reproducimos la parte pertinente de las resoluciones de mayo y diciembre de 1993, respectivamente:

> "Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público, y como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debida forma y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda estar dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia." (Subrayado es nuestro).
>
> "... tampoco se cumplió con el requisito del agotamiento de los medios de impugnación correspondientes, antes de acudir ante la Corte Suprema, lo cual es imperativo dado que la Corte actúa en estos procesos, no como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público garante de la integridad de la Constitución." (Subrayado es nuestro).

La Corte ha de dejar sentado, que la acción de inconstitucionalidad no constituye un medio de impugnación más dentro de un proceso, sino una acción autónoma que le da vida a un proceso nuevo e independiente, que sólo debe interponerse contra actos definitivos, ejecutoriados **y que no pueden impugnarse por otros medios**, y no en los casos en que existiendo las vías procesales comunes o especiales en materia de legalidad, el afectado obvie su utilización.

Finalmente debemos destacar la existencia de otras dos deficiencias en el libelo que igualmente imposibilitan su admisión. Esto es, la omisión de mencionar la participación del Señor Procurador General de la Nación o de la Procuradora de la Administración, según a quien corresponda el turno para que emita concepto sobre la cuestión sometida al control constitucional, y el concepto, con la expresión de una causal específica, en que se produce la supuesta infracción constitucional.

En atención a todas estas consideraciones, debe negarse curso legal a la demanda presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto N° 737 de 21 de diciembre de 1994 emitido por el Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. RAFAEL MÁS VELASCO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Y EN CONTRA DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 11 DE 23 DE MAYO DE 1986. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RAFAEL MÁS VELASCO**, actuando en su propio nombre y representación, interpuso acción de inconstitucionalidad contra la parte final del artículo 18 de la Ley 8 del 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11 de 23 de mayo de 1986, que a su juicio viola los artículos 73 y 74 de la Constitución Nacional.

Repartido el negocio, el Magistrado Sustanciador lo admitió mediante resolución del 23 de agosto de 1993, y conforme al artículo 2554 del Código Judicial, se le dio traslado al señor Procurador General de la Nación, funcionario que se encontraba en turno, para que emitiera concepto.

Recibido el concepto del Procurador, mediante la Vista N° 14 del 6 de mayo de 1994, se procedió a darle al proceso el impulso previsto en el artículo 2555 de la citada excerta legal. Consta en el expediente que se ha cumplido con la publicación de los edictos, de acuerdo a recortes del diario "La Prensa", visible a fojas 63, 65 y 65 del infolio, y el término establecido por la anterior norma está vencido. Ello ubica el proceso en estado de decidir, para lo cual se hace imperioso analizar la pretensión del demandante.

El demandante en este caso, lo es el licenciado **RAFAEL MÁS VELASCO**, quien actúa en su propio nombre y representación, quien considera que la parte final del artículo 18 de la Ley N° 8 del 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley N° 11 del 23 de mayo de 1986, infringe los citados artículos 73 y 74 de la Carta Fundamental.

La primera de las dos normas fue infringida según el impugnante en concepto de violación directa, ya que dicha norma establece que todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley, siendo dicha ley -en este caso- el Código de Trabajo y normas complementarias, que establecen que en caso de existir acciones civiles emanadas de un accidente de trabajo, dichas acciones serán de competencia de los Tribunales Civiles.

La norma impugnada señala que las acciones civiles derivadas de un accidente de trabajo dentro de su jurisdicción -actos de comercio, de transporte y de tráfico marítimo- son competencias del Tribunal Marítimo. Plantea entonces el actor una "dualidad" entre la norma constitucional a través de la ley, y la ley marítima.

Trajo a colación el letrado, el artículo 12 del Código Civil, que señala que cuando hay incompatibilidad entre una norma legal y una constitucional, prevalecerá ésta contra aquella.

Considera el licenciado **MÁS VELASCO** que los accidentes de trabajo debe ser regulado por la legislación laboral, y ésta establece que las acciones de tipo civil emanadas de accidentes de trabajo deben ser reguladas por el Derecho Civil y no por el Marítimo; por lo tanto, la parte final del artículo 18 de la Ley 11 de 1986 es inconstitucional por adjudicarse una competencia que no le corresponde.

Utiliza como asidero para esta aseveración, el contenido de los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete N° 68 del 31 de marzo de 1970, los cuales transcribe, y aduce el artículo 77 del mismo instrumento legal.

También esgrimió el accionante los artículos 291, 292 y 293 del Código de Trabajo, que definen el riesgo profesional, accidente de trabajo y cuales son los casos de accidentes de trabajo, respectivamente.

En el mismo sentido, los artículos 301 y 302 de la misma excerta establecen ante que jurisdicciones son reclamables las prestaciones por accidentes de trabajo, dependiendo de su origen.

Por otro lado, consideró el licenciado **MÁS VELASCO** que el artículo 17 de la Ley 8 del 30 de marzo de 1986 -perteneciente a la Ley Marítima- que estipula la competencia de la Ley Marítima, no establece dentro de ella que los accidentes de trabajo son materia privativa del Tribunal Marítimo.

Considera el impugnante que también se violó el artículo 74 del Estatuto Fundamental, en concepto de aplicación indebida, que señala que "la Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo" toda vez que dicha Ley es el Código de Trabajo y leyes complementarias. Al crearse la Ley 8 del 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11 del 23 de mayo de 1986 mediante la cual se crearon los Tribunales Marítimos y se dictaron normas de procedimiento, engendraron el artículo 18, "en franca violación de la Constitución Nacional ...".

El artículo en comento señala que "la Ley regulará ..., colocándolas sobre una base de justicia social ...", justicia social que no existe -a juicio del actor- porque en la realidad el trabajador no puede ejercer sus acciones civiles emanadas de un accidente originado en una relación contractual. Los trabajadores no pueden ejercer sus acciones en los Tribunales Civiles, que se encuentran en todo el territorio nacional, sino que tendrían que venir a la capital para ejercer sus pretensiones en el Tribunal Marítimo; en fin, la norma no beneficia a ambos, y perjudica al asalariado, que no puede venir a la capital, cosa que sí puede hacer el empleador, por tener los medios disponibles para ello.

En otro sentido, considera el impugnante que como los accidentes de trabajo son producto de una relación contractual, al existir de hecho o expresamente un Contrato de Trabajo, deben ser los Tribunales Civiles los competentes para resolver las acciones civiles que emerjan de dicha relación, indistintamente de donde se produzca el percance.

El Procurador General de la Nación emitió su opinión sobre el negocio que nos ocupa, señalando que ambas normas constitucionales que el licenciado **MÁS VELASCO** considera infringidas son de naturaleza programáticas, que "no están revestidas de coercitividad por sí solas; pero ello no significa que por el hecho de que se incluyan en la demanda de inconstitucionalidad las leyes que desarrollan la cláusula de reserva legal convierta a los artículos 73 y 74 de la Constitución en normas operativas, es decir, de auténtico contenido normativo."

Dejó establecido el despacho del Procurador, que ambos artículos son de carácter programático o declarativo; o sea, que no consagran derechos ni garantías individuales o sociales, por lo que no pueden servir para probar demostrar la inconstitucionalidad de una norma de rango inferior, pues no están dotadas de contenido normativo.

Esgrime otros argumentos el Ministerio Público para demostrar que aunque no fueran de naturaleza programática las normas Constitucionales estimadas como violadas, la parte final del artículo 18 -ya citado- tampoco quebrantaría los artículos 73 y 74 del Estatuto Fundamental.

Expuestos los principales aspectos del caso, se dispone la Corte a emitir su juicio, previa las siguientes consideraciones.

Considera esta Corporación de Justicia atinados los comentarios del señor Procurador, toda vez que, efectivamente, ambas normas son de naturaleza programática a lo señalado con anterioridad.

Efectivamente, el artículo 73 señala que "Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley.".

La norma no contiene ningún derecho subjetivo susceptible de ser violado, pues asigna a la jurisdicción del trabajo las controversias que surjan en las relaciones laborales, así es que hay que desestimar la impugnación de la norma.

Ya la Corte se ha pronunciado anteriormente sobre esta norma, y consideramos prudente exponer un extracto del fallo del Pleno de esta Corporación de Justicia, del 29 de junio de 1993, que decidió la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por la licenciada Lizca Estela Polanco M., contra el artículo 215 del Código de Trabajo por el artículo 2 de la ley 8 de 1981 que en su página quinta dice lo siguiente:

> "Tampoco se viola el artículo 73 constitucional, pues este precepto se limita a establecer la jurisdicción especial laboral para el conocimiento de las controversias que tengan origen en las relaciones entre el capital y el trabajo, reservando a la ley la regulación de esta función jurisdiccional, regulación que reconoce a la autoridad administrativa potestad para intervenir en el ejercicio de tal función."

De igual manera, el artículo 74, que establece que "La Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social y fijando una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores.", atribuye a la ley la regulación de las relaciones laborales, sobre la base de una justicia social, atribución que no se puede demostrar, excepto si está fundamentada en otra norma constitucional violada, cuyo contenido si fuese normativo.

Para fundamentar este criterio, exponemos un fragmento de la resolución del 2 de julio de 1991, emitida bajo la ponencia del Magistrado José Manuel Faúndes, en el que señala que

> "Finalmente, el accionante cita como concepto de infracción del artículo 74 de la Constitución Política la violación directa.
> ...
> Sirve para desestimar este vicio, además de los argumentos utilizados para descartar la violación del artículo 67 de la Constitución, el razonamiento lógico acerca del fin del texto en examen, cual es el de instituir los principios rectores de las relaciones entre el capital y el trabajo sobre los que la ley debe inspirarse. El carácter declarativo, programático, enunciativo, idealista y no normativo de esta disposición queda al desnudo mediante la simple lectura de su texto:
>
> 'ARTÍCULO 74. La Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social y fijando una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores.'
>
> De ahí que esta norma constitucional no puede ser objeto de violación directa en asuntos como el presente caso, si bien sirve de

> cimiento al carácter tuitivo del derecho del trabajo. Una forma en que podría violarse este precepto sería a través de una ley o decreto reglamentario que se aparte de los fines de justicia social y protección estatal en beneficio de la clase trabajadora y ello estaría sujeto a un análisis de la Corte, para determinar si esa ley o decreto deviene inconstitucional. Por tanto, tampoco, la sentencia impugnada viola el artículo 74 de la Carta Magna."

Esto demuestra que dicha norma tampoco contiene ningún derecho subjetivo susceptible de ser violado.

Por lo tanto, no le resta a esta Superioridad otra salida que negar la pretensión que nos ocupa.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la parte final del artículo 18 de la Ley 8 del 30 de marzo de 1982, modificada por la Ley 11 del 23 de mayo de 1986.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 13 DE 27 DE JULIO de 1994, POR EL CUAL SE MODIFICO EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 23 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL, ESPECÍFICAMENTE LA FRASE "O LA INTENTE SACAR" MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **JOSÉ RAMIRO FONSECA** ha presentado ante esta Superioridad, acción de inconstitucionalidad contra la frase "**o la intente sacar**" contenida en el artículo 3 de la Ley 13 de 27 de junio de 1994, por el cual se modifica el artículo 255 del Código Penal.

Acogida la demanda y surtidos todos los trámites establecidos por ley para este tipo de procesos, entra el Pleno de la Corte a desatar la controversia constitucional planteada.

Se alega ante este Tribunal, la incompatibilidad constitucional de una frase del artículo 255 del Código Penal, al tipificarse como conducta típica, antijurídica y culpable, "**el intentar sacar drogas del territorio nacional con fines de tráfico o tránsito internacional con destino a otros países.**"

Considera el demandante en lo medular, que la norma acusada contraviene de manera directa los artículos 30 y 31 de la Constitución Nacional, toda vez que la conducta prevista en el texto legal impugnado claramente configura el delito de tráfico o tránsito internacional de drogas en grado de tentativa (conforme a los artículos 44 y 60 del Código Penal), y no debe quedar establecida de manera autónoma y separada en el artículo 255 del mismo cuerpo legal, asignándole una punibilidad idéntica a las otras dos conductas penalizadas en esa norma penal.

NORMA LEGAL CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE SOLICITA

Se acusa de inconstitucionalidad una frase contenida en el artículo 255 del Código Penal modificado por la Ley 13 de 1994, misma que esta Superioridad procede a reproducir a continuación en su parte pertinente:

> "El que introduzca droga al territorio nacional, aunque sea en tránsito, la saque o la intente sacar, en tráfico o tránsito internacional, con destino hacia otros países, será sancionado con prisión de 8 a 15 años. ..." (Se destaca la parte pertinente).

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

El Pleno de la Corte procede a enunciar las normas constitucionales cuya violación aduce el recurrente, esto es, los artículos 30 y 31 de la Constitución Nacional.

Por un error involuntario del demandante, se acusa la vulneración del texto del artículo 31 de la Constitución Nacional como contentivo de la garantía del debido proceso legal, cuando en realidad, la norma constitucional que consagra este principio es el artículo 32. Lo mismo acontece en relación a la supuesta transgresión del artículo 30 de la Constitución Nacional, cuando en realidad el demandante hace alusión al texto del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

Aclarada la situación, se procede de inmediato al examen de las normas cuya vulneración se alega.

El primer texto ha examinar es el artículo 31 de la Constitución Nacional, cuyo tenor reproducimos de seguido:

> "Sólo serán penados los hechos declarados como punibles por la Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicables al acto impugnado."

El demandante conceptúa que la violación constitucional se produce, con fundamento en las siguientes premisas:

> "... los hechos declarados punibles al momento de su perpetración, deberán ser exactamente aplicables al acto imputado, es decir, si un agente ha intentado sacar drogas con destino a cualquier país extranjero y no logra su cometido por causas ajenas a su voluntad, lo que se produce en la mayoría de los casos por la intervención de las diferentes agencias policiales del país, debe ser sometido a los rigores del sumario y después de un proceso si a ello hay lugar, por el delito de Tráfico Internacional en grado de tentativa, primero porque se ejecutaron todos los actos encaminados a ello; segundo el hecho punible no se logró ejecutar por causas ajenas o independientes a la voluntad del activo y tercero, ello logra encapsular la figura del delito en grado de tentativa.
>
> Así pues, podemos indicar que el hecho punible cometido por un agente que haya intentado introducir drogas a otro país, pero no lo pudo realizar por una razón fuera de su alcance, se le debe aplicar exactamente el delito de Tráfico Internacional de Drogas, ello sí, en grado de tentativa, con todas las prerrogativas que el Derecho Penal panameño le ofrece a este tipo de injusto y lo más elemental se produce cuando precisamente los artículos 44 y 60 del compendio punitivo, están vigentes, y por ello debe ser aplicables a los delitos relacionados con drogas en sus diferentes tipos ..."

El demandante considera igualmente, que el texto impugnado resulta violatorio del artículo 32 de la Constitución Nacional que consagra el principio del debido proceso legal, toda vez que "la frase `o intente sacarla viola los trámites legales de índole penales que debe regir la figura del debido proceso, al omitir, por lo menos decir, la institución punitiva conocida como el delito en grado de tentativa, que verdaderamente consagran los artículos 44 y 60 ibídem, y se traduce en una violación del artículo 31 (sic) de la Constitución Política de la República ..."

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuraduría de la Administración, encargada de emitir concepto en relación a las imputaciones de la parte actora sobre la supuesta violación de normas constitucionales por parte de la frase impugnada del artículo 255 del Código Penal, mediante Vista Fiscal N° 71 de 8 de febrero de 1996 visible a folios 13-21 del expediente, solicita al Pleno de la Corte que se niegue la declaratoria de inconstitucionalidad solicitada, al considerar, luego de su examen jurídico, que la frase acusada de inconstitucional no riñe con el ordenamiento constitucional panameño.

Las razones medulares en que se fundamenta el dictamen vertido por el señor Procurador de la Administración Suplente, se apoyan en abundantes argumentos de orden fáctico y jurídico, que en síntesis se reproducen de seguido:

"El artículo 255 del Código Penal, eleva a la categoría de delito la conducta consistente en introducir droga al territorio nacional, aunque sea en tránsito, sacarla o intentar sacarla, en tráfico o tránsito internacional. Como se observa, esta disposición cuenta con tres (3) verbos rectores: introducir, sacar e intentar. Sin embargo, la acusación de inconstitucionalidad, se refiere específicamente al último, es decir, a la intención de sacar droga del territorio de la República.

El fenómeno social constituido por los delitos de consumo y tráfico de drogas, así como otros delitos conexos a estos, ha alcanzado una ilimitada amplitud, y ha exigido por tanto su tratamiento legal desde una perspectiva global y no doméstica.

El Código Penal, en su artículo 255 recoge un tipo penal, de carácter especial, toda vez que, describe y penaliza el movimiento de sustancias ilícitas hacia, desde o dentro del país (con exclusión de su último párrafo) y en tal sentido emplea las expresiones tránsito y tráfico, términos éstos sinónimos que denotan, movimiento o circulación de personas o cosas.

El delito de tráfico de drogas, previsto en el artículo 255 del Código penal, por las características que reviste no admite el grado de tentativa ...

Sintéticamente la tentativa es definida como la ejecución incompleta de un delito ...

En nuestro Derecho Positivo, encontramos en el artículo 44 del Código Penal el evento de la tentativa, y en torno a él, nos dice textualmente esa disposición que: `Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un hecho punible por actos idóneos encaminados a su consumación y que no se produce por causas independientes al agente.

La tentativa, viene a ser entonces, un delito imperfecto, por la falta de daño físico o inmediato.

La anterior distinción es importante, porque del momento en que el delito pueda considerarse perfecto, dependerá la existencia de la figura de la tentativa, o del delito consumado.
...
El delito a que se refiere la frase impugnada es un delito de peligro, que se entiende consumado desde el momento en que pretenda sacarse la droga del país.

La magnitud y trascendencia del bien jurídicamente tutelado, es decir, la salud pública, justifican la existencia de la norma acusada.

El trasiego de sustancias ilícitas tienen como último propósito, la

comercialización y el enriquecimiento a costas de la salud de la humanidad. Es un flagelo de proporciones incalculables.

El narcotráfico constituye un hecho criminal `sui generis y el deseo de trasegar sustancias ilícitas concretada en cualquier acción idónea tendiente a sacarlas del país, evidentemente constituye una figura delictiva aunque la droga no llegue a su destino, por las razones que sean.

Para puntualizar aún más nuestros comentarios ubicamos la figura delictiva impugnada en la categoría de delito de peligro.
...
Al confrontar la frase `... o la intente sacar ... contenida en el artículo 255 del Código Penal con el artículo 31 de la Constitución, observamos que no existe contradicción alguna, puesto que, el primero tipifica como delito 'intentar sacar' y señala que para quien incurra en esa conducta una sanción, mientras que el segundo establece la garantía de que no habrá delito ni pena sin ley. Ya nos hemos referido a los delitos de mera conducta y a los delitos de peligro. Muchos de ellos, tipificados en nuestro Código penal, no pasarían de ser meros actos preparatorios si no hubiesen sido tipificados como delitos. La Asamblea Nacional tiene la potestad exclusiva y excluyente de tipificar delitos y con fundamento en tal potestad definió como delito, con sobradas razones, la figura cuestionada por el demandante ...

En muchos casos, la diferencia entre la tentativa y la consumación de un delito se encuentra en la definición que da la ley.

El punto de partida está obviamente en la manifestación de voluntad que agota la conducta punible. Si el legislador panameño consideró que es delito contra la salud pública intentar sacar droga del país, su actuación resulta inobjetable, desde el ámbito constitucional, aparte de que tiene plena justificación la medida, habida consideración de la importancia del bien jurídicamente tutelado.

Con respecto al artículo 32 de la Constitución, estimamos que tampoco se produce contradicción alguna por parte de la frase '... o la intente sacar ...', contenida en el artículo 255 del Código Penal por constituir un tipo penal no de daño, sino de peligro."

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Esta Superioridad procede al examen de la norma acusada, y a su confrontación con los textos constitucionales que se estiman transgredidos. De igual forma serán examinadas las consideraciones esgrimidas por el Procurador de la Administración Suplente quien defiende la constitucionalidad de la frase impugnada, y los argumentos de la parte actora.

Transgresión del artículo 31 de la Constitución

Abordaremos en primera instancia, lo atinente a la aludida vulneración del artículo 31 de la Constitución Nacional.

El Pleno debe manifestar que la norma constitucional cuya violación se invoca, resulta de importancia cardinal en nuestro ordenamiento constitucional y particularmente para el derecho penal, toda vez que encierra dos postulados fundamentales: **nulum crimen sine lege**, **nulla poena sine lege**. A tenor de este texto constitucional, sólo pueden considerarse delictivos aquellos actos previamente definidos por la ley como tales, y a nadie puede ser aplicada una pena que no haya sido previamente establecida por medio de la ley.

Estas dos garantías, unidas de manera casi indisoluble, están formuladas de manera clara y precisa en el texto invocado, siendo incluso desarrolladas por el artículo 1° del Código Penal, que en su párrafo primero establece: "Nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito

por la ley vigente al tiempo de su comisión ..."

En este contexto, advierte el Tribunal que el tipo penal descrito en el artículo 255 del Código Penal, tal y como acertadamente indicara la Procuraduría de la Administración, cobija tres conductas antijurídicas y culpables: introducir drogas al territorio nacional; sacar drogas del territorio nacional, o **intentar sacarla**; en todos los casos con fines de tránsito o tráfico internacional. A estas tres conductas les ha sido asignada una sanción que oscila entre 8 y 15 años de prisión.

Al confrontar esta norma legal con el texto constitucional, se vislumbra que en puridad de verdad, es la propia Ley 13 de 1994 la que introdujo a otro cuerpo con rango legal, el Código Penal, una modificación en su artículo 255, **tipificando como conducta delictiva la resolución criminosa de intentar sacar sustancias ilícitas del país**, lo que merece a juicio del legislador, una sanción penal ejemplar que se establece en la propia ley.

Nos encontramos pues, frente a un delito tipificado por Ley, al que corresponde igualmente una sanción contemplada en la Ley. Por ende, el principio constitucional del artículo 31 **"nulum crimen sine lege, nulla poena sine lege"** no se ve menoscabado ni conculcado en este caso, al cumplirse con los dos postulados del texto fundamental.

De hecho, al analizar la variación introducida al artículo 255 del Código Penal, y confrontarla con el texto del mismo artículo previo a la modificación, se advierte de manera palmaria la intención expresa del legislador de tipificar el designio criminoso de "intentar sacar las sustancias ilícitas" y elevarlo al mismo rango penal del ilícito que se verifica cuando efectivamente se trasladan fuera del territorio nacional dichas sustancias. Esta Ley, así como su predecesora, la Ley 23 de 1986, introdujo una gran escala de tipificación delictiva o de tipos penalísticos, en seguimiento de la política criminal del Estado.

El primer párrafo del artículo 255 del Código Penal, antes de la modificación comentada, disponía: "El que introduzca droga al territorio nacional o la saque de él, en tráfico internacional con destino a otros países, será sancionado con prisión de 8 a 15 años."

El nuevo texto reformado introduce dos elementos o variantes fundamentales:

1. plantea la tipificación de las conductas de introducción de sustancias ilícitas a la República de Panamá, o de sacar sustancias ilícitas hacia el extranjero, por tráfico internacional y también por **tránsito internacional**;

2. el **"intentar sacar las sustancias"** en cualquiera de las condiciones antes mencionadas.

Resulta evidente que en el ánimo y propósito del legislador al momento de introducir la reforma, se encontraba la ampliación de la figura delictiva, incluyendo en ella la conducta antijurídica de introducción o salida de sustancias ilícitas en **tránsito** internacional de drogas, así como el **intentar sacarlas**, por lo que el agente que inicia los actos idóneos para trasladar sustancias ilícitas a otro país y por causas ajenas no pueda consumar el injusto, se le sancione con la misma severidad punitiva que aquel que consuma la acción delictiva de sacarla del territorio nacional hacia otros país.

En este sentido, el delito adquiere una categoría de delito instantáneo y formal, por cuanto el punto decisivo para aplicar la sanción penal no es el objetivo del resultado del delito, sino el subjetivo de la voluntad del agente.

En estricto derecho penal, las figuras imperfectas o no consumadas como lo son la tentativa inacabada y el desistimiento, son grados de realización del hecho punible a los cuales la ley les asigna una pena menor que a hechos consumados o figuras delictivas perfectas. No obstante, el legislador puede, mediante una ficción jurídica, elevar a la categoría de hechos delictivos consumados formas imperfectas y preparatorios, que por regla general son impunes.

Se justifica esa ruptura con el iter criminis, por la importancia del bien jurídico que se tutela y la entidad de la lesión que puede producirse, lo que exige la penalización de tales conductas imperfectas asimilándolas a hechos consumados. Algunos ejemplos de estos casos se registran en los artículos 276 y 306 del Código Penal.

Esta Corporación Judicial coincide con los planteamientos de orden fáctico esgrimidos por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que el tráfico y tránsito internacional de drogas constituyen un flagelo a la sociedad mundial, razón por la cual nuestro ordenamiento penal pretende ser en este sentido, un colaborador en la lucha contra estos ilícitos y represor de las conductas que amenazan la salud pública, a través del establecimiento de normas de política criminal, que ajustadas al orden legal como acontece en este caso, sean **cónsonas con la importancia del bien jurídico tutelado.**

Habida cuenta que este proceder se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, y ha sido introducido en nuestra legislación a través de un instrumento legal que no es incompatible con el postulado constitucional del artículo 31, puesto que:

1. La ley (a. 255) ha establecido qué actos se consideran delictivos; y

2. de manera previa establece en forma exacta, qué pena ha de ser aplicable a la comisión del mismo.

Existe pues, correspondencia entre pena y delito, y debe descartarse el cargo imputado.

TRANSGRESIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN

El recurrente conceptúa que la frase impugnada también resulta violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, puesto que al penalizarse la conducta de intentar sacar drogas con la misma sanción punitiva que el delito de sacar drogas del territorio nacional, se violan los debidos trámites legales del proceso penal.

Las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo al principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley, lo que implica, el acatamiento de las formalidades básicas o trámites esenciales que rigen la actividad jurisdiccional.

Sobre el particular debe esta Superioridad destacar que la Constitución Nacional recoge y formula en esta norma, con precisión similar a la del artículo 31, tres principios cardinales del sistema penal individualista-humanitario, consistentes en:

1. que ninguna autoridad pública puede juzgar a una persona por la comisión de un delito determinado, salvo que la ley previamente le atribuya competencia para conocer del delito, y que el sindicado se encuentre dentro de la jurisdicción de dicha autoridad.

Ello excluye la posibilidad de que una persona sea juzgada por una jurisdicción creada con posterioridad a la comisión del delito con el fin único de que conozca del mismo. Así, el párrafo segundo del artículo 2° del Código Penal establece que a nadie se le puede someter a juzgamiento por jurisdicciones extraordinarias o creadas ad-hoc con posterioridad a un hecho punible.

2. Las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a los trámites legales previamente establecidos para procesar a quien cometa un ilícito.

3. Nadie será juzgado más de una vez por la comisión del mismo delito.

Al examinar estos postulados fundamentales se puede advertir que con la expedición de la Ley 13 de 1994, en cuanto a la modificación introducida al

artículo 255 del Código Penal, no se afrenta la disposición constitucional preanalizada, tal como se expresa de seguido:

La inquietud del actor gira en torno a que a la conducta "intentar sacar drogas" debe ser penalizada conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 60 del Código penal, y no conforme a la penalidad prevista en el artículo 255 de ese mismo cuerpo legal.

Un examen de nuestro ordenamiento legal (cfr. arts. 44 y 60 C. P.) denota que la parte general de nuestro catálogo penal define y establece la modalidad de sanción para la tentativa en la comisión de delitos, mientras que otras disposiciones de ese mismo cuerpo legal se ocupan de tipificar y sancionar los delitos específicos (**normativa especial**).

La confrontación del demandante se origina pues, en el ámbito de la **legalidad y no en el constitucional**, puesto que de existir colisión de normas, ésta se daría entre lo dispuesto en los artículos 44 y 60, y lo dispuesto en el artículo 255. Pero ésta última norma se encarga de establecer sin lugar a dudas el supuesto de hecho criminal (conducta típica, antijurídica y culpable) y la sanción punitiva que le corresponde al mismo.

Se evidencia de esta forma que en el negocio que nos ocupa, la Ley eleva una conducta a la categoría de delito, y le asigna una punibilidad específica. Tal actividad no riñe con lo previsto en el artículo 32, ni específicamente con el debido procedimiento legal en materia penal, por cuanto es la misma ley penal la que tipifica la conducta delictiva y le asigna la sanción.

En consecuencia, tampoco se afectan en este caso, los postulados contenidos en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Examinados los argumentos del demandante, esta Corporación Judicial está en condiciones de indicar que no existe contradicción entre la frase "o la intente sacar" contenida en el primer párrafo del artículo 255 del Código Penal y los artículos 31 y 32 de la Constitución Nacional, y así procede a declararlo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "o la intente sacar" contenida en el primer párrafo del artículo 255 del Código Penal.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR CARMEN RODRÍGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° DG/AL-045 DEL 6 DE MAYO DE 1996, EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **CARMEN RODRÍGUEZ**, en su propio nombre y representación advirtió a la Junta Directiva del **INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA**, la inconstitucionalidad de la Resolución N° DG/AL 045 de 6 de mayo de 1996, proferida por el Director General de esa institución. Dicha advertencia se hace dentro del recurso de

apelación interpuesto por la señora Rodríguez, contra la resolución que se acusa de inconstitucional.

Mediante Nota N° 906 DG/AL de 23 de mayo de 1996, el Director General del Instituto Nacional de Cultura remitió la presente advertencia a esta corporación de justicia, cuya admisibilidad se procede a resolver.

Al analizar las constancias procesales se ha podido determinar, en primer lugar, que la advertencia no fue presentada por medio de apoderado judicial, como lo requiere el artículo 2550 del Código Judicial. En segundo lugar, en relación con el libelo, se observa que éste no cumple con los requisitos comunes a toda demanda ni tampoco con las exigencias particulares que establece el artículo 2551 del Código Judicial, para las acciones de inconstitucionalidad.

Por último, es preciso señalar que en atención a lo dispuesto por el artículo 203 de la Constitución Nacional, las consultas sobre la constitucionalidad deben recaer sobre las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso y no sobre una resolución, como ocurre en el caso que nos ocupa.

De todo lo anteriormente expuesto se colige que la presente advertencia de inconstitucionalidad es inadmisible, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2552 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la señora CARMEN RODRÍGUEZ, contra la Resolución N° DG/AL 045 de 6 de mayo de 1996, proferida por el Instituto Nacional de Cultura.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO A. ORTEGA CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1992 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo E. Ríos Molinar ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de inconstitucionalidad contra la Sentencia de 30 de noviembre de 1992, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual se revocó la Sentencia PJ-4 de 15 de junio de 1992, expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4.

Se procede entonces a examinar la demanda de inconstitucionalidad, a fin de verificar si cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de demanda.

A juicio del Pleno, la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 2551 del Código Judicial, según el cual la demanda de inconstitucionalidad debe cumplir con los requisitos comunes a toda demanda. En primer lugar, la demanda no ha sido dirigida al Honorable Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es uno de

los requisitos formales en la presentación de este tipo de demanda. Por otro lado, se observa que el demandante omite señalar la parte demandada y lo que se demanda, incumpliendo con lo estipulado en la norma antes citada, en concordancia con el artículo 654 del Código Judicial.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Eduardo E. Ríos Molinar contra la Sentencia de 30 de noviembre de 1992 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ.

Contrariamente a lo que se manifiesta en el fallo, considero que en las demandas de inconstitucionalidad no hay parte demandada. Así mismo, que el hecho de que no se haya dirigido la demanda al Presidente de la Corte Suprema de Justicia no es razón suficiente para declararla inadmisible.

Así lo considero con el mayor respeto al salvar el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DE UNA FRASE CONTENIDA EN LA PARTE FINAL DEL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MARIBLANCA STAFF, actuando en su propio nombre y representación, interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la frase "salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses;", contenida en la parte final del numeral 6 del artículo 212 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, porque infringe los artículo 19, 20 y 53 de la Constitución Nacional vigente.

Por admitida la demanda se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación a fin de que emitiera concepto sobre la inconstitucionalidad demandada, como en efecto lo hizo mediante vista que corre de fojas 7 a 23.

Posteriormente, devuelto el expediente por el señor Procurador General de la Nación, se fijó en lista por el término de diez (10) días para que el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito, pero ninguna aprovecho dicho término señalado por la ley.

El Pleno de la Corte para poder decidir considera antes:

La demandante, conforme a los hechos expuestos en la demanda en estudio,

acusa de inconstitucional la frase que dice: "salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses;", contenida en la parte final del numeral 6 del artículo 212 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, y el cual reza así:

> "Numeral 6 del Artículo 212 del Código de la Familia dispone:
>
> "Son causales de divorcio:
> ...
> 6. El abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre, y por parte de la mujer de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis (6) meses, contados desde el día en que se originó la causal, salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses: ...". (El subrayado es nuestro).

El vicio de inconstitucionalidad lo hace consistir en que la frase impugnada, inserta en el transcrito artículo 212 de la precitada Ley 3 del 17 de mayo de 1994, viola el artículo 19, 20, y 53 de la Constitución Política que a la letra dicen:

> "ARTÍCULO 19: No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas".
>
> "ARTÍCULO 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que establezca en los tratados internacionales".
>
> "ARTÍCULO 53: El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley".

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL SEGÚN LA DEMANDADA

La demandante sostiene, en el concepto de la infracción constitucional que le atribuye a la frase impugnada, que la misma vulnera los artículos antes transcritos, lo cual sostiene de la siguiente manera:

Al exponer el concepto de infracción del artículo 19 de la Constitución nos expresa: "La violación consiste en que la frase acusada, establece un privilegio en favor de las mujeres embarazadas, discriminando a las que no están en esa condición ...".

Al exponernos el concepto de infracción del artículo 20 de la Constitución Nacional lo manifiesta así: "La violación consiste en que el numeral impugnado, establece una desigualdad jurídica, en perjuicio no solamente de las mujeres que no se encuentran en esa condición, sino también de los hombres, infringiendo ello el principio constitucional de igualdad de todos los seres humanos ante la ley".

Finalmente al expresar el concepto de infracción del artículo 53 de la Constitución Nacional, establece lo siguiente: "La violación consiste en que al otorgarse a las mujeres embarazadas, un término menor para invocar la causal de abandono del marido de sus deberes de esposo o de padre, se está creando un privilegio que infringe la igualdad de derechos de ambos cónyuges para disolver el matrimonio de conformidad con la ley, lo que claramente viola el precepto constitucional contenido en el artículo 53 transcrito".

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Acerca de la supuesta violación del Artículo 19 de la Constitución Nacional el Procurador General señala en la parte medular de la Vista, lo siguiente:

"...

Cuando la frase, refiriéndose a la causal de abandono, "salvo que se trate del abandono de la mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses", contenida en el ordinal 6° del artículo 212 del Código de la Familia, establece un término de tres meses, como una excepción, al término de seis meses, en favor de la mujer embarazada, no se confiere un fuero o privilegio personal concedido a título personal, lo que establece, conforme a la jurisprudencia citada en párrafos anteriores, son fueros o privilegios a determinadas ciudadanas (mujeres en estado de embarazo) que no están prohibidos por la normativa constitucional, sino por el contrario están avaladas por la misma, y no por su calidad de mujeres, sino por su status especial de mujer embarazada, que representa la fase primigenia del ser humano, condición protegida constitucionalmente por nuestro ordenamiento supremo.

La razón de ser de la excepción, hoy alegada de inconstitucional, a juicio de esta Procuraduría, tiene sus raíces, precisamente en la protección no de la mujer en sí, sino de la mujer en estado grávido, que lleva dentro de su vientre el producto de la concepción, en plena formación. Y una vez nacido el menor, el Estado se mantiene vigilante en la salud física, mental y moral del mismo, garantizando su derecho a los alimentos, salud, educación y a la previsión social ...".

En lo referente al artículo 20 el Procurador General manifestó:

"...

La maternidad, y específicamente el embarazo, es una circunstancia especial, que genera fueros y privilegios, no a título personal de la mujer en estado de embarazo como mujer, sino en favor de la mujer que se encuentre en esa situación (embarazo).

La igualdad jurídica, ante la ley "en su acepción objetiva, condiciona todo nuestro ordenamiento e implica una aplicación uniforme de la ley ante supuestos fácticos iguales o semejantes" (Fallo de 18 de agosto de 1994, Gaceta Oficial 22,684 de 16 de diciembre de 1994, pág. 10 y 11).

El supuesto fáctico de una mujer en estado de embarazo no es el mismo que el de una mujer que no lo está. Igualmente ocurre que el supuesto fáctico de una mujer en estado de embarazo no es igual que el cónyuge (hombre).

Repetimos, entonces, en la presente infracción alegada, que cuando la última frase del ordinal 6° del artículo 212 del Código de la Familia, dispone que el abandono como causal de divorcio si se trata de mujer embarazada puede ser alegado para disolver el vínculo matrimonial a los tres meses y no a los seis, como es la regla general, lo que establece es un fuero o privilegio en favor de una determinada mujer embarazada, situación que no prohíbe nuestra Carta Magna, sino que está avalada por la misma. ...".

Finalmente, acerca del artículo 53 de la Constitución Nacional, el representante del Ministerio Público señala:

"...

Habiendo entonces delimitado, a nuestro juicio, en párrafos anteriores el alcance y sentido de la última frase del ordinal 6° del artículo 212 del Código de la Familia, podemos afirmar que el mismo existe en desarrollo y la aplicación del principio constitucional de protección a la maternidad contenida en el Artículo 52 ídem.

> Entonces, no existe un privilegio o una desigualdad jurídica entre ambos cónyuges, sino que simplemente la ley, en desarrollo y aplicación de la Constitución Nacional, ha conferido a la mujer embarazada, un privilegio no de tipo personal o a título personal, sino en favor de todas las que se encuentran en este status. ...".

CRITERIO DE LA CORTE

El Pleno de la Corte al realizar un análisis sobre la demanda interpuesta por la licenciada MARIBLANCA STAFF, del numeral 6° del artículo 212 del Código de la Familia, confrontado con el artículo 19, 20 y 53 de nuestra Carta Magna, arriba a la siguiente conclusión:

La frase atacada como inconstitucional es: "salvo que se trate de abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses", y la demandante señala de manera clara que esta frase es violatoria de los principios constitucionales que consagran los artículo 19, 20, y 53 del la Constitución Nacional.

Antes de establecer si existe o no violación de los artículos antes señalados deseamos establecer un punto importante:

El embarazo es una condición exclusiva de la mujer, el hombre por razones naturales y biológicas no puede adquirirla. El Pleno necesita dejar claro esta concreta situación, dado que es fácilmente deducible, que el hombre, no puede estar inserto en el presupuesto de hecho previsto en la norma, sino sólo las mujeres, y no solamente las mujeres, sino precisamente aquella que se encuentran en la situación de gravidez.

La demandante ha establecido que la parte final del numeral antes transcrito es inconstitucional porque se está favoreciendo a la mujer en estado de gestación, y se está discriminando a la mujer que no está en esa condición, al igual que al hombre. Confronta la norma (art. 212 del Código de la Familia) con tres artículos de la constitución.

Con respecto a el artículo 19 de la Constitución Nacional, el Pleno considera que no ha sido violado. Esta norma establece que no habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. La corte ha sostenido de manera uniforme que esta norma sólo puede ser atacada de inconstitucional si favorece a determinada persona, a título personal e individual.

La Corte en sentencia del 28 de diciembre de 1993, al analizar el artículo 19, se refiere a la obra del Doctor CESAR QUINTERO, Derecho Constitucional, y en su parte medular expone lo siguiente:

> "...
> Todo lo expuesto indica que la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe, pues, es que haya distingos. Y esto nos lleva, por fin, a precisar este término. El distingo entraña una limitación o restricción injusta; un trato desfavorable para determinadas personas que, en principio, se hallan en la misma situación que otras que, sin embargo, reciben un trato favorable. El concepto de distingo SE IDENTIFICA, así, con el de discriminación, el cual, no obstante ser un neologismo quizá exprese mejor la idea que hemos tratado de explicar. Pues, el término discriminación, muy usado en otros idiomas, significa distinción injusta e injuriosa.
>
> Esto es, pues, lo que el artículo que examinamos prohíbe, o sea que las normas legales establezcan, o las autoridades públicas practiquen, un tratamiento desfavorable contra cualquier persona por la sola razón de su raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
>
> Toda esta larga exposición nos lleva a concluir que el principio de la igualdad ante la ley consiste, como ha dicho más de una vez la

> Corte Suprema de la Argentina, "en que no se establezca excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias".

En cuanto al artículo 20 de la Constitución Nacional, la Corte considera que el mismo no ha sido violado. Esta norma recoge el principio de igualdad ante la ley.

La Corte en reiterados fallos se ha pronunciado sobre el alcance de la referida norma y ha establecido que dicho principio, implica una aplicación uniforme de la ley ante circunstancias similares.

El Pleno de la Corte Suprema, en fallo del 18 de agosto de 1995, cita un fallo del 16 de marzo 1948, en el que al referirse a la igualdad ante la ley establece:

> "... el principio de igualdad ante la ley no es una norma absoluta, sino que esta subordinada a necesidades sociales. Significa igualdad de oportunidades bajo circunstancias iguales"
>
> "... el principio de igualdad ante la ley, opera en un ámbito de efectos relativos por encontrarse sujeto a la desigualdad que entraña el interés jurídico de las partes en el proceso" ..."

El artículo 52 de nuestra carta Fundamental, consagra la protección que el Estado debe darle a el matrimonio, la maternidad y a la familia.

De lo anterior se desprende que es deber del estado velar por la salud física, mental y moral de los menores, al igual que garantizar los derechos de éstos a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad y previsión sociales.

El artículo 212 del Código de la Familia establece entre las causales de divorcio, el numeral 6° que ha sido atacado de inconstitucional, en lo referente a su parte final, el numeral aludido es del tenor siguiente:

> "...
> 6. El abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre, y por parte de la mujer de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis (6) meses, contados desde el día en que se originó la causal, salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses; ...".

De la lectura del numeral 6° del referido artículo, se colige que el mismo es una norma proteccionista, es decir, tiene como finalidad brindarle a la mujer embarazada un derecho frente a una situación de abandono por parte de su cónyuge; para cumplir con uno de los deberes del estado que consagra el artículo 52, los cuales son la protección del matrimonio, la maternidad y la familia.

En lo referente al artículo 53 de la nuestra Carta Magna, considera el Pleno que de ninguna manera ha sido violado, y esto es así dado que con la excepción a que alude el numeral 6° del artículo 212, en su parte final, no se está favoreciendo a un cónyuge, así como tampoco está estableciendo una desigualdad jurídica. Lo que la norma busca es asegurar que la mujer en estado grávido y su futura prole, no sean tan afectados por el abandono del marido, es decir se trata de una norma de protección a la maternidad, que es la finalidad del artículo 52. Al ser en los seres humanos el período de gestación de nueve (9) meses, la mujer que este en estado de gestación, no puede esperar seis (6) meses para alegar la causal de abandono por parte de su cónyuge, dado que ella, a diferencia de las mujeres en estado normal, requiere una pronta estabilidad, no sólo emocional sino también económica, de allí que se establezca en el numeral 6° del artículo 212, que las mujeres que se encuentren embarazadas pueden pedir la disolución de vínculo matrimonial a los tres (3) meses y no a los seis (6), como es la regla general.

Como consecuencia, de lo anteriormente expuesto el Pleno concluye que la

norma aludida por la demandante, (212, numeral 6°, del Código de la Familia), no viola nuestra Carta Fundamental.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL, la frase contenida en la parte final del numeral 6° del artículo 212 del Código de la Familia.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

TRIBUNAL DE INSTANCIA

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME PADILLA GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JAIME PADILLA BELIZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 213-1307 DE 11 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada **AURA E. GUERRA DE VILLALAZ**, mediante escrito de fecha 29 de mayo de 1996, solicita al resto del Pleno de esta Corporación de Justicia se le declare impedida para conocer de la presente acción de **Amparo** de Garantías Constitucionales, interpuesta por **JAIME A. PADILLA BELIZ** contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 213-1307 de 11 de marzo de 1996 proferida por la Administración Regional de Ingresos.

El referido escrito de impedimento, es del tenor siguiente:

"MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

Se me ha pasado en lectura el proyecto que decide la apelación interpuesta por el licenciado Jaime A. Padilla González, actuando como apoderado judicial de **JAIME A. PADILLA BELIZ**, contra la resolución de 8 de mayo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual no admitió la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 213-1307 de 11 de marzo de 1996, proferida por la Administración Regional de Ingresos, del Ministerio de Hacienda y Tesoro y contenida en el expediente N° 397-96 del Pleno, bajo la ponencia del Magistrado Eligio A. Salas, al percatarme de quien es el apelante debo comunicar a los Magistrados que integran esta Corporación de la existencia de causales de enemistad grave, de trascendencia pública, contra el sujeto procesal que hace la pretensión, por lo que carezco de las condiciones anímicas de imparcialidad que me permitan intervenir en este caso.

En consecuencia, les solicito que me separen del conocimiento de este negocio constitucional.

Derecho: Artículo 749 numeral 15 en relación con el numeral 3 del

artículo 2562 del Código Judicial.

Panamá, 29 de mayo de 1996

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia."

Las causales de impedimentos de magistrados y jueces para el conocimiento de la acción de amparo se encuentran establecidas en el artículo 2619, en concordancia con el 2620 del Código Judicial, las cuales son del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 2619. Los magistrados y jueces que conozcan esta clase de asuntos se manifestarán impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados, o hayan participado en la expedición del acto". (Subrayado de la Corte).
>
> "ARTÍCULO 2620. En las demandas de amparo sólo se podrán promover incidentes de recusación por el impedimento que establece el artículo anterior."

En consecuencia, al no contemplar las normas antes citadas, la circunstancia invocada por la Magistrada **AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ** en su escrito de impedimento, considera la Corte que, no es del caso acceder a su solicitud, tal como lo ha sentado nuestra reiterada jurisprudencia.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Honorable Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ dentro del amparo de garantías constitucionales propuesto por JAIME A. PADILLA BELIZ, y DISPONE que conozca del caso.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS A., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSARIO ALFARO GRIMALDO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 13 P. A. C., EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES EL 25 DE ABRIL DE 1996, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ROGERIO DE MARÍA CARRILLO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz manifestó impedimento para conocer del proceso de amparo de garantías constitucionales promovido por la licenciada Alma L. Cortés A. en representación de ROSARIO ALFARO GRIMALDO contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 13 P. A. C. de 25 de abril de 1996 emitida por el Tribunal Superior de Menores.

La Magistrada Guerra de Villalaz manifestó su impedimento en los siguientes términos:

"Al revisar el expediente con la entrada N° 395-95 que contiene la

acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la señora ROSARIO ALFARO GRIMALDO contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 13 P. A. C. emitida por el Tribunal Superior de Menores, adjudicado en reparto al Magistrado Arturo Hoyos, me percato que la accionante fue cliente de mi oficina de abogados, antes de 1990 y fungí como su apoderada en juicio civil de familia al igual que en los primeros juicios de alimentos que se entablaron para fijar el monto de la responsabilidad alimenticia del padre en relación con sus tres menores hijos.

Estimo que esa relación antecedente me ubica en la causal de impedimento prevista en el numeral 5° del artículo 749 del Código Judicial en relación con el 2562 numeral 3° de la misma excerta.

Por lo anotado, solicito se me separe del conocimiento del caso."

Como fundamento de derecho invoca la Magistrada Guerra de Villalaz lo dispuesto en el artículo 749, numeral 5°, del Código Judicial, según el cual es causal de impedimento el "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo."

La Magistrada Guerra de Villalaz fundamenta su solicitud de que se le declare impedida en el caso antes anotado por haber actuado como abogada de la señora Rosario Alfaro Grimaldo. Dado que la situación anteriormente transcrita coincide con lo establecido en el artículo 749 numeral 5° del Código Judicial como causal de impedimento, esta máxima corporación de justicia encuentra procedente la causal invocada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que es legal el impedimento invocado por la Magistrada Guerra de Villalaz, la separa del conocimiento de la demanda interpuesta por la licenciada Alma L. Cortés A., en representación de Rosario Alfaro Grimaldo, y procede a llamar a su suplente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ALVARO PINO, HUMBERTO RUIZ, JOSÉ R. BRENES, CELESTE DE ARAÚZ, LUIS SANTIZO, FIDEL MARTÍNEZ Y OTROS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA ARI/AG-DL/433-96 DE 22 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, mediante escrito de 11 de junio de 1996, ha manifestado impedimento para conocer del presente negocio, contentivo en la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense VILLALAZ Y ASOCIADOS, en nombre y representación de ALVARO PINO y OTROS, contra la orden de hacer contenida en la Nota ARI/AG-DL/433-96 de 22 de

mayo de 1996, expedida por el ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA.

La manifestación está contenida en los siguientes términos:

"Ingresó este Despacho para su correspondiente lectura, el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve la acción de amparo de garantías constitucionales, interpuesta por la firma VILLALAZ & ASOCIADOS, en nombre y representación de Alvaro Pino y Otros, contra la orden de hacer contenida en la Nota ARI/AG-DL/433-96 de 22 de mayo de 1996, expedida por el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica.

Como quiera que la firma forense que representa a los accionantes, lo es la VILLALAZ & ASOCIADOS, a la cual me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, con algunos de los socios que la componen, solicito al resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, me separen del conocimiento del presente caso.

Derecho: Artículo 749 numeral 1° del Código Judicial".

El Pleno observa que la circunstancia invocada por la Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, efectivamente se encuentra consagrada como causal de impedimento en el artículo 749 numeral 1° del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, para conocer del presente negocio y, DISPONE llamar a su Suplente Personal para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LAS SUMARIAS INSTRUIDAS AL LCDO. JOSÉ ANTONIO SOSSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, EN VIRTUD DE DENUNCIA INTERPUESTA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Por medio de escrito de 13 de junio de 1996, el Honorable Magistrado José Manuel Faúndes solicitó que se le separe del conocimiento de las sumarias instruidas al licenciado José Antonio Sosa, Procurador General de la Nación, por el delito de simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, porque la denuncia fue interpuesta por él, hecho que le impide conocer el fondo de la controversia.

En lo pertinente, el texto de la manifestación de impedimento mencionada es el siguiente:

"Como es fácil de constatar, en el expediente aparece acreditado que

> la denuncia presentada ante La Procuraduría General de la Administración contra el licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA, Procurador General de la Nación, fue presentada por mí, lo cual, de conformidad con el numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el numeral 3 del artículo 2562 de la misma excerta legal, constituye causal de impedimento.
>
> Por consiguiente, dentro del término legal, manifiesto las razones que justifican mi separación del conocimiento de la presente causa."

El artículo 2282 del Código Judicial preceptúa que: "Es aplicable a los Magistrados y Jueces que conocen en asuntos penales, todo lo que sobre impedimento y recusaciones se dispone en el Capítulo V, Título VI, Libro II de este Código.", y el numeral 2 del artículo 749 ubicado en el citado Capítulo V literalmente expresa:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 2. Tener interés debidamente acreditado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior;"

En mérito de lo expuesto el Pleno de esta Corporación de Justicia estima que el impedimento manifestado por el Magistrado José Manuel Faúndes configura la causal contenida en el transcrito numeral 2 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado José Manuel Faúndes, en consecuencia, LO SEPARA del conocimiento del negocio y DISPONE llamar a su suplente, doctor Humberto Collado, para que lo reemplace.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ELIGIO A. SALAS DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE A. RIVERA AGUILAR, CONTRA LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY N° 20 DE 22 DE ABRIL DE 1975. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Eligio A. Salas ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema se le separe del conocimiento de demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Randolph Lawson, en representación de Enrique A. Rivera Aguilera, contra los artículos 43 y 44 de la Ley N° 20 de 22 de abril de 1975, por la cual se reorganiza el Banco Nacional de Panamá, dictada por el Consejo Nacional de Legislación.

El Magistrado Salas fundamenta su solicitud en el hecho de haber formado parte, como Comisionado de Legislación, del organismo que expidió el mencionado cuerpo normativo, apoyándose en el numeral segundo del artículo 2562 del Código

Judicial, que señala como causal de impedimento el "haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición".

Se advierte claramente que, con vista a lo dispuesto por el citado precepto, resulta fundado el impedimento que se impetra, por lo que procede resolver de conformidad.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Eligio A. Salas para conocer del presente proceso de inconstitucionalidad y DISPONE llamar a su suplente personal, Dr. Eloy Alfaro de Alba, para que integre el tribunal accidental.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO CARLOS H. CUESTAS G. (SUPLENTE DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS) DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MIHAELA GABRIELA STEGARU CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado CARLOS H. CUESTAS G., mediante escrito de 21 de junio de 1996, ha manifestado impedimento para conocer del presente negocio, contentivo en la acción de habeas corpus a favor de MIHAELA GABRIELA STEGARU contra la JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ.

La manifestación está contenida en los siguientes términos:

"Al encargarme del despacho del Magistrado titular Dr. Fabián A. Echevers, me ha correspondido continuar la sustentación del recurso de apelación interpuesto por Teresita Y. de Arias, contra la sentencia de 15 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Menores que declara legal la orden de apremio corporal girada contra MIHAELA STEGARU MIRESCU.

Llegado el momento de decidir si prohijo o no el proyecto de resolución redactado por el Magistrado Echevers, manifiesto que conozco personalmente a la señora STEGARU MIRESCU, por ser mi colega en la Universidad Santa María La Antigua, por ser ambos miembros de la Asociación de Profesores de la U. S. M. A. y porque en esta condición, la profesora STEGARU MIRESCU me ha hecho comentarios de su caso.

Considero que si asumo el conocimiento de este proceso como juez, cualquiera que sea la decisión, puede afectar mi condición de miembro de la asociación gremial a la que también pertenece la profesora STEGARU MIRESCU.

Por estas razones, respetuosamente solicito se me declare impedido para conocer esta causa con fundamento en el artículo 749, numeral 13 del Código Judicial.

Panamá, 21 de junio de 1996.

(Fdo.)
CARLOS H. CUESTAS GÓMEZ".

El Pleno observa que la circunstancia invocada por el Magistrado CARLOS H. CUESTAS G., efectivamente se encuentra consagrada como causal de impedimento en el artículo 749, numeral 13 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado CARLOS H. CUESTAS G., para conocer del presente negocio y, DISPONE llamar al Magistrado Suplente que corresponda, de acuerdo al sorteo respectivo.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZALEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(Salvamento de Voto) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Considero que las razones expresadas por el Magistrado Carlos H. Cuestas G. no sustentan que sea declarado impedido para conocer del negocio.

Según el artículo 2601 del Código Judicial, en los procesos de habeas corpus. sólo deben manifestarse impedidos los jueces o magistrados cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes; o cuando hubiese expedido la orden o conocido del proceso de primera instancia.

No es el caso.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RECUSACIÓN, DENUNCIA DE FALTA A LA ÉTICA JUDICIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES, RESPONSABILIDAD Y FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO MENDIZÁBAL FALCONETT. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 18 de abril de 1996, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL, rechazó el Incidente de Recusación y DECLINÓ ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la queja y denuncia presentadas por el Licenciado SILVIO GUERRA MORALES, Acusador Particular dentro del proceso penal por homicidio que se le sigue a los señores ROBERTO PINZÓN y JACINTO McDONALD, en perjuicio de MARLENE MENDIZÁBAL y JORGE FALCONETT, contra los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Panamá, por faltas a la ética judicial y violación de los deberes y responsabilidades que le corresponden a los Magistrados de dicho tribunal.

Cumplidas las reglas de reparto, se encuentra el presente negocio en estado de decidir sobre su admisibilidad, y a ello se procede, previas la siguientes consideraciones:

De conformidad con la normativa contemplada en el Código Judicial, la conducta sobre la ética judicial de todos los servidores de este Órgano del Estado, está expresamente regulada en el Libro Primero de dicho Ordenamiento Procedimental. Por consiguiente, cualquier persona, sea o no parte en un determinado proceso judicial, tiene derecho a promover queja o acusación en contra de cualquier empleado o funcionario del Órgano Judicial, por falta a la ética judicial. No obstante, el citado Código establece que para iniciar procedimiento relacionado con las mismas, por falta a la ética judicial, exija que la Queja o Acusación contenga ciertos requisitos mínimos, como son: el nombre y generales del acusador; el nombre del acusado; el cargo que ejerce; la falta cuya ejecución se le imputa; expresión del hecho que constituye la falta; y disposiciones violadas o impugnadas. Además, se exige que en todo caso, se deben acompañar las pruebas en que se funda la acusación; y, en caso contrario, se Rechazará de Plano.

El Pleno observa que el escrito cumple con los tres primeros requisitos señalados, pero al analizar el fundamento de la queja, nos encontramos que los hechos en que se fundamenta la misma, no guardan relación con la queja y denuncia incoada contra los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial. No se establece de manera clara y precisa la falta cuya ejecución se le imputa; así como la expresión del hecho que constituye la falta, y al cual hicimos referencia anteriormente, como uno de los elementos indispensables para iniciar este procedimiento.

En cuanto a las pruebas que señala el artículo 443 del Código Judicial que deberán aportarse con el escrito, se observa de fojas 12 a 25, que el acusador particular ha acompañado al libelo, las siguientes:

1. Escrito sobre una advertencia de carácter procesal, fechado 8 de abril de 1996 (fs. 12-15);

2. Solicitud al tribunal de imprimir mayor diligenciamiento procesal al caso, cuya fecha de presentación lo fue el 12 de febrero de 1996 (fs. 16-18);

3. Escrito por medio del cual se insta al tribunal a dar aplicación concreta a lo preceptuado en los artículos 461 y 462 del Código Judicial, presentado el 11 de marzo de 1996 (fs. 19-25).

Evidentemente, nos encontramos en presencia de escritos presentados por el Acusador Particular, más bien con carácter de impulso procesal, pero las mismas no representan las pruebas en que funda la referida acusación. Ello es así, ya que se desprende del extenso escrito que el acusador estima que el tribunal denunciado no ha cumplido con hacer efectiva la detención de los señores PINZÓN DÍAZ y McDONALD, a quienes se les llamó a juicio mediante auto de fecha 12 de diciembre de 1995 por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Como consecuencia de ello, el Tribunal Superior de Penonomé expidió el Auto de detención preventiva de los prenombrados señores, y en virtud de la apelación formulada contra el mismo, fue confirmado el auto de detención por la Sala Segunda de lo Penal. La ejecución de la orden de detención no es competencia del Órgano Judicial.

En el presente negocio, el acusador ha incumplido con lo establecido en el artículo 443 del Código Judicial, según el cual el acusador debe acompañar al escrito respectivo, las pruebas en que funda la acusación. El Pleno considera que el acusador no comprueba lo alegado en el expediente, con los escritos aportados como pruebas, por tanto, a la luz de la norma antes mencionada, se procede a Rechazar de Plano el presente escrito.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el escrito contentivo de la acusación presentada por el Licenciado SILVIO GUERRA MORALES contra los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, por incurrir en supuestas faltas a la ética, y, en consecuencia, ORDENA el archivo

del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS INSTRUIDAS AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSA, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, POR EL DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, EN VIRTUD DE DENUNCIA INTERPUESTA POR EL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES, PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, mediante Vista N° 2 de 31 de mayo de 1996, ha enviado al Pleno de esta Corporación de Justicia el sumario que se inició por denuncia presentada por Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, Licenciado **JOSÉ MANUEL FAÚNDES**, contra el Procurador General de la Nación, Licenciado **JOSÉ ANTONIO SOSA**, por el delito de "SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES". La representante del Ministerio Público solicita al Pleno de la Corte se dicte sobreseimiento definitivo, de manera objetiva e impersonal en base al numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, que dispone que será definitivo el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituya delito.

En la denuncia presentada contra el Procurador General de la Nación, se le acusa de haber violado los artículos 351 y 353 del Código Penal, por razón del informe que envió el 29 de marzo de 1996 a los Magistrados Aura Emérita Guerra de Villalaz y Fabián Echevers, transcrito por el denunciante sólo en la parte que califica de "esencial idifamatoria (sic.)", en los siguientes términos:

> "...
> Tengo el agrado de saludarlos respetuosamente en ocasión de solicitarle formalmente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, que por su conducto se promueva investigación sobre la actuación judicial que tuvo lugar en el proceso de Primera Instancia del sindicado por el delito relacionado con droga Señor JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA.
>
> He tenido conocimiento por diversas fuentes de la ingerencia (sic.) directa del Magistrado José Manuel Faúndes en los resultados que hasta el momento se han dado en este proceso y resulta preocupante el hecho de que la Juez Nilsa Chung de González dictó sentencia absolutoria a favor del mencionado JAIRO BUILES MOLINA, dos días luego de la audiencia sin haber incorporado el acta de audiencia y tratándose de un expediente de más de 500 páginas. Esta apresurada sentencia se produce un día antes de salir de vacaciones y rompiendo la costumbre de su despacho de demorar 3 o más semanas en dictar sentencias."

Alega el Magistrado denunciante que envió un memorándum a los Magistrados receptores del informe antes transcrito al enterarse de su existencia, en el que señala que se le están haciendo imputaciones falsas y que la mejor testigo de que no tiene nada que ver con el proceso mencionado en dicha nota es la Juez Séptimo Penal.

Presenta como prueba copia de la nota suscrita por el Procurador General de la Nación de fecha 29 de Marzo de 1996. Como pruebas testimoniales solicita: 1) que se cite a la Juez Séptima del Circuito Penal, Licda. Nilsa Chung de González, para que responda si el Magistrado Faúndes tuvo ingerencia en el proceso relacionado con drogas seguido contra JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA; 2) se solicite al Director de la Cárcel Modelo que informe si en esa institución se recibió orden de libertad a favor de Jairo Builes Molina procedente del Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal; 3) se cite a la apoderada judicial de Builes Molina, Dra. Nivia Ángela Ábrego, para que declare sobre su actuación en el proceso en mención.

Así la Procuradora de la Administración, luego de declarar abierta la investigación contra el Procurador General de la Nación por la denuncia presentada por el Magistrado Presidente de la Sala Penal de la Corte y ordenar que se practiquen todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, dispone en primer término recibir declaración, por medio de Certificación Jurada, al denunciado con base al cuestionario (fs. 7-9) que le suministró y referido a los hechos denunciados en su contra.

Entre las respuestas dadas por el Jefe del Ministerio Público al cuestionario que le fuera remitido se destacan las siguientes:

En relación a las fuentes que le informaron sobre la injerencia directa del Magistrado Faúndes en el proceso seguido a Builes Molina, señala que consisten en la que le remitió el 28 de marzo de 1996 el Licenciado Rafael Rodríguez como Presidente del Colegio de Abogados Litigantes y una nota periodística aparecida el 30 de marzo de 1996 en el Diario El Siglo; sobre el tipo de injerencias a las que se refiere, indicó que son las que le fueron informadas por la nota previamente aludida, de la cual adjunta copia, así como de lo expresado por el diario; en cuanto a las razones que tuvo para hacer las afirmaciones sobre el Magistrado y si podía probar su veracidad, respondió que la razón es el deber que le impone el artículo 217, numeral 3 de la Constitución de "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes", por ello hizo llegar mediante el cuestionado oficio a los otros Magistrados de la Sala Penal de la Corte la información allegada a su persona, siendo a éstos, según dice, a quien corresponde verificar lo informado. Agrega además que el artículo 2026 del Código Judicial sustenta su actuación, pues si bien no se ha endilgado a persona o funcionario alguno la comisión de un delito, ya que ello depende del resultado de la investigación que realicen las autoridades a quienes les informó de las irregularidades, "si consideramos que hay norma que al exigir una conducta judicial apegada a la ética judicial, nuestra obligación era la de poner de conocimientos los hechos que se hacen referencia en el oficio DPG-3252 de 29 de marzo de este año".

Señala el funcionario demandado que, con respecto a la última pregunta, adjunta pruebas que tienen íntima relación con la situación planteada. Entre dicha documentación se encuentra la aludida carta enviada por el licenciado Rafael Rodríguez a la Procuraduría (fs. 74), que es la pieza fundamental, en la que alega dicho funcionario, se originó el oficio que envió a la Corte para solicitar la investigación del Magistrado Faúndes. Esta Corporación no entrará al análisis de los otros documentos aportados por el denunciado, puesto que la conducta que en este caso se ha sometido al juzgamiento de esta Corte es la de él y no la del Magistrado denunciante.

La carta que enviara el Licenciado Rafael Rodríguez A., como Presidente del Colegio de Abogados Litigantes al Procurador General de la Nación, expresa lo siguiente:

"PANAMÁ, 28 DE Marzo de 1996

Licenciado
JOSÉ ANTONIO SOSA
Procurador General de la Nación
E. S. D.

El Colegio de Abogados Litigantes de Panamá (CALPA) se ha percatado,

de que el Honorable Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES en persona, compareció a un Juzgado de la localidad en comparecencia de la abogada, supuestamente, a gestionar la libertad de un sujeto acusado de narcotráfico. Este despacho es el que preside la Licenciada NILSA CHUNG de GONZÁLEZ y que, en ese momento, ocupaba el cargo la abogada ILEANA TURNER.

La noticia fue publicada por diarios de la localidad, lo cual afea la administración de justicia, desdice mucho que un Magistrado en persona llegue a un Tribunal, sobre todo cuando existe superioridad gerárquica (sic) que se debe respetar. El Segundo Tribunal Superior de Justicia es el superior gerárquico (sic).

Así mismo, se dice que la sentencia fue dictada en dos días, cuando todavía los alegatos se encontraban en los cassettes. Obvio, que los alegatos son imprescindiblemente necesarios pasarlos para que sirvan de fuente a una sentencia.

Entonces, el Colegio de Abogados Litigantes de Panamá, comparecerá ante usted el día de mañana para entregarle una nota en la que hace referencia a éste y otros casos que preocupan a la administración de justicia y como quiera que usted constitucionalmente es el encargado de la vigilancia de los funcionarios públicos debe haber algo para que esto no siga ocurriendo. Mañana compareceremos a su despacho a fin de entregarle otra nota más enérgica y más efectiva, firmada por gran cantidad de abogados litigantes.

Con todo respeto,

(fdo.) LCDO. RAFAEL RODRÍGUEZ A.
Presidente del Colegio de Abogados
Litigantes en Formación."
(F. 74).

Como se puede apreciar en el expediente contentivo de esta denuncia, la Procuradora de Administración no practicó las pruebas testimoniales pedidas por el denunciante, sino que le bastaron las documentales aportadas por el denunciado, para determinar que la razón que tuvo el Licenciado Sossa para solicitar a las autoridades superiores del Órgano Judicial que promovieran una investigación en la esfera disciplinaria, consiste en la obligación que le impone la Constitución a este funcionario de vigilar la conducta oficial y el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos. Por ello, considera que la conducta del Procurador no se enmarca entre las delictivas descritas en la denuncia, porque la misma es congruente con el acuso de recibo que a su oficio dieron los Magistrados Echevers y Guerra de Villalaz, donde le informan que se ha corrido traslado al Pleno de la Corte y al Segundo Tribunal Superior, para que procedan a la investigación de los funcionarios nombrados en la carta enviada por el Licenciado Rodríguez al Procurador. Sostiene la vista de la Procuradora de la Administración que la actuación del denunciado no revela que haya tenido la voluntad de hacer imputaciones lesionando la honra del licenciado José Manuel Faúndes, ya que en una de sus respuestas al cuestionario que absolviera dijo que en ningún momento ha endilgado a funcionario o persona alguna la comisión de un delito, determinación que, en todo caso, dependerá de la investigación que se realice. En ese sentido, opina que para que se produzca el delito del cual se acusa al Procurador Sossa, es necesario que en la acción del sujeto exista "la intención manifiesta de causar un daño, con el ánimo deliberado de calumniar" (dolo), también debe existir "conciencia y voluntad de denunciar un delito que no se ha efectuado y que la autoridad que conoce la causa haya declarado al actor como denunciante temerario", circunstancias que en este caso no se producen.

A juicio de la Procuradora de la Administración, si el Procurador General hubiese omitido dar la noticia de la que tuvo conocimiento acerca de los supuestos hechos que comunicó de oficio a la Corte, hubiera incurrido, entonces sí, en la violación del artículo 338 del Código Penal, que alude a la omisión de los actos inherentes a las funciones del servidor público.

Por todo lo expuesto, la Procuradora descarta la posibilidad que los hechos denunciados se subsuman dentro de una categoría delictiva y solicita el sobreseimiento del denunciado.

Vistos los antecedentes del caso, el Pleno de la Corte pasa a decidir lo de lugar.

La conducta típica que se atribuye al Procurador por parte del Magistrado José Manuel Faúndes se encuentra entre las descritas en el Título XI (DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), Capítulo I **"SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIAS EN ACTUACIONES JUDICIALES"** del Código Penal, específicamente en sus artículos 351 y 353, que preceptúan:

> **"Artículo 351:** El que denuncie ante la autoridad una infracción punible, a sabiendas de que no se ha cometido, o simule pruebas o indicios de ella que puedan servir de motivo a una instrucción judicial, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o de 25 a 150 días-multa."
>
> **"Artículo 353:** El que inculpe a otra persona ante la autoridad de una infracción punible, a sabiendas de que es inocente, o simule pruebas o indicios contra ese mismo inculpado, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si la falsa inculpación diere por resultado una condena o pena privativa de libertad por 12 a 20 años, la sanción será de 2 a 8 años".

Después de analizar el contenido del Oficio N° DPG-352-96 que remitió el Procurador General de la Nación a algunos de los Magistrados de la Corte, en el cual según el enunciante se concretan los delitos que en su contra perpetró el Jefe del Ministerio Público, el Pleno de la Corte considera, luego de su confrontación con lo establecido por las normas antes transcritas, que bajo ningún punto de vista se puede extraer de dicho oficio una actuación, por parte del funcionario denunciado adecuada a los tipos penales descritos en esas disposiciones.

En primer lugar, se observa que el Procurador General de la Nación no ha formulado una denuncia penal en sentido estricto, porque ni ha atribuido la comisión de un delito, ni lo ha hecho ante la autoridad competente que en este caso es la Asamblea Legislativa. En el oficio antes aludido no se denuncia al Magistrado Faúndes por haber cometido una "infracción punible"; simplemente se solicita ante las autoridades judiciales que promuevan una investigación sobre actuaciones presumiblemente irregulares. Esta solicitud, si bien puede servir para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el Segundo Tribunal Superior promuevan una investigación de carácter disciplinario, en ningún caso podría dar lugar al inicio de proceso penal propiamente dicho para determinar la supuesta comisión de un delito por parte del Magistrado José Manuel Faúndes, pues, como se sabe, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia funcional para investigar y menos para juzgar los delitos en que pudiese haber incurrido alguno de sus miembros. Esa es una atribución -la de juzgar los delitos supuestamente cometidos por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el desempeño de sus funciones- que la Constitución reserva privativamente a la Asamblea Legislativa. Desde ese punto de vista y técnicamente hablando, el Procurador General de la Nación, no denunció ni acusó al Magistrado Faúndes por la comisión de ningún delito tal como lo afirma el denunciante en los términos de la denuncia presentada ante la Procuraduría de la Administración. El Pleno de la Corte considera que una denuncia de esta naturaleza en contra del Procurador Sossa sería viable si este funcionario se hubiese dirigido a la autoridad competente para juzgar penalmente al Magistrado Faúndes, es decir, si el Jefe del Ministerio Público la hubiese formulado ante la Asamblea Legislativa a sabiendas que el delito no se había cometido, o simulando pruebas o indicios, o sabiendo de la inocencia del denunciado, lo que integraría los tipos previstos en los artículos 351 y 353 del Código Penal. Obsérvese que ambas normas contemplan como conducta integradora del tipo, que la denuncia o inculpación se formule ante la autoridad, que la misma se refiera a una infracción punible, es decir, a la comisión de un delito, a sabiendas de que el hecho no ha sido cometido, y con simulación de

pruebas e indicios y a sabiendas que el inculpado es inocente. Además, todo lo anterior supone que para que una denuncia basada en la comisión de estos delitos pueda prosperar es necesario que con anterioridad se haya culminado un proceso en el cual el denunciante hubiese resultado favorecido por la decisión jurisdiccional correspondiente (sentencia declarándolo inocente o sobreseimiento dictado a su favor). Si aquel proceso no ha tenido lugar y no se ha dictado el pronunciamiento apropiado, mediante el cual el denunciante haya sido absuelto de cargos, mal pueden haberse generado y materializado las conductas delictivas descritas en los artículos 351 y 353 del Código Penal.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación en el cuestionario que absolvió ante la Procuraduría de la Administración aclaró de manera satisfactoria que el discutido oficio enviado a los Magistrados Echevers y Guerra de Villalaz en que se menciona al Magistrado José Manuel Faúndes no está inculpando a éste de la comisión de ningún delito, sino que está poniendo en conocimiento de las respectivas autoridades la información recibida acerca de supuestas injerencias con las que él tuvo que ver en un caso determinado, por lo cual solicitó una investigación.

Acerca de la práctica de las pruebas solicitadas por el Magistrado Faúndes, concretamente las referentes a la declaración de la Licenciada Nilsa Chung de González y de la Doctora Nivia Ángela Ábrego, considera el Pleno, basándose en el análisis que ha hecho sobre el caso, que la práctica de las mismas o de cualquier otra no conduciría a alterar ni a modificar ninguna de las conclusiones a las que se han arribado y que ya han sido externadas por la Corte.

Como quiera que no se han cometido las conductas típicas previstas por la ley penal en la actuación del señor Procurador General de la Nación, el Pleno de la Corte considera que es del caso sobreseer al Procurador General de la Nación de manera definitiva, pues resulta con evidencia que el hecho punible que se le imputa no ha sido cometido.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SOBRESEIMIENTO definitivo, objetivo e impersonal en favor del Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA, con fundamento el numeral 1 del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXZA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS, CONTRA EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO N° 11 DE 12 DE ENERO DE 1988, EXPEDIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, Y EL POSTERIOR ACTO DE ARCHIVAR EL EXPEDIENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4 CONTENTIVO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PROMOVIDO POR TOMÁS DE SEDAS RAMOS CONTRA EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, ha presentado solicitud de

impedimento, para que se le separe del conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación del señor TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS contra la notificación del auto N° 11 de 12 de enero de 1988, expedido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, y el posterior acto de archivar el expediente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, contentivo del proceso laboral por el despido injustificado, promovido por TOMÁS DE SEDAS RAMOS contra EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.).

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

> "Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación del señor Tomás Emilio de Sedas Ramos, contra el acto de notificación del Auto N° 11 de 12 de enero de 1988, expedido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, y el posterior acto de archivar el expediente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, contentivo del proceso laboral, por despido injustificado, promovido por Tomás de Sedas Ramos, contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I. R. H. E.).
>
> Como quiera que el abogado en este caso es el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, a quien me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, solicitó al resto de los Magistrados que conforman el Pleno de esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento del presente caso.
>
> Derecho: Artículo 749 numeral 1° del Código Judicial.
>
> Panamá, 24 de junio de 1996.
>
> (fdo.)
> AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
> Magistrada de la Corte Suprema de Justicia".

La circunstancia invocada por la Honorable Magistrada, es causal de impedimento y la misma está consagrada en el numeral 1ª del artículo 749 del Código Judicial, por lo que corresponde designar al Magistrado Suplente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, para actuar en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en nombre y representación del señor TOMÁS EMILIO DE SEDAS RAMOS contra la notificación del auto N° 11 de 12 de enero de 1988, expedido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, y el posterior acto de archivar el expediente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, contentivo del proceso laboral por el despido injustificado, promovido por TOMÁS DE SEDAS RAMOS contra EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACIÓN (I. R. H. E.)., la separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

JUNIO 1996

APELACIONES

LA FIRMA FORENSE MORENO Y FÁBREGA APELAN CONTRA EL AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 1996, DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 6448 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, INGRESADO AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 1333 DEL TOMO 244 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Fábrega ha presentado recurso de apelación contra el auto dictado por el Director General del Registro Público el 20 de marzo de 1996, por medio del cual se suspende la inscripción del Asiento 1333 del Tomo 244 del Diario.

El auto apelado es del tenor siguiente:

> "Sobre la finca N° 46645, inscrita al folio 288 del tomo 1101 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, pesa Demanda a favor de los señores José Agustín Gordón y José Guillermo Lustrell, hasta la cuantía de B/.52,891.77. Dicho documento fue presentado a este Registro Público mediante oficios N° 1658 del 6 de octubre de 1995 y N° 1836 del 8 de noviembre de 1995, del Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, ingresado bajo los Asiento 9893 tomo 241 y 5583 tomo 242 del Diario, respectivamente. Si bien, tal y como lo establece el artículo 1212 del Código Judicial, esta inscripción provisional no pone fuera del comercio la finca; no es menos cierto que dicha norma también señala que con la demanda se practicará una "Inscripción Provisional".
>
> En este orden de ideas, al verificar la posibilidad o no de inscribir un documento que ingresa con posterioridad a una demanda debemos también, a nuestro juicio, tomar como base las normas legales que regulan la inscripción de documentos en el Registro Público. En tal sentido el Código Civil establece en su artículo 1800 que "no se registrará instrumento alguno que trasmita, modifique o limite el dominio de bienes inmuebles o naves, ni el que se constituya, modifique o extinga algún derecho de hipoteca u otro gravamen sobre los mismos, cuando subsista alguna "inscripción provisional", relativa al inmueble o naves mencionadas en el instrumento presentado al Registro."
>
> Por los motivos expuestos, es opinión de este despacho que no procede la inscripción de este documento, por tanto se suspende su inscripción. Fundamento legal: Artículos 1795, 1800 del Código Civil y artículo 47 del Decreto 9 de 1920." (Foja 6 y vuelta).

Por su parte, el recurrente fundamenta su apelación de la siguiente manera:

1) La anotación a que se refiere el ordinal 3° del artículo 1212 del Código Judicial es una anotación "sui generis", que no pone el bien sobre el cual recae fuera del comercio y que, consecuentemente, no suspende las inscripciones posteriores.

2) La anotación de la demanda en atención a la norma citada anteriormente, constituye "un aviso que en cumplimiento de la fe registral que se ejerce en el Registro Público, tiene como objeto poner al tanto a los adquirentes de un bien sobre la situación del litigio que pesa sobre el mismo".

3) En casos como el que nos ocupa, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 1795 del Código Civil, el Director del Registro Público debe ordenar las inscripciones posteriores, con una nota en la cual se haga constar la demanda que existe sobre ese bien.

De lo anteriormente expuesto se colige que el punto medular de la presente controversia consiste en determinar si la inscripción provisional de la demanda, que se hace en atención al ordinal 3° del artículo 1212 del Código Judicial, impide la inscripción posterior de documentos relacionados con el bien objeto de dicha inscripción provisional.

La norma citada es del tenor siguiente:

> "**ARTÍCULO 1212.** Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones:
> ...
> 3. Tratándose de procesos que afecten bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, el Juez ordenará que, antes de correrse traslado al demandado, se inscriba provisionalmente la demanda. Procede la inscripción provisional de la demanda en el Registro Público, cuando el objeto de ésta sea el reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre un inmueble o mueble susceptible de registro, siempre que el demandante no haya renunciado o no haya querido ejercer en el momento esta facultad. El Juez, por medio de un oficio, hará saber al Registrador lo siguiente: el nombre de las partes, la identidad del bien, su ubicación y linderos. Esta inscripción no pone el bien fuera del comercio, pero afectará a terceros adquirentes. No obstante, el Juez ordenará cancelación de la inscripción provisional, si el demandante desistiere de esta medida o fuere vencido en primera instancia y no preste caución equivalente a la caución de secuestro que correspondería, dentro de los cinco días siguientes de la resolución dictada."

La inscripción de la demanda a la que se refiere la norma transcrita constituye una inscripción provisional, de acuerdo con lo que establece el ordinal 1° del artículo 1778 del Código Civil. Dicha inscripción cumple con una orden proferida por el Juez, que el Registrador debe atender en los términos que indique dicho mandato. Si bien dicha inscripción no pone fuera del comercio a la propiedad objeto de ella, impide que el Registro Público haga inscripciones posteriores relativas al bien, en atención a lo dispuesto por el artículo 1800 del Código Civil, en el cual se establece que "no se registrará documento alguno que trasmita, modifique o limite el dominio de los bienes inmuebles, o naves, ni el en que se constituya, modifique o extinga algún derecho de hipoteca y otro gravamen, cuando subsista alguna inscripción provisional relativa al inmueble o naves mencionados en el instrumento presentado al Registro."

En relación con este tema, el Doctor Dulio Arroyo en su obra "Contratos Civiles", Tomo I, al referirse al significado de la frase "no estar fuera del comercio" señala lo siguiente:

> "Un asunto que interesa considerar, aunque sea someramente, es si están fuera del comercio en nuestra legislación, y, por tanto, no pueden ser vendidas, las cosas secuestradas o embargadas por decreto judicial. Algunas legislaciones, como la chilena, la colombiana, etc., expresamente establecen que tales cosas están fuera del comercio; otras, en cambio, v. gr. la española, siguen la orientación contraria. En nuestro Derecho el asunto no aparece resuelto de una manera expresa, y de allí que la jurisprudencia haya sido vacilante. En varios fallos la Corte Suprema había sostenido que el secuestro y el embargo ponían el bien fuera del comercio y que, por consiguiente, éste no podía ser objeto de acto jurídico (V. **Jurisprudencia de Herrera**, T. Iv, N°s. 1005 y 1006; T. V, N° 603 y, en **Jurisprudencia de Jorge FÁBREGA**, p. 180, sentencia de 5 de agosto de 1952). No obstante, posteriormente en un importante fallo opinó lo contrario (V. Resolución de 14 de febrero de 1955, en **Jurisprudencia de FÁBREGA**, p. 180). En este último sostuvo que el inmueble embargado no estaba fuera del comercio y que, por tanto, su venta e hipoteca eran válidas. Que lo que la ley prohibía era la **inscripción** de tales actos en el Registro mientras estuviese vigente el embargo." (Págs. 156-157) (Subrayado de la Sala).

La consecuencia, entonces, de que de conformidad con el artículo 1212, ordinal 3° del Código Judicial el bien no esté fuera de comercio, es que no ha de negarse la inscripción sino suspenderse, como se hace en la resolución del Registrador, recurrida. De acuerdo con los resultados del proceso, se procederá en el futuro a la inscripción, o bien ésta no tendrá, definitivamente, lugar.

Con anterioridad a la vigencia del artículo 1212 del actual Código Judicial, que data del 1° de abril de 1987, la situación era regulada por el artículo 1093 del Código Judicial anterior, modificado por la Ley 25 de 1962.

Se disponía que el inmueble quedara "fuera del comercio, para los efectos del artículo 1122 del Código Civil". Esta disposición prescribe que "pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres ...". Es decir, que las que están fuera de comercio no pueden ser objeto de contrato.

Actualmente, de conformidad con el artículo 1212 del actual Código Judicial, el inmueble "puede ser objeto de contrato", porque no está fuera de comercio. La venta es válida; pero conforme al artículo 1800 del Código Civil, no se inscribirá mientras subsista la inscripción provisional que ordena el artículo 1212.

Por tanto, debe confirmarse el auto apelado, porque se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto proferido por el Director General del Registro Público, por medio del cual se suspende la inscripción del documento que entró con el Asiento 133 del Tomo 244 del Diario.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

ABIGAÍL SORIANO SOLÍS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE INTERDICCIÓN PROPUESTO POR CLÍMACO SORIANO SOLÍS, MANUEL SORIANO SOLÍS, OVIDIO SORIANO SOLÍS, ANTONIO SORIANO SOLÍS Y ELVIRA ESTHER SORIANO SOLÍS DE CERRUD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RAÚL A. CÁRDENAS V., en su condición de apoderado judicial del señor ABIGAÍL SORIANO SOLÍS, oportunamente formalizó recurso de casación contra el auto de 26 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en el proceso de interdicción propuesto por CLÍMACO SORIANO SOLÍS, MANUEL SORIANO SOLÍS, OVIDIO SORIANO SOLÍS, ANTONIO SORIANO SOLÍS y ELVIRA ESTHER SORIANO SOLÍS DE CERRUD.

Después de fijado el término para realizar los alegatos de las partes, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, para que en el término de tres días emitiera concepto sobre la admisibilidad del recurso. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede su admisión.

En el presente recurso se invoca como única causal la "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de interpretación errónea de la norma de

derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la misma está consagrada como tal en la ley.

La Sala advierte que el recurso de casación se ha interpuesto contra el Auto de 25 de enero de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirma el Auto N° 521 de 26 de junio de 1995, dictado por el Juzgado Primero de Circuito de los Santos, por medio de la "NIEGA la petición de declaratoria de caducidad extraordinaria de instancia, presentada por el Licenciado RAÚL A. CÁRDENAS ...".

La situación anteriormente planteada, significa que la actuación por parte del Tribunal Superior no le pone fin al proceso, por el contrario, el trámite correspondiente continua hasta que se dicte la sentencia definitiva.

En el evento de que se hubiese declarado la caducidad de la instancia, ello sí imposibilitaría la continuación del proceso y, por tanto, esa resolución judicial sería recurrible en casación. No obstante, el caso que nos ocupa no contempla esta situación, derivándose de ello la improcedencia del recurso.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA INADMISIBILIDAD del recurso de casación propuesto por ABIGAÍL SORIANO SOLÍS, mediante apoderado judicial.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IVETTE SÁNCHEZ VEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA TROITIÑO DE FREIRE. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, en su condición de apoderados especiales de la señora IVETTE SÁNCHEZ VEGA, oportunamente formalizaron recurso de casación contra la sentencia de 23 de febrero de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el proceso ordinario propuesto por IVETTE SÁNCHEZ VEGA contra de MARÍA TROITIÑO DE FREIRE.

Se fijó en lista el término para que las partes alegaran acerca de la admisibilidad del recurso, lo cual no fue aprovechado por las partes. Procede el Tribunal de Casación a determinar, tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial, si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en la forma y se alegó una causal.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo no cumple con dichas formalidades, en base a los señalamientos que se enumeran más adelante.

La causal invocada es: "Infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de interpretación errónea, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Esta causal está consagrada como tal en el artículo 1154 del Código Judicial.

Para fundamentar la causal, en el fondo, el recurrente señala tres motivos, los cuales no tienen congruencia con la causal invocada. El casacionista indica que el Tribunal Superior debió conocer todas las excepciones que pudieran surgir de ambas partes, y que al no hacerlo se infringió el artículo 981 del Código Judicial.

De la redacción de los tres motivos, observa la Sala que el casacionista ataca la sentencia de segunda instancia, en el sentido de que el Tribunal "está obligado a revisar todas las excepciones que puedan surgir para ambas partes ...".

En esta etapa de admisibilidad del recurso, en que la Sala debe concretarse a verificar si el mismo reúne la formalidades que exige la ley, sin adentrarse al fondo del recurso, es importante anotar que el peticionario se basa en que el Tribunal Superior omitió fallar sobre alguna de las excepciones alegadas por las partes. Estas omisiones por parte del Tribunal y que son conocidas como "errores in-procedendum", no pueden enmarcarse dentro de las causales de fondo, sino en las causales de forma, tal como lo señala el artículo 1155 del Código de Procedimiento Civil.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA INADMISIBILIDAD del recurso de casación, en la fondo, propuesto por IVETTE SÁNCHEZ VEGA contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 23 de febrero de 1996.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROBERTO MOCK SAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR INDIRA TALAVERA CONTRA ROBERTO MOCK E IRENEO ASPRILLA A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada ANA ISABEL BELFON VEJAS, apoderada legal del señor ROBERTO MOCK SAM, anunció recurso de casación, contra el auto de 13 de febrero de 1996, proferido por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del incidente de levantamiento de secuestro promovido por el señor ROBERTO MOCK SAM, dentro del proceso ordinario que INDIRA TALAVERA, presentó en su contra y la de IRENEO ASPRILLA ÁVILA.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que ambas partes pudieran alegar sobre la admisibilidad del recurso, lo cual no aprovechó ninguna de las partes.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo,

tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación se formula, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de un Auto de los contemplados en el artículo 1149, del Código Judicial y dictado por un Tribunal de Segunda Instancia, con una cuantía superior a los (B/.5.000).

La causal alegada es: "Error de derecho en al apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo", la Sala advierte al recurrente que la causal debe ser invocada correctamente, tal como lo expresa el artículo 1154 del Código Judicial. La forma correcta de establecer la causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo".

La Sala es consciente de la abundante jurisprudencia que inadmite el recurso de casación por la formulación incorrecta de la causal invocada. No obstante, la Sala considera que no se justifica tan grave medida siempre que de la expresión de la causal en el recurso se desprenda claramente la causal que se está utilizando. En aquellos casos en que sea claro establecer la causal invocada, se estima que la medida procesal puede ser la corrección del recurso. No obstante, si de la enunciación de la causal no se desprende claramente cuál es la invocada debe inadmitirse el recurso.

En el recurso en mención se invoca erróneamente la causal señalándola como ha quedado transcrita, siendo así que la causal de fondo en casación es siempre la infracción de la ley o de la norma jurídica, violación que puede producirse por los conceptos o modalidades que señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil. En el recurso que nos ocupa, si bien se invoca defectuosamente la causal, no queda duda que esta invocando la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, por la sencilla razón de que expresa, luego de invocar erróneamente la causal, que dicha causal está contemplada en el artículo 1154 del Código Judicial y uno de los conceptos en que se puede producir la infracción directa en materia probatoria es, precisamente, mediante la señalada por el recurrente.

En cuanto a los motivos, el recurrente señala a esta Sala que las pruebas han sido mal valoradas por parte del Tribunal. No obstante esos señalamientos, esta Corporación considera que tratándose de la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, el casacionista debió señalar los documentos o testimonios, debidamente individualizados e identificados en el expediente, que a juicio de él fueron objeto de mala valoración por parte del Tribunal Superior. De igual manera, después de señalar las pruebas, debe explicar de forma clara y precisa en que consiste el error de valoración del Tribunal Superior.

En el segundo motivo, el casacionista expresa que el fallo recurrido se funda solamente en pruebas documentales, desmeritando las otras pruebas, con lo que parece que está invocando la causal de error de hecho en la existencia de la prueba, causal distinta a la contenida en este recurso.

En lo referente a la infracción de las normas sustantivas de derecho y la explicación de cómo lo han sido, es indispensable que el recurrente señale las normas de valoración de las pruebas.

Todos los anteriores defectos deben ser corregidos.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por ROBERTO MOCK SAM, mediante apoderado judicial, para lo cual concede el término de cinco (5) días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA PROPUESTO POR BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA L'ATELIER, S. A., IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO Y GILBERT MALLOL TAMAYO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma AROSEMENA, DÍAZ & MOLINA, actuando como apoderados de IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO y GILBERT MALLOL TAMAYO, ocurrieron en casación contra el auto de 20 de junio de 1995, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso de quiebra instaurado por el BANCO EXTERIOR, S. A. contra las aludidas personas y la sociedad anónima denominada L'ATELIER, S. A. Como quiera que el recurso de casación fue admitido por esta Sala, y habiéndose agotado los trámites procesales correspondientes, débese decidir el fondo del recurso, con arreglo al artículo 1169 y demás pertinentes del Código Judicial, previas las siguientes consideraciones.

Los autos de la presente litis ilustran que el BANCO EXTERIOR, S. A., mediante apoderado judicial, solicita la declaratoria de quiebra de la sociedad L'ATELIER, S. A., así como también solicitan la quiebra de los señores IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO y GILBERT MALLOL TAMAYO, quienes adeudan a la entidad bancaria la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMOS (B/.135,948.48) en concepto de capital, más los intereses vencidos al 25 de junio de 1989 que ascienden a la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA BALBOAS (B/.20,680.00) más FECI por MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (B/.1,750.13), más los intereses que se generen hasta la total cancelación de la deuda, costas y gastos de este proceso.

Consta a foja 199 del expediente que el apoderado judicial de la sociedad L'ATELIER, S. A. solicitó al Tribunal se EXONERE a los fiadores solidarios de su representada, señores IGNACIO MALLOL PIBERNAT, IGNACIO MALLOL TAMAYO y GILBERT MALLOL TAMAYO de las obligaciones que contrajo la empresa L'ATELIER, S. A. con sus múltiples acreedores.

El Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, al conocer el caso en primera instancia, mediante resolución de 17 de noviembre de 1992, NIEGA por improcedente la solicitud presentada por los quebrados, en el negocio en estudio.

Del fallo de primera instancia apelaron los demandados (quebrados), por lo que el negocio ingresó al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en grado de apelación.

El Tribunal Superior, por su parte, al decidir la alzada, CONFIRMO el auto de 17 de mayo de 1993, proferido por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, mediante sentencia de 20 de junio de 1995.

En consecuencia, conoce la Sala del recurso de casación en el fondo, interpuesta contra la citada resolución de segunda instancia.

El recurso de casación tiene una sola causal, infracción de las normas de derecho en concepto de violación directa consignada en el artículo 1154. El recurso está fundamentado en cuatro (4) motivos, que se reproducen a continuación:

"1. La resolución recurrida, esto es, la dictada el 20 de julio de 1995 (fs. 261-265) por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que confirma el auto de 7 de mayo de 1993 (fs. 243-245), dictado por el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial, ha considerado que a nuestros representados, o sea a los fiadores quebrados de L'Atelier, S. A., no les asiste el beneficio de excusión. Pero eso no es lo que sustancialmente se debate porque ellos no han alegado preferencias en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones.

2. Nuestros representados dieron fianza en favor de L'Atelier, S. A., para responder por las **deudas futuras** de éste. La exigibilidad de las obligaciones de los fiadores fue provocada por la quiebra del fiado (L'Atelier, S. A.), solicitada por el Banco Exterior (fs. 3-4) sin que se hubiese producido la mora natural, y sin que ella fuera conocida por los fiadores antes de declarar en quebrados, hecho que el Tribunal ha dejado de ponderar para resolver, aunque debió hacerlo.

3. Al tiempo de solicitar la quiebra de los fiadores de L'Atelier, S. A., el Banco Exterior no tenía contra ellos la calidad de acreedor, ni la suma exigida era liquida pues fue liquidada junto con la demanda (fs. 17), pero el Tribunal Superior decretó la quiebra (fs. 20-24 vta) de los fiadores ocasionada por el Banco y no por los actos de éstos, privándolos de este modo de la opción (que implica plazo) de cumplir.

4. No encontrándose vencido el plazo de los fiadores quebrados y habiendo exonerado el deudor principal (L'Atelier, S. A.), a la masa de la garantía, el Tribunal Superior debió proceder a relevar a los fiadores quebrados de sus obligaciones en la quiebra del fiado a **fin de que pudieran responder en quiebra aparte a sus propios acreedores**. Pero el Tribunal Superior se abstuvo de hacerlo".

El recurrente estima que la sentencia dictada viola los artículos 1515, 1543, 1534 del Código Civil y los artículos 811, 1538, primer párrafo y 1573 del Código de Comercio. Resulta oportuno analizar, separadamente, las normas jurídicas que se estiman violadas. Conviene, antes de ello, llamar la atención en el sentido de que las fianzas otorgadas por los recurrentes, constituyen fianzas solidarias, esto es, fianzas que constituyen obligaciones solidarias, y, por tanto, se gobiernan, entre otras, por la regulación legal de dichas obligaciones solidarias.

La primera norma que se estima violada lo constituye el artículo 811 del Código de Comercio, artículo éste que recoge o incorpora al ordenamiento jurídico-mercantil, el denominado beneficio de excusión a los fiadores que hayan otorgado dicha garantía para respaldar o garantizar obligaciones adquiridas por terceros afianzados. El beneficio de excusión tiene como finalidad que los fiadores de una obligación a cargo de un tercero, en caso de incumplimiento por éste, se requiera de pago por el acreedor, en primer término al deudor, es decir, requiere que, antes de hacer efectiva, la fianza haya requerido de pago al deudor principal, o, en caso de ser ejecutado antes, el fiador puede denunciar bienes del deudor, para los efectos del cumplimiento de la obligación por el deudor principal. Dicha norma debe ser interpretada del conjunto de disposiciones relativas a la fianza, por una parte, y por las disposiciones que resulten pertinentes, del Código Civil. Entre dichas disposiciones resulta oportuno llamar la atención sobre el contenido del artículo 809 del Código de Comercio, el cual reza así:

"Artículo 809. Si el fiador fuese ejecutado con preferencia al deudor principal, podrá ofrecer al embargo los bienes de éste si estuvieren libres; pero si no lo estuvieren o fuesen insuficientes, correrá la ejecución contra los bienes propios del fiador hasta el efectivo pago del acreedor ejecutante".

La disposición antes transcrita, debe ser interpretada, en relación con el

artículo 811, en el sentido de constituir una norma especial no aplicable a las fianzas solidarias, en el supuesto en que el fiador es requerido de pago con preferencia al deudor, por lo que no prospera en los casos de fianzas solidarias, toda vez que la esencia de la obligación solidaria es la obligación de cualesquiera de los obligados solidarios, a cumplir con dicha obligación, sin perjuicio de las acciones de repetición de quienes hayan pagado en virtud de la solidaridad pasiva. Dicho efecto de este tipo de obligaciones viene expresamente consignado en el artículo 1031 del Código Civil.

La sentencia recurrida en casación, al referirse al beneficio de excusión, al analizar el alcance de dicho beneficio al obligado cita parcialmente la sentencia de 21 de septiembre de 1981, cuyo contenido es compartido por esta Sala. Ahora bien: a la misma conclusión o consecuencia arriba el derecho español, que tiene el mismo principio que contenía el Código Civil. Así, en efecto, el eminente civilista DIEZ-PICAZO indica:

> "El beneficio de excusión es una facultad que la ley atribuye al fiador y que tiene por objeto enervar o paralizar la pretensión ejecutiva del acreedor dirigida contra él. El fundamento de dicho beneficio o facultad lo constituye el principio de subsidiariedad de la fianza. El fiador no debe ser compelido a pagar mientras que el crédito pueda hacerse normalmente efectivo sobre el patrimonio del deudor.
>
> Ahora bien, la carga del ejercicio de dicha facultad se hace recaer sobre el fiador. Ello significa, en primer lugar, que la ley no impone al acreedor la necesidad de la busca y captura de los bienes del deudor, de manera que sólo tras una persecución infructuosa le conceda la posibilidad de dirigirse contra el fiador, sino que, antes bien, es el fiador quien debe facilitar la acción de acreedor para poder él mismo liberarse. Esta carga de ejercicio del beneficio de excusión, que pesa sobre el fiador, se produce en un doble sentido. Ante todo, el señalamiento de bienes del deudor debe hacerlo el fiador (cfr. art. 1.832). Los bienes señalados han de ser suficientes para cubrir el importe de la deuda y han de ser, además, realizables dentro del territorio español. Esta última es una medida de privilegio del acreedor con el fin de evitarle la dificultad o, en su caso, la imposibilidad de una ejecución contra el deudor en país extranjero. Por último, es también una carga del fiador el ejercicio perentorio del beneficio. Debe llevarse a cabo mediante el señalamiento de bienes del deudor <luego que éste (el acreedor) le requiera para el pago> (art. 1.832), es decir, debe ser realizado en el momento del requerimiento que se le haga para el pago o dentro del plazo de que disponga para contestar a dicho requerimiento".
>
> (Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo II Las relaciones obligatorias. DIEZ-PICAZO, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 435)

Si se aplica al supuesto específico la normativa que contiene en artículo 811, operan en el mismo los supuestos de excepción, en cuyo caso procede adelantar la ejecución anticipadamente al fiador, el que sólo puede ampararse en el beneficio de excusión con la denuncia de bienes del deudor, si éstos estuviesen libres o fuesen suficientes para cubrir la obligación. No obstante, esta no es la hipótesis del acreedor quebrado en un proceso de quiebra, en que el quebrado no tiene la libre disposición de sus bienes, ya que su administración le corresponde a un ente corporativo integrado por los acreedores, la Junta de Acreedores y, además, que no tiene bienes suficientes para cumplir la obligación principal, atendido el contenido de la comunicación fechada el dos de junio de 1992 (visible a foja 199), en la cual el apoderado del quebrado manifiesta que su mandante "no está en condiciones de pagar las obligaciones que contrajo con sus múltiples acreedores".

Se estima violado el artículo 1515, por cuanto la obligación garantizada constituían deudas futuras. No obstante, la Sala no comparte la opinión del recurrente, por cuanto la obligación principal está representada por obligaciones

debidamente incurridas por el deudor principal, derivado del contrato bancario de apertura de crédito, denominado por el acreedor, "póliza de crédito", que es susceptible de concluir en cualquier tiempo en que el acreedor así lo considere (véase foja 12), y las fianzas otorgadas por los fiadores para garantizar pago de un pagaré (véase foja 16, reverso) que contiene una obligación a plazos, en que el deudor se obligaba a pagar la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50.000.00) en treinta y seis (36) mensualidades, obligación que venció por razón de la declaratoria de quiebra del deudor (artículo 1571 del Código de Comercio).

El artículo 1534 del Código Civil, que también se estima violado por el recurrente, se refiere a la hipótesis de que la quiebra sea de un obligado en virtud de una fianza, y presupone que el deudor garantizado por medio de la fianza, a su vez, no haya sido declarado en estado de quiebra. Pero no estima la Sala que esta norma deba prosperar cuando en el mismo proceso de quiebra resulte afectado tanto el deudor principal como los fiadores, por cuanto se frustra la finalidad del instituto, de un beneficio al fiador con respecto a las obligaciones, afianzadas, de un tercero, el deudor. Pero si ambos han sido declarados en estado de quiebra, no pueden haber obligaciones no vencidas, ya que la declaratoria de quiebra tiene como uno de sus efectos, la exigibilidad de todas las obligaciones, sin perjuicio del descuento de intereses. (véase artículo 1571 del Código de Comercio).

El recurrente estima violado, también, el artículo 1543 del Código Civil mediante el cual los fiadores solidarios se liberan de sus obligaciones sí el acreedor, por hecho propio, traiga como consecuencia que dichos acreedores no puedan ser subrogados en los derechos del deudor, por cuya cuenta pagaron. Estima la Sala que no es rigurosamente cierto que con motivo de la declaratoria de quiebra por parte del banco al deudor principal, se impida que los fiadores puedan quedar subrogados de los derechos de aquél ya que, en el proceso de quiebra mercantil, el artículo 1575 del Código Civil permite la subrogación de los fiadores, por lo que el derecho de subrogación que es un derecho esencial de los fiadores, no se pierde por el hecho de que el acreedor haya formulado quiebra tanto del deudor principal, como de los fiadores; solamente que tal derecho podrá ser ejercido por quién representa los bienes del quebrado, con arreglo a las normas correspondientes del proceso de quiebra.

El artículo 1538 del Código de Comercio también se estima violado. Aún cuando el concepto de la infracción no aclara en que sentido o por que razón se viola dicho artículo, estimamos que se refiere a que los quebrados lo sean por razón del incumplimiento de una obligación que provenga de un acto de comercio. Si esa es, en efecto, la censura, es oportuno recordar que se considera, por ministerio de la ley, acto de comercio, entre otros, por razones objetivas, es decir, por la naturaleza del acto, aquellas obligaciones resultantes de fianzas que garanticen una obligación mercantil, como es el caso en el proceso que ha motivado este recurso. (artículo 2, numeral 15, del Código de Comercio).

Al artículo 1573, que se estima violado, le son aplicables las consideraciones que anteceden, sobre el artículo 1571 del Código de Comercio, ya analizado.

La Sala, sin perjuicio de los señalamientos anteriores, considera importante destacar los efectos que tiene la fianza para garantizar una obligación de un tercero, cuando dicha obligación de garantía constituye una obligación solidaria. En tales casos, señala el Código Civil, en su artículo 1512, segundo párrafo, que, en caso de que el fiador se obligare solidariamente con el deudor, que es el caso en la presente encuesta, se apliquen las disposiciones que allí se mencionan, es decir, las aplicables a las obligaciones mancomunadas o solidarias. El efecto de la aplicabilidad de dichas normas, es que, en tales casos, no es posible la hipótesis del beneficio de excusión, por cuanto es incompatible con las obligaciones solidarias. Sobre este tema en particular, el profesor Diez-Picazo señala:

"37. El carácter solidario de la fianza

La inexistencia en estos casos del beneficio de excusión es consecuencia inevitable de la solidaridad y de lo dispuesto en el

art. 1.822. En efecto, si el fiador y deudor principal son solidarios frente al acreedor, el beneficio de excusión carece de sentido, pues hay entre éste y la solidaridad una evidente incompatibilidad".

(Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo II Las relaciones obligatorias. DIEZ-PICAZO, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 436)

Por las razones que anteceden, no tiene mas remedio la Sala que decidir que no debe prosperar la casación, por cuanto ello es lo procedente en Derecho.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de junio de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN M. GODOY HERNÁNDEZ Y/O PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE OCTAVIO CAMILO PÉREZ PUELLO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense SOLÍS, ENDARA, DELGADO, Y GUEVARA, en su condición de apoderados especiales de la sociedad PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A., oportunamente formalizaron recurso de casación contra la sentencia de 5 de marzo de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario que le sigue OCTAVIO CAMILO PÉREZ PUELLO.

Después de fijado el término para que las partes aleguen sobre la admisibilidad del recurso, período que ambas partes utilizaron, procede el Tribunal de Casación a determinar, tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley.

El recurso fue interpuesto en tiempo.

El recurso se compone de tres causales, las cuales son: la primera: "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de interpretación errónea que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la segunda causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la tercera causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", todas están debidamente consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.

La Sala observa que el recurso reúne, de manera general, los requisitos

exigidos por la ley, para que se proceda a su admisibilidad.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por JUAN M. GODOY HERNÁNDEZ Y/O PRIMERA AGENCIA DE SEGURIDAD, S. A., contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 5 de marzo de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN QUE PRESENTARA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE A MARIO ISMAEL OSPINA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado NARCISO ARELLANO MORENO, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC.**, parte ejecutante en el Proceso Ejecutivo Hipotecario que le sigue a **MARIO ISMAEL OSPINA**, ha interpuesto **Recurso de Casación** contra la Resolución de 24 de mayo de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior dentro de la **Excepción de Prescripción** interpuesta por el ejecutado en el presente proceso.

Admitido el recurso, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto al fondo, oportunidad que ambos apoderados aprovecharon para presentar sus escritos, que constan de fojas 146 a 158 (recurrente) y de fojas 159 a 168 (opositor).

Sin más trámite, la Sala procede a decidir lo de lugar, previo el estudio de la tres causales de fondo invocadas en este caso.

PRIMERA CAUSAL:

Como primera causal de fondo se expresa la "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de **VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA DE DERECHO**, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los cargos que se formulan en los tres motivos que se establecen como fundamento de esta causal, básicamente, consisten en lo siguiente:

El primer motivo se fundamenta en las afirmaciones que hizo el fallo respecto a que, "por su naturaleza, los actos de dichas sociedades (refiriéndose a las mercantiles) son actos de comercio" y que "todos los actos resultan de comercio para este tipo de sociedades" o sea, las sociedades anónimas. Con lo expresado, señala el recurrente, se infringe la ley, pues ella permite que una sociedad comercial (aún siendo una sociedad anónima) pueda ejecutar actos de naturaleza civil.

En el segundo motivo se cuestiona lo que sostuvo el Tribunal, respecto a que "se hace irrelevante examinar si el préstamo (objeto del contrato celebrado entre CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC. y MARIO ISMAEL OSPINA) resulta o no un acto de comercio, por separado a la calidad de acto de comercio que significa la sociedad en sí según el artículo 2 numeral 22 del Código de Comercio". La censura no comparte dicha afirmación debido a que la ley reputa el préstamo como acto de

comercio, dependiendo de que constituya por sí mismo una operación mercantil o que tenga como motivo una operación mercantil, independientemente de las partes que intervengan.

El tercer motivo acusa a la sentencia de haber aplicado las normas del Código de Comercio, siendo que el préstamo celebrado entre las partes es de naturaleza civil y le son aplicables las normas del Código Civil.

Por razón de los cargos señalados, el recurrente estima que se han vulnerado los artículos 1, 2 (numerales 19 y 22), 3 y 249 del Código de Comercio. Del Código Civil, cita como infringidos los artículos 1361 y 1700.

Sobre el artículo 1° del Código de Comercio, se alude a su violación, en forma directa por comisión, debido a que el Tribunal lo aplicó desconociendo el derecho consagrado en el mismo, en cuanto a que "la ley comercial sólo rige actos de comercio, independientemente de que quienes intervengan, sean o no comerciantes".

A juicio de la Sala, lo que la aludida norma trata de prevenir es que se deje de aplicar la ley mercantil a los actos de comercio, en los que no intervengan comerciantes. Por tanto, lo que plantea el recurrente sobre el derecho que consagra la norma y de su violación no resulta claro.

El párrafo del citado artículo 1° que cuestiona la censura establece la "delimitación del derecho mercantil por medio del acto de comercio" y presenta casi el mismo texto que el primer párrafo del artículo 2° del Código de Comercio Español, que establece:

"...
`Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él ."

A propósito dice el profesor Garrigues:

> Con estas palabras se destaca la significación del acto de comercio como punto central del sistema legislativo español y la radical separación a los efectos jurídico-mercantiles entre el autor y el acto: sean o no comerciantes los que los ejecuten, los actos comprendidos en el Código son actos de comercio." (GARRIGUES, Joaquín. "DERECHO MERCANTIL", Tomo I, séptima edición, 1987, p. 141). (Énfasis del artículo es de la Corte).

La Sala comparte la interpretación sobre la norma en estudio, previamente transcrita, en la que se destaca la importancia del acto de comercio como punto central del sistema legislativo y la separación, a los efectos jurídicos mercantiles, entre el autor y el acto.

Esta Corporación ha podido advertir que la sentencia impugnada no ha violado dicha norma, en el sentido de que, aplicó la ley mercantil porque atribuyó al acto (contrato de préstamo) realizado entre las partes, la calificación de acto mercantil. Sin embargo, la Sala no comparte algunas de las consideraciones sostenidas por el ad-quem para llegar a dicha conclusión, advertidas también por la censura, como por ejemplo, cuando considera que por ley todos los actos que realicen las sociedades mercantiles resultan de comercio por razón del artículo 249 y, al señalar que debido al acto de comercio que significa la constitución de la sociedad en sí (art. 2 numeral 22 del Código de Comercio), resulta irrelevante examinar la naturaleza del contrato de préstamo que realizó dicha sociedad.

Al respecto, la Sala estima que la calificación de mercantil que se pueda atribuir al contrato de préstamo debe hacerse en principio atendiendo a la calidad de **acto de comercio** que le otorgue el artículo 2 del Código de Comercio, específicamente en su numeral 19, y no a partir del supuesto del numeral 22 que se refiere a las sociedades. El contenido de la norma es el siguiente:

> "**Actos de comercio** ARTÍCULO 2° Serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil, reputándose desde luego como tales, los contratos y títulos siguientes:
> ...
> 19° **El préstamo en general**, cuando constituye por sí una operación comercial, o **cuando se hace con motivo de una operación de esta naturaleza**;
> ...
> 22° Las sociedades y asociaciones en participación cuando tienen por objeto una operación comercial;
> ...". (Énfasis es de la Corte).

Según el recurrente, el fallo de segunda instancia violó el numeral 22 de esta norma en forma directa por comisión al aplicarla, por considerar que sólo por el hecho de intervenir una sociedad, el acto era mercantil, sin considerar el objetivo de la sociedad.

En efecto, la Sala ha podido apreciar que el fallo aplicó el citado numeral 22, que guarda relación con el artículo 249 del Código de Comercio, que también aplicó y que el casacionista igualmente alega como violado, "desconociendo, en el caso de las sociedades anónimas, que el objeto no necesariamente tiene que consistir en actos de comercio". El contenido de esta última norma es el siguiente:

> "ARTÍCULO 249. Las sociedades mercantiles sólo podrán constituirse con objeto de ejecutar conjuntamente actos de comercio.
>
> Sin embargo, **las sociedades por acciones**, cualquiera que sea su objeto, deberán ajustarse a las respectivas disposiciones de este Código, **y estarán en todo caso, sometidas a las leyes y usos del comercio**.". (Énfasis y subrayado es de la Sala).

En atención a lo expresado por la norma transcrita, se aprecia que el fallo impugnado (ver fs. 87) sólo considera lo expresado en el primer párrafo del mismo, en atención al cual concluye sosteniendo:

> "Como ya dijimos, no es tema de discusión el hecho de que la demandante es una sociedad mercantil, y por ende, se le aplican estas disposiciones y se le tiene como acto de comercio".

Al confrontar lo expresado por el a-quem sobre dicha norma con el cargo que le hace el recurrente, se percibe que el sentenciador no está considerando como el tema central de esta controversia la circunstancia de que el acreedor o demandante sea una sociedad mercantil, sino a cuáles leyes se someterá el conflicto.

Se observa que el fallo de segunda instancia para arribar a la decisión de aplicar la ley mercantil al caso concreto, también se sirvió de las reglas contenidas en el artículo 3 del Código de Comercio, referentes a los "**Actos que no son de Comercio**" y especialmente la que indica que los "contratos y obligaciones de los comerciantes se considerarán siempre actos de comercio, a menos que fueren de naturaleza exclusivamente civil, o si no resultare lo contrario del mismo acto". Esta norma textualmente establece:

> "ARTÍCULO 3° Los contratos y obligaciones de los comerciantes se considerarán siempre actos de comercio, a menos que fueren de naturaleza exclusivamente civil, o si no resultare lo contrario del acto mismo.
>
> No son actos de comercio:
>
> 1° La compra de objetos destinados al consumo doméstico del comprador ni la venta del sobrante de sus acopios;
>
> 2° La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confección de

obras artísticas, o la simple venta de los productos de industrias civiles;

3° Las compras que hacen los funcionarios o empleados para objetos del servicio público;

4° Las ventas que hacen los agricultores y ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, ni cualesquiera otros de naturaleza análoga."

Para luego concluir en que debido a que, como no se ha demostrado ni se desprende de alguna manera que el préstamo celebrado entre la partes sea de los actos que enumera el artículo antes citado, ni de naturaleza análoga, sería "contra ley reputar el acto como no comercial", puesto que dicha presunción legal no ha sido desvirtuada en el presente caso.

El recurrente alega que el aludido artículo 3 ibídem fue violado por la resolución recurrida, directamente por comisión, puesto que aplicó dicha norma desconociendo la excepción que contiene, respecto a que "los contratos de los comerciantes se considerarán siempre actos de comercio, a menos que fueren de naturaleza exclusivamente civil ..."; y porque a pesar de lo señalado, consideró que por el sólo hecho de intervenir una sociedad, "el acto debe ser considerado mercantil, sin considerar la naturaleza del contrato".

La Sala conceptúa, contrario a lo que opina el casacionista, que el criterio del Tribunal al aplicar el referido artículo 3 fue acertado, entendiéndose que lo dispuesto por la norma fue uno de los fundamentos que utilizó para calificar como **acto de comercio** el contrato de préstamo realizado entre la sociedad anónima y la persona natural, ya que, como lo indicó el sentenciador y se ha podido comprobar, del contenido textual del contrato no se infiere su naturaleza civil ni nada que revele el carácter civil del acto, ni se ha demostrado alguna finalidad o destino no mercantil con respecto al dinero que se prestó.

Esta situación, el no haberse acreditado en forma precisa la naturaleza civil que atribuye la parte ejecutante al acto, trajo como consecuencia que el sentenciador aplicara también el criterio (subjetivo) de carácter general que consagra la norma para considerar cuándo el contrato es un acto de comercio, es decir, atendiendo como un elemento importante, la participación de un comerciante (en concordancia con el numeral 19 del artículo 2 y artículos 795 y 796 del Código de Comercio). En base a ello el juzgador consideró aplicable lo dispuesto por el artículo 3 ibídem. que taxativamente expresa la regla general de considerar **"siempre" como actos de comercio los contratos y obligaciones de los comerciantes**.

Sobre el particular, la Sala considera importante destacar lo normado por el artículo 35 del Código de Comercio, que textualmente dice:

"ARTÍCULO 35. Las disposiciones referentes a los comerciantes se aplicarán también a las sociedades mercantiles indistintamente."

La norma citada recoge bajo el concepto de comerciante a las sociedades mercantiles, entre las que se encuentran las sociedades anónimas. En consecuencia, en este caso se tomó en cuenta la calidad de comerciante de la sociedad prestamista para efectos de la aplicación del referido artículo 3 de la ley mercantil.

El artículo 1361 del Código Civil referente a las sociedades civiles, mencionado por el recurrente como violado por omisión, no se analizará, pues obviamente no es pertinente en el caso concreto.

En cuanto al numeral 19 del citado artículo 2 del Código de Comercio, el casacionista acusa a la sentencia de segunda instancia de haberlo violado en forma directa por omisión, por haber señalado que en este caso resultaba irrelevante examinar si el préstamo era o no un acto de comercio por el hecho de

haber intervenido una sociedad comercial. En consecuencia, se afirma que se violó la norma al otorgarle al préstamo la condición de acto de comercio, sin considerar si constituía o no una operación mercantil.

> Sobre esta materia la sentencia señaló:
> "...
> Luego entonces, se hace irrelevante examinar si el préstamo resulta o no un acto de comercio (artículo 2, ord. 19 del C. de Comercio), por separado a la calidad de acto de comercio que significa la sociedad en sí según el artículo 2 numeral 22 del Código de Comercio.
>
> Pero amén de ello, tampoco se ha acreditado que en efecto dicho acto no cumpla con lo señalado en el artículo 795 del mismo Código y que se refiere al préstamo mercantil.
>
> Y es que como ya se dijo, la ley lo reputa acto de comercio, y no se ha establecido qué destino tuvo la cosa prestada. ..." (Fs. 89).

A juicio de la Sala, luego de observar lo expresado por el tribunal Ad-quem, resulta evidente que le asiste razón al recurrente sobre la infracción por omisión del numeral 19 del artículo 2 del Código de Comercio, pues en este caso es necesario constatar si el contrato de préstamo constituye una operación de comercio por sí mismo o si lo que se ha prestado se destina a un acto de comercio, para diferenciar si se trata de un contrato de préstamo civil o de uno de comercio. La aplicación de esta norma es primordial y debe hacerse en concordancia con las disposiciones de carácter especial sobre el contrato de préstamo, que contienen básicamente los mismos elementos diferenciadores que lo distinguen del préstamo civil. Estas últimas normas comprenden los artículos 795 y 796 del Código de Comercio, que preceptúan lo siguiente:

> "ARTÍCULO 795. Se reputará mercantil el préstamo, cuando la cosa prestada se destine a cualquier acto de comercio.
> 2. ord. 19, C. C. 1431, 1444 y ss."
>
> "**ARTÍCULO 796.** Salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre retribuido.
> La retribución consistirá, a falta de convenio, en intereses calculados sobre el valor de la cosa prestada, al tipo comercial corriente.
> Se reputará interés toda prestación pactada en favor del acreedor."

De lo expuesto se colige que, para explicarse el carácter mercantil del contrato de préstamo, nuestro ordenamiento jurídico comercial ha tomado en cuenta los siguientes elementos: la operación a la que se destina la cosa prestada, lo cual refleja la naturaleza accesoria del préstamo, considerando como principal la actividad a que el préstamo se destina (artículos 2, ord. 19 y 795 del Código de Comercio); también tal condición pudiera proceder del propio contrato de préstamo, si constituye una operación comercial en sí misma (art. 2, ord 19 ibídem.), lo que se puede deducir del concepto que determina el artículo 796 ibídem, que destaca el elemento de la retribución representada por el interés pactado, es decir, que se establece su presunción legal por la existencia de una retribución o prestación pactada a favor del acreedor; de esto último, también se infiere cierto matiz subjetivista, cuando se exige una retribución o ganancia a favor del acreedor.

Del transcrito artículo 796 se infiere, que por regla general, si el préstamo es retribuido se presume que es mercantil, salvo pacto en contrario. En cambio podría presumirse la naturaleza civil del préstamo no retribuido, o sea, en el que no se cobren intereses, y no se pacte nada al respecto. En el préstamo bajo examen se pactaron intereses. No cabe entonces, desde ese punto de vista, presumir que el préstamo fuera de naturaleza civil.

En el caso subjúdice se puede observar que la conclusión a la que arribó la sentencia, en el sentido de que el contrato de préstamo celebrado entre las partes era de naturaleza mercantil, se fundamentó esencialmente en la presunción

legal que se desprende del artículo 3 del Código de Comercio, que consiste en que el mismo acto no refleje su condición de préstamo civil y que tampoco ese hecho se haya demostrado de alguna manera.

Este proceder, a pesar de no estar fundamentado en las normas especiales (art. 2 ord. 19, 795 y 796 del Código de Comercio) sino en una disposición complementaria, obedeció esencialmente a la presunción contenida en la ley comercial que reputa el contrato de préstamo como acto de comercio y en el hecho de que dicha presunción no fue desvirtuada.

Igualmente de lo actuado por el Ad-quem se infiere que el contrato en sí fue examinado, pues enfatizó que no observó en el mismo elementos que demostraran su naturaleza civil, reiterando por ello que "la ley lo reputa acto de comercio, y no se ha establecido qué destino tuvo la cosa prestada".

Por lo anterior, la Sala comparte la conclusión de la sentencia impugnada, al sostener que al caso concreto resultan aplicables las normas del Código de Comercio incluyendo el plazo que dicho texto establece para la prescripción ordinaria en materia comercial, en su artículo 1650, de modo que "ha prescrito la oportunidad de la parte actora para reclamar la obligación que se examina".

El análisis y la determinación expuestas hacen innecesario el examen de la infracción que atribuye el casacionista con relación al artículo 1700 del Código Civil, que establece la prescripción de quince años para las acciones reales sobre bienes inmuebles.

SEGUNDA CAUSAL

En igual orden de ideas, por las consideraciones expresadas, el cargo que fundamenta la segunda causal queda evidentemente desvirtuado, pues consiste en la indebida aplicación del aludido artículo 1650 del Código de Comercio, que es la norma procedente en este caso.

TERCERA CAUSAL

Esta causal es la de infracción de normas sustantivas de derecho, por ERROR DE HECHO sobre la EXISTENCIA de la PRUEBA.

El cargo que se hace a la sentencia en el único motivo expresado como fundamento de la causal es que el Ad-quem violó el artículo 795 del Código de Comercio, pues ignoró dos pruebas documentales que reposan en el proceso, que de haber sido consideradas "hubieran demostrado que el préstamo otorgado por CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC. no constituye por sí una operación mercantil ni se hizo con motivo de una operación de esta naturaleza (artículo 2, ord. 19, del Código de Comercio)", "por lo que no constituyendo actos de comercio, hubiese quedado acreditado que dicho acto no cumple con lo señalado en el artículo 795 del Código de Comercio".

Los documentos que se alega han sido ignorados son certificaciones expedidas por la Comisión Bancaria Nacional y por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio, que acreditan que la sociedad CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC. no dispone de licencia bancaria y no posee licencia comercial ni industrial.

Este cargo no prospera, ya que con dichos documentos la sociedad anónima-acreedora acredita dos actividades a las que no se dedica, circunstancia que no es determinante para efectos del punto controvertido, es decir para deslindar **cuándo es mercantil el préstamo** a tenor de lo dispuesto en el artículo 795 ibídem, que invoca el casacionista como violado, pues éste señala que se reputará mercantil "cuando la cosa prestada se destine a cualquier acto de comercio".

En realidad, los citados documentos aportados como prueba no demuestran el destino de la cosa prestada, ni tampoco que el préstamo no constituye por sí mismo una operación mercantil. En ese sentido, su consideración por parte del ad-quem no hubiera influido o variado lo resolutivo del fallo que dictó. Por tanto, el cargo esbozado en esta última causal no prospera.

Finalmente, esta Sala de la Corte reitera su conformidad con la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, aunque algunas de las fundamentaciones expresadas en la parte motiva del mismo no las estima las más apropiadas, entre ellas el aplicar disposiciones acerca de la constitución de las sociedades para derivar de ello que cualquier acto llevado a cabo por éstas, por fuerza, tiene que ser calificado como acto de comercio, aspecto que, por otro lado, no forma parte del tema controvertido.

En principio, nuestro Código de Comercio, para la delimitación de la materia mercantil, se fundamenta en la naturaleza intrínseca del acto de comercio y no en la calidad de las personas que intervienen en el mismo, tal como se encuentra expresado en el artículo 1° del Código de Comercio (acto de comercio objetivo).

Para reconocer cuándo se trata de un acto de comercio, nuestro Código ha adoptado el sistema de enumeración, en su artículo 2°, cuyos supuestos descritos en sus ordinales exigen la concurrencia de ciertos elementos, como por ejemplo, para el caso del préstamo en general (ordinal 19), se destaca el elemento objetivo, o sea que constituya por sí mismo una operación comercial o que se celebre con motivo de una operación de esa naturaleza. Pero también en nuestra legislación mercantil está presente el sistema de la definición del acto de comercio como, por ejemplo, la contenida en el artículo 795 ibídem del préstamo mercantil (cuando la cosa prestada se destine a cualquier acto de comercio), complementada con la especial característica de la especulación o **retribución** consagrada en el 796 ídem. Sin embargo, además de estos dos sistemas, nuestro Código de Comercio refleja un criterio subjetivo, como se observa de lo preceptuado en los artículos 3, 35, 249 y otros del citado texto legal.

Este tema de la diferenciación del acto mercantil del correlativo civil, en el sistema español ha sido tratado de la siguiente forma:

> "...
> b) En el segundo grupo ya no se trata de actos considerados tradicionalmente como mercantiles. Se trata de actos que por tener una existencia legal doble (civil y mercantil), plantean con mayor fuerza el problema de su calificación (¿por qué este depósito es un depósito mercantil y no un depósito civil?) y parecen más aptos para descubrir la esencia del acto mercantil, porque esa esencia intransferible habrá inspirado, racionalmente, la separación legal.
>
> Para la diferenciación de estos actos el criterio del Código de Comercio no es único, sino múltiple: subjetivo (participación de un comerciante), real (naturaleza de la cosa objeto del contrato), objetivo (naturaleza del acto en sí mismo) y formal (requisitos para su celebración y publicidad). ..." (GARRIGUES, Joaquín. Ob. cit. p. 146).

En la legislación española se ha planteado el problema de los denominados actos mixtos, que son al mismo tiempo civiles para un contratante y mercantiles para el otro, que conllevan conflicto entre ambas ramas del derecho. Sobre el particular, en la obra antes citada se ha dicho lo siguiente:

> "...
> Para resolver este conflicto habrá que acudir a un criterio absoluto, aplicando la ley mercantil o la ley civil si no queremos partir en dos mitades cada acto de comercio unilateral para someter la una al Código mercantil y la otra al Código Civil. Si nos pronunciamos por el derecho civil, el derecho mercantil quedará reducido a un derecho de clase, regulador de las relaciones entre comerciantes. La sustantividad del derecho mercantil como derecho especial de una clase de actos, los actos de comercio, solo se salva sometiendo los actos mixtos al Código de Comercio y a las leyes mercantiles. ...
>
> En nuestro C. de Com. existen también actos mixtos. Pero no hay problema de legislación aplicable, porque todos los actos incluidos en el C. de Com., sean actos propiamente objetivos, que se califican como mercantiles, por el solo hecho de estar regulados por el

> Código, sean actos subjetivos, que exigen la participación de un comerciante, se rigen por las disposiciones contenidas en el Código. Esta es la declaración del art. 2°. Se rige, pues, por el Código, sin salvedad alguna en favor del contratante para quien el acto sea civil: todo el acto, como un acto jurídico indiviso, queda sometido al Código de Comercio. Cuando este quiere excluir en su ámbito un acto mixto a él sometido, consigna expresamente la excepción (v. art. 326). ..." (Ídem, pág. 155).

Lo anteriormente transcrito evidencia la supremacía del derecho mercantil, en cuanto a la calificación de los actos regulados en dicha legislación. En igual sentido el artículo 2° de nuestro Código de Comercio incluye una serie de contratos y títulos que expresamente se califican como **actos de comercio**, entre los que se encuentra el contrato de préstamo, de los cuales algunos también están regulados en el Código Civil, sin embargo si concurren los requisitos que para dichos contratos exige el propio Código de Comercio o por el hecho de su regulación dentro de éste, el acto tiene que definirse como de comercio.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de 24 de mayo de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la Excepción de Prescripción interpuesta por MARIO ISMAEL OSPINA en el Proceso Ejecutivo Hipotecario que le sigue CONSOLIDATED MANAGEMENT, INC.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/200.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EUGENE MCGRATH RENAULD RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado César Elías Sanjur, en representación del señor **EUGENE MCGRATH RENAULD**, ha presentado recurso de casación contra el auto proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 30 de noviembre de 1995, dentro del proceso sumario de lanzamiento instaurado por el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ** contra la parte recurrente en casación.

Como el presente recurso se encuentra pendiente de resolver sobre su admisibilidad, procede esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a hacer un estudio del mismo, con el objeto de determinar si debe ser admitido el recurso de casación.

Como primer punto, es preciso analizar si la resolución que se pretende impugnar es recurrible en casación.

La resolución atacada confirmó el Auto N° 1520, dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, el 25 de septiembre de 1995, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

> "Por tanto, la suscrita Juez Segunda del Circuito de Chiriquí, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley; **ORDENA RETENER Y PONER A DISPOSICIÓN DEL JUEZ EJECUTOR DEL**

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA N° 172276 de 20 de enero de 1992 por la suma de B/.16,000.00 y el CERTIFICADO DE GARANTÍA N° 9414 de 18 de mayo de 1992 por la suma de B/.15,000.00.

NIEGA la Solicitud de Devolución de los Certificados de garantía descritos efectuada por el Lic. CESAR ELÍAS SANJUR P. en nombre y representación del señor EUGENE MCGRATH RENAULD." (Foja 416 y vuelta).

El auto atacado fue dictado en atención a nota enviada por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, consultable a foja 412, en la que comunicó al Juez Segundo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, que dentro del Juicio Ejecutivo por Cobro Coactivo instaurado por esa institución bancaria contra el señor EUGENE MCGRATH RENAULD, ese juzgado ejecutor decretó secuestro mediante auto N° 724 de 28 de julio de 1995, sobre los certificados de garantía consignados por el señor MCGRATH, dentro del proceso de lanzamiento propuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra el mencionado señor, hasta la concurrencia de ochenta y seis mil balboas (B/.86,000.00).

El artículo 1149 del Código Judicial establece una lista, en número cerrado, de las resoluciones que son recurribles en casación. El ordinal 4° de esa disposición legal señala que el recurso de casación de casación tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia, proferidas por los Tribunales Superiores de Justicia, "Cuando se trate de autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones, en procedimientos cautelares." Sin embargo, en el presente caso la resolución que se pretende impugnar no es la que decretó el secuestro, ya que esa medida cautelar fue dictada dentro de proceso distinto al que nos ocupa, sino la que ordena retener y poner a disposición del juzgado ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, los certificados de garantía que constan en este juicio y que son objeto de ese secuestro. Consecuentemente, la resolución atacada no corresponde a la categoría contemplada por el ordinal 4° del artículo 1149 del Código Judicial.

Por otra parte, dicha resolución tampoco encaja en ninguno de los otros supuestos recogidos en ese mismo artículo por lo que se concluye que no es susceptible de impugnación a través del recurso de casación.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación presentado por el apoderado judicial del señor EUGENE MCGRATH RENAULD, dentro del proceso de lanzamiento instaurado por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra el recurrente.

Las costas a cargo de la parte recurrente se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SANTIAGO BABUN SELMAN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CONSOLIDADA INTERAMERICANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Morgan & Morgan, actuando en nombre y representación del señor **SANTIAGO BABUN SELMAN**, ha presentado recurso de casación contra la

sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 15 de noviembre de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por la parte recurrente contra la sociedad **CONSOLIDADA INTERAMERICANA, S. A.**

Procede la Sala a examinar el presente negocio, con el objeto de determinar si el recurso de casación interpuesto, cumple con los requisitos que la ley exige para su admisibilidad.

En primer lugar, debe determinarse si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley. Al respecto, el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial establece lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 1148.** Para que el recurso de casación pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes circunstancias:
> ...
> 2. Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de cinco mil balboas (B/.5,000.00), o que verse sobre intereses nacionales, municipales o de instituciones autónomas o semiautónomas, o sobre hechos relativos al estado civil de las personas o que haya sido dictada en proceso de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio, o en proceso de oposición a título de dominio, sin atenderse en estos casos a la cuantía.
>
> En caso de que no se haya fijado la cuantía en la demanda pero hubiere suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso, si excediere de la suma antes prevista."

La disposición transcrita establece que para que una resolución pueda ser impugnada mediante el recurso de casación, el negocio dentro del cual fue dictada debe tener una cuantía no inferior a los cinco mil balboas. La Sala observa que la demanda que inició el presente proceso no fijó la cuantía del negocio. La norma señala, igualmente, que podrá admitirse el recurso si existen elementos dentro del proceso para determinarla; situación que no se da en el caso en estudio. El certificado de acciones que obra a foja 13 es un certificado de acciones sin valor nominal, como lo expresa el mismo documento; y la indicación del capital autorizado (por la suma de $ 3,000,000.00) no comprueba una situación de hecho, real y concreta, sino una autorización par expedir acciones hasta ese capital.

Por último, el artículo 1148 enumera una serie de resoluciones que por la naturaleza del proceso en el que se dictan, son recurribles en casación, independientemente de su cuantía. La sentencia atacada fue dictada dentro de un proceso ordinario y, consecuentemente, no corresponde a ninguno de los supuestos que establece la citada disposición, para los cuales no se requiere cuantía. Por tanto, el presente recurso de casación debe ser rechazado, porque la resolución objeto del mismo no es de aquellas contra las cuales lo concede la ley.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación presentado por el señor SANTIAGO BABUN SELMAN.

Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUSTINIANO CÁRDENAS BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A MATADERO DE AZUERO, S. A. (R. L. FRANCISCO PABLO EPIFANIO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado **JUSTINIANO CÁRDENAS BARAHONA**, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1995, dentro del proceso instaurado por el recurrente en casación contra **MATADERO DE AZUERO, S. A.**

El presente recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, razón por la cual la Sala procede a decidirla.

Se observa que la resolución cuya impugnación se pretende es susceptible de casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

Consta en autos que el recurso se anunció y presentó en tiempo oportuno y por persona idónea.

El escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general, todos los requisitos exigidos por el artículo 1160 del Código Judicial y la única causal de fondo invocada, es de las contempladas por el artículo 1154 de ese mismo Código.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el Licenciado JUSTINIANO CÁRDENAS BARAHONA.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER Y LA SUCESIÓN DE ENRIQUE O. BENÍTEZ ESQUIVEL, REPRESENTADA POR ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MARÍA DE JESÚS PINZÓN DE BENÍTEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RODRIGO MIRANDA MORALES, en su condición de apoderado de la parte demandada **ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER Y la SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE ENRIQUE OVIDIO BENÍTEZ ESQUIVEL** dentro del proceso ordinario declarativo instaurado por **MARÍA JESÚS PINZÓN DE BENÍTEZ**, ha interpuesto **Recurso de Casación** contra la Sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, de fecha 4 de octubre de 1995.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso de casación, término que no fue aprovechado por ninguna.

La Sala procede a decidir si es admisible el recurso de conformidad con las exigencias que al efecto determinan las disposiciones del Código de Procedimiento

Civil.

En primer término se ha podido observar que la resolución impugnada es de aquellas contra las cuales la ley concede este recurso, pues se trata de una sentencia de segunda instancia dictada en un proceso de conocimiento (Arts. 1148 y 1149, núm. 1).

El recurso ha sido formalizado dentro del término legal.

Al examinar el escrito de formalización del recurso la Sala ha podido observar, del contenido de sus apartados, que los cargos formulados están dirigidos contra otra resolución judicial, dictada en el mismo proceso ordinario declarativo, distinta a la Sentencia Civil que figura de fojas 265 a 276 del expediente contra la cual se interpone el recurso de casación. Es decir, el recurso de casación está atacando lo resuelto en el Auto Civil de 29 de agosto de 1995 (fs. 258 a 261), que decidió no acceder a las peticiones de los apoderados de dar por terminado el proceso.

En tal sentido, el recurrente invoca dos causales de forma; las contempladas en los numerales 1 y 8 del artículo 1155 del Código Judicial, sosteniendo en algunos de sus motivos lo siguiente:

> "**PRIMERO:** La sentencia recurrida desatendió la clara intención de la parte actora y de la demandada en el sentido de transar el pleito impidiendo que la transacción presentada con arreglo a la ley procesal surtiera sus efectos y -consecuentemente- omitió dictar la resolución aprobatoria, que constituye un trámite esencial en el juicio.
>
> **SEGUNDO:** La sentencia recurrida -so pretexto de que en la transacción participaron todos los herederos de la sucesión ab intestato y, por tanto no eran partes en el juicio transado- se abstuvo sin razón de impartir su aprobación a dicho acuerdo que, como es obvio, está encaminado a surtir sus efectos **inter partes** (actora y demandada) por lo que continuó la tramitación del proceso, con lo que omitió un trámite esencial como es dictar una resolución que afectara "los derechos determinados por la transacción". (Fs. 290).
>
> ...
>
> **PRIMERO:** La sentencia recurrida no tomó en consideración el hecho de que la parte demandada se allanó a las pretensiones de la actora como parte integral de una transacción (ver fojas 245, 246, 247, 248, 249 y 264) entre las partes para poner fin a la litis y, en consecuencia, incurrió en ambigüedades y contradicciones al resolver en el fondo como si no hubiera tenido lugar dicha transacción y allanamiento a las pretensiones de la actora." (Fs. 292).
>
> **SEGUNDO:** La sentencia recurrida reiteró los oscuros planteamientos que hizo en la sentencia al "aclarar" la misma a petición de la parte demandada que lo hizo en tiempo oportuno."

De lo transcrito se desprende que se cuestiona, en parte, el contenido del Auto que decidió la transacción y por otro lado se pretende que la misma no ha sido resuelta, y que la sentencia (impugnada en casación) que decidió el fondo del negocio omitió dicho pronunciamiento.

Aunado a lo expuesto, en cuanto a la primera causal se observa que el recurrente transcribe todo el ordinal 1° del artículo 1155 del Código Judicial, el cual contiene tres causales. Esta pluralidad de causales deja en la indeterminación la causal específica de que se trata. Cada causal debe ser invocada por separado, en relación con sus motivos, las disposiciones legales violadas, y el concepto de la violación.

En la segunda causal, basada en el ordinal 8 del artículo 1155 del Código Judicial y que trata de la parte resolutiva de la decisión, cuando contenga

declaraciones o disposiciones ambiguas o contradictorias, los motivos no se refieren a la parte resolutiva, como se puede observar en la transcripción hecha por esta Sala.

Esta situación es a todas luces improcedente y hace que el recurso se torne ininteligible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO ADMITE el recurso de casación propuesto ESTHER MARÍA BENÍTEZ DE GEER Y LA SUCESIÓN DE ENRIQUE BENÍTEZ ESQUIVEL en el proceso ordinario que le sigue a MARÍA DE JESÚS PINZÓN DE BENÍTEZ.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROINVEST, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **JAIME MARCHOSKY**, en su condición de abogado de la empresa **PROINVEST, S. A.**, ha hecho uso del recurso extraordinario de casación para impugnar la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995 por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que su mandante incoara contra la sociedad denominada **CHINA UNITED TRADING CORP., S. A.**

La demanda ordinaria interpuesta por PROINVEST, S. A. pretendía que se declarase resuelto el contrato celebrado el 21 de julio de 1989 con la parte demandada, para el embarque, fletamento, descarga, traslado, aserrado y venta de un millón de pies tablares de madera y así mismo se le condenase al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la culpa y negligencia en que incurrió en la ejecución de dicho contrato y por concepto de las inversiones efectuadas por la parte actora, hasta la concurrencia de B/.495,500.00, más los intereses, costas y gastos del proceso. La parte actora fundó sus pretensiones en treinta y siete hechos. La parte demandada opúsose a la acción, negando en lo medular la relación fáctica presentada por PROINVEST, S. A. y solicitó el rechazo de las declaraciones pedidas. A petición de la demandada se llamó al proceso a la persona jurídica denominada MADERAS TULIPAN, S. A., para que respondiese en los términos indicados en el artículo 597 del Código Judicial para el caso de que resultase perjudicada la empresa CHINA UNITED TRADING CORP., S. A., con la sentencia que se dictase en este proceso.

RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

Para una mejor comprensión del contradictorio la Sala procede a elaborar un resumen de las copiosas constancias procesales contenidas en el expediente:

PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING, CORP., S. A., como se deja dicho, celebraron en la fecha indicada un contrato mediante el cual la segunda le hizo entrega de una determinada cantidad de madera de su propiedad (cedro maría, nombre científico CALLOPHILYUM LONGIFOLUM) a la primera para que ésta se encargase de su embarque, fletamento, descarga, traslado, aserrado y venta en los

términos que considerara conveniente y a cambio de la suma de B/.170,000.00. En desarrollo y ejecución del contrato, PROINVEST, S. A. trasladó desde la isla de Coiba, de donde se extrajo y fue talada la madera objeto del contrato, las tucas que se depositaron, casi todas, en el Puerto de Samba Bonita, Provincia de Colón, con la idea de transportarlas desde allí y hacerlas llegar a los potenciales compradores con los que se concertara su venta, ya fuese en el mercado local o en el extranjero. Los costos de operación, ejecución y desarrollo del contrato corrieron a cargo, conforme a lo pactado, de la empresa PROINVEST, S. A. Encontrándose las cosas en ese estado, en el mes de febrero de 1990 el Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE) ordenó la retención de la madera al comprobar que la misma había sido extraída por la sociedad anónima denominada MADERAS TULIPAN, S. A. sin contar con los permisos y autorizaciones exigidos por la ley, produciéndose más adelante el formal decomiso de toda la madera. Frente a lo ocurrido la empresa CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. adujo como eximente de su responsabilidades contractuales, el haber adquirido el objeto decomisado mediante un contrato de compraventa que celebró con MADERAS TULIPAN, S. A., sin tener conocimiento de que el vendedor carecía de plenos derechos sobre la madera que estaba adquiriendo a través de esa compraventa. Ese fue, además, el motivo de que solicitara la incorporación al juicio de MADERAS TULIPAN, S. A., sociedad a la que la parte demandada le adjudicaba, por otro lado, la condición de subsidiaria de la parte actora, PROINVEST, S. A.

Tanto a favor de la demandante como a favor de la demandada, en ocasión del período en que debió hacerse, se practicaron las pruebas aducidas, para que luego el juzgador primario profiriera su fallo en el cual dejóse consignado lo siguiente:

> "En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ CUARTA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1° DECLARA NULO el Contrato suscrito ente las sociedades MADERAS TULIPAN, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORPORATION, S. A. 2° DECLARA NULO el Contrato Suscrito entre la sociedad CHINA UNITED TRADING CORPORATION y PROINVEST. 3° ABSUELVE a la Sociedad CHINA UNITED TRADING CORPORATION, S. A. de la Demanda interpuesta por la Sociedad PROINVEST, S. A. para que se declarara Resuelto el Contrato suscrito entre ambas Sociedades y se le condenara a pagar la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS Balboas, en concepto de daños y perjuicios. 4° CONDENA a MADERAS TULIPAN, S. A. al pago de los daños y perjuicios ocasionados a PROINVEST, S. A. por la suma de B/.117.473.00.
>
> Se condena a la sociedad MADERAS TULIPAN, S. A. a pagar la suma de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON TREINTA CENTÉSIMOS B/.11,747.30, en concepto de costas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1064 del Código Judicial y a la Tarifa de Honorarios Profesionales de Abogados, publicada en la Gaceta Oficial N° 20,575 de 16 de junio de 1996.
>
> Los gastos e intereses serán calculados en su oportunidad por Secretaría".

Contrariado por esa decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación que al ser sustentado rebate los fundamentos argumentales del a-quo a partir de cuatro puntos, a saber:

1) Que la sentencia erraba al declarar nulo el contrato celebrado entre PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. basándose en que la madera sobre la que versó el contrato constituía un objeto ilícito por el mero hecho de pertenecer al Estado, encontrándose por esa razón fuera del comercio, cuando en realidad esa madera podía ser objeto de apropiación privada, ya que no se trataba de bienes de dominio público.

2) Que la sentencia se equivocó al atribuirle al negocio jurídico celebrado entre el demandante y demandada la condición de un contrato de compra venta cuando su verdadera naturaleza es la de un contrato de mandato.

3) Que carece de fundamento jurídico y no encuentra respaldo en las pruebas la conclusión a la que se arriba en el fallo cuando se declara que MADERAS TULIPAN, S. A. es una empresa subsidiaria de PROINVEST, S. A.; y,

4) Que la sentencia de primera instancia aplicó indebidamente el artículo 597 del Código Judicial al declarar que, quien estaba obligado a indemnizar a PROINVEST, S. A., era la empresa MADERAS TULIPAN, S. A. y no la empresa CHINA UNITED TRADING CORP., S. A.

Por su parte el Tribunal Superior al resolver la encuesta en grado de apelación determinó que la juez de primera instancia, efectivamente, incurrió en un error al darle al contrato la calificación de compra-venta, cuando su verdadera naturaleza jurídica lo ubicaba dentro de la relación contractual del mandato, en los términos que contemplan los artículos 1400 y 1401 del Código Civil, puesto que de las cláusulas pactadas no se desprende la intención de vender ni de comprar los bienes muebles (las tucas de madera) que constituyen el objeto del contrato. Añade el Tribunal Superior que fue incorrecta la declaración del a-quo al decretar de oficio la nulidad del contrato por objeto ilícito, pero le otorgó al contrato de compraventa celebrado por MADERAS TULIPAN, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. el mismo tratamiento que le diera la sentencia de primera instancia decidiendo declararlo nulo basándose en la ilicitud del objeto de la compra-venta celebrada entre MADERAS TULIPAN, S. A., en su condición de vendedora, y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A., en su condición de compradora de la madera. A juicio del Tribunal Superior tampoco se justifica el que, en la sentencia primaria, se haya considerado que existe entre MADERAS TULIPAN, S. A. y PROINVEST, S. A. una relación de subsidiaridad, pues, como se deduce de las constancias procesales, se trata de dos personas jurídicas distintas, sin vínculos que devengan hacia esa clase de relaciones. Agrega el Tribunal Superior que respecto al contrato celebrado entre PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. no cabe la declaratoria de nulidad y que a ese contrato se le debe reconocer plena validez jurídica, algo que dejó de hacer el juez del conocimiento. Acerca de si se justifican o no las pretensiones de la parte actora (PROINVEST, S. A.) para que se declare resuelto el contrato, con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios debido al incumplimiento de la entrega de la madera por parte de la demandada (CHINA UNITED TRADING CORP., S. A.), el Tribunal Superior concluye que "tal incumplimiento solamente da lugar a que se declare judicialmente la resolución de la aludida contratación, pues, con entera independencia de si la sociedad demandante experimentó perjuicios económicos en razón o como consecuencia de dicho incumplimiento, a ella le estaba vedado exigir compensación por tales daños y perjuicios en los términos del artículo 1009 del Código Civil, por cuanto también hubo incumplimiento de parte suya, ...".

El incumplimiento de la parte actora, a que se refiere el Tribunal Superior, consiste en el hecho de que PROINVEST, S. A. no efectuó ninguno de los pagos parciales que se encontraba obligada a realizar en favor de la parte demandada, de conformidad con la cláusula décima del contrato celebrado. De allí que, en virtud del incumplimiento recíproco de las partes, el Tribunal Superior, al reformar la sentencia apelada, dictó el fallo declarando "resuelto el contrato celebrado entre PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A., el día 21 de julio de 1989 por incumplimiento de ambas partes".

EL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal Superior lo componen tres causales, todas ellas debidamente admitidas por la Sala. La primera causal es de casación en la forma y las dos restantes de casación en el fondo. La Sala pasa de inmediato al estudio de cada una de ellas por separado, respetando la prelación en que se presentaron en el escrito utilizado por la censura.

CASACIÓN EN LA FORMA

Al determinar la causal en la forma que se invoca se precisa que no estuvo la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda al resolverse sobre un punto que no era objeto de la controversia. El cargo es sustentado en

dos motivos, especificándose en el primero de ellos que la sentencia impugnada, al decidir que a la parte demandante no le cabía reclamar compensación por daños y perjuicios, entró a resolver acerca del incumplimiento de una de las obligaciones contractuales de la parte actora, asunto por completo ajeno a las pretensiones de la demanda, que ni siquiera fue alegada como una excepción por la parte demandada. El segundo motivo se plantea en conexión con el anterior y consiste en señalar que, como resultado del vicio denunciado, la sentencia recayó sobre un punto que no era objeto de la controversia. Tres disposiciones legales de carácter adjetivo del Código de Procedimiento se citan como violadas:

1) El artículo 978 del Código Judicial, normativa que se encarga de vedarle a las sentencias dictadas por los tribunales de justicia la posibilidad de excederse en cuanto a las pretensiones o excepciones alegadas y probadas por las partes; que prohíbe a las condenas extenderse más allá de lo pedido o reconocer algo distinto a lo que se haya demandado, con la finalidad de garantizar la congruencia de la cual deben estar revestidos los pronunciamientos judiciales. Para el recurrente, como el fallo atacado entró a pronunciarse sobre el presunto incumplimiento de la parte actora, sin que mediara siquiera una excepción, siendo el punto controvertido el incumplimiento en que incurrió la parte demandada, tal resolución judicial, alejada por completo de lo pretendido en juicio, descoloca a la sentencia en relación con las limitaciones impuestas por la disposición del Código Judicial que se ha dejado citada.

2) Se dice infringido el artículo 979 del Código Judicial que señala que los hechos que modifican o extinguen las pretensiones objeto del proceso y que hayan ocurrido después de haberse propuesto la demanda, sólo se reconocerán cuando hayan sido probados oportunamente. Como la sentencia de segunda instancia aceptó que un hecho extintivo de la pretensión (el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales por la parte actora) era cierto, sin que la demandada hubiese probado tal extremo, la resolución incurrió en desconocimiento del tenor literal de la norma citada violándola, en consecuencia, por omisión.

3) Se cita también el artículo 459 del Código Judicial como violado. Esa disposición recoge las normas generales por medio de las que se remite a quienes desean que se les reconozca algún derecho o pretensión, o la existencia o no existencia de una determinada relación jurídica que les concierna, a los Tribunales para que soliciten aquello que les corresponde en la forma prescrita en el Código de Procedimiento. Según el recurrente el Tribunal Superior no estaba autorizado para reconocer la existencia de una excepción que no se hizo valer en los términos exigidos por el artículo 459 del Código Judicial violando en esta forma el contenido de dicha disposición legal.

Vistos los cargos que la censura le endilga a la sentencia a través de esta primera causal de forma, la Sala se siente obligada a recordarle al casacionista que el Juez, no sólo está autorizado, sino que además está obligado a reconocer en el fallo los hechos debidamente comprobados que constituyen una excepción, no importa que la misma no haya sido propuesta ni alegada, salvo que se trate de las excepciones de prescripción y de compensación, en cuyo caso la ley si exige que se aleguen para que puedan se reconocidas. Es eso lo que ordena el artículo 682 del Código Judicial y desde ese punto de vista no sería conforme a derecho, como pretende el casacionista, concluir que el mero reconocimiento que hiciera el Tribunal Superior del incumplimiento de las obligaciones de la parte actora constituye un vicio inherente al fallo dictado haciéndolo responsable de los defectos formales por los cuales ha sido atacado.

Ahora bien, hay que seguir examinando la materia concreta acerca de la cual se produjo el pronunciamiento del Tribunal, a fin de establecer si hubo o no vicios de carácter procedimental en esa decisión. Una simple lectura del hecho Décimo de la demanda le permite a la Sala percatarse que fue la propia demandante quien le informó al juzgador que, estando ella obligada a pagarle a la demandada la suma B/.170.000.00 en virtud del contrato celebrado, mediante la entrega de tres abonos (dos de B/.50,000.00 y uno de B/.70,000.00) dejó de hacer el primer pago el día convenido (15 de dic. de 1989), explicando que había obtenido una prórroga del representante legal de la parte demandada, señor YANG JINKAI. En la contestación de la demanda, la demandada negó que a la actora se le hubiese otorgado la prórroga que ella menciona en el hecho Décimo de la demanda. Conviene

ilustrar este pasaje del proceso transcribiendo textualmente lo que dicen la cláusula Décima del contrato celebrado entre las partes, el hecho Décimo de la demanda y la contestación que se le diera al mismo:

> "**DÉCIMA: El Pago:** EL CONTRATISTA deberá pagar a la CONTRATANTE por la madera la suma de ciento setenta mil dólares (U. S. $170,000.00); por la cantidad de un millón de pies tablares; o más si lo hubiera. Este pago se hará mediante abonos parciales, así:
>
> U. S. $50,000.00 (cincuenta mil dólares) el día 15 de diciembre de 1989.
>
> U. S. $50,000.00 (cincuenta mil dólares) el día 15 de marzo de 1990.
>
> U. S. $70,000.00 (setenta mil dólares) el día 15 de junio de 1990.
>
> El hecho Décimo de la demanda dice lo siguiente:
>
> **DÉCIMO:** ProInvest, S. A. se comprometió a pagar a CHINA UNITED TRADING, CORP. la suma de $170,000.00 (ciento setenta mil dólares) en tres pagos así:
>
> U. S. $50,000.00 el día 15 de diciembre de 1989
> U. S. $50,000.00 el día 15 de marzo de 1990.
> U. S. $70,000.00 el día 15 de junio de 1990.
>
> Sin embargo, con la aceptación del Señor Yang Yinkai el primer pago fue prorrogado hasta tanto se cobrara el primer embarque vendido ya a Alemania, debido a que hubo demoras no imputables a ProInvest en la ejecución del contrato, que de suyo debió iniciarse en el mes de junio (26 de junio de 1989 a mas tardar): y sin embargo el mismo no fue firmado sino hasta el 21 de julio de 1989 además de demoras incurridas por los dueños de los barcos en el suministro de las naves a tiempo, lo cual degeneró en subsecuentes demandas y contrademandas entre ProInvest y las navieras las cuales se tramitan ante el tribunal marítimo de Panamá."
>
> En la contestación de la demanda al Hecho Décimo se dice:
>
> **DÉCIMO:** No es como alega el actor. El señor JINKAI nunca aceptó prórroga en el primer pago. Niego este hecho."

No haber efectuado el pago parcial de B/.50,000.00 el día 15 de diciembre de 1989 (obligación contractual que emana para el demandante del propio documento que la actora presentó como prueba del contrato celebrado entre las partes) y produciéndose la negación rotunda en cuanto a que el demandado le hubiese otorgado una prórroga, colocaba a la parte demandante en la situación de probar la verdad de sus aserciones. Probado quedó que se tenía que hacer un pago parcial en determinada fecha y también se probó que ese pago no se hizo. La demandante afirmó que la contraparte le extendió una prórroga para hacerlo, algo que fue negado cuando se contestó la demanda. No hay en el expediente prueba alguna que corrobore lo afirmado por la parte actora, sobre quien recaía la carga de la prueba según las reglas establecidas por el artículo 773 del Código Judicial.

No encuentra la Sala razones que le indiquen que la sentencia del Tribunal Superior haya incurrido en errores in procedendo por el hecho de haber entrado a considerar los hechos que emergen de la propia realidad procesal y que le permitieron pronunciarse acerca de lo que en su opinión constituía una excepción que no podía pasarse por alto a la hora de desatar la controversia cuyo fallo le fuera encomendado. Al mismo tiempo, conviene reparar en que no se ajusta a la realidad procesal el sostener, como lo ha hecho el recurrente, que hubo ausencia de gestión por parte de la demandada en cuanto a alegar el hecho que el Tribunal Superior estimó como un incumplimiento de las obligaciones contractuales que pesaban sobre la parte actora. Además de la contestación dada al hecho Décimo de la demanda, la parte demandada se refirió expresamente a ese incumplimiento en

el alegato de conclusión en la primera instancia y también en el alegato de oposición a la apelación en la segunda instancia.

En atención a las consideraciones que se dejan expuestas el criterio de esta Sala de casación es que no existen elementos que ameriten que se case la sentencia impugnada como producto de los defectos formales que le asigna el recurrente, puesto que ellos no se produjeron en este caso.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO

En la primera causal de fondo el recurrente alega la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida, hasta influir sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. En los motivos sustentadores de la causal se indica que el Tribunal Superior aplicó, en la solución de una controversia de naturaleza mercantil, una norma reguladora de las obligaciones pertenecientes al derecho civil. Agrega que esa norma fue aplicada incorrectamente para resolver una situación provocada por supuestos hechos culposos y dolosos que no tienen nada que ver con la disposición utilizada. La norma que se cita como aplicada indebidamente, y por lo tanto infringida, es el artículo 1009 del Código Civil que contiene las reglas y principios relativos a la condición resolutoria tácita, implícita en las obligaciones recíprocas, bilaterales y sinalagmáticas.

Lo primero que la Sala desea dejar bien establecido y aclarado es que no comparte el análisis del casacionista mediante el cual asume una postura doctrinal sustentada en la insinuación de que a las obligaciones de naturaleza mercantil, por el hecho de serlo, no les son aplicables las reglas de la condición resolutoria tácita, motivo por el que, cuando el Tribunal Superior decidió aplicar el artículo 1009 del Código Civil automáticamente incurrió en una aplicación indebida de la norma en comento.

Todos los que lidian con el derecho están en la obligación de saber que las disposiciones del derecho civil se aplican de manera supletoria a la materia mercantil en aquellos casos en que ni las leyes ni los usos de comercio contemplan los supuestos que los tribunales deben resolver. Es más, también se sabe que el derecho civil fue la matriz en donde tuvieron su origen infinidad de institutos mercantiles que la dinámica del comercio les impuso el rumbo de su autonomía e independencia. Por eso, mucho más apropiado es concebir que el derecho civil cumple y desempeña un importante papel complementario, en vez de pretender caracterizarlo como enfrentado o en contradicción con las normas de derecho mercantil.

Lo más aproximado y cercano al artículo 1009 del Código Civil que contiene la legislación mercantil es lo que establece el artículo 236 del Código de Comercio:

"Cumplimiento en obligaciones recíprocas.	ARTÍCULO 236. Aquel a quien se exigiere el cumplimiento de un contrato bilateral, no podrá ser obligado a ello sino en anto que la otra parte hubiere Cumplido el contrato en lo que le concierne o se declare dispuesta a cumplirlo, a no ser que tenga a su favor un plazo según las cláusulas o de naturaleza del contrato."

Se puede apreciar que la disposición citada sólo recoge una parte del componente normativo encerrado en el artículo 1009 del Código Civil. Aún cuando se inspira en los mismos principios rectores que le impone a las partes el artículo 1009 del Código Civil en las obligaciones bilaterales y recíprocas, el artículo 236 del Código de Comercio sólo contempla aquellas circunstancias atinentes a la petición o exigencia que se haga en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, pero nada dice en cuanto a la petición que una de las partes

formule para que se declare resuelto el contrato con el pago de la indemnización de los daños y perjuicios, tal como fue solicitado en el presente caso.

Con anterioridad ha sostenido la Corte que el derecho para solicitar la resolución de un contrato acompañado con el de exigir la indemización por daños y perjuicios descansa en dos supuestos básicos. El primero consiste en la naturaleza jurídica de la relación contractual, porque debe concernir a obligaciones que le impongan a las partes cargas recíprocas y correlativas, es decir, más o menos equivalentes, en donde cada una de ellas tiene frente a la otra un derecho de crédito y un deber de prestación; elementos que determinan su naturaleza sinalagmática. El segundo elemento cuya presencia es requerida consiste y hay que ubicarlo en la omisión en que haya incurrido la parte contra la cual se reclama el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Ahora bien, ante el hecho cierto e irrebatible de que no existe en la legislación mercantil ninguna disposición legal exactamente equivalente al artículo 1009 del Código Civil, por mandato de los artículos 5 y 194 del Código de Comercio, la materia relativa a la facultad de resolver las obligaciones de contenido mercantil con indemnización de daños y perjuicios se tiene que ventilar a la luz de lo dispuesto por el artículo 1009 del Código Civil.

En el caso subjúdice, cabe hacerse la pregunta tocante a si la obligación contractual existente entre las partes es de aquellas que entran en la categoría en donde los contratantes se obligan recíprocamente, a los efectos de determinar si estamos o no en presencia de una obligación bilateral y sinalagmática. La respuesta es clara, el contrato celebrado ente PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A., no importa si se trata de una compra venta o de un mandato, es un contrato que le impone obligaciones a ambas partes y como esas obligaciones son más o menos equilibradas para ambos contratantes hay que aceptar que cae dentro del rango de las obligaciones a que se refiere el artículo 1009 del Código Civil. Por lo tanto no es cierto que la aplicación de esa disposición hecha por el Tribunal Superior, en este caso, se pueda calificar de indebida o considerarse como violada la norma tal como pretende el recurrente. La Sala llama la atención en el sentido de que, en caso de que se accediera a lo pedido por el recurrente y se casase por este motivo la sentencia censurada, se estaría cayendo en una abierta contradicción jurídica, pues quien solicitó la resolución del contrato con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios ha sido precisamente la parte que ahora exige el repudio de la aplicación de la única norma que en el ordenamiento jurídico faculta a los tribunales para resolver los contratos que una de las partes ha incumplido mediando el pago de las indemnizaciones solicitadas en base a lo que doctrinalmente se denomina y se conoce como la condición resolutoria tácita, consagrada en nuestro derecho por el artículo 1009 del Código Civil.

SEGUNDA CAUSAL DE FONDO

La segunda causal de fondo invocada por el recurrente es la infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa de las normas de derecho lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Los cargos que se expresan en los motivos señalan que la sentencia dejó de aplicar las normas sustantivas que regulan el contrato de mandato mercantil y las disposiciones relativas a las obligaciones ejecutadas mediante dolo, culpa o negligencia. Se considera infringido el artículo 14 del Código Civil que contempla las reglas de interpretación en materia de las normas de derecho cuando estas sean incompatibles entre sí; el artículo 594 del Código de Comercio que consigna la obligación del mandante de indemnizar al mandatario por los daños que sufra por vicios o defectos de las cosas objeto del mandato, aún cuando fuese ignorante de las deficiencias; y los artículos 987 y 988 del Código Civil referentes a la responsabilidad que emana del dolo y de la negligencia que intervengan en o impidan el cumplimiento de las obligaciones.

Al estudiarse el primer cargo que en esta causal se dirige en contra de la sentencia impugnada, o sea el presunto defecto que se le atribuye por haberse dejado de aplicar las disposiciones que regulan en particular el mandato mercantil, incurriéndose por ello en violación de lo establecido en el artículo 14 del Código Civil y en el artículo 594 del Código de Comercio, esta Superioridad estima que, al margen de la especialidad que se le reconozca al

artículo 594 del Código de Comercio, es evidente que la obligación de indemnizar al mandatario, en los términos por esa norma consagrados, supone de parte de ese mandatario el haber cumplido con sus correspondientes obligaciones contractuales. Lo que el artículo 594 del Código de Comercio establece en materia de indemnización en nada contradice las reglas recogidas en el artículo 1009 del Código Civil, el cual, con oportunidad de analizar la primera causal de fondo ya fuera comentado por la Sala. Es más, el artículo 1420 del Código Civil regulador de las obligaciones del mandante en el contrato de mandato de naturaleza civil, consagra una obligación semejante o parecida a la que el artículo 594 del Código de Comercio impone sobre los mandantes. Pero, ni en el caso del mandato civil ni en el caso del mandato mercantil se puede afirmar que al aplicarse en una sentencia lo dispuesto por el artículo 1009 del Código Civil, el uso de dicha disposición equivalga a un desconocimiento de las disposiciones especiales que regulan una u otra clase de mandatos.

Ante la solicitud formulada en la demanda por la parte actora para que se declarase resuelto el contrato y se condenara a la demandada al pago de la indemnización por daños y perjuicios, el Tribunal Superior limitó y sujetó su decisión al criterio de que para tener derecho a peticionar la resolución de un contrato bilateral con la correspondiente indemnización es necesario que el actor haya cumplido con las obligaciones que le incumben de forma tal, que habiéndolas cumplido plenamente, el demandado no hubiese cumplido con las suyas. La Corte Suprema de Justicia en fallo proferido el 17 de febrero de 1967 se refirió al punto en los siguientes términos:

> "...
> En las obligaciones bilaterales, como resulta ser la que motiva esta demanda, cada parte se obliga, con el fin de obtener el cumplimiento de la otra y aquí, para que los Carrera pudiesen estar en posición de exigir a Vega, era preciso que demostraran que ellos habían cumplido su parte y que habiéndola cumplido plenamente, el señor Vega había incumplido la suya". (Repertorio Jurídico enero-febrero de 1967). (Feb. 1967. N° 2. Fs. 52).

Ya anteriormente se apreció como el Tribunal Superior decidió declarar resuelto el contrato celebrado entre PROINVEST, S. A. y CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. sin responsabilidad para ninguna de ellas en materia de indemnización, debido al incumplimiento recíproco en que ambas partes incurrieron. En otras palabras, la parte demandante -PROINVEST, S. A.- al incumplir la cláusula Décima del contrato (pago parcial) se descalificó a sí misma para reclamar contra la parte demandada -CHINA UNITED TRADING CORP.- por el incumplimiento en que ésta incurrió en sus obligaciones contractuales.

Finalmente, el casacionista impugna la sentencia por estimar que infringe los artículos 987 y 988 del Código Civil de los que se deriva la responsabilidad procedente por dolo y negligencia en relación con el incumplimiento en las obligaciones que se hayan contraído. Según la censura, el Tribunal Superior, después de haber reconocido que la empresa CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. observó respecto a sus obligaciones contractuales una conducta en la que obró con dolo y negligencia, decidió inapropiadamente que no procedía el derecho a indemnización a menos que la demandante hubiese probado que cumplió con las obligaciones contractuales que a ella le incumbían. Ante todo la Sala advierte que no es exacto atribuirle a la resolución impugnada el reconocimiento del dolo imputado por la actora a CHINA UNITED TRADING CORP.

El dolo, en lo que atañe a las obligaciones contractuales, debe concebirse como aquel género de astucia, trampa, maquinación o artificio que una de las partes emplea para engañar a la otra. A esa clase de conducta no ha hecho referencia en ninguna de sus partes la resolución impugnada, por lo cual mal puede decirse, como lo hace la censura que la sentencia lo haya reconocido en el proceder de la parte demandada.

La Sala considera importante destacar que mediante resolución N° 519 de 11 de diciembre de 1991, dictada por la Contraloría General de la República, visible a foja 391 del expediente, se exoneró de cualquier responsabilidad a CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. en relación con la compra que le hizo a MADERAS TULIPAN, S. A. de la madera que devino en el objeto del contrato celebrado posteriormente

entre esta última y la parte actora dando lugar a este juicio ordinario. Para mayor claridad transcribimos las partes pertinentes de la aludida resolución:

"REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN N° 519

Panamá, 11 de diciembre de 1991.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución N° 381 de septiembre 5 de 1991, esta Contraloría General de la República, ordenó la cautelación y consecuente puesta fuera de comercio de los bienes muebles, inmuebles y dineros pertenecientes a CARLOS CASTILLO VILLARREAL, y de las empresas MADERAS TULIPAN, S. A. y CHINA TRADING CORP., S. A.

2. Que las medidas cautelares mencionadas se tomaron, habida cuenta que, investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y esta Contraloría General comprobaron lesión al patrimonio de Estado por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/.349,965.00), que se produjo mediante la tala, sin la debida y previa autorización o concesión por parte del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), del MIL QUINIENTOS QUINCE (1,515) árboles que equivalen a seis mil metros cúbicos (6,363 m^3) de madera clase "MARÍA", en la isla penal de Coiba;
...
"5. Que una revisión y examen mas exhaustivos de los elementos probatorios que informan el presente expediente y su confrontación con los argumentos expuestos por los solicitantes permite constatar que efectivamente, al igual que el patrimonio público, la empresa compradora CHINA TRADING CORP., S. A., también sufrió cuantiosas pérdidas económicas, puesto que entregó a la vendedora la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.350,000.00) en concepto de adelanto;
...

RESUELVE:

1. Dejar sin efecto las medidas cautelares ordenaras en la Resolución N° 381 de septiembre 5 de 1991, emitida por esta Contraloría General de la República, en contra de la empresa CHINA TRADING CORP., S. A.

2. Notificar lo resuelto a la Dirección General del Registro Público, a las entidades bancarias del país y a las Tesorerías Municipales:

Derecho: Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBÉN CARLES
Contralor General" (fs. 502)

También a fojas 48 y siguientes del expediente consta el auto del Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha 4 de febrero de 1991, en el cual se dicta sobreseimiento provisional a favor del señor YANG JINKAI en su condición de representante legal de la sociedad CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. en el proceso penal que se adelanta con motivo de la apropiación ilícita de las tucas que MADERAS TULIPAN, S. A. vendiese a CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. y que luego esta empresa entregase a PROINVEST, S.

A. con motivo del contrato concertado entre ellas. Constan en autos los documentos que acreditan los pagos hechos por CHINA UNITED TRADING CORP., S. A. a MADERAS TULIPAN, S. A. por la compra efectuada (v. f. 35, 36 y 40 del expediente). Esos medios probatorios, sin duda, influyeron para que en el ánimo del juzgador no haya surgido la convicción de que la parte demandada en este proceso se comportó con la mala fe que es elemento fundamental para la configuración de la conducta dolosa.

En torno a la presunta culpa o negligencia con que pudo haber actuado la parte demandada en relación con la propiedad de la madera objeto del contrato celebrado entre las partes, bueno es comenzar determinando qué se debe entender por esa clase de conducta. La culpa o la negligencia, a diferencia del dolo, no envuelve intencionalidad o propósito intencionalmente deliberado. La noción de culpa o negligencia tiene que ver, sobre todo, con la falta de consideración y respeto, o con una actividad o inactividad mal entendidas, provocadas por la imprudencia, la irreflexión, el descuido o conductas parecidas.

A la culpa si se refiere la sentencia recurrida, aún cuando a juicio de la Sala lo hizo identificando lo acontecido con el mero incumplimiento de las obligaciones contractuales, dejando aclarado que **"si la sociedad demandante experimentó perjuicios económicos en razón o como consecuencia de dicho incumplimiento, a ella le estaba vedado exigir compensación por tales daños y perjuicios en los términos del artículo 1009 del Código Civil, por cuanto también hubo incumplimiento de parte suya, ..."**

El artículo 988 del Código Civil indica que "la responsabilidad que procede de negligencia ... podrá moderarse por los tribunales, según los casos". Por lo tanto, si el Tribunal Superior estimó que la culpa o negligencia de la parte demandada fue compensada por el incumplimiento de la parte actora, no puede entenderse que la sentencia haya incurrido en violación alguna con respecto a la disposición que ha sido citada como infringida, sino que, por el contrario, lo que se ha dado es la correcta aplicación de dicha norma, ya que ésta le otorga a los tribunales la facultad de moderar los efectos de la negligencia, algo a lo que se ciñe la sentencia dictada por el Tribunal Superior, al valorar el mutuo incumplimiento de las obligaciones en que incurrieron las partes. El artículo 988 del Código Civil brinda la oportunidad par que el tribunal, de juzgarlo apropiado, aplique las nociones de justicia y de equidad en aquellos casos en que la conducta causante del daño se pueda calificar de culposa, atendiendo, por supuesto, a las circunstancias propias de cada caso particular.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995, por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que PROINVEST, S. A. le sigue a CHINA UNITED TRADING CORPORATION, S. A.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de CUATROCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.400.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHON BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada **MARÍA DELGADO** en su condición de apoderada judicial de la señora **ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE,** ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, de fecha 18 de diciembre de 1995, dentro del proceso sumario que le sigue CÉSAR AUGUSTO ACHON BALLESTEROS.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ambas partes aprovecharon como se observa de fojas 329 a 333 (opositor) y de fojas 335 a 337 (recurrente).

Procede la Sala a decidir la admisibilidad del recurso, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 1165 y concordantes del Código Procesal, es decir:

> "ARTÍCULO 1165. Concluido el término de fijación de lista, la Corte decidirá si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:
>
> 1. Si la resolución objeto del recurso es de aquella contra las cuales lo concede la ley;
>
> 2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;
>
> 3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,
>
> 4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley."

Luego del examen de rigor, se ha podido verificar que el presente recurso de casación cumple con los presupuestos previamente transcritos.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación presentado por ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE, dentro del proceso sumario que le sigue CÉSAR AUGUSTO ACHON BALLESTEROS.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE) RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD E INEXISTENCIA DEL TÍTULO PARA DEMANDAR EJECUTIVAMENTE, PROPUESTO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR VICENTE ARCHIBOLD BLAKE CONTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte declaró admisible la primera causal del recurso extraordinario de casación en el fondo interpuesto por el apoderado especial del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE), licenciado RAMIRO GUERRA, contra el auto de 18 de julio de 1995 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial, por medio del cual se confirmó la resolución de 31 de mayo de 1994 dictada por el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, que decidió

la excepción de falta de idoneidad e inexistencia del título para demandar ejecutivamente, dentro del proceso ejecutivo promovido por VICENTE ARCHIBOLD BLAKE contra el SITIRHE, con el objeto de hacer efectivo el pago de unos honorarios profesionales.

Consta en autos que se encuentran agotados los trámites y debe la Sala entrar a conocer lo pretendido a través de este recurso extraordinario, para luego decidir lo que conforme a derecho corresponda. Antes, se hacen las siguientes consideraciones:

La única causal de fondo admitida por la Sala es la que se expresa como "infracción de normas sustantivas de Derecho en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo ...".

Cinco son los motivos en que se funda la causal, atribuyéndole, en síntesis, a la resolución dictada por el Tribunal Superior los cargos de haber resuelto el incidente o excepción de falta de idoneidad e inexistencia del título, propuesto por el ejecutado, sin tomar en cuenta que la parte demandada es una persona jurídica de carácter privado; ignorando que esta clase de organizaciones sociales (los sindicatos) se rigen, según lo dispone nuestro ordenamiento jurídico, por el Código de Trabajo, particularizando que constituye una función privativa de la Asamblea General de los sindicatos la de "autorizar las inversiones y erogaciones mayores de mil balboas a menos que los estatutos señalen una suma inferior". Finalmente, se le censura al fallo proferido haber soslayado, a la hora de resolver la excepción, lo que sobre la materia establecen los estatutos del sindicato, en donde se consigna que aquellas erogaciones de la organización sindical que sobrepasen los cinco mil balboas deben ser autorizadas por la Asamblea General de trabajadores y que aquellos contratos de los cuales sea parte el sindicato deben ser previamente ratificados por la mencionada Asamblea.

Como normas infringidas el recurrente denuncia las que se transcriben a continuación:

Artículo 69 del Código Civil:

> "La capacidad Civil de las Asociaciones de que tratan los incisos 5 y 6 del artículo 64, se regula por sus estatutos, siempre que hayan sido aprobados por el poder Ejecutivo".

Sostiene el casacionista que esta disposición fue infringida por el fallo impugnado en concepto de violación directa por omisión, cuando se dejó de tomar en cuenta que la norma en cuestión, de manera muy clara, señala que la capacidad civil de las asociaciones de carácter o de interés privado se rige por lo que sobre la materia se establece en sus estatutos. Dentro de ese marco, si los estatutos del sindicato señalan que las erogaciones que sobrepasen los cinco mil balboas deben ser autorizadas por la Asamblea General, ello significa que el contrato de servicios profesionales celebrado entre el Secretario General del Sindicato, señor ISAAC RODRÍGUEZ, con el abogado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, mediante el cual se fijó para éste, en concepto de honorarios, la cantidad de sesenta mil balboas, al celebrarse sin cumplir con el mencionado requisito, no puede considerarse como fuente de obligaciones para la organización sindical, realidad jurídica que el fallo impugnado se negó a reconocer.

En segundo lugar se acusa a la resolución del Tribunal Superior de violar el ordinal 10 del artículo 362 del Código de Trabajo cuyos términos son los siguientes:

> "Artículo 362: "La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización social. Son funciones privativas de ellas las siguientes:
>
> 10. Autorizar las inversiones y erogaciones mayores de B/.1,000.00 (Mil balboas, a menos que los estatutos señalen una suma inferior".

Como el Secretario General del Sindicato, señor ISAAC RODRÍGUEZ, nunca

contó con la autorización de la Asamblea General de la organización para celebrar el contrato de servicios profesionales con el abogado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, el fallo, al pasar por alto el incumplimiento de ese requisito, violó las restricciones y señalamientos contenidos en la disposición citada.

Se dice violado, por último, el artículo 1112 del Código Civil cuyo tenor es el siguiente:

> "Artículo 1112. No hay contrato sino cuando concurran los requisitos siguientes:
>
> 1. Consentimiento de los contratantes;
>
> 2. Objeto cierto que sea materia del contrato;
>
> 3. Causa de la obligación que se establezca.

Para el recurrente, como una consecuencia de no haberse dado la autorización por la Asamblea General del Sindicato para que el contrato se celebrase, éste carece de acuerdo de voluntades, uno de los elementos esenciales para su perfeccionamiento, pues ese acuerdo nunca llegó a producirse. La resolución de segunda instancia desconoció el contenido de la norma sustantiva recogida en el artículo 1112 del Código Civil, de allí que la violó directamente por omisión.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Se impone la necesidad de confrontar los cargos y denuncias que el recurrente formula contra el contenido de la resolución dictada por el Tribunal Superior, ante todo en relación con los aspectos y materias en donde la controversia está focalizada. Por esta razón es prudente transcribir aquellas partes del fallo en donde el Tribunal Superior elabora los argumentos que rebaten la postura adoptada por el excepcionante ejecutado, ahora constituido en recurrente en casación. El Tribunal Superior dejó precisado lo siguiente:

> "Observa el Tribunal que el recurrente ha manifestado en repetidas ocasiones que el Secretario General del Sindicato carecía de facultades para contratar por si solo y así obligar al Sindicato hasta la suma de B/.60,000.00.
>
> Lamenta el Tribunal que la única objeción que la parte demandada hace al Título ejecutivo, sea la relacionada con las facultades del Secretario General del sindicato demandado.
>
> Sabido es que dichas agrupaciones se instituyen en defensa de sus respectivos intereses, e inoponibles a terceros.
>
> La falta de capacidad del mencionado secretario para firmar el contrato por servicios proporcionales con el demandante no desvirtúa el valor del título con relación a terceros.
>
> Para los efectos de la demanda ejecutiva, no resulta ésta una excepción oponible al demandante; y siendo que es éste el único reparo que se le hace al título, no resulta suficiente para desvirtuarlo como tal.
>
> Ahora bien, independientemente de las peculiaridades que le dan forma a la relación contractual entre las partes, la presente excepción pretende enervar la eficacia del contrato, es decir, califica de inexistente el documento que presta mérito ejecutivo y que deviene en la piedra angular del proceso ejecutivo que ahora nos ocupa.
>
> En tal sentido, considera esta Superioridad que el documento presentado por el ejecutante reúne los requisitos establecidos por el numeral 2° del artículo 1640 del Código Judicial, según el cual

la obligación que resulta del documento presentado debe ser "clara y de plazo cumplido, de pagar una cantidad líquida o liquidable o de entregar, hacer o dejar de hacer una cosa determinada".

Observa el Tribunal que el documento presentado reúne las cualidades establecidas en el artículo citado toda vez que la suma pactada, B/60,000.00, debía ser pagada antes del mes de marzo de 1991, lo que indica que al momento de presentada la demanda, la obligación era clara y de plazo cumplido.

Por otro lado, resulta importante destacar que el acuerdo entre el Sindicato y el demandante, fue firmado por el Secretario General del Sindicato que era la persona sobre la cual reposaba la representación legal del mismo, o sea, tenía la capacidad para firmar dicho contrato.

Esta Superioridad considera que el excepcionista no ha logrado acreditar la falta de idoneidad del título, por lo que coincide con la opinión vertida por el Juzgador de primera instancia."

POSICIÓN DE LA CORTE

En un sentido muy amplio y para proporcionarle a la parte demandada un auténtico ejercicio del derecho a la defensa, así como el goce de sus garantías procesales, también en el juicio ejecutivo se pueden hacer valer las excepciones que, en determinadas circunstancias, se encaminan a desvirtuar o enervar las pretensiones de la parte actora. Es probable que sea en el terreno del juicio ejecutivo en donde el ejercicio de la capacidad de excepcionar deba observarse con mayor cuidado y atención porque, como se sabe, en esta clase de procesos el horizonte de la defensa parece convertirse en más estrecho y limitado. Nuestro Código de Procedimiento, en materia del juicio ejecutivo, como bien lo tiene señalado el profesor JORGE ISAAC IGLESIAS en su obra **Defensas y Excepciones en el Proceso Civil Panameño**, se ubica entre las legislaciones que admiten la oposición del ejecutado a base de la introducción en el proceso de una fase de conocimiento moderada, sin que parezca admisible la concepción limitativa del derecho a proponer excepciones en los procesos ejecutivos que son de competencia de nuestros tribunales de justicia.

Desde esa perspectiva, a pesar de que el casacionista interpuso un incidente mediante el cual le formula objeciones al título que sirvió como recaudo ejecutivo en este juicio denunciándolo como "inexistente" y por "falta de idoneidad", de la lectura que se haga del recurso interpuesto en casación y de los antecedentes del caso se desprende que la intención del impugnante, más que referida al **título** -en cuanto a su existencia o a su falta de idoneidad- lo que persigue es demostrar, con el uso de una excepción, que la obligación cuyo cumplimiento se demanda, o sea el contrato plasmado en el título que se presentó como recaudo ejecutivo, no existe, es decir, carece de validez, porque como indica el artículo 1112 del Código Civil (una de las normas cuya violación se denuncia en este recurso) no hay contrato sino cuando concurra, como uno de sus requisitos, el consentimiento de las partes. No hay que olvidarse que el artículo 469 del Código Judicial consagra el principio general que le confiere al juez la facultad de acceder a lo pedido, al margen de cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de las excepciones, si de los hechos invocados y la prueba practicada se infiere cual ha sido la verdadera intención de la parte que las haya presentado.

Esa inexistencia de la obligación fue, en opinión de la Sala, mal expresada en ocasión de proponerse la excepción y también a la hora de interponerse el presente recurso extraordinario, pero queda claro que la defensa técnica del demandado siempre ha estado refiriéndose a la ausencia en el contrato de uno de los requisitos básicos y esenciales de su existencia y validez.

El vicio que se atribuye al contrato consiste en que fue otorgado sin que mediara el consentimiento de una de las partes, hecho que conduce a que el acto deba considerarse como nulo. A propósito de la nulidad de la obligación en sí

misma considerada, el profesor JORGE FÁBREGA en su obra **El Proceso Ejecutivo**, admite que, si la nulidad es absoluta, bien pudiera usarse como excepción en los juicios ejecutivos sin ninguna clase de objeciones. A esa opinión, que no se refiere a las nulidades relativas, sobre las que guarda silencio, le añade la Sala el criterio de que tampoco encuentra objeciones, al menos de carácter procesal, para que las invalidaciones relativas dejen de ser tomadas en cuenta cuando se esgriman en calidad de excepción.

La nulidad de las obligaciones, una vez sea reconocida y haya sido declarada así por el Tribunal, como resultado de algún vicio dañino para la esencia del acto jurídico, le impide al convenio generar los derechos, las obligaciones y los efectos que se producirían en caso de que la irregularidad no hubiese existido. Son esas las consecuencias jurídicas que se derivan, no sólo de lo establecido en el artículo 1112 del Código Civil, sino, además, de un conjunto de disposiciones pertenecientes a dicho cuerpo legal que complementan la normativa que regula todo lo concerniente a la existencia, validez y nulidad de los contratos. En efecto, conforme al artículo 1141 del Código Civil, el contrato será nulo de nulidad absoluta cuando falte algunas de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. De acuerdo con el artículo 1142 la nulidad será relativa cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. Por su parte, el artículo 1154 de ese cuerpo legal indica que la nulidad, ya sea absoluta o relativa, puede oponerse siempre como excepción. El artículo 1129 del Código Civil prescribe que los contratos serán obligatorios siempre que en ellos concurran las condiciones para su validez.

La Sala está convencida de que el casacionista, denominando a la excepción que interpuso como de "falta de idoneidad e inexistencia del título para demandar ejecutivamente", en la práctica lo que utilizó fue una excepción de nulidad. No es el título, en sí mismo considerado desde un punto de vista formal, lo que ha sido atacado con el uso de la excepción empleada. Lo que el casacionista expresa en su recurso (manteniendo esa posición de manera consistente desde el principio del proceso) es que el contrato de servicios profesionales celebrado, o más bien firmado, por el Secretario General del SITIRHE, señor ISAAC RODRÍGUEZ, por una parte, y el licenciado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, adolece de vicios del consentimiento que lo tornan ineficaz para generar y exigir las obligaciones demandadas, porque es un acto jurídicamente nulo. La nulidad, según el casacionista, reside en que, para su validez, por tratarse de una contratación en donde la cuantía sobrepasaba determinada suma de dinero, que necesitaba la autorización, o en su defecto, la ratificación de la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores, tal como lo exigen los estatutos de la organización social y expresas disposiciones del Código de Trabajo.

Lo sostenido por el recurrente acerca de los requisitos exigidos por las normas reguladoras de la materia se puede comprobar con la simple lectura del artículo 22, acápite g) de los estatutos del SITIRHE, visibles a fojas 9 del expediente. La norma del Código de Trabajo irrespetada es el artículo 362, núm. 10), que la censura cita como violada. A fojas 69 vuelta del expediente se puede apreciar el acuerdo o resolución adoptada por el sindicato en donde se decide no aprobar el negocio jurídico firmado por el señor ISAAC RODRÍGUEZ y el licenciado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE.

Mediante sentencia dictada el 13 de julio de 1981 la Corte Suprema de Justicia pronunciose sobre la venta un bien inmueble a través de un contrato otorgado por el Presidente de una sociedad anónima, sin contar con la correspondiente autorización de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva. La Corte externó los criterios que se transcriben a continuación:

> "El cargo prospera e incide en el fallo recurrido, ... el Primer Tribunal Superior, al estimar que no era necesaria la autorización ni de la Junta Directiva ni de la Junta de Accionistas para que el Presidente de la Sociedad Bangoe, S. A. comprometiera la venta futura de un bien inmueble de su propiedad, violó la norma contenida en el art. 1109 del Código Civil, por aplicación indebida, al condenar al cumplimiento de lo pactado, sin tomar en consideración que dicho cumplimiento no era posible debido a que la persona

> supuestamente obligada -la sociedad Bangoe, S. A. no había otorgado autorización en ese sentido a su Presidente.
>
> Ya se ha visto cómo y por qué no podía pasarse desapercibida y sí era necesaria la autorización o de la Junta Directiva o de la Junta de Accionistas al Presidente de la Sociedad demandada en el contrato celebrado entre las partes el día 30 de mayo de 1977. Se haya, por lo tanto, que el motivo justifica la causal.
>
> Si los accionistas no otorgaran (sic) su consentimiento para la venta del inmueble, no tienen porqué sufrir los perjuicios económicos del ofrecimiento en venta que hizo el dignatario en una clara extralimitación de sus facultades.
>
> Resulta esto injusto para Inversiones Panamá Florida, S. A.? No porque ella debe cargar con el error de no exigir al Presidente de Bangoe, S. A., la autorización de los accionistas para la venta de la finca. Los accionistas de Bangoe, S. A. no han cometido ningún error jurídico por el cual deban responder". (Rep. Jur. julio, 1981 -pág. 38).

No encuentra la Sala razones que la induzcan a modificar los criterios y las consideraciones en que se basó la Corte para proferir el fallo que ha sido citado. En consecuencia, estima la Sala que los cargos endilgados a la sentencia de segunda instancia por la censura deben prosperar, ya que la misma incurrió en violación directa de los artículos 69 y 1112 del Código Civil, al igual que infringió el artículo 362, numeral 10 del Código de Trabajo, incidiendo por esas causas sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada mediante este recurso.

En mérito de la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la resolución de 18 de julio de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior, REVOCA la sentencia de primera instancia, de fecha 31 de mayo de 1994 proferida por el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil; y, en su lugar FALLA: DECLARA PROBADA la Excepción de Nulidad de la Obligación y en consecuencia ABSUELVE al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (SITIRHE) de los cargos que en su contra ha formulada el licenciado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, dentro del proceso ejecutivo que le sigue, con base a la excepción que a su favor ha sido reconocida.

Sin condena en costas.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VALENTINA BAULE MEDINA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE ANA MAGDALENA ÁBREGO DE CALLEJAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso sumario que **ANA MAGDALENA ÁBREGO DE CALLEJAS** le sigue a **VALENTINA BAULE**, la firma forense SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, como apoderada de la parte demandada ha interpuesto Recurso de Casación (en la forma) contra el Auto de 25 de julio de 1995, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que sólo aprovechó la firma representante del recurrente (fs. 98-99).

La Sala procede al examen del negocio en atención a los requisitos descritos por el artículo 1165 y conducentes del Código Judicial. Veamos en primer lugar si la resolución objeto de este recurso de casación es de aquellas contra las cuales lo concede la ley (art. 1148 y 1149 ibídem).

La resolución contra la cual se pretende el recurso de casación se encuentra de fojas 75 a 76 de este expediente y resolvió confirmar el auto N° 226 de 17 de febrero de 1993 dictado por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial (fs. 40) que resuelve ORDENAR a la demandada (VALENTINA BAULE MEDINA) vencida en este proceso sumario, que en el término de seis (6) días extienda a favor de la parte demandante escritura pública de venta, conforme al artículo 1029 del Código Judicial.

Aunque el Tribunal Superior confirmó dicho pronunciamiento del a-quo cuando resolvió el recurso de apelación, no entró al fondo del negocio por considerar que ese auto no era susceptible de apelación "ya que a tenor de lo dispuesto por los artículos 1021, 1024 y 1029 del Código Judicial, la parte condenada sólo podrá oponer la alegación de que la resolución ha sido invalidada o cumplida".

En efecto, como señala el Tribunal Superior, el auto que dictó el Juzgado no está entre los que enumera el artículo 1116 como apelables. Es decir, que el mismo ha sido dictado dentro de un proceso sumario después que terminó, mediante sentencia definitiva (N° 176 de 2 de septiembre de 1992), la cual fue notificada (21 de septiembre de 1992), quedando debidamente ejecutoriada (art. 982 del C. J.).

En otras palabras, este auto no es de aquellos que ponen fin a la ejecución de sentencia (ord. 5, art. 1149 C. J.), puesto que la medida que conlleva es meramente preparatoria. Ello es así cuando se trata del supuesto contemplado en el artículo 1029 del Código Judicial, o sea que, cuando se haya ordenado la enajenación o el traspaso de un bien inmueble o mueble susceptible de inscripción o la constitución de un gravamen cualquiera sobre bienes de esta naturaleza, quien ejecuta el acto, directamente, es el juez (firma la escritura junto con el secretario), si la persona obligada no lo hace, dentro del término de seis días que señala la norma.

Por otra parte, el recurso de casación indica como disposición violada el artículo 1149, ordinal 5°, lo que resulta injustificado de manera absoluta. El Tribunal Superior no pudo haber violado el artículo 1149, ordinal 5, porque, al resolver la apelación, no le competía la aplicación de esta norma, como una cuestión de carácter procesal. Mal se puede, entonces, pretender impugnar el artículo 1149, ordinal 5 en casación.

Por último, la causal, omisión de un trámite considerado esencial por la ley, no es congruente con los motivos, que se refieren a que el Tribunal Superior estimó que la resolución sometida a su competencia, en apelación, no era apelable. Se trataría, de acuerdo con esto, de la causal que enuncia el artículo 1155, ordinal 6° del Código Judicial: haberse abstenido el juez de conocer asunto de su competencia.

La circunstancia previamente aludida, de que el auto contra el cual se propuso el recurso de casación no es el que describe el numeral 5 del artículo 1149 del Código Judicial, en adición a las otras deficiencias expresadas, es suficiente razón para no acoger el presente recurso.

En consecuencia la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación dentro del proceso sumario que ANA MAGDALENA ÁBREGO DE CALLEJAS le sigue a VALENTINA BAULE.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA NACIÓN Y HARMODIO BARRÍA GRIMALDO O FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE URYL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso civil ordinario acumulado y promovido por URYL, S. A. contra HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO, la parte demandada promovió recurso de casación, el que fue admitido solamente en lo que respecta a la segunda causal, infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba.

La Sala estima oportuna la descripción breve de los antecedentes del proceso en mención, a lo que se procede.

SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES

La sociedad URYL, S. A., mediante apoderado judicial, promovió proceso ordinario contra HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRIL contra LA NACIÓN y FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO, ante el JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, procediendo este tribunal a acumular ambos procesos y se tramitaron bajo una misma cuerda.

La finalidad del proceso incoado consistió en que el tribunal hiciera las siguientes declaraciones:

> "PRIMERO: Que el predio de 33 has. con 9.099.93 mts. cuadrados que la Dirección Nacional de Reforma Agraria adjudicó definitivamente a Florencio Harmodio Barría Grimaldo o Harmodio Barría Grimaldo, mediante la Resolución N° D. N. 4-0173 de 17 de febrero de 1978, que al registrarse constituyó la Finca #4386, inscrita al folio 32 del tomo 179R. A., de la Sección de la propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, a nombre del mismo Barría Grimaldo, no era tierra estatal adjudicable sino que era y es parte de la Finca #1143, inscrita al folio 104, tomo 119, de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, de propiedad de URYL, S. A.
>
> SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, carece de valor legal y no surte efecto alguno contra mi representada, la Resolución N° D. N. 4-0173 de 17 de febrero de 1978 mediante la cual la Dirección Nacional de la Reforma Agraria adjudicó a título oneroso a Florencio Harmodio Barría Grimaldo o Harmodio Barría Grimaldo, un predio de 33 has. con 9.099.93 mts. cuadrados, situado en Pedregal, corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.
>
> TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Registro Público que cancele la inscripción del título expedido a favor de Florencio Harmodio Barría Grimaldo o Harmodio Barría Grimaldo, sobre la Finca N° 4386, inscrita al folio 32 del tomo 179R. A. de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí".

La sentencia de primera instancia N° 135 de 27 de septiembre de 1993, dictada por el Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí "DENIEGA la pretensión del

actor, existente en la demanda propuesta por URYL, S. A., contra HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO, y en la demanda propuesta por URYL, S. A. contra HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO y el Estado, y en consecuencia, NO ACCEDE a hacer las declaraciones pedidas en dichas demandas, por el actor".

La resolución antes citada fue apelada tanto por la parte demandante como por la demandada. A tal efecto, el tribunal de primera instancia mediante Auto N° 1133 de 19 de octubre de 1993, REFORMA la providencia de 5 11 de octubre de 1993, por el cual se concede la apelación propuesta por el apoderado judicial de URYL, S. A. y NO SE CONCEDE la apelación interpuesta por el apoderado judicial de HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO.

El demandante anunció y aportó pruebas de segunda instancia que fueron admitidas mediante Auto Civil de 31 de diciembre de 1993, por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL (fs. 407-410).

El tribunal ad-quem, REVOCÓ la sentencia de primera instancia y es contra ésta última resolución que, la parte demandada, señor HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA, ha presentado el recurso de casación, en el fondo, el cual a continuación se procede a examinar.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación, como ha quedado expresado, es en el fondo, infracción de normas sustantivas en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba.

La citada causal, como es sabido, procede cuando una prueba, allegada validamente al proceso, al momento de valorarla se produce una infracción a las normas que gobiernan la valoración de la prueba. Como modalidades de esta infracción, se señala que esta causal se produce cuando un medio probatorio determinado por parte del juzgador, concediéndole un valor probatorio que la ley no reconoce; cuando se le reconoce valor probatorio a un elemento que no reúne los requisitos legales; cuando se le niega valor probatorio; por el cercenamiento o suposición del medio probatorio; en fin, por desatender las normas sobre valoración probatoria, o por considerar una prueba que carece de los requisitos legales para que pueda ser considerada como una prueba apta.

El expositor colombiano HUMBERTO MURCIA BALLÉN, en su conocida monografía sobre casación civil, al analizar esta causal señala:

> "Al contrario de lo que ocurre en el hecho, en el yerro que aquí analizamos incurre el sentenciador en el momento de la contemplación jurídica de la prueba, es decir, cuando luego de darla por existente materialmente en el proceso, pasa a ponderarla o a sopesarla en la balanza de la ley, y en esta actividad interpreta desacertadamente las normas legales regulativas de su valoración. De ahí que la doctrina hable de "vicio de valoración probatoria".
>
> Es, pues, al evaluar (de acuerdo con el sistema legal imperante) la prueba existente, cuando puede darse el yerro de valoración. Y si bien en nuestro país se ha cambiado el sistema de la tarifa legal por el de la persuasión racional, no por ello puede decirse que ha desaparecido la posibilidad del error de derecho en la apreciación de pruebas, puesto que en tal falencia cae el fallador no sólo cuando le niega a un medio el valor que la ley le otorga, o le atribuye el que esta le niega, sino también y, fundamentalmente, cuando malinterpreta los textos legales que regulan la admisibilidad, pertinencia y eficacia de los medios de demostración".
>
> (Recurso de Casación Civil, Humberto Murcia Ballen, Tercera Edición, Bogotá-Colombia, 1983, pág. 356).

Por otra parte, destaca la Sala que el recurso de casación es un recurso

extraordinario mediante el cual se discute la legalidad de la sentencia de segunda instancia, entre otros supuestos; es un enjuiciamiento contra el fallo, por razón de error de enjuiciamiento o de procedimiento. En el caso que nos ocupa, la causal invocada es en el fondo, es decir, por error de enjuiciamiento o iudicando, produciéndose una violación sobre la valoración de la prueba. La sentencia impugnada, señaló que el juez a-quo valoró adecuadamente las pruebas en el proceso hasta ese momento; pero, como quiera que allí, en la segunda instancia, se produjeron nuevas pruebas, fueron esas pruebas las que condujeron al tribunal ad-quem a revocar la decisión del a-quo, y, en lugar de confirmar la decisión del a-quo, desestimatoria de las pretensiones de la parte demandante, declaró, previa revocatoria del fallo de primera instancia, lo siguiente:

> "**PRIMERO:** Que el predio de 33 has. con 9.099.93 mts. cuadrados que la Dirección Nacional de Reforma Agraria adjudicó definitivamente a Harmodio Barría Grimaldo o Florencio Harmodio Barría Grimaldo, mediante la resolución N° D. N.-4-0173 de 17 de febrero de 1978, que al registrarse constituyó la Finca N° 4686, inscrita al Folio 32 del Tomo 179 R. A., de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, a nombre del mismo Barría Grimaldo no era tierra estatal adjudicable sino que era y es parte de la finca N° 1143, inscrita al Folio 104, tomo 119, de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, de propiedad de URYL, S. A.
>
> **SEGUNDO:** Que como consecuencia de la anterior declaración, carece de valor legal y no surte efecto alguno contra URYL, S. A., la resolución N° D. N. 4-0173 de 17 de febrero de 1978, mediante la cual la Dirección Nacional de la Reforma Agraria adjudicó a título oneroso a Harmodio Barría Grimaldo o Florencio Harmodio Barría Grimaldo, un predio de 33 has. con 9.099.93 mts. cuadrados, situado en Pedregal, Corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.
>
> **TERCERO:** Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Registro Público que cancele la inscripción del título expedido a favor de Harmodio Barría Grimaldo o Florencio Harmodio Barría Grimaldo sobre la Finca N° 4386, inscrita al Folio 32 del Tomo 179R. A. de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí".

Es evidente, por lo tanto, que el yerro jurídico se ubica en las pruebas aportadas en la segunda instancia. Por dicha razón, es a esas pruebas a las que debe analizarse su conformidad con el ordenamiento jurídico y, específicamente, si la valoración que le condujo a la decisión ya indicada, se hizo de conformidad con las reglas jurídicas que la gobiernan. Dichas pruebas consisten, en lo medular, en dos peritajes, uno sobre planos allegados al proceso por la parte demandada, y otro sobre una inspección ocular a la finca.

Dichas pruebas fueron traídas al proceso en la fase de la segunda instancia, y fueron declaradas admisibles por el Tribunal Superior. Con respecto a su valoración, el Tribunal de segunda instancia sostuvo que "..., sin embargo la práctica del peritaje y de la inspección judicial logran acreditar que el predio que forma la finca N° 4386, se trata del mismo terreno que aparece como la finca N° 1143 y que es de propiedad de Uryl, S. A." (foja 561).

Y agrega:

> "En consecuencia, esta colegiatura es de la opinión que las pruebas aportadas en esta instancia por el recurrente dentro del presente proceso consiguen modificar la resolución objeto de apelación, toda vez que en la primera instancia se negaron las pretensiones de la parte demandante porque el juez de la causa falló valorando adecuadamente y de acuerdo al material probatorio incorporado hasta ese momento en autos, razón por la cual ha sido el dictamen rendido por los peritos, la inspección y la prueba testimonial lo que ha

variado la decisión que fuera proferida por el a-quo". (Pág. 561).

El recurrente expuso los motivos de la causal invocada, en los siguientes términos.

"PRIMERO: El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al dictar la sentencia impugnada y resolver que las 33 has. con 9.099.93 mts., que le adjudicó la Reforma Agraria a HARMODIO BARRIA, no eran tierras estatales sino que eran parte de la finca N° 1143, (pág. 562), incurrió en una errónea apreciación del caudal probatorio, ya que las constancias del Registro Público y de Catastro Fiscal, al igual que los distintos dictámentes periciales que aparecen en el expediente y los testimonios aducidos por URYL, S. A. son contradictorios, porque muestran que la finca 1143 tiene suficientes o áreas diferentes.

SEGUNDO: Al evaluar y apreciar las pruebas aportadas por el ACTOR, dicho Tribunal no se percató que en la práctica de la inspección ocular y en la prueba pericial ordenadas por él, este Tribunal omitió nombrar sus testigos o sus peritos que le mandaba la ley nombrar y al no hacerlo, dichas pruebas quedaron desvalorizadas (V. fojas 406 y ss), púas dependió para su evaluación de dictámenes de las partes, que llevaron a concluir distinto a la Reforma Agraria.

TERCERO: El Tribunal Superior incurrió en grave error de apreciación, porque al dictamen y testimonio del Agrimensor FRANCISCO GONZÁLEZ, el Tribunal les dio mucho valor, cuando ellos mismos se contradicen, y contradicen el área que indicaba el Registro Público púas (sic), según está oficina, la finca 1143 tenía 73 has., y según la Reforma Agraria sólo tenía 9 Hectáreas, mientras que el perito referido, al confeccionar el plano N° 45-4747, estableció que en "realidad" el área de dicha finca era de 43 Has. (V. foja 344 y 345).

CUARTO: El Tribunal Superior también incurrió en grave error, porque le dio valor pleno a los dictámenes rendidos por los peritos del actor, visibles a fojas 450 y 454, en donde ellos afirman que la finca N° 1143 realmente sólo tenía 53 héctareas, cuando el Registro Público y la parte actora, afirmaron que tenía 73 Hectáreas, y el perito FRANCISCO GONZÁLEZ afirmó que tenía 43 Has., mientras que para la Reforma Agraria tenía 9 Has.

QUINTO: El Tribunal Superior en la Sentencia impugnada también incurrió en grave error de apreciación de las pruebas, ya que en adición a las contradicciones expuestas en los motivos anteriores, no se percató que los dictámenes periciales omitieron indicarle al Tribunal Superior, donde fueron a parar o donde quedaron ubicadas las 106 héctareas que fueron segregadas de la finca N° 1143 a favor de la Nación.

SEXTO: El Tribunal Superior también incurrió en grave error al apreciar el caudal probatorio, al no apreciar adecuadamente que, en el Registro Público, según la certificación registral obrante a foja 285 del expediente, no aparecen descritos los rumbos y medidas de la finca N° 1143, sino que dicha finca sólo aparece descrita por sus linderos generales.

SÉPTIMO: No apreció adecuadamente el Tribunal Superior que los linderos que le mostró el Registro Público no variaron practicamente ni con la segregación de las 106 (de las 179) hectáreas hecha a favor de la Nación que de hecho cambiaron notablemente sus linderos.

OCTAVO: Al apreciar el referido caudal probatorio el Tribunal Superior incurrió en grave error de apreciación, ya que las constancias registrales le mostraban un área distinta a la que cada perito le señaló al Tribunal.

NOVENO: El Tribunal Superior erró al apreciar el valor del plano N° 45-4747, que sirvió de base a la Reforma Agraria para adjudicar a HARMODIO BARRÍA 33 hectáreas y al cual la Reforma Agraria le excluyó 9 hectáreas del total originalmente calculado por el perito FRANCISCO GONZÁLEZ, porque según determinó la Reforma Agraria, esas 9 hectáreas estaban en la parte Norte de dichas 33 hectáreas, al determinarse que pertenecían a la finca N° 1143 y no eran terrenos nacionales.

DÉCIMO: El Tribunal Superior no apreció adecuadamente que, según el Registro Público y según todos los dictámenes obrantes en el proceso, los linderos Sur y Este de la finca 1143 aparecen definidos como esteros y manglares, y que ellos la rodean y que las 106 hectáreas que fueron segregadas de dicha finca a favor de La Nación y que por ello se constituyeron en linderos de ella, también se convirtieron en tierras nacionales, y que nunca se levantaron planos de segregación. (V. foja 285).

UNDÉCIMO: El Tribunal Superior no valoró adecuadamente, la conducta procesal y extraprocesal de URYL, S. A. quien aportó el contrato obrante a foja 239 según el cual INMOBILIARIA ROCA, S. A. se había comprometido a vender a HARMODIO BARRÍA, 73 hectáreas que según dicha sociedad tenía la finca N° 1143, y que HARMODIO BARRÍA tuvo que demandar a aquella, porque no aparecían realmente ese número de hectáreas, a pesar de lo cual URYL, S. A. aceptó comprar esas supuestas 73 hectáreas, desconociendo el plano N° 45-4747 ampliamente conocido en el juicio y que sólo mostraba que dicha finca tenía 43 hectáreas.

DUODÉCIMO: Entre las pruebas erróneamente apreciadas por el Tribunal Superior y que le llevó a dictar la sentencia impugnada, se encuentra la fotocopia del Plano Provisional Sin Número, que aportaron los peritos de la Actora URYL, S. A., al cual la sentencia impugnada no le desconoció valor alguno, a pesar de que a simple vista se aprecia que el mismo no aparece firmado por persona alguna, y a pesar que en él se aprecia que la leyenda de ese plano y el número de lote que le colocaron está superpuesto sobre el plano.

DECIMOTERCERO: El Tribunal Superior ante el cual se practicaron los dictámenes periciales de la inspección ocular, sólo instaló a los peritos de la parte actora, pero no participó durante la diligencia (V. fojas 442 y sig.), con lo cual no sólo violó la Ley sino que, además, se colocó en muy difícil posición para apreciar los dictámenes que se le aportaron, lo cual también contribuyó a que hiciera una errónea apreciación del caudal probatorio".

Por su parte, el Procurador General de la Nación, en la Vista N° 11, de 13 de mayo de 1996, en el traslado al recurso de casación admitido, se pronunció, con respecto a los motivos.

El representante del Ministerio Público advierte que en los motivos no se demuestra la ilicitud de la sentencia de 13 de febrero de 1995 impugnada, habida cuenta que no se estaba dilucidando un problema de superficie o linderos entre las fincas objeto de litigio, sino por el contrario, lo que señala la misma es que el predio de 33 hectáreas con 9.099.93 metros cuadrados que fuere adjudicado por Reforma Agraria a título oneroso a HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO, y que constituyó la Finca N° 4386 una vez realizado la inscripción en el Registro Público, no era esta tierra estatal adjudicable, dado que forma parte de la Finca N° 1143 de propiedad de URYL, S. A., por lo tanto, procede la invalidación del título que ostentaba BARRÍA GRIMALDO sobre la Finca N° 4386. Es criterio del señor Procurador y así lo comparte la Sala que en este caso le cabía al casacionista demostrar que su finca (4386) no formaba parte de la Finca N° 1143 antes comentada, por tanto, no tiene asidero legal señalar en esta etapa del proceso, que el tribunal ad-quem no valoró las pruebas aportadas que acreditaban, según el recurrente, la superficie en ellas descritas.

Por el contrario, estima el señor Procurador que de las pruebas aportadas de segunda instancia se desprende que la Finca N° 4386 inscrita al folio 32, tomo 179R. A. esté ubicada dentro de la Finca N° 1143 inscrita al folio 104, tomo 119 de la Sección de la Propiedad, lo que se comprueba con la declaración del señor FRANCISCO NICOLÁS GONZÁLEZ NIETO, quien señala que participó en la confección, tanto del plano obrantes a fojas 80, 161, 233 y 282 como de las hojas de trabajo visible a fojas 278 a 281 y que realizó dicho trabajo a solicitud del señor FLORENCIO HARMODIO BARRÍA GRIMALDO. En el informe pericial analizado por el representante del Ministerio Público y que fuese presentado por CECILIO CASTILLO y CARLOS OMAR MONTERO (fs. 451 a 454) se señala que el plano que reposa a foja 282 del expediente y en el cual se describe el terreno que INMOBILIARIA ROCA, S. A. le vende a HARMODIO BARRÍA y el plano 45-4747 (fs. 80, 161 y 233) que describe el terreno que el señor HARMODIO BARRÍA solicitó a la Reforma Agraria para su adjudicación a título oneroso, resultan ser el mismo predio, en virtud de que la forma del polígono, la superficie, los linderos rumbos y medidas son idénticos en ambos planos.

Por último, se analiza en la vista del señor Procurador de la Nación que la inspección ocular visible a fojas 459 a 471 se concluye que la Finca N° 4386 antes descrita está totalmente traslapada sobre la finca 1143 ya mencionada. Por tanto, la inspección ocular comentada sumada a la pericial y testimonial condujeron al Tribunal Superior a señalar que, el predio otorgado por Reforma Agraria al señor BARRÍA GRIMALDO no era propiedad estatal y por lo tanto, la resolución D. N. 4-0173 de 17 de febrero de 1978 emitida por esta institución carecía de validez.

La Sala concuerda con el señor Procurador General de la Nación, por cuanto el proceso que nos ocupa no tiene como objetivo, determinar la precisión de los linderos y medidas de ambas fincas, es decir, un proceso de deslinde de predios contiguos, sino un propósito mucho mas modesto y ajustado a las pretensiones de las partes: si la finca 4386 estaba dentro de la finca 1143. Los peritos, al determinar ese extremo, que era el propósito del peritaje, indicó de manera clara, tanto en el peritaje como en la inspección ocular, que existía un traslape entre ambas fincas, que afectaba la Finca N° 1143 por parte de la Finca N° 4368, ya que dicha finca se encontraba en el mismo sitio y dentro de los mismos linderos de la primera.

En el informe pericial, que fue objeto de entrega en diligencia de 14 de febrero de 1994, se expresa con toda claridad que los planos que fueron objeto del peritaje reflejan el hecho de que ambas fincas recaen sobre la misma, o sea que existe coincidencia de la misma finca, que es objeto de dos inscripciones registrales, la primera distinguida como Finca N° 1143, de propiedad de URYL, S. A., y la segunda, la Finca N° 4386, como concluyeron los peritos, en la pericia visible de foja 451 a la foja 454, que en "ambos planos están representando el mismo terreno, motivo del peritaje". Por su parte, el informe pericial dictado con motivo de la inspección judicial, visible de foja 459 a 471; al absolver la segunda pregunta, es decir, si la Finca N° 4386 es materialmente, en su totalidad, parte de la Finca N° 1143, se expresaron en los siguientes términos:

> "Sí: Es materialmente en su totalidad (99% aproximadamente) la finca 4386, tomo 179 R. A., folio 32, parte de la finca N° 1143; es decir la finca 4386 está totalmente traslapada sobre la finca N° 1143, tal como lo indica el plano original adjunto; donde se marca la finca 4386 rayada en rojo y la finca 1143 en negro. Como se puede ver en el plano antes dicho la finca 4383 está totalmente dentro de la finca 1143". (Pág. 469).

Conclusión que es idéntica a la arribada en el peritaje sobre los planos de las fincas en cuestión.

Conviene, para concluir, realizar un análisis de las disposiciones que el casacionista considera que han sido vulneradas por la sentencia objeto del presente recurso de casación.

El primer artículo que se estima violado es el 953, por el hecho de que el Tribunal no designó un perito dentro de la pericial propuesta, basado en la tesis

de que dicha norma contiene una obligación dirigida al Tribunal, que lo obliga a designar perito del Tribunal. No obstante, la dicción del segundo párrafo de dicho artículo refleja mas bien, el otorgamiento al Juzgador de una facultad, de una potestad, que puede ejercer, en la medida en que lo encuentre necesario, y en modo alguno una norma imperativa que vincule al tribunal a nombrar, necesariamente, su propio perito.

La segunda norma procesal violada por el Tribunal Superior es el artículo 954, el que debe ser interpretado en armonía con el artículo anterior, en el sentido de que la designación del perito por parte del Tribunal constituye una facultad que la Ley procesal le concede, dentro de la tendencia de una mayor participación del Juzgador en el curso del proceso,lo que constituye una limitación o restricción al principio dispositivo que se predica del proceso civil.

El artículo 967 también resulta vulnerado, en apreciación del recurrente. Con arreglo a las reglas de la sana crítica, el recurrente considera que la falta de uniformidad en el dictamen, se basa en la diferencia en cuanto a la superficie de la Finca N° 1143, el cual no fue tomado en cuenta al valorar la prueba pericial. No obstante, como ya se ha señalado, la finalidad del peritaje, de acuerdo a los términos en los cuales lo circunscribió el Tribunal, era determinar si la finca adjudicada al demandado se encontraba dentro de la finca del demandante, sobre cuyo aspecto los peritajes coincidieron. De la ponderación de la prueba, surge el uso de criterios de lógica, de racionalidad que es el criterio de valoración que es inherente a la prueba bajo examen, por lo que estima la Sala que la prueba pericial fue valorada correctamente por parte del tribunal a quem, siguiendo al efecto las reglas de la sana crítica.

Las reglas de la sala crítica, en apreciación del maestro COUTURE "... son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las experiencias del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba ... con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas".

Apreciadas con arreglo a esas reglas, el Tribunal tomó en consideración, fundamentalmente, la prueba pericial, sobre documentos y la que coadyuvó con el Tribunal en la inspección judicial sobre la Finca N° 1143, para arribar a la conclusión de que le asistía razón al demandante, quien alegaba que el globo objeto de la adjudicación a título oneroso por parte de la Reforma Agraria, no tuvo como objeto tierras nacionales, sino se encontraba dentro de una finca de propiedad privada, y por lo tanto, de libre disposición solo por su propietario, la sociedad URYL, S. A.

El recurrente estima, también como violadas, los artículos 109, 110 y 72 del Código Agrario, que se refieren, el primero, al procedimiento para la adjudicación de tierras nacionales bajo la administración de dicha dependencia estatal, el segundo la naturaleza de la Resolución de adjudicación, es decir, constituye el título de propiedad, y el tercero a las consecuencias de la expedición de la adjudicación en forma contraria a las disposiciones que regulan dichas adjudicaciones. Las normas que han sido mencionadas deben interpretarse en un sentido orgánico, la naturaleza del acto administrativo de adjudicación (título constitutivo de propiedad) con las consecuencias de la expedición del mencionado título en forma contraria a las normas que regulan dichas adjudicaciones (artículo 72). Pues bien, el artículo 72 consagra el procedimiento a que ha de acudir el propietario que se ha visto afectado en su derecho de propiedad por al acto de adjudicación, señalando, para estos efectos, que el afectado o el Ministerio Público, pueden obtener la anulación de ese título por los cauces del proceso civil ordinario.

Por las razones expuestas, la Sala considera que la sentencia impugnada no ha sido expedida con violación al ordenamiento jurídico y no puede, por lo tanto, sino abstenerse o negarse a casar la sentencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de febrero de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer

Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario propuesto por URYL, S. A. contra HARMODIO BARRÍA GRIMALDO o FLORENCIO HARMODIO GRIMALDO.

Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A TITULO QUE LE SIGUE A INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RODRIGO MIRANDA MORALES en su condición de apoderado judicial de ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 31 de agosto de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso de Oposición a Título que le sigue a INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO.

Cumplidas las reglas del reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Luego de realizar el examen de rigor del presente recurso de casación, la Sala considera que se cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código Procesal, es decir:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;
2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo:
3. El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,
4. La causal expresada es de las señaladas por la ley.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación presentado por ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ dentro del Proceso de Oposición a Título que le sigue a INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE HASSAN GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JUAN RAMÓN CASTAÑEDAS en su condición de apoderado judicial de JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de enero de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía instaurado por ESTHER MON DE GRIMALDO contra JORGE HASSAN GRIMALDO.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, instancia aprovechada solamente por la parte opositora, tal como consta en el escrito visible de fojas 186 a 192 del expediente.

Al confrontar el presente recurso de casación con los presupuestos que señala el artículo 1165 del Código Judicial, se debe concluir que no han sido cumplidos en su totalidad ya que presenta una deficiencia en el tercer apartado dedicado a la citación y explicación de las normas de derecho consideradas infringidas. Este defecto guarda relación con la causal invocada, que es la de infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de la error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, y consiste en haberse omitido la citación de las normas procesales sobre valoración de las pruebas, señalamiento que, en estos casos en que se invoca la aludida causal probatoria, es obligante, siempre antecediendo a las normas sustantivas, pues dicho yerro probatorio es el medio para demostrar la consecuente vulneración de tales normas materiales.

Aunado a lo expuesto, el recurrente debe corregir, lo concerniente a la explicación del concepto de la infracción de algunas disposiciones citadas en el recurso, pues el mismo debe ser desarrollado en forma **separada**, respecto a cada una de las normas citadas. Igualmente, el recurrente debe indicar en forma clara las normas sustantivas que estima vulneradas como consecuencia de la mala valoración de la prueba.

En atención a lo antes expuesto, esta Sala de la Corte concede al recurrente el término que establece el artículo 1166 ibídem para que corrija el recurso, en cuanto al defecto indicado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO contra la sentencia de segunda instancia, de fecha 12 de enero de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía instaurado contra JORGE HASSAN GRIMALDO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ORO CENTER GOLD CENTER, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ORO CENTER GOLD CENTER, S. A. CONTRA BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del Proceso Ordinario propuesto por **ORO CENTER GOLD CENTER, S. A.** contra **BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S. A.**, la firma forense Carrillo Brux y Asociados actuando como apoderados judiciales de la parte demandante ha interpuesto **Recurso de Casación** contra la Resolución de 13 de diciembre de 1995

dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista, alegando sobre su admisibilidad únicamente la parte opositora-demandada, según se observa de fojas 248 a 251.

Según se aprecia en este caso, la resolución impugnada es recurrible en casación y el recurso ha sido interpuesto en el término legal.

En cuanto a los presupuestos que establece el artículo 1160 del Código de Procedimiento Civil para admitir el recurso, la Sala considera, luego de examinar el escrito de formalización que corre de fojas 237 a 239, lo siguiente:

La causal invocada es la de "infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Si bien, ha sido determinada en los términos que prescribe el artículo 1154 del Código Judicial para las causales de fondo, al confrontarla con los motivos que se establecen como fundamento de la misma y la única norma que se cita como violada, resulta evidente la incongruencia entre estos apartados del recurso.

De los tres motivos que se expresan como fundamento de la causal, sólo del tercero se infiere un cargo contra la sentencia, el cual se hace consistir en lo siguiente:

> "**TERCERO:** Sin existir los elementos jurídicos que conforman los presupuestos de litis pendencia, que conforman la denominada excepción de pleito pendiente, la resolución recurrida al confirmar la sentencia de primer grado, indebidamente aplicó lo dispuesto en el artículo 663 del Código Judicial, lo cual sirvió de sustento jurídico único para rechazar la demanda ordinaria propuesta por ORO CENTER-GOLD CENTER, S. A. contra BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S. A."

La norma de derecho aludida en el motivo antes transcrito, preceptúa:

> "ARTÍCULO 663. Propuesta una demanda no podrá iniciarse un nuevo proceso entre las mismas partes, sobre la misma pretensión y los mismos hechos, cualquiera que sea la vía que se elija, mientras esté pendiente la primera.
>
> El juez ordenará de oficio o a petición de parte el rechazo de la segunda demanda, comprobada la existencia de la anterior y que en esta figuran las mismas partes y versa sobre la misma cosa y sobre los mismos hechos."

De lo expuesto se infiere que el cargo contra el fallo es el haber confirmado el rechazo de la demanda, sin que hubiesen concurrido las exigencias necesarias para ello, en este caso los presupuestos de la litis pendencia. Obviamente el fallo impugnado en casación es de las llamadas sentencias inhibitorias, pues no decide el fondo del negocio por razones procesales.

En estos casos lo procedente es invocar una de las causales de casación en la forma contenidas en el artículo 1155 del Código de Procedimiento Civil, que podrían ser para el caso específico las previstas en los numerales 6 ó 7, más no, una de las modalidades establecidas por el artículo 1154 para la casación en el fondo, que entraña o consiste en **la violación de normas sustantivas de derecho o normas de derecho material**, situación que evidentemente no se produce en este caso, puesto que la única norma citada es de carácter adjetivo o procesal, cuyo destinatario inmediato es el juez, pues alude al procedimiento que se debe seguir en un determinado caso.

Por tanto, la causal de fondo invocada no es cónsona con el error que se desprende de lo dicho en los otros apartados del recurso, el cual parece in procedendo o referente a la relación procesal, que es propio de la casación en

la forma. Ello hace al presente recurso de casación ininteligible, situación que impide su admisión.

Este criterio de no admitir este tipo de recursos lo ha mantenido la Corte en reiteradas ocasiones, señalando:

> "...
> El recurrente ha equivocado el recurso promovido, ya que de lo resuelto en la resolución de segunda instancia, que confirma la dictada por el Juez Primero del Circuito de Herrera, se deduce que éste se abstuvo de conocer de la demanda, por lo que ni siquiera se originó el proceso. En este caso, no cabe alegar causales de fondo, sino alegar la causal de forma correspondiente al numeral 6 del artículo 1155 del Código Judicial, la cual versa sobre: **"Por haberse abstenido el Juez de conocer asunto de su competencia"**. En tal situación, la Corte se ve impedida en conocer del recurso presentado.
> ...".
> (Sentencia de seis (6) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). MIGUEL PINTO GÓMEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN INTERPUESTO POR RAMONA QUINTERO SALAMÍN CONTRA ELENA PINTO QUINTERO).

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en la excepción de pleito pendiente presentada por la parte demandada dentro del proceso ordinario incoado por ORO CENTER GOLD CENTER, S. A. contra BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S. A.

Las obligantes costas se fijan en la suma de CIEN BALBOAS con 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ERNESTO CHARTER DU SAIRE Y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **MARCOS TULIO LONDOÑO A.** en su condición de apoderado legal de **JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO**, demandante en el proceso ordinario que le sigue a **ERNESTO CHARTER DU SAIRE y/o ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 10 de enero de 1996, proferida por el **Primer Tribunal Superior de Justicia.**

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran por escrito sobre la admisibilidad del recurso, presentando su escrito únicamente el recurrente.

Corresponde a la Sala determinar si el recurso se ajusta a los requerimientos señalados por el artículo 1165, en concordancia con el 1160 del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso ha sido interpuesto en tiempo; el escrito de

formalización contiene los apartados propios de este medio de impugnación, sin embargo el primero y el último, referentes a los motivos y a la citación de las normas de derecho, presentan deficiencias que deben ser enmendadas, a fin de que el recurso pueda ser admitido.

La primera deficiencia se observa en algunos motivos del recurso, como el primero y segundo, que no precisan el cargo de injuridicidad, por lo que no se puede saber qué es lo que plantean. En igual sentido se expresa el cuarto motivo, que además expresa un hecho que no se relaciona con la causal invocada (que el tribunal no hizo agregar al proceso una prueba documental).

La causal utilizada en el presente recurso de casación es la de infracción de normas sustantivas por error de derecho en la apreciación de la prueba. Por tanto los motivos deben ser congruentes con dicha causal y limitarse a la explicación en forma suficientemente clara y precisa del yerro probatorio imputado al fallo de segunda instancia y la concurrente violación del derecho sustantivo.

El otro defecto aludido, consiste en no haberse citado las normas de carácter sustantivo, necesarias, cuando se invoca una de las causales de fondo establecidas por el artículo 1154 del Código Judicial. En este caso se expresó la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y cuando se alude a una de las causales probatorias, la doctrina y la jurisprudencia han reiterado la exigencia de mencionar en primer lugar las normas referentes a las pruebas (sobre su existencia o sobre su valoración) para luego citar las imprescindibles normas contentivas del derecho sustantivo o material que se dice violado.

En este caso el recurrente no cita ninguna norma sustantiva sino que sólo hace referencia a normas adjetivas consagradas en el Código Judicial, por ello la causal expresada resulta incompleta y debe ser enmendada en ese sentido.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO contra la Sentencia de 10 de enero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que JOSÉ ARIEL PIERCE SERRANO le sigue a ERNESTO CHARTER DU SAIRE Y ALEYDIS ETHEL CHARTER SÁNCHEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A., Y PRODUCTORES ASOCIADOS DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de Casación Civil ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A., en el proceso ordinario que le sigue AGROPECUARIA COMERCIAL, S. A. a PORCINOCULTORES UNIDOS DE AZUERO, S. A. La corrección del recurso se efectuó en tiempo oportuno; por tal motivo se pasa a resolver la admisibilidad definitiva del mismo, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo

concede la ley.

El recurso se anunció y formalizó oportunamente por persona hábil.

El escrito por medio del cual se formalizó el recurso, reúne de manera general, los requisitos ordenados por el artículo 1160 y la causal invocada es la infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa de la misma, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, está consagrada en las causales de fondo que señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil.

Los motivos por los cuales se ordenó su corrección fueron subsanados debidamente por lo que se debe admitir dicho recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación instaurado por AGROPECUARIA COMERCIAL, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUSTINO ACEVEDO VÁSQUEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FáBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala Civil, mediante resolución fechada 29 de mayo de 1996, ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por el Licenciado JUSTINO ACEVEDO V., actuando en su propio nombre, dentro del proceso ordinario que le sigue a JOSÉ ALVAREZ PÉREZ.

En el informe secretarial, se deja constancia que la parte casacionista presentó su escrito de corrección en tiempo oportuno. Es tarea de la Sala pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello las exigencias contenidas en los artículos 1160, 1165 del Código de Procedimiento Civil.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley. Consta en el expediente que el recurso fue interpuesto oportunamente.

En cuanto a los requisitos ordenados por el artículo 1160, la Sala reitera que la causal está señalada tal como lo preceptúa el artículo 1154 del Código Judicial. Con respecto a los motivos, observa la Sala que el casacionista no cumplió con lo ordenado, ya que no aclara en que consistió la mala valoración de las pruebas por parte del Tribunal Superior. Esto significa que, no basta con señalar las fojas en que reposan las pruebas mal valoradas, como lo hace el recurrente, sino explicar de qué manera el tribunal incurrió en el supuesto error de derecho en cuanto a la valoración de las pruebas, cuya causal invoca.

Por último, observa la Sala que el casacionista enuncia las normas de derecho infringidas en forma colectiva, lo que no permite a la Sala de Casación conocer de qué manera el fallo impugnado violó tal disposición. En reiterados fallos esta Superioridad ha mantenido que las normas de derecho infringidas deben citarse separadamente con la debida explicación, tal como lo señala el numeral 3° del citado artículo 1160 que pauta los presupuestos que debe contener el

recurso de casación para su formalización.

Todo lo anteriormente indicado, es indicativo que no procede la admisibilidad del recurso en estudio, en virtud de que el recurrente no cumplió con lo ordenado por esta Sala.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por JUSTINO ACEVEDO.

Las obligantes costas, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAFAEL ANÍBAL ÁVILA FERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN A LA ADJUDICACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO QUE LE SIGUE A AURELIO FERNÁNDEZ, ZAIDA F. BOTELLO Y ADOLFO FERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense FUENTES Y ASOCIADOS, apoderados especiales de RAFAEL ANÍBAL FERNÁNDEZ, ha presentado recurso de casación contra la resolución de siete (7) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que "REVOCA la sentencia de 13 de diciembre de 1994 dictada por el Juez Primero del Circuito de Coclé y ORDENA que se remita el siguiente proceso a la Reforma Agraria de la Provincia de Coclé para continuar con la tramitación de titulación N° 4-016-93 de 11 de enero de 1993 formulada por Aurelio Fernández y otros".

El presente recurso tiene su origen dentro del proceso ordinario de oposición a título de propiedad, promovido por el señor RAFAEL ANÍBAL FERNÁNDEZ contra AURELIO FERNÁNDEZ, ZAIDA F. DE BOTELLO y ADOLFO FERNÁNDEZ. El casacionista alegó dos (2) causales en el fondo. La primera de ella es: "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado". Como fundamento de la causal, presenta diez motivos en los cuales se refiere a la mala valoración de las pruebas, tanto las presentadas por el demandante, como la de los demandados.

En tal sentido, mantiene en el motivo tercero que el Tribunal le ha reconocido mérito probatorio al dictamen pericial del señor Oscar Ortega y una certificación del Registro Público sobre la Finca N° 523, al arribar a la conclusión que el lote solicitado por su representado es una continuación de la mencionada finca, en la que son propietarios los demandados.

En los motivos quinto y sexto manifiesta que la sentencia impugnada, no le reconoce el valor probatorio a los testimonios vertidos por los señores Nikemo Vergara, Encarnación Agrazal, quienes afirmaron que el señor RAFAEL ÁVILA ejerce la posesión por más de 15 años sobre el lote motivo de litigio. Adiciona que el señor Nikemo Vergara declaró que como Corregidor en el año 1987, dio permiso a RAFAEL ÁVILA para la ampliación de la cerca en el lote discutido "después de la inspección ocular que se hace antes de dar estos permisos". Además, manifiesta que el testigo Agrazal señaló que el terreno estaba cercado por todo alrededor.

En el motivo séptimo expresa que el fallo impugnado le restó valor probatorio al testimonio de SANTANDER NÚÑEZ CHEN, quien hizo la mensura del lote

motivo de litigio en el año 1988, y encontró el terreno arado para sembrar y cercado por todo su perímetro.

En cuanto a los planteamientos esbozados por el casacionista, la Sala observa que la sentencia presenta un panorama distinto al señalado por el recurrente. Si bien es cierto que el juzgador de segunda instancia estimó que, de acuerdo a los testimonios vertidos tanto por los testigos de la parte demandante como de la demandada, se determinó que ambas partes utilizan el terreno en litigio, es decir, que los demandados se dedican a la siembra de arroz, en una época específica del año, o sea, en la estación lluviosa y que ese mismo terreno es utilizado para el pastoreo de ganado por el señor ÁVILA, una vez terminada la cosecha. Ahora bien, la función del juzgador consiste en analizar, evaluar y valorar las pruebas que ambas partes aporten y prueben en el proceso, para así arribar a una conclusión, en base a estricto derecho.

Si analizamos la petición formulada por el demandante, señor RAFAEL ANÍBAL ÁVILA FERNÁNDEZ, ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, distinguida con el N° 4-1203-88, de 19 de diciembre de 1988, en la misma se solicita la adjudicación de una parcela de tierra estatal con una superficie aproximada de seis (6) hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: Norte: Carretera Interamericana La Vieja; Sur: Epifanio Fernández; Este: Maximino Fernández; y Oeste: Juan de Dios Ramos y Miguel Ramos, ésta resulta de más vieja data en comparación a la solicitud de título N° 4-016-93, de 11 de enero de 1993, realizada por los señores AURELIO FERNÁNDEZ Y OTROS, quienes a su vez solicitan la adjudicación de una parcela estatal con una superficie aproximada de dos (2) hectáreas y cuyos linderos son: Norte: Carretera a la C. I. A. y Aurelio Fernández y otros; Sur: Enrique Ramos, Este: Aurelio Fernández y otros y Oeste: Carretera a la C. I. A. Tal parece que se trata de dos parcelas o lotes diferentes, en cuanto a la cabida superficiaria e, inclusive, en el señalamiento de los linderos.

Con respecto a ello, vale la pena reproducir el peritaje efectuado por el perito de la parte demandante en este proceso, señor JUAN RAMÓN AROSEMENA PARDO y que se lee a foja 67 del expediente. Veamos:

> "En inspección realizada el 6 de julio de 1994 al terreno que el señor reclama como derecho posesorio, solicitado a la Reforma Agraria y refrendado con un plano que la parte actora exhibe para comprobar que la tierra aludida le pertenece por ser tierras nacionales.
>
> Sin embargo la contraparte alega lo contrario, aludiendo que en esta area (sic) existen aproximadamente dos hectareas (sic) y media y no seis hectareas (sic) más siete mil cuatrocientos catorce metros cuadrados con veinticinco centimetros (sic) cuadrados (6 HAS+7414.25 mts.2).
>
> Por tal razón soy de opinión que para decidir esta controversia en justicia se hace necesario efectuar un replanteo de la Finca constituida con plano N° 146 del 2 de septiembre de 1912. Además la existencia de la Finca N° 523 - Tomo 102 - Folio 72, de la Familia Fernández. Dicha verificación es la única forma de establecer la veracidad del terreno y así asegurar de que son nacionales o privadas, de tal manera que el señor Rafael A. Avila Fernández, luego de comprobado los hechos pueda disfrutar de los derechos que reclama, todo sustentado en hecho verídico de un replanteo de las fincas originales".

Por su parte, el perito designado por el Tribunal, señor OSCAR O. 0RTEGA, topógrafo de profesión, cuyo informe consta de fojas 96 a 98 del expediente, hace constar que el plano que consta a foja 14 del cuaderno de prueba de la parte demandada, encaja bien en el terreno medido, en cuanto a sus medidas y linderos. Este plano guarda relación con el aportado en la solicitud de título que formularon los demandados ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, sobre la cual el demandante, señor RAFAEL ANÍBAL ÁVILA FERNÁNDEZ formuló la oposición a título que es motivo de recurso de casación.

La sentencia impugnada también valoró el testimonio de los señores ENRIQUE RAMOS GUERRERO (fs. 86-87); CARLOS UREÑA (fs. 89-90); y MIGUEL ENRIQUE RAMOS ROJAS (fs. 93-94), quienes son colindantes del predio motivo de litigio, y concuerdan en que la parcela es trabajada por los demandados e, inclusive reconocen que el demandante aprovecha el período posterior a la cosecha del arroz para que paste el ganado de su propiedad. Del testimonio de los señores UREÑA y RAMOS ROJAS también se desprende que el primero mencionado le alquila a los señores FERNÁNDEZ terreno para el cultivo del arroz, y el señor MIGUEL ENRIQUE RAMOS ROJAS, manifiesta que tiene una sociedad con el señor AURELIO FERNÁNDEZ y siembran el arroz a medias. En tanto que, el señor ENRIQUE RAMOS GUERRERO declara que él arregló la cerca que colinda con AURELIO FERNÁNDEZ y éste se comprometió a pagarle la mitad.

Lo medular del presente negocio, es que los demandados han probado la posesión que han mantenido sobre el predio motivo de solicitud de título de tierras estatales, con el peritaje físico que se realizó sobre el inmueble, así como las testimoniales que constan en el expediente y a las cuales nos referimos con anterioridad.

Como consecuencia de ello, la violación a los artículos 906, 772, 967, 904, del Código Judicial y los artículos 431, 415, 423 y 432 del Código Civil, no se ha dado, por tanto, no prospera la causal alegada.

La segunda causal invocada es error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Esta causal está fundamentada en seis (6) motivos. En el primero de ellos, reitera el informe suscrito por el agrimensor SANTANDER NÚÑEZ CHEN, sobre la mensura realizada sobre un globo de terreno con una área de 6 hectáreas y 7414.25 metros cuadrados, dirigida a las oficinas de Reforma Agraria el 8 de diciembre de 1988 y que no fuera tomado en cuenta por el juzgador. La Sala considera que el referido informe forma parte de los requisitos exigidos por la Dirección de Reforma Agraria, al momento en que el interesado solicita tierras estatales para que le sean adjudicadas. Es obvio que con el referido informe no se prueba la posesión exigida por ley, pues, el mismo se concreta a establecer la superficie, medidas y linderos de la parcela que se pretende titular.

En el segundo motivo la Sala se ve impedida a reconocer qué prueba documental (documento público) desconoció el tribunal de la instancia, en virtud de que no se señala la misma. En el motivo tercero manifiesta que el tribunal desconoció la existencia de la prueba documental consistente en el permiso expedido por un funcionario competente, a favor de RAFAEL ÁVILA, para la ampliación de cerca sobre el lote objeto de litigio. El referido documento se encuentra a foja 41 del expediente, pero no se establece el lugar específico del lugar donde se realizarían las ampliaciones de cercas. Igual suerte corren los demás documentos que se mencionan en los motivos siguientes.

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, comparte el criterio vertido por el Tribunal Superior, al evaluar en conjunto las pruebas periciales y testimoniales aducidas por ambas partes, de conformidad con el artículo 906 del Código Judicial, en virtud de que el sentenciador otorgó mayor crédito a la del demandado. Considera también la referida sentencia que "los demandados ejercen una mejor posesión de las tierras nacionales, en el hecho de que las tierras solicitadas por el demandante (6 hectáreas) no encajan físicamente en el globo de terreno, es decir, todo parece indicar, según el propio informe del perito Arosemena Pardo que no hay certeza si las tierras son nacionales o privadas y da la casualidad que ese globo de terreno colinda por el lado norte con la finca 523 de propiedad de los demandados, quienes la utilizan".

Concluye esta Superioridad, que el cargo de error de hecho sobre la existencia de la prueba que la censura imputa a la sentencia recurrida no está justificada y, por tanto, no ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 7 de julio de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de oposición a título propuesto

por ANÍBAL ÁVILA FERNÁNDEZ contra AURELIO FERNÁNDEZ, ZAIDA F. DE BOTELLO y ADOLFO FERNÁNDEZ.

Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAÚL TAPIA Y CÍA., S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA INCOADA POR SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CONTRA ATLANTIC PACIFIC INSURANCE COMPANY OF PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Berríos y Berríos, apoderada judicial de la sociedad **RAÚL TAPIA Y CÍA., S. A.**, presentó recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de diciembre de 1995, que decidió en segunda instancia el incidente de reconocimiento de un crédito interpuesto por la recurrente en casación, dentro del proceso de disolución y liquidación forzosa propuesto por la **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS** contra **ATLANTIC PACIFIC INSURANCE COMPANY OF PANAMÁ, S. A.**

La Sala debe decidir si admite o no el recurso de casación presentado, tomando en consideración los requisitos exigidos por los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Se observa que la resolución impugnada es susceptible de casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

Consta en autos que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona idónea para ello.

En relación con el escrito del recurso, la Corte advierte que se trata de casación en el fondo, en la que se han invocado dos causales de las contempladas por el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento a cada una de ellas, han sido planteados correctamente y son congruentes con dichas causales. En ambos casos, las disposiciones legales que se consideran infringidas y la explicación de dichas infracciones, cumplen con las formalidades legales exigidas.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la firma forense Berríos y Berríos, en representación de RAÚL TAPIA Y CÍA., S. A.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORAZ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE HAKKA INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por **HAKKA INTERNATIONAL, S. A.** contra **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORAZ, S. A.**, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia que decidió el proceso en segunda instancia, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 27 de diciembre de 1995.

El recurso se encuentra pendiente de resolver sobre su admisibilidad, por lo que procede la Sala a decidirla.

Se trata de resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía y se observa que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona hábil.

El recurso es de casación en el fondo, donde se invocan dos causales que se deben examinar separadamente.

La primera causal consiste en infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida.

El recurrente fundamenta esta causal en seis motivos. El primero, se limita a indicar que la sentencia recurrida confirma la de primera instancia, negando las pretensiones de la parte demandada. Tanto el segundo como el quinto se refieren a situaciones de hecho y no de derecho, que guardan relación con una causal probatoria y no con la de violación directa. El tercer motivo hace una afirmación subjetiva, que no explica en qué consiste la infracción de la ley sustantiva que invoca. Por último, los motivos cuarto y sexto se mantienen en un nivel teórico que no corresponde a este apartado del recurso de casación, ya que no permite conocer en qué consiste la violación de las normas que se dicen infringidas directamente. Consecuentemente, deben ser corregidos, de manera que expresen situaciones concretas que sean congruentes con la causal utilizada.

Una vez corregidos los motivos, las disposiciones legales que se estiman violadas y el concepto de las infracciones deberán armonizar con ellos y con la causal de violación directa.

La segunda causal es la infracción de normas sustantivas de derecho, por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

El recurrente utiliza tres motivos para sustentar esta segunda causal. Sin embargo, se limita a señalar que "el Tribunal no tomó en consideración las pruebas que reposan en el expediente", para llegar a las conclusiones de la sentencia. No explica cuáles son los medios probatorios que constan en el proceso y que, en su opinión, influyeron en la resolución recurrida. Los motivos no pueden mantenerse en el mismo nivel teórico de la causal, ya que ellos constituyen los hechos del recurso de casación. Por tanto, deben ser corregidos.

Las normas legales infringidas y el concepto de dichas infracciones deben ser congruentes con los motivos, una vez estos sean corregidos, en atención a lo señalado.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación presentado por el apoderado judicial de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORAZ, S. A., para lo cual se le concede el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO EDUARDO ALBERTO ESCOBAR DÍAZ RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR MENITZA CAJAR SIERRA CONTRA COMPAÑÍA BITE CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO A. ESCOBAR DÍAZ, en carácter de apoderado judicial de la COMPAÑÍA BITE CORP., dentro del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio que le sigue MARITZA E. CAJAR SIERRA, formalizó recurso de hecho contra el auto dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 18 de diciembre de 1995.

El Magistrado Sustanciador solicitó, por medio de la Secretaria de la Sala, los expedientes que contienen las medidas cautelares de Secuestro y Conservatoria al tribunal de origen.

Cumplida la fase procesal que señala el artículo 1139, ordinal 3°, el recurrente presentó su escrito de alegato, visible de fojas 15 a 17 del expediente. En consecuencia, procede la Sala a resolver sobre la admisibilidad de la petición formulada ante esta Superioridad.

El recurrente fundamenta el presente recurso en siete hechos, de los cuales considera la Sala transcribir el número uno que recoge lo medular de la petición.

> "PRIMERO: Mediante auto fechado el día 27 de octubre de 1995, el Primer Tribunal Superior de Justicia confirmó los autos apelados por nosotros dentro del Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva de Dominio que fuera presentado por la señora Menitza Cajar Sierra, en contra de nuestro defendido, las cuales aprobaron Medidas Cautelares tanto de Secuestro, como Medidas Conservatorias en contra del patrimonio de nuestro patrocinado sin que dichas medidas se ajustaran al Procedimiento señalado en los artículos 521, 523, 526, 558 y 559 del Libro Segundo del Código Judicial."

De la transcripción anterior se colige que estamos en presencia de autos que decretaron medidas cautelares (secuestro y medidas conservatorias) proferidos por el Juez de instancia, los cuales, según criterio del recurrente, no se ajustaron a los artículos del Código Judicial que regulan esa materia.

Vale la pena aclarar que las resoluciones que decretan o rechazan las medidas cautelares, admiten el recurso de apelación, tal como lo hiciera el recurrente, pero, ello no significa que al ser confirmada por el Tribunal Superior, pueden ser objeto de recurso de casación.

Como consecuencia de lo anterior, los autos dictados en donde se decretan o aprueban medidas cautelares, como pretende el demandado dentro del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio, no pueden ser recurribles en casación.

El artículo 1149 del Código Judicial señala taxativamente las resoluciones

que son susceptibles del recurso de casación. Tal parece que existe una confusión por parte del recurrente, al considerar que el hecho de decretar o aprobar medidas cautelares (conservatorias y de secuestro) por parte del juzgador de la instancia, y al ser apeladas manteniendo el Superior tales medidas, pueda recurrirse en casación, como erróneamente considera que caben en base al numeral 4 del artículo 1149 del Código Judicial. Resulta a todas luces improcedente tal petición, pues el citado numeral es claro al establecer "Cuando se trate de autos que decidan oposiciones o levantamientos o exclusiones, en procedimientos cautelares". En el presente negocio los autos apelados no están decidiendo oposiciones, levantamiento o exclusiones en los procedimientos cautelares, más bien se tratan de autos en los cuales, uno de ellos, Auto N° 890 de 16 de mayo de 1995, decretó medida cautelar de secuestro a favor de la demandante en el proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio, contra COMPAÑÍA BITE CORP., sobre la Finca N° 20539; (foja 10 del cuadernillo). Aún más, si leemos el escrito de apelación formulado contra dicho auto, (fojas 22-24), el mismo se basa en no estar de acuerdo con la caución fijada por el Juzgador en base a la cuantía de la demanda SEIS MIL BALBOAS (B/.6.000.00) y que fuere consignada por la demandante en una cantidad menor, es decir, CINCO MIL CUATRO BALBOAS CON OCHENTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.5,004.82). La Sala observa que el otro Auto impugnado, el N° 905 de 24 de mayo de 1995, (f. 5), el tribunal decretó una medida conservatoria o de Protección, a fin de que la demandada provisionalmente se abstenga de realizar o suspender cualquier acto que vulnere o pueda vulnerar el pretendido derecho que le asiste a la demandante sobre la finca que fuere motivo de secuestro y la cual es objeto de usucapion en el presente proceso.

Es obvio de que las acciones antes descritas, no pueden enmarcarse en ninguno de los numerales contemplados en el artículo 1149 del Código Judicial, así como tampoco en los autos señalados en el artículo 1116 de la misma excerta legal, específicamente en el numeral 8 del referido artículo. Por tal motivo, no le asiste razón al apoderado judicial de la COMPAÑÍA BITE CORP.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por el Licenciado EDUARDO ESCOBAR DÍAZ contra el auto de 18 de diciembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio, propuesto por MARTIZA E. CAJAR SIERRA contra COMPAÑÍA BITE CORP.

DERECHO: Artículos 1137, 1139, 1141 y 1149 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN RAMÓN CASTAÑEDA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTA POR CRESCENCIA AIZPRÚA DE MARTÍNEZ CONTRA JUAN CASTILLO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JUAN RAMÓN CASTAÑEDA, actuando en su condición de apoderado judicial del señor JUAN CASTILLO Y OTROS, partes demandadas en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva propuesto por CRESCENCIA AIZPRÚA DE MARTÍNEZ, ha concurrido ante esta Sala a presentar Recurso de Hecho, a objeto de lograr que se acceda a enviar a la Sala Civil, el recurso de casación que impugna

la sentencia de 19 de marzo de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Una vez surtido el reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador solicitó mediante providencia de 22 de mayo de 1996, el expediente contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por CRESCENCIA AIZPRÚA DE MARTÍNEZ contra JUAN CASTILLO y OTROS.

Recibido el expediente, pasa la Sala de la Corte Suprema de Justicia, a decidir sobre la admisibilidad del recurso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1141 del Código Judicial.

Como es bien sabido, el artículo 1141 de la citada excerta legal, establece ciertos requisitos para que el recurso de hecho pueda ser admitido por el Superior, los cuales se refieren: a) que la respectiva resolución sea recurrible; b) que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa y tácitamente el Juez; c) que la copia se pida y se retire en los términos señalados; y, d) que se ocurra con las copias ante el Superior, en la debida oportunidad.

En el presente negocio salta a la vista que, si bien el escrito de interposición del recurso de hecho cumple con los requisitos señalados por la Sala en los literales b), c) y d) de la norma legal comentada, la resolución contra la cual se ha interpuesto el recurso no es recurrible, toda vez que la cuantía demandada es menor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5.000.00), tal como consta en el libelo de la demanda, (foja 12), en la cual la parte demandante le asignó al lote objeto de litigio el valor de MIL CINCUENTA BALBOAS (B/.1.050.00). Por otra parte, consta a foja 9 del expediente que contiene el proceso ordinario de prescripción adquisitiva, una certificación expedida por el Registro Público, sobre la existencia de la finca de propiedad de los demandados, cuyo valor registrado lo es la suma de SETECIENTOS BALBOAS (B/.700.00).

De lo expuesto resulta que, como bien lo expresa el Tribunal Superior en el Auto de 23 de abril de 1996, visible a foja 10 del expediente principal, si bien estamos en presencia de una resolución proferida por un Tribunal de segunda instancia, que está enmarcada en el ordinal 1 del artículo 1149 del Código de Procedimiento Civil, la misma no cumple con lo establecido en el artículo 1148, ordinal 2 del mismo Código, toda vez que la cuantía de la demanda es inferior a la señalada en la ley.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA EL RECURSO DE HECHO propuesto por JUAN CASTILLO Y OTROS, mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS A. MORENO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 1996 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO QUE LA SOCIEDAD MILCIN CORPORATION, S. A. LE SIGUE AL SEÑOR AMÍLCAR SAMUDIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado LUIS A. MORENO H., en su condición de apoderado especial del señor AMÍLCAR SAMUDIO, ha interpuesto recurso de hecho contra la Resolución de 29 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito

Judicial, que NIEGA el término para la formalización del recurso extraordinario de casación, que el apoderado anunció contra la resolución de 17 de abril de 1996, dictada dentro del proceso sumario instaurado por MILCIN CORPORATION, S. A. contra AMÍLCAR SAMUDIO.

Cumplida la ritualidad del reparto, el Magistrado Sustanciador concedió el término de tres (3) días para que las partes aleguen, período que fue aprovechado únicamente por la recurrente, según consta de fojas 29 a 31 del expediente. Vencido el término de alegato, se solicitó al Primer Tribunal Superior de Justicia, copia del expediente contentivo del proceso sumario instaurado por MILCIN CORPORATION, S. A. contra AMÍLCAR SAMUDIO VEGA, tal como lo pauta el artículo 1139 del Código Judicial.

La resolución impugnada mediante este recurso, fundamentó su negativa de conceder el término para formalizar recurso de casación, en que la resolución contra la cual se anunció, ésta es, la de 17 de abril de 1996, no es susceptible del recurso incoado, al tenor de lo prescrito en el artículo 1149 del Código de Procedimiento Civil, "toda vez que se trata de una resolución que revoca el Auto N° 970 de primero (1°) de junio de 1995, que APRUEBA LA TRANSACCIÓN decretada dentro del presente negocio, por lo que consecuentemente dicho auto no le pone término al proceso".

El recurrente sostiene que el proceso sumario se haya contenido en el Título XII, Parte II, Libro II que trata sobre los procesos de conocimiento. Agrega que la resolución que aprueba una transacción judicial tiene carácter de sentencia y, en consecuencia, la resolución que la revoca tiene ese mismo carácter, por tanto, procede el recurso de casación en base al numeral 1 del artículo 1149 del Código Judicial. Señala también que el presente proceso cumple con las exigencias contenidas en el artículo 1148 de la citada excerta legal.

La Sala comparte el criterio expresado por la resolución objeto del presente recurso de hecho, en el sentido de que la resolución atacada no se encuentra entre las descritas por el artículo 1149, en sus nueve (9) numerales, como susceptibles del recurso extraordinario de casación.

Como se puede apreciar, la resolución de 17 de abril de 1996, si bien fue dictado dentro de un proceso sumario incoado por MILCIN CORPORATION, S. A. contra AMÍLCAR SAMUDIO, lo que decide es REVOCAR el Auto N° 970, proferido el 1° de junio de 1995 por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio de la cual se aprobó una transacción suscrita entre los apoderados de las partes. El auto dictado por el Tribunal de primera instancia, fue notificado a los nuevos apoderados judiciales de la parte demandante, la firma forense BARRANCOS, CLARAMUNT, ENRÍQUEZ & OLIVARES, S. P. C., quienes apelaron contra el referido auto. Mediante Edicto N° 95-1777, de 21 de agosto de 1995 (f. 110) se señaló el término improrrogable de tres días para que el apelante sustentara la apelación y, vencido éste, el opositor presentara sus objeciones dentro del término de tres días improrrogables. Corre de fojas 111 a 118 el escrito del apelante; y, de fojas 119 a 126 el del opositor.

Por otra parte, la Sala estima conveniente aclarar al recurrente que, de conformidad con el artículo 1072 del Código Judicial "... la transacción aprobada judicialmente tiene fuerza ejecutiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 1639 de este Código. La resolución que aprueba una transacción termina la litis y hace tránsito a cosa juzgada, en cuanto a los puntos objeto de la misma".

En el caso en estudio resulta, a contrario sensu, de lo transcrito en el artículo 1072, que estamos en presencia de una resolución proferida por el Tribunal Superior que revoca la aprobación de una transacción que se diera en primera instancia, quedando ésta sin efecto legal alguno.

Con el pronunciamiento de parte del Primer Tribunal Superior, en cuanto a LA REVOCATORIA del auto de primera instancia, no se le pone fin al proceso, por el contrario, se ordena la devolución del expediente al tribunal de origen, para su prosecución.

Resulta evidente, pues, que este tipo de resolución no es impugnable en

casación, por lo que el recurso de hecho contra tal pronunciamiento, es improcedente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho propuesto contra la resolución de 29 de abril de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE REVISIÓN CIVIL

MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 22 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INSTAURADO POR LIBRERÍA Y EDITORA INTERAMERICANA, S. A. CONTRA MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JULIO A. EFFIO T., actuando como apoderado judicial de MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A. ha promovido recurso de revisión contra la Resolución de 22 de marzo de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario propuesto por LIBRERÍA Y EDITORA INTERAMERICANA, S. A. contra MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A.

Surtido el reparto de rigor, el sustanciador fijó el monto de la fianza que debía depositar el recurrente. Finalizada esta etapa, procedió este Tribunal, a solicitar al funcionario correspondiente el expediente contentivo del proceso ordinario a que se refiere la revisión demandada, con el objeto de resolver sobre la admisibilidad del mismo. Realizada toda la ritualidad inherente a este recurso, se pasa a resolver, tal como lo preceptúa el artículo 1198 del Código Judicial.

A juicio de la Sala, el recurso, cumple con los requisitos ordenados en el artículo 1189 del Código Judicial, a saber:

a. La causal esgrimida contra la resolución está señalada en el numeral 9° del artículo 1189 del Código de Procedimiento Civil.

b. El recurso se ha presentado dentro del término que establece la ley.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de revisión promovido por MITZIMAC TURISMO ASOCIADOS, S. A., propuesto dentro del proceso ordinario propuesto por LIBRERÍA Y EDITORA INTERAMERICANA, S. A., a quien debe citarse para que dentro del término de un (1) mes comparezca a sostener lo que convenga a sus derechos.

Se advierte igualmente que podrán intervenir en calidad de litis-consorte, cualquier persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma, la resolución que se dicte en esta revisión.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

JUNIO 1996

ACUSACIÓN PARTICULAR

SUMARIO SEGUIDO A PEDRO SANJUR GUERRA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE ENRIQUE AGUILAR BARRANCO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de recurso de apelación interpuesto por la licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, contra auto calendado 23 de enero de 1996, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia declina ante la esfera de los Juzgados de Circuito el conocimiento del proceso instruido a Pedro Sanjur Guerra, sindicado por delito Contra la Vida y la Integridad Personal cometido en detrimento de Enrique Aguilar Barranco.

Sostiene la recurrente que los criterios externados en la resolución que censura "no son contestes con la verdadera acción ejecutada por el sujeto activo al momento de lesionar al señor ENRIQUE AGUILAR BARRANCO" (f. 110). En tal sentido, explica que "el resultado de la peritación Médico-legal ... por el cual se aprecia la incapacidad de 450 días del afectado ... el peligro de su vida como consecuencia de ... las lesiones ocasionadas en el abdomen y riñón izquierdo, el cual se tuvo que extraer ... el arma utilizada, que en este caso era idónea para causar la muerte" (f. 111), son hechos que configuran el tipo penal de "**tentativa de homicidio doloso**" (f. 112). Por tanto, solicita sea revocado el auto impugnado y que, en su lugar, "se **abra causa criminal** en contra de **PEDRO SANJUR GUERRA**, como infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, en concordancia con el artículo 44 del Código Penal" (fs. 112-113).

Conocidas las razones de la impugnación, la Sala pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos a que se refiere el recurso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial.

La presente encuesta tuvo su génesis en denuncia criminal que presentara Enrique Aguilar Barranco contra Pedro Sanjur Guerra, por el delito de homicidio en grado de tentativa. Según el denunciante, en horas de la noche del 17 de octubre de 1993, en el sector "Ingenio de Felipillo", Distrito de Chepo, provincia de Panamá, Pedro Sanjur Guerra le propinó dos heridas con arma blanca (machete), por las que, según la opinión del galeno forense, "La vida del paciente Sí estuvo en peligro" (f. 29), asignándole una incapacidad definitiva de "UN (1) AÑO A PARTIR DEL DÍA DEL INCIDENTE" (f. 29).

El tribunal a-quo determinó que la conducta de Sanjur Guerra encuentra adecuación típica en la figura de lesiones personales descrita en el artículo 136 del Código Penal, tras considerar que "el `ánimo necandi o intención de causar la muerte no se encuentra demostrado como se requiere en la foliatura" (f. 105).

Según la recurrente, la conducta de Sanjur Guerra se encuadra en el delito de homicidio en grado de tentativa y no en el tipo penal de lesiones personales. Esta Corporación de Justicia resalta de manera preliminar que para distinguir ambos hechos punibles es necesario determinar el elemento subjetivo, que en el caso de las lesiones personales lo constituye la **intención de dañar la integridad física o psíquica de la víctima**, mientras que en el homicidio doloso debe existir la **intención de ocasionar la muerte**. De allí que, si se comprueba que el propósito es privar de la vida a la víctima, no hay duda de que se está en presencia de la figura del homicidio doloso; por el contrario, si lo que se comprueba es la ausencia de tal ánimo, y el mecanismo utilizado para la realización del propósito no es idóneo para ocasionar la muerte, entonces la conducta del agente se ubica en el delito de lesiones.

En las sumarias consta la versión del ofendido Aguilar Barranco, quien

detalla que su victimario le infirió dos heridas con su machete, porque él se negó a "catgar (sic) solito una saco de yuca con plátano ... dije ... que yo era el más pendejo, y él quería cargar nada más un cartucho ... no me dijo nada ... nada más se volteó u (sic) me macheteó" (fs. 1-2). El denunciante también manifestó que "cuando él me metió la primera vez ... traté de agarrarle la cabeza, pero no alcancé ... porque ya me había herido ... se agachó y me dio otra vez, que después que "me metió los machetazos ... pensó que ya yo estaba muerto, porque yo caí al suelo y no podía caminar ..." (f. 1).

Otro elemento fáctico importante a considerar en estos casos es el relativo a la localización y efecto de las heridas inflingidas. Las sufridas por la víctima en este caso: "-Herida penetrante en abdomen por arma blanca. -Laceración esplénica en polo inferior. -Herida en porción media del riñón izquierdo." (f. 29), le provocaron la extracción de un riñón, poniendo su vida en peligro.

Por otra parte, resulta evidente que la utilización de un machete para consumar la agresión, que constituye arma idónea para ocasionar la muerte, hacía incluso previsible el posible resultado de la muerte de la víctima. De allí que el comportamiento de Sanjur Guerra configure, por lo menos, el dolo eventual, concepto que se refiere "al conocimiento de la posibilidad del resultado y a la aceptación, por el agente, de la responsabilidad eventual dimanante de la realización del hecho ... no se quiere el resultado pero se acepta, ya que el individuo asume conscientemente el riesgo de infringir el tipo penal" (Registro Judicial, enero de 1994, pág. 206).

En síntesis, el factor sorpresa que utilizara el imputado para agredir a su víctima, el instrumento utilizado como arma ofensiva, la localización, gravedad y consecuencias de las lesiones producidas, son todas circunstancias que hacen razonablemente presumir que la intención de Sanjur Guerra fue la de ocasionar la muerte de Enrique Aguilar Barranco.

Por consiguiente, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto del 23 de enero de 1996 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y DECLARA CON LUGAR A SEGUIMIENTO DE CAUSA CRIMINAL contra Pedro Sanjur Guerra, como presunto infractor del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en relación con disposiciones del Capítulo VI, Título II del Libro I del mismo Código, es decir, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de Enrique Aguilar Barranco.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

APELACIÓN DEL AUTO ENCAUSATORIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN JOSÉ CASTILLO ÁBREGO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE RAFAEL CLEMENTE ÁBREGO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Con motivo del recurso de apelación anunciado y sustentado por el abogado defensor de **JOSÉ CASTILLO ÁBREGO**, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el expediente que contiene el proceso penal que se le sigue por el supuesto delito de tentativa de homicidio en la persona de **RAFAEL CLEMENTE ÁBREGO**.

La resolución que se impugna es el auto de fecha de 5 de marzo de 1996, expedido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra Juan José Castillo Ábrego por presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal con relación al Capítulo VI, Título II, Libro I del mismo Código, o sea por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Al calificar el sumario instruido por la Fiscalía Superior en colaboración con la Fiscalía Tercera del Circuito de Veraguas, el a quo tomó en cuenta los elementos de juicio incorporados al expediente, entre los que aparece la acusación particular promovida por el directamente afectado, quien expuso como fundamento de hecho que el día 22 de enero de 1994, en la entrada del edificio donde tenía sus oficinas, el sindicado se le acercó en reclamo de una deuda y acto seguido lo amenazó con un arma de fuego, percutiendo el gatillo en tres ocasiones, pero la intervención de otras personas que se encontraban cerca impidió que le disparara. También se mencionan las declaraciones de los señores Rolando Lañas Guerrero (fs. 91-94) y Diógenes González Muñoz (fs. 95-99) quienes acompañaban al acusador y escucharon a Juan José Castillo cuando al acercarse a Rafael Clemente Ábrego le dijo "me pagas o te mato" y después de tirarle una trompada le apuntó a la cabeza con una pistola y accionó el gatillo, pero no salió disparo alguno porque aparentemente el arma tenía seguro, no obstante, al observar que intentaba nuevamente utilizar el arma de fuego, ambos intervinieron para evitar un desenlace fatal.

Con base a las declaraciones mencionadas, al examen de balística del arma utilizada, la diligencia de reconstrucción de los hechos, la indagatoria de Castillo y el escrito de formalización de la acusación particular, se arribó a la conclusión que se reunían los requisitos establecidos por el artículo 2222 del Código Judicial, o sea, la existencia de una amenaza de muerte, seguida de la utilización de un arma de fuego, con actos de ejecución idóneos para causar la lesión de la vida de Rafael Clemente Ábrego, pero cuyo objetivo no se logró perfeccionar por razón de la intervención de Lañas y González, que lo impidieron. Por ello, al darse los presupuestos indispensables para abrir causa penal contra la persona debidamente identificada, que llevó a cabo los actos de iter crimines mencionados, se dictó la resolución bajo censura.

Por su parte, el recurrente en escrito que aparece de fojas 279 a 284 del expediente, después de transcribir parcialmente las declaraciones apreciadas por el Tribunal, el texto del escrito de la acusación y la deposición de su representado, sostiene que no aflora de las mismas la existencia de la conducta típica de tentativa de homicidio, porque si bien es cierto que su defendido usó el arma, la misma no estaba cargada y fue por ello que aunque la accionó tres veces seguidas, la misma no disparó. Tal situación, según su criterio, no permite calificar de idóneos los actos de ejecución realizados, pues nunca podían producir lesión de la vida del acusador.

La Sala al estudiar el fundamento fáctico y jurídico de la resolución judicial recurrida y los argumentos del apelante, considera que el dictamen pericial de balística que aparece a fojas 205 indica que se trata de una arma de fuego, en excelentes condiciones, con un proveedor de seis cartuchos, sin que se aclare si el arma estaba cargada o no el 22 de enero de 1994, pues, según la fecha de tal experticia, la misma se practicó el 21 de agosto de 1995, veinte meses de ocurridos los hechos motivo de esta investigación.

En cuanto a la deserción de la acusación particular, no cabe duda que la muerte de Rafael Clemente Ábrego meses después, sin que se designara abogado sustituto, da lugar a que se acoja la solicitud de la defensa, sin que ello afecte la fase instructoria realizada por el Ministerio Público, por tratarse de hechos punibles perseguibles de oficio.

El recurrente alega, acorde con lo manifestado por su representado, que a pesar de haber amenazado al acusador por el engaño de que era objeto en una transacción comercial de la que le debía nueve mil balboas, en ningún momento tuvo la intención de causarle daño, pues el arma que portaba no tenía el proveedor cargado y prueba de ello es que lo percutió en tres ocasiones sin que diera resultado. La ley penal al definir la tentativa inacabada en el artículo

44, establece como requisito que al iniciar la ejecución de un hecho punible, sea a través de actos idóneos a su consumación, esto es, en el caso que nos ocupa, actos con capacidad de producir la muerte y se añade, que tal consumación no se logre por causas ajenas o independientes de la voluntad del autor o agente activo.

Si veinte meses después de decomisada el arma, el informe balístico indica que se trata de "una pistola calibre 380, marca Star, acabado de acero inoxidable, con serie N° 1974069, de 6 pulgadas de longitud, cañón de tres pulgadas, martillo externo con su mecanismo funcionable en simple acción, proveedor con capacidad de 6 cartuchos, de fabricación española, con mecanismos externos e internos aptos para efectuar disparos", las únicas razones por las cuales después de tres percusiones no se produjo disparo alguno, fueron: porque el arma estaba descargada o tenía el seguro puesto. En ambos casos, los actos de ejecución no podían conducir a la consumación del hecho punible, porque carecían de idoneidad para lograr su cometido. Se trata, pues de un caso de tentativa inidónea, en virtud de que el medio o instrumento de ejecución del hecho punible intentado, carecía de idoneidad -en las condiciones que se encontraba al momento de los hechos- para consumar un homicidio con arma de fuego.

No significa lo anterior que la agresión y la amenaza pública hecha por Castillo al difunto Rafael Clemente Ábrego no sea una conducta reprochable, sino que no se subsume en el tipo penal por el cual se le llamó a juicio, pues todo indica que se trata de una contravención que no compete a la esfera de la justicia penal ordinaria.

Por otra parte, al momento en que ocurrieron los hechos denunciados no existía la ley que regula el uso y posesión de armas de fuego y las diligencias que debieran realizarse para perfeccionar el sumario, tal como lo anota el Fiscal Superior, no se pueden llevar a cabo por el fallecimiento posterior del acusador.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto encausatorio apelado, declara la deserción de la acusación particular y SOBRESEE PROVISIONALMENTE a favor de JUAN JOSÉ CASTILLO ÁBREGO, de generales expresadas en autos, con base en el numeral 1° del artículo 2211 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ÁNGEL SANTOS JIMÉNEZ BELLEZA, POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN PERJUICIO DE JORGE ISMAEL HERRERA GIL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de fijación en lista del recurso de casación interpuesto por el licenciado **EDWIN RAÚL HERRERA CEDEÑO**, defensor de oficio de **ÁNGEL SANTOS JIMÉNEZ BELLEZA**, se pasa a revisar el texto del escrito presentado, a fin de determinar si el mismo se ajusta a los requerimientos establecidos por la ley.

En primer término, cabe apuntar que en cuanto a las exigencias externas, tal cual lo anota el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en su auto de 10 de abril de 1996 (fs. 178-179), el anuncio y la formalización del recurso

de casación se dieron dentro de los términos legales y con relación a la legitimación activa y material, el recurrente funge como defensor del sentenciado y la causa penal en la que se promueve este recurso extraordinario es de aquellas que son susceptibles del mismo.

En segundo lugar, respecto a la historia concisa del caso, no se advierten vicios relevantes. Sobre los motivos anotados cabe señalar que el casacionista no indica los folios contentivos de las pruebas que se acusan como erradamente valoradas por el juzgador.

En lo que se refiere a las normas legales infringidas, el recurrente cita una disposición de rango constitucional, cuya violación no puede analizarse por esta vía procesal, en virtud de que el recurso de casación tiene como finalidad esencial la exacta observación de las leyes por los Tribunales de Justicia, mientras que el control de la constitucionalidad es de competencia del Pleno de la Corte constituido en Tribunal Constitucional.

Por otra parte, la cita del artículo 175 del Código Judicial reformado por la Ley 53 de 1995, se refiere a la asignación de competencia de los casos civiles y penales a las autoridades de policía, en atención a la cuantía, al monto del daño patrimonial y al tiempo de incapacidad sufrida en los delitos contra la integridad personal, razón por la cual dicha norma no es pertinente a la causal invocada, pues se trata de una regulación explícita en materia de competencia y que en el campo de la casación configura una causal de forma y no de fondo.

Los errores cometidos no le permiten a la Sala Segunda, como Tribunal de Casación Penal, admitir el recurso presentado.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado en este caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA JUAN AYALA GONZÁLEZ Y OMAR GONZÁLEZ HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de decisión recurso de casación en el fondo interpuesto por los licenciados JOSÉ MARÍA LEZCANO y EDGAR TORRES, apoderados de los señores JUAN AYALA y OMAR GONZÁLEZ HERRERA, respectivamente, contra la sentencia de segunda instancia dictada el 31 de octubre de 1994 proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la sentencia N° 31 de 30 de mayo de 1994 dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí, mediante la cual se condena a los imputados a la pena de 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término al ser encontrados responsables de la comisión del delito de venta de drogas.

En el recurso de casación presentado por el licenciado EDGAR TORRES SAMUDIO en representación de **OMAR GONZÁLEZ AYALA** se encuentran defectos insubsanables.

La primera causal aducida por el licenciado Torres es la contemplada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, la que anota de la siguiente manera: "por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal ya sea en

concepto de violación directa o efecto de una interpretación errada de la ley o de la indebida aplicación de ésta al caso juzgado. Así mismo el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en la apreciación de ella, implican infracción de la ley sustancial.

Como primer punto hay que aclarar que el numeral 1 del citado artículo 2434 del Código Judicial consagra en realidad cinco causales de casación independientes y excluyentes entre sí, a saber: a) Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial, en concepto de violación directa; b) por interpretación errónea de la ley; c) por indebida aplicación; d) por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba; y e) por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Por consiguiente, en una misma causal no se puede alegar a la vez interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, o error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o el de derecho en cuanto a la apreciación de la misma, puesto que ambos términos se fundamentan en conceptos diametralmente opuestos que, por ende, los hacen ser independientes y excluyentes como se dijo.

Con relación a la segunda causal aducida por el licenciado Torres, vuelve a cometer el mismo error ya que esta causal contemplada en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial, contempla realmente dos causales que se excluyen entre si. La primera se produce cuando "el error de calificación influye en el tipo contentivo de la figura delictiva en cuestión y la segunda causal ocurre cuando tal calificación conlleva efectos sobre la extensión de la pena". (FÁBREGA P. JORGE, GUERRA DE VILLALAZ, AURA E., CASACIÓN, Varitec, S. A., Panamá, 1995, página 321).

En cuanto a las disposiciones legales que estima infringidas y el concepto en que lo han sido, debemos señalar que la técnica casacionista requiere que las disposiciones legales infringidas se señalen como una sección autónoma; que en ella se transcriban las disposiciones pertinentes y se explique luego de cada transcripción el concepto en que según el recurrente ha sido infringido el precepto. En este caso, el recurrente solamente transcribe las disposiciones pero no explica separadamente los conceptos en que cada precepto jurídico ha sido violentado, contradiciendo claramente las técnicas de casación.

Por todo lo anteriormente manifestado, considera esta Corporación que el recurso presentado por el licenciado Torres contiene deficiencias y defectos realmente insubsanables lo por lo que la Corte, al resolver el fondo del recurso, no le queda otra opción que la de no casar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema NO CASA la sentencia de 31 de octubre de 1994 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO EN REPRESENTACIÓN DE JUAN AYALA.

El recurso presentado por el licenciado José María Lezcano está fundamentado en una sola causal, cual es: error de derecho en la apreciación de la prueba, la que, a su vez, está sustentada en tres motivos, a saber:

PRIMERO: Que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al momento de valorar la diligencia de allanamiento celebrada el 11 de junio de 1993, le dio un valor de plena prueba en contra de su defendido, valoración contraria a la ley, ya que, considera el recurrente, que el hecho de que su defendido se encontrara en el lugar allanado, no es razón para que se considere como prueba de que el señor Ayala haya participado en el ilícito, sobre todo que se trata de un lugar comercial y que al señor Ayala no se le encontró droga en su ropa. Además, "Lejos de servir la diligencia de allanamiento para condenarlo, es por sí sola, pieza probatoria para absolverlo".

SEGUNDO: Que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial evaluó de manera equivocada y contraria a la ley los testimonios de Mitzela Samudio y Omar González ya que al analizarlos y valorizarlos se olvidó de que la imparcialidad

de los mismos se encontraba afectada porque una es enemiga del señor Juan Ayala y el otro esta interesado en culparlo para eximirse de responsabilidad. Por otro lado, agrega, que ambos narran hechos diferentes al allanamiento, que es por lo que se investigó y juzgó a su defendido, el señor Juan Ayala.

TERCERO: Que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial le da valor de plena prueba a la amistad que tenían Juan Ayala y Omar González para condenar, para condenar al primero, valorización incorrecta y contraria a la ley, porque el hecho de que una persona sea amiga de otra no significa que los actos de una sean atribuibles a la otra.

Ahora bien, cuando se invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba como causal de casación, se parte de la premisa de que el tribunal ad quem tomó en consideración la prueba (la apreció, la tuvo en cuenta al momento de fallar) pero que se equivocó al darle el valor jurídico que le asigna la ley. Es decir, que el tribunal de segunda instancia, de no haber cometido el error al momento de apreciar la prueba, la sentencia sería distinta. Además, según jurisprudencia de la Corte, cuando se invoca esta causal, en los motivos que la fundamentan deben señalarse las fojas en las que se encuentran las pruebas mal apreciadas. Con respecto a este punto el recurrente no ha cumplido con esta exigencia.

En la sección de las disposiciones legales infringidas y en concepto en que lo han sido, el recurrente expresa como violados los siguientes artículos: 770, 904, del Código Judicial y el 258 del Código Penal.

En cuanto a las normas denunciadas, como infringidas, debemos señalar que los artículos 770 y 904, del Código Judicial, son normas meramente enunciativas de ciertas pautas, según las reglas de la sana critica, que ha de seguir el Juez para la valoración del caudal probatorio; no disposiciones que regulan o establecen criterios sobre el valor de una prueba. La sana crítica es un principio general, sobre estimación de la prueba, definido como la "formula de equilibrada armonía entre la libertad de criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Cabanellas, Guillermo, Editorial Heliasta, S. R. L., Argentina, 1981, Tomo VII, pág. 293).

En este sentido, el error de derecho, en la apreciación de la prueba, como causal de casación, se produce cuando las facultades discrecionales del juzgador, infringen las disposiciones que tasan las mismas; es decir, que este tipo de error se presenta cuando el Juez le da a la prueba un valor que la ley no le reconoce.

También se comete el mencionado error cuando el juzgador se aparta de los principios establecidos por la ley para valorar la prueba, aun cuando la propia ley no tase el valor que debe dársele a la misma. Claro está, el error debe ser manifiesto de manera que si no se hubiere cometido el fallo sería distinto. Además esta causal requiere que el juzgador haya estimado o valorado el medio probatorio.

Con relación al artículo 770 del Código Judicial es importante destacar que este artículo es de carácter general y establece un método a utilizar por parte de un juez para valorar o apreciar una prueba, es decir, que el juez evaluará las pruebas después de haberlas analizado y estudiado hasta llegar a la certeza de determinar si son o no valederos.

Con relación a este aspecto, el tribunal de segunda instancia basa su apreciación en la diligencia de allanamiento esbozando todas las actividades que se realizaron antes de la diligencia de allanamiento que fueron las que llevaron a los miembros de la Policía Técnica Judicial a realizarla, elementos que junto a todas las pruebas que se encuentran en el expediente llevaron al juzgador a considerar que JUAN AYALA se encontraba vinculado al delito de drogas. Por lo tanto, consideramos que no se ha producido la infracción del artículo 770 del Código Judicial.

En ese mismo sentido el artículo 904 de la misma excerta legal, como se

dijo en líneas anteriores, es una norma general que faculta al juez a realizar la valoración de las pruebas conforme a la lógica, al sentido común y a la experiencia.

La norma citada establece claramente el principio de que el Juez apreciará circunstancias y motivos que corroboren, reafirmen o disminuyan las fuerzas de las declaraciones tomando en cuenta las reglas de la sana crítica.

Es una norma que establece lineamientos a seguir por el Juez al momento de apreciar los testimonios. Es de carácter enunciativo que no le otorga valor a las pruebas testimoniales, sino que se basa en la sana crítica, razón por la que la misma no guarda relación con la causal invocada.

En lo que respecta la supuesta violación del artículo 258 del Código Penal, el casacionista afirma que el mismo "ha sido violado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en concepto de violación directa por omisión, porque al aplicarlo lo ha hecho mal,toda vez que la conducta descrita en el mismo no fue realizada por mi cliente ...".

Primeramente, es importante anotar, que la violación directa de la ley sustancial se da en dos supuestos a saber: por omisión o por comisión.

La Corte en reiterados fallos ha señalado que se da la violación directa por omisión cuando existiendo una norma legal aplicable al caso concreto ésta deja de ser aplicada o simplemente se hace caso omiso de su existencia, y procede la violación directa por comisión cuando a pesar de que el Tribunal competente ha aplicado la norma exacta al caso en particular desconoce su contenido. De allí que quien alegue esta violación directa de la ley sustancial en uno u otro supuesto está aceptando la valoración probatoria efectuada por el Tribunal, lo que objeta es la no aplicación de una norma o la aplicación de una sin que se haya considerado su contenido y alcance real. Es decir entonces, que no se puede alegar con relación a una norma "violación directa por omisión, porque al aplicarlo lo ha hecho mal". El Tribunal o no aplica una norma o la aplica desconociendo su contenido, es decir, la aplica mal. Por consiguiente, el recurrente no ha logrado demostrar la supuesta violación de la ley penal sustantiva ni hacer cargos de injuridicidad contra la sentencia recurrida.

La Corte ha sostenido en múltiples fallos que es indispensable que el recurrente presente clara y coherentemente los razonamientos dirigidos a comprobar la causal invocada. De allí que, es improcedente aceptar la validez de los argumentos planteados por el casacionista.

Ahora bien, siendo que los motivos de las causales desempeñan un papel importante en el recurso de casación, porque su misión es la de fundamentar y comprobar la causal invocada, al no haber prosperado los cargos de injuridicidad que fueron expresados por el casacionista, no le queda otra opción a la Corte que la de no casar la sentencia impugnada.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 31 de octubre de 1994, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL, POR DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CHORRILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 4 de mayo de 1994, ingresó a la Sala Segunda de la Corte, el proceso penal seguido a **GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL**, por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del Chorrillo, con motivo del recurso de casación en el fondo presentado por su abogado defensor.

Fijado en lista el caso, se cursó al Tribunal Electoral el Oficio N° 167-S. P. de 19 de mayo de 1994, en el que se le comunicó la suspensión del trámite procesal hasta tanto concluyera el período electoral, en virtud de que el procesado era candidato a legislador por el Circuito 8-1 por el Partido Revolucionario Democrático (P. R. D.) en las elecciones populares de 1994, por lo que se esperaba la autorización de ese Tribunal una vez concluido el período de inmunidad que la ley electoral confiere a los candidatos a cargos de elección.

Como quiera que había transcurrido un lapso de dos años sin que el Tribunal Electoral hiciera comunicación alguna, se dispuso enviarle el Oficio N° 143-S. P. de 2 de mayo de 1996 para que se remitiera a la Sala Segunda una certificación sobre el estado político del señor Melgar Fadul en la actualidad, oficio que dio lugar a la siguiente comunicación:

> "En respuesta a su oficio N° 143-S-P del 2 de mayo del presente año, le informo que el señor GUSTAVO ELIÉCER MELGAR FADUL, como candidato a Legislador Principal por el Circuito 8-1, postulado por el Partido Revolucionario Democrático para las elecciones que se efectuaron el 8 de mayo de 1994, gozó de inmunidad electoral hasta tres (3) meses después de cerrado el proceso electoral, el cual finalizó el once (11) de octubre de 1994, por lo que al señor Melgar Fadul le finalizó la inmunidad contemplada en el Código Electoral el día 11 de enero de 1995" (fs. 506).

Una vez recibida la información transcrita, se le imprimió al caso el trámite procesal correspondiente y a la fecha, al vencer el término de lista cabe resolver sobre la admisibilidad del recurso presentado.

Según constancias de autos, los requisitos externos sobre oportunidad, legitimación activa y material del recurso, se han cumplido plenamente por cuanto se anunció y formalizó el recurso en los plazos establecidos por la ley, por persona hábil y en proceso penal por delito con penalidad privativa de libertad superior a dos años.

Con relación a las exigencias legales de carácter formal que debe recoger el escrito contentivo del recurso extraordinario presentado, se advierte que en la historia concisa del caso, pese a que es un recuento general del proceso, no se evidencia de la misma cargos de injuridicidad contra el fallo censurado.

En cuanto a los motivos que sirven de sustento a la causal probatoria alegada, se advierte que los tres primeros aluden a testimonios y dictámenes, sin precisar el foliado de los mismos.

Respecto a las normas infringidas y el concepto en que lo han sido, el recurrente yerra al señalar tal concepto en relación con la norma penal sustancial invocada.

Las deficiencias anotadas dan lugar a que el casacionista subsane las mismas en el término de la Ley.

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE que se mantenga el negocio en Secretaría por el término de cinco días para que se corrija el recurso conforme a las indicaciones que anteceden.

Base Legal: artículos 2443 y 2444 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE KATHIA RODRÍGUEZ Y YENNY RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Al examinar el libelo de casación presentado por la licenciada Gloria Conte de Quirós, defensora de oficio, dentro del proceso penal que se sigue a David Rodríguez González, quien resultara condenado por el delito de violación carnal cometido en perjuicio de las menores Kathya y Yenny Rodríguez, la Sala advierte que el recurso adolece de defectos de forma que deben ser subsanados.

Así tenemos que la historia del caso no es concisa, y de ella no emerge con claridad el vicio de injuridicidad que se atribuye a la sentencia atacada. En cuanto a los motivos, se puede apreciar que la casacionista cumple parcialmente con este requisito, ya que del primero, tercero, cuarto, y sexto motivos, no emergen con claridad las razones que sustentan la causal invocada. Para concluir, la recurrente presenta deficientemente el concepto en que considera infringidos los artículos 904 del Código Judicial, 38 y 217 del Código Penal, y no expone con claridad el concepto por el cual ha sido infringido el artículo 905 del Código Judicial.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA que este libelo de casación permanezca en la Secretaría de la Sala por el término de cinco días, con el objeto de que la recurrente subsane los defectos formales indicados.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DANIEL GRANUCCI CASAL POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante providencia de 13 de mayo del año en curso, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, fijó en lista el proceso penal seguido a **DANIEL GRANUCCI CASAL** por delito contra la fe pública, a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso a esta Corporación Judicial.

Vencido el término de lista al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, es procesalmente necesario calificar la admisibilidad "in limine" del recurso presentado.

En primer lugar, la Sala corrobora la decisión adoptada por el Segundo

Tribunal Superior de Justicia, en su auto de 11 de abril de 1996, mediante el cual considera que la recurrente, como persona hábil, le dio debido cumplimiento a las exigencias legales en materia de casación, contempladas en los artículos 2434, 2440 y 2441 del Código Judicial.

En cuanto a los otros requisitos de orden formal que deben concurrir en la redacción del escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, la Sala constata lo siguiente:

a) La historia concisa del caso, que se extiende a cinco folios, entra en detalles que exceden el carácter sucinto de este epígrafe.

b) El numeral citado del artículo 2434 del Código Judicial, al referirse a la causal invocada, contiene dos causales, pues alude tanto a las circunstancias atenuantes como a las agravantes y por ello, es necesario optar por una de ellas, pues las causales se deben presentar de manera separada, en virtud de que los motivos varían conforme a la causal que se alegue.

c) Con relación a las normas legales infringidas y el concepto en que lo han sido, la recurrente no señala correctamente el concepto de la infracción, pues si bien la causal es la de error de derecho, el concepto de la infracción se da en cuatro modalidades o posibilidades que son: violación directa por comisión, violación directa por omisión, aplicación indebida e interpretación errónea. Al mencionar el concepto de la infracción del artículo 66 del Código Penal, la casacionista se limita a señalar que el Tribunal Superior incurre en error de derecho al quitarle la fuerza probatoria que el artículo mencionado le otorgó a la confesión como atenuante de la responsabilidad penal, pero no especifica el concepto de dicha violación.

Los defectos anteriores, en conjunto, no permiten la admisibilidad del recurso presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la defensa de DANIEL GRANUCCI CASAL contra la sentencia de 27 de noviembre de 1995, dictada por el Segundo Tribunal de Justicia en este caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A EZEQUIEL CASTILLO PARDO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de oficio de Ezequiel Castillo Pardo, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma contra sentencia calendada 15 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirma la sentencia de primera instancia en la que se condena a Castillo Pardo a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, como responsable del delito de venta ilícita de drogas.

Vencido el término de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, le corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario. En tal empeño, se advierte enseguida que el requisito legal

concerniente a la historia concisa del caso se expone en forma inadecuada. Vemos que el casacionista abunda en argumentos que censuran la juridicidad del fallo en la valoración probatoria correspondiente (fs. 277-280), en lugar de explicar de manera **sucinta y clara** la situación jurídica ocasionada por la resolución que se impugna. En reiteradas oportunidades se ha dicho que el no cumplimiento de esta exigencia impide a la Sala realizar el debido juicio de valor y torna inocuo el recurso, al privarlo de un componente esencial, como lo es el de su suficiencia.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, el recurrente invoca la causal de "error de derecho en la apreciación de la prueba", (f. 280) sustentándola en tres motivos, de los cuales sólo el primero pone de manifiesto los errores in judicando atribuidos a la sentencia (f. 280), ya que el segundo y tercer motivos contienen meras apreciaciones subjetivas carentes de cargos concretos de infracción.

Los defectos indicados habrían podido ser corregidos, de no ser porque el recurso de casación en el fondo incumple con las formalidades previstas en el numeral 3, acápite c) del artículo 2443 del Código Judicial, referentes a la mención de las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

Ocurre que el casacionista afirma que han sido violados los artículos 820 y 840 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión (fs. 281-282). No obstante, según la doctrina imperante cuando se invoca la violación directa de la ley sustancial se excluyen las leyes "que son simplementes adjetivas o formales" (CALDERÓN BOTERO, Fabio. Casación y Revisión en Materia Penal. Editorial temis, Bogotá, 1973, pág. 60), toda vez que "El concepto de infracción `violación directa , **sólo procede cuando se trata de normas sustantivas** que tutelan derechos subjetivos, como es el caso de las contenidas en el Código Penal" (Resoluciones de 10 de marzo y de 30 de mayo de 1995, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia), interpretación cónsona con el texto del numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, que exige que la violación directa se manifieste en infracción de **"la ley sustancial penal"**. De allí que resulte improcedente aducir como concepto de violación directa la infracción de un precepto legal contenido en el Código Judicial.

Por otra parte, se debe advertir que, por tratarse de un recurso de casación en el fondo, el recurrente debió aducir la vulneración de **normas legales sustantivas**, requerimiento que omitió, limitándose a indicar la infracción de disposiciones de naturaleza adjetiva. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha sostenido que "Si no se cita la disposición sustantiva, la violación que se ha señalado no influye en lo dispositivo del fallo recurrido, lo cual **no hace procedente la causal**" (Registro Judicial, mayo de 1990, págs. 221-222).

En cuanto al recurso de casación en la forma, la defensa técnica invoca la causal de "falta de competencia del tribunal" (f. 283), contenida en el numeral 1 del artículo 2437 del Código Judicial.

Ahora bien, cuando se recurre en casación en la forma es imprescindible que el recurrente acredite haber presentado el reclamo de la falta en la instancia y momento procesal en que ocurre, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2452 del Código Judicial. La causal viene fundamentada básicamente en que "El Tribunal Superior carecía de competencia funcional, debido a que lo procedente era la declaración de nulidad de todo lo actuado debido a que se desarrollaron dos -2- sumarios y dos -2- plenarios por el mismo hecho punible" (fs. 283-284). El examen del cuaderno penal permite advertir que el supuesto vicio no fue censurado oportunamente, lo que trae como resultado que el recurso de casación en la forma no pueda ser admitido por incumplimiento de ese requisito.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de oficio de Ezequiel

Castillo, contra la sentencia de 15 de enero de 1996 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ATKINSON KINGSLEY CONNAD, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Teresa Ibáñez, actuando en su condición de defensora de oficio de Kingsley Connad Atkinson, formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia calendada 29 de septiembre de 1994, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución de primera instancia que condena al prenombrado Connad Atkinson a la pena de 66 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término, por el delito de tráfico internacional de drogas.

A los fines de decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario, la Sala observa que los conceptos de infracción que emplea la recurrente para explicar la conculcación de las disposiciones legales violadas resultan extraños al catálogo previsto en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, el cual expresa con claridad que la norma jurídica puede ser infringida en concepto de violación directa (sea por omisión o por comisión), interpretación errada de la ley o por indebida aplicación.

Por otra parte, la Corte considera que la casacionista debió señalar también la infracción del precepto legal sustantivo que tipifica la conducta ilícita perpetrada por su patrocinado (art. 255 del Código Penal), pues lo que se reclama es que "el verbo rector sacar no llegó a cumplirse, para considerar la consumación del delito de tráfico internacional de droga" (f. 132).

Tratándose de defectos de forma, se procede ordenar las correcciones anotadas, tal como lo permite el artículo 2444 del Código judicial, a fin de que la Sala pueda pronunciarse definitivamente sobre la admisibilidad del recurso.

En virtud de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ORDENA la corrección del libelo de casación y mantener el presente negocio en Secretaría por el término de cinco (5) días para que la defensora técnica efectúe las correcciones indicadas.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CLIFFORD ARTURO PATTERSON, JOSÉ ARMANDO PÉREZ GÓMEZ Y BOLÍVAR DELGADO VISSUETTE, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL LOCAL COMERCIAL "RECIBO, ACCIÓN Y RAPIDEZ". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Beatriz Herrera Peña, defensora de oficio de **BOLÍVAR ESPINO**, sentenciado a cinco años de prisión, por el delito de robo a mano armada, ha presentado recurso de casación contra la resolución judicial calendada el 14 de diciembre de 1995, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirma la emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito, Ramo Penal.

Al tenor del informe secretarial que obra a folio 535 vuelta, se ha vencido el término de lista, otorgado mediante providencia de 24 de mayo del año que decurre, en virtud del cual se pone en conocimiento de las partes el ingreso del negocio a esta Corporación Judicial y por tanto, procede decidir la admisibilidad del medio de impugnación presentado.

Con ese propósito, se revisan los requerimientos externados del recurso y se puede apreciar que el mismo fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, la recurrente está dotada de legitimación, pues fue designada por el tribunal de la causa como representante de la defensa de Bolívar Espino y en cuanto al delito por el cual se sigue este proceso penal desde 1987, es un robo agravado que tiene pena privativa de libertad superior a dos años.

Con relación a los requisitos que debe llenar todo escrito, mediante el cual se formaliza un recurso de casación, conforme lo preceptúa el artículo 2443 del Código Judicial, se anota lo siguiente:

a) La historia del caso se limita a una referencia general del proceso con énfasis en la participación de la defensa.

b) Se invocan dos causales. La primera es la violación directa de la ley sustancial penal, denominación que se ajusta a la que le asigna el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial.

La segunda causal es de tipo probatoria y también se ajusta a la denominación que le da la ley, a pesar de que para una mayor precisión, siempre se debe hacer referencia a la violación de la ley sustantiva penal y a que el error en que se ha incurrido por el tribunal -sea este de hecho o de derecho- influyó en lo dispositivo de la sentencia.

c) Respecto a los motivos, el que se formula para la primera causal, alude a situaciones ajenas a la misma. Con respecto a los motivos de la segunda causal, la recurrente omite presentarlos en forma ordenada.

d) Con relación a las disposiciones legales y el concepto en que lo han sido, la casacionista comete el error de presentar todas las normas legales que estima violadas, al final, si hacer distinción de cuáles se refieren a la primera causal y cuáles a la segunda. Esta confusión es de relevancia, porque en cuanto a la primera causal, solamente es posible, por su propia naturaleza, la violación de las normas sustantivas y en este caso, hay artículos citados que contienen preceptos sustantivos y otros contienen principios adjetivos.

A lo anterior cabe agregar, que en la formalización del recurso y la selección de las causales, debe tenerse en cuenta que a través de las causales probatorias, se discute la fundamentación de hecho de la sentencia censurada, no así las causales de fondo, como la violación directa en las que sólo se discute la aplicación del derecho, con abstracción de la fundamentación de hecho, que es aceptada tácitamente por quien hace uso de este medio de impugnación de carácter extraordinario.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la licenciada Beatriz Herrera Peña, en su calidad de apoderada judicial especial de BOLÍVAR ESPINO en este proceso penal.

Fundamento legal; artículos 2434, 2443 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, FELIPE CAMARGO AMAYA, RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON Y ALAÍN ARCENIO ODA, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS RODOLFO WORRELL BEST. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial, para que las partes tengan conocimiento del ingreso del proceso penal seguido a **NILVALDO MADRIÑÁN APONTE**, **FELIPE CAMARGO AMAYA**, **RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON** y **ALAÍN ARCENIO ODA**, por delito contra la libertad individual en perjuicio de **CARLOS RODOLFO WORRELL BEST**, cabe hacer un examen de cada uno de los cuatro escritos que contienen los recursos de casación formalizado por los defensores, a fin de determinar su admisibilidad.

Con el propósito de individualizar el examen de los recursos presentados, se tomará en cuenta el orden en que han sido incorporados al expediente, siendo el primero de ellos el del licenciado Ramiro Fonseca Palacios, como defensor de NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, el segundo por el licenciado Rubén Moncada Luna, en su calidad de defensor de RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON, el tercero por Eliécer A. Pérez Sánchez, en su condición de apoderado especial de ALAÍN ARCENIO ODA, y el cuarto formalizado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila en su condición también de defensor de FELIPE CAMARGO AMAYA.

PRIMER RECURSO

De folios 905 a 911 del expediente aparece el escrito mediante el cual el licenciado Ramiro Fonseca Palacios formalizó el recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia, dictada el 28 de diciembre de 1995 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Al constatar la concurrencia de los requisitos externos exigidos por la ley en materia de casación, se aprecia que tanto el anuncio como la formalización de este medio de impugnación extraordinario se hizo en tiempo oportuno por persona hábil y dentro de un proceso por delito sancionado con pena superior a dos años de prisión.

Con relación a la formalización del escrito y su contenido, aparece la historia concisa del caso en la que se incluyen algunos conceptos más parecidos a alegatos que a los vicios de injuridicidad de los que se acusa al fallo recurrido.

En cuanto a la causal de casación que invoca el recurrente, a folios 907 puede leerse una transcripción completa del numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial, el cual, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, contiene cinco causales, entre las que aparecen dos de carácter probatorio.

En cuanto a los motivos en los que se apoya la causal invocada, la Sala debe anotar que como se desconoce cuál es la causal que desea presentar el recurrente, los motivos no aparecen debidamente hilvanados, ya que es una exigencia que los motivos sirvan de apoyo y sustento a la causal que se invoca.

Con relación a las disposiciones reguladas infringidas y al concepto de las mismas, se cita el artículo 41 del Código Penal vigente en el concepto de

indebida aplicación, pero el casacionista omite indicar cuál es la norma que debió aplicarse como consecuencia de la aplicación indebida de la norma citada.

Los defectos que se anotan, especialmente el relacionado con la causal, es motivo suficiente para inadmitir el presente recurso, en virtud de que el tribunal ignora en qué se fundamenta el recurrente para presentar el recurso.

SEGUNDO RECURSO

El licenciado Rubén Moncada Luna, actuando en su condición de defensor de RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON, quien fuera condenado a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como autor del delito de tortura en detrimento del señor CARLOS RODOLFO WORRELL BEST, anunció y formalizó el recurso dentro de los términos establecidos por la ley y como quiera que es el apoderado especial del sentenciado, posee legitimación activa y, como se dijo antes, el proceso que se sigue en este caso es por delito al cual la ley le señala pena superior a dos años de prisión.

Respecto a los requisitos que al tenor del artículo 2443 debe contener el escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, se puede anotar lo siguiente:

a) La historia del caso recoge una relación sucinta de los hechos en las distintas fases del proceso.

b) La causal que se invoca es una de las que describe el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial, de carácter probatorio y que consiste en el error de derecho en la apreciación de la prueba.

c) Respecto a los motivos, el recurrente anota el foliado de los testimonios, que de acuerdo con su opinión han sido apreciados erróneamente y en el segundo de ellos transcribe un fragmento de tal testimonio, práctica esta que ha sido censurada por la Sala Penal, debido a que el carácter técnico de este recurso no admite alegatos, ni transcripciones del expediente a través de los motivos que sirven de sustento a la causal invocada. Por ello, basta citar las páginas en las que se encuentra el medio probatorio que se estima erradamente apreciado.

d) En lo que se refiere a las disposiciones legales infringidas y al concepto en que lo han sido, no se advierte en su presentación ningún defecto formal.

Como quiera que se han hecho objeciones, respecto a la presentación de los motivos, es necesario enmendar los defectos anotados dentro del término que concede el artículo 2444 del Código Judicial.

TERCER RECURSO

El recurso de casación presentado por el licenciado Eliécer A. Pérez Sánchez, en su condición de apoderado especial de ALAÍN ARCENIO ODA, aparece de folios 921 a 930 del expediente. Respecto a los requisitos externos, que tienen que ver con el cumplimiento de los principios de oportunidad, legitimación activa y material para que prospere un recurso extraordinario de esta naturaleza, cabe señalar que en las constancias procesales, estos aparecen debidamente cumplidos, por tanto no cabe objeción en ese sentido.

En cuanto a los requisitos internos, el primero de ellos que exige la presentación de un resumen o historia concisa del caso, tal exigencia se cumple con una relación general de los hechos que conforman las distintas etapas de este proceso penal.

La causal que se invoca, al igual que en el recurso anterior, es de carácter probatorio y consiste en el error de derecho en la apreciación de la prueba que implica la infracción de la ley sustancial penal y que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia censurada. Esta denominación, recogida por el numeral primero del artículo 2434 del Código

Judicial, ha sido aceptada en precedentes de esta Sala.

Con relación a los motivos, el casacionista cita varias declaraciones, con la anotación de la página en que se encuentran, precisando que las mismas no fueron correctamente valoradas y que por ello se violó de manera indirecta el artículo 160 del Código Penal.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y su concepto, se advierte con respecto al artículo 896 del Código Judicial que se afirma fue violado por omisión, no obstante, la técnica de este recurso nos indica que el concepto de la infracción se puede dar por violación directa de la ley, bien por omisión o por comisión o por aplicación indebida, o por interpretación errónea, pero no hay ningún concepto de la infracción que se dé en forma escueta por omisión. Con relación al artículo 160 que se cita igualmente como infringido, el casacionista indica que fue violado de manera directa por indebida aplicación, expresión que no es correcta, pues la ley se viola por indebida aplicación y en este supuesto el recurrente está obligado a señalar cuál es la norma que debió aplicarse en forma debida, en reemplazo o sustitución de la que fue indebidamente aplicada.

Los defectos formales anotados dan lugar a una corrección del escrito de formalización del recurso, conforme a los términos de ley.

CUARTO RECURSO

Tal como se anotó al inicio, el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, en su calidad de defensor de FELIPE CAMARGO AMAYA, también presentó recurso de casación contra la sentencia de 28 de diciembre de 1995, reformatoria de la de primera instancia, que condena a su representado a la pena principal de cinco años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, una vez cumplida la pena principal.

Con relación a este recurso, tal como lo indica el auto de 17 de abril de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior, todos los recursos fueron anunciados mediante memoriales, dentro del término de la ejecutoria de la resolución recurrida, formalizadas en tiempo oportuno por los defensores particulares de los sentenciados, lo que les da la categoría de partes legítimas en el recurso y el proceso seguido es por delito cuya penalidad es susceptible de ser revisada mediante un recurso extraordinario.

En lo que se refiere a los requisitos que exige el artículo 2443 del Código Judicial, en este caso concreto nos encontramos que el casacionista ha formulado cuatro causales, una de forma y tres de fondo, lo que obliga a un análisis separado de cada una de ellas.

Como historia sucinta del caso se presentan tres párrafos que anotan la fecha de presentación de la denuncia, la del auto de llamamiento a juicio y las de las sentencias de primera y segunda instancia. Como se puede apreciar de esta historia del proceso penal, no se pone de manifiesto los vicios de injuridicidad que se le endilgan a la sentencia objeto de este recurso.

a) Primera causal invocada:

Se trata de la causal contenida en el numeral primero del artículo 2437 del Código Judicial, que se refiere a la falta de competencia del tribunal. Con relación a los motivos, las disposiciones infringidas y al concepto de la infracción que se plantea en los párrafos subsiguientes en apoyo a la causal invocada, en lo formal, no se advierten defectos que la hagan inadmisible,

b) Segunda causal invocada:

Como segunda causal, plantea una de fondo, contemplada en el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial, la cual es la infracción de la ley sustantiva penal en concepto de violación directa por omisión. Dicha causal está incorrectamente descrita y no se ajusta a lo que la ley señala. Como consecuencia de ello, los motivos al igual que las disposiciones legales que se dicen

infringidas y el concepto de la misma, carecen de relevancia, por no ser coherentes con una causal que tiene apoyo en una norma jurídica.

c) Tercera causal invocada:

Se plantea como causal de fondo el error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustancial, la cual responde a la denominación que le da el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial.

Al revisar los motivos en que se funda esta causal de tipo probatorio, se advierte que el casacionista omite anotar los folios en que aparecen las pruebas que fueron objeto de error de derecho en su apreciación por el tribunal de segunda instancia.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, desde el punto de vista formal no se advierte defecto alguno.

d) Cuarta causal invocada:

Con base en el numeral 6 del artículo 2434 del Código Judicial se invoca el "haberse sancionado un delito a pesar de que circunstancias posteriores a su ejecución impidan el castigo".

Un examen de los motivos en que se apoya esta causal, nos permite advertir que los distinguidos con los números 4, 5, 6 y 8 no tienen el carácter estricto de hechos en los que se fundamenta la causal, sino en alegatos y conclusiones muy particulares del casacionista.

Sobre las disposiciones legales infringidas y su concepto solamente se anota el artículo 91 del Código Penal, sobre el cual no hay objeción alguna que hacer.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE lo siguiente:

1° NO ADMITE el primer recurso presentado por el licenciado Ramiro Fonseca Palacios, en virtud de que no cumple con las exigencias básicas establecidas en el artículo 2443 del Código Judicial;

2° Con relación al segundo recurso se CONCEDE un término de cinco (5) días para su corrección en la forma anotada en esta resolución;

3° Respecto al recurso presentado por el licenciado Eliécer A. Pérez Sánchez se CONCEDE al casacionista el término previsto por el artículo 2443 para que haga las enmiendas conforme a las anotaciones que se hacen en los párrafos precedentes.

4° En cuanto al recurso de casación presentado por el licenciado Carlos E. Carrillo Gomila, SE ADMITE el recurso presentado en cuanto a las causales primera y tercera e INADMITE la segunda y cuarta invocadas.

5° Se DISPONE mantener el negocio en Secretaría por el término de cinco (5) días a fin de que los recurrentes procedan a realizar las correcciones antes indicadas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE MARXIO

MARINO HERAZO A. Y JAVIER ROLANDO JURADO ARROCHA, POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PERJUICIO DE ROGELIO HERRERA, TRINIDAD CASTILLERO, LUCRECIA ESCALONA, VALENTÍN DOMÍNGUEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del trámite del recurso de casación interpuesto por la licenciada Ana Belfon en representación de **JAVIER ROLANDO JURADO ARROCHA**, contra la resolución de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 19 de mayo de 1993, que condenó a éste a una pena de 46 meses de prisión, y confirmó en todo lo demás la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de Herrera, Ramo Penal, que lo había condenado a la pena principal de seis (6) años de prisión, y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por tres (3) años, por ser responsable del delito contra la Libertad Individual y Violación de los Derechos Humanos, el Licdo. Luis Carlos Cabezas, quien asumió la defensa del precitado **JURADO ARROCHA**, presentó solicitud en la Secretaría de la Sala -y que fue recibida por insistencia- el 27 de septiembre de 1995, para que se declarara la prescripción de la pena y se ordenara el archivo del expediente, por razón de que su representado fue beneficiado por el indulto emitido por el Presidente encargado de la República, Licdo. Tomás Gabriel Altamirano Duque mediante el Decreto N° 476 del 7 de septiembre de 1995, y que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 22,865 del viernes 8 de septiembre de 1995.

Reiteró su solicitud el letrado, mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 1995.

Empero, el 13 de noviembre del mismo año, luego de que el Licdo. Cabezas no se presentara a la audiencia de sustentación del recurso que nos ocupa, el Magistrado Sustanciador, en Sala Unitaria emitió una resolución mediante la cual declaró clausurada la audiencia y condenó al abogado defensor al pago de una indemnización de cien (B/.100.00) balboas a favor del Fisco, en base a lo normado por el artículo 2447 del Código Judicial.

El 27 de diciembre, el actor del recurso presentó una solicitud de reconsideración de la resolución anterior, considerando que -en base al artículo 2447 del Código Judicial- su ausencia de la audiencia estaba debidamente justificada por la emisión del indulto ya conocido.

Considera esta Corporación de Justicia que le asiste la razón al recurrente, tanto en la solicitud de prescripción de la acción penal, como en lo referente a la reconsideración de la sanción impuesta, toda vez que en el presente caso, ya se dictó sentencia -tanto de primera como de segunda instancia-, siendo que el indulto que favoreció a **JURADO ARROCHA** produce la extinción de la acción penal y de la pena.

Por ello, considera esta Colegiatura que cabe reconsiderar la sanción impuesta al Licdo. Cabezas, y declarar la extinción de la acción penal y de la pena, dado que el Decreto Ejecutivo en comento tiene fuerza de ley.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE LA RECONSIDERACIÓN solicitada por el licenciado Luis Carlos Cabezas, y en consecuencia REVOCA la resolución emitida el 5 de diciembre de 1995; y, DECLARA LA EXTINCIÓN de la acción penal y de la pena, en el presente caso.

Se ordena la libertad de JAVIER ROLANDO JURADO ARROCHA, siempre que no tenga otra causa penal no incluida en el Decreto Ejecutivo N° 476 del 6 de septiembre de 1995, que amerite detención preventiva.

Cúmplase y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites de sustanciación y verificada la audiencia correspondiente, pasa la Sala Penal a decidir sobre el recurso extraordinario de casación en el fondo presentado por el Licenciado Carlos Carrillo Gomila en representación de Felipe Camargo Amaya, contra la sentencia de 28 de agosto de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que confirmó la sentencia de primera instancia mediante la cual el Juzgado Undécimo del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a Camargo Amaya a la pena de 3 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período, como responsable de delito contra la libertad individual cometido en perjuicio de Ernesto Gil Vega Kennedy.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

Las piezas del proceso indican que el día 7 de septiembre de 1990, el señor Ernesto Gil Vega Kennedy presentó en la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá una denuncia criminal contra Felipe Camargo Amaya, Ricardo Goty y Esteban Ramos, todos ex-miembros de las extintas Fuerzas de Defensa de Panamá, por haberle infligido torturas físicas y psicólogicas el día 18 de marzo de 1988, en las oficinas del antiguo G-2, mientras le interrogaban por su supuesta participación en un intento de golpe contra el Ex-General Manuel Antonio Noriega.

El denunciante narró que Felipe Camargo Amaya le golpeó tres veces, primero con la mano en la cara y luego con una manguera gruesa en el cuerpo y las piernas que lo hicieron caer y luego le amenazó de seguirle golpeando y ponerle corriente eléctrica para que dijera todo lo que sabía sobre el intento de golpe al General Noriega.

El Juzgado Undécimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, acogiendo la solicitud de la Fiscalía Séptima del Circuito, abrió causa criminal contra Camargo Amaya por los delitos genéricos contra la libertad individual y contra la Comunidad Internacional.

Así mismo declinó a la competencia de los juzgados municipales lo relativo a la conducta de los denunciados Ricardo Goty y Esteban Ramos.

Apelado el auto de proceder, el Segundo Tribunal Superior de Justicia lo reformó confirmando el enjuiciamiento criminal de Camargo Amaya sólo por el delito contra la libertad individual previsto en el capítulo III, Título II, Libro II del Código Penal.

Celebrada la vista oral, el procesado se declaró inocente, pero el tribunal de primera instancia declaró penalmente responsable y le impuso la pena de tres años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

La condena fue apelada por el procesado y por su defensor técnico, pero fue confirmada en todas sus partes por la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, objeto de este recurso de casación.

En sentencia de 24 de enero de este año, de las cuatro causales, una de forma y tres de fondo originalmente aducidas por el recurrente, esta Corporación solo admitió una causal en el fondo, prevista entre otras en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, a saber: cuando se haya incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que implica infracción de la ley sustantiva.

MOTIVOS ADUCIDOS

Son seis los motivos aducidos en los cuales el casacionista apoya su causal. A continuación se resumen en lo siguiente:

1° Que el Tribunal ad quem consideró probados en el proceso los hechos denunciados por el señor Ernesto Gil Vega Kennedy, confiriéndole "plena validez probatoria" para "considerar probada la tortura".

2° Que la sentencia impugnada se basó en medios de pruebas que no cumplen los requisitos legales para que tengan plena validez como prueba. Los testimonios de Rigoberto Abilio Lombardo Franco, José Salvador Manfred Arosemena, Jorge Luis Santamaría y del propio denunciante son contradictorios en circunstancias de modo y tiempo.

3° La deposición del denunciante es producto de la "relación sindicado-investigador" y al confrontarse con los otros testimonios hacen surgir contradicciones.

4° Las deposiciones de los testigos son referenciales, ya que no "deponen sobre percepciones propias".

5° No se tomó en cuenta el dictamen pericial del Ministerio Público en lo que respecta a las condiciones físicas y psicológicas del ofendido.

6° Por todo lo anterior, el fallo impugnado incurre en la causal invocada.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista aduce que se han infringido seis disposiciones del Código Judicial y una del Código Penal.

1. Considera violado el artículo 896 del Código Judicial, que establece qué testigos son sospechosos para declarar.

La infracción sería por la modalidad de omisión.

Afirma que el Tribunal debió considerar testimonio del denunciante como sospechoso, ya que por haber sido objeto de una investigación en la que "supuestamente fue objeto de maltratos e incluso amenazas" debió surgir un grado de enemistad, por lo que mal podía valorarse con "plena validez" dicho testimonio.

2. Considera violado el artículo 904 del Código Judicial, que establece que el principio de la sana crítica que debe orientar la valoración de las pruebas por el Juzgador.

La infracción sería en forma directa por comisión.

Afirma que el Tribunal ad quem valoró indebidamente el testimonio del denunciante Vega Kennedy, dándole plena validez a su versión sobre malos tratos, torturas y amenazas que le infligiera el procesado, sin apreciar que esta deposición era contraria a otros medios de pruebas.

En particular, considera el casacionista que no tomó en cuenta la posterior declaración notarial de Gil Vega en que desistía de la denuncia presentada contra Felipe Camargo Amaya.

3° Aduce la infracción del artículo 908 del Código Judicial que resta

validez a las declaraciones contradictorias del testigo sobre las circunstancias de modo, lugar y tiempo y que declare por cohecho o seducción.

La infracción sería directa por omisión.

Afirma que las declaraciones del denunciante Vega Kennedy y del testigo Rigoberto Abilio Lombardo Franco se contradicen recíprocamente en cuanto a las circunstancias de tiempo y de modo.

En primer lugar, el denunciante declaró que, luego de ser objeto de los supuestos vejámenes fue pasado donde los detectives Manfred y Lombardo y allí frente a ellos se le dieron torturas sicológicas sin ser golpeado físicamente.

Por su parte, el testigo Lombardo Franco declaró que Camargo Amaya lo agarró por la mano y le dio unos manguerazos en las piernas.

Ambas declaraciones, según el casacionista, serían contradictorias en las circunstancias de tiempo y modo.

4. Considera que se infringió el artículo 909 del Código Judicial que resta validez a la deposición del testigo de referencia.

La infracción sería directa por omisión.

Afirma que la sentencia confirmatoria impugnada dio valor a testimonios de referencia, como el de Lombardo Franco quien dijo haber visto a Camargo Amaya golpear a Vega Kennedy, no obstante la declaración de éste último, de que este testigo no estaba presente cuando fue vejado por Camargo.

5. Aduce la infracción del artículo 967 del Código Judicial sobre el valor de la prueba pericial.

La infracción habría sido directa por omisión.

El Tribunal ad quem, afirma el recurrente, no consideró el dictamen médico elaborado por el Doctor Jaime Arias Moreno, médico forense patólogo del Instituto de Medicina Legal, que no evidenció en el denunciante lesiones traumáticas, ni le asignó incapacidad alguna; ni de los psiquiatras forenses Doctores Guillermo García Ruiz y Roxana de Pachar, también del Instituto de Medicina Legal, quienes no encontraron en Vega Kennedy trastornos de sus facultades mentales, ni secuelas de estos que alteraran sus relaciones intrafamiliar o social.

Esta prueba pericial desvirtuaría la versión del denunciante de haber sido torturado física y sicológicamente, ya que habrían señales o secuelas de éstas.

6. Aduce la infracción del artículo 2144 del Código Judicial sobre el valor de la prueba testimonial al tenor del principio de la sana crítica.

Este artículo habría sido violado en forma directa por omisión.

Afirma, que la sentencia confirmatoria impugnada "confirió valor probatorio a elementos de prueba llegados al proceso que no cumplen con los requisitos establecidos para su valoración probatoria".

7. Finalmente aduce la infracción del artículo 160 del Código Penal que castiga al servidor público que someta a un detenido a severidad o apremios indebidos con prisión de 6 a 20 meses.

Y agrava la responsabilidad penal de éste, si el hecho consiste en torturas, castigo infamante, vejaciones o medidas arbitrarias, con una sanción de 2 a 5 años de prisión.

La infracción sería directa por omisión.

El recurrente afirma se consideró como probada "la tipicidad penal de los delitos imputados" a su representado, sobre la base de elementos probatorios

indebidamente apreciados por el Tribunal ad quem, lo que se traduce en la violación de la norma transcrita.

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL

El Señor Procurador General de la Nación conceptúa que la sentencia impugnada no debe ser casada, ya que el casacionista no ha logrado demostrar la injuridicidad de la sentencia atacada y que el Tribunal ad quem ponderó adecuadamente los elementos probatorios que sustentan la responsabilidad penal de Felipe Camargo por el delito contra la libertad individual en perjuicio de Ernesto Gil Vega Kennedy.

Afirma que la lectura de los seis motivos expuestos permiten concluir que éstos no logran establecer:

1. Que la resolución impugnada fue proferida sobre la base de un error in iudicando.

2. Que el error ha influido en lo dispositivo del fallo.

3. Que existe un nexo de causalidad entre el error, la parte resolutiva de la sentencia y la infracción de la ley.

Al referirse de manera específica a los motivos del recurrente, afirma el Señor Procurador General de la Nación, que algunos de éstos no contienen el cargo de injuridicidad.

Así por ejemplo, el primer motivo donde se dice que se le confirió plena prueba a los elementos aportados al expediente, "no se señala a qué pruebas se refiere" (f. 340).

Con relación al segundo motivo, afirma, se argumenta que las pruebas no cumplen con los requisitos de ley y que existen contradicciones entre los testimonios, "sin embargo, no se señala qué requisitos y cuáles son las contradicciones" (f. 340-341).

El sexto motivo se limita a expresar que en base a los anteriores motivos se incurre en la causal aducida, sin contener en sí mismo un cargo de injuridicidad.

Concluye que estos motivos no tienen un censura precisa y objetiva contra la sentencia que se impugna como contraria a derecho.

Por otro lado, afirma que los motivos tercero y cuarto son apreciaciones subjetivas del recurrente, pues al señalar que lo depuesto por el denunciante Vega Kennedy es producto de la relación sindicado-investigador (tercer motivo) y que los testimonios son referenciales (cuarto motivo) sin dar una explicación razonada del por qué llega a esta conclusión, termina siendo una opinión personal acerca de las pruebas.

Finalmente, con relación al quinto motivo, el Jefe del Ministerio Público considera que el mismo no es congruente con la causal alegada, pues al afirmar que el Tribunal Superior no consideró los dictámenes periciales rendidos por los médicos forenses del Ministerio Público, este motivo realmente corresponde a una causal distinta, la de error en la existencia de la prueba.

Con relación a las disposiciones legales que habrían sido infringidas por la sentencia impugnada, afirma el señor Procurador General que el artículo 896 del Código Judicial no resulta vulnerado, ya que el Tribunal ad quem no basó su decisión solamente en el testimonio del denunciante, sino también en los otros medios de prueba que debidamente concatenados con la primera, demuestran sin ninguna duda que Camargo Amaya es responsable del delito que se le imputa.

Son estas las deposiciones del denunciante (f. 1 a 15), de Rigoberto Abilio Lombardo Franco (f. 19-21), de José Salvador Manfred (f. 22-23) y de Luis Santamaría Martínez (f. 24-25).

Agrega que la condición de sospechosa que atribuye a la declaración del denunciante, no impide que el juzgador la valore, aunque esta valoración debe hacerse con mayor rigurosidad.

Con relación al artículo 904 del Código Judicial, afirma que el casacionista incurre en una contradicción ya que afirma que se vulneró el artículo "por comisión", lo que implica lógicamente:

1. Que el Juez aplicó la sana crítica cuando no debió hacerlo.

2. Que tomó en consideración los motivos que disminuyen la fuerza del testimonio del denunciante, pero los obvió al dictar sentencia.

Y por otro lado, afirma que al apreciar en contra de la sana crítica el testimonio del denunciante, violó el artículo por omisión, es decir dejó de aplicarlo.

En otras palabras, hay una incongruencia entre la forma de violación del artículo 904 y su explicación.

Con relación a la aducida violación del artículo 908 del Código Judicial, afirma el Procurador General que el recurrente no se ajusta en su argumento al supuesto normativo de este artículo que resta validez a las contradicciones circunstanciales de modo, lugar y tiempo y de otra naturaleza, en que incurra un solo testigo en una o en varias declaraciones y no a las contradicciones de este mismo tipo en que incurran distintas personas en otras tantas declaraciones.

Refiriéndose al artículo 909 del Código Judicial que se dice también violado, afirma que el testigo Lombardo Franco no es testigo de referencia, ya que de autos (f. 19-21) se colige claramente que él presenció los hechos y que por tanto su declaración refleja lo que vio durante el interrogatorio de Vega Kennedy.

Con relación a la violación del artículo 967 del Código Judicial, afirma que el que los exámenes médico-legales practicados al denunciante Vega Kennedy no demuestren la existencia de tortura física o sicológica no significa que el mismo no las sufrió.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 18 de marzo de 1988 y el examen médico-legal se realizó el 25 de septiembre de 1990, dos años seis meses y siete días después, lo que imposibilita después de tanto tiempo la permanencia de huellas visibles compatibles con tipo de golpes recibidos.

Igual razonamiento hace con relación a la ausencia de trastornos mentales y las secuelas que estos pueden dejar.

Las pruebas incorporadas en autos acreditan que el denunciante fue vejado física y sicológicamente y estas pruebas fueron debidamente interpretadas por el tribunal ad quem.

Con relación a la aducida infracción del artículo 2144 del Código Judicial, expresa que el recurrente no ha explicado ninguna consideración jurídica para sustentar que el Tribunal Superior omitió aplicar las reglas de la sana crítica al valorar la prueba testimonial recogida en autos.

No explica el casacionista por qué el razonamiento del juez es ilógico, por qué no está acorde con el entendimiento humano o con la experiencia y cómo llega a estas conclusiones.

Concluye el Procurador General que el casacionista no ha podido, por las pretermisiones anteriores, demostrar la infracción de la norma sustantiva contenida en el artículo 160 del Código Penal por error en la apreciación de la prueba y por ende que la sentencia confirmatoria impugnada sea contraria a derecho.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Antes de decidir, debe la Corte recapitular el sentido y alcance de la causal en el fondo prevista, junto a otras cuatro, en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, a saber, la error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial. De acuerdo a la doctrina casacionista y a la propia jurisprudencia de la Sala, esta causal puede darse en los siguientes supuestos:

1. Cuando el juzgador acepta un medio probatorio no reconocido por la ley.

2. Cuando el juzgador da al medio probatorio un valor que no le atribuye la ley.

3. Cuando el juzgador le niega al medio de prueba el valor que sí le atribuye Ley.

Además, el casacionista sólo puede aducir en esta causal el error manifiesto y relevante del Juzgador.

Al respecto, ha escrito la Magistrada Aura Guerra de Villalaz, citando precedentes de esta Superioridad:

> "A los conceptos mantenidos por la doctrina, se agrega que el Tribunal de Casación sólo puede conocer del error de derecho en la apreciación de la prueba cuando hubiere un error manifiesto del Tribunal ad quem en el proceso valorativo del medio probatorio en forma tal que si no se hubiera cometido tal error, el mismo no habría influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada. Coherente con lo expresado, la Sala Segunda de la Corte de nuestro país, en fallo de 7 de junio de 1991, dijo: "También se comete el mencionado error cuando el juzgador se aparta de los principios establecidos por la ley para valorar la prueba, aún cuando la propia Ley no tase el valor que debe dársele a la misma. Claro está el error debe ser manifiesto de manera que si no se hubiere cometido, el fallo sería distinto. Además esta causal requiere que el Juzgador haya estimado valorado el medio probatorio." (FÁBREGA P. Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura E., "Casación", Panamá, 1995, pág. 319-320).

La Sala comparte los criterios esbozados por el Señor Procurador General en cuanto a los motivos 1, 2 y 6, ya que evidentemente los mismos no contienen cargos concretos de injuridicidad contra la sentencia recurrida.

Al manifestar el recurrente, que el Tribunal ad quem consideró probados en el proceso los hechos denunciados por el señor Ernesto Gil Vega Kennedy, confiriéndole "plena validez probatoria" para "considerar probada la tortura", sin agregar más nada, le impide a la Sala enjuiciar la posible contradicción de la sentencia con la ley sustancial.

Igual debe decirse con relación a la afirmación del recurrente que la sentencia impugnada se basó en "medios de pruebas" que no cumplen los "requisitos legales" para que tengan plena validez como tales y que los testimonios de Rigoberto Abilio Lombardo Franco, José Salvador Manfred Arosemena, Jorge Luis Santamaría y del propio denunciante son "contradictorios."

Si el recurrente no explica cuáles son esos medios de prueba, esos requisitos legales y en qué consiste dicha contradicción, no puede en su lugar hacerlo la Corte.

El carácter de impugnación limitada del recurso de casación, le impone a la Sala reducir su actividad a las causales específicamente señaladas por el recurrente y por ende a los motivos aducidos en sustentación de éstas, no pudiendo casar una sentencia por motivos no expresados clara y circunstanciadamente aunque pudieran lógicamente inferirse de autos, circunstancia que tampoco se da en el negocio sub judice.

El motivo 6 ni siquiera es tal. No contiene ningún cargo específico de

injuridicidad y ni siquiera tiene autonomía propia porque se limita hacer referencia a los cinco motivos anteriores para concluir que el fallo impugnado incurre en la causal invocada.

En el motivo 3, el recurrente afirma que deposición del denunciante es producto de la "relación sindicado-investigador" y al confrontarse con los otros testimonios hacen surgir contradicciones.

La forma como se invoca este motivo no permite conocer con precisión cuál es el cargo de injuridicidad contra la sentencia.

Por un lado, se afirma que lo depuesto por el denunciante Vega Kennedy es producto de la relación sindicado-investigador y por el otro que al confrontarse con las otros testimonios emergen "contradicciones" que no fueron debidamente valoradas conforme a derecho.

Pero no profundiza sobre la incidencia de esa supuesta relación sindicado-investigador sobre la parte dispositiva de la sentencia y su relación directa con la infracción de la ley sustancial y tampoco indica en qué consisten esas contradicciones que surgen al confrontar esa deposición con las otras pruebas testimoniales.

En el motivo 4, afirma que los testigos de cargo son todos referenciales, ya que no "deponen sobre percepciones propias".

Este motivo, sólo mínimamente más preciso que los anteriores no tiene sustentación en autos, porque Rigoberto Abilio Lombardo Franco (f. 19-21), de José Salvador Manfred (f. 22-23) y de Luis Santamaría Martínez (f. 24-25) declaran sobre lo que vieron y no son testimonios indirectos o de referencia.

La Corte comparte también la opinión del Señor Procurador General de la Nación con relación al motivo número 5.

Al aducir el recurrente que el Tribunal ad quem no consideró los dictámenes periciales rendidos por los médicos forenses del Ministerio Público, en realidad hace referencia a una causal distinta de la invocada, la de error en la existencia de la prueba, porque es lógicamente incompatible aducir error de derecho en la apreciación de un medio de prueba, si el mismo no fue ni siquiera valorado.

Tampoco resultan suficientes el concepto de infracción de las disposiciones legales aducidas por el recurrente.

Considera la Corte, que el Tribunal Superior no ha incurrido en error de derecho al apreciar el testimonio del denunciante Vega Kennedy y por ende que haya infringido el artículo 896 del Código Judicial.

En primer lugar, esta deposición no fue el único medio probatorio apreciado por el Tribunal ad quem para sustentar su decisión como afirma el recurrente que pudiera incidir esencialmente en la sentencia impugnada.

Esta deposición, a juicio de la Corte, se apreció correctamente, junto a los otros testimonios de cargo, sin que surja de ellos contradicción alguna.

Tanto Vega Kennedy al ser recibido como detenido por Camargo, como Lombardo Franco, Manfred Arosemena y Santamaría Martínez, al someterle a interrogatorio, fueron contestes en declarar que Camargo Amaya amenazó y golpeó al denunciante, mientras estuvo detenido en las instalaciones del G-2, y se le interrogaba sobre su participación en el intento de golpe contra Noriega.

Las aprensiones del recurrente podrían tener algún fundamento si el Tribunal ad quem hubiese basado su decisión exclusivamente sobre el testimonio de Vega Kennedy; y aún así la calidad de testigo sospechoso que le imputa el recurrente debería haber sido considerado por el Juzgador según las reglas de la sana crítica y sin descartar su valor automáticamente, como lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Superioridad.

Tampoco considera la Corte infringido el artículo 904 del Código Judicial, y menos aún por en forma directa por comisión.

No se encuentra ningún reparo a la apreciación de las pruebas testimoniales de cargo que recaen sobre la conducta de Camargo Amaya y que según la valoración del Tribunal Superior son suficientes para declarar su responsabilidad penal.

Nada indica que el ad quem las haya apreciado fuera de los cánones de la sana crítica.

A fojas 277-278 del proceso se lee la parte pertinente de la sentencia impugnada donde se hace referencia al valor probatorio de la declaración del denunciante y de los testigos de cargo para aprobar la decisión de primera instancia.

Como bien expresa, el Jefe del Ministerio Público, en el argumento del casacionista existe una contradicción en cuanto a las modalidades de la supuesta infracción de esta norma: Se afirma que se violó en forma directa por comisión y al explicar el concepto de la infracción se dice que el Tribunal omitió considerar la posterior declaración notarial de Vega Kennedy, lo que además sería un motivo congruente con otra causal.

Tampoco resulta infringido el artículo 908 del Código Judicial que resta validez a las declaraciones contradictorias del testigo sobre las circunstancias de modo, lugar y tiempo y que declare por cohecho o seducción.

Es evidente que el aserto del recurrente no se ajusta en su argumento al supuesto normativo de este artículo.

El casacionista no repara en el hecho que esta norma se refiere a las contradicciones circunstanciales de modo, lugar y tiempo y de otra naturaleza que puedan restar validez a la deposición de un solo testigo en una o en varias declaraciones y no a las contradicciones de este mismo tipo en que incurran distintas personas en otras tantas declaraciones.

Tampoco resulta para la Corte la infracción del artículo 909 del Código Judicial que resta validez a los testimonios indirectos o referenciales, ya que de autos se deduce claramente que Lombardo Franco no es un testigo de referencia, sino testigo presencial que vio cuando Camargo agarró por la mano a Vega Kennedy y le dio "unos manguerazos en las piernas" (f. 20).

Con relación al artículo 967 del Código Judicial, considera la Corte que tampoco tiene asidero jurídico el argumento del recurrente según el cual los dictámenes médico-legales de los forenses del Instituto de Medicina Legal, que no evidenciaron lesiones traumáticas, ni trastornos de sus facultades mentales, ni secuelas de éstos en el denunciante Vega Kennedy, demostrarían que éste no sufrió torturas físicas y sicológicas.

El artículo que se dice infringido impone al juez valorar los dictámenes periciales, en consideración a los principios científicos, su relación con los hechos, y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica.

Esta valoración debe realizarse también en concordancia con las demás pruebas y otros elementos de convicción que consten en el proceso.

No puede afirmarse que el Tribunal Superior omitiera esta operación racional, al evaluar dos dictámenes médico-legales practicados más de dos años después de ocurridos los hechos.

El sentido común, la experiencia y la lógica más elemental descartan que lesiones corporales de la intensidad que Camargo infligió a Vega Kennedy (golpes con la mano y manguerazos en los pies) puedan dejar secuelas físicas después de tanto tiempo.

Igual razonamiento puede hacerse con relación a la presión sicológica cuando la amenaza de un mal contra la persona ha dejado desde hace mucho de ser

actual e inminente.

Afirmar a dos años de ocurridos los hechos, que porque no secuelas físicas de los golpes o trastornos mentales, no hubo torturas o vejámenes contra el entonces detenido Vega Kennedy, es desconocer la propia inteligencia del artículo 967 que se dice infringido y de la propia sistemática del Código Judicial.

El artículo 967 exige que el Juzgador valore el dictamen pericial aplicando las reglas de la sana crítica en concordancia con los otros medios de prueba que consten en el proceso y el artículo 2073 del Código Judicial preceptúa que el hecho punible, no sólo se comprueba con el examen pericial, sino también con "las deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo la perpetración del mismo hecho ..."

Las pruebas testimoniales incorporadas en autos acreditan que el denunciante fue vejado física y sicológicamente, estando detenido en las instalaciones del G-2 de las fenecidas Fuerzas de Defensa y estas pruebas, a juicio de la Corte, han sido debidamente valoradas por el tribunal ad quem.

El recurrente no explica claramente en qué consiste la supuesta infracción del artículo 2144 del Código Judicial, ya que refiere genéricamente que "confirió valor probatorio a elementos de prueba llegados al proceso que no cumplen con los requisitos establecidos para su valoración probatoria".

La falta de precisión de este cargo impone a la Corte prescindir de cualquier consideración al respecto.

La falta de coherencia lógica en la exposición de los motivos y de sustentación de las supuestas infracciones a la ley analizadas, llevan a la Corte a concluir que tampoco resulta infringido el artículo 160 del Código Penal, única norma penal sustantiva aducida por el recurrente.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA, la sentencia de 28 de agosto de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONTRAPROYECTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROMOVIDA POR YADIRA CUMMINGS DE CIPPONERI Y CARMEN DONNA AVEN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista al tenor de lo que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, procede analizar el escrito de formalización del recurso de casación presentado por la firma forense Bravo, Dutary y Asociados contra la resolución judicial de 20 de octubre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la acusación particular propuesta contra **YADIRA CUMMINGS DE CIPPONERI y CARMEN DONNA AVEN** por el supuesto delito de falsedad documental.

En autos consta que el auto impugnado es susceptible de revisión a través del recurso extraordinario de casación, por estar comprendido entre las

resoluciones judiciales que menciona el artículo 2435 del Código Judicial. El recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona que ostenta el poder otorgado por la acusadora particular que actúa en este caso como sujeto procesal, por tanto, se trata de persona hábil.

Respecto a los requisitos que deben concurrir en el escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación, se advierte que en la historia concisa del caso, se relatan los aspectos relevantes del caso y se pone de manifiesto los vicios de injuridicidad que se le endilgan a la resolución censurada.

La causal alegada se ajusta a la denominación que le da la ley y en cuanto a los motivos, estos aparecen a continuación de la casual como fundamentación de la misma. También se anotan las disposiciones legales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción.

Corresponderá a otro momento procesal examinar el fondo de cada motivo presentado al igual que determinar si se registran en efecto la violación de las normas legales que se han anotado en apoyo a la causal invocada.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso presentado y dispone correr en traslado el negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco días para que emita concepto conforme lo dispone el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS GÓMEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
CON SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Con mucho respeto manifiesto mi desacuerdo con el Proyecto, afirmándome en las mismas consideraciones que exterioricé en el Proyecto que me permití elaborar.

La no admisión del recurso, igualmente la sustenté en principios atinentes a esta clase de demandas.

He ahí mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SURGIDO DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA PRESENTADO POR EL LCDO. OSCAR E. CHIRÚ OCHOA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN LAS SUMARIAS QUE SE LE SIGUEN A DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG Y OTROS POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de

competencia surgido entre el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí, Ramo Penal, Juzgado del Circuito Judicial de Bocas del Toro, Ramo Penal y el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé, Penonomé, Ramo Penal, en el incidente de controversia presentado por el licenciado **Oscar E. Chiru Ochoa**, en representación de **DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG**, contra el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial de la Provincia de Chiriquí (fs. 2-3), dentro de las sumarias seguidas a JUAN BATISTA GÓMEZ y otros, por delito contra la Salud Pública.

Según consta en autos, el incidente de controversia bajo estudio, fue presentado por el licenciado **Oscar E. Chirú Ochoa**, en representación de **DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG**, ante el Juez del Circuito Penal del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, en Turno, a fin de que se declare nula la actuación sumarial contenida desde fojas 26 a 29 y fojas 39 a 47 del expediente, es decir, la declaración indagatoria rendida ante la Fiscalía del Circuito de Bocas del Toro (fs. 10 a 18), debido a que para la fecha en que se realizó la misma, el imputado no contaba con la mayoría de edad, violándose, según el incidentista, lo normado en el último párrafo del artículo 2153 del Código Judicial.

En este orden de ideas, la Fiscalía Tercera del Circuito de Chiriquí, mediante contestación de traslado de 21 de octubre de 1994 (fs. 21 a 23), solicitó al Tribunal de su circunscripción territorial, que no accediera a lo pedido en el incidente de controversia, por considerar que el funcionario de Instrucción actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 2153 del Código Judicial, ya que tan pronto se aportó la prueba documental autenticada donde constaba que el joven DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG era menor de edad, es decir, el Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección Nacional del Registro Civil, éste fue puesto a órdenes del Tribunal Tutelar de Menores.

El Juzgado Sexto del Circuito Judicial de la Provincia de Chiriquí, mediante Auto N° 131 de 20 de febrero de 1995 (fs. 29 a 31), se inhibió de tramitar y decidir el presente incidente de controversia y dispuso declinar su conocimiento ante el Juzgado del Circuito de Bocas del Toro, Ramo Penal, de Turno, según lo establecido en el artículo 1999 del Código Judicial, por considerar:

> "... que la competencia para decidir le corresponde al Juzgado de Circuito de Bocas del Toro, toda vez que fue en esa circunscripción territorial donde se logró iniciar el hecho punible por el cual se procede, consideramos que se debe remitir la actuación, toda vez que fue allí donde se recibió la declaración indagatoria al imputado, para que sean esas autoridades jurisdiccionales las que decidan este Incidente de Controversia." (F. 30).

Por su parte, el Fiscal del Circuito Judicial de Bocas del Toro, mediante contestación de traslado de 27 de abril de 1995 (f. 35), solicitó al Juez de la causa que se inhibiera de pronunciarse en este caso y remitiera lo actuado al Juzgado del Circuito Judicial de Coclé, ya que,

> "... dentro de este expediente se ha determinado claramente que contra el señor Juan Bautista Gómez, imputado principal en la encuesta se le sigue otra investigación por el mismo ilícito en el Circuito Judicial de Coclé, lo que parece indicar que entre un hecho y otro existen (sic) conexidad conforme lo establecen los artículos 2001 y 2002 del Código Judicial respectivamente." (F. 35).

Ante tales circunstancias, el Juzgado del Circuito de Bocas del Toro, Ramo Penal, se acogió al concepto vertido por el Agente del Ministerio Público y, mediante Auto N° 113-P de 18 de mayo de 1995 (fs. 37-38), se inhibió de conocer del presente incidente y dispuso declinar el conocimiento ante el Juzgado de Circuito de Coclé, Ramo Penal, con fundamento en los artículos 2001 y 2002 del Código Judicial.

> "... en virtud de que en esa jurisdicción se adelanta un sumario, en contra de Juan Bautista Gómez (principal implicado) por la misma

causa de fecha anterior que el adelantado en esta circunscripción en contra del prenombrado Juan Bautista Gómez, así consta a folios 113 y 148 a 150 de autos." (F. 38).

En emisión de concepto de 28 de junio de 1995 (fs. 44 a 45), el Fiscal Encargado del Circuito Judicial de Coclé, opina que no debe accederse a lo pedido dentro del incidente de controversia presentado por el licenciado Oscar Eliécer Chiru Ochoa, en representación de DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FUNG, por considerar que el Funcionario de Instrucción actuó conforme a lo establecido en el artículo 2153 del Código Judicial, toda vez que,

"... al momento de ser indagado el menor DIEGO MAXIMILIANO BATISTA FUNG o DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FUNG se desconocía su calidad de menor de edad, ya que no existe en auto prueba documental que acreditaba su minoría de edad que era el Certificado de Nacimiento, expedido por el Registro Civil, razones éstas por la (sic) que consideramos que se partió del principio de que dicho joven era mayor de edad, pero tan pronto se aportó el Certificado de Nacimiento el señor Fiscal del Circuito de Bocas del Toro puso a disposición al joven DIEGO MAXIMILIANO BATISTA FUNG o DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FUNG a órdenes del Tribunal Tutelar de Menores." (F. 45).

Sin embargo, el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé, Penonomé, mediante Resolución N° 565 de 10 de agosto de 1995 (fs. 46 a 49), se declaró inhibido de pronunciarse en el presente incidente de controversia y declaró la nulidad de los Autos N° 517 de 14 de julio de 1995, que admiten el desistimiento de los incidentes y solicitudes presentados por el licenciado Oscar Eliécer Chirú Ochoa, por considerar que en el caso bajo estudio no se presentan los presupuestos del artículo 2001 de Código Judicial para que se de la conexidad y, por lo tanto, los hechos ilícitos investigados no son delitos conexos,

"Ya que el solo hecho de que un implicado aparezca en ambos casos no cumple con lo referente a la unidad de agentes o sea del resto de los implicados, ..." (F.48).

En razón del recurso de apelación presentado por el licenciado Oscar Eliécer Chiru Ochoa (fs. 52 a 55), contra la Resolución N° 565 de 10 de agosto de 1995 (fs. 46 a 49), se remitió el presente incidente al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que mediante Resolución de 27 de marzo de 1996 (fs. 66 a 69), se inhibió de entrar a resolver el presente incidente de controversia y ordenó remitir el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta decida lo pertinente al conflicto de competencia surgido, según lo establecido en el artículo 2287 del Código Judicial, luego de las consideraciones siguientes:

"El incidentista, al sustentar su apelación, solicita a este Tribunal Superior declare la viabilidad de la competencia en la jurisdicción territorial del circuito penal de la Provincia de Coclé, ya que existe la conexión planteada por sus holmólogos de la Provincia de Chiriquí, toda vez que la aprehensión de la droga incautada en la Provincia de Bocas del Toro, surge de una información suministrada por el señor Juan Bautista Gómez, cayendo el mismo en la figura de mero denunciante y, como tal, procede que dentro de la instrucción sumarial se agregue una diligencia de declaración jurada la cual, a la fecha, los funcionarios de instrucción han obviado dentro de la presente encuesta.

La Fiscal del Circuito de Coclé, al oponerse a la apelación interpuesta por la defensa de GÓMEZ FONG, argumenta que el delito descubierto en este distrito judicial no tiene conexibilidad alguna con el descubierto en la comunidad de Rambala, por el hecho que dentro de ambos procesos no se encuentra debidamente acreditado el concierto previo de los agentes infractores para la ejecución del ilícito.

> Agrega la opositora que en el caso descubierto en Rambala se encontraron pruebas materiales del delito, y que de cuyos agentes infractores aprehendidos, hasta la fecha las investigaciones no han demostrado que en efecto se esté dando la conexibilidad contemplada en los artículos 2001 y 2002 del Código Judicial. ...
>
> Coincidimos con los criterios vertidos por la Fiscal del Circuito de Coclé, en el sentido de que, al inhibirse el Juez Segundo del Circuito de Coclé, de decidir el presente incidente de controversia, no se debió admitir el recurso de apelación interpuesta (sic) por el incidentista, ya que no nos corresponde como Tribunal Superior conocer del presente conflicto de competencia, originado por dicho incidente, ni mucho menos del fondo del mismo, debido a que tal conflicto se produce entre jueces de circuitos de diferentes distritos judiciales." (Fs. 67-68).

Mediante Vista N° 36 de 3 de junio de 1996 (fs. 73 a 78), el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., luego de una breve exposición doctrinal y legal sobre el tema, emitió su concepto de que en el presente caso no se ha configurado la figura jurídica de la conexidad, ya que no se trata de una pluralidad de delitos -dos o más- y, en este sentido, señala que:

> "Debemos recordar, que el hallazgo de la droga en Bocas del Toro, se debió a la declaración indagatoria rendida por el señor **JUAN BATISTA GÓMEZ**, el 24 de junio de 1994 ante la Secretaría de Drogas de la Provincia de Coclé, cuando manifestó lo siguiente:
>
> 'Quiero agregar, que allá en Rambala, el señor que conozco como Plinio dejó unas cajetas similares a los (sic) que llevaba hoy en una construcción de los servicios ...'
>
> Con esta información, se practicaron diligencias en la circunscripción de Bocas del Toro, dando como resultado el hallazgo de cierta cantidad de droga, que a nuestro criterio, no constituye un nuevo delito, sino que entra a formar parte del material ilícito que fue encontrado en Coclé y que dio lugar a que se iniciara la investigación." (F. 77).

Por lo tanto, considera el Jefe Máximo del Ministerio Público que, según el artículo 1999 del Código Judicial, por haberse ejecutado el hecho ilícito generador de la investigación en la circunscripción territorial de Coclé, el tribunal competente para resolver el presente incidente de controversia lo es, pues, el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé.

Luego del análisis de las piezas procesales que componen el presente negocio, la Sala entra a resolver tomando en cuenta que la controversia que se ha suscitado en esta causa penal, consiste en un conflicto de competencia negativa, en el cual tres (3) tribunales diferentes niegan cada uno tener competencia para conocer del proceso bajo estudio.

Tomando en cuenta que el conocimiento del incidente de controversia en cuestión, corresponde al tribunal competente para conocer del negocio penal principal dentro del cual se interpone el mismo.

En este sentido, esta Sala se ha pronunciado en diversos fallos respecto al lugar donde el delito debe suponerse realizado, siguiéndose la tesis de que el hecho punible se entiende cometido en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción; o donde debió realizarse la acción omitida, con fundamento en el artículo 18 del Código Penal, cuyo texto es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 18: El hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, aún cuando sea otro el momento del resultado".

Siendo que, por tratarse del mismo hecho punible, la investigación iniciada

en la Personería Municipal del Distrito de Chiriquí Grande, circunscripción territorial del Circuito Judicial de Bocas del Toro, guarda relación con las sumarias que se le siguen a JUAN BATISTA GÓMEZ, por supuesto delito contra la Salud Pública en la circunscripción territorial del Circuito Judicial de Coclé, circunscripción territorial ésta en la que es competente el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé, según el criterio antes expuesto.

Por lo anterior, la Sala comparte el criterio emitido por el Procurador General de la Nación, en cuanto a la adjudicación de la competencia para conocer del presente negocio, en el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE fijar la competencia para conocer del incidente de controversia presentado por el licenciado Oscar E. Chirú Ochoa, en representación de DIEGO MAXIMILIANO GÓMEZ FONG, dentro de las sumarias seguidas a JUAN BATISTA GÓMEZ y otros, por delito contra la Salud Pública, y remitirlo, para su calificación legal, al Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H CUESTAS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE OBJECIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jacinto Cerezo Góndola ha presentado Incidente de Objeciones contra la resolución N° 11, de 6 de octubre de 1995, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del proceso de extradición seguido a Alfredo López Rodríguez.

Según expresa el letrado, "Este Incidente se interpone en vista de que la Resolución de esta Honorable Sala proferida el 22 de enero de 1996 declaró no fundado en Incidente propuesto contra la Nota A. J. N° 514 de 6 de julio de 1995" (f. 1).

Como lo indica este nuevo libelo, la resolución que concede la extradición, y que ahora se censura, fue dictada el **6 de octubre de 1995**, mientras que el primer incidente de objeciones fue presentado el 25 de septiembre de 1995 -por error contra la nota A. J. N° 514 de 6 de julio de 1995- y resuelto el 22 de enero de 1996.

Por mandato del artículo 2510 del Código Judicial, dentro del proceso de extradición la persona reclamada dispone de un plazo de **15 días**, "a contar desde la fecha en que le fue notificada la resolución", para proponer el incidente de objeciones. Según consta en el cuaderno que da cuenta del trámite de la extradición, la resolución de mérito le fue notificada **personalmente** al extradido el 12 de octubre de 1995 (f. 311), lo que indica que hasta la fecha de presentación de este incidente han transcurrido **siete meses y 24 días**, lo que pone evidencia la marcada extemporaneidad de la iniciativa procesal que se examina.

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el incidente de objeciones presentado por el licenciado Jacinto Cerezo Góndola.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA

INCIDENTE DE CONTROVERSIA CONTRA LA PROVIDENCIA DE 11 DE ABRIL DE 1996, PROFERIDA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE A JOSÉ LUIS NAVARRO Y EDWIN MORENO, SINDICADOS POR LA COMISIÓN DE DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, COMETIDO EN PERJUICIO DE MANUEL SIMANCAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Al examinar el incidente de controversia interpuesto por el licenciado Luis A. Moreno H., contra la providencia de 11 de abril de 1996 proferida por el Procurador General de la Nación, la Sala advierte que la iniciativa del letrado guarda relación con el proceso penal seguido a José Luis Navarro y Edwin Morales, sindicados por la comisión de delito de privación ilegal de libertad, causa en la que, mediante resolución de 13 de junio de 1996, esta Corporación de Justicia ordenó su remisión a la esfera municipal.

Siendo esa la situación procesal, resulta indudable que el conocimiento de esta controversia corresponde a la esfera municipal del Primer Circuito Judicial, al tribunal que, de conformidad con las reglas del reparto, corresponda conocer de la causa principal (art. 2009 C. J.).

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer del presente incidente de controversia, y DISPONE declinarlo a la esfera municipal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el incidente de nulidad presentado por la firma forense **QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS**, dentro del

incidente de objeciones presentado en el proceso de extradición de **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS**, requerido por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América por la comisión de delitos relacionados con drogas.

La firma forense **QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS** fundamenta el presente incidente de nulidad, en los siguientes hechos:

> **"PRIMERO:** En base a lo establecido en el artículo 2516 del Código Judicial, la defensa del señor **Hernández Arias** presentó ante esta Sala, solicitud de fianza a favor del mismo.
>
> **SEGUNDO:** Que luego de ser admitida dicha petición por esta Sala, mediante Auto del 23 de enero de 1996 se fijó fianza de excarcelación por la suma de B/.5,000.00 a favor de **HERNÁNDEZ ARIAS**, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2516 del Código Judicial.
>
> **TERCERO:** Contra dicho Auto el Procurador General de la Nación anunció y sustentó Recurso de Reconsideración el 1 de febrero de 1996.
>
> **CUARTO:** El 31 de enero de 1996, es decir, un día antes de que el Procurador General de la Nación sustentara el Recurso de Reconsideración que había anunciado previamente, y sin esperar que se cumpliera esa etapa procesal, la Sala Segunda de la Corte Suprema de justicia (sic) dictó un Auto que **revocó** la resolución del 23 de enero de este año que concedía Fianza de excarcelación.
>
> **QUINTO:** El Auto de 31 de enero de 1996 expedido por esta Sala, hace alusión a un escrito de la Procuraduría General de la Nación que se presentó el 1 de febrero de 1996, es decir, **un día después.**
>
> **SEXTO:** La Procuraduría General de la Nación se notifica el 1 de febrero de 1996 del Auto de 31 de enero de 1996, a la misma hora en que presenta ante la Secretaria (sic) de la Sala Segunda su escrito de reconsideración contra el Auto del 23 de enero de 1996 que concede la fianza a favor de **HERNÁNDEZ ARIAS.**
>
> **SÉPTIMO:** Que la Procuraduría General de la Nación se **notificó** el 2 de febrero de 1996 de la Resolución del 23 de enero del mismo año y anunció Recurso de Reconsideración, a pesar de que ya el 31 de enero de 1996 se había revocado ese Auto sin haber notificado a la Procuraduría.
>
> **OCTAVO:** Al no haber esperado la participación del Ministerio Público en el Recurso de Reconsideración que éste había anunciado, resolviendo revocar la resolución que el mismo impugnó, se incurre en la causal que contempla el ordinal 1 del artículo 2298 del Código Judicial.
>
> **NOVENO:** Que al haberse revocado la Resolución que concedió la Fianza el 23 de enero de 1996 mediante el Auto del 31 de enero,notificando de esta ultima (sic) **solo** al Ministerio Público el 1 de febrero de 1996, en la misma fecha en que éste se encontraba presentando escrito que sustentaba su Recurso de Reconsideración previamente anunciado contra el Auto del 23 de enero, se incurre en la causal de nulidad que establece el ordinal 4 del artículo 2297 del Código Judicial.
>
> **DÉCIMO:** Que dándose dichas irregularidades, corresponde a esta Sala ordenar la reposición del proceso, anulando aquellas fojas donde se encuentran las mismas. ... ." (Fs. 1-2).

Luego, el incidentista se refiere en su escrito a las diversas irregularidades cometidas durante el proceso de extradición de **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS** y, en tal sentido, señala que:

> "En vista de todos estos defectos de forma, tanto en los diversos documentos presentados por la Embajada de Estados Unidos, al igual que por la inadecuada y dilatada tramitación hecha por el Ministerio Público, Relaciones Exteriores y la Policía Técnica Judicial, además de los hechos que hemos precisado al inicio de este escrito, que con todo respeto pedimos, se sirvan declarar la NULIDAD TOTAL del proceso de extradición en contra de **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS** solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada acreditada en nuestro país, el pasado 29 de junio de 1995 a las 11:47 p. m., y en su defecto se ordene en propiedad la libertad de dicho ciudadano." (f. 7).

Mediante Vista N° 26 de 29 de marzo de 1996 (fs. 10 a 12), el Procurador General de la Nación, solicita rechazar de plano, y por improcedente, el incidente de nulidad presentado por la firma forense **QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS,** dentro del proceso de extradición seguido a **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS**, y en ese sentido, sostiene que el incidente de nulidad que nos ocupa resulta improcedente, por las siguientes razones:

> "El artículo 2510 del Código Judicial, dentro de las normas referentes a la materia de extradición, establece el período durante el cual la parte interesada puede ocurrir a Vuestra Honorable Sala con el objeto de interponer Incidentes de Objeciones por las causales expresamente señaladas en dicha norma, ...
>
> Por su parte el artículo 2511 de la excerta antes citada establece que agotada la tramitación de la incidencia la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días hábiles siguientes resolverá si procede o no conceder la extradición solicitada, comunicándolo enseguida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la persona reclamada; es decir, dicho artículo señala de manera taxativa que una vez concluido el período de incidencia lo que procede es la notificación de la decisión al Órgano Ejecutivo y al reclamado y, bajo ningún concepto debe admitirse otro recurso ni otra incidencia ya que ello contraría el espíritu y la letra de los artículos anteriormente citados.
> ...
> En el presente caso, es claro que ya ha concluido la tramitación del Incidente de Objeciones y, por lo tanto, la Sala debió informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de este hecho a fin de que se hiciera efectiva la entrega del extradido. ... ." (Fs. 10-11).

Consta en el cuadernillo del incidente, entre otros escritos del incidentista, la solicitud de que se decrete la sustracción de materia, en vista de que **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS** fue trasladado a Estados Unidos, antes de que se resolviera el presente incidente.

La Sala considera que el negocio atacado de nulidad se encuadra dentro del concepto de sustracción de materia, toda vez que, dicho concepto, entre otras situaciones:

> "También se aplica a <u>los asuntos</u> que ya han sido resueltos previamente por el mismo Tribunal y a los <u>que con el tiempo cambian de tal manera que su decisión o solución carece de relevancia</u>" (<u>Boletín de Informaciones Jurídicas</u>, Órgano de Información del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Panamá, julio-diciembre, 1983, año IX, Segunda Época, N° 19, Pág. 1). (Lo subrayado es de la Sala).

Así, pues, la declaratoria de la sustracción de materia en el caso subjúdice, se desprende del hecho público y notorio de que la extradición de **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS** a los Estados Unidos de América se hizo efectiva, en cumplimiento de la Resolución emitida por el Órgano Ejecutivo, mediante la cual se decidió la concesión de la extradición al Estado requiriente. Por tal razón,

resultaría improcedente declarar la nulidad solicitada dentro del proceso de extradición y, emitir un fallo al respecto, carecería de relevancia jurídica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en el incidente de nulidad presentado por la firma forense QUIROZ, MURILLO & ASOCIADOS, dentro del incidente de objeciones presentado en el proceso de extradición de FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1996, PROFERIDA POR LA SALA PENAL, QUE NO ADMITE EL INCIDENTE DE OBJECIONES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Alfredo López Rodríguez, ha interpuesto recurso de reconsideración contra la resolución calendada 10 de junio de 1996, dictada por esta Superioridad, que no admite incidente de objeciones contra la resolución N° 11, de 6 de octubre de 1995, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Básicamente, el letrado censura la meritada decisión, por considerar que "no entró en materia o en el fondo de la controversia" (f. 14). La Sala considera correcto el contenido de la decisión jurisdiccional que se impugna, por considerar que resulta inadmisible que se reclame decidir sobre el fondo de una iniciativa procesal que, por haber sido declarada extemporánea, carece de "valor alguno" (art. 476 C. J).

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución calendada 10 de junio de 1996, proferida por esta Superioridad.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PENAL

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ALGANDONA ORTIZ, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD EN PERJUICIO DE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jerónimo Mejía interpuso ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, recurso de revisión contra la sentencia ejecutoriada de primera instancia dictada el 29 de julio de 1993 por el Juzgado Undécimo de Circuito, Ramo Penal, que condenó a **MIGUEL ALGANDONA ORTIZ** a cumplir la pena principal de 24 meses de prisión y las accesorias de inhabilitación para ejercer funciones públicas, cargos de elección popular y cualquier otro derecho político, por haber sido encontrado responsable del delito de falsedad en perjuicio de **PESQUERA TABOGUILLA, S. A.**.

Encontrándose el negocio en etapa de admisibilidad, se dispone la Sala a observar si el negocio cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En ese sentido, advierte esta Superioridad que el memorial indica la sentencia objeto de revisión, señala el Tribunal que la expidió, al igual que el delito que motivó la sentencia, así como la sanción impuesta, y los fundamentos de hecho y derecho que la fundamentan.

Considera la Sala que es viable la admisión del negocio, dado que la prueba presentada por el recurrente puede constituir un nuevo elemento no existente en el decurso del proceso, que podría modificar o extinguir la responsabilidad penal del justiciado.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de revisión interpuesto por el Licdo. Jerónimo Emilio Mejía E., en el presente caso.

Conforme lo establecido por el artículo 2460 del Código Judicial, se abre el proceso a práctica de pruebas, a las partes, por un período de treinta (30) días.

Notifíquese personalmente esta Resolución al señor Procurador General de la Nación y al recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR ABELARDO ANTONIO PARRA MAECHA, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

ABELARDO ANTONIO PARRA MAHECHA, mediante nota remitida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentó recurso de revisión contra la sentencia ejecutoriada expedida por el Juzgado Sexto de Circuito Penal, mediante la cual se le condena a 8 años de prisión como culpable del delito de tráfico internacional de drogas.

Ingresado el negocio, se corrió traslado del mismo al licenciado ROLANDO MARCOS HERMOSO, defensor de oficio, para que representara al recurrente en la correcta formalización del recurso interpuesto, siempre y cuando se diera causal legal que lo fundamente.

Si bien el traslado del negocio se hizo mediante providencia del 18 de

marzo de 1996, en autos consta que la misma no fue notificada hasta el 11 de mayo del presente año, según consta a folio 5 vuelta del expediente, dilación injustificada que debe corregirse en el futuro.

De folio 6 a 10 de este cuaderno, aparece el escrito presentado por el licenciado Marcos Hermoso, mediante el cual después de hacer algunas consideraciones sobre la historia procesal del caso y un análisis jurídico del recurso presentado por el reo, llega a la conclusión que a pesar de las imprecisiones en cuanto a la individualización de la pena con base al caudal probatorio, en autos no hay nuevos elementos o hechos "que pudieran ser evaluados necesariamente y que no fueron considerados en las etapas procesales del juicio". Añade, que en conversación directa mantenida con ABELARDO ANTONIO PARRA MAHECHA en el centro penitenciario Cárcel Modelo, manifestó que no contaba con nuevos elementos o medios probatorios fuera de los que había alegado en la nota manuscrita que remitió a la Sala Penal. Por tales motivos considera que no cabe la formalización del recurso de revisión.

Dado el carácter técnico del que se reviste a los recursos extraordinarios en materia penal, entre ellos el de revisión y casación, a la Sala Segunda no le es posible entrar a revisar los procesos como si se tratara de una tercera instancia, si no cuenta con los mecanismos jurídicos establecidos por la ley, que la introduzca en un análisis de fondo de las decisiones que se dan por los Tribunales de instancia. Por tal razón no puede admitirse el recurso de revisión presentado por el reo en el presente caso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por ABELARDO ANTONIO PARRA MAHECHA, sentenciado por el delito de tráfico internacional de drogas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME LEE MACHADO, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **JAIME LEE MACHADO**, mediante escrito calendado el 29 de enero de 1996, dirigido a la Procuraduría General de la Nación, presentó solicitud de acumulación de varios procesos penales que cursan en distintos Tribunales en su contra y la revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por delito contra el patrimonio.

Al caso se le imprimió el trámite propio de los recursos de revisión, razón por la cual se le corrió traslado al Defensor de Oficio de turno, para que lo asistiera en la redacción del recurso, en el supuesto de que existiera alguna causal que le sirviera de fundamento.

Dentro del término concedido, el licenciado Rubén Pecchio Ospino, defensor de oficio a quien le correspondió atender el caso, presentó el escrito que se lee de fojas 6 a 8 del expediente, al cual adjunta la documentación que aparece a partir de la página 9 a la 63, que da cuenta que cuatro juzgados penales conocen de procesos contra **JAIME LEE MACHADO**, todos por delitos contra el patrimonio, los

cuales se encuentran en distintas fases procesales y si bien es cierto que procede la acumulación de tales procesos o la unificación de penas por tratarse de un concurso real de hechos punibles, tal omisión no es causal de recurso de revisión y más bien debe dirigir esta solicitud a los Tribunales que conocen de sus casos o al Tribunal Superior.

En ese sentido se expresa el abogado defensor al señalar que "no se cumplen los requisitos exigidos por la ley procesal para interponer o formalizar el recurso de revisión solicitado por **JAIME LEE MACHADO** mediante nota dirigida a la Procuraduría General de la Nación".

Desde el momento en que no se formaliza el recurso extraordinario de revisión con la suma de los requisitos externos e internos establecidos por la ley, no le es permitido a la Sala entrar a examinar el fondo de la pretensión presentada a través de la nota comentada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor JAIME LEE MACHADO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EDUARDO VARGAS BARRÍA, SINDICADO POR EL DELITO DE ESTUPRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **EDUARDO VARGAS BARRÍA**, detenido en el Centro Penitenciario La Joya, contra sentencia que lo condenara a dieciocho (18) meses por la comisión del delito de estupro.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente, recibe esta Colegiatura el escrito calendado 16 de mayo de 1996 (f. 8), en el que el Licdo. **GUILLERMO RÍOS VALDÉS** Defensor de Oficio asignado por el Instituto de Defensoría de Oficio para interponer el presente recurso, manifiesta lo siguiente:

> "..., debo expresar a los Señores Magistrados que el anuncio de Recurso de Revisión interpuesto por nuestro defendido no se ajusta a ninguno de los presupuestos que se establecen a tal fin en el TITULO VIII, CAPITULO II, ARTICULO 2458 del Código Judicial de Panamá, por lo que no es procedente la formalización del Recurso señalado.".

Toda vez que el propio abogado defensor de **EDUARDO VARGAS BARRÍA**, el Licenciado RÍOS VALDÉS, al hacer el estudio respectivo del caso, advierte que no hay causal para interponerlo, estima esta Sala que no es posible, pues, acceder a la revisión del proceso que solicitó el propio sindicado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por EDUARDO VARGAS BARRÍA y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA, POR SUPUESTO DELITO DE ROBO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 23 de octubre de 1995, se corrió traslado del presente negocio al Instituto de Defensoría de Oficio, a fin de que designara al Defensor que debía asistir al reo **ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA**, quien a través de nota manuscrita, había presentado recurso de revisión.

Como quiera que había transcurrido en exceso el término para que el Instituto de Defensoría de Oficio designara al abogado que formalizara correctamente el recurso presentado, se reiteró el contenido de la providencia de 23 de octubre, dando lugar a que el licenciado Fernando Levy se notificara el 27 de mayo de 1996 y presentara el escrito de formalización el 28 de mayo (Cfr. fs. 4 vuelta).

Al revisar el escrito presentado, se observa que se plantean dos causales de revisión, la contenida en el numeral 3° del artículo 2458 del Código Judicial y en el numeral 5° de la misma excerta.

La primera de ellas se refiere a:

> "3. Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter de delito y fijar la extensión de la condena;"

La Corte ha señalado en diversos fallos sobre esta materia, que cuando se invoca esta causal se requiere que, previamente, mediante el proceso penal correspondiente, se haya acreditado la falsedad del medio probatorio que se dice dio lugar a una sentencia injusta. El recurso de revisión es admisible si se adjunta prueba de los hechos fundamentales, lo que no ocurre en este caso, pues las fotocopias autenticadas de algunas declaraciones que reposan en el expediente, no constituyen prueba de la falsedad alegada.

La segunda causal que se menciona es la que aparece en el numeral 5° del artículo 2458 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

> "5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa;"

El recurrente no ha aducido ni aportado pruebas de los nuevos hechos descubiertos con posterioridad a la dictación de la sentencia condenatoria, no

obstante como quiera que el recurso en lo formal se ajusta a los requerimientos descritos por el artículo 2459 del Código Judicial, hay lugar para proceder conforme lo señala el artículo 2460 de la excerta citada.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, abre el negocio a pruebas por el término de treinta días, término común para la práctica de las mismas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A PERICLES ORIEL SÁENZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS H. CUESTAS G. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, la licenciada Teresa Ibáñez, defensora de oficio de Pericles Oriel Saénz, ha formalizado recurso de revisión contra la sentencia de 29 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Primer Circuito de Panamá.

La recurrente fundamenta la revisión en la causal que contempla el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, ya que, según su parecer, ha descubierto "nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores puedan dar a lugar ... a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa" (f. 10). La casual se apoya en once motivos que sirven de fundamento de hecho, y se citan los artículos los artículos 2458 del Código Judicial y 260 del Código Penal, como fundamento de derecho (f.).

El memorial es acompañado por elementos de prueba tales como una nota suscrita por la Dra. Elaine Bressan, médico psiquiatra del Instituto de Medicina Legal (f. 15), Acta de audiencia oral del proceso penal (fs. 16-19), y la sentencia de 29 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 20-26).

La Corte es del criterio que los planteamientos de la recurrente, confrontados con la documentación que adjunta al libelo de revisión, no configuran la causal invocada, toda vez que de manera alguna se desprende que se han descubierto nuevos hechos después de la condena del sentenciado. Todo parecer indicar la recurrente pretende que la Sala examine los criterios valorativos del juzgador de primera instancia, que no es el objetivo del recurso pues, de ser así, se convertiría en una tercera instancia.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión contra la sentencia de 29 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Primer Circuito de Panamá, que condena a Pericles Oriel Saénz, a la pena de 60 meses de prisión, como responsable del delito previsto en el artículo 260 del Código Penal.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A FRANCISCO BALLESTEROS DELGADO, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE GEOVAD JACINTO GARCÍA CAJAR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 15 de diciembre de 1995, condenó a Francisco Ballesteros Delgado a la pena de 10 años y 8 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Geovad Jacinto García Cajar. Al momento de notificarse de la meritada decisión jurisdiccional, la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial y la defensa técnica del condenado anunciaron recurso de apelación, que luego sustentaron en tiempo oportuno.

La representante del Ministerio Público sostiene que Ballesteros Delgado ejecutó el delito de homicidio con premeditación, por considerar que el condenado esperó a García Cajar para causarle la muerte, actitud que revela "fría deliberación para realizar el hecho ..." (f. 666).

Por su parte, la defensa técnica de Ballesteros solicita se disminuya la pena base de prisión impuesta, por considerar que su defendido carece de antecedentes criminales, que es una persona trabajadora y que la víctima habría sobrevivido si "no se hubiera eliminado los artefactos médicos" (f. 669).

Finalmente, este letrado censura la aplicación de la circunstancia agravante del numeral 1 del artículo 67 del Código Penal, ya que "el ofendido se encontraba acompañado por ... RICAURTE ANTONIO ARENAS GARCÉS Y RICARDO URRIOLA ... lo cual ... demuestra ... que la superioridad estaba de parte del finado" (f. 670).

El cuaderno penal da cuenta de que en la madrugada del 24 de agosto de 1991, agentes del orden público reprimieron una riña en el interior del Club Nacional, ubicado en calle 25, corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá, la cual fue protagonizada por Geovad Jacinto García Cajar y Francisco Ballesteros Delgado, quien acusó a la víctima de robarle sus pertenencias. Luego de la riña, las partes beligerantes se dirigieron a la parte exterior del local por petición de los agentes de la Fuerza Pública, oportunidad que aprovechó Ballesteros para efectuar un disparo con arma de fuego a la anatomía de García Cajar. El certificado de defunción revela que la víctima murió el 6 de septiembre de 1991 (f. 101) por "a) SEPTICEMIA; b) PERITONITIS; c) HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO PENETRANTE AL ABDOMEN" (f. 388).

Conocidos los argumentos de los recurrentes, la Corte pasa a decidir los recursos interpuestos, conforme lo estipula el artículo 2428 del Código Judicial. Es importante resaltar que el examen de la sentencia condenatoria se encuentra limitado a la consideración de la pena recaída sobre el autor de la conducta ilícita, toda vez que la culpabilidad del sentenciado fue declarada por jurado de conciencia (f. 638).

Por lo que resulta de las declaraciones de Víctor Manuel Díaz Ortega (f. 46) y Ricardo Rufino Urriola (f. 55), la Corte llega a la conclusión que Ballesteros Delgado ejecutó el delito de homicidio premeditadamente. En efecto, los testigos antes indicados permiten determinar que el imputado, luego de reñir con la víctima dentro del Club Nacional, se dirigió hasta su vehículo para buscar un arma de fuego, esperó a García Cajar y le efectuó el disparo que le causó la muerte. Queda acreditado entonces que el sentenciado realizó el hecho punible como resultado de una reflexión que dio ocasión a una firme y deliberada voluntad de cometer el delito.

De otra parte, la Sala desestima la aplicación de la agravante de abuso de superioridad atribuida a Ballesteros, por cuanto no comparte la apreciación de la sentencia sobre la presunta exigibilidad de que en estos eventos el agresor le permita a la víctima la oportunidad de sustraerse del peligro; así, se le imputa a Ballesteros que no le permitió a la víctima "la más leve oportunidad de huir o resistir para salvarse del peligro inminente que significaba apuntarle con el revólver y accionarlo ..." (f. 658).

Por establecido que la conducta del sentenciado se adecúa al tipo del homicidio agravado contemplado en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, cuya sanción es de 12 a 20 años de prisión, de acuerdo con lo normado por el artículo 56 ibídem, se fija la pena base en 12 años de prisión, y, luego de desestimada la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el numeral 1 del artículo 67 del Código Penal, corresponde descartar el aumento de la tercera parte de la pena decretado por la sentencia, por lo que queda a imponer una pena líquida de 12 años de prisión.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 15 de diciembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Francisco Ballesteros Delgado a la pena de 12 años de prisión, como responsable del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Geovad Jacinto García Cajar.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO LINDO KING, ALDO AMAYA, Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HUAN GUAN SHAN O HUANG GUOSHENG. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso en el que un jurado de conciencia encontró culpables a **RICARDO ANTONIO LINDO KING y a ALDO AMAYA SALAZAR**; al primero, por el delito de homicidio y robo, y al segundo por el de robo.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia sentenció a **LINDO KING** a la pena principal de veinte (20) años de prisión, y la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período, luego de cumplida la pena principal; mientras que a **AMAYA SALAZAR** lo condenó a una pena principal de seis (6) años de prisión, y la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período, luego de cumplida la pena principal.

Entonces, tanto **RICARDO LINDO** como su abogado defensor, la Licda. Mireya Rodríguez Monteza, Defensora de Oficio, interpusieron recurso de apelación contra la mencionada sentencia, por un lado; y **ALDO AMAYA SALAZAR**, así como su defensor, Licdo. Luis Carlos Arosemena, Defensor de Oficio, solicitaron la libertad de éste, basados en que **AMAYA SALAZAR** ya cumplió su pena.

La Sala examinará entonces la apelación interpuesta por la representante de **LINDO KING**, y luego la petición de **ALDO AMAYA SALAZAR**.

Los antecedentes del caso revelan que el lunes 21 de mayo de 1990, alrededor de las 2:30 p. m., se escenificó un intento de robo en el local

comercial denominado "POLLO RICA", ubicado entre calle 12 y Ave. Domingo Díaz.

Llegaron al local cuatro (4) jóvenes, cuyos nombres son **RICARDO ANTONIO LINDO KING, ALDO AMAYA SALAZAR, JULIO ALEXIS SÁNCHEZ ÁVILA, y el menor RENATO MANUEL BEST GRAND o GRANNUM.**

Manifestó el apelante, que estando en calle 11 y Avenida Meléndez, en compañía de los otros tres involucrados, acordaron cometer el robo en el kiosco "POLLO RICA".

Confesó el justiciado haberle disparado al dependiente del establecimiento **HUAN GUAN CHAN** ya que cuando entraron los 4 en el kiosco, empezaron a molestarlo; pero éste quiso atacarlo con un machete para defenderse, y le quería tirar encima una pared de playwood, pero él había sacado un revólver que tenía en el cinto, le apuntó y le disparó.

El oriental empezó a gritar, y ellos salieron corriendo de allí por el segundo callejón de la calle Domingo Díaz, hacia calle 8 Meléndez.

También señaló **LINDO KING** que luego le entregó el revólver a JULIO SÁNCHEZ quien lo negó en su declaración indagatoria, que era de propiedad de **RICARDO ANTONIO DUQUE MYRIE (a) "PANGACHO".**

Además, indicó que el menor **RENATO BEST** tenía un cuchillo con cacha de venado, siendo ambos los únicos armados; y, finalmente, dijo que el motivo de ir al kiosko "POLLO RICA" era molestar al hoy occiso.

Coincidieron los otros tres declarantes con **LINDO KING** en que fue éste quien ultimó a **GUAN CHAN**; empero, hubo divergencias entre los implicados sobre varios aspectos.

En cuanto a la planeación el robo, **ALDO AMAYA SALAZAR** señaló que el apelante propuso el robo, intentó desistir, pero **LINDO** insistió en ejecutarlo.

Dicha versión coincide con la de **JULIO ALEXIS SÁNCHEZ ÁVILA** fs. 39 a 41-, quien afirmó que **LINDO** dijo "vamos a hacer una demencia", contestándole **AMAYA SALAZAR** que la hiciera él solo, pero no con la del menor **RENATO MANUEL BEST GRANT** (a) "Renato", quien en su declaración jurada pág. 20 del infolio manifestó que la idea fue de los cuatro.

Otro aspecto controvertido de los indagados, es lo referente a cuántos entraron al kiosco a cometer el ilícito; el recurrente aduce que todos entraron a realizar el robo, al igual que el menor **RENATO BEST**; pero **ALDO AMAYA** dijo que éste **RICARDO LINDO** entró solo y él se quedó afuera.

Sobre el particular, **JULIO ALEXIS SÁNCHEZ ÁVILA** manifestó en informativo rendido en la Policía Técnica Judicial en Colón, que él no entró al kiosco, sino que se quedó al final del callejón f. 69; decía el indagado que **ALDO AMAYA, RENATO BEST** y él iban caminando bajo la lluvia, cuando **AMAYA** regresó a buscar a **LINDO** a quien ya le habían negado su participación en la "demencia" y cuando estaba regresando se escuchó el disparo, y salió corriendo por el callejón hasta salir a la panadería; de ello se colige que el sentenciado se encontraba solo en el escenario de los hechos; esta versión contrasta con la del apelante, quien -como ya se expuso- dijo que entraron los cuatro al local, incluyendo a **SÁNCHEZ ÁVILA.**

La declaración expuesta es corroborada por el testigo **ABDIEL MIGUEL RODRÍGUEZ VEGA**, quien -a fojas 58 a 60- dijo que "... los que estaban afuera huyeron junto al victimario. ... Reitera que el resto de los muchachos, tres en total, se quedaron en la parte externa del local, ...".

Por su parte, el testigo **VÍCTOR BRANFORD ARANDA** manifestó -f. 61 a 62- que de los tres testigos que vio correr, uno, el que salió del kiosco, se metió algo en la pretina del pantalón, creyendo que era un revólver; es decir, que sólo el

recurrente salió del escenario del crimen.

Igual versión ofrecieron **ANTONIO CECILIO ROBINSON y JERÓNIMO SANTANA**.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia fundó su sentencia en que el móvil del homicidio fue el robo -otro delito-, y aunque su comisión no fue posible por no perfeccionarse, convirtió el homicidio en delito calificado, transgrediendo entonces el artículo 132 del Código Penal, que prevé la sanción de 12 a 20 años de prisión.

Discresionalmente dicho Tribunal decidió aplicarle al imputado la pena máxima -20 años-, porque no concurrieron en el condenado ninguna de las circunstancias atenuantes señaladas en la ley.

A consecuencia de este fallo, la representante de **RICARDO ANTONIO LINDO KING**, Licda. **MIREYA RODRÍGUEZ**, Defensora de Oficio presentó en tiempo oportuno su recurso de apelación, que apoya en los siguientes puntos.

Que el estudio de las piezas procesales revelan que la confesión del justiciado fue espontánea y oportuna, ya que la rindió desde el primer momento de ser requerida.

Que en lo referente al delito de robo, éste nunca se tipificó, y por ello lo más grave que se podía atribuir a su representado era la tentativa de robo, según lo normado en el artículo 44 del Código Judicial.

Por ello, pidió la Licda. **RODRÍGUEZ** la rebaja de la pena impuesta, por considerarla injusta.

Por su parte, la Fiscal Segunda Superior se opuso a la pretensión de la defensa, considerando que la dosificación impuesta es la correcta, toda vez que la muerte de la víctima, sobrevino a consecuencia del robo que se estaba llevando a cabo en su contra, mediando la asociación de varias personas para perpetrarlo.

Que se comprobó la participación de **LINDO KING**, lo que originó su condena como autor material del delito de homicidio, agravánse de esa manera, su responsabilidad penal.

Que la conducta antijurídica y culpable en comento, está tipificada en el numeral 7° del artículo 67 del Código Penal, atinente a las circunstancias agravantes ordinarias comunes; o sea, que el delito se cometió con arma y con la ayuda de otras personas que facilitaron su ejecución.

Según el artículo 70 de la misma excerta, las circunstancias agravantes originan el aumento de la pena de una sexta a una tercera parte.

Además, la conducta llevada a cabo por el justiciado se tipifica en el numeral 5° del artículo 132 del Código Penal, que establece pena de prisión de 12 a 20 años, "cuando se ejecute 'para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible, aún cuando éste último no se realice".

Esta última aseveración es aplicable -a juicio de la Funcionaria de Instrucción- al delito de robo, que está adecuadamente acreditado y comprobado, y del que **LINDO KING** fue encontrado culpable por el Jurado de Conciencia, y debidamente penado.

Expuestas la probanzas procesales necesarias para resolver la presente apelación, se dispone la Sala a emitir su decisión, previa las siguientes consideraciones.

Observa esta Corporación de Justicia, que el motivo de la apelación que nos ocupa, es la dosificación de la pena impuesta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia; ello implica la valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes que trataron de hacer valer las partes mediante el presente recurso, por lo que hay que entrar a analizarlas.

En este sentido, en lo que se refiere al delito de homicidio, afirma la apelante que la confesión del inculpado fue espontánea y oportuna.

Le asiste la razón a la letrada, pues se observa que desde su primera declaración ante los agentes de la Policía Técnica Judicial de Colón, **LINDO KING** confesó la ejecución del hecho, pero por motivo de defensa propia f. 11; por ello, la Sala le concede al sentenciado el derecho a tomar en cuenta esta circunstancia atenuante.

Empero, como señala la Opositora, existen otras circunstancias que anulan la efectividad de la misma.

Señaló la Fiscal Segunda Superior como circunstancia agravante, el haber cometido el homicidio con arma, así como con el auxilio de otras personas, siendo éste el numeral 7° del artículo 67 del Código Penal, tocante a las agravantes genéricas.

Contraria es la opinión de la Sala, pues en anteriores fallos ha señalado que el arma es un instrumento esencial para la comisión del delito de homicidio, ya que son excepcionales las ocasiones en que el mismo se comete sin su auxilio; por ello, se desestima dicha agravante.

Además, no comparte la Corte el criterio de la representante del Ministerio Público en lo que se refiere al auxilio de otras personas para la comisión del crimen, toda vez que las diversas declaraciones de los implicados demuestran que lo que acordaron fue realizar el asalto en el escenario de los hechos, pero ninguno pensó en matar al finado; nunca lo mencionaron en los planes de robo -según las diferentes versiones-, y sólo el menor **RENATO BEST** tenía un cuchillo, que nunca utilizó.

En cuanto a la aplicabilidad al presente caso del numeral 5° del artículo 132 del Código Penal, observa esta Corporación de Justicia que dicha agravante ya fue aplicada en la sentencia objetada, pues fue la base para la imposición de la pena principal de veinte (20) años de prisión; ahora bien, considera esta Colegiatura que la norma invocada permite entender con claridad que no se trata de dos delitos, sino de uno solo, pero agravado por ser el móvil otro delito, esto es, el robo, y no por la comisión de dos delitos, como lo señaló el jurado en su veredicto.

Por lo tanto, no es cierto lo señalado la licenciada Mireya Rodríguez Monteza quien afirmó que dicho delito nunca se tipificó, y lo más grave que pudo valorarse el hecho, fue como tentativa de robo, según se desprende del artículo 44 del Código Penal, citado por la apelante.

En resumen, resulta de lo ya analizado que sobresale en la dosificación de la pena a imponer, una circunstancia agravante -atinente a que el móvil del ilícito fue el de realizar el robo ello induce a la Sala a reformar la sanción impuesta, reduciéndola a una pena de 16 años por el delito de homicidio agravado.

En otro orden de cosas, es imprescindible examinar la solicitud de libertad del Licdo. Luis Carlos Arosemena, Defensor de Oficio, en favor de su representado, **ALDO AMAYA SALAZAR**, por razón del cumplimiento de la pena.

En un escrito presentado el 22 de mayo del año que decurre, el Licdo. Arosemena manifestó que su representado fue condenado a la pena de seis (6) años de prisión, pena no recurrida, y que ese día se cumplía en su totalidad, por lo cual solicitaba se ordenara la libertad de **AMAYA**.

Revisado el expediente, considera esta Corporación de Justicia que le asiste la razón al solicitante, pues a foja 26 del infolio, se observa una orden de traslado de detenidos emitido por la Policía Técnica Judicial de Colón, en el que se incluye a **ALDO AMAYA SALAZAR**, quien ya se encontraba detenido, pese a que no se observa ningún documento que acredite la fecha de su detención.

Señala el Licdo. Arosemena en su solicitud, que su representado fue

condenado a la pena de seis (6) años de prisión, la cual llegaba a su fin el 22 de mayo; ello lógicamente significa que el sentenciado fue detenido el 22 de mayo de 1990, es decir, tres días antes que se emitiera la orden de traslado en comento.

No se percibe en el infolio que el inculpado haya sido liberado ni que se haya escapado del centro penitenciario en que se encuentra, motivo por el que la Sala considera de justicia, conceder la petición presentada.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el día 30 de junio de 1995, que le impuso a RICARDO ANTONIO LINDO KING la pena principal de veinte (20) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período, luego de cumplida la pena principal, por la pena principal de dieciséis (16) años de prisión, y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período, luego de cumplida la pena principal, y la confirma en todo lo demás.

En cuanto la solicitud de libertad promovida en favor de ALDO AMAYA SALAZAR, el mismo ha cumplido la pena impuesta, razón por la que se ORDENA su inmediata libertad, siempre y cuando no tenga otro proceso penal pendiente que amerite su detención preventiva.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ABELITA CABALLERO SALINA, SEGUIDO CONTRA DIOGENES GALLARDO GALLARDO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ha ingresado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso seguido a **DIOGENES GALLARDO GALLARDO** por el delito de homicidio cometido contra **ABELITA CABALLERO SALINA**.

Cuentan los antecedentes del caso, que el 29 de marzo de 1992, en el lugar denominado Quebrada Murciélago, Corregimiento de Hato Chamí, jurisdicción del Distrito de Remedios, perdió la vida la indígena ABELITA CABALLERO SALINA a consecuencia de las heridas con arma blanca propinadas por su concubino, DIOGENES GALLARDO GALLARDO, motivo por el que se iniciaron las investigaciones de rigor.

El cadáver fue encontrado en la casa-habitación del señor **CELESTINO CABALLERO CARPINTERO**, padre de la difunta, quien en compañía de testigos actuarios llevó a cabo la diligencia de reconocimiento, inspección ocular y levantamiento del cadáver (fs. 2-4), constando que el cadáver fue encontrado con lesiones en la cabeza y ambos brazos estaban mutilados mediante heridas con machete o rula, y como a siete pies del cuerpo encontraron la mano derecha.

Se le recibieron declaraciones a diversas personas, entre los que se encontraban el padre de la difunta, el prenombrado **CELESTINO CABALLERO CARPINTERO** (fs. 7-10) quien manifestó que su hija estaba unida al justiciado desde hacía tres años, y señaló que el día antes de verificarse el hecho de sangre, ella había decidido irse para su casa en Hato Chamí, cosa que ya había hecho, toda vez que **DIOGENES GALLARDO** la maltrataba, siendo que él iba a buscarla nuevamente.

El día del hecho, cuando regresó a su casa de limpiar el monte, como a las 6:00 p. m., se encontró con la sorpresa de su hija muerta, enterándose que su concubino la mató con su machete.

Una de sus hijas presenció el hecho funesto, y le dijo que el sentenciado fue a buscar a su hija, pero como ella se negó a volver con él, la tomó por las manos y la sacó a la parte de atrás de su casa y cerca de un palo de cacao cortó con el machete y después la arrastró hacia el otro lado, donde la atacó hasta matarla.

Al llegar, vio el cuerpo de **ABELITA** con heridas en varias partes del cuerpo y manos, que se había desprendido y se encontraba en el área.

MELA CABALLERO SALINAS, hermana de **ABELITA**, (fs. 11-14) declaró bajo juramento que vio a **DIOGENES GALLARDO** proferirle las heridas a la finada.

Por su parte, **LUCINIO CABALLERO CEDEÑO**, tío de la occisa y amigo del ofensor, (fs. 37-39) y **EMILIO CABALLERO CEDEÑO**, también tío de la difunta y amigo del sentenciado, (fs. 40-44) coincidieron en sendas declaraciones juradas al señalar que cuando llegaron al lugar de los hechos ya **ABELITA** estaba muerta y como a 50 metros de distancia, por el camino, vieron al inculpado con la rula en la mano.

ANICETO GALLARDO RODRÍGUEZ, amigo de la pareja, mediante declaración jurada (fs. 45-47) dijo que como 2 semanas antes del hecho, **DIOGENES GALLARDO** dijo en una peonada de Celedonio Santos, que su mujer **ABELITA CABALLERO** no lo quería y por eso lo iba a matar.

En otro sentido, **RAMÓN GALLARDO RODRÍGUEZ**, manifestó mediante declaración jurada (fs. 50-53) contrariamente a lo señalado por su hermano Diógenes que la rula o el machete que causó la muerte de la indígena, la utilizó **DIOGENES**, y era la misma que usaba para trabajar.

Dijo este testigo que su mujer lo despertó cuando vio que el imputado llegaba a su casa, con la ropa ensangrentada; no le dijo nada, pero **DIOGENES** le dijo "hermano, ya yo jui hacer la descracia (sic) y salte de aquí y anda a decirle a la jente (sic) o sea a los vecinos".

Entonces él **RAMÓN GALLARDO** se fue a la casa de **ANICETO GALLARDO**, y al volver, ya **DIOGENES** no estaba en la casa; su esposa le dijo que él se cortó con la misma rula, en el cuello y huyó hacia el cafetal, hacia el río San Félix; entonces regresó con su mujer a dormir a su casa, y vio en el patio una botella de matamalesa que tenía su hermano, y creyó que se lo había tomado; luego en la tarde, el comisionado **MARTÍN AGUIRRE** lo encontró en el pozo donde ellos buscan agua, y se lo llevaron detenido.

Otros declarantes, como **FRANCISCO MONTEZUMA SALINA**, Corregidor de Hato Chamí (fs. 34-36), **AQUILINO SANDOYA MONTEZUMA**, conocido de los involucrados, (fs. 160-162) y **ABILIO MONTEZUMA**, quien no conocía al justiciado y tenía un trato familiar con la víctima (fs. 164-166), señalaron en sus respectivas declaraciones juradas un problema surgido en la Corregiduría, donde la occisa dijo que el detenido la maltrataba mucho.

FELICITA CABALLERO SALINA (fs. 54-56) prima de la desaparecida y amiga del prisionero, dijo en declaración jurada que **DIOGENES** mató a **ABELITA** porque la celaba mucho, mientras que **JUANCITO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ** (fs. 59-60), quien era amigo del apelante y primo de la finada, señaló en su declaración jurada que el justiciado le pegó dos trompadas porque él lo vio "ejecutando un acto que riñe con la moral" con un animal.

Constan también en el expediente, como probanzas procesales, las copias autenticadas de la sentencia N° 2 del 3 de septiembre de 1991, por medio de la que el Juzgado de Remedios condenó a **DIOGENES GALLARDO** a la pena de 40 días multa, por las lesiones ocasionadas a **MANUEL CHONG FRANCO**, por infraccionar en el artículo 135 del Código Penal, pero considera el a-quo que la acción penada

tipifica el artículo 136, por poner en peligro la vida del citado **CHONG FRANCO.**

El protocolo de necropsia (fs. 86-97) determinó como causa de muerte, 1-Shock hemorrágico, 2-heridas múltiples por arma blanca, y a foja 108 se encuentra el certificado de defunción de la difunta.

Además, el dictamen del Psiquiatra Forense, Dr. Manuel Elías externó -en resumen- que **DIOGENES GALLARDO** era imputable al momento de la comisión del ilícito, pretendiendo fingir un cuadro de perturbación mental que lo liberara de su responsabilidad por la comisión del hecho punible.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, expresó en una sentencia, (a foja 311) en lo tocante a la antijuridicidad, que

> "... el imputado y su defensor técnico no alegan ninguna causa de justificación o precepto permisivo, puesto que Diógenes Gallardo en su declaración indagatoria en ningún momento niega ni acepta haberle dado muerte a Abelita Caballero, sino que expresa que no sabe nada, puesto que tenía tres días de estar borracho, tomando chicha de maíz. Para que prospere una causa de justificación o precepto permisivo se requiere que el imputado acepte la comisión de la conducta descrita como prohibida por el tipo penal, alegándose y probándose que la conducta desplegada fue debido a una de las causas antes mencionadas."

En cuanto a la circunstancia de la embriaguez, señala el fallo apelado (f. 315) que.

> "Tomando en consideración lo expresado por el propio imputado Diógenes Gallardo, en el sentido de que pasó tomando chicha de maíz durante tres días, debemos concluir sin lugar a dudas que no estamos en presencia de una embriaguez fortuita, puesto que él sabe los efectos de dicha bebida alcohólica y aún así, voluntariamente la ingiere por un período largo de tiempo, en el cual lógicamente todo ser humano debe sufrir los efectos de dicha bebida preparada por los propios campesinos."

Además, el examen psicológico realizado al apelante por el Dr. Manuel Elías, médico psiquiatra forense, demostró que **GALLARDO GALLARDO** no actuó bajo los efectos de un trastorno mental transitorio, sino que actuaba con capacidad y discernimiento, lo que lo hace imputable por el ilícito cometido.

Afirma el a-quo que existen indicios de responsabilidad del sentenciado (de capacidad) por cuanto maltrataba anteriormente a la finada, golpeó a Juancito Rodríguez y lesionó a Manuel Chong; indicios de presencia física en el lugar y hora en que se realizó el delito, por la declaración coincidente de varios testigos, en ese sentido; y el de mala justificación, por negar que el machete utilizado era el suyo, y por decir que no recuerda nada por estar borracho, pese a que su hermano manifestó que el arma era de él, y que él **ABELARDO** le dijo que había ultimado a **ABELITA CABALLERO**, a más de que no consta en el expediente que aquel actuase bajo un estado de trastorno mental.

Lo anterior, aunado a las declaraciones de varios testigos llevan a ese Tribunal a la convicción de que el imputado es responsable por la comisión del ilícito que nos ocupa.

Consideró el a-quo que el homicidio califica como agravado, por los testimonios de maltrato a la occisa, el estado de gestación en que se encontraba ésta, la mano derecha amputada y otras partes del cuerpo mutiladas, al igual que el parentesco entre la víctima y el victimario.

El mencionado estado de gestación de la occisa, más las otras circunstancias indujo al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial a imponerle a **ABELARDO GALLARDO GALLARDO** la pena principal de prisión de dieciocho (18) años, aumentada en una sexta parte por abuso de superioridad y el empleo de

medios que debilitaron la defensa de la ofendida, pues fue agredida con un machete. Además, no se constató en el expediente ninguna circunstancia atenuante que pudiese utilizarse en favor del justiciado.

No opera la atenuante de ignorancia supina, toda vez que "... hasta un analfabeta tiene conciencia de que las lesiones graves inferidas a Abelita Caballero le producirían la muerte, amén de que según testigos antes estudiados esa era precisamente la finalidad del procesado. Tampoco opera la embriaguez como eximente incompleta, puesto que estamos en presencia de un delito de naturaleza dolosa y tal circunstancia tampoco se valora como agravante, puesto que no consta debidamente en autos, que Diógenes Gallardo se embriagó deliberadamente para cometer el ilícito estudiado."

Por otro lado, considero la sentencia apelada que, como el hecho que nos ocupa se cometió un año después de haber sido condenado **GALLARDO GALLARDO** por el Juzgado Municipal de Remedios por la comisión del delito de lesiones dolosas, hay reincidencia; por ello, se le debe aumentar la pena en una sexta parte, quedando la sanción en veinticuatro (24) años, pero la redujo a veinte (20) años a tenor del artículo 47 del Código Penal. Además, le impuso la pena accesoria de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, luego de cumplida la pena principal.

Luego de exponer los elementos más importantes del presente caso, se dispone la Sala a emitir su decisión, previa las siguientes consideraciones:

Considera esta Corporación de Justicia que todos los elementos expuestos apuntan a la responsabilidad de **DIOGENES GALLARDO GALLARDO** por la comisión del delito apuntado; éste señala en su escrito apelatorio que no se le practicó una diligencia de reconstrucción de los hechos.

Es el criterio de esta Colegiatura, que la diligencia de reconstrucción de los hechos es una herramienta probatoria útil cuando las probanzas procesales no son firmes en inducir el conocimiento del juzgador a la realidad objetiva y subjetiva de la comisión del hecho punible; la diligencia en mención constituye un elemento probatorio que sirve para complementar las pruebas contenidas en el expediente y guiar el conocimiento de la verdad de los hechos, ya sea a favor o en contra del imputado, sobre todo, cuando las demás pruebas no demuestran de una manera fehaciente la certeza de los hechos acaecidos.

En el caso que nos ocupa, las pruebas recabadas en la etapa sumarial, demuestran la comisión voluntaria del ilícito, pues inclusive, el testimonio de sus propios familiares reveló que **DIOGENES GALLARDO** fue el autor del delito bajo estudio.

Las demás pruebas existentes en el sumario indican la responsabilidad del supracitado, con una claridad meridiana.

El sentenciado mencionó en su escrito, el testimonio de personas a quienes considera sus enemigos y que rindieron declaraciones falsas, y señaló sus nombres; ellos, en sus respectivas declaraciones manifestaron conocerlo y tener una buena relación con él, lo cual no compagina con la enemistad que ahora señala. Además, no mencionó el testimonio de su hermano mayor **RAMÓN GALLARDO RODRÍGUEZ** (fs. 50 a 53), quien señaló que el justiciado y él viven en una sola casa; también señaló que "... a mi me consta que ahí en la casa ellos peliaban mucho los dos, pero era porque mi hermano la amenazaba que la iba a matar a ella y al hombre de Cerro Tula que yo no conoce quién es, mi hermano DIOGENES entre vez en cuando le pegaba con el puño a la difunta. ... El domingo cuando yo llegué a la casa de mi tiu ANICETO yo me acosté a dormir y DIOGENES taba ahí, como a las cuatro y media de la tarde del domingo mi mujer FELICITA me llamó porque DIOGENES había llegau con el vestiu ensangrentau y la rula también, ..., cuando yo me levanté de dormir y lo vi así yo no dije nada, pero el si me dijo 'hermano ya yo jui hacer la descracia y salte de aquí y anda a decirle a la jente(sic) o sea a los vecinos, ...".

Señaló que se fue **RAMÓN** a la casa de **ANICETO GALLARDO**, y cuando regresó,

ya **DIOGENES** no estaba; le dijo su mujer que éste se había cortado el cuello con la rula, y huyó para el cafetal, en camino a San Félix.

Considera esta Corporación de Justicia muy difícil que el propio hermano del inculpado sea también su enemigo, a tal punto de emitir una declaración como la aquí transcrita. La misma es determinante, y no deja lugar a dudas de la participación del apelante, en la comisión del hecho punible, ya que, al decirle que había ido a hacer la desgracia y que fuera a avisarle a la gente, estaba confesando el crimen.

En otro sentido, afirma el apelante que el Sr. **REYNALDO RODRÍGUEZ** no fue llamado a declarar, cosa que según él se debió hacer, porque este señor entró a su casa para faltarle el respeto a él, y violar a su mujer.

En ninguna parte del expediente aparece mencionado este señor, ni por él, ni por los demás declarantes, por lo que se considera que carece de relevancia la misma.

En cuanto a Sr. **FRANCO CHON** mencionado por el apelante, víctima del delito de lesiones personales por parte de **GALLARDO GALLARDO**, fue condenado por el Juez Municipal del Distrito de Remedios a una pena de cuarenta (40) días multa, mediante sentencia N° 2 del 3 de septiembre de 1991, lo cual constituye un antecedente negativo para éste.

Manifiesta el recurrente que nunca tuvo problema alguno con sus parientes; esa circunstancia nutre el criterio de la Sala, en el sentido de que no puede ser considerado el testimonio de su hermano **RAMÓN GALLARDO**, como el de un enemigo suyo.

Las múltiples declaraciones de testigos referenciales respecto a los hechos acaecidos de familiares de la difunta y amigos de ambos, son coincidentes en reconocer a **ABELARDO GALLARDO GALLARDO** como autor material del homicidio de **ABELITA CABALLERO**.

El otro factor determinante para llegar al convencimiento de la culpabilidad del justiciado, radica en el dictamen del psiquiatra forense, visible a fojas 169 y 170 del expediente, y que señala entre las conclusiones más interesantes para el proceso, las siguientes:

> "2. Que **pretende con esa actitud y conducta fingir cuadro de perturbación de cualquier índole y se puede demostrar que dicha conducta y actitud la asume toda vez que está frente al perito**.
>
> 3. Fuera de esa instancia no presenta alteración de sus facultades puesto que su conducta se desenvuelve dentro de los canones habituales.
>
> 6. Todo lo cual indica que el hecho de que no haya modificado su conducta mostrando una actitud aparentemente irreductible y de rechazo, **es conciliable con el propósito de eludir responsabilidades a la manera que su criterio le indica**.
>
> 7. Que su persistente actitud demuestra que **pretende aparentar intencionalmente, mediante ese proceder, un estado que no posee con una finalidad específicamente utilitaria**.
>
> 8. Que tiene plena conciencia de sus actos y que al actuar como lo hace, cree que está desempeñando el papel de determinada enfermedad mental de acuerdo a la idea que pueda tener de lo que puede ser la enfermedad mental.
>
> 9. **Y todo aquello finalmente puede ser un intento de ubicarse en una causal psíquica favorable de inimputabilidad que no es tal.**" (**Negrilla de la Corte**).

En fin, considera el Dr. Manuel Elías Núñez que **DIOGENES GALLARDO GALLARDO,** dentro de su capacidad, pretende fingir una enfermedad mental con el objeto de eludir su responsabilidad en el presente caso, lo cual revela que verdaderamente está consciente de lo sucedido, y simplemente lo niega todo.

Por lo tanto, no es cierto su argumento de que no se acuerda de nada, ni tenía conocimiento de lo que hacía, porque no tendría la actitud de simular enfermedad mental, como lo hizo cuando fue sometido al examen psiquiátrico.

Además, el avanzado estado de gestación que tenía la finada al momento de su deceso, así como la forma violenta y atroz de este que incluye la amputación de la mano derecha, semi-amputación del antebrazo izquierdo, herida en la región cervical posterior de 16x6 cms., no de dejan otro camino a esta Colegiatura que confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 28 de febrero de 1994, por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H CUESTAS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

JUICIO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO Y OTROS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDILBERTO RIVERA HIDALGO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación, el proceso seguido contra **JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO** Y OTROS por el delito de homicidio en perjuicio de **HERIBERTO RIVERA**, y ROBO en detrimento de "Comercializadora de Carne, S. A.".

Mediante sentencia de 5 de noviembre de 1993, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, con vista en el veredicto de CULPABILIDAD declarado por un jurado de conciencia, condenó a **JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO (A) MANE"** a la pena de 20 años de prisión y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas computados a partir de la fecha del cumplimiento de la pena principal, por el delito de homicidio calificado perpetrado en perjuicio de **HERIBERTO RIVERA**, previsto en el numeral 5 del artículo 132 del Código Penal, Robo en detrimento de Comercializadora de Carne, S. A..

El Segundo Tribunal, tras analizar las piezas que recoge el proceso, calificó el delito como homicidio calificado, agravado o circunstanciado, tipificado en el artículo 132, numeral 5° del Código Penal, pues, según su parecer, "Los imputados, quienes compartían la decisión de matar, deben ser sancionados con severidad por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de HERIBERTO RIVERA, pues actuaron con premeditación, para facilitar y procurar la impunidad del robo, hechos que motivan a que se le imponga la pena de dieciocho años de prisión a cada uno; esta sanción está contemplada en el artículo 132 del Código Penal".

En cuanto al delito de Robo, lo calificó como Robo Calificado, agravado o circunstanciado, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, imponiéndole una

pena de dos (2) años de prisión.

La metodología utilizada por el Tribunal para aplicar la sanción correspondiente fue la siguiente:

> "En cuanto al delito de robo cometido, hay que recordar que los imputados utilizaron armas, circunstancia que el artículo 186 del Código Penal -según el texto vigente a la fecha de realización del delito- es sancionado con pena entre cinco (5) a siete (7) años de prisión; se le aplicará la pena intermedia de seis (6) años; sin embargo, en vista que este delito es menos grave que el homicidio, debe imponérsele sólo la tercera parte, es decir, dos (2) años de prisión.
>
> Los dieciocho (18) años de prisión impuestos por el delito de homicidio, más los dos (2) años de prisión por el delito de robo, hacen una pena total de veinte (20) años de prisión, la que representa el máximo aplicable a cada uno".

Por su parte, el licenciado Gabriel E. Fernández, quien actúa como defensor de oficio del condenado, expresa que su disentimiento radica básicamente en que el negocio fue valorado por el tribunal con criterios subjetivos al aseverar "los imputados quienes compartían la decisión de matar" ya que un solo individuo cometió el hecho de sangre, el que fue identificado y el cual no corresponde a la identificación de su representado, razón por la que se opone a la adjudicación de los dieciocho años de prisión porque su representado no fue el que ejecutó el disparo. Por otro lado, agrega que su representado puede ser enmarcado dentro de la figura de coautor del delito genérico de robo. Finalmente, considera que a su representado se le debe modificar la pena de dieciocho (18) años de prisión por el delito de homicidio porque él no cometió el hecho de sangre, "correspondiendo a una variación aritmética según el artículo 61 del Código Penal, que puede ser igual a la mitad del mínimo establecido en el artículo del Código Penal; o sea seis años, que sumado a siete años por Robo, conformarían un computo (sic) de trece (13) años de prisión".

CRITERIO DE LA CORTE

Cabe destacar, en primer término que la culpabilidad de JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO fue decidida por jurados de conciencia; veredicto que es de carácter autónomo y definitivo no sujeto a censuras. Por lo tanto, los reparos que formula el licenciado Gabriel E. Fernández en cuanto a la autoría de los hechos punibles, resultan improcedentes.

Ahora bien, para que se configure el delito de homicidio agravado, previsto en el ordinal 5 del artículo 132 del Código Penal, es preciso que concurra el siguiente requisito: que el agente esté preparando o planeando la comisión de un delito y mate para facilitar o consumar la realización del mismo aun cuando al final no se logre el fin propuesto.

Puede advertirse fácilmente, que lo que agrava el delito de homicidio, es decir, lo que hace que los hechos se puedan enmarcar bajo el supuesto legal previsto en el numeral 5 del artículo 132 del Código Penal es que en la ocurrencia de ambos hechos medie una relación de conexidad, o sea, que se realizó el homicidio para facilitar o evitar frustrar el delito de robo, en este caso particular.

Consideramos que el Tribunal al momento de calificar la conducta del señor **JOSÉ MANUEL CHECA VALDESPINO** incurre en el error de aplicar el principio de concurso real de delitos. En este caso la situación jurídica no se rige por lo establecido en este principio, sino que la misma debe ser tipificada como delito de homicidio calificado o agravado, porque si el caso se adecúa en el numeral 5 del artículo 132 del Código Penal, es el delito conexo ideológico el que califica la gravedad del homicidio, por consiguiente, el delito fin no consumado por el autor ya fue objeto de penalización en el artículo 132 y mal puede sumarse el delito contemplado en el artículo 186 de la misma excerta legal para agravar la pena.

El robo pasa a formar parte del tipo penal contemplado en el ordinal 5 del artículo 132 del Código Penal, es decir, que el robo agrava el delito de homicidio, por lo tanto al sancionar la conducta del sindicado se supone se tomó en cuenta esa agravante para fijar la pena base impuesta al delito de homicidio calificado.

Es por esta razón, y por la forma en que se desarrollaron los hechos, que esta Corporación de Justicia estima que una pena de 18 años de prisión es consecuente con la gravedad del ilícito cometido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia de 5 de noviembre de 1993 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia; en consecuencia, impone la pena de DIECIOCHO (18) años de prisión, y la confirma en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO HERRERA
SECRETARIO

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A WILFREDO SAMUDIO RODRÍGUEZ (A) JUANITO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE ROGELIO SAMANIEGO CASTRO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de resolver en esta Sala Penal de la Corte Suprema, el recurso de apelación presentado contra la Sentencia de 2 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el proceso seguido a **WILFREDO SAMUDIO RODRÍGUEZ (A) JUANITO**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **ROGELIO SAMANIEGO CASTRO**.

Las piezas procesales nos indican que en horas de la noche del día 25 de enero de 1993 falleció en la comunidad de Los Chorritos N° 3, Corregimiento de El Coco, Distrito de la Chorrera, el joven ROGELIO SAMANIEGO CASTRO a consecuencia de disparo con arma de fuego que el hiciera **WILFREDO SAMUDIO RODRÍGUEZ.**

En juicio por jurados de conciencia celebrado el día 7 de abril de 1995, fue declarado culpable el acusado **SAMUDIO RODRÍGUEZ** de haber cometido el homicidio de SAMANIEGO CASTRO. El Tribunal a-quo mediante Sentencia de 2 de agosto de 1995 condena al imputado a la pena principal de 20 años de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo una vez cumplida la pena principal y el comiso del arma utilizada en la ejecución del delito. Para fijar esta pena, el Tribunal partió de la pena base de quince años (15) para el homicidio agravado (numeral 3 del artículo 132, motivo fútil) y le aumentó la tercera parte (5 años) por la agravante común del numeral 5 del artículo 67 del Código Penal (emplear astucia, fraude o disfraz), quedando así una pena total de 20 años de prisión.

Mediante sustentación de apelación, el Licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, defensor de oficio, manifiesta su inconformidad con la Sentencia. Indica el recurrente que el motivo fútil no ha quedado debidamente comprobado en el presente negocio, puesto que las declaraciones de **LASTENIO ALVIN ÁVILA**, visibles a foja 9 del sumario, señalan que el hoy occiso estaba "rofiando" a **WILFREDO SAMUDIO**; que su actitud era furiosa (la de SAMANIEGO) y que cuando el imputado lo amenazó con el arma, SAMANIEGO se enfureció y se avalanzó sobre él.

También estima la defensa técnica de **SAMUDIO RODRÍGUEZ**, que debió reconocerse a su representado, la atenuante contemplada en el numeral 7 del artículo 66 del Código Penal, que trata de las eximentes incompletas, en vista de que se dio un exceso en el medio utilizado para detener la acción que hubiese ejecutado el hoy occiso. Igualmente, considera que no debió aplicarse la agravante que trata de la astucia, fraude o disfraz, pues "no encontramos en este expediente de qué forma ha quedado acreditado todos o siquiera uno de estos tres elementos sustentadóres(sic) de esa agravante, por cuanto 'la astucia' supone una persona hábil para engañar o evitar un engaño o para lograr artificiosamente un fin, ...".

Por su parte, el agente del Ministerio Público, en este caso el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, en contestación de traslado plasmó su interés en que se confirme la sentencia recurrida:

> "... consideramos que no le asiste razón al recurrente toda vez que como se desprende de la propia cita que hace el abogado defensor, en ningún momento el procesado Wilfredo Samudio fue objeto de una agresión por parte del hoy occiso, que justifique el uso del arma de fuego. Resulta contraproducente hablar siquiera de exceso en la Legítima Defensa, pues si se observan los requisitos señalados por el Artículo 21 del Código Penal, se advierte que la conducta de Wilfredo Samudio no cumple con ninguno de ellos. Así vemos que no existió un agresión injusta, pues es el señor Samudio que(sic) provoca los hechos. No se puede hablar de medio racional para impedir la agresión, pues el hoy occiso no portaba arma alguna. El procesado pudo evitar el desenlace fatal, pues es él quien lo provoca al seguir arma en mano al señor Rogelio Samaniego que se retiraba del área en compañía de su amigo.
>
> En cuanto a la ausencia de motivo fútil, consideramos que el mismo no admite duda alguna pues el imputado actúa únicamente por intercambio de miradas con el hoy occiso, hecho este que de ninguna forma puede considerarse como un motivo relevante para quitar la vida a una persona." (Fs. 281-282).

Para resolver, esta Sala toma en cuenta las siguientes consideraciones.

El Tribunal partió de la pena base para homicidio agravado de quince años (15). Consideramos adecuado dicho criterio, tomando en cuenta la circunstancia de delincuente primario del sindicado, su baja escolaridad y los antecedentes de desintegración familiar.

Para fijar esta pena base el a-quo estimó que el homicidio es agravado pues se dio por motivo fútil; compartimos también esta opinión, pues aunque existe contradicción entre las declaraciones de **JULIO CALDERÓN CARRASCO**, **LASTENIO ELVIN AVILA** (acompañantes de WILFREDO SAMUDIO) y lo declarado por **JUAN ALBERTO VÁSQUEZ GONZÁLEZ** (acompañante del occiso), con relación a cómo se dieron los hechos que trajeron como consecuencia la agresión de que fue víctima ROGELIO SAMANIEGO, dichas declaraciones evidencian que en ningún momento se dio circunstancia alguna que justifique de algún modo la reacción violenta de **SAMUDIO RODRÍGUEZ**. No consta que SAMUDIO y el hoy occiso fueran enemigos o que hubiese concurrido motivo suficiente para la comisión del hecho punible.

Tampoco se puede concluir que el imputado actuó con alguna eximente incompleta para la Legítima Defensa, pues como bien lo señaló el Fiscal, el medio empleado para hacer frente a la supuesta agresión de que iba a ser víctima por parte del hoy occiso no fue racional y además fue exagerado, máxime cuando la víctima no portaba arma alguna.

No obstante, no estamos de acuerdo con el a-quo en cuanto a la circunstancia agravante que se aplicó, es decir, la que trata del empleo de astucia, fraude o disfraz. Aquí compartimos la opinión de la defensa, puesto que no existe en el sumario pruebas de que el homicidio se diera bajo alguna de dichas circunstancias. No podemos concluir que porque el homicida llamó al hoy

occiso cuando éste ya se retiraba y con el arma en mano lo provocó y disparó, se empleó algún tipo de astucia o fraude y mucho menos disfraz.

Por todo lo anterior, consideramos que lo procedente es reformar la sentencia recurrida en cuanto a la circunstancia agravante aplicada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia de 2 de agosto de 1995 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y en consecuencia, CONDENA a WILFREDO SAMUDIO RODRÍGUEZ (A) JUANITO a cumplir la pena principal de quince (15) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período de duración de la pena principal una vez cumplida ésta, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de ROGELIO SAMANIEGO CASTRO, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A CELIO ORTIZ AGUILAR POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE SU HIJO CARLOS VÍCTOR ORTIZ SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias instruidas a **CELIO ORTIZ AGUILAR** por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo **CARLOS VÍCTOR ORTIZ SALDAÑA**, hecho ocurrido en horas de la noche del día 9 de octubre de 1993 en la comunidad de Los Volcanes de El Cristo, Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé.

En juicio celebrado por jurados de conciencia el día 29 de agosto de 1995, se encontró culpable de homicidio al sindicado. Mediante Sentencia fechada veintiséis (26) de octubre de 1995, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, condenó a **CELIO ORTIZ AGUILAR** a la pena principal de quince años (15) con ocho (8) meses de prisión y a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años una vez cumplida la pena principal, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de CARLOS VÍCTOR ORTIZ SALDAÑA y HERNÁN ALEXIS PINZÓN CASTILLO, respectivamente.

De fojas 460 a 487 se lee la sustentación de apelación presentada por la defensa de CELIO ORTIZ AGUILAR, el Licenciado RONALD MARTÍN HURLEY NOVILLE.

Sin embargo, mientras se surtía la alzada, la Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, remitió a esta Sala el **Certificado de Defunción**, expedido por la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral, correspondiente al procesado, **CELIO ORTIZ AGUILAR**, quien falleciera de "adenocarcinoma metastasico en Bella Vista, Distrito de Panamá el trece de abril de mil novecientos noventa y seis a las 6:50 p. m."

Puesto que la sentencia condenatoria proferida contra el difunto **ORTIZ AGUILAR**, fue concedida en el efecto suspensivo, se entiende que la condición de éste era la de ser un "procesado" y no un "sancionado" pues la sentencia no se encontraba en firme ni ejecutoriada, a razón del recurso de apelación interpuesto, según lo dispuesto por el artículo 982 del Código Judicial.

De modo que se aplica lo referente a la extinción de la acción penal, que

establece el artículo 90 del Código Penal:

> "Artículo 90: La muerte del procesado extingue la acción penal por lo que a él respecta y la del sancionado extingue toda clase de pena." (Lo resaltado es nuestro).

Puesto que resulta evidente que se ha producido la extinción de la acción penal en el presente proceso, lo procedente es declarar esta circunstancia y remitir el sumario al Tribunal a-quo para los trámites correspondientes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA extinguida la acción penal dentro del proceso seguido a CELIO ORTIZ AGUILAR, y en consecuencia ORDENA remitir el expediente al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial para los trámites de rigor.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H CUESTAS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A MARTÍN EMILIO MOSQUERA Y CESAR CAICEDO ESPINOSA SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE CECILIA CORTES MARCIAGA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, han ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias instruidas a **MARTÍN EMILIO MOSQUERA y CESAR CAICEDO ESPINOSA**, ambos declarados culpables, en juicio por jurado de conciencia, de los delitos de violación carnal y homicidio en perjuicio de **CECILIA CORTÉS MARCIAGA.**

El día 19 de enero de 1990, en horas de la noche, en el sector Ojo de Agua, Corregimiento José Domingo Espinar del Distrito de San Miguelito, falleció CECILIA CORTÉS MARCIAGA a consecuencia de múltiples heridas de arma blanca, determinándose científicamente que también fue violada por sus atacantes.

Mediante sentencia fechada trece de febrero de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a cada uno de los imputados a la pena principal de diecinueve (19) años, dos (2) meses de prisión y a la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de diez (10) años cumplida la sanción de prisión.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal observó que el actuar de **MARTÍN EMILIO MOSQUERA HERAZO y CESAR CAICEDO ESPINOSA** se encuadra dentro de los supuestos del homicidio agravado, esto es, el artículo 132 numeral 3 (motivo fútil); y de la violación carnal agravada, o sea, el artículo 218 numeral 4 (concurso simultáneo de dos o más personas).

Por ello, el Tribunal consideró procedente aplicar el artículo 64, literal a) del Código Penal, sancionando el delito de homicidio agravado con la pena máxima, o sea 20 años de prisión; y la tercera parte de la pena máxima por el delito de violación agravado -10 años- esto es, 3 años y 4 meses. De este modo la pena impuesta resultó ser de 23 años de prisión, que al restársele la sexta parte -por la atenuante prevista en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal-, es decir, 46 meses o 3 años y 10 meses de prisión; quedó una pena de 19 años, 2 meses de prisión.

El defensor de oficio de **MARTÍN EMILIO MOSQUERA HERAZO**, el Licenciado PERCY ROMÁN E. sustentó su apelación a fojas 348-349 del sumario. En su escrito, explica que su disconformidad con la sentencia radica básicamente en lo siguiente:

> "En primer lugar creemos no cabe como causa de agravación en este proceso el motivo fútil, con lo cual se quiere aplicar dos (2) penas distintas, una por Homicidio Agravado y otra por Violación Carnal Agravado. Estamos en presencia de un sólo hecho punible que es el Homicidio Agravado por haber sido ejecutado inmediatamente después de haberse cometido otro delito, para asegurar su ocultación, su ventaja e impunidad, tal como lo preceptúa el numeral seis (6) del artículo 132 del Código Penal.

Sigue diciendo en su alegación, el Licenciado Román que el delito de Violación Carnal quedó sancionado al ser subsumido en el delito de Homicidio Agravado -numeral 6 del artículo 132 del Código Penal-, por ello no debió el Tribunal sancionar la Violación Carnal como delito aparte, pues se está sancionando dos veces una misma conducta punible. Existe, según el defensor, unidad delictiva y no pluralidad de hechos punibles, por lo que la norma aplicable para la individualización de la pena lo es el artículo 63 del Código Penal y no el artículo 64; por todo ello solicita que se reforme la Sentencia apelada, fijando la pena base correspondiente al Homicidio agravado y rebajando la atenuante reconocida en el numeral 8 del artículo 66 de dicho cuerpo legal.

Por su parte, el Licenciado LUIS CARLOS AROSEMENA RAMOS, defensor de oficio de **CESAR CAICEDO ESPINOSA**, sustentó el recurso de apelación contra la sentencia, alegando básicamente lo mismo que su colega ROMÁN. Indica AROSEMENA RAMOS que a su defendido debió aplicarse en lugar de la agravante contemplada en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, la establecida en el numeral 6 que agrava el delito de homicidio cuando este se ejecute inmediatamente después de cometer otro delito para asegurar su ocultación, su ventaja o la impunidad; ello es así, porque los imputados realizaron el homicidio luego de haber violado a la hoy occisa para asegurar su ocultación e impunidad. De este modo, "la comisión delictiva de los procesados fue una, hubo unidad delictiva y no pluralidad de ilícitos", por ello, solicita que se reforme la sentencia y se aplique el contenido del artículo 63 del Código Penal.

La Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, al corrérsele el traslado respectivo del presente recurso, manifestó su interés en que se confirme la sentencia, puesto que los argumentos expuestos por la defensa técnica, carecen de sustento que motive la reforma.

> "Si observamos los actos desplegados por los sujetos activos fue determinante para la consumación de los ilícitos en comento, donde primeramente medió la violación carnal, como acto primario, con autonomía propia y definida como una ejecución que antecedió el resultado fatal, es decir, durante el desarrollo de la comisión delictiva los agentes agreden sexualmente a su víctima y posteriormente le ocasionan heridas con arma blanca que le producen la muerte, por lo que no es permisible la aplicabilidad del principio de absorción sino el de la acumulación jurídica, por tratarse de dos hechos punibles y que el artículo 64 acápite a) del Código Penal prevé." (F. 358).

Luego de analizar las constancias procesales, esta Sala estima que la tesis esgrimida por los apelantes no es admisible, puesto que no es cierto que el tipo penal del delito de Violación carnal esté subsumido o contenido de manera alguna dentro de la agravante prevista en el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal.

No podemos concluir que la agresión sexual conocida como violación carnal está contemplada en la agravante mencionada (ejecutar el homicidio luego de cometer otro delito para ocultarlo), pues ello sería tanto como decir que la violación no aparece aquí como un delito autónomo; lo cual no sería viable,

puesto que las piezas procesales permiten diferenciar claramente que el momento de la violación fue uno y el del homicidio fue otro.

Respecto a la clasificación del concurso de delitos, que se da cuando una sola persona puede ser responsable de varios delitos, vale la pena citar al jurista colombiano LUIS CARLOS PÉREZ, quien en su obra Manual de Derecho Penal, nos explica:

"Enunciánse cuatro casos de concurso, cuando:

1°) **Una sola acción** ocasiona distintas lesiones jurídicas. Es el concurso formal (ideal, aparente).
...
3°) **Diversas acciones** causan varias lesiones: concurso material o real.
...
Son elementos del **concurso ideal**, que existe tanto en los delitos culposos como en los dolosos:

1) La unidad de acción, vertida en el texto con la frase "el que con un mismo hecho", unidad que se refiere tanto al designio o imprevisión singular como a las consecuencias, aunque estas sean múltiples. El padre que somete a su hija al acceso carnal violento infringe con ese acto único los artículos 316 y 357; el que con el mismo disparo lesiona a uno y mata a otro.

2) La pluralidad de lesiones. Infringir varias disposiciones de la ley penal.
...
Son elementos del **concurso material**:

1°) Que haya un solo agente;
2°) Que este cometa varios delitos, sea como resultado de una acción única o como resultado de diversas acciones realizadas conjunta o separadamente;
3°) Que el propósito perseguido sea el de cometer todas esas infracciones;
...
El concurso formal, ideal o aparente, difiere del concurso real o material en que:

1°) La actividad psíquica del primero se dirige **a un fin concreto y singularizado**, pero el resultado es complejo, pues resultan múltiples infracciones.

2°) En el segundo, **cada una de las infracciones tiene entidad propia, psíquica y física**: se quieren varios resultados y efectivamente estos se obtienen. Cada hecho puede ser imputado individualmente.

3°) El concurso ideal solo puede ser simultáneo, mientras que el real puede ser: a) simultáneo; ...

b) sucesivo, que es el más frecuente y que consiste en una serie de infracciones ejecutadas por una misma persona.". (Págs. 112-115) (Lo resaltado es nuestro).

Aplicando lo hasta aquí citado al caso subjúdice, podemos concluir que la violación carnal y posterior homicidio de CECILIA CORTÉS MARCIAGA se encuadra perfectamente en el supuesto del concurso material o real de delitos, ya que con varias acciones se infringieron dos disposiciones diferentes de la ley penal. Desde ningún punto de vista lógico puede asumirse que la una esté inmersa en la otra. Las constancias procesales indican claramente que los procesados tenían la intención de violar carnalmente a la hoy occisa, es decir que ese era el fin que perseguían cuando la obligaron a bajar del taxi en que viajaba; y cuando la

apuñalaron también era su objetivo causarle la muerte y salir impunes de su acción. Consideramos que se encuentran claramente diferenciados los dos momentos y las dos acciones distintas que violan dos disposiciones del Código Penal, por lo que se configura el concurso material o real de delitos que aparecen contemplado en el artículo 64 de dicho cuerpo de leyes.

Con relación a la sanción que se establece para este tipo de concurso, **PÉREZ** nos dice:

"SISTEMAS GENERALES PARA SANCIONAR EL CONCURSO.

Quien comete varios delitos debe ser sancionado más duramente que quien incurre en uno solo. Esta idea ha labrado varios sistemas para sancionar el concurso:

a) El de la acumulación material, que consiste en imponer la suma de las penas correspondientes a los delitos ejecutados,

b) El de la absorción, que toma en cuenta solo las medidas señaladas para el delito más grave, **injusto porque deja impune la infracción menor**.

c) El de la acumulación jurídica, que considera como base la pena del delito más grave para aumentarla en proporción a los demás. ...". (Pág. 113) (la negrita es nuestra).

El sistema que rige en nuestro país depende del concurso de que se trate. Así, por ejemplo el concurso ideal, contemplado en el artículo 63 del Código Penal se rige por el principio de absorción; y el concurso material o real, (artículo 64) se rige por el principio de acumulación jurídica, pues se sanciona el delito más grave (si son dos) y se aumenta hasta la tercera parte de la pena correspondiente al otro delito.

Puesto que en el presente caso se observa claramente el concurso material de delitos, es evidente que el Tribunal a-quo aplicó correctamente el principio de acumulación jurídica, y por tanto, estimamos que lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de trece (13) de febrero de 1995 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, mediante la cual se condena a MARTÍN EMILIO MOSQUERA HERAZO y a CÉSAR CAICEDO ESPINOSA a la sanción principal de diecinueve (19) años, dos (2) meses de prisión y la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de diez (10) años cumplida la sanción de prisión, por los delitos de homicidio y violación carnal el perjuicio de CECILIA CORTÉS MARCIAGA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ALFONSO LÓPEZ BARBA (A) "ALFONSITO", POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ARTURO RODRÍGUEZ (A) "ARTURITO" MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 22 de agosto de 1994 el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial condenó a ALFONSO LÓPEZ BARBA (A) POCHO a cumplir la pena de 10 años de prisión y a la accesoria para ejercer funciones públicas por igual tiempo que la pena impuesta, a partir de la fecha en que concluya la pena privativa de libertad por haber sido encontrado culpable del delito de homicidio cometido en detrimento de ARTURO RODRÍGUEZ (A) ARTURITO, hecho ocurrido en el Corregimiento de la Arena, Distrito de Chitré, Provincia de Herrera.

En efecto, previa declaratoria de culpabilidad por parte de un jurado de conciencia, el tribunal a quo emprendió la tarea de dosificar la pena a que se hacía merecedor el procesado, con vista en los aspectos objetivos y subjetivos que han de tomarse en cuenta conforme al artículo 56 del Código Penal.

En ese sentido, la conducta del señor ALFONSO LÓPEZ BARBA fue ubicada dentro de la modalidad del delito de homicidio previsto en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, que se refiere a haber obrado el agente por motivo fútil. Con fundamento en dicha subsunción se fijó como pena base 12 años de prisión, la cual fue aumentada en tres sextas partes en razón de haberse cometido el delito empleando medios que debilitaron la defensa del ofendido, por haber obrado con ensañamiento y por haber cometido el hecho con abuso de las relaciones de cohabitación, tal como lo prevén los numerales 1,3 y 10 del artículo 67 del Código Penal en concordancia con el artículo 69 del mismo cuerpo legal, todo lo cual, luego de los correspondientes cálculos aritméticos, arrojó una pena líquida de 18 años de prisión.

Pues bien, tanto el procesado como su defensor, licenciado EDWIN HORACIO CEDEÑO RODRÍGUEZ, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual el proceso se encuentra en estos momentos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme se desprende del escrito de sustentación presentado por el abogado defensor (fs. 647-649), las razones en que fundamenta su inconformidad con el fallo recurrido son las siguientes. En primer lugar, señala el apelante que el tribunal ha cometido un error al calificar el ilícito ya que en el expediente no se ha probado que el hecho se hubiera ejecutado por medios de ejecución atroces. Señala que si bien es cierto que la víctima presentaba 21 puñaladas, no menos cierto es que sólo una fue la que le causó la muerte. Además llama la atención de la Corte al hecho de que la víctima era karateca profesional y que había lesionado a su defendido en varias ocasiones y que además era una persona problemática y contra la cual habían indicios que lo vinculaban con la muerte de un individuo. En segundo lugar, considera el apelante que el tribunal no debió aplicar las agravantes contenidas en los numerales 1, 3 y 10 del artículo 67 del Código Penal ya que no se ha comprobado que su defendido abusara de superioridad, ni empleara medios que debilitaban la defensa de la víctima. Por el contrario considera que el hecho de que la víctima practicaba artes marciales lo colocaba en una condición superior a la de su defendido. En ese mismo sentido señala que el tribunal cae en el error de considerar que hubo ensañamiento ya que como se dijo anteriormente "las heridas que presentaba la víctima no eran necesariamente mortales en su gran mayoría, y la gran cantidad que le propinó mi defendido no evidencia otra cosa que el grado de temor, muy justificado por cierto, que sentía hacia el primero". Y además señala que "Demás está decir que mi defendido en ningún momento se aprovechó de las condiciones de cohabitación que mantenía con la víctima, pues es un hecho públicamente aceptado por los vecinos del lugar que ARTURO RODRÍGUEZ era una persona problemática, ...".

Finalmente, a través de los argumentos expuestos, el abogado defensor solicita que se aplique el artículo 131 del Código Penal y que se le reconozcan las atenuantes establecidas en los numerales 3, 4 y 8 del artículo 66 del Código Penal.

CRITERIO DE LA CORTE

Pues bien, la Corte estima que tales argumentos no tienen la consistencia para revocar las agravantes que fueron reconocidas por el tribunal a quo.

El abogado de la defensa alega que no se ha probado en el expediente que

el delito se cometió por medios de ejecución atroces, por lo que entonces considera que el tribunal a quo se equivocó en calificar el ilícito.

Considera esta Corporación que no le asiste razón al apelante porque lo que si es cierto es que no se ha encontrado en el expediente una razón o motivo contundente o importante que justifique la conducta antijurídica del imputado.

Acertadamente el tribunal a-quo encuadró la conducta del señor ALFONSO LÓPEZ BARBA en el numeral 3 del artículo 132 del Código penal que dice:

"El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con 12 a 20 años de prisión cuando se ejecute:
3. Por motivo fútil o medios de ejecución atroces;"

Ahora bien, debe quedar claro que cuando se habla de motivo fútil no se hace alusión a la ausencia de motivos, sino a la existencia de motivos intrascendentes, insignificantes, sin importancia que motivan al agente a cometer el ilícito. Después de un estudio de las constancias procesales, la Corte no encuentra otra razón que justifique la conducta del imputado, por lo que nos inclinamos por el criterio del Tribunal Superior.

El numeral 3 del artículo 132 habla de homicidio por motivo fútil, pero además se refiere al supuesto de cometerlo por medios de ejecución atroces. Según el abogado defensor "con relación a este último aspecto debemos señalar que, si bien es cierto que el occiso presentaba 21 heridas en su cuerpo, no menos cierto es el hecho que solamente una de dichas heridas era necesariamente mortal, o al menos fué (sic) la que le causó la muerte, de allí que resulte exagerado pretender calificar el delito bajo ese aspecto, es decir, tomando en consideración la cantidad de heridas que presentaba la víctima, pues todo ello tiene una explicación dentro del proceso que nos ocupa".

Exagerado es propinarle a una persona 21 puñaladas cuando con una sola ya coloca a la víctima en una posición inferioridad con respecto al agente, 21 puñaladas es un medio de ejecución atroz e implica ensañamiento y abuso de superioridad que obviamente debilita la defensa del ofendido, por lo tanto el tribunal a quo aplicó correctamente las agravantes contenidas en los numerales 1, 3 y 10 del artículo 67 del Código Penal.

Frente a tal realidad, no queda otra opción que confirmar la sentencia recurrida, toda vez que los elementos probatorios allegados al expediente demuestran la concurrencia de las agravantes que fueron reconocidas por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la sentencia sometida a censura.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IVES ALAÍN BECERRA FLORES, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE ADOLFO MOHAMED SALINAS OROZCO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Manuel E. Cajar M., en representación de **IVES ALAÍN BECERRA FLORES**, dentro del proceso penal que se le sigue por delito contra la vida, en perjuicio de **ADOLFO SALINAS OROZCO**, anunció y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que condena a su defendido a 16 años de prisión e inhabilitación por igual período, para el ejercicio de funciones públicas.

Según las constancias de autos, este proceso se inicia con la "notitia criminis" recibida de la morgue del hospital Santo Tomás el 15 de abril de 1992, cuando se solicitó practicar la diligencia de reconocimiento de un cadáver, quien resultó ser el ciudadano panameño ADOLFO MOHAMED SALINAS OROZCO, de 18 años de edad, cédula N° 8- 438-755, fallecido en el sector del barrio de Santa Ana, por herida de arma de fuego, a la altura del hombro izquierdo.

Según las declaraciones de varios vecinos del lugar y de la concubina del occiso, señora Omaira del Carmen Díaz, los antecedentes de este hecho se originan en una discusión entre Adolfo Salinas y un hermano de la joven Yadira, por el préstamo de un cuchillo que terminó en riña, a la que se solidarizaron otras personas, dando lugar que al día siguiente, en horas de la noche, cuando acompañaba a su concubino, el hermano de Yadira y un amigo de éste, que resultó ser Ives Becerra Flores, al pasar a su lado sacó una pistola y le disparó produciéndole la muerte.

El Tribunal consideró reunidos los presupuestos para encausar a Becerra Flores, quien fue sometido a juicio con la participación de jurados de conciencia, recibiendo de parte de ellos un veredicto de culpabilidad en su contra.

De conformidad a lo normado por el artículo 2389 del Código Judicial, el Tribunal se limitó a fijar la pena que correspondía al señor Becerra Flores, según las constancias procesales y atendiendo las prescripciones del artículo 56 del Código Penal. En el examen de fondo, se calificó el delito en el numeral 3° del artículo 132 del Código Penal, como homicidio agravado por causa fútil y por tratarse de delincuente primario, se estableció como pena líquida a cumplir, 16 años de prisión, sin consideración a ninguna circunstancia modificadora de la responsabilidad penal.

El recurrente al sustentar la apelación cuestiona la autoría que se le imputa a su defendido y el veredicto del jurado de conciencia, además de la calificación del hecho punible atribuido. Respecto a la identificación de Becerra Flores como autor del homicidio y la decisión del jurado de conciencia, no es posible variar tales hechos a través de un recurso de esta naturaleza, por cuanto se dio un auto encausatorio que no fue motivo de impugnación alguna y la decisión de los jurados de conciencia, como es de todos sabido, no es una decisión en derecho, sino a base de los valores y capacidad de comprensión de los hechos por jueces legos, dotados de la sabiduría popular.

Con relación a la calificación del delito hecha por el Tribunal, la realidad procesal nos indica que la solidaridad amical por una pelea de barrio no puede aceptarse como una razón válida para vengar esa ofensa con un disparo de arma de fuego, que destruye la vida de un ser humano. Ni en los códigos no escritos de la criminalidad organizada se registra este tipo de conducta como respuesta a discusiones y reyertas de terceros. La calificación de fútil en el caso concreto, es correcta, al tenor de los hechos y circunstancias que se registraron en el caso sub-júdice.

En ese mismo sentido, se manifestó la representación del Ministerio Público al oponerse a la alzada, cuando señaló que "no puede admitirse que una discusión verbal entre dos personas, sea suficiente justificación para emprender una acción letal contra un ser humano". A esto agrega que entre la riña y la discusión por la devolución del cuchillo prestado se registró un día antes, de allí que no se está en presencia de una reacción emotiva, sino de una venganza reflexionada.

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ALFONSO RODRÍGUEZ, HERMÓGENES VÁSQUEZ Y ANDRÉS SANTOS, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CRISTINO BARRÍA CERRUD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Contra la sentencia de 27 de febrero de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en virtud de la cual condena a los señores **ALFONSO RODRÍGUEZ, HERMÓGENES VÁSQUEZ y ANDRÉS SANTOS** a veinte años de prisión por el delito de homicidio en la persona de **CRISTINO BARRÍA CERRUD**, al momento de su notificación, apelaron los sentenciados y su abogado defensor.

Concedida la apelación y surtidos los trámites legales del caso, se ordenó la remisión del proceso a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y a ello obedece su ingreso a esta Corporación Judicial.

LOS HECHOS

Relatan las constancias procesales, que el 6 de junio de 1994, durante la celebración de un baile en la Casa Comunal de El María, Distrito de Las Palmas, los señores Alfonso Rodríguez, Hermógenes Vásquez, Andrés y Benito Santos, protagonizaron una pelea con el difunto Cristino Barría Cerrud a quien golpearon con los puños, le asestaron golpes con un garrotillo, le dieron una puñalada en el pecho y lo patearon cuando estaba tendido en el piso.

Aunque se afirma que no medió incidente o provocación alguna de parte del occiso, Alfonso Rodríguez manifestó desde su primera declaración, que fue cortado en el rostro con una "gillete" y fue ese hecho el que motivó la intervención de sus amigos al ver su rostro cubierto de sangre, quienes bajos los efectos de los tragos, golpearon a Cristino, para ellos desconocido, con los puños, con un banco de madera, dos garrotillos y al caer lo pateaban intimándole a que se levantara a pelear.

Una vez agotada la fase instructoria, el Tribunal de la causa al calificar el sumario dictó el auto calendado el 13 de julio de 1994, en virtud del cual abrió causa criminal contra Alfonso Rodríguez, Hermógenes Vásquez, Benito Santos y Andrés Santos, por considerarlos presuntos infractores del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio en la persona de CRISTINO BARRÍA CERRUD.

Sometido el caso a los trámites del juicio con intervención de jurados de conciencia, en la audiencia llevada a cabo el 10 de enero de 1996, fueron declarados culpables de la muerte de Barría Cerrud, excepto Benito Santos, a quien se le declaró inocente.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Con el fin de fijar la pena que debían cumplir las personas declaradas culpables por el Jurado de Conciencia, el Tribunal calificó el delito como homicidio agravado y lo ubicó en el numeral 3° del artículo 132 del Código Penal,

o sea, homicidio por motivo fútil. Al considerar que el hecho se cometió con ensañamiento y con ayuda de varias personas, el Tribunal señaló la pena en veinte años de prisión "como pena máxima, fija y sin atenuantes" tanto para Alfonso Rodríguez en su condición de autor, como para Hermógenes Vásquez y Andrés Santos, a quienes calificó como cómplices primarios.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El Defensor de Oficio que actúo como representante de todos los sentenciados, en su escrito de sustentación (fs. 520-522) considera que no se registra en este caso un homicidio agravado por motivo fútil, por cuanto consta en autos que Alfonso Rodríguez sostuvo una discusión con el occiso y éste utilizando una navaja de afeitar le cortó el rostro y parte de la oreja y que fue con posterioridad a este hecho cuando intervinieron sus amigos, por tanto, aún bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en que se encontraban todas las personas que intervinieron en este lamentable suceso, existía un motivo claro y preciso, cual fue la herida en el rostro que recibió Rodríguez. Con base a ese punto de vista en la apreciación de lo acontecido, pide que se revise la pena impuesta a cada uno de sus defendidos por considerarlas excesivas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Es de suyo lamentable, que bajo los efectos de bebidas alcohólicas fuertes, nuestros trabajadores de tierra adentro al acudir a los actos sociales de diversión sana, como lo es un baile en una casa comunal, se vean envueltos en hechos tan desafortunados como éste, en los que afloran instintos primitivos de agresión y violencia que los conducen a segar la vida de hombres jóvenes, llenos de esperanzas para su familia y la comunidad en la que viven. En el presente caso, los valores de dignidad humana, valentía y solidaridad, se deformaron en reacciones negativas y tal como lo apunta la defensa, no es posible considerar que estamos ante un homicidio por motivo fútil, ya que las pruebas indican que se usó una navaja de afeitar (cfr. fs. 155, 52, 270) y que Alfonso Rodríguez presentaba heridas cortantes en parte del rostro y la oreja.

Se trata de un homicidio simple, pero con las agravantes de ensañamiento, exceso en la supuesta defensa del compañero agredido y la participación de varias personas en la ejecución del hecho. Por otra parte, si bien es cierto que los cómplices primarios son sancionados, al tenor de lo que dispone el primer párrafo del artículo 61 del Código Penal, con la pena que señala la ley para el hecho punible, esto no debe interpretarse en el sentido que debe ser la misma pena del autor, en virtud del principio de la individualización judicial de la pena.

Así las cosas y dada la gravedad del ilícito cometido, la pena se fija en diez años para Alfonso Rodríguez, quien confesó tardíamente haber usado un cuchillo que introdujo en el pecho de Cristino (fs. 372), la cual se agrava en un tercio por haber obrado con ensañamiento y un tercio más por perpetrar el con hecho con auxilio de otras personas, operación aritmética que da como resultado final 16 años y ocho (8) meses de prisión.

En cuanto a la pena que debe cumplir Hermógenes Vásquez, declarado culpable por el jurado de conciencia, de haber "contribuido a darle muerte a Cristino Barría Cerrud el día 6 de junio de 1993", la pena se fija en seis años y por la concurrencia de dos causales modificadoras de la responsabilidad penal, contenidas en los numerales 3 y 7 del artículo 67 del Código Penal, se le agrava en un tercio por cada una de ellas, lo que suma diez años de prisión.

Respecto a la pena que debe cumplir Andrés Santos, a quien el jurado de conciencia también declaró culpable de haber contribuido a causar la muerte de Cristino Barría Cerrud, en las constancias procesales aparece igual comportamiento al de Vásquez, al apoyar a su amigo Alfonso en la pelea con Cristino y desde su primera declaración indagatoria acepta que al percatarse de la riña, acudió e intervino en ella y al ver al sujeto en el suelo, le dio patadas en la creencia errada de que sólo estaba aturdido. La pena se fija en seis años y se le computan las dos agravantes registradas en el caso, esto es, el ensañamiento en la agresión y la participación de varias personas en la ejecución del hecho punible, suma ésta que arroja como resultado diez años de

prisión.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a ALFONSO RODRÍGUEZ, de generales expresadas en autos, a la pena de dieciséis (16) años y ocho (8) meses de prisión por el homicidio de CRISTINO BARRÍA CERRUD; a HERMÓGENES VÁSQUEZ y ANDRÉS SANTOS, ambos de generales consignadas en el expediente, a la pena de diez (10) años de prisión, en su calidad de cómplices primarios del delito de homicidio en perjuicio de Cristino Barría Cerrud. A los sentenciados se les aplica además, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Fundamento de Derecho: artículos 61, 67 numerales 3 y 7, y 131 del Código Penal, artículos 2389, 2421, 2423 y 2429 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS ALFREDO LOZANO, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE OSWALD LOZANO MENDOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución del 6 de febrero de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia niega la solicitud de fianza de excarcelación a favor de **LUIS ALFREDO LOZANO**, imputado por el delito de homicidio, en perjuicio de **OSWALD LOZANO MENDOZA.**

El licenciado Joaquín Roger Pérez, apoderado judicial del imputado, al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional anunció recurso de apelación y al ser concedido en efecto suspensivo, permite a esta superioridad examinar la actuación.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Pérez solicita se conceda a su cliente el beneficio de fianza de excarcelación, al estimar que el auto impugnado no profundiza en los hechos objeto de su petición.

Indica así, que ha quedado demostrado que Luis Alfredo Lozano no lesionó mortalmente a su hijo de manera intencional; que los testimonios de Teresa Rivas, Yoris Alexander y Sixto Caicedo establecen que el hecho de sangre se produce cuando, después de una discusión, el joven Oswald Lozano, hijo de su cliente, lo agrede violentamente con un palo de escoba; que su defendido trató de repeler o detener la agresión actual e inminente, resultando lesionado Oswald Lozano; que no emerge ningún indicio que señale que su defendido realizó la conducta investigada con dolo; que los testigos coinciden en que Luis Alfredo Lozano salió de la casa y fue el hoy occiso, quien producto del alcohol y las drogas lo buscó para agredirlo (fs. 11-13).

HECHOS

En horas de la noche del 11 de junio de 1995, en el hogar de la familia Lozano-Mendoza ubicada en el sector de Curunducito en la barriada Torrijos-Carter, del distrito de San Miguelito, se suscitó una discusión cuando uno de sus miembros, el joven Oswald Lozano Mendoza, bajo los efectos del alcohol y droga, se disponía a llevarse el tanque de gas de la casa de su hermana Emis Dianela, lo cual se le impidió, pero en consecuencia se originó una discusión dentro de la casa y Oswald golpeó a su padre, el señor Luis Lozano, luego lograron desapartarlos, pero Oswald salió de la casa en busca de su padre que estaba afuera, lo agredió varias veces con un palo de escoba, al tratar Luis Alfredo Lozano de defenderse hirió de muerte a su hijo Oswald, con una cuchilla pequeña que siempre carga en su llavero.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El tribunal de primera instancia tomó como basamento para negar la solicitud lo siguiente:

> "... la declaración de MELITINA MENDOZA, madre del occiso y esposa del imputado, en la cual manifiesta que cuando el vecino ABDIEL logró separar al occiso y al imputado éste le dijo al vecino que le trajera un vaso de agua, lo cual aprovechó para abalanzarse sobre su hijo y puyarlo con una cuchilla. También expresó que el imputado es muy acelerado y cada vez que se enojaba quería matarlos y que ella no lo había abandonado porque él la amenazaba con matarla. Resulta notorio también, el hecho que, según el imputado, sabía que su hijo estaba lesionado, cuando salió de la casa y se puso a conversar un rato con el vecino y que fue su cuñado CHOLO el que trasladó al herido hasta el hospital".

Concluyendo que existen constancias procesales suficientes para calificar, provisionalmente como delito de homicidio doloso el hecho que se le imputa a Luis Lozano, por lo que es inadmisible el derecho de fianza de excarcelación.

Observa la Sala, luego de examinar el expediente principal, que prácticamente la investigación está completa. Se cuenta con declaraciones de testigos presenciales, protocolo de necropsia y declaración del médico forense que la realizó, diligencia de reconstrucción de los hechos, evaluación psiquiátrica forense e informe Social.

El apelante afirma que la muerte de Oswald Lozano fue el resultado de una lesión cardíaca, no obstante, el protocolo de necropsia señala **"que el cuerpo presenta una herida en la región mamaria izquierda del pecho causada con un objeto corto-punzante, probablemente de un solo filo, que penetró en el tórax lesionando un órgano vital (el corazón), lo cual llevó a una hemorragia interna aguda mortal"** (f. 54).

Ahora bien, la señora Teresa Rivas de Ledezma, vecina de la familia Lozano-Mendoza, manifiesta:

> "... al muchacho lo agarraron dos hermanos y lo metieron a la casa, y al señor Luis mi esposo lo sacó de la casa porque la pelea fue dentro de la casa, entonces como la hermana estaba desmayada Oswald salió de la casa y con un escoba le tiró a pegar varias veces al señor Luis que estaba fuera de la casa, el señor se agachó para que el joven Chichi no le pegara, y vi cuando el señor Luis tira la mano hacia atrás e inmediatamente el joven Chichi cae herido ..." (fs. 81-83).

En tanto su hermano, Yonis Alexander Rivas Rivas, de 17 años de edad, afirma que el hoy occiso le pegaba con un palo al señor Luis y cuando intentó hacerlo nuevamente éste levantó la mano izquierda para protegerse y fue el momento cuando Oswald fue herido (fs. 84-86).

Por su parte, otro vecino, el señor Sixto Caicedo coincide con los anteriores, y afirma que luego que el padre y el hijo fueron desapartados, el

joven Oswald logró soltarse de sus hermanos y llegó donde estaba el señor Luis y le tiró a pegar con un palo varias veces y éste por "instinto de defensa" alzó la mano hacia donde estaba el occiso, pero no pudo ver si el señor Lozano tenía arma pero Oswal decía que estaba herido (fs. 87-88).

En sus declaraciones, los testigos aludidos han sido prudentes en cuanto a no señalar aspectos de la vida del joven Oswald, no obstante, el examen de laboratorio post-mortem determinó alcoholemia 169.79 mg/dl y positivo para cocaína (fs. 53). Además, su madre, su padre y su hermana sí manifiestan que a objeto de obtener dinero para sus vicios -droga y alcohol-, hurtaba dinero y artículos de la casa para suministrarse sus vicios, y que estuvo detenido por estar en posesión de droga (fs. 15-17, 18-20 y 24-29).

Interesante resulta el Informe Social que resalta aspectos de la vida del imputado Lozano Granados, quien en la actualidad tiene 59 años de edad, es maestro contratista, conoció a su esposa Melitina Mendoza con tres hijos de 6, 4 y 2 años de edad y en estado de embarazo; decidieron vivir juntos en 1967 y en 1985 se casaron por lo civil.

La licenciada Lucila A. Samudio, en su informe manifiesta:

> "En el hogar que formó Luis Alfredo Lozano Granados a pesar de que él posee sólidos principios morales y disciplina de trabajo, no pudo trasmitirles éstos a sus hijastros inclusive al occiso a pesar de que a éste lo crió desde que nació, se dejó llevar por los amigos, ni su madre pudo hacer que rectificara. A través de los años Luis Alfredo Lozano trató de suplirles a todos sus necesidades en una forma correcta" (fs. 152-157).

Todo lo expuesto nos lleva a concluir, que el joven Oswald Lozano Mendoza, de 25 años de edad, cuya conducta refleja que fue absorbido por otras corrientes ajenas al hogar, ha llevado a un trance difícil a quien desde antes de nacer, lo acogió como a un hijo al igual que a sus hermanos.

Ante el episodio suscitado, no puede soslayarse que el señor Luis Alfredo Lozano, de 59 años de edad, al momento de los hechos, ante esas circunstancias y la agresión violenta de que era víctima, le creó un estado de ofuscación y aunque no lo haya dicho el médico psiquiatra, son vivencias reales que necesariamente tienen que crear una perturbación, que lo llevó a repeler la agresión, lo que dio un resultado no querido por el señor Lozano.

Estima la Sala que es de justicia mirar esa situación en su beneficio y no hacerle más penoso el estado emocional que vive y que hoy lo mantiene detenido. Por lo que se le concederá el derecho a fianza y se cuantificará de acuerdo a su ingreso económico.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 6 de febrero de 1996 y en su lugar, CONCEDE el derecho de fianza de excarcelación a LUIS ALFREDO LOZANO y fija la cuantía en mil quinientos balboas (B/.1,500).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO ANTONIO QUINTERO RIVAS Y VÍCTOR CÉSAR MÉNDEZ RIVAS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ATENCIO UBILLOS ESPINOZA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E.

GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Edwin De León Rodríguez, abogado defensor de **GUSTAVO ANTONIO QUINTERO RIVAS** y **VÍCTOR CESAR MÉNDEZ RIVAS**, sindicados por el delito de homicidio en la persona de **ANTENOR UBILLOS ESPINOZA**, al momento de notificarse del auto de 22 de abril del año en curso, expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se niega la solicitud de fianza de excarcelación, apeló del mismo, medio de impugnación que fue concedido en el efecto diferido y que ha dado lugar a su ingreso a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la resolución recurrida consisten en que en el expediente de 344 folios que recoge la fase instructoria del proceso penal a que dio lugar la investigación del homicidio en la persona del menor ANTENOR UBILLOS ESPINOZA, aparecen dos declaraciones que señalan a GUSTAVO ANTONIO QUINTERO y a VÍCTOR CÉSAR MÉNDEZ entre el grupo de personas que el día 3 de septiembre de 1995, a las ocho de la noche, en los predios que ocupan los multifamiliares de Barraza en el Bario del Chorrillo, vestidos de negro y encapuchados, atacaron a un grupo de menores que se encontraban en ese lugar produciendo la muerte de UBILLOS ESPINOZA e hiriendo a dos personas más al desatarse una balacera de la que dan testimonio un número plural de personas. Como quiera que el delito que se investiga es el de homicidio, cuya penalidad mínima es superior a dos años de prisión, al tenor de lo que disponen los artículos 2162 y 2181 del Código Judicial, está excluido del derecho de excarcelación bajo fianza.

Al examinar los antecedentes, las incriminaciones que se hacen a GUSTAVO ANTONIO QUINTERO RIVAS y a VÍCTOR CÉSAR MÉNDEZ RIVAS, no han sido desvirtuadas, a pesar de que estos niegan su participación en el hecho y se declaran inocentes de los cargos que se les formulan.

En la etapa en que se encuentra la investigación emerge con claridad que un grupo de personas vestidas de negro y encapuchadas, portando armas de fuego se apersonaron al sector de Barraza donde se registró la balacera en la que perdió la vida el menor de dieciséis años de edad, ANTENOR UBILLOS ESPINOZA y, si bien es cierto que no se ha logrado precisar quién portaba el arma de donde salió la bala que se incrustó en la cabeza del occiso y le produjo la muerte, la responsabilidad recae sobre todas las personas que fungieron como actores de este hecho de trascendencia punitiva, que no sólo utilizaron la nocturnidad para amparar su acción delictiva sino que añadieron el uso de disfraz y capuchas, de armas de fuego y la acción de pandillas que representa un indicador de elevada peligrosidad y de criminalidad organizada urbana.

En las condiciones anteriores, que emergen de los antecedentes del presente caso, la Sala se inclina por la ratificación del auto apelado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto calendado el 22 de abril de 1996, expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en virtud del cual niega la solicitud de fianza de excarcelación presentada por el licenciado Edwin De León Rodríguez a favor de sus defendidos en este caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ALEXANDER ÁNGEL CAMARGO, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALVEO DE LA ROSA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, presentó recurso de apelación contra auto de 3 de mayo de 1996, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia concede libertad provisional a Alexander Ángel Camargo, sindicado por el delito de homicidio cometido en detrimento de Alfonso Alveo Ruiz.

Para fundamentar su apelación, la apelante sostiene básicamente que "en la fase de investigación sumarial, no queda la menor duda de que estamos en presencia de un homicidio doloso, que de manera alguna ... se puede justificar con una causal excluyente de antijuridicidad ... ya que en ningún momento la vida del imputado estuvo en peligro, sino que todo indica, la víctima corría para no ser atrapado por el Guardia de Seguridad, luego de haber causado daños a un vehículo ... ni se puede alegar que se cumplía con su deber, ya que no es facultad de ningún guardia de seguridad ... quitarle la vida a aquél que no se deja capturar" (f. 17, cuaderno de fianza).

Por conocidos los argumentos de la recurrente, se pasa a resolver la alzada, de conformidad con el caudal probatorio obrante en autos y en atención a lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial.

La investigación trata sobre la muerte de Alfonso Alveo Ruiz, ocurrida durante la tarde del 10 de abril del año que decurre, en el sector de Carrasquilla, provincia de Panamá, como consecuencia de un disparo de arma de fuego que le hiciera Alexander Ángel Camargo, quien en ese momento se desempeñaba como guardia de seguridad en el área de la Clínica Hospital América. Según el informe de la diligencia de levantamiento de cadáver, la muerte fue ocasionada por "Herida por proyectil de arma de fuego. -Broncoaspiración hemática" (f. 51).

Ahora bien, la concesión de libertad provisional al imputado Camargo se sustenta en la existencia de la causa de justificación denominada legítima defensa, "ya que el occiso fue sorprendido ... cuando se encontraba en un auto con el fin aparente de cometer un delito contra la propiedad; el procesado era responsable del automóvil y de la protección del área ... le dio señal de alto al hoy occiso, éste no hizo caso alguno, luego realizó un tiro al aire y el hoy occiso se mostró desafiante ante la orden de alto ... e incluso, intentó quitarle el arma" (fs. 10-11, cuaderno de fianza).

Como quiera que la representante del Ministerio Público censura el reconocimiento de la legítima defensa, resulta esencial adentrarse en el examen de los elementos probatorios que figuran en autos, a los efectos de determinar si el sumariado actuó frente a una agresión injusta, actual o inminente, como exige la ley.

El imputado Camargo manifiesta en su declaración indagatoria que "el sujeto había roto el vidrio y tenía su mano dentro del vehículo ... me dirigí hacia donde estaba ... diciéndole que sacara la mano del carro ... se fue del área ... yo crucé la calle detrás de esta persona, y le decía que se detuviese; y el tipo no hacía caso ... cuando tomó hacia la Iglesia ... realicé dos disparos al aire, y el sujeto hizo caso omiso ... cruzo la calle de Carrasquilla ... siguió ascendiendo por una escalera que da a una escuela ... yo percuté dos Tiros al aire; este se iba evadir, y gritó que yo lo iba a tener que matar si lo quería capturarlo ... llegué a estar una distancia de medio metro, ya que el sujeto se había detenido ... desde arriba, se me abalanzó hacia el arma que yo empuñaba en la mano derecha, tiró un golpe con una de sus manos y me golpeó en el hombro izquierdo, y yo disparé" (fs. 40-41).

De los términos de este relato, se puede inferir que Camargo actuó frente a una agresión actual, pues lo que motivó su acción fue el hecho de que el ahora finado intentó agredirlo físicamente para apoderarse de su arma de fuego. Sin embargo, la Sala debe advertir que esta versión está viciada por algunas contradicciones. En primer lugar, el imputado sostiene que el proyectil impactó en la espalda del occiso "**por la posición en que quedó al momento de lanzar el golpe**" (f. 41); en tanto que Roberto Ricardo Codrington Lewis, quien también funge como agente de seguridad, manifestó que lo que hizo el sujeto fue "tirarse sobre mi compañero...cuando mi compañero hizo como para tirarle ... **el sujeto se puso de medio lado y se tiro para atrás**" (f. 25). De igual manera, cuando el indagado es cuestionado acerca de "si es cierto o no que su compañero CORLINTONG le gritaba insistentemente que le dispara al sujeto" (f. 42), éste contestó que "quienes gritaban que lo tirara en el pie eran los curiosos" (f. 42), lo que no coincide con lo expuesto por el deponente Codrington Lewis, quien reconoció que "le dije que disparara pero para el aire" (f. 26).

El cuaderno penal también recoge el testimonio de Edwin Javier Osorio Herazo, cuya narración de los hechos refuta la que ofrece el sindicado. Este deponente sostiene que el occiso "decía que no había robado nada ... el otro seguridad le decía, tírale insistentemente ... el tipo siguió caminando hacia el portal de la escuela, en el portón de la escuela el guardia de SEGURIDAD, le disparó en la espalda, como a tres o cuatro metros" (f. 16). En el mismo sentido, resulta importante lo expresado por Roberto Adolfo Rangel Muñoz, quien afirma que "Cuando me asomé en la parte de atrás de la Bomba, más allá del taller estaban forcejeando ... no entraron en lucha por el arma ... me refiero a que el guardia había agarrado al sujeto por el sweter y el sujeto se quitó el sweter y salió caminando" (fs. 94-95).

Considera la Corte que las contradicciones que emergen de los testimonios recabados hasta el presente no permiten conocer con exactitud las circunstancias que rodearon el hecho de sangre, lo que impide confirmar la existencia de la legítima defensa en el proceder de Camargo, pues esta causa de justificación "debe aparecer plenamente comprobada, es decir, sin que haya asomo de duda" (Registro Judicial, agosto de 1992, pág. 59). En consecuencia, resulta inoportuno reconocerle al sindicado Camargo el beneficio de la libertad provisional, lo que en modo alguno impide que, por adelantadas las investigaciones y tras aclarada la conducta del detenido, sobre la base de que actuó en legítima defensa, se pueda resolver en forma distinta sobre su status procesal.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 3 de mayo de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar DECLARA que Alexander Ángel Camargo se encuentra excluido del beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA LA LICENCIADA MARCELA DE ANTINORI, JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz ha presentado petición escrita a esta Sala con la finalidad de que se le declare impedida para conocer de recurso de apelación promovido contra auto calendado 10 de enero de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se admite la acusación particular presentada por la licenciada Omayra García de Berbey contra Marcela Gómez de Antinori, Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por delito contra la Administración Pública.

La solicitud viene fundamentada en el argumento de que "la licenciada Omayra García de Berbey ha promovido acusación particular en mi contra ante la Asamblea Legislativa" (f. 47), fundamento que, según la magistrada Guerra de Villalaz, tiene sustento jurídico en el ordinal 11 del artículo 749 del Código Judicial.

Una vez examinada la petición se comprueba que se encuentra debidamente acreditado el impedimento que se anuncia, por lo que es del caso acceder a su reconocimiento.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, y dispone separarla del conocimiento de este caso. Procédase, como lo ordena la ley, a la continuación del proceso con el magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda, conforme el orden alfabético de los apellidos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA QUERELLA PRESENTADA POR JAIME PADILLA BÉLIZ CONTRA EL DOCTOR CARLOS HUMBERTO CUESTAS POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Magistrada **AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ**, manifestó impedimiento para conocer del negocio relacionado con la querella promovida por Jaime Andrés Padilla Béliz contra Carlos Humberto Cuestas Gómez, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de los delitos de calumnia e injuria.

La Magistrada **GUERRA DE VILLALAZ** sustenta su manifestación de impedimento, en los términos siguientes:

> "... al percatarme de quién es el querellante debo comunicar a los Magistrados que integran la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la existencia de causales de enemistad grave, de trascendencia pública, contra el sujeto procesal que hace la pretensión, por lo que carezco de las condiciones anímicas de imparcialidad que me permitan intervenir en este caso.".

En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 749, numeral 15 del Código Judicial, es causal de impedimento: "La enemistad manifiesta entre el Juez o Magistrado y una de las partes; ...".

Por lo expuesto, considera la Sala que se justifica la separación de la Magistrada **GUERRA DE VILLALAZ** para conocer del presente negocio.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, Sala unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ; y en consecuencia, la declara IMPEDIDA y la separa del conocimiento del presente caso; y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético de apellidos, para que la reemplace, según lo establecido en el artículo 78 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN EL INCIDENTE DE CONTROVERSIA PROMOVIDO POR EL LCDO. ROLANDO VILLALAZ GUERRA CONTRA LA FISCALÍA 3ª SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL SUMARIO SEGUIDO A ROBERTO A. LÓPEZ VILLARREAL Y MELQUISIDEC DE LEÓN, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS HUERTAS DÁVALOS. (PONENTE J. M. FAÚNDES). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Honorable magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha solicitado se le separe del conocimiento de la alzada promovida por la firma forense Villalaz & Asociados contra auto de 26 de marzo de 1996, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, medida jurisdiccional que niega el incidente de controversia propuesto contra la Fiscal Tercera Superior dentro del proceso penal seguido a Roberto López y Melquisidec De León, sindicados por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Luis Huertas Dávalos.

La magistrada Guerra de Villalaz eleva su solicitud con fundamento en que "la firma forense que representa a los procesados, lo es la **VILLALAZ & ASOCIADOS** ... a la cual me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, con algunos de los socios que la componen" (f. 112).

Como quiera que la manifestación de impedimento tiene sustento jurídico en lo que dispone el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, resulta procedente admitirlo.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, DISPONE separarla del conocimiento de esta actuación y CONVOCA, para que la reemplace, al Magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A RICARDO MARTINELLI, DIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO

SOCIAL, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DEL DOCTOR ALEXIS MORÓN MALEK. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Honorable magistrada Aura E. Guerra de Villalaz solicita se le separe del conocimiento de las sumarias seguidas contra Ricardo Martinelli, Director General de la Caja de Seguro Social, denunciado por la comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos cometidos en perjuicio del doctor Alexis Morón Malek.

Esta petición viene sustentada en la causal que establece el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, toda vez que "entre la documentación recabada durante la fase instructoria por el Ministerio Público aparece una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el abogado ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en representación de ALEXIS MORÓN MALEK, para que se declare nula por ilegal la resolución N° 9334-94 de 5 de diciembre de 1994 emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social" (f. 352).

Luego de examinada la solicitud se comprueba que se encuentra debidamente acreditado el impedimento que se anuncia, por lo que la Sala considera procedente acceder a la solicitud formulada.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, y dispone separarla del conocimiento de este negocio. Procédase, como lo ordena la ley, a la continuación del proceso con el magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda, conforme el orden alfabético de los apellidos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIO INSTRUIDO CONTRA GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES Y ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MANEJO DE FONDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ARRAIJÁN-PANAMÁ Y DEL PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, el sumario instruido contra **GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, GUSTAVO R. GONZÁLEZ J. y ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ,** investigados por delito contra la Administración Pública, relacionado con malos manejos de los fondos destinados a la construcción de la Autopista Arraiján-Panamá y el Puente sobre el Canal de Panamá, hecho ocurrido en agosto de 1980.

Mediante Resolución de 7 de abril de 1995, el Pleno de la Corte declaró prescrita la acción penal en este proceso respecto al **DR. ERNESTO PÉREZ BALLADARES GONZÁLEZ REVILLA y el Licenciado OYDEN JESÚS ORTEGA DURÁN.** Igualmente,

declinó conocimiento ante esta Sala respecto a los prenombrados "doctor GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, quien es actualmente Rector de la Universidad de Panamá, el Licenciado GUSTAVO R. GONZÁLEZ J., actualmente Director de la Lotería Nacional de Beneficencia, y el Licenciado ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ, actualmente Embajador de la República de Panamá en España ..." (f. 61), en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 95 del Código Judicial.

Corrido el traslado respectivo al Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R., éste emitió concepto mediante Vista N° 34 de 10 de mayo de 1996, que en su parte medular expresa:

> "... En lo que respecta a los hechos que motivaron la instrucción sumarial, vemos que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien realizó un análisis cabal para concluir con la decisión que hemos señalado inicialmente, cuyo examen de fondo nos sirve de apoyo para considerar todo lo atinente a la situación jurídica de los señores **GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES y ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ;** pero en cuanto al señor **GUSTAVO R. GONZÁLEZ J.**, debemos expresar que, públicamente, se sabe que esta persona no ocupa en la actualidad el cargo de Director Nacional de la Lotería de Beneficencia, por tanto, tocará a otra instancia judicial conocer y decidir acerca de su responsabilidad o no.
> ...
> De manera que en aquel momento en que se da la ocurrencia del caso que nos ocupa, tuvieron cargos como Presidente de la República, **ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ**, quien es hoy Embajador de Panamá en España y de Ministro de Educación, **GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES**, en la actualidad Rector de la Universidad de Panamá; por consiguiente, los prenombrados ejercen cargos que nos acreditan competencia para opinar en torno a la responsabilidad o no que recae en contra de ellos. No obstante el criterio del Pleno de la Corte, cuya parte motiva hemos transcrito, hace hincapié en que el delito que se atribuye en esa encuesta, por las irregularidades y malos manejos de los fondos del Estado, a raíz de la celebración del contrato antes dicho, fue el más grave, como lo es el de peculado, que tipifica nuestra ley penal en el artículo 322 y sanciona con un máximo de diez años de prisión, lo que estima que a tenor de los artículos 93 y 100 del Código Penal actual, el caso ya prescribió y, por ende, de haberse producido algunos de los delitos expresados en la causa, cualquier acción se encuentra prescrita.
>
> ... En consecuencia de todo lo antes expuesto, este despacho considera que en la causa seguida a los señores **ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ y GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES**, se ha dado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal y, por ello, solicita a los Honorables Magistrados de la Sala Penal que decreten el sobreseimiento definitivo en favor de los prenombrados.".

El Pleno de la Corte fundamentó la declaración de prescripción de la acción penal con respecto al **Dr. ERNESTO PÉREZ BALLADARES GONZÁLEZ REVILLA**, actual Presidente de la República y el Licenciado **OYDEN ORTEGA**, Legislador por el Circuito 8-8, en lo siguiente:

> "... Los actos enunciados anteriormente constituyen irregularidades que pudieran muy bien encuadrarse dentro de laguna de las normas penales referentes al uso indebido de los fondos públicos. Sin embargo, no puede pasar inadvertido esta alto tribunal, que los actos investigados como supuestamente delictivos, de haberse producido, acaecieron en el año de 1980, hace catorce años y meses. De darse alguno de los actos señalados en el Código Penal como **Delito contra la Administración Pública**, la acción para perseguirlos prescribía, al tenor del artículo 86 del Código Penal vigente para aquella fecha en el lapso de doce años y medio después de la ejecución del hecho criminoso. El actual Código Penal, en su artículo 93, establece que la acción penal prescribe en doce años

> después de la comisión del hecho punible cuando la pena de privación aplicable para el delito no exceda de quince años. En otras palabras, la prescripción de la acción para el delito más grave, esto es, el delito de peculado señalado en el artículo 322 del Código Penal, se da a los doce años. Asimismo, el artículo 100 del Código Penal indica que la prescripción de la acción penal se declarará de oficio o a petición de parte. Ante esta situación, la Corte está obligada a hacer su reconocimiento. De haberse producido alguno de los delitos a que se refiere la cabeza del proceso, al tenor del artículo 93 del Código Penal, cualquier acción penal se encuentra prescrita, situación de obligante reconocimiento para el tribunal." (f. 61).

Antes de resolver la presente denuncia, se hace necesario indicar que, tal como lo señaló el señor Procurador General de la Nación, es un hecho público y notorio que el señor **GUSTAVO R. GONZÁLEZ J.** no se encuentra ejerciendo actualmente el cargo de Director de la Lotería Nacional de Beneficencia, como lo hiciera al momento en que el Pleno declinó conocimiento a esta Sala. Esto hace que carezcamos de competencia para conocer respecto a la responsabilidad que el prenombrado pudiera tener en las presentes sumarias. Resulta, pues, indispensable declinar competencia respecto a **GUSTAVO R. GONZÁLEZ J.** ante los Jueces de Circuito del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, en virtud de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial.

Esta Sala hace suyo el planteamiento del Pleno de la Corte en cuanto a los fundamentos esbozados para declarar prescrita la acción penal en la presente encuesta penal.

El delito que pudo haberse cometido, ocurrió hace ya quince años y diez meses (el 19 de agosto de 1980); esto hace que, como bien indicó el Pleno de la Corte, la acción haya prescrito a los doce años y medio de la ocurrencia del hecho a la luz del Código vigente en aquella fecha; y a los doce años según el Código actual:

> "Artículo 93. La acción penal prescribe:
> ...
> 2. Cumplidos 12 años después de la comisión del hecho punible, si la pena de prisión para el delito es mayor de 6 años y no excede de 15 años. ...".

Resulta evidente que la acción penal se encuentra prescrita, por lo que no es procedente siquiera entrar a analizar si el **DR. GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES y el Licenciado ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ** incurrieron en delito; sino que, lo que procede es declarar esa circunstancia, con base en lo que establece el artículo 1982 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRESCRITA la acción penal en el presente proceso y, en consecuencia:

PRIMERO: SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor de DR. GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES y el LIC. ARISTIDES ROYO SÁNCHEZ; y

SEGUNDO: DECLINA el conocimiento de este negocio ante los Jueces de Circuito del Ramo Penal respecto al indagado LICDO. GUSTAVO R. GONZÁLEZ J.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PENAL FORMULADA POR EL LCDO. GUILLERMO A. COCHEZ FARRUGIA CONTRA EL DOCTOR JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS, POR EL SUPUESTO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SU DESTINO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la denuncia criminal interpuesta ante la Procuraduría de la Administración, por el licenciado **GUILLERMO A. COCHEZ FARRUGIA**, contra el doctor **JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS**, Procurador General de la Nación, por lo delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.

Mediante Resolución de 27 de enero de 1995 (fs. 117-118), el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que el período del denunciado en el cargo de Procurador General de la Nación concluyó el 31 de diciembre de 1994, declinó el conocimiento de la presente denuncia ante los Tribunales Municipales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, según lo establecido en el artículo 174, literal b, numeral 1, del Código Judicial, ya que los delitos denunciados tienen pena que no excede de dos (2) años de prisión (Art. 336 y ss. del Código Penal).

Posteriormente, la Juez Cuarta Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, Suplente Especial, mediante Resolución N° 451 de 10 de agosto de 1995 (fs. 151-152), se inhibe de conocer del fondo del presente cuaderno penal y remite la presente actuación a la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el artículo 95, ordinales 1 y 2, del Código Judicial, en virtud de que, en la actualidad el doctor **JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS**, ejerce el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Panamá en la República de Venezuela, según se colige de la documentación visible a fojas 138 y 139 (Copias debidamente autenticadas del Acta de Toma de Posesión y del Decreto de Nombramiento N° 208 de 8 de marzo de 1995, respectivamente).

El denunciante expone en su escrito (fs. 103 a 110), los siguientes hechos:

El Consejo de Gabinete, mediante la Resolución N° 281 de 9 de septiembre de 1992, aprobó la celebración del Contrato-Ley N° 35 entre la Nación y la Refinería Panamá, S. A. Dicho contrato no contó con el concepto favorable del Procurador General de la Nación, en ese entonces, Licenciado Rogelio Cruz Ríos, quien se opuso a su aprobación y celebración, según se desprende del informe N° DPG-3479-92 de 22 de diciembre de 1992 (fs. 8 a 24), dirigido a la Asamblea Legislativa, sobre la inconstitucionalidad de las cláusulas vigesimasexta y trigesimaoctava del Contrato mencionado.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa, mediante la Ley N° 31 de 31 de diciembre de 1992, aprobó el Contrato-Ley N° 35, celebrado entre la Nación y la Refinería Panamá, S. A., pese a que contaba con el criterio opuesto del entonces Procurador General de la Nación.

Posteriormente, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N° 617 de 18 de noviembre de 1994 (fs. 77 a 86), por la cual se autoriza la celebración de un contrato de transacción entre la empresa Refinería Panamá y la Nación, para ejecutar lo pactado en la cláusula 38 del Contrato-Ley N° 35, aprobado mediante Ley N° 31 de 31 de diciembre de 1992, contando en esta ocasión con la opinión favorable del entonces Procurador General de la Nación, Doctor **JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS**, cumpliéndose así con lo normado en el artículo 195, numeral 4 de la Constitución Nacional. Esto último consta en el Oficio N° DPG-1027-94 de 15 de noviembre de 1994, dirigido al Ministro de la Presidencia, por el denunciado en este caso, el doctor **JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS**.

Según el denunciante, el doctor **VALDÉS CHARRIS**, debió oponerse a la aprobación del contrato de transacción aprobado mediante Resolución de Gabinete

N° 617 de 18 de noviembre de 1994, toda vez que, el contrato principal, del cual deriva el contrato de transacción autorizado con la Resolución de Gabinete No. 617 de 18 de noviembre de 1994 antes mencionada, había contado con la expresa oposición del Procurador General de la Nación, Licenciado Rogelio Ríos Cruz, por ser el mismo nocivo a los intereses de la Nación.

El concepto favorable o la no oposición por parte del doctor **VALDÉS CHARRIS**, al requerírsele su opinión sobre el proyecto de la Resolución de Gabinete, mediante la cual se autorizaba el contrato de transacción al cual nos hemos referido en líneas anteriores, es una conducta calificada por el denunciante como "dolosa y abusiva", violatoria del artículo 338 del Código Penal, tomando en consideración, además, que corresponde a los Agentes del Ministerio Público, defender los intereses del Estado o del Municipio, según se desprende del artículo 217 de la Constitución Nacional y del artículo 346, numeral 1, del Código Judicial.

Mediante Vista N° 22 de 8 de marzo de 1996 (fs. 157 a 165), la Suplente Encargada de la Procuraduría General de la Nación, solicita que se decida la presente causa dictando un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 2210 del Código Judicial, ya que el hecho que ha sido objeto de investigación, no constituye delito y,

> "... tal conducta desplegada no podría ser considerada como una transgresión a nuestra legislación penal. Siendo cierto que el funcionario denunciado, con la nota en mención, emitió su concepto, lo hizo tomando en consideración que actuaba en esa ocasión dentro de sus funciones y lo que la prerrogativa constitucional le señalaba, sin que se dijese que la omisión de tal o cual opinión recaería en un tratamiento punitivo. A parte, ello no trajo consigo beneficio personal ni hubo la intención de que ese criterio fuese a causar perjuicio alguno a tercera persona, cosa que no se vislumbra por ninguna corriente, por el contrario, se pretendió respetar la buena fe contenida en dicha contratación.
>
> Si se hubiese ignorado emitir el concepto de ley que se requirió al Procurador General de la Nación, en torno al proyecto de resolución con el cual se autorizó la celebración de un contrato de transacción entre la Refinería Panamá, S. A., y la Nación, para ejecutar lo pactado en la cláusula 38 del contrato ley 35, aprobado mediante Ley 31 de diciembre de 1992, podríamos destacar que quizás (sic) tal omisión hubiese revestido características para deducir responsabilidad. ..." (F. 163).

A juicio de la Sala, el delito de abuso de autoridad que se denuncia no se ha configurado como tal, toda vez que, en la conducta realizada por el doctor **VALDÉS CHARRIS**, cuando fungía como Procurador General de la Nación, no hay extralimitación en el ejercicio de las facultades que poseía como Jefe Máximo del Ministerio Público, ya que el artículo 338 del Código Penal, que contempla el delito irrogado, se refiere al "servidor público que indebidamente rehuse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, ...", y en el caso bajo estudio, no se desprende el actuar doloso del servidor público denunciado, quien actuó dentro del ejercicio de sus funciones y enmarcado dentro de las facultades que la norma constitucional le otorgaba, sin exceso ni desviación alguna en su proceder.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE la presente encuesta sumarial, de manera impersonal, con base en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO de la denuncia criminal interpuesta por el licenciado GUILLERMO A. COCHEZ FARRUGIA, contra el doctor JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS, por lo delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA INTERPUESTA POR MANUEL ANTONIO SIMANCA CONTRA JOSÉ LUIS NAVARRO Y EDWIN MORENO FUNCIONARIOS DE ADUANA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para la calificación legal correspondiente, ha ingresado a la Sala Segunda de lo Penal el expediente que contiene la investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación con motivo de la denuncia presentada por el señor **MANUEL ANTONIO SIMANCA** contra los funcionarios de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, **JOSÉ LUIS NAVARRO y EDWIN MORENO**, por el delito de privación ilegal de libertad.

En la Vista N° 35 de 22 de mayo de 1996, remisoria del expediente, el Procurador General de la Nación señala que si bien es cierto que las diligencias de la fase instructoria se adelantaron en este caso fundado en el artículo 347 del Código Judicial, en el entendimiento que uno de los denunciados, el señor Edwin Moreno, desempeñaba el cargo de Jefe Nacional del Departamento de Fiscalización Aduanera, cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio nacional, en la actualidad, según información emanada de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda y Tesoro (fs. 101) este señor desempeña el cargo de asesor y José L. Navarro el de Administrador de la Zona Aeroportuaria, por lo que carece de competencia para continuar la instrucción del caso y recomienda su declinatoria ante la autoridad correspondiente.

En efecto, la afirmación hecha por el Representante del Ministerio Público se apoya en la documentación incorporada a los autos y como el delito denunciado tiene asignada como penalidad, prisión de 1 a 2 años, al tenor de lo que dispone el artículo 174, numeral 1° del literal A del Código Judicial, corresponde su conocimiento a los Tribunales de la instancia Municipal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente causa ante el Juez Municipal de turno del primer Circuito Judicial de Panamá y ORDENA su inmediata remisión.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO VILLALAZ BARRIOS, CONTRA EL LICENCIADO ROLANDO QUEZADA VALLESPI, JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la denuncia presentada por el licenciado **CARLOS AUGUSTO VILLALAZ BARRIOS**, contra el licenciado **ROLANDO QUEZADA VALLESPI**, Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, por supuestos delitos contra la Administración Pública.

El denunciante en su escrito (fs. 1 a 7), sostiene que los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, y de usurpación de funciones públicas, tipificados en los artículos 336 y 343 del Código Penal, respectivamente, fueron cometidos por el funcionario público denunciado, mientras fungía como Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, dentro del proceso seguido contra su persona, **CARLOS AUGUSTO VILLARREAL BARRIOS**, por delito contra la Administración Pública.

La Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Vista N° 132 de 29 de septiembre de 1994 (fs. 688-689), solicitó que se remitiera la presente investigación a la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia, con fundamento en los artículos 70, 72, 120, 123 y 306 del Código Judicial, toda vez que,

> "El funcionario denunciado es el licenciado **ROLANDO QUEZADA VALLESPI**, quien en la actualidad funge como Suplente de Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, esto es conocido, público y notorio puesto que viene desempeñándolo por la licencia por enfermedad y vacaciones de la Honorable Magistrada **SANDRA HUERTAS DE ICAZA**, por lo que conceptuamos que dicho funcionario goza de todas las prerrogativas y derechos que el cargo le concede, contenidos en el Libro Primero del Código Judicial." (F. 688).

Por su parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 11 de octubre de 1994 (fs. 692-693), se acató a lo solicitado por la agente del Ministerio Público, y declinó el conocimiento del presente negocio para ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia, con fundamento en los artículos 95 (numeral 2), 2468 y 2469 del Código Judicial.

En virtud de esto, mediante Vista N° 42 de 17 de junio de 1996 (fs. 698 a 700), el Procurador General de la Nación, solicitó que se decline el conocimiento de la presente causa para ante la autoridad judicial correspondiente, es decir, a la que inicialmente conoció del asunto, por razones de competencia, luego de las siguientes consideraciones:

> "Suplente, con arreglo al significado que a este vocablo le asignan los diccionarios jurídicos, es quien sustituye o reemplaza en un cargo al principal por motivo de licencia, vacaciones o cualquier otra causa que origine la separación del puesto. En otros términos, su papel está limitado sólo a sustituir en los casos en que el principal se ausente del cargo por alguna razón señalada en la ley, pero una vez que abandona esa investidura no son aplicables tales atribuciones.
>
> Pues bien, como se sabe públicamente, el denunciado **ROLANDO QUEZADA VALLESPI**, ha vuelto a sus labores de Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, de allí que una vez más se desprenda que carezcamos de competencia para pronunciarnos en este caso, dado que al momento de determinar la responsabilidad que le pueda caber al precitado sumariado, corresponderá a la instancia jurisdiccional, que inicialmente conoció del asunto, decidir el mérito legal de lo actuado." (Fs. 699-700).

Advierte la Sala que, por ser un hecho público y notorio que el denunciado en la presente causa, el licenciado **ROLANDO QUEZADA VALLESPI**, al momento de calificar el mérito del presente sumario, no se encuentra desempeñando el cargo de Suplente de Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en reemplazo de la Magistrada SANDRA HUERTAS DE ICAZA, entendiéndose que, según el artículo

72 del Código Judicial, en relación con el artículo 123 del mismo Código: "Los suplentes llenarán las faltas temporales y absolutas de los principales, mientras se llenen las vacantes." Y, toda vez que, el licenciado **QUEZADA VALLESPI,** actualmente funge como Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá; es por lo que, la Sala Penal de la Corte Suprema, carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del presente asunto. Estas particularidades, hacen que corresponda al Segundo Tribunal Superior de Justicia pronunciarse sobre el proceso seguido al licenciado **ROLANDO QUEZADA VALLESPI,** Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, en virtud de la competencia por razón de la calidad de las partes, que se desprende del artículo 128, numeral 2, del Código Penal, cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> "ARTÍCULO 128. Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los siguientes procesos:
> ...
> 2. De todos los procesos penales contra los Cónsules Generales de la República y contra los Jueces y Fiscales de Circuito y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en una o más provincias, cuando al momento de su juzgamiento los sindicados conserven los cargos oficiales. ...". (Lo subrayado es de la Sala).

Por lo tanto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento de la denuncia presentada por el licenciado CARLOS AUGUSTO VILLALAZ BARRIOS, contra el licenciado ROLANDO QUEZADA VALLESPI, Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, por supuestos delitos contra la Administración Pública y, en consecuencia, DECLINA COMPETENCIA ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, según lo establecido en el artículo 128, numeral 2, del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A LIC. RICARDO MARTINELLI POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES PÚBLICOS EN PERJUICIO DEL DR. ALEXIS MORÓN MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplida la ampliación ordenada, han ingresado nuevamente a la Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias contentivas de la denuncia criminal interpuesta por el doctor **MAURO ZÚÑIGA ARAUZ**, Secretario General de la Asociación de Médicos, Odontólogos y profesionales afines de la Caja del Seguro Social (A. M. O. A. C. S. S.), contra el Licenciado **RICARDO MARTINELLI**, Director General de la Caja del Seguro Social, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

De acuerdo con la parte denunciante, el Licenciado **RICARDO MARTINELLI,** Director General de la Caja del Seguro Social, mediante la acción de personal N° 9334-94 de 2 de diciembre de 1994, aplicó la sanción de remoción del cargo de médico especialista al doctor ALEXIS MORÓN MALEK, quien labora en el Cuarto de Urgencia de Adultos del Complejo Hospitalario Metropolitano "DR. ARNULFO ARIAS MADRID", "... sin existir una causa o razón justificada debidamente comprobada, y sin que se haya promovido investigación en su contra, ..." (F. 1).

Sumado a lo anterior, indica el denunciante que no se tomó en cuenta la estabilidad que se desprende del Decreto-Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, modificado por la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991, para los profesionales o técnicos de la salud al servicio de la Caja del Seguro Social; ni la ejecutoria impecable por la cual se ha caracterizado el doctor MORÓN MALEK.

En tales circunstancias, según afirma el denunciante, el Licenciado **RICARDO MARTINELLI** incurrió en las conductas descritas en el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, referente a los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y, además, violó los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, toda vez que no se remitió ninguna investigación escrita a la Junta Asesora Médica, como exige el artículo 9 del Reglamento de esta Institución, a fin de que emitiera la recomendación pertinente de acuerdo con el artículo 29-C de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

El denunciante en su escrito (fs. 1 a 5) solicita que se investigue al funcionario denunciado, a fin de que se ordene su detención inmediata y la separación del cargo que desempeña en la actualidad.

Mediante Resolución de seis (6) de noviembre de 1995, esta Sala ordenó la ampliación de las sumarias para que se incorporaran los decretos de nombramientos, actas de toma de posesión y declaración indagatoria del Licenciado RICARDO MARTINELLI.

Cumplido lo anterior, el Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R. remitió el expediente con la Vista Fiscal N° 9 de 23 de enero de 1996, en la cual externa su concepto en los siguientes términos:

> "... Para evacuar la diligencia principal este despacho comisionó a la Fiscalía Segunda Delegada de la Procuraduría, la que recibió indagatoria al Licenciado Martinelli el 8 de enero del presente año. En la misma el funcionario denunciado acepta haber firmado la Acción de Personal N° 9334-94, mediante la cual se ordenó la remoción del Dr. Alexis Morón, explicando haberlo hecho en ejercicio de sus atribuciones legales como Director de la Caja del Seguro Social, conforme lo dispone el artículo 22 literal "e" de la Ley Orgánica de dicha institución el cual le otorga, entre otras, la facultad de remover a los empleados. Sostiene que el Dr. Morón al momento de su nombramiento ocurrido el 16 de diciembre de 1994 y a la fecha de su remoción el 5 de diciembre de ese mismo año, no tenía el tiempo mínimo de servicios en la Caja del Seguro Social para gozar de la estabilidad que establece el artículo 29-D, parágrafo 1 de la Ley Orgánica previamente citada.
>
> Como quiera que se ha cumplido con la ampliación ordenada por los Honorables Magistrados, remito una vez más para su calificación legal el sumario que nos ocupa, solicitando en esta ocasión, y por considerar que no ha variado la situación procesal aludida en la Vista Fiscal N° 88 de 22 de diciembre de 1994, que se cierre esta encuesta penal dictando un sobreseimiento definitivo a favor del licenciado Ricardo Martinelli de conformidad con el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.". (Fs. 158-159).

Rendida la declaración indagatoria, el funcionario denunciado aportó las siguientes pruebas: Texto de la Ley Orgánica de la C. S. S.; fotocopia de la Acción de Personal N° 1826-94; copia de la resolución que declara idóneo al dr. MORÓN; copia de la Acción de Personal N° 9334-94; fotocopia de la resolución 1221-95 por la que se resuelve recurso de reconsideración; copia de advertencia de silencio administrativo. El Licenciado MARTINELLI solicitó que se agregara a las sumarias el expediente contentivo del proceso Contencioso-Administrativo de Plena Jurisdicción presentado en su contra por el doctor ALEXIS MORÓN, que se encuentra aún en la etapa de práctica de pruebas. Igualmente se aportó copia del expediente personal del doctor ALEXIS MORÓN.

Primeramente, advierte la Sala, que se encuentra acreditada en el presente expediente la calidad de funcionario público del Licenciado RICARDO MARTINELLI, quien funge actualmente como Director General de la Caja del Seguro Social; por ello, deben aplicarse las normas que sobre procesos contra servidores públicos establece el Código Judicial en su Libro III, Título IX, Capítulo II. En este sentido, cuando se promueve denuncia o acusación por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, debe acompañarse la prueba sumaria del relato por cualquiera de los medios que enumera el artículo 2073 de la mencionada excerta legal.

De la evaluación detallada del sumario se advierte que, si bien los documentos mencionados reúnen el requisito de la autenticación, éstos adolecen de la exigencia primordial para que este tipo de proceso contra servidores públicos cumpla con lo dispuesto por el artículo 2471 del Código Judicial; esto es, ser prueba sumaria del relato que por sí misma acredite el hecho punible atribuido.

En la Vista N° 88 de 22 de diciembre de 1994, la Procuraduría General de la Nación indicó lo siguiente, al solicitar el archivo del sumario:

> "... las pruebas suministradas con la denuncia, como medios probatorios para acreditar los hechos punibles mencionados y que se endilgan al imputado no evidencian la existencia de tales ilícitos.
>
> En otras palabras, la Acción de Personal N° 9334-94 de 2 de diciembre de 1994, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social y presentada como prueba, no guarda relación con los hechos irrogados al señor **Martinelli**, sino que la misma se refiere a una situación de carácter administrativa que tiene como consecuencia la terminación de la relación laboral entre el doctor ALEXIS E. MORÓN MALEK y la institución facultada por ley para ello, lo cual constituye una acción que puede ser atacada por la vía de los recursos administrativos, dado que, como se dejó expresado, no se adecúa con lo que exige el ordenamiento jurídico, en el sentido de que debe haber plena comprobación del hecho punible." (F. 17).

En este caso, le cabe razón al agente del Ministerio Público cuando dice, "... que los hechos denunciados por el señor MAURO ZÚÑIGA ARAUZ, no se enmarcan dentro de lo doloso, sino que, por el contrario, son consecuencias de actos administrativos, que en todo caso pueden ser ilegales o no, pero por sí sólos (sic) no tipifican delito, conforme a nuestra legislación penal" (f. 18), en virtud de que los documentos aportados adolecen de la efectividad e idoneidad suficiente para acreditar el hecho punible atribuido al denunciado.

Al respecto, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad. Veamos el fallo de 14 de abril de 1994:

> "... los medios probatorios que se deben acompañar con el escrito de denuncia o de acusación han de ser de tal envergadura que por sí mismos acrediten el hecho punible atribuido, esto es, han de ser idóneos. De donde resulta que la idoneidad de los medios probatorios que se aporten, se deduce de la eficacia probatoria que puedan tener para acreditar el hecho punible imputado ..." (Denuncia Criminal, Sala 2ª C. S. J., 14 de abril de 1994. Registro Judicial de abril de 1994.).

Esta Sala comparte el criterio del Agente del Ministerio Público, en cuanto a que de los elementos probatorios incorporados a la denuncia no se infiere la comisión de ningún delito ya que están relacionadas con actuaciones administrativas, que nada tienen que ver con la comisión de algún delito que pueda recaer en el denunciado, por ser pruebas ineficaces. En tales circunstancias, tampoco emerge aquí de la conducta del licenciado MARTINELLI el dolo que requieren los tipos penales imputados, por lo que es del caso proceder al archivo de la encuesta sumarial con sobreseimiento definitivo , de carácter impersonal, de conformidad con el ordinal 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, de manera impersonal, al Licenciado RICARDO MARTINELLI en la denuncia criminal interpuesta en su contra por el doctor MAURO ZÚÑIGA ARAUZ, Secretario General de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja del Seguro Social (A. M. O. A. C. S. S), por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, y en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del sumario.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUNIO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL RESULTO N° 59 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Troncoso, Lacayo & Porras, actuando en representación de MARVIL, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) expedida el 17 de abril de 1996, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 59 de 26 de septiembre de 1995, dictado por la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que la firma apoderada de la demandante, no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 29 de Ley 33 de 1946, toda vez que la demanda no se dirige contra el acto original. También afirma la Magistrada Sustanciadora que la parte actora designó erróneamente a la parte demandada, pues, dirigió su demanda contra el señor Ministro de Hacienda y Tesoro y no contra el Director General de Proveeduría y Gastos, quien dictó la Resolución N° 59 de 26 de septiembre de 1996 mediante la cual se declaró impedida por el término de tres meses a la sociedad MARVIL, S. A. para celebrar contratos con el Estado. Finalmente, la Magistrada Sustanciadora estima que, igualmente, no se cumple con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, al no expresarse que la firma Troncoso, Lacayo y Porras actúa en representación de Marvil, S. A.

La firma Troncoso, Lacayo y Porras afirma en su escrito de apelación, que la decisión que se apela es contraria no sólo al texto, sino al espíritu de la ley contencioso administrativa. A su criterio, el artículo 29 de la Ley 33 de 1946, exige en todo caso, que no es indispensable dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, lo que quiere decir que se pueden demandar y que el hecho de haberlos señalado en el libelo de la demanda no la hace inadmisible.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 217 de 20 de mayo de 1996, se opone a los criterios expuestos por la parte actora y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución apelada.

No coincide el resto la Sala con los criterios expuestos por la parte actora, ya que, efectivamente, la demanda adolece de defectos formales que la hacen inadmisible. A criterio del resto de la Sala, el recurrente no observó lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que prevé la designación de las partes y sus representantes como requisito necesario que debe contener toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Observa el resto de la Sala, que se omitió designar al Director General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por lo que erró al designar al Ministro de Hacienda y Tesoro como parte demandada. Igual criterio se mantuvo en la resolución de 20 de mayo de 1996, expedida en razón de la demanda contencioso administrativa presentada por Estrella Mar, S. A., -vs- Dirección de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

En razón de lo antes expuesto, estima el resto de lo Magistrados que conforman la Sala Tercera, que la demanda no se ajusta a lo previsto en el artículo 28 numeral 1° de la Ley 33 de 1946, que hace referencia a los requisitos indispensables para la admisión de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 17 de abril de 1996, mediante la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Troncoso, Lacayo & Porras en representación de MARVIL, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL COFCI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 138 DE 3 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, actuando en representación de la sociedad francesa Compagine Francaise de Commerce International Cofci, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 138 de 3 de agosto de 1994, dictada por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda presentada adolece de varios defectos.

En primer lugar, el Magistrado Sustanciador estima que la demanda no cumple con el requisito previsto en el artículo 44 de la Ley 33 de 1946, pues no acompaña su demanda con la copia autenticada del acto acusado, y tampoco hace uso de lo establecido en el artículo 46 de la mencionada Ley ya que, no solicita previa admisión de la demanda que el Magistrado Sustanciador solicite copia del acto impugnado a la autoridad correspondiente, en este caso la Dirección General de Comercio Interior.

Seguidamente, se observa que en la demanda no hay constancia de que se haya agotado la vía gubernativa, tal como lo establece el artículo 36 de la precitada ley.

Esta sala ha sido constante en mantener el criterio consistente en que para interponer una demanda contencioso administrativa se requiere haber agotado la vía gubernativa, es decir, haber utilizado todos los recursos administrativos que la Ley dispone. En este caso, si bien es cierto que la actora hace mención del agotamiento de la vía gubernativa en el libelo, no es menos cierto que ésta no aportó copia de las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración y apelación mencionados por la parte actora en su demanda.

En cuanto a la solicitud de suspensión, el Magistrado Sustanciador considera que esta solicitud sólo es procedente, por razones de economía procesal, cuando la demanda cumple con los presupuestos procesales necesarios para su admisibilidad. De lo contrario se estaría efectuando un trámite preliminar sin objeto. Como la presente demanda adolece de los defectos que se han señalado anteriormente no es precedente acceder a la solicitud formulada por

la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la presente demanda contencioso administrativa.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda presentada por la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, en representación de la Compagine Francaise de Commerce International Cofci.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONYS ULLOA EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL V. ORTIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° A-I-16-94 D. G. A. DE 30 DE AGOSTO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ARRENDAMIENTOS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Dionys Ulloa Gutiérrez actuando en nombre y representación de Rafael Víctor Ortiz Murgas, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° A-I-16-94 D. G. A. de 30 de agosto de 1994, dictada por el Director General de Arrendamientos y para que se haga otras declaraciones.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado Ulloa solicita que la Sala decrete la suspensión provisional de la Resolución N° A-I-16-94 D. G. A. de 30 de agosto de 1994 por medio de la cual se declara ilegal el aumento del canon de arrendamiento del local comercial N° 1 del Inmueble N° 4143, ubicado en la Vía Fernández de Córdoba, Corregimiento de Pueblo Nuevo, cuyo arrendador es el señor Rafael Ortiz, se ordena restablecer el canon de arrendamiento a la suma de B/.150.00 mensuales y a devolver la suma de B/.10,125.00 por ser las cantidades cobradas de más en concepto de canon de arrendamiento.

El apoderado judicial de la parte actora fundamenta su petición en los siguientes términos:

> "SOLICITUD ESPECIAL: Por los hechos y consideraciones jurídicas antes expuesta, es que le solicitamos respetuosamente a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para que previo cumplimiento de los trámites de rigor, se conceda el actual Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, para que mediante declaración en firme se ordene dejar sin efecto el contenido de la resolución N° A-I-16-94 D. G. A. dictada por La Dirección General de Arrendamientos de 30 de agosto de 1994, y sus actos confirmatorios. Al igual pedimos al Honorable Presidente que ordene la suspensión de los efectos de la Resolución atacada mediante esta Acción extraordinaria, porque es evidente que la misma puede ser ejecutada por el demandante y causar así mayores perjuicios en contra de mi cliente, quien ha sido tomada en el proceso y se le ha ordenado cancelar una suma de dinero del año de 1987 al año de 1993, cuando dejó de cobrar y percibir ingreso por alquiler de ese inmueble desde

1976, cuando vendió a INMOBILIARIA CENTRAL, S. A. tal como lo anunció desde la contestación de la demanda." (f. 37).

La Sala pasa examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir, conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

Observa la Sala que el demandante no detalla los perjuicios potenciales que sufriría, ni presentan pruebas acreditando la existencia de los mismos. La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) ha sido clara y reiterativa en establecer la necesidad de que la parte actora alegue y compruebe que el posible perjuicio sea notoriamente grave e irreparable. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° A-I-16-94 D. G. A. de 30 de agosto de 1994, expedida por la Dirección General de Arrendamientos.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE CHEF'S CHOISE DE PANAMÁ, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3756-92-SUB-D. G. DE 12 DE JUNIO DE 1992, DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Solís**, **Endara**, **Delgado y Guevara**, en representación de **CHEF'S CHOISE PANAMÁ**, **S. A.** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 56-92-SUB-D. G. de 12 de junio de 1992, expedida por la Subdirección General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda se percata el Sustanciador que a foja 30 del expediente consta solicitud de previo y especial pronunciamiento concerniente a la autenticación de documentos, que debe ser atendida previa a la admisión de la demanda.

La documentación cuya autenticación se solicita recae precisamente en el acto principal demandado y dos actos confirmatorios que evidenciarían el agotamiento de la vía gubernativa ante la institución de seguridad social.

El Magistrado Sustanciador se percata que efectivamente, el recurrente trató de acompañar el libelo contentivo de la demanda con los documentos necesarios para la interposición de la acción contenciosa administrativa,

conforme a lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 135 de 1943, gestionando ante la Secretaría General de la Caja de Seguro Social autenticación de los mismos el día 24 de mayo de 1996; solicitud que se reitera nuevamente el día 27 de mayo, tal cual consta a fojas 13 y 14 del expediente.

De esta forma, considera quien sustancia que el recurrente cumplió con las exigencias contempladas en la Ley 135 de 1943, en el sentido de adelantar todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea para la interposición de la demanda, pero al resultar infructuosas ha solicitado al Tribunal que proceda a oficiar a la entidad demandada para que remita a esta Superioridad la documentación requerida. Ello en atención a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DISPONE solicitar a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social, proporcionar copias autenticadas de los siguientes documentos:

1. Resolución N° 756-92-SUB-D. G. de 12 de junio de 1992 expedida por la Sub-Dirección General de la Caja de Seguro Social.

2. Resolución N° 15-93 SUB-D. G. de 27 de abril de 1993 expedida por la Sub-Dirección General de la Caja de Seguro Social.

3. Resolución N° 1956-96-J. D. de 22 de febrero de 1996 dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y que además se certifique si dicha resolución fue notificada o no a **CHEF'S CHOISE DE PANAMÁ, S. A.** el día 24 de julio de 1992.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE MANGRAVITA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3622-92 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992, DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Ulises Pittí, actuando en nombre y representación de las empresas **MANGRAVITA, S. A., CASA DE LA CARNE N° 3, S. A. y FORTUNATO MANGRAVITA, S. A.,** ha presentado demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte, para que sean declaradas nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 3622-92 SUB-D. G., 3621-92 SUB-D. G., 3617-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992, expedidas por el Sub-director General de la Caja de Seguro Social.

Mediante auto de 22 de mayo de 1996, la Magistrada Sustanciadora decidió acumular las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción inter-

puestas por el doctor Ulises Pittí G. contra la Caja de Seguro Social. (Fs. 23).

El demandante solicitó en escrito de 29 de mayo de 1996, la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones impugnadas, alegando que la Caja de Seguro Social se negó a hacer entrega de las fichas de los empleados de las empresas **MANGRAVITA, S. A., CASA DE LA CARNE N° 3, S. A. y FORTUNATO MANGRAVITA, S. A.**, entre otras, con fundamento en que la vía gubernativa está agotada y la administración de la Caja de Seguro Social está facultada para seguir con el trámite normal, a fin de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación producto de los alcances de auditoría que se mantienen con la institución. Señaló además, que la retención de las fichas está ocasionándole notorios y graves perjuicios a estas empresas; y que con esta medida se está afectando gravemente un importante sector productivo de la población laboral, quienes además han cumplido con sus obligaciones del pago de cuotas.

Observa la Sala, que los documentos que se leen de fojas 77 a 80 son dos copias simples de notas suscritas por el apoderado de la parte actora, en las cuales solicita se expidan y entreguen las fichas de Seguro Social de las empresas que él representa; una del Director de Ingresos de la Caja de Seguro Social, en la que niega dicha solicitud y además recomienda a las empresas referidas, acudir a la Dirección de Ingresos con la finalidad de cancelar el saldo resultante producto del Alcance de Auditoría, para así tener derecho inmediato a que se le entreguen las fichas de comprobación de pago de cuotas obrero patronales de estas empresas; y otra del Director General de la Caja de Seguro, en la que mantiene esta última decisión.

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala puede decretar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, cuando a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

En virtud de lo anterior, es importante que el peticionario no sólo enuncie la solicitud de suspensión provisional, sino que la motive adecuadamente suministrando al Tribunal elementos de juicio que le permitan determinar la existencia del perjuicio grave o irreparable que causaría la ejecución del acto administrativo.

En el negocio que nos ocupa, el actor acompañó con su solicitud los documentos que contienen la negativa de la institución demandada de entregar a todos los trabajadores de las empresas demandantes las fichas en las cuales consta que las empresas y sus trabajadores pagaron las correspondientes cuotas, prueba preconstituída de los hechos que a su juicio, le ocasionan graves perjuicios a la demandante y sus trabajadores. Cabe indicar que la medida adoptada es consecuencia directa del incumplimiento de las resoluciones impugnadas ante la Sala, que condenan a las empresas **MANGRAVITA, S. A., CASA DE LA CARNE N° 3, S. A. y FORTUNATO MANGRAVITA, S. A.**, entre otras, a pagar las sumas de B/.4,263.20, B/.17,046.73 y B/.36,140.48 respectivamente, en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de Ley, que se adeudan porque no se reportó como tales algunos trabajadores de la empresa y en consecuencia no se pagó las cuotas correspondientes a la Caja de Seguro Social.

La administración se fundamenta en el hecho de que se ha agotado la vía gubernativa, haciéndose exigible el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. Si bien los actos administrativos individuales ejecutoriados en la vía gubernativa pueden ser ejecutados en virtud del principio de presunción de validez y mientras tanto esta Superioridad no suspenda sus efectos, en el caso sub-júdice se advierte que la institución de seguridad social ha tomado medidas administrativas que afectan de manera grave y palmaria a las empresas demandantes y sus empleados, para lograr la ejecución de estos actos.

Además, el pago de estas sumas ni siquiera es exigido por la Sala Tercera de la Corte, como requisito para incoar la demanda contencioso administrativa que nos ocupa, por no contemplarse entre los supuestos del artículo 49 de la Ley 135 de 1943, en cuyos casos sí se requiere, por previsión de la Ley, acompañar con el libelo de la demanda el respectivo comprobante pago.

Por tanto, en virtud de que la medida coercitiva adoptada por la Caja de Seguro Social está ocasionando graves perjuicios, no sólo a las empresas sujetas al alcance, sino principalmente a los trabajadores de dichas empresas, quienes pese a haber pagado las cuotas de seguridad social, evidentemente no podrán recibir los servicios y prestaciones respectivas, por no tener la ficha que el Seguro Social emite como comprobante de sus cotizaciones, la Sala considera necesario resolver favorablemente lo solicitado por el recurrente.

Esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento adelantado de la Sala en relación a la pretensión de fondo del actor. Al resolver la controversia se examinará la actuación de la entidad de seguridad social para determinar la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de las Resoluciones N° 3622-92 SUB-D. G., 3621-92 SUB-D. G. y 3617-92 SUB-D. G., todas expedidas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA DOCTORA ISIS TEJEIRA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° F. B. A. 714-95 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1995, SUSCRITA POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Humberto Ricord, actuando en nombre y representación de la Doctora ISIS TEJEIRA, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° F. B. A. 714-95 del 22 de diciembre de 1995, suscrita por el Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y para que se haga otras declaraciones.

La petición de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado fue sustentada en los siguientes términos:

> **"Suspensión Provisional.** Para evitar notorios perjuicios graves en el funcionamiento de la Facultad de Bellas Artes, que tiene en su personal varios Directores de Departamento, solicitamos respetuosamente la suspensión provisional del acto contenido en la Nota N° F. B. A. 714-95, de 22 de diciembre de 1995, suscrita por el Sr. Decano de dicha Facultad. Aquí incluimos los perjuicios profesionales y morales causados a la Dra. Isis Tejeira, por un acto de tan flagrante ilegalidad, que se está ejecutando" (f. 34).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Sin embargo, en el presente caso no es posible acceder a la medida cautelar pedida, en primer lugar, porque la misma sólo está permitida en los supuestos de funcionarios administrativos nombrados por períodos fijos y en el expediente no

existe prueba alguna de que la Doctora TEJEIRA fue nombrada por un período de tres (3) años, tal como sostiene en su demanda.

En segundo lugar, porque los alegados perjuicios que el acto impugnado causa a la demandante no se han especificado en el libelo ni muchos menos probado, aludiéndose simplemente a **"los perjuicios profesionales y morales causados"**. Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido la necesidad de que, quien pide la suspensión provisional de los efectos del acto o disposición acusada, demuestre los perjuicios que dicho acto o disposición le ocasiona (Cfr. fallos del 31 de marzo y 18 de septiembre de 1995). Como tales perjuicios no se han especificado ni acreditado, no es posible acceder a la medida cautelar pedida, aun cuando se hubiere probado que el nombramiento se hizo por un período fijo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Nota N° F. B. A. 714-95 del 22 de diciembre de 1995, expedida por el Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RUBÉN DARÍO COGLEY, EN REPRESENTACIÓN DE BRAULIO REYES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 008-94 DE 18 DE ENERO DE 1994, EMITIDA POR EL GERENTE DE LOS CASINOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rubén Darío Cogley García, actuando en representación de Braulio Reyes Castro, ha interpuesto demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción con el objeto que se declare nula, por ilegal la Resolución N° 008-94 del 18 de enero de 1994, expedida por el gerente General de los Casinos Nacionales y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se pide a la Sala que se declare nulo el acto administrativo contenido en la Resolución N° 008 de 18 de enero de 1994, así como los actos confirmatorios e igualmente se solicita a la Sala que condene a la entidad demandada al reintegro y el pago de los salarios caídos.

Sostiene el apoderado judicial del demandante que el acto impugnado ha infringido los artículos 84, 85 y 86 del Decreto ejecutivo N° 170 de 24 de septiembre de 1992.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 231 del 1° de junio de 1995 en la cual se opone a la pretensión de la parte demandante.

El Gerente General de los Casinos Nacionales rindió su informe de conducta mediante oficio N° AL-3-38-95 del 17 de marzo de 1995. En dicha nota el funcionario explica el motivo de su actuación, señalando que se dio cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes por considerar que le eran aplicables al demandante. El informe, en su parte pertinente, es del tenor siguiente:

"En relación directa a los hechos vinculados con el proceso administrativo que culminó con la destitución del señor Braulio Reyes, debemos hacer de conocimiento del señor Magistrado, que según las constancias que reposan en el expediente que existe en el departamento de Personal de la institución, éste junto con otros funcionarios de la Gerencia de Operaciones, que en ese entonces prestaban servicios en el casino del Hotel panamá, en calidad de talladores y en mesas de juego supervisadas por el, debido a denuncias presentadas por distintos clientes a la Gerencia General, fueron objeto de investigación por parte de otros funcionarios utilizados para este propósito, por dicho despacho.

Los hechos atribuidos por los quejosos a Reyes y los demás talladores involucrados, eran los de evaluar jugadas irregulares, permitiendo a algunos clientes vinculados con ellos aumentar sus apuestas al momento de hacer los pagos o bien pagándoles premios sin haber sido favorecidos en los juegos, luego de los cual eran gratificados fuera del casino por quienes eran sus cómplices en esta actividad.

Producto de las investigaciones realizadas, se procedió el día 6 de enero de 1994, a separar provisionalmente del cargo al señor Reyes y, posteriormente, a destituirle junto con otros de los funcionarios investigados."

...

"... el informe verbal recibido de quienes investigan las irregularidades cometidas, determinó que las anomalías señaladas se daban en las mesas especiales supervisadas por Reyes "aunque él no estaba presente cuando se sucedían pues, o estaba en la otra mesa o se alejaba de ambas por largo tiempo, sin causa justificada, momento en que los talladores aprovechaban para hacer dichas irregularidades."

La Sala pasa a examinar los cargos que se le imputan al acto administrativo impugnado en este proceso.

El demandante señala que se ha violado el artículo 84 del Decreto Ejecutivo del de 24 de septiembre de 1992 al haber sido aplicado erróneamente porque no se ha determinado el hecho que constituye la acción u omisión de que conllevó la pérdida de confianza. Tampoco se determinaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones u omisiones que se sustentan, quienes formularon los cargos que realizó la gerencia general junto con la gerencia de operaciones que dio como resultado la pérdida de confianza.

Observa la Sala que los señalamientos del actor se fundamentan en aspectos de carácter meramente procedimentales y de probanza. Por esto cabe resaltar que el artículo supuestamente infringido es una norma de carácter sustantivo, pues se limita a señalar las faltas graves en que pueda incurrir un servidor público para su destitución. En el caso que nos compete, la omisión de parte del servidor público de actos debidamente comprobados fueron suficientes para que la administración de los Casinos Nacionales determinara la pérdida de confianza en el funcionario.

Con respecto al artículo 85 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 1992 el actor señala que ha sido violado por inaplicación pues se despidió a Braulio Reyes Castro sin que mediara expediente alguno, no se inició la investigación dentro de los treinta (30) días después de la separación del cargo, no se conformó una comisión investigadora, como tampoco ha sido comprobado el hecho que conlleva la pérdida de confianza, no hubo práctica de pruebas, no se le dio traslado al afectado de éstas, no se escuchó su versión de los hechos, no se tomó declaración a los testigos, y no se permitió al actor presentar los suyos, además de no existir evidencia de sumario alguno. Por ello, según el actor, todo esto trajo como resultado el desconocimiento de los cargos incoados en su contra, la violación a la norma y, por ende, impidió que el actor ejercitara el derecho constitucional de defensa.

El artículo 85 trata sobre dos aspectos, el primero señala que se debe abrir un expediente disciplinario relacionado al caso y el segundo dispone la separación del cargo del afectado una vez que finalice la investigación. Antes de continuar debemos observar el hecho décimo primero de la demanda, en el cual el actor señala: "No hay un solo testimonio ni prueba documental en el expediente, que establezca que **BRAULIO REYES CASTRO** haya recibido gratificaciones, o propinas fuera del Casino ". El hecho décimo primero de la demanda nos indica claramente que el actor reconoce que se levantó un expediente en el proceso que se le siguió, y confirma lo dicho en el informe de conducta en cuanto al expediente que reposa en el departamento de personal, lo que dio como resultado que el funcionario fuera separado del cargo. Esto nos muestra que la institución demandada cumplió con lo exigido por este artículo, por lo tanto, no prospera este cargo.

Analizar los demás cargos endilgados al artículo 85, estaría de más pues no se circunscriben al contenido del artículo citado.

El actor señala que se ha violado el artículo 89 el Decreto Ejecutivo N° 170 de 1992, puesto que se lesionó la garantía procesal en dos aspectos: no haber permitido a la parte afectada la revisión en una segunda instancia por parte del superior y los funcionarios juzgadores no decidieron en el tiempo que la ley exige.

No concordamos con el demandante puesto que si bien el funcionario al resolver el recurso de reconsideración demoró más del tiempo que la ley exige, en nuestro ordenamiento jurídico existe la figura del silencio administrativo, la cual prevé la situación señalada por el actor. En el presente caso, se resolvió la reconsideración ante el mismo funcionario en mayor tiempo que la ley indica. Sin embargo, no es hasta el momento de sustentar el recurso de apelación que el actor hace algún señalalamiento respecto a la demora gubernativa. Es entonces que el actor utilizó en debida forma el silencio administrativo que le permitió dirigir su demanda ante esta alta Corporación de Justicia. Por esto cabe resaltar que no puede pretender el actor que la Sala anule el acto administrativo impugnado por la demora o falta de resolución de segunda instancia puesto que nuestro ordenamiento jurídico prevé esta situación con la figura del silencio administrativo, y no una anulación del acto administrativo, el cual a pesar de expedirse fuera del plazo legal es válido y eficaz.

Por otra parte, el demandante no estaba amparado por la carrera administrativa pues no comprobó que hubiese ingresado al cargo mediante concurso. Por ello, si no entró por concurso podía ser despedido libremente.

En consecuencia, la Sala Tercera (contencioso administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley NIEGA la pretensión formalizada mediante demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el licdo. Rubén Darío Cogley García en representación de Braulio Reyes contra el Gerente General de los Casinos Nacionales y, en consecuencia, DECLARA que la Resolución N° 008-94 de 18 de enero de 1994 y la Resolución N° 037-94 de 14 de abril de 1994, ambas expedidas por el citado funcionario NO SON ILEGALES e igualmente NIEGA las peticiones de reintegro y pago de salarios caídos a partir de la destitución.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE SERVICENTRO, S. A., SUPERMERCADOS Y COMISARIATOS, S. A. Y COMISARIATOS, S. A. PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992 DICTADAS POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO

SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Ulises Pittí actuando en nombre y representación de las sociedades Servicentro, S. A., Supermercados y Comisariatos, S. A. y Comisariatos, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Por medio de auto de 22 de mayo de 1996, el Magistrado Sustanciador ordenó la acumulación de los expedientes presentados por el doctor Pittí por razones de economía procesal.

Los actos impugnados lo constituyen las resoluciones N° 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social en las que se condenan a las sociedades Servicentro, S. A., Supermercados y Comisariatos, S. A. y Comisariatos, S. A. a pagar las sumas de B/.16,295.02, B/.19,234.93 y B/.43,322.90 respectivamente en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de la Ley.

Mediante escrito de 29 de mayo de 1996, el recurrente solicitó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones adoptadas por la Subdirección General de la Caja de Seguro Social.

La Sala pasa a examinar la petición incoada por el recurrente.

Sobre el particular la Sala considera que del texto del artículo 73 de la Ley 135 de 1943 y siguientes no cabe duda alguna de la facultad discrecional que tiene para suspender los efectos de un acto administrativo cuando sea necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Pero para acceder a ello es imprescindible, según jurisprudencia constante y reiterada, que ese perjuicio que se causa con la ejecución del acto aparezca demostrado en alguna forma en el expediente con las pruebas que aporta el recurrente.

En este caso la parte actora ha logrado probar el perjuicio notoriamente grave y la tardía reparación que puede causar el acto administrativo impugnado.

La parte actora fundamenta su petición en los siguientes términos:

> "QUINTO: Que con la decisión tomada por el Director General de la Caja de Seguro Social de no entregar las fichas de seguro social a las empresas que representamos, el Director de dicha institución está incurriendo y ocasionándole notorios perjuicios graves e irreparables a las empresas.
>
> SEXTO: Que con la negativa de entregar las fichas de seguro social a los trabajadores de las empresas que represento, se está afectando gravemente un importante sector productivo de la población laboral, quienes además han cumplido con sus obligaciones del pago de sus cuotas y no deben ser afectados por disposiciones que ya hemos atacado de ilegales mediante la interposición de las respectivas demandas de plena jurisdicción."

La Sala observa que en el expediente constan cuatro notas en copias simples (fs. 79 a 82), dos de ellas del demandante en las que solicita que se expidan y entreguen las fichas de seguro social de las empresas demandantes; otra de las copias presentadas la constituye la Nota N° D de I-N-028-96 del Director de

Ingresos de la Caja de Seguro Social en la que no accede a la petición de entregar las fichas y le recomienda acudir a la Dirección de Ingresos con la finalidad de cancelar el saldo resultante producto de alcance de auditoría, y un facsímil con Nota N° D. G. 414-96 del Director General de la Caja de Seguro Social en la que tampoco accede a la pretensión señalando que al haberse agotado la vía gubernativa, la administración de la Caja de Seguro Social está facultada para seguir con el trámite normal correspondiente a fin de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación.

Observa la Sala que para recurrir a la vía contencioso-administrativa no es necesario acompañar con la demanda la comprobación del pago de las cuotas obrero patronales de las empresas demandantes, puesto que el artículo 49 de la Ley 135 de 1943 no lo contempla entre sus supuestos.

Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es, pues, acceder a la petición de suspensión provisional formulada por la parte actora.

No obstante, esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento adelantado de esta Sala en relación a la pretensión de fondo del recurrente, ya que sólo al resolverse la controversia se determinará la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACCEDE A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de las Resoluciones N° 3616-92 SUB-D. G., 3620-92 SUB-D. G., 3619-92 SUB-D. G. de 15 de abril de 1992 dictadas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE KEVIN HOLMAN WHYLES BRAYAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 95-04-14100-355 DE 7 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y PLANILLAS DE LA CORPORACIÓN AZUCARERA LA VICTORIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), el 12 de marzo de 1996 y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Emilio de León, actuando en representación de Kevin Holman Whyles Brayan con el objeto que se declare nula por ilegal, la Nota N° 95-04-14100-355 de 7 de junio de 1995, emitida por el Jefe de Personal y Planillas de la Corporación Azucarera La Victoria (Ingenio de Chiriquí), y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración solicita la revocatoria de la resolución impugnada debido a que, a su juicio, el demandante "no dirigió su demanda contra el acto principal, requisito indispensable para la admisión de este tipo de demandas."

En este caso, le asiste la razón a la Procuradora de la Administración ya que, efectivamente, el apoderado judicial de la parte demandante presentó ante esta Sala Tercera demanda mediante escrito presentado el 11 de octubre de 1995, solicitando que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 95-04-14100-355 de 7 de

junio de 1995, emitida por el Jefe de Personal y Planillas de la Corporación Azucarera La Victoria (Ingenio de Chiriquí).

Estima el resto de los Magistrados que integran la Sala que el apoderado judicial de la parte demandante incurre en un grave error al considerar que la Nota N° 95-04-14100-355 de 7 de junio de 1995, emitida por el Jefe de Personal y Planillas de la Corporación Azucarera La Victoria (Ingenio de Chiriquí) es el acto originario mediante el cual se destituye al señor Kevin Holman Whyles Brayan, ya que de acuerdo a la Resolución N° 116 de 17 de agosto de 1995 emitida por el Director General de la Corporación Azucarera La Victoria, que confirma en todas sus partes el resuelto de destitución, el acto originario lo constituye el resuelto del departamento de Personal y Planillas N° 080 de 8 de junio de 1995, "mediante el cual se declara insubsistente de su cargo al Ing. KEVIN H. WHILES, a partir del 8 de junio de 1995."

Por medio de la Nota N° 95-04-14100-355 de 7 de junio de 1995, emitida por el Jefe de Personal y Planillas de la Corporación Azucarera La Victoria (Ingenio de Chiriquí) se le comunica al demandante la remoción del cargo que estaba desempeñando, pero el acto que causa realmente estado lo constituye el Resuelto N° 080 de 8 de junio de 1995, ya que las demandas contencioso-administrativa, sólo son viables contra los actos administrativos principales que son aquellos que ponen fin a un proceso o actuación administrativa, de acuerdo a lo que establece el artículo 43a de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 12 de marzo de 1996, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Emilio De León, actuando en representación de Kevin Holman Whyles Brayan con el objeto que se declare nula por ilegal, la Nota N° 95-04-14100-355 de 7 de junio de 1995, emitida por el Jefe de Personal y Planillas de la Corporación Azucarera La Victoria (Ingenio de Chiriquí).

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ EN REPRESENTACIÓN DE HERMANOS MANGRAVITA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 3615 SUB-D. G. DE 15 DE ABRIL DE 1992 DICTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. (ACUMULADAS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor **Ulises Pittí**, actuando en su calidad de apoderado judicial de las empresas **HERMANOS MANGRAVITA, S. A., FORTUMAN, S. A. y MANGRAFORD, S. A.**, ha presentado demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte, para que sean declaradas nulas por ilegales, las Resoluciones N° 3615-92 SUB-D. G., 3613-92 SUB-D. G. y 3618-92 SUB-D.G., todas expedidas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social.

Las demandas en comento han sido acumuladas mediante resolución de 22 de mayo del año que decurre, por razones de economía procesal y con el fin de mantener la unidad de la causa que se ventila.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo en vías de determinar si el mismo cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión, y en este punto se percata que la parte actora ha presentado, en escrito separado, una solicitud especial con el fin de que se suspendan provisionalmente los efectos de los actos administrativos impugnados.

Cabe indicar que las resoluciones cuya declaratoria de ilegalidad se acusa ante esta Superioridad, son contentivas de una condena para estas empresas del **Grupo Mangravita** en favor de la Caja de Seguro Social, en concepto de cuotas de Seguro Social, Prima de Riesgos Profesionales y recargos de ley, sumas que según la institución de seguridad social fueron dejadas de pagar entre los años de 1985 y 1990.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Reposa a folios 71-74 del expediente la solicitud previa del demandante, requiriendo a la Sala Tercera la adopción de la medida cautelar de suspensión, toda vez a partir de la expedición de lo actos confirmatorios en la vía gubernativa que mantienen la condena al pago de cuotas y recargos, se ha tomado la medida administrativa de retener las fichas de Seguro Social sobre comprobación de salarios a estas empresas, lo que ocasiona un perjuicio grave, no sólo a las mismas, sino también a sus trabajadores, ajenos a la litis entre la administración de las empresas y la Caja de Seguro Social.

Las consideraciones medulares del petente en este caso se reproducen de seguido:

> "Que con la decisión tomada por el Director General de la Caja de Seguro Social de no entregar las fichas de seguro social a las empresas que representamos, el Director de dicha Institución está incurriendo y ocasionándole notorios graves perjuicios graves e irreparables a las empresas.
>
> Que con la negativa de entregar las fichas de seguro social a los trabajadores de las empresas que represento, se está afectando gravemente un importante sector productivo de la población laboral, quienes además han cumplido con sus obligaciones del pago de sus cuotas y no deben ser afectados por disposiciones que ya hemos atacado de ilegales ..."

Esta Superioridad, al momento de entrar al examen de los argumentos vertidos por el peticionario, advierte que la situación planteada por el recurrente, en el sentido de que se ha procedido a la retención de las fichas de seguro social a las empresas antes mencionadas y sus trabajadores, ha sido debidamente acreditada, acompañándose copias de la correspondencia mantenida y suscrita entre el apoderado judicial de éstas, el Director de Ingresos y el Director General de la Caja de Seguro Social. (Cfr. folios 75-78 del expediente).

En las Nota N° D del-N-028-96 de 6 de mayo de 1996, el Director de Ingresos, a. i. de la Caja de Seguro Social ha negado la entrega de las fichas de seguro social, indicando que esta situación obedece a la existencia de alcances de auditoría con la Institución, y que habida cuenta del agotamiento de la vía gubernativa que confirma esta decisión, la Administración está facultada para seguir con el trámite normal correspondiente a fin de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. En la misma nota se recomienda **"acudir a esta Dirección de Ingresos, con la finalidad de cancelar el saldo resultante producto del Alcance de Auditoría; lo cual dará el derecho de forma inmediata a la entrega de fichas de comprobación de salarios ..."**

El señor Director de la Caja de Seguro Social por su parte, en Nota D. G. 414-96 de 22 de mayo de 1996 remitida vía facsímil, ha mantenido la decisión de retener las fichas de seguro social de las empresas y sus trabajadores, por idénticas razones a las esbozadas por el Director de Ingresos.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL EN CUANTO A LA MEDIDA CAUTELAR

En concepto de quienes suscriben, la decisión administrativa asumida por la Caja de Seguro Social evidencia una acción coercitiva destinada al pago del alcance de auditoría efectuado, que sin embargo le ocasiona graves perjuicios no sólo a las empresas sujetas al alcance, sino principalmente a los trabajadores de dichas empresas, quienes pese a continuar siendo objeto de las deducciones legales del sistema de seguridad social (cotizaciones), evidentemente se verán impedidos de obtener los servicios y prestaciones sociales al no obtener el comprobante de sus cotizaciones (fichas).

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943, otorga a este Cuerpo Colegiado la facultad discrecional de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos cuya ilegalidad se acusa, cuando de la ponderación que verifica el Tribunal de los argumentos esbozados por el solicitante, así como de las pruebas que le acompañen, se desprenda de manera palmaria la necesidad urgente de adoptar la medida cautelar, en vías de evitar graves perjuicios a la parte que se alude afectada por el acto de la administración.

En virtud de lo anterior, se colige la importancia de que el peticionista no sólo enuncie la solicitud de suspensión provisional, sino que la motive adecuadamente, suministrando al Tribunal los elementos de juicio que le permitan examinar la supuesta afectación grave o irreparable que causa el acto administrativo.

En el negocio que nos ocupa, esta Superioridad observa que el actor acompaña con su solicitud, los documentos que recogen la negativa de la entrega de fichas para las empresas y sus trabajadores, prueba preconstituída de las circunstancias que a su juicio, les ocasionan graves perjuicios. Cabe indicar que la medida adoptada es consecuencia directa de la decisión administrativa de condenar al pago a las empresas del **Grupo Mangravita** de sumas supuestamente adeudadas a la Caja de Seguro Social.

Es de advertir que el razonamiento jurídico que fundamenta esta actuación radica exclusivamente en el hecho de que se ha agotado la vía gubernativa, haciendo exigible el cumplimiento de la obligación.

En este contexto se hace imperativo señalar que si bien los actos administrativos individuales una vez quedan firmes en la vía gubernativa pueden ser ejecutados por gozar de presunción de validez y se reputarse legales hasta tanto esta Superioridad no declare lo contrario, por lo que la instauración de procesos contencioso administrativos no suspenden la ejecutividad del acto administrativo impugnado, en el caso sub-júdice se advierte que la institución de seguridad social ha tomado previsiones administrativas en este caso que afectan de manera grave y palmaria a las empresas demandantes y sus empleados.

Así, parece requerirse de inmediato, la cancelación total de lo supuestamente adeudado, **requisito que ni siquiera es exigido por la Sala Tercera de la Corte antes de incoar la demanda contencioso administrativa**, por no tratarse de uno de los créditos definitivamente liquidados a favor del Estado contemplados en el artículo 49 de la Ley 135 de 1943, en cuyos casos sí se requiere, por previsión expresa de la Ley, acompañar el libelo de demanda con el respectivo comprobante de haber consignado el pago.

Esta circunstancia merece serio énfasis, puesto que de ello se desprende por lógica-jurídica que las empresas demandantes no estaban obligadas a realizar el pago antes de presentar estos procesos, y aunque es perfectamente viable que la Administración de la Caja de Seguro Social, celosa del cumplimiento de las obligaciones de sus asegurados realice acciones tendientes a obtener el cumplimiento de lo que estima se le adeuda, la acción coercitiva emprendida en este caso, parece no tener base legal cierta y le ocasiona perjuicios notorios y graves a los demandantes, máxime cuando de no adoptarse la medida cautelar, el curso normal de la tramitación de estos procesos indica que podría transcurrir un lapso apreciable de tiempo antes de resolverse de manera definitiva la litis, con una declaración de la Sala Tercera de la Corte sobre la legalidad o no de los actos proferidos por la Caja de Seguridad Social.

Por ende, y en vías de preservar el derecho de los administrados y evitar que los perjuicios que se están ocasionando en estos casos se vean incrementados, procede acceder a lo solicitado por el recurrente. Sin embargo, esta medida precautoria no debe considerarse un pronunciamiento adelantado de esta Superioridad en relación a la pretensión de fondo del actor, pues sólo en la fase final de este proceso se examinará la actuación de la entidad de seguridad social al confeccionar los alcances de auditoría, determinándose la legalidad o ilegalidad del mismo.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de las Resoluciones N° 3615-92 SUB-D. G., 3613-92 SUB-D. G. y 3618-92 SUB-D. G., todas expedidas por el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, y ORDENA la entrega de las fichas de seguro social a las empresas HERMANOS MANGRAVITA, S. A., FORTUMAN, S. A. y MANGRAFORD, S. A. y sus trabajadores.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. RITO TORRES GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE STANLEY PUSSEY BLAKENEY, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13-95V DE 17 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte, de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licdo. Rito Torres Guevara, en representación de Stanley Pussey Blakeney, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 13-95V de 17 de agosto de 1995, emitida por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda.

La señora Procuradora de la Administración al notificarse de la providencia de 31 de enero de 1996, que **ADMITIÓ** la presente demanda, mediante Vista Fiscal N° 156 de 11 de abril de 1996, presentó y sustento formal recurso de apelación contra la misma, argumentando básicamente, que no se había agotado la vía gubernativa al considerar que el apoderado judicial del señor Stanley Pussey B., el Licdo Rito Torres Guevara, "no utilizó los recursos necesarios para agotar al vía gubernativa ...", y era necesario "que el recurrente presentara ante la autoridad superior, en este caso, el Ministro de Vivienda, su inconformidad y cumplir así con el requisito de agotamiento de la vía, que es requisito indispensable para la viabilidad de una demanda de Plena Jurisdicción."

Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora se opuso a lo pretendido por la Procuradora, y presentó sus objeciones a la presente alzada, en la que sostiene que la vía gubernativa fue agotada. Al responder a las objeciones que la señora Procuradora emite en la sustentación del recurso de apelación visible a foja 32, el demandado estableció lo siguiente: en la Resolución 10-95 que decidió la solicitud de consignación de canon de arrendamiento a favor del señor Pussey, se establece que el único recurso procedente contra dicha decisión era el de apelación ante la Dirección General de Arrendamiento, hecho que motivó al Licdo. Ernesto Anguizola, apoderado judicial de la contraparte, el señor Arturo Jordán, a interponer dicho recurso. Ello trajo como consecuencia la expedición de la Resolución 13-95V de 17 de agosto de 1995 emitida por la Dirección General de Arrendamiento, que ordenó la

revocación de la Resolución 10-95 de 10 de mayo de 1995. En la misma Resolución 13-95V se estableció que era de carácter definitivo y obligatorio, resolviendo de forma directa el fondo del asunto, ordenándose la devolución del importe de los canones de arrendamiento consignados a fin de evitar la mora en que pudiese incurrir el Señor Stanley Pussey.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a expresar las siguientes consideraciones:

Estima esta Superioridad que el demandante sí agotó la vía gubernativa en este caso, tal como consta en el expediente a foja 5, por los razonamientos que se expresan de seguido: Vemos la solicitud de pago por consignación presentada el 27 de diciembre de 1995 por el Licdo. Rito Torres G. apoderado judicial del señor Stanley Pussey; (f. 5) a foja 11 se observa la resolución de la Comisión de Vivienda N° 10-95 de 10 de mayo de 1995, donde se acepta la solicitud del Licdo. Torres acerca del pago por consignación y establece como único recurso a interponer el de apelación; esta resolución fue apelada por el apoderado judicial del señor Arturo Jordán ante la Dirección General de Arrendamiento, conforme a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 87 de 28 de septiembre de 1993 por la cual se aprueba el Reglamento sobre los trámites, demandas y solicitudes relacionadas con el arrendamiento urbano sujeto a la ley 93 de 4 de octubre de 1973.

Una vez presentada dicha apelación por parte del Licdo. Anguizola y resuelta a su favor mediante la resolución 13-95V, de la contraparte, el Licdo. Torres, procede a presentar demanda contencioso administrativa por considerar agotada la vía gubernativa. Este hecho motivó a la Procuradora de la Administración a indicar que no se había agotado la vía gubernativa, ya que la Resolución 13-95V emitida por la Dirección General de Arrendamientos debió ser impugnada ante la instancia inmediatamente superior, tal como lo establece ordinal 2 el artículo 33 de la Ley 135 de 1943, siendo en este caso el Ministro de Vivienda.

Aunque la norma precitada pareciera fundar el argumento de la Procuradora de la Administración de que debía acudirse a una segunda instancia en este caso, diferimos de su criterio de interpretación, ya que como establece el artículo 38 de la Ley 135 de 1943:

> "Procede el recurso de apelación ante el Ministro del ramo contra las resoluciones definitivas de los funcionarios administrativos de orden nacional, siempre que así lo dispongan la ley y los decretos reglamentarios".

Debe este Tribunal ad-quem indicar que no todas las resoluciones que emite la Dirección General de Arrendamiento son susceptibles de apelación ante el Ministro de Vivienda, ya que como establece el Decreto Ejecutivo 87 de 28 de septiembre de 1993, en su artículo 32:

> "Contra el fallo proferido por la comisión de vivienda sólo cabe el recurso de apelación ante la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda ... En los procesos que se ventilan ante la Dirección General de Arrendamiento procede la interposición de los recursos de reconsideración o apelación ...". (Subrayado es nuestro).

Del artículo transcrito podemos interpretar que cuando un negocio se inicia en primera instancia ante la Dirección General de Arrendamientos, el Ministro de Vivienda puede conocer en segunda instancia del asunto, por vía de apelación. Sin embargo el presente negocio se inició ante la Comisión de Vivienda, y conoció en segunda instancia del mismo la Dirección General de Arrendamientos, siendo su decisión definitivas y obligatorias, en este caso se deduce agotada la vía gubernativa.

Se concluye de lo expuesto que no le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración, por lo que debe confirmarse la Resolución de 31 de enero de 1996 que admitió la demanda presentada.

En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la Sala Tercera,

Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad del ley, CONFIRMAN la providencia de 31 de enero de 1996, que ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licdo. Rito Torres Guevara en representación de Stanley Pussey Blakeney.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ÁLVAREZ, MIZRACHI & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR GERMÁN CASTILLO CHANIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 468 DE 20 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Rubio, Álvarez, Mizrachi & Díaz**, en representación de **GERMÁN CASTILLO CHANIS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 468 de 20 de marzo de 1995, dictada por el Ministro de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la acción encausada el recurrente pretende que esta Superioridad declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante el cual se le destituyó del cargo que ocupaba en el Ministerio de Salud, con el consiguiente reintegro a su posición, y se ordene al Ministerio de Salud, que pague los salarios dejados de percibir desde la expedición de la mencionada Resolución, hasta el momento en que se efectúe el reintegro correspondiente.

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El recurrente basa sus pretensiones en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: El Doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS**, es médico veterinario zootecnista.

SEGUNDO: El Doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS** inició labores en el Ministerio de Salud en octubre de 1986, es decir, tenía mas de nueve (9) años de servicio, al momento en que fue destituído de su cargo mediante la Resolución cuya nulidad demandamos.

TERCERO: El Doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS**, al momento de su destitución, ejercía el cargo de Jefe de Inspección de planta en el Matadero Servicarnes de Divisa, Provincia de Herrera, con número de empleado N° 80078, planilla 72.

CUARTO: La destitución del Doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS** del Ministerio de Salud, la cual se dio mediante la mencionada Resolución N° 468 del 20 de marzo de 1995, no fue precedida de un proceso disciplinario en el cual se formularon cargos en su contra y se le diera la oportunidad de presentar descargos en su favor.

QUINTO: Nuestro representado nunca ha sido objeto de Procedimiento Disciplinario relacionado con el ejercicio de su cargo dentro del Ministerio de Salud"...

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La institución demandada mediante informe explicativo de conducta que reposa a fojas 31-32 del expediente, señaló a esta Superioridad que su actuación obedeció a que el Ministerio de Salud posee plenas facultades legales como autoridad nominadora del recurso humano que presta sus servicios en dicha entidad, así como también para aplicar a éste los correctivos discrecionales necesarios en aras de regular su normal, correcto y eficiente funcionamiento como institución. Por tanto, señala el referido ente estatal, que la decisión de destituir al señor **GERMÁN CASTILLO CHANIS** ha sido tomada en base a la comisión, por parte del mismo, de acciones que riñen con su deber de actuar con capacidad y aptitud en el desempeño de su cargo. Igualmente, por haber obrado éste con una conducta incorrecta y desordenada en su trabajo, perjudicando el funcionamiento de dicho Ministerio.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 417 de 4 de octubre de 1995, solicitó a este Tribunal denegar las declaraciones pedidas por el actor argumentando fundamentalmente, que resulta evidente que el señor **CASTILLO CHANIS** fue destituído por mostrar incapacidad e ineptitud en el desempeño del cargo, y por conducta incorrecta y desordenada. Que en lo que respecta a la supuesta violación de los artículos 59, 61 y 65 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud, las mismas no tenían por qué ser aplicadas, dado que ni siquiera guardan relación con el caso en estudio. En efecto añade la señora Procuradora, que el artículo 59 se refiere a la "evaluación" que se le hace al funcionario de la institución, y que el artículo 61 alude al resultado de la evaluación practicada, que constituyen aspectos ajenos a la presente controversia.

Aunado a lo anterior, señala la precitada funcionaria que al señor **CASTILLO CHANIS** no había por qué aplicarle sanciones disciplinarias en orden ascendente, cuando precisamente, el acápite "e" del artículo 65 in comento, faculta a la Ministra de Salud para destituir a los funcionarios, en los casos de faltas graves debidamente comprobadas que la justifiquen, como ocurrió con el prenombrado funcionario.

Acerca de los artículos 634 y 794 del Código Administrativo, a que se refiere el demandante, señala la Procuradora que los cargos de infracción endilgados a los mismos carecen de asidero jurídico.

Finalmente, señala la Procuradora de la Administración que no consta en el expediente que el señor **GERMÁN CASTILLO CHANIS** haya ingresado al Ministerio de Salud luego de haber participado en algún concurso para el cargo, lo que evidencia que fue nombrado en la posición que ocupaba, en base a la potestad discrecional de la autoridad nominadora, y, por ende, podía ser destituído de igual forma, dado que en la actualidad los funcionarios públicos panameños no están amparados por un sistema de Carrera Administrativa que les garantice el derecho a la estabilidad en el puesto, toda vez que la Ley que instituye ésta, aún no ha sido implementada.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción se estiman infringidos los artículos 47, 59, 61 y 65, todos, del Reglamento Interno del Ministerio de Salud.

Sostiene el apoderado judicial de la parte actora que mediante el acto administrativo cuya ilegalidad se demanda, cual es la Resolución N° 468 de 20 de marzo de 1995, se han infringido las precitadas disposiciones legales en razón de que su representado, el señor **GERMÁN CASTILLO CHANIS** no incurrió en ninguna de las causales de destitución que señalan las precitadas disposiciones. Además,

de que para proceder a declararlo insubsistente del cargo, se omitió dar cumplimiento a las formalidades legales consagradas en tales normas reglamentarias. En este sentido, alega que se omitió llevar a cabo una investigación disciplinaria en su contra, y de igual forma, nunca le fue instruido un expediente o proceso disciplinario por el departamento de personal del Ministerio de Salud por la comisión de faltas disciplinarias o por la incapacidad o ineptitud en el ejercicio del cargo, ni mucho menos se le dio la oportunidad de defenderse de dichos cargos y rebatir los mismos.

También se consideran infringidos los artículos 634 y el artículo 794 del Código Administrativo cuyo texto es del tenor siguiente:

> "**Artículo 634.** Estos empleados son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo y tendrán las funciones que el mismo les señale."
>
> "**Artículo 794.** La determinación del período de duración de un empleado no coarta en nada la facultad del empleador que hizo el nombramiento para removerlo, salvo expresa prohibición de la Constitución o de la Ley."

Argumenta el demandante que el artículo 634 del Código Administrativo ha sido infringido en el concepto de aplicación indebida, pues el mismo se refiere a los empleados de la Presidencia de la República, los cuales son de libre nombramiento y remoción por el Poder Ejecutivo. Por consiguiente, señala el representante judicial de la parte actora, que "Este artículo se ha violado porque el doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS**, a pesar de no ser empleado de la Presidencia de la República, sino del Ministerio de Salud, fue destituído de su cargo mediante una resolución que tuvo como fundamento legal el mencionado artículo 634 del Código Administrativo".

En lo que respecta a la infracción del artículo 794 del referido Código Administrativo, señala el recurrente que el mismo ha sido violado en el concepto de indebida aplicación, puesto que dicha disposición se refiere a empleados con período de duración determinado en el cargo, que no es el caso del doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS**. Agrega que es un funcionario público nombrado con permanencia en el cargo, es decir, nombrado indefinidamente, como lo demuestra el hecho de que el mismo tenía más de nueve (9) años de servicios continuos en el Ministerio de Salud en el momento en que fue ilegalmente destituído de su cargo.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

En torno a la violación de los artículos 47, 59, 61 y 65, todos del Reglamento Interno del Ministerio de Salud, la Sala estima que no es procedente entrar a examinar tales cargos, en razón de que dicho reglamento, en su totalidad, fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema, mediante Sentencia de 30 de noviembre de 1995, cuando declaró: "**QUE ES INCONSTITUCIONAL**, en su totalidad, el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resuelto 767 de 1° de junio de 1970, por cuanto viola el artículo 297 de la Constitución vigente."

La precitada Sentencia en su parte medular, es del tenor siguiente:

> "En el presente caso, por consulta que hiciera la Procuradora General de la Nación a los archivos de la Procuraduría de la Administración, se tuvo conocimiento de que `el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud fue aprobado mediante Resuelto 767 de 1° de junio de 1970, expedido por el Ministro de Salud de esa época, Dr. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL y el Director Administrativo Dr. JORGE E. SALAZAR. El mismo `reglamento fue adoptado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social como Reglamento Interno de Personal de esa institución, según Resolución 768 de 16 de marzo de 1977. (F. 20, las cursivas son de la Corte).
>
> La lectura del acto demandado permite comprobar que el instrumento

> jurídico de marras (Resuelto 767 de 1° de junio de 1970), se encarga de reglamentar, en abstracto, los `deberes y derechos del personal administrativo al Servicio del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social y establece las normas para desarrollar las acciones de personal (art. 1).
>
> La revisión de los títulos de dicho `Reglamento Interno permite comprobar este aserto. Por ejemplo, en su Título II se ocupa de los `DERECHOS DEBERES y PROHIBICIONES de los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, mientras que el Título III se refiere a las `ACCIONES DE PERSONAL (nombramientos, vacaciones, traslados, remuneración, tiempo extraordinario de trabajo, separación del cargo, renuncia, destitución, licencias, evaluación, régimen disciplinario, etc.).
>
> Se aprecia, con toda claridad, que el acto que se demanda es un resuelto sui generis, porque, a pesar del ámbito restringido que le está asignado en virtud de la naturaleza jurídica del acto, su contenido es general o abstracto.
>
> Salta a la vista que la función normativa que le ha sido atribuida lo coloca en franca contradicción con el inciso primero del artículo 297 de la Carta Fundamental, que exige que esa materia sea determinada por la ley o, en virtud de interpretación conforme con la Constitución, mediante Decreto Ejecutivo firmado por el Presidente de la República y el ministro de salud, en ejercicio de la potestad reglamentaria discrecional que engendra reglamentos autónomos o independientes (Cfr. Sentencia de Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 4 de junio de 1992).
>
> Como se afirma en la Vista de la Procuraduría General, la vulneración de la norma constitucional emerge de manera clara, toda vez que no es posible que un simple resuelto, empleado en la práctica ordinaria para el trámite y resolución de asuntos administrativos de carácter individualizado, sea utilizado, como en este caso, para desarrollar o ejecutar directamente normas constitucionales, tarea que corresponde, fundamentalmente, a la ley formal y, por vía de excepción, a los Decretos Reglamentarios Autónomos, en el evento de que no exista regulación de carácter legal.
>
> Como quiera que se está en presencia de un caso en el que la vulneración de la Ley Fundamental se produce por defectos de forma del acto atacado, en el que rige el principio dispositivo de manera atenuada, lo que se produce, entonces, es la inconstitucionalidad de todo el acto acusado".

La doctrina ha señalado que la declaratoria de inconstitucionalidad con respecto a una ley, norma legal o reglamentaria es el de que produce los efectos de cosa juzgada y elimina la norma o el acto del ordenamiento jurídico; **aunque el acto, como ocurre en el presente caso, hubiese sido emitido antes de la declaratoria de inconstitucionalidad**. (Cfr. Sentencias de la Sala Tercera de 8 de junio de 1992, y de 7 de junio de 1995).

La norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada por el juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos ahora se determinan: en este caso el despido y la legalidad o ilegalidad del mismo. Debe entenderse que la norma declarada inconstitucional no puede tener ultraactividad (eficacia ulterior a su pérdida de vigencia para regular las situaciones nacidas bajo su imperio), contrario a lo que ocurre con una norma derogada que en razón de su ultraactividad (eficacia residual de la norma que perdió vigencia), prevista en los artículos 30, 31 y 32 del Código Civil, puede ser aplicada para regular ciertos efectos que se produjeron cuando estaba vigente la norma derogada.

Para mayor ilustración, veamos lo que sobre el particular se indicara en la aludida Sentencia de 8 de junio de 1992:

> "No ocurre así con una ley o norma reglamentaria que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. **La norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada por el juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho** cuyos efectos ahora se determinan: en este caso el despido y la legalidad o ilegalidad del mismo. La norma inconstitucional carece de ultra actividad por ser nula con efectos generales ...
>
> La norma inconstitucional no puede tener ultraactividad (eficacia ulterior a su pérdida de vigencia para regular las situaciones nacidas bajo su imperio) como sí la puede tener una norma derogada (en ausencia de una ley derogatoria retroactiva) porque no se dan iguales supuestos: la esencia de la derogación no consiste en hacer desaparecer todos los efectos de la Ley o el reglamento sino en delimitar la eficacia o aplicabilidad de las leyes en el tiempo, estableciendo una ordenada sucesión de las mismas (Díez-Picazo, op. cit., pág. 235). mientras que lo que persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley o del reglamento es hacer efectiva la supremacía de la Constitución, ya que, en palabras de Hans Kelsen una Constitución que carezca de la garantía de la anulabilidad de los actos inconstitucionales no es una Constitución plenamente obligatoria (artículo citado, pág. 150). Sería contrario a este propósito continuar aplicando una norma reglamentaria incompatible con la Constitución, ésta no sería verdaderamente la norma suprema."

Continuar aplicando una normativa declarada inconstitucional a una actuación administrativa que se produjo estando en vigencia dicha norma legal o reglamentaria, sería desconocer el carácter de supremacía de la Constitución, y por consiguiente, ésta no sería verdaderamente la norma suprema, como bien lo señalara la Sala Tercera en la supra transcrita Sentencia de 8 de junio de 1982.

En cuanto al artículo 634 del Código Administrativo, esta Superioridad considera que no procede entrar a examinar el cargo endilgado, en virtud de que esta disposición alude a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo de los empleados de la Presidencia de la República, según se desprende del artículo 633 del aludido Código Administrativo. Esta no es la situación del doctor **GERMÁN CASTILLO CHANIS**, quien al momento en fue separado del cargo, era funcionario adscrito al Ministerio de Salud, no a la Presidencia de la República.

En lo que respecta al artículo 794 del Código Administrativo, a juicio de este Tribunal la violación a esta norma debe desestimarse por no ser aplicable al caso. Esta disposición se refiere a la remoción de un empleado cuyo nombramiento está sujeto a un período determinado, y el caso en estudio es el de un funcionario sin término fijo, es decir, por tiempo indefinido. Por consiguiente, no prospera el cargo de violación endilgado.

Esta Superioridad estima pertinente reiterar que aún en el evento de que no se hubiesen cumplido los procedimientos reglamentarios para declararle insubsistente del cargo, no le asiste razón al recurrente, puesto que la destitución de los funcionarios públicos no amparados por una ley de carrera administrativa o especial, verbigracia la sanitaria, es potestad discrecional de la entidad nominadora. De igual manera, el recurrente no ha probado en el proceso que el puesto que desempeñaba lo obtuvo por sus méritos mediante concurso de oposición, que es lo que le otorgaría estabilidad en el cargo.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 468 de 20 de marzo de 1995, dictada por el Ministro de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SATURIO SEGARRA EN REPRESENTACIÓN DE TRANSCOLPIMA, S. A., RUTA COLÓN COCO SOLO, S. A., EXPRESO PANAMÁ, COLÓN CENTROAMÉRICA S. A., TRANSPORTE UNIDO PORTOBELO-COLÓN, S. A. Y TRANSPORTE COLÓN UNIDO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 3 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Saturio Segarra, en representación de las sociedades **TRANSCOLPILMA, S. A., TRANSPORTE COLÓN UNIDO, S. A., RUTA COLÓN COCOSOLO, S. A., EXPRESO PANAMÁ, COLÓN CENTRO AMÉRICA, S. A., TRANSPORTE UNIDO PORTOBELO-COLÓN, S. A.**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 1 de 3 de enero de 1996 y N° 123-R-23, dictadas por el Director de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministro de Gobierno y Justicia respectivamente.

El demandante solicita que se suspenda los efectos del acto impugnado, sin embargo, antes de resolver esa petición es menester comprobar si la demanda cumple con los requisitos de Ley para su admisión.

La Resolución impugnada N° 1, de 3 de enero de 1996, fue dictada por el Director de Tránsito y Transporte Terrestre al resolver el escrito de impugnación contra **las elecciones** celebradas en la Provincia de Colón para escoger los representantes del transporte colectivo, ante el Consejo Técnico Provincial de Transporte de dicha provincia, presentado por las sociedades **TRANSCOLPILMA, S. A., TRANSPORTE COLÓN UNIDO, S. A., RUTA COLÓN COCOSOLO, S. A., EXPRESO PANAMÁ, COLÓN CENTRO AMÉRICA, S. A., TRANSPORTE UNIDO PORTOBELO-COLÓN, S. A.**

Mediante esta resolución se resuelve "Negar la impugnación propuesta por el señor VÍCTOR MENDOZA, con cédula de identidad personal N° 3-80-1865, ..." y "Confirmar el Acto Administrativo de las Elecciones, celebradas por la Dirección Provincial de Colón en fecha de 12 de noviembre de 1995 en el cual fueron elegidos como Representantes Transportistas ante el Consejo Técnico Provincial de la Provincia de Colón los señores GILBERTO SOTO con cédula 3-41-992, como principal y VÍCTOR DANGELO con cédula de identidad personal N° 3-57-444, como suplente del mismo." (Fs. 2).

Por su parte, la Resolución N° 123-R-23 de 19 de marzo de 1996, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia, resuelve "Negar el Recurso de Apelación promovido por el Licenciado Saturio Segarra en representación de Víctor Mendoza, Julio Legua Serrano, Roberto Giono, José Jesús Santizo y Pablo Rodríguez y en consecuencia se mantiene en todas sus parte el Acto Administrativo de las elecciones celebradas por la Dirección Provincial de Colón en fecha 12 de noviembre de 1995 ..." (Fs. 5).

De lo expuesto se infiere que el acto originario lo constituye las **elecciones** celebradas en la Provincia de Colón, para la escogencia de los representantes del transporte colectivo ante el Consejo Técnico Provincial de Colón, el 12 de noviembre de 1995, y que los actos impugnados son meros actos confirmatorios que agotan la vía gubernativa, contra los cuales no es indispensable dirigir la demanda (Artículo 29, Ley 33 de 1946). El acto que debe demandarse en esta jurisdicción es el acto originario, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, y que en este caso, como ya se ha expresado, lo constituye la celebración de la elección.

En virtud de lo expuesto, debe declararse inadmisiblela presente demanda, conforme lo ordena el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Licenciado Saturio Segarra, en representación de las sociedades TRANSCOLPILMA, S. A., TRANSPORTE COLÓN UNIDO, S. A., RUTA COLÓN COCOSOLO, S. A., EXPRESO PANAMÁ, COLÓN CENTRO AMÉRICA, S. A., TRANSPORTE UNIDO PORTOBELO-COLÓN, S. A.
Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉS EN REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Valdés actuando en nombre y representación de la sociedad Total Comunication, Inc., ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 16 de abril de 1996, en la que no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 16 de 26 septiembre de 1995, dictado por el Ministro de Gobierno y Justicia, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que el apoderado judicial del demandante, no se ajustó a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, pues, dirigió su demanda erróneamente contra la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia y no contra el señor Ministro de Gobierno y Justicia. También afirma la Magistrada Sustanciadora que la actora incumplió con el citado numeral 1° del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, porque no expresó que el funcionario demandado estaría representado por la Procuradora de la administración.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El licenciado Ricardo Valdés, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "En la demanda se designa al Ministerio de Gobierno y Justicia como la parte demandada. El departamento de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia es como quedó expresado un Departamento de ese Ministerio y no es una entidad autónoma o semiautónoma sino un Departamento de lo otros tantos que la Ley le atribuye a dicho Ministerio. No existe razón alguna para entender que pudiese mencionar ése Departamento como la parte demandada, como parece haberlo confundido en la Resolución recurrida y como un motivo o defecto en la formalización de la demanda.
>
> En relación al hecho que no se mencionara a la Procuradora de la administración como la Representante del Ministerio de Gobierno y Justicia en la demanda planteada y se le indique como un requisito

sine qua non para la admisión de la demanda, constituye una exigencia formal carente de sentido y de fundamento legal en un proceso contencioso administrativo."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, se opone al recurso de apelación, mediante la Vista N° 231 de 27 de mayo 1996, en la que señala que, efectivamente, la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución apelada.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema consideran que le asiste la razón a la parte actora, puesto que cumplió con lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, al designar como parte demandada a la Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia representada por el señor Ministro de Gobierno y Justicia, tal como se infiere de la lectura del Resuelto N° 16 de 26 de septiembre de 1995, que es el acto acusado, visible a fojas 1 y 2 del expediente. Además, el resto de la Sala, considera que es un error subsanable no expresar que el funcionario demandado estaría representado por la Procuradora de la Administración.

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 16 de abril de 1996, ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Ricardo Valdés actuando en nombre y representación de la sociedad Total Comunication, Inc.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ EDUARDO MORA SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 1796-94-DNP-S DE T DE 1° DE JUNIO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Villalaz y Asociados, actuando en representación de JOSÉ EDUARDO MORA SÁNCHEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nulo, por ilegal, el contenido de la Nota N° 1786-94 DNP-S de T de 1° de junio de 1994, expedida por la Dirección Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 10.062-95 J. D. de 12 de enero de 1995 proferida por la Junta Directiva de esa institución.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos lo actos antes mencionados y, como consecuencia de ello, se ordene a la Caja de Seguro Social a pagarle al señor JOSÉ MORA SÁNCHEZ el salario mensual que devengaba como Técnico en Salud Ocupacional hasta el año 1991. En la demanda igualmente se solicita que se le cancele al señor JOSÉ MORA SÁNCHEZ todos los sobresueldos y cambios de etapa legítimamente adquiridos desde el año 1975 hasta 1995 y, finalmente, que se reconozca al señor Mora como Técnico en Salud

Ocupacional, todos sus derechos como servidor público al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977.

En el acto impugnado, la Directora Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social expuso entre otras consideraciones, que mediante la acción de personal N° 2828-93 se nombró al señor JOSÉ MORA como Técnico en Salud Ocupacional a partir del 1° de mayo de 1993 para iniciar labores el 8 de junio del mismo año. Añade la Directora Nacional de Corrección, que el anterior nombramiento se efectuó siguiendo instrucciones de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en la Resolución N° 7611-93 de 21 de enero de 1993, en la que, por un lado, se confirman en todas sus partes el contenido de la Resolución N° 3314-92 DNP de 2 de junio de 1992 y la Acción de Personal N° 0177-91 de 7 de enero de 1991 y, por otro lado, se recomienda el nombramiento del señor MORA, dado que al adquirir la nacionalidad panameña en el mes de enero de 1992, su nombramiento no quebranta el ordenamiento Constitucional. Finalmente, afirma la Directora Nacional en el acto acusado, que según el Manual Descriptivo de Cargos, el derecho a los cambios de etapa nacen a partir de la fecha que inició labores en la institución en su condición de panameño naturalizado, es decir, el 8 de junio de 1993.

En relación con lo antes anotado, la parte actora opina que al expedirse la Nota N° 1786-94 DNP-S de 1° de junio de 1994, se le respondió al señor Mora diversas solicitudes por él planteadas desde agosto de 1993, desconociéndose y violándose el Convenio III del 4 de junio de 1958 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, aprobado y ratificado en todas sus parte por la República de Panamá. Aunado a lo anterior, estima el apoderado judicial del señor Mora, que, igualmente, la Nota N° 1786-94 DNP-S de T de 1° de junio de 1994 desconoce jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que se coloca en el mismo nivel jerárquico a la Constitución Nacional y a los Tratados y Convenios Internacionales que Panamá ha ratificado y ha convertido en parte de su ordenamiento jurídico interno.

Entre las disposiciones alegadas como infringidas por la parte actora figuran los artículos 17 y 24 de la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977 y el artículo 28-A del Decreto Ley N° 14 de 1954. El texto de los artículos antes mencionados en su orden respectivo es el siguiente:

> ARTÍCULO 17: En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el Territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los Nacionales en países extranjeros. 2- En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado Nacional de Trabajo, **No se aplicarán a los refugiados** que ya están exentos (sic) de ellas en la fecha en que esta Convención entra en vigor respectivamente del Estado Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:
>
> a) Haber cumplido tres años de residencia en el País;
>
> b) Tener cónyuge que posea la Nacionalidad del País de residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge;
>
> c) Tener uno o más hijos que posean la Nacionalidad del País de residencia
>
> 3. Los Estados contratantes examinarán benevolentemente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleados de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los Nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de Programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración."
>
> ARTÍCULO 24: 1. Los Estados contratantes concederán a los refugiados

> que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados, el mismo trato que a los Nacionales en los concerniente a las materias siguientes:
>
> a) Remuneración, incluso Subsidios familiares cuando formen parte de la Remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación Profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de beneficios de los Contratos Colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependen de las autoridades administrativas.
>
> b) Seguros Sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del Trabajo, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquiera otra contingencia que, conforme a las leyes y a los reglamentos Nacionales, esté prevista en un plan de Seguro Social) con sujeción a las limitaciones siguientes:
>
> Posibilidad de disposiciones adecuadas para la Conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en Vía de adquisición.
>
> ARTÍCULO 28-A: Los fisioterapista, laboratoristas, farmacéuticos, trabajadores sociales, higienistas dentales, funcionarios profesionales de Seguro Sociales y los empleados administrativos con quince (15) años de servicios a la Caja, continuos o interrumpidos, que trabajan a tiempo completo al Servicio de la Institución, gozarán de estabilidad. Estos no podrán ser removidos o suspendidos sin que haya una razón justificada."

En cuanto al artículo 17 de la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, afirma la parte demandante que ha sido violado en el concepto de violación directa por omisión dado que, a su juicio, los derechos que consagra esa norma en favor de su representante fueron desconocidos por la Caja de Seguro Social, a sabiendas que la condición de refugiado le daba al señor Mora una condición especial que no podía ser considerada como la de un extranjero en los términos en que se hizo en la Nota N° 178694-DNP-S de T de 1° de junio de 1994. Sostiene la firma Villalaz y Asociados, que su representado recibió su idoneidad como Técnico en Salud Ocupacional y laboró durante 15 años en esa institución del Estado, por lo que no se puede desconocer los derechos adquiridos, habida cuenta que cumplió en todo momento con sus obligaciones y las normas establecidas, participó en diversos seminarios y congresos internacionales como participante y como expositor en representación de Panamá. Finalmente, añade que la Resolución N° 1 de 8 de febrero de 1988 que define la profesión de Técnico de Salud Ocupacional, que es la que ejerce el señor Mora, recibió la adición de la Resolución N° 18 del Consejo Técnico de Salud, máximo organismo nacional en materia de idoneidad en el área de salud, donde se reconoció a su mandante como Técnico en Salud Ocupacional, profesión que la ejercido en pleno derecho desde 1979.

Por otro lado, en cuanto al artículo 24 de la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, opina la firma Villalaz y Asociados que también ha sido infringido en el concepto de violación directa por omisión, dado que se le han negado al señor Mora los cambios de etapa y reclasificaciones que desde 1975 se le aduedan. Finalmente, en relación al artículo 28-A del Decreto Ley 14 de 1954, estima la parte actora que la violación es directa, dado que su representado laboró ininterrumpidamente para el Seguro Social desde 1975 a 1991, por lo que su derecho a la estabilidad y demás derechos derivados de ella, no se le han reconocido y pretende sólo reconocer sus años de servicios a partir de 1993, que es cuando reingresa a la institución como ciudadano panameño.

El Director de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta mediante nota fechada el 5 de abril de 1995 en los siguientes términos:

> "... El 1° de junio de 1994, la Directora Nacional de Personal mediante Nota N° 1786-94 DNP-S de T, da respuesta formal al Sr. José

E. Mora S., y finaliza comunicándole que según el Manuel Descriptivo de Cargos, el derecho a los cambios de etapa nacen a partir de la fecha en que inició labores en la Institución en su condición de panameño naturalizado, es decir el 8 de junio de 1993. Esta nota es recibida el 2 de junio de 1994. Pasados dos (2) meses de esta nota, no se obtuvo ni queja del Sr. Mora, por la cual se consideró ejecutoriada.

No es sino hasta octubre de 1994, que el Sr. José E. Mora se dirige a la Honorable Junta Directiva en su propio nombre solicitando se le pague lo adeudado. La Junta Directiva mediante Resolución N° 10,06 2-95-J. D. de 12 de enero de 1995, confirma en todas sus partes el contenido de la Nota N° 1786-94-DNP-S de T de 1° de junio de 1994 de la Dirección Nacional de Personal.

La actuación de la Caja de Seguro Social, se fundamenta en los principios legales que nos rigen, exigiendo todos ellos que como requisito indispensable para laborar en el sector público, se requiere ser panameño.

El Código Administrativo en su artículo 759, nos dice que:

ARTÍCULO 759: Este artículo fue modificado por la Ley 47 de 1924. Esta ley a su vez fue derogada por la Ley 38 de 1941:

ARTÍCULO 1° Desde la promulgación de la presente ley no podrán ser empleados públicos remunerados sino los nacionales panameños.

PARÁGRAFO: Exceptúanse de la disposición anterior los extranjeros que, como profesionales técnicos especiales, sean contratados para los diversos departamentos de la Administración Pública.

ARTÍCULO 2° El poder Ejecutivo no podrá llevar a cabo ningún nombramiento en contravención de lo que aquí se dispone, ni mantener con el carácter de empleado público remunerado ninguna persona que no reúna los requisitos establecidos en esta Ley.

Esta disposición no puede contravenir lo dispuesto por la Carta Magna en sus Artículos 265 y 69 a continuación:

ARTÍCULO 265: Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución. Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

ARTÍCULO 69: Se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. La Ley regulará la contratación de Gerentes, Directores Administrativos y Ejecutivos, Técnicos y Profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de los panameños y de acuerdo con el interés nacional."

Asimismo, el Manual Descriptivo de Cargos establece claramente que los cambios de etapa empiezan a contabilizarse a partir del inicio de labores del funcionario. El Sr. José Mora no fue reintegrado a su cargo, sino **Nombrado nuevamente** y es esta fecha la que determina su inicio de labores. De esta forma el Sr. Mora le corresponde comenzar por el escalafón básico de 1° Etapa al igual que el resto de los **Funcionarios Públicos Panameños** que laboran dentro del Sistema Gubernamental ...".

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista N° 232 de 1° de junio de 1995, se opone a las pretensiones de la parte demandante, pues, a su criterio, el señor José Mora Sánchez no fue restituido en su posición anterior como Técnico en Salud Ocupacional, cuyo nombramiento fue revocado mediante la Acción de Personal N° 0177-91 por no reunir los requisitos exigibles para ser funcionarios público, sino que fue nombrado nuevamente por recomendación del a Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en la Resolución N° 7611-93-J. D. de 21 de enero de 1993. En razón de lo anterior, en su opinión, es a partir del nuevo nombramiento de José Mora Sánchez, que se determina su inicio de labores en la Caja de Seguro Social y al igual que el resto de los funcionarios de la institución, le corresponde iniciar por el escalafón básico de primera etapa. Finalmente, en cuanto a la violación al Artículo 28-A del Decreto Ley N° 14 de 1954, estima que no es aplicable al caso que nos ocupa, puesto que no se ha acusado de ilegal la Acción de Personal N° 0177-91 mediante la cual se revocó su nombramiento, sino la negativa al pago de sobresueldos en concepto de cambios de categorías no recibidos.

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Una vez efectuado el estudio del expediente, no coincide la Sala con los argumentos expuestos por el recurrente y estima que el acto acusado contenido en la Nota N° 1786-94-DNP-S de T de 1° de junio de 1994, se ajusta a derecho.

El asunto medular del caso que nos ocupa, radica en que la Directora Nacional de Personal al expedir el acto acusado, estima que según el Manual Descriptivo de Cargos, el derecho a los cambios de etapa del señor Mora nacen a partir de la fecha en que inició labores en la Institución en su condición de panameño naturalizado, es decir desde el 8 de junio de 1993. Es en razón de ello, a criterio de la parte actora, que entre las disposiciones alegadas como infringidas figuran el artículo 17 y 24 de la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, toda vez que el señor Mora ingresó a Panamá en calidad de Asilado Político, y como tal, se encuentra exento de las medidas restrictivas respecto al empleo de extranjeros, sin soslayar el hecho de que goza del mismo trato concedido a los nacionales en materia de remuneración, seguros sociales y derechos adquiridos o en vías de adquisición.

En cuanto a la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, por medio de la cual "Se aprueba la Convención y Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados" observa la Sala que está vigente y fue publicada en la G. O. N° 18.558 de 17 de abril de 1978. Con respecto a lo antes señalado, la Corte Suprema de Justicia considera que, efectivamente, los convenios internacionales debidamente ratificados por Panamá, se integran al ordenamiento jurídico con jerarquía de Ley, y como regla general, no se integran al bloque de la constitucionalidad.

Para resolver, la Sala estima conveniente aclarar el concepto de "Refugiado" contenida en la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, a quienes y desde cuando se encuentran amparados de los beneficios que conlleva poseer dicha calidad. Observa la Sala que en las disposiciones generales contenidas en el artículo I, se contempla que el término "Refugiado" se aplica entre otros presupuestos, a toda persona con "... fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él". Igualmente se señala, que al adherirse al Protocolo, los Estados se comprometen a aplicar las disposiciones de la Convención de 1951 "a todos los refugiados comprendidos en la definición que figura en este instrumento pero sin limitaciones en cuanto a la fecha."

La calidad de refugiado del señor Mora fue probada, toda vez que a foja 2 del expediente aparece una certificación fechada el 6 de agosto de 1992, en la que la Directora General Encargada de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, certifica que la condición migratoria del señor Mora en

la República de Panamá es de "Asilado Político", condición que fue otorgada por el Gobierno Nacional desde el 8 de septiembre de 1975. No obstante, igualmente se observa a foja 131 del expediente administrativo, que el señor JOSÉ MORA SÁNCHEZ adquirió la nacionalidad panameña por naturalización a partir de enero de 1992, según certificación hecha por el Director General del Registro Civil.

De la lectura de la Nota N° 178694-DNP-S- de T de 1° de junio de 1994 y su acto confirmatorio, claramente se infiere que el fundamento utilizado para el desconocimiento de los derechos que solicita el señor Mora, es su calidad de "extranjero" antes del mes de enero de 1992 y, para efectos del caso que nos ocupa, desde antes del 8 de junio de 1993, fecha en que inició labores en la Caja de Seguro Social, en su calidad de panameño naturalizado. En efecto, en los artículos 17 y 24 de la Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, por medio de la cual se aprobó la Convención y Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados, se prevé por un lado, que las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados en la fecha en que la Convención entre en vigor o que se cumplan con las condiciones antes citadas y, por el otro lado, se equipara el tratamiento de los refugiados con respecto a los nacionales en lo que concierne a remuneración, seguro social y los derechos adquiridos o en vías de adquisición.

No obstante, si bien es cierto que los artículos antes mencionados protegen y conceden una serie de derechos a los refugiados dentro de los países signatarios de la Convención y Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados, no es menos cierto que igualmente se contempla en el numeral 3 y 5 de la Sección C del artículo I, que dicha convención cesará de ser aplicable a toda persona que haya adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nacionalidad, y, si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad respectivamente. En ese sentido, se observa por un lado, que el señor Mora adquirió la nacionalidad panameña tal como antes señalamos, y, por otro lado consta a fojas 116 y 117 del expediente, la Resolución N° 1053 de 30 de marzo de 1995 donde se señala que la Comisión Nacional para la atención de los Refugiados resuelve aplicar las Cláusulas de Cesación, contenidas en el párrafo I al 5 de la Sección C del Artículo 1 de la Convención de 1951, Ley N° 5 de 26 de octubre de 1977, a los Refugiados de nacionalidad chilena que se encuentran formalmente bajo la responsabilidad de dicho organismo, toda vez, que en Chile se han dado muestras que confirman el establecimiento de las instituciones democráticas. Se desestiman estos cargos por no ser aplicables a la pretensión del actor.

Finalmente, en cuanto a la violación al artículo 28-A de Ley 14 de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social, no coincide la Sala con los argumentos expuestos por el recurrente, dado que no se ha acusado de ilegal la Acción Personal N° 0177 de 7 de enero de 1991, que fue la que revocó su nombramiento, sino que se impugna la ilegalidad de la negativa al pago de sobresueldos en concepto de cambio de categorías no recibidos. Se desestima, pues, este último cargo.

En razón de lo antes expuesto, concluye la Sala que al acogerse el señor José Mora a la nacionalidad panameña y al decretarse la aplicación de las cláusulas de cesación de la convención contenida en la Ley N° 5 de 26 de febrero de 1977, por parte del Organismo Nacional Para La Atención de los Refugiados (O. N. P. A. R.) a los ciudadanos de nacionalidad chilena que se encuentran bajo su responsabilidad, resulta palmario que dicha ley en este caso no le es aplicable, por lo que lo procedente es, pues, declarar que el acto acusado no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota N° 1786-94-DNP-S de T de 1° de junio de 1991, emitida por la Dirección Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social como también lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARDS DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 76-95 DE 17 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El **licenciado Alberto Lázaro Ramos**, en representación de **LEEMAN EDWARDS DAVIS GRAHAM LEEMAN**, ha presentado demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **RESOLUCIÓN N° 76-95 de 17 de agosto de 1995**, dictada por la **COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4**, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 195 de 8 de mayo de 1996, que reposa a folios 68-71 del expediente, al notificarse de la Providencia calendada 11 de marzo de 1996, mediante la cual se admitió la presente demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma, argumentando básicamente que dicha demanda **no debió ser admitida** por razón de que la parte actora no ha cumplido con uno de los requisitos exigidos para la admisión de este tipo de demandas, establecidos en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, en especial el acápite cuarto, concerniente a la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación.

Al respecto, señaló la Procuradora de la Administración:

> "En este sentido, estimamos que la parte demandante no explicó en qué consistía el concepto de las violaciones aludidas, pues sólo se limitó a transcribir los artículos que supuestamente se estiman violados y enunciar las causas por las cuales se habían infringido, omitiendo indicar la forma en que fueron infringidas, conforme lo estipulado en el artículo 26 de la ley 135 de 1943, que a la letra expresa:
>
> `**ARTÍCULO 26:** Los motivos de ilegalidad comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben, cumplirse y la desviación de poder'".

Encontrándose el proceso en estado de resolver, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a externar las siguientes consideraciones:

Estima esta Superioridad que efectivamente el recurrente no individualizó el cargo de violación endilgado al acto impugnado, es decir, no precisó el concepto de la infracción.

Hay que apuntar que en reiteradas ocasiones esta Sala ha sido constante en señalar que este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa a fin de que la misma permita analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad debidamente invocados por el actor, ya sea por infracción literal de los preceptos legales en cualquiera de sus modalidades; violación directa por comisión o por omisión, interpretación errónea, indebida aplicación de la Ley, la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario

o de la entidad que dictó el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades legales y la desviación de poder.

El incumplimiento de la anterior formalidad legal impide darle curso legal a la presente demanda, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, como también el hecho de que el demandante en lo concerniente a la designación de las partes y sus representantes no ha precisado en qué concepto interviene la Procuradora de la Administración, quien, por tratarse de una acción de Plena Jurisdicción, interviene en defensa del acto acusado, de conformidad con lo establecido en el artículo 348, ordinal 2 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia fechada 11 de marzo de 1996, NO ADMITEN la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Alberto Lázaro Ramos, en representación de LEEMAN EDWARDS DAVIS GRAHAM LEEMAN.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AGAPITO GUERRERO VEGA. EN REPRESENTACIÓN DE REGINO RESURA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 010 DE 19 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Agapito Guerrero Vega, actuando en nombre y representación de Regino Segura, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 010 de 19 de enero de 1996, emitida por la Gerente General de la Zona Libre de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

Antes de admitir la demanda, la Sustanciadora procede a estudiar la presente demanda, a fin de comprobar si la misma cumple con los requisitos de Ley para su presentación.

Mediante la Resolución de Gerencia impugnada, N° 010 de 19 de enero de 1996, se destituyó al señor Regino Segura, del cargo de Agente de Seguridad de la Zona Libre de Colón. El día 30 de enero de 1996, el señor Regino Segura presentó recurso de reconsideración y apelación en subsidio. La reconsideración fue resuelta por medio de la Resolución N° 20-96 de 29 de febrero de 1996, notificada personalmente a Regino Segura el 22 de marzo del año en curso y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue presentada el día 29 de mayo de 1996. El recurso de apelación se concedió pero no hay constancia en autos de que este haya sido sustentado y resuelto.

Como la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción prescribe en dos meses a partir de la notificación del acto impugnado o el acto confirmatorio tal como lo establece el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, debe concluirse, que cuando se ejerció, la misma estaba prescrita.

Ante esta realidad la demanda no debe admitirse porque la prescripción extingue la acción y la vigencia de ésta es uno de los requisitos para darle curso la demanda tal como lo ordena el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Agapito Guerrero Vega, en representación de Regino Segura, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 010 de 19 de enero de 1996, dictada por el Gerente General de la Zona Libre de Colón, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BENEDETTI Y BENEDITTI, EN REPRESENTACIÓN DE ASICS CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 231 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Benedetti y Benedetti, actuando en nombre y representación de **ASICS CORPORATION.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 231 de 15 de diciembre de 1992, emitida por la Dirección General de Comercio Interior, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La resolución impugnada resuelve **NEGAR** la demanda de oposición propuesta por la sociedad **ASICS CORPORATION**, propietaria de la marca de fábrica **TIGER** y **ASICS TIGER**, contra la solicitud de Registro de la marca de fábrica **SPORTING TIGER**, N° 052579, de propiedad de **INDUSTRIAS DE CALZADO PANAMÁ, S. A.**, y **ORDENA** se continúen los trámites de registro de la marca de fábrica **SPORTING TIGER.**

Admitida la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración, y se le solicitó a la funcionaria demandada que rindiera el informe explicativo de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

En su informe de conducta la Directora General de Comercio Interior expuso lo siguiente:

"...

A. La titularidad que la parte demandante ASICS CORPORATION tiene sobre las marcas de Fábrica TIGER y ASICS TIGER, recae exclusivamente sobre las citadas marcas y la misma no puede ser extensible a ninguna otra combinación de palabras que contengan y/o incluyan la palabra TIGER, es decir, que la misma no debe alcanzar otra combinación de palabras que impliquen y/o contengan la palabra TIGER, que traducida al idioma Español, no significa otra cosa que TIGRE, pues, de ser así, con el solo registro de aquellas marcas, es decir: TIGER y/o ASICS TIGER, la parte actora se convertiría virtualmente en dueña exclusiva de la gama variada y heterogénea de marcas que podrán resultar de la combinación y/o combinaciones de la palabra TIGER con cualesquiera otras.

B. Sumado a lo anterior, esta Dirección General de Comercio e Industrias consideró que no generan confusión en el público consumidor las marcas de fábrica en pugna, pues las mismas tienen elementos diferenciadores que las distinguen más de otras, como

marcas compuestas que son.

> En tal sentido, tómese en cuenta, por ejemplo, que nuestra máxima corporación de justicia, en distintos fallos, que ha proferido ha sentenciado que marcas como "POND'S" y RESPON", "FÓRMICA" y "LAMICA", "PACO RÍO" y "PACO RABANNE", "MAGIC" y "MAGIC GIRL" y otras similares que no es del caso mencionar pueden coexistir en el mercado en virtud de que poseen un elemento diferenciador que las distingue entre sí". (Fs. 79-80).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte demandante estima violados, por los actos administrativos impugnados, el artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo, el artículo 14 literal f) del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, y los artículos 1 y 7 de la Ley 64 de 1934 mediante la cual se aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

El recurrente señala como infringido en forma directa el artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 2014: Es prohibido hacer uso en las marcas de fábrica o de comercio de lo siguiente:
> ...
> 2. De marcas idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando se pretenda amparar con ellas productos u objetos protegidas por éstas".

El demandante explica el concepto de la violación del precitado artículo manifestando que, entre ambas marcas de fábrica "existe gran semejanza, toda vez que entre estas marcas el elemento preponderante es la palabra **TIGER**, la cual en la marca opuesta, únicamente se encuentra acompañada por el adjetivo calificativo **SPORTING**, el cual es un término genérico".(fs. 36) Por lo tanto, al encontrarse la marca **SPORTING TIGER** solamente constituida por la palabra **TIGER**, ya que la misma está simplemente acompañada del adjetivo calificativo **SPORTING**, el cual solo destaca el carácter deportivo de la línea **TIGER**, se está tratando de habilitar el uso de una marca de fábrica engañosamente similar a dos marcas legalmente registradas, protegidas y usadas, por su real propietaria la sociedad **ASICS CORPORATION.**

El demandante estima también como violado por los actos administrativos impugnados, el artículo 14 numeral f) del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, cuyoenor literal es el siguiente:

> "Artículo 14: No podrán registrarse Marcas de Fábrica que se encuentren en los casos siguientes:
> ...
> f) Las Marcas de Fábrica que sean semejantes o parecidas a otra marca ya registrada o usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales, similares o de las mismas propiedades de los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o similitud de unas marcas y otras sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños respecto a la clase, la calidad, la edad, la procedencia o la naturaleza del artículo, y ..."

El demandante fundamenta el concepto de la infracción alegando que la Marca de Fábrica **SPORTING TIGER**, solicitada por la sociedad **INDUSTRIAS DE CALZADO PANAMÁ, S. A.**, resulta ser engañosamente similar a las marcas de fábrica **TIGER** y **ASICS TIGER**, lo cual aunadado a que todas estas marcas están destinadas a amparar los mismos productos, el permitir el registro de la marca de fábrica **SPORTING TIGER** viola en forma directa el precitado artículo.

Como últimas normas infringidas, señala el actor los artículos 1 y 7 del Convención General interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención

de Washington de 1929) cuyo tenor literal transcribimos a continuación:

> "Artículo 1: Los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a las marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos".
>
> Artículo 7: Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancía a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancía de la misma clase; y en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención".

Con relación a la violación del artículo 1 de la Convención de 1929, el recurrente señala en su demanda que "aún cuando las Resoluciones impugnadas en el presente Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, reconocen que la protección brindada por la Convención de Washington de 1929, es aplicable al presente caso, no le dan protección a las marcas de fábrica registradas **TIGER** y **ASICS TIGER**, de propiedad de la sociedad demandante, **ASICS CORPORATION**, pues permiten el registro de una marca engañosamente similar **SPORTING TIGER**, a las anteriormente protegidas y usadas por nuestra representada, la sociedad demandante **ASICS CORPORATION**, para amparar los mismos productos, hecho expresamente prohibido por la mencionada Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington de 1929), aprobada por Panamá mediante Ley N° 64 de 28 de diciembre de 1934" (fs. 42).

Por último, con relación al artículo 7 ibídem, el recurrente señala que la violación del precitado artículo se da, por falta de aplicación, porque se está permitiendo el registro de una marca engañosamente similar a otras marcas anteriormente registradas en estados signatarios de la Convención de Washington de 1929, para amparar los mismos productos, como es el caso de la sociedad **ASICS CORPORATION**, la cual tiene inscrita en varios países signatarios de la citada Convención su marca de fábrica **TIGER** y **ASICS TIGER**.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El entonces señor Procurador, Licenciado Donatilo Ballesteros, por su parte, al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal N° 219 de 16 de mayo de 1994, manifestó que es fundada la pretensión del demandante, por lo que solicitó se haga las declaraciones solicitadas por la parte actora, con fundamento en las razones a las cuales más adelante nos referiremos.

DECISIÓN DE LA SALA

Con relación a la violación del artículo 1 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington de

1929), la Sala considera que le asiste razón al demandante al señalar que los Estados contratantes de la citada convención tienen la obligación de proteger a los legítimos dueños de sus derechos de propiedad industrial, de terceros que pretendan usurpar sus derechos sobre una marca de fábrica, como es el caso que nos ocupa. Cabe señalar que la sociedad ASICS CORPORATION, ha probado tener establecimiento comercial en un país signatario de la convención (Cfr. foja 221 vta. del expediente administrativo) y mediante certificados de registro de otros países, ser la propietaria de las marcas de fábrica TIGER y ASICS TIGER, y que las mismas están registradas en países signatarios de la Convención de Washington de 1929, aprobada por Panamá mediante Ley 64 de 1934. Ahora bien, está norma fue aplicada al emitir el acto administrativo impugnado y por ello debe desestimarse este cargo.

El demandante señala infringido el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria (Convención de Washington de 1929). Sobre el particular, debemos señalar, que compartimos el criterio del demandante al señalar que sus marcas están protegidas por estar registradas en uno de los Estados contratantes de la citada convención aprobada por Panamá, en el cual tiene un establecimiento comercial. También ha probado que continúa usando estas marcas y aplicándolas a productos deportivos de la Clase 25. Por lo tanto, sus marcas de fábrica deben prevalecer sobre cualquiera otra que se pretenda registrar, que por su semejanza pueda provocar en el público consumidor errores, confusiones o equivocaciones.

Reposan en el expediente administrativo documentos que prueban que Industrias de Calzado Panamá, S. A. tenía conocimiento de la existencia de la marca TIGER antes del 23 de marzo de 1990, fecha en que presentó su solicitud de registro de la marca SPORTING TIGER. Ello es así porque Asics Corporation solicitó en el año 1987, que se cancelara el Certificado de Registro N° 24673 de 28 de marzo de 1980 que contiene la marca de fábrica TIGER, registrada por Industrias de Calzado Panamá, S. A. (Cfr. foja 358 y sig. del expediente administrativo) certificado que caducó según informó, a petición de la Sala la Directora General del registro de Propiedad Industrial (Cfr. foja 165 del proceso). En aquella ocasión el registro de esta marca no se canceló en vista de que ASICS CORPORATION no probó haber usado y comercializado la marca en Panamá, requisito necesario para obtener la cancelación pedida de conformidad con el artículo 8 de la Ley 63 de 1934 (Cfr. fojas 358 y siguientes del expediente administrativo).

En el caso en estudio ASICS CORPORATION se opone a la inscripción de la marca SPORTING TIGER con fundamento en el artículo 7 de la citada Ley 63 de 1934, que en lo pertinente preceptúa:

> "Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancía a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancía de la misma clase;"

Cuando ASICS CORPORATION presenta su oposición la marca TIGER registrada por bajo el Certificado de Registro N° 24673 había caducado según informa la Directora General del Registro de la Propiedad Industrial, en documento fechado el 22 de noviembre de 1995 que reposa a foja 165 del proceso. Expresa en ese instrumento la señora Directora:

> "6. El expediente que contiene la marca de fábrica TIGER, Certificado de Registro N° 24673 de 28 de marzo de 1980, fue

caducado y el expediente no se encuentra."

Como se ha probado en autos que ASICS CORPORATION es propietaria de las Marcas de Fábrica TIGER y ASICS TIGER y que como tal tiene derecho a la protección legal de esas marcas y además que reúne los requisitos señalados en el artículo 7 de la Ley 63 de 1934 para oponerse a la inscripción de la marca SPORTING TIGER, la Sala debe proceder a determinar si la marca que Industrias del Calzado, S. A. pretende registrar (**SPORTING TIGER**) es semejante o parecida las marcas TIGER y ASICS TIGER ya registradas por la sociedad **ASICS CORPORATION**, marca todas solicitadas para amparar productos de propiedades similares, de la Clase 25, y en caso afirmativo establecer si esas semejanza o parecidos son susceptibles de provocar errores, confusiones, equivocaciones o engaños en el público consumidor, todo con el fin de establecer si la resolución impugnada es violatoria del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria, del artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo y el artículo 14 literal f) del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, que prohíben el uso y registro de marcas parecidas a las ya usadas o registradas en un país signatario de la citada Convención.

A este respecto la Sala comparte el criterio del señor Procurador, quien en su Vista Fiscal afirma que las citadas marcas "poseen en común la palabra TIGER, que es un sustantivo común" y lo que distingue las marcas inscritas (TIGER y ASICS TIGER) de la marca que se pretende inscribir (SPORTING TIGER) es un adjetivo calificativo que acompaña al nombre para expresar una cualidad de los productos que pretende amparar la marca, productos que son de la misma clase 25 que amparan las marcas TIGER y ASICS TIGER.

El señor Procurador cita a Jorge Otanendi quien su obra sobre el Derecho de Marcas, en relación con la inscripción de adjetivos calificativos como marcas, se expresa en los siguientes términos:

> "La cuestión se complica cuando lo que se quiere registrar es un adjetivo calificativo que además es apto para calificar no sólo el producto o servicio a distinguir, sino también muchos otros.
>
> La Corte Suprema de Justicia admitió el registro de los adjetivos calificativos declarándolo con relación a 'Selecta', cuando éstos no tengan 'Relación necesaria con los productos a que se pretende aplicar, ni indica su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos.
>
> Años después este mismo Tribunal, basándose en el principio establecido con 'Selecta', declaró irregistrable 'Sabrositas' para distinguir galletitas.
>
> Los adjetivos calificativos son registrables 'cuando no presentan una relación estrecha con uno o determinados productos y se aplican, en cambio, a casi todos los que se encuentran en el comercio y aun a cosas del espíritu, como ha ocurrido al concederse las marcas 'Calidad?', 'Predilecta', 'Entero' y 'Entera'. Así se declararon registrables 'Eterno' para esmaltes, 'Gran Linaje' para bebidas, 'Dignos' y 'Traslucido' para artículos de perfumería y tocador, 'Campeón' para productos de agricultura. Y se declararon irregistrables 'Lentesuave' para lentes de contacto; 'Perfecta' y 'Formidable' para máquinas y otros artículos de la vieja clase". (Abeledo-Perrot, S. A., Buenos Aires, 1989, págs. 71 a 73).

El adjetivo sporting (deportivo) sirve para calificar no sólo los productos de la clase 25 sino muchos otros productos y además tiene relación directa con estos productos que son **"Vestidos con inclusión de zapatos, zapatillas y Calzados para Hombres, Mujeres y niños"**.

Lo único que diferencia la marca de fábrica **SPORTING TIGER** cuyo registro ha solicitado INDUSTRIAS DEL CALZADO, S. A., de la marca **TIGER** y **ASICS TIGER**, es

que se le agrega al sustantivo TIGER el adjetivo calificativo SPORTING, que está íntimamente relacionado con los productos que amparan las marcas TIGER y ASICS TIGER, que son precisamente zapatos y ropa deportiva, tal como puede apreciarse en las revistas y documentos que reposan de fojas 202 a 349 del expediente administrativo. Por tanto la marca SPORTING TIGER crearía confusiones y errores en el público consumidor de coexistir ambas marcas en el mercado.

En el caso en estudio, no cabe duda de que al usar la marca de fábrica SPORTING TIGER para proteger productos deportivos similares, tales como "vestidos con inclusión de zapatos, zapatillas y calzados para hombres, mujeres y niños" deportivos, que son las amparadas por las marcas de fábrica **ASICS TIGER** y **TIGER** propiedad de la sociedad demandante, se produciría confusión y errores en los consumidores. Por lo tanto, como el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria aprobada por la Ley 64 de 1934, aplicable en este caso, da derecho a ASICS CORPORATION a oponerse al registro de una marca sustancialmente igual a la suya, siempre y cuando se demuestre que quien pretende inscribir la marca similar conocía de la existencia de la marca de quien se opone y que la marca del opositor continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; el artículo 14 numeral f) del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939 no permite el registro de marcas semejantes o parecidas a otra marca registrada o usada por otra persona para distinguir productos iguales, similares o de las mismas propiedades; y el artículo 2014 numeral 2 del Código Administrativo prohíbe hacer uso de marcas de fábrica o de comercio idénticas o sustancialmente parecidas a las ya registradas para amparar los mismos o similares productos, estos artículos han sido infringidos, a juicio de la Sala, por la resolución impugnada.

No debe entenderse que por haber registrado las marcas TIGER y ASICS TIGER, ASICS CORPORATION se convierte, tal como lo afirma la funcionaria demandada, "virtualmente en dueña exclusiva de la gama variada y heterogénea de marcas que podrán resultar de la combinación y/o combinaciones de la palabra TIGER con cualesquiera otras". La presente decisión se toma porque la palabra añadida a la marca TIGER es un adjetivo que califica los productos de la Clase 25 que pretende amparar como deportivos y las marcas ASICS TIGER y TIGER amparan precisamente productos deportivos de la Clase 25, tal como consta en la propaganda de estos productos publicada en las revistas y otros documentos que reposan en el expediente.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON NULAS POR ILEGALES la Resolución N° 231 de 15 de diciembre de 1992, dictada por la Dirección General de Comercio Interior y la Resolución N° 83 a) de 16 de septiembre de 1993 proferida por el señor Ministro de Comercio e Industrias; y ORDENA a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial que niegue la solicitud de registro de la Marca de Fábrica SPORTING TIGER distinguida con el N° 052579, presentada por la sociedad INDUSTRIAS DEL CALZADO, S. A., para amparar y distinguir en el comercio la fabricación y venta de productos comprendidos en la clase Internacional 25.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE GERRYS CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 10-91 DE 11 DE ABRIL DE 1991, DICTADA POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Shirley y Díaz, actuando en nombre y representación de la sociedad **GERRYS CORPORATION**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 10-91 de 11 de abril de 1991, dictada por el Comité Ejecutivo de la Zona Libre de Colón.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 103 de 1 de marzo de 1993, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 133-146); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 65-67).

La parte actora solicita además, que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 10-91 de 11 de abril de 1991, no se suscriba un nuevo contrato de arrendamiento con la empresa **GERRYS CORPORATION** ni addenda alguna, toda vez que legalmente está vigente el contrato de arrendamiento del local N° 2080 de 28 de marzo de 1985; que se declare que la empresa **GERRYS CORPORATION** tiene derecho al uso y disfrute de la totalidad de los 63 m2, conforme al contrato de arrendamiento de 28 de marzo de 1985, incluyendo la planta baja y el espacio aéreo sobre el local N° 1-B del Edificio N° 25 del área comercial de la Zona Libre de Colón; y que se ordene al Gerente General de la Zona Libre de Colón, dar cumplimiento a la Resolución N° 4 de 13 de agosto de 1990.

Por medio del acto impugnado, Resolución N° 10-91 de 11 de abril de 1991, se revocó en todas sus partes la Resolución N° 4 de 13 de agosto de 1990 y se resolvió lo siguiente:

> "SEGUNDO: PROCEDER a la celebración de ADDENDAS entre las partes, a fin de corregir en los contratos de arrendamiento respectivos, el área de alquiler con el metraje realmente utilizado por cada empresa, a saber:
>
> Con Jupa Internacional, S. A. la cantidad total de ciento veintiocho metros cuadrados (128 mts2) a razón de 75.84 mts2 de planta baja y 52.66 mts2 de mezzanine sobre Gerry s Corporation.
>
> Con Gerry s Corporation la cantidad total de cincuenta y dos punto sesenta y seis metros cuadrados (52.66 mts2).
>
> Procediendo al cobro en base a la tarifa vigente de B/.2.40 el metro cuadrado mensual, a partir del 1° de mayo de 1991.
>
> TERCERO: PROCEDER al crédito en favor de GERRY S CORPORATION por la suma de MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 86/100 BALBOAS (B/.1,811.86) según se contempla en la parte motiva de esta resolución, aplicado sobre los alquileres futuros a partir del 1° de mayo de 1991.
>
> CUARTO: PROCEDER al cobro sobre la empresa JUPA INTERNACIONAL, S. A. de la suma de MIL CIENTO CUATRO CON 55/100 BALBOAS (B/.1,104.55) según lo contemplado en la parte motiva de esta resolución."

Alega la parte actora, que **GERRYS CORPORATION** celebró con la Zona Libre de Colón el contrato de arrendamiento N° 2080 de 28 de marzo de 1985, del local 1-B del edificio 25, sobre un área de 63 m2, por una tarifa mensual de B/.2.00 por metro cuadrado equivalente a B/.126.00; que antes de este contrato ocupó el mismo local la empresa Sigloventex Latin America-Dae Woo, quien construyó sobre su espacio aéreo un mezzanine que disfrutó hasta la expiración de su contrato; que en el año de 1985 el señor Orlando Parra, representante de Jupa Internacional, S. A. y arrendatario del local contigüo a **GERRYS CORPORATION**, tumbó la pared de madera divisoria que separaba ambos locales, usufructuando parte del local de **GERRYS CORPORATION**; que Jupa Internacional, S. A. ha pagado regularmente como si

estuviera ocupando 63 m2 cuando en realidad ocupa 75.84 m2 en planta baja y 128 m2 en área de mezzanine, mientras **GERRYS CORPORATION** ha pagado por 63 m2 y sólo ocupa 52.66 m2; que la Zona Libre de Colón aceptó que existe plena prueba de que la estructura del mezzanine sobre el local de **GERRYS CORPORATION** ocasiona perjuicios por las filtraciones líquidas portadoras de óxido, que deterioran y destruyen el cielo raso suspendido y la fachada del local, además de los sonidos y movimientos de mercancías provenientes del mezzanine; y que la resolución del Comité Ejecutivo patrocina la usurpación y deja de aplicar las normas sobre saneamiento, propia de los contratos de arrendamiento. (Fs. 30-35).

DISPOSICIONES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y
EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El demandante estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos XL literal c) y XLI del Decreto Ley N° 18 de 17 de junio de 1948, Ley Orgánica de la Zona Libre de Colón; XXVII, XXXVIII y XLV del Decreto N° 428 de 7 de septiembre de 1953 "por el cual se dictan disposiciones encaminadas a asegurar la vigilancia de la entrada y salida de mercaderías en la Zona Libre de Colón a fin de evitar y reprimir el contrabando y toda defraudación fiscal"; 55 del Código Fiscal; y 1244 y 1306 del Código Civil, cuyo texto transcribimos a continuación:

DECRETO LEY 18 DE 1948.

"ARTÍCULO XL: En las áreas de comercio internacional libre, la Zona Libre de Colón podrá realizar las siguientes operaciones, transacciones, negociaciones y actividades:
...
c) Construir edificios para oficinas, fábricas, almacenes, depósitos o talleres para uso propio de la Zona Libre de Colón o para arrendarlas a las personas naturales o jurídicas a que se refiere el ordinal b) que antecede.

ARTÍCULO XLI: Todas las mercaderías y demás artículos o efectos de comercio que entren a las áreas de comercio libre que posea u opere la Zona Libre de Colón, estarán exentos, en todo momento, del pago de impuestos, gravámenes y demás contribuciones fiscales, nacionales, provinciales, o de cualquier otro orden, inclusive derechos consulares o de cualquier otra denominación, tanto por la introducción de los mismos en dichas áreas, como por su permanencia dentro de las mismas áreas, salvo el pago de arrendamiento de locales o de servicios de almacenaje, custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten dentro de las áreas de comercio libre, de acuerdo con los reglamentos y tarifas que expidan la Zona Libre de Colón con la aprobación del Órgano Ejecutivo."

DECRETO 428 DE 1953.

"ARTÍCULO XXVII: Las casas que se establezcan en el área segregada, gozarán de todas las prerrogativas y facilidades que señalan las leyes y reglamentos respectivos, pero están sujetos a la supervisión de la Gerencia de la Zona Libre en lo que se refiere a seguridad, higiene y sanidad, conservación, etc. La Aduana mantendrá vigilancia en el manejo, empaque, purificación, refinamiento, etc. de mercancías, con la finalidad expresa de determinar la liquidación de las obligaciones fiscales que se deriven de la mezcla etc. de materias primas nacionales y extranjeras que causen derechos de importación y/o exportación.
...
ARTÍCULO XXXVIII: Para los efectos del orden público, las áreas segregadas de la Zona Libre están bajo la jurisdicción absoluta de las leyes y reglamentos de la República de Panamá.

Los infractores de dichas leyes que sean sorprendidos dentro del área segregada, serán puestos a órdenes de las autoridades

competentes y la Zona Libre cooperará con las autoridades para que los culpables sean debidamente sancionados.
...
ARTÍCULO XLV: Los que subarrienden depósitos o locales sin previa autorización de la Gerencia, se harán acreedores a la cancelación de su propio contrato de arrendamiento con la Zona Libre."

CÓDIGO FISCAL.

"Artículo 55: Las entidades públicas podrán incluir en los contratos que celebren los pactos, cláusulas o condiciones usuales, dependiendo de la naturaleza del contrato de que se trate y aquellas otras que consideren conveniente, siempre que no se opongan al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de eficacia administrativa, sin perjuicio de los privilegios y prerrogativas de la entidad pública cuando se trate de contratos administrativos o, en general aquellos en que se haya pactado la resolución administrativa del contrato, con sujeción del artículo 68, la que no podrá ser objeto de limitación, negociación o renuncia por la entidad pública. Cualquier condición contraria a esta disposición será nula de pleno derecho. ..."

CÓDIGO CIVIL.

"Artículo 1244: En virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1231, el vendedor responderá al comprador:

1) De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida. ...

Artículo 1306: El arrendador está obligado:
...
3) a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. ..."

En el concepto de la infracción de las normas del Decreto Ley N° 18 de 17 de junio de 1948 y del Decreto N° 428 de 7 de septiembre de 1953, el demandante indicó lo siguiente: que los contratos de arrendamientos suscritos con la Zona Libre de Colón le son aplicables las normas generales del contrato de arrendamiento, las normas fiscales y las normas que rigen para la Zona Libre; que Jupa Internacional, S. A. utiliza el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION** sin cumplir con el pago del arrendamiento que corresponde; que a pesar de que la Gerencia de la Zona Libre de Colón debe supervisar y mantener la vigilancia sobre sus áreas y que Jupa Internacional, S. A. no se ha sometido a lo que dictan las leyes sobre arrendamiento, la Administración ha convalidado un acto arbitrario y nulo; que los contratos que celebra la Zona Libre de Colón con los particulares, deben sujetarse a las leyes y reglamentos de la República y no al capricho de un funcionario determinado; y que Jupa Internacional, S. A. al usurpar el espacio aéreo de **GERRYS CORPORATION** ha violado la prohibición de subarrendar sin la previa autorización de la Gerencia.

En cuanto al cargo de violación del artículo 55 del Código Fiscal y las normas del Código Civil, alega el demandante que es ineficaz toda cláusula arbitraria, ajena a la moral y al interés público; que es obligación del arrendador mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo que dure el contrato; y que el arrendador está obligado al saneamiento de la cosa arrendada y responderá de la posesión legal y pacífica de la cosa arrendada.

OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

El señor Procurador de la Administración considera que no se han violado las normas comentadas, porque la Administración ha tratado de reconocer a cada una de las empresas sus justos derechos, procediendo a la celebración de addendas para ajustar las cláusulas contractuales al metraje realmente utilizado por cada empresa, reconociendo el crédito a favor de **GERRYS CORPORATION** y la deuda de Jupa

Internacional, S. A., por lo que no se ha causado perjuicio ni beneficio injusto a las partes; que conforme el artículo 976 del Código Civil las obligaciones emanadas de los contratos constituyen ley entre las partes, sin perjuicio de la potestad del Estado de variar y resolver unilateralmente los contratos administrativos, cuando el interés público así lo recomienda; que no se ha llegado a establecer que el espacio faltante de la empresa **GERRYS CORPORATION** sea exactamente el espacio sobrante de Jupa Internacional, S. A. y que la solución dada por el Comité Ejecutivo se fundamentó en la falta de espacio para ajustar los límites de los locales arrendados.

Agrega el señor Procurador de la Administración que la Administración de la Zona Libre de Colón puede variar las condiciones contractuales cuando el interés público así lo exige, y en este caso a su juicio la mejor forma de resolver el conflicto de límites existente entre las empresas **GERRYS CORPORATION** y Jupa Internacional, S. A. es ajustando los contratos de arrendamiento a las medidas reales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Mediante el Contrato de Arrendamiento N° 2080 de 28 de marzo de 1985, la Zona Libre de Colón le arrendó a la empresa **GERRYS CORPORATION** el local 1-B del Edificio 25, Área Comercial, con un área supuesta de 63 m2, a una tarifa mensual de alquiler de B/.2.00 el metro cuadrado, resultando un canon de arrendamiento de B/.126.00 (fs. 5-7).

Posteriormente, el 23 de septiembre de 1985, la Zona Libre de Colón suscribió un Contrato de Arrendamiento con la empresa Jupa Internacional, S. A., N° 2104, sobre el local 1-D del mismo Edificio, con una supuesta área de 63 m2 pero a un canon de arrendamiento de B/.166.25 (fs. 9-11). Este último contrato contiene un Otro sí constituido por la cláusula vigésima tercera en la cual se expresa que, "El área alquilada incluye el mezzanine construido por la empresa JUPA INTERNACIONAL, S. A., sobre el local arrendado y sobre el local ocupado por la firma GERRY S CORPORATION (antes SIGLOVEXTEX-DAE WOO)."

La demandante afirma, en primer lugar, que en el año de 1985 Jupa Internacional, S. A. movió la pared divisoria usurpando parte de su local, razón por la cual el área no corresponde al local supuestamente arrendado; y en segundo lugar alega que el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION** no pertenece a Jupa Internacional, S. A. porque pertenecía a la empresa Sigloventex Dae Woo, quien ocupaba el local 1-B antes que **GERRYS CORPORATION**.

En relación con la primera afirmación del demandante, aparecen de fojas 100 a 107, los planos con fecha de septiembre de 1986, autenticados por el Director Técnico de Operaciones de la Zona Libre de Colón, en los cuales consta que los locales 1-B, 1-D y 1-C arrendados a las empresas **GERRYS CORPORATION**, Jupa Internacional, S. A. e Importadora y Exportadora Chow, S. A. en su orden, tienen un área real de 52.85 m2, 76.0 m2 y 50.27 m2 respectivamente, mientras que los contratos de arrendamiento suscritos con estas empresas establecen que el área arrendada a cada una, es de 63 m2. (Fs. 5,9 y 93).

En cuanto a la historia de estos locales, según consta en el informe de conducta rendido por la autoridad demandada, estos locales habían sido subarrendados por una arrendataria y cuando la administración de la Zona Libre decidió la eliminación de los subarriendos, llamó a las empresas DAEWOO DE PANAMÁ, S. A., DEMPAC, S. A. e IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHOW para contratar directamente con ellas los locales 1-B con el contrato 357 de 15 de mayo de 1972 (fs. 1-4), 1-D con el contrato 431 de 1 de marzo de 1973 (fs. 76-79), cedido a Jupa Internacional, S. A. el 17 de mayo de 1973 y el local 1-C con el contrato 734 de 10 de abril de 1975 (fs. 86-87) respectivamente; y en ninguno de estos contratos se señaló el área arrendada. (Fs. 65-67).

Al subir la tasa de arrendamiento a B/.2.00 por metro cuadrado, Daewoo de Panamá, S. A. entregó el local 1-B a la administración y ésta suscribió el contrato N° 2080 de 28 de marzo de 1985 con **GERRYS CORPORATION** (fs. 5-7); igualmente se suscribieron los contratos N° 2026 de 20 de junio de 1984, sobre el

local 1-D, con la empresa Jupa Internacional, S. A. (fs. 89-91), el cual fue anulado mediante el contrato N° 2104 de 23 de septiembre de 1985 (fs. 9-11); y el N° 1989 de 4 de junio de 1984, sobre el local 1-C, con Importadora y Exportadora Chow, S. A. (fs. 93-95); en los cuales se establece como área arrendada a cada una de estas empresas, 63 m2.

En cuanto al mezzanine que reclama la empresa **GERRYS CORPORATION**, y que está construido sobre el local arrendado a esta empresa, observa esta Superioridad que en la segunda resolución dictada por la Zona Libre de Colón, N° 01-91 de 16 de enero de 1991, la administración señaló que es inusual que un mezzanine de propiedad de la institución, sea adjudicado a un local contigüo en vez de ser utilizado por el local sobre el cual está construido (fs. 16); también señaló, que lo básico en este conflicto era determinar si Jupa Internacional, S. A. construyó o no el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION**. En este sentido, la autoridad administrativa durante el curso de la investigación sobre el origen del mezzanine, afirmó lo siguiente:

1. Que Jupa Internacional, S. A. no aportó al ente administrativo prueba alguna que soporte la construcción del mezzanine que reclama, ni autorización por parte de la Zona Libre de Colón para dicha construcción, y que ninguno de los cinco testimonios presentados por Jupa Internacional, S. A., señaló que Jupa construyó dicho mezzanine, a pesar de que esta interrogante les fue expresamente planteada. (Fs. 17).

2. Que tampoco existe en los archivos de la institución, permiso otorgado a Jupa Internacional, S. A. para la construcción de este mezzanine. (Fs. 17).

3. Que la construcción del mezzanine sobre los locales en litigio se remonta a más de 20 años, y que dicho mezzanine **tal como lo acepta Jupa Internacional, S. A., en su escrito de reconsideración, no fue construido por ellos**, sino por una sociedad anterior que con la anuencia de la Zona Libre de Colón cedió sus derechos de arrendamiento a Jupa Internacional, S. A. (Fs. 17).

4. Que ha sido una práctica de las Administraciones anteriores de la Zona Libre de Colón, el no cobrar como área cerrada dentro de los locales por los cuales los usuarios pagan un canon de alquiler, el espacio que ha sido habilitado como mezzanine (fs. 18); y

5. Que conforme el Acta N° 21-90 de 8 de agosto de 1990, el Comité Ejecutivo de la Zona Libre de Colón llegó a la conclusión de que Jupa Internacional, S. A. debía reintegrar a **GERRYS CORPORATION** el mezzanine construido sobre el espacio de Gerrys Corporation, mismo que fue construido por la Cía. Dae Woo Internacional, S. A. (Fs. 22).

Una vez expuesto los hechos del caso, se procede a confrontar la Resolución N° 10-91 de 11 de abril 1991, que es el acto impugnado, con las normas señaladas como infringidas.

A juicio de la Sala, la decisión del Comité Ejecutivo de la Zona Libre de Colón no viola el artículo XL literal c) del Decreto Ley N° 18 de 1948, porque no se discute en este caso sobre la potestad de la Zona Libre de Colón para arrendar sus edificios; y tampoco se ha violado el artículo XLI el cual se refiere a la exención del pago de impuestos dentro de la Zona Libre de Colón.

En cuanto a las normas del Decreto N° 428 de 1953, que el actor estima infringidas, considera la Sala, que no se ha violado el artículo XXVII, porque el mismo consagra obligaciones para la Aduana y la Gerencia de la Zona Libre de Colón, refiriéndose a situaciones no aplicables al caso que nos ocupa; que el artículo XXXVIII no es aplicable al caso, pues es una norma de carácter general que dispone, que a pesar de ser una zona franca, a los efectos del orden público es un área sujeta a la jurisdicción de las leyes de la República; y que tampoco se ha violado el artículo XLV porque no se trata de un caso de subarrendamiento.

Al resolver sobre la violación de los artículos 1244 y 1306 del Código Civil y el artículo 55 del Código Fiscal, observa la Sala que, entre las

cláusulas del contrato de arrendamiento suscrito con **GERRYS CORPORATION**, la octava establece que "La Arrendataria hace constar que **conoce** las condiciones del local arrendado y que **lo recibe** a su entera satisfacción." Por tanto, al suscribir dicho contrato, la empresa **GERRYS CORPORATION** aceptó el local en las condiciones en que se encontraba a la fecha de la suscripción, marzo de 1985, o sea el área de la planta baja con su mezzanine. Esto es así, en virtud de las siguientes consideraciones.

Conforme a los autos del proceso no se ha logrado establecer plenamente, quién construyó el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION**, aunque es un hecho que este mezzanine no lo construyó la empresa Jupa Internacional, S. A. (fs. 18). Sin embargo, los contratos de arrendamiento suscritos con la Zona Libre de Colón establecen que no se puede hacer mejoras de ninguna clase, ni adiciones ni cambios en la estructura del edificio o dentro de él sin la aprobación **previa y escrita** de la Zona Libre de Colón (fs. 6); que en los casos en que se hagan mejoras sin la autorización exigida, la arrendataria debe pagar una multa equivalente al 15% del valor de la mejora; **y que dichas mejoras pasan siempre a ser propiedad de la Zona Libre de Colón al finalizar el contrato, sin lugar a indemnización a favor de la arrendataria.**

De las pruebas recabadas en este proceso, podemos inferir además, que aunque la arrendadora no sabe quién construyó el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION**, al momento de suscribir el contrato de arrendamiento N° 2080 de 28 de marzo de 1985, éste ya estaba construido. Por tanto, una vez terminó el contrato de arrendamiento N° 357 de 16 de mayo de 1972, suscrito con la empresa Daewoo de Panamá, S. A., quien ocupaba antes el local 1-B, esta mejora pasó a ser propiedad de la Zona Libre de Colón, conforme a la cláusula décima del contrato (fs. 6), que establece que las mejoras que construyen los arrendatarios en los locales alquilados pasan a ser propiedad de la arrendadora. Y al suscribir el contrato de arrendamiento N° 2080 de 1985 con **GERRYS CORPORATION**, el mezzanine era parte del local 1-B, y no fue excluido del mismo.

Afirma la demandante, que no fue hasta el 30 de julio de 1985, día en que empezó a remodelar el local arrendado, que se percató de que la empresa contigua se había apoderado físicamente del área del mezzanine (fs. 172), denunciando este hecho a las autoridades de la Zona Libre de Colón desde el 1 de agosto de 1985, tal como consta de fojas 151 a 181. Consta en autos que el 28 de enero de 1987, el Gerente General de la Zona Libre de Colón, mediante la nota REF. DAL-G-G-01-066, le ordenó a Jupa Internacional, S. A. desocupar el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION** por razones de seguridad (fs. 160-161).

Jupa Internacional, S. A., celebró el contrato de arrendamiento N° 2104, en el cual se incluyó como parte del área arrendada el mezzanine construido en el local de **GERRYS CORPORATION**, el 23 de septiembre de 1985, después que esta empresa suscribió su contrato N° 2080 y que reclamó el uso del mezzanine. En esta fecha el contrato suscrito con Jupa Internacional, S. A., sólo podía incluir como parte del local arrendado, el mezzanine construido sobre su el local 1-D. Además, aún cuando consta en autos que antes Jupa Internacional, S. A., había celebrado otros contratos de arrendamiento, es en este último que se incluye como área arrendada el mezzanine construido sobre **GERRYS CORPORATION**, mediante un otro sí que le agrega la cláusula vigésima tercera, y como ya se ha expresado, en esa fecha, ya **GERRYS CORPORATION** había recibido en arrendamiento el local 1-B en el que existía un mezzanine construido por otro arrendatario, y que por haberlo convenido en el contrato con él celebrado, había pasado a ser propiedad de la Zona Libre de Colón.

Adicionalmente, la administración reconoció como probado en la Resolución N° 4 de 13 de agosto de 1990, que la estructura del mezzanine sobre el local de **GERRYS CORPORATION** ocasiona perjuicios de filtraciones líquidas portadoras de óxido, que deterioran y destruyen el cielo raso suspendido, y con ello la fachada del local, además de los sonidos y movimiento de mercancía proveniente del mezzanine que son perceptibles en la planta baja que ocupa **GERRYS CORPORATION** (fs. 16).

En virtud de todo lo expuesto, la Sala considera que la resolución impugna-

da viola los artículos 1244 y 1306 del Código Civil, que obligan a la arrendadora a mantener a la arrendataria **GERRYS CORPORATION**, en el goce pacífico del local 1-B y del mezzanine allí construido, toda vez que independientemente de quién lo haya construido es de su propiedad (de acuerdo con los contratos de arrendamiento celebrados). El artículo 1244 regula el saneamiento en el contrato de compraventa, pero es aplicable al contrato de arrendamiento, de conformidad con el artículo 1305 del Código Civil.

A juicio de la Sala, el acto impugnado también viola el artículo 55 del Código Fiscal, ya que, si bien las entidades públicas pueden incluir en los contratos que celebren los pactos, cláusulas o condiciones usuales que consideren convenientes y dependiendo de la naturaleza del contrato, la Zona Libre de Colón le reconoció valor mediante la resolución impugnada a la cláusula vigésima tercera del contrato N° 2104 celebrado con Jupa Internacional, S. A., mediante la cual se le da en arrendamiento el mezzanine construido en el local que ya había sido arrendado a **GERRYS CORPORATION**, violando flagrantemente los artículos 1244 y 1306 del Código Civil, que exigen que el arrendador garantice al arrendatario el goce pacífico del arrendamiento.

Cabe observar, que los testimonios prejudiciales aportados por el apoderado de Jupa Internacional, S. A., de los señores Rosario de Gutiérrez, Manuel Cabrera, Luz Esther Sucre, todos trabajadores de Dae Woo; Antonio Calcaño trabajador en una empresa subsidiaria de Dae Woo; y Elías Lowinger, quienes afirman que el mezzanine sobre **GERRYS CORPORATION** siempre perteneció a Jupa Internacional, S. A. y que el mismo nunca tuvo entrada por la empresa Dae Woo (fs. 96-99), carecen de valor probatorio porque no han sido ratificados según lo preceptuado en los artículos 818 y 910 del Código Judicial, que exigen que los testimonios prejudiciales sean rendidos ante el juez competente de conocer la pretensión, o de lo contrario, si las declaraciones son recibidas fuera de proceso, o ante otra autoridad, como es el caso que nos ocupa, los testigos deben ser ratificados y al hacerlo deben repetir los hechos declarados, sin limitarse a decir que se afirman o ratifican y no tienen nada que añadir, y esta diligencia de ratificación no se practicó. (Fs. 230).

En cuanto a la pared medianera que separa los locales 1-B y 1-D del Edificio 25, y que **GERRYS CORPORATION** afirma que fue removida por Jupa Internacional, S. A. y que es la causa de que actualmente el área del local arrendado no corresponda a los 63 m2 que especifica el contrato, observa la Sala que este hecho no ha sido probado.

El apoderado de la parte actora aportó entre sus pruebas, la declaración notarial jurada de 25 de octubre de 1990, del señor Ramón Jaén Valdés, quien declaró que en el año 1985 cuando trabajaba con el señor Parra en Jupa Internacional, S. A., le "mandó a desmantelar el local DAWOO PANAMÁ, S. A., ... el local de DAWOO PANAMÁ, S. A., estaba cerrado y el señor PARRA tenía llaves de dicho local, me llevé las lámparas, playwood y había una pared y también la tumbamos; para agrandar a JUPA INTERNACIONAL, S. A., ..." (fs. 178-179); no obstante, este testimonio no fue ratificado en la forma señalada en el artículo 910 del Código Judicial, y por tanto carece de valor probatorio (fs. 306).

Por su parte, señala la autoridad demandada que la diferencia entre el área real de los locales comerciales y el área señalada en los contratos de arrendamiento, se da por las siguientes razones:

> "... el metraje estipulado en los contratos no se estableció en base a una medición previa sino con un criterio un tanto arbitrario y que no necesariamente los metros cuadrados reflejaban el canon de arrendamiento, ya que **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHOW, S. A.** con un área real de 50 m2 pagaba por 63 m2 la suma de B/.126.00 mensuales; en cambio **JUPA INTERNACIONAL, S. A.** con un área real de 76 m2 pagaba la suma de B/.166.50 mensuales lo que representaría pagar por 83 m2.
>
> La conclusión lógica de todo lo anterior es que el área real total de los tres (3) locales no alcanzan para repartirla de tal manera que le toque a cada uno los 63 m2 que establecen los contratos. Por

> ello no se consideró justo disminuir el área real, o alterar el área real de ninguno de ellos y se optó por conformar los contratos con la realidad y exigirle al que pagó de menos conforme a la tarifa vigente, y conocerle un crédito al que pagó de más." (Fs. 66).

Observa la Sala, que para distribuir el área arrendada entre las empresas **GERRYS CORPORATION**, Jupa Internacional, S. A. e Importadora y Exportadora Chow, S. A. a razón de 63 m2, se necesitan 189 m2, mientras que el área de estos tres locales comerciales sólo es de 179.12 m2, conforme a los planos de la Dirección Técnica de Operaciones de la Zona Libre de Colón. (Fs. 100-106).

Consta además, de fojas 73 a 85 tres contratos de arrendamiento sobre estos locales, anteriores al año 1985, con fecha de 29 de octubre de 1971, 1 de marzo de 1973 y 17 de mayo de 1973, en los cuales no se especifican las dimensiones del área arrendada y sólo se señala el canon de arrendamiento. Ambos hechos corroboran lo afirmado por la Zona Libre de Colón en el informe de conducta precitado, al señalar que el área en los contratos no se estableció en base a una medición previa, sino que cuando la Zona Libre de Colón decidió prohibir los subarriendos, arrendó a los subarrendatarios el área que usufructuaban, sin determinarla exactamente.

La parte actora reconoce a foja 164, que trató de comunicar en breve plazo a la Administración de la Zona Libre de Colón, la "usurpación cometida por JUPA INTERNACIONAL, S. A.", aunque el contrato de arrendamiento no lo obligaba a ello, aceptando que no manifestó su disconformidad con el área del local, antes de suscribir el contrato, sino después. Y a foja 311 consta la declaración de parte del señor Alexis Alvarado, representante legal de **GERRYS CORPORATION**, en la que afirma que, "En el año de 1985, ... abril de 1985, unos comerciantes contrataron ese local a través de la Zona Libre de Colón, ... En julio de 1985 me ofrecieron la empresa **GERRYS CORPORATION** a través de unos abogados, después de negociar con los abogados y llegamos al precio establecido, decidí comprar esta empresa sin haber entrado a dicho local, inmediatamente enviamos una carta alrededor del 25 de julio de 1985, a la Dirección Técnica solicitando permiso para la remodelación del local."

A juicio de la Sala, procede en cuanto a esta pretensión aplicar también la cláusula octava del contrato de arrendamiento suscrito con la empresa **GERRYS CORPORATION**, como garantía de certidumbre jurídica para las partes, donde el demandante declara dos cosas: que conoce y que recibe a satisfacción el local 1-B del Edificio No. 25, en el área comercial de la Zona Libre de Colón. Tal como lo expresó la Procuraduría de la Administración, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos, según lo preceptuado en el artículo 976 del Código Civil.

Por tanto, en virtud de que los primeros contratos de arrendamiento sobre los locales 1-B, 1-C y 1-D se celebraron sin determinar el área que se arrendaba, ya que los nuevos arrendatarios seguirían usando los locales que habían subarrendado a otro arrendatario de la Zona Libre de Colón; que no se ha probado que Jupa Internacional, S. A. removió la pared medianera de los locales 1-B y 1-D de la Zona Libre de Colón para usufructuar parte del local de **GERRYS CORPORATION**; y que **GERRYS CORPORATION** declaró en la cláusula octava del contrato de arrendamiento N° 2080 de 28 de marzo de 1985, que conocía las condiciones del local arrendado y lo recibía a su entera satisfacción, a juicio de la Sala, **GERRYS CORPORATION** a lo que tiene derecho es al uso y disfrute de los 52 m2 que ha venido ocupando hasta la fecha.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, el canon de arrendamiento establecido en los contratos por la Zona Libre de Colón y pagado por las empresas **GERRYS CORPORATION** y Jupa Internacional, debe ajustarse para ambas empresas, es decir, Jupa Internacional, S. A. le corresponde pagar por los 75.84 m2 que tiene el local 1-D y **GERRYS CORPORATION** debe pagar por los 52.66 del local 1-B. Además, **GERRYS CORPORATION** debe recibir el crédito a favor de y Jupa Internacional, S. A., debe pagar por el área que la primera dejó de usufructuar y la segunda usufructuó sin pagar.

En cuanto al mezzanine que fue construido por un inquilino anterior en el local alquilado por **GERRYS CORPORATION**, a esta sociedad corresponde su uso, porque en primer lugar cuando alquiló el local estaba construido y era de propiedad de la arrendadora de acuerdo con el contrato celebrado con el anterior inquilino y en segundo lugar porque en la fecha en que celebró el contrato el alquiler de ese mezzanine no estaba incluido en el contrato de Jupa Internacional, S. A. Esta addenda se hizo al contrato después de haber alquilado el local a **GERRYS CORPORATION**. Siendo esta la situación el acto administrativo impugnado viola los artículos 1244 y 1306 del Código Civil que obliga al arrendador a permitir al arrendatario el goce pacífico del inmueble arrendado, y el artículo 55 del Código Fiscal, tal como ya se ha expresado.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 10-91 de 11 de abril de 1991, dictada por el Comité Ejecutivo de la Zona Libre de Colón; SEGUNDO: que como consecuencia de esta nulidad, la empresa GERRYS CORPORATION tiene derecho al uso y disfrute del espacio aéreo sobre el local 1-B del edificio N° 25 del área comercial de la Zona Libre de Colón; TERCERO: se ORDENA al Gerente General de la Zona Libre de Colón, dar cumplimiento a los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución N° 4 de 13 de agosto de 1990; y CUARTO: se NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ESTUDIO CORPORATIVO TRIBUTARIO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4667-93 DE 14 DE MAYO DE 1993, PROFERIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Estudio Corporativo Tributario, actuando en representación de CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 4667-93 de 14 de mayo de 1993 conjuntamente con la Resolución N° 6080-94 S. D. G. de 22 de marzo de 1994, ambas proferidas por la Sub-Directora General de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 9614-94 J. D. de 5 de septiembre de 1994, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

En el acto acusado se resolvió condenar a CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A. al pago de B/.24,465.82 a la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas de seguro social, primas de riesgos profesionales y recargos de ley dejados de pagar entre enero de 1990 y junio de 1992.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos los actos antes mencionados y como consecuencia de ello, se rehaga el Informe de Auditoría de Empresas, A. E. I-92-52 por cuanto la sociedad CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., no tiene que pagar cuotas a la Caja de Seguro Social por los pagos hechos a subcontratistas de la empresa como tampoco debe incluir en el cálculo de las cuotas de seguro y riesgos profesionales por pagar, las sumas que reciban dichos subcontratistas. Finalmente, la parte actora solicita que la Caja de Seguro Social está obligada a reembolsar a Constructora Chang NG, S. A., las

sumas que le haya pagado o tenido que pagar a la fecha por motivo de la resolución acusada.

La Subdirectora de la Caja de Seguro Social sostiene en el acto acusado, que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el artículo 26 de la Constitución Nacional, el Departamento de Auditoría a Empresas, procedió a examinar los libros de contabilidad, comprobantes de pago, planillas ni demás documentos de la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., con número patronal 87-400-2607 y 87-400-2611, y se determinó condenar a dicha empresa a pagar la suma de B/.24,465.82 en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales incluido un recargo del diez por ciento (10%) sobre esas sumas dejadas de pagar durante el período comprendido de enero de 1990 a junio de 1992. En resolución N° 6080-94 S. D. G. de 22 de marzo de 1994, la Subdirectora de la Caja de Seguro Social absolvió recurso de reconsideración y mantiene en todas sus partes la Resolución N° 4667-93-SUB-D. G. de 14 de mayo de 1993 y concede la apelación interpuesta en subsidio. Finalmente, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 4667-93-SUB-D. G. de 14 de mayo de 1993.

La parte demandante afirma que se ha violado el ordinal b), c) y d) del artículo 623 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 modificado por el artículo 46 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
> ...
> b. Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos. Se exceptúan del pago de cuotas del Seguro Social, los viáticos, dietas y permisos. También se exceptúan las gratificaciones de navidad o aguinaldos y los gastos de representación mensual, siempre que no excedan a un mes de sueldo. En caso de exceder el mes de salario se gravará solamente el diferencial que exceda al respectivo mes de salario. Igualmente se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social la participación que beneficie a no menos del setenta por ciento (70%) de los trabajadores de la empresa y no exceda ni sustituya el total del salario anual. Para los efectos del porcentaje establecido en forma precedente, no se considerarán dentro del mismos a los ejecutivos, socios o accionistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si el patrono o empleador fuese una persona natural, excluirá de este porcentaje a los parientes y directivos en los referidos grados de parentesco, a los dueños de la empresa y a los ejecutivos de la misma.
>
> Además, se exceptúan del pago de cuotas de seguro social las sumas que reciba el trabajador en concepto de indemnización con motivo de la terminación de la relación de trabajo, así como las sumas recibidas por los servidores públicos que se acojan a planes de retiro voluntario.
>
> c. Trabajador: Toda persona natural que preste servicios remunerados en dinero o en especie a un patrono o empleador.
>
> d. Patrono o empleador: Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que use los servicios de un trabajador en virtud de un contrato de trabajo expreso o tácito mediante el pago de un sueldo."

La firma Estudio Corporativo Tributario, S. A., sustenta su pretensión en base al hecho de que la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., es una sociedad panameña que se dedica a la construcción y en su giro comercial, normalmente

subcontrata con otras personas y empresas, ciertas etapas o fases en el proceso de construcción, por carecer de los elementos necesarios para realizarlas ella misma. A ello añade, que no existe registro contractual ni contable alguno en los libros o documentación de la empresa que indicie que entre los subcontratistas y la empresa existe relación laboral, porque nunca fueron contratados como empleados de la empresa y nunca tuvieron la intención de ser contratados por la empresa, ni permanente, ni temporalmente, por lo que rindieron declaración extrajudicial ante el Juez de Circuito. En relación al aspecto económico que relaciona a dichos señores con la empresa, afirma el apoderado judicial de la parte actora, de que éste es "irregular" porque difiere y es variado; es "casual" porque no es habitual; y es momentáneo porque se limita a momento específicos. También se afirma que la empresa no tiene subordinación jurídica sobre dichos subcontratistas, ni los mismos dependen económicamente de la empresa. Finalmente, sostiene la firma Estudio Corporativo Tributario, que la Caja de Seguro Social no ha aportado en el proceso administrativo, ningún elemento que indique la existencia de una dependencia económica de los subcontratistas con respecto a la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG., y añade que ellos ofrecen sus servicios a otras empresas y personas.

En cuanto a la disposición violada y el concepto en que lo ha sido, la parte actora estima en cuanto al ordinal b) del artículo 62 de la Ley 14 de 1954 antes citado, que ha sido interpretado erróneamente, pues, éste no estipula el cobro de cuotas de seguro ni riesgos profesionales cuando no existe relación laboral. En cuanto a los ordinales c) y d) del artículo en mención, estima la firma demandante que la violación es directa toda vez que los subcontratistas no son trabajadores según esa definición, ni se puede considerar patrono o empleador a quien no contrata ni expresa ni tácitamente los servicios de una persona natural. A lo anterior añade la firma apoderada judicial de la parte actora, que la Caja de Seguro Social no ha establecido ninguna de las dos calidades antes mencionadas, por lo que mal podría hablarse de dependencia económica si la naturaleza de la operación del contratista es "irregular, incierta, variada, casual y momentánea."

El Director de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta mediante nota sin número ni fecha y recibida en Secretaría de esta Sala Tercera el 3 de agosto de 1995. Dicho informe es del tenor siguiente:

> "De conformidad con el informe AE. I.-92-52 emitido por el Departamento de Auditoría a Empresas de la Institución, se expidió la resolución N° 4667-93-Sub-DG de 14 de mayo de 1993, que resolvió condenar a la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A. con número patronal 87-4000-2607 y 87-400-2611, al pago de la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS CON OCHENTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.24,465.82) por omisión en el pago de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y demás recargos de ley, sumas éstas dejadas de pagar en el período comprendido de enero de 1990 a junio de 1992; dicha resolución fue notificada el 26 de mayo de 1993.
>
> Los apoderados especiales de la empresa, Licenciados Ricardo Salcedo y Francisco Vega, por medio de escrito recibido el 2 de junio de 1993, sustentaron en tiempo oportuno, recurso de reconsideración con apelación en subsidio, el cual fue resuelto por medio de la Resolución N° 6080-94-Sub-DG de 22 de marzo de 1984, que resolvió mantener en todas sus partes, la resolución N° 4647-93-Sub-D. G. la cual le fue notificado a los interesados el día 26 de marzo de 1984, que resolvió mantener en todas sus partes, la Resolución N° 4647-93-Sub-DG, la cual le fue notificado a los interesados el día 28 de marzo de 1984.
> ...
> La auditoría practicada a la empresa determinó que todos los servicios prestados por los señores objeto del alcance, así como las retribuciones por los mismos, fueron parte del costo de construcción de la empresa, y según los registros y documentos examinados no se observa independencia de parte de dichas personas que tuvieran organización propia para actuar independientemente, tanto en lo

económico como en lo jurídico.

De igual forma y conforme a las hojas de detalles de las omisiones en las remuneraciones pagadas y no declaradas, visibles a fojas 1 a 4 del expediente, observamos continuidad de pago de la empresa a favor de los señores objeto del alcance, como retribución por los servicios que prestaban, situación que los vincula con la existencia de una relación obrero patronal, tal cual lo establece el artículo 2, literal b) de la Ley Orgánica de la Institución, que señala:

"Artículo 2: Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social:
...
b) Todos los trabajadores al servicios de personas naturales y jurídicas que operen en el territorio nacional."

En consecuencia, las aludidas omisiones salariales clasificadas inadecuadamente como servidores profesionales y otros, se enmarcan dentro del concepto de sueldo, preceptuado en el Artículo 62, literal b) de la Ley Orgánica que a su letra dispone:

"Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
...
b) Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos."

La omisión en el pago de cuotas obrero patronales, por los salarios devengados por los trabajadores objeto del alcance de auditoría; a la luz de las disposiciones legales transcritas y de lo señalado en el artículo 66-A de la Ley Orgánica, son de carácter obligatorio para el patrono CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., el cual deberá responder del pago de sus cuotas y las del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pueda ejercer la Caja a los asegurados."

Una vez efectuado el estudio del expediente, observa la Sala que el asunto se centra en determinar la condición jurídica de los señores SATURNINO UBARTE, JOAQUÍN LOAIZA, JOSÉ MELÉNDEZ, ESTEBAN MAYOS y JOSÉ C. SANJUR, en lo que concierne a si son catalogados como trabajadores de la empresa CONSTRUCTURA CHANG NG, S. A.

Concluye la Sala que sí existió relación laboral entre los señores antes mencionados y la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto que dentro del expediente aparecen declaraciones rendidas por ellos ante el Juzgado de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la que expresan su abierta intención de no ser contratados por la empresa ni permanente ni temporalmente, no es menos cierto que de fojas 60 a 63 del expediente adjunto, reposa la hoja de detalle de las omisiones en remuneraciones pagadas y no declaradas y en la cual se observa pagos hechos por la empresa CONSTRUCTORA CHANG NG, S. A., que evidencian no sólo la dependencia económica según lo que prevé el último párrafo del artículo 65 del Código de Trabajo, sino la existencia de relación laboral al percibir un salario por los servicios prestados, requisitos propios de la relación de trabajo conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62 del mismo código. Finalmente, es importante destacar que la empresa CONSTRUCTURA CHANG NG, S. A., no aportó aparte de las declaraciones rendidas ante el Juzgado Segundo de los Civil del Primer Distrito Judicial por los señores cuya situación legal aquí se ventila, documento alguno que demuestre fehacientemente que existe independencia de dichos señores con respecto a la empresa para actuar tanto económica como jurídicamente.

En virtud de lo antes expuesto, a juicio de la Sala, lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones de la parte actora, dado que no se violenta de ningún modo lo previsto en los ordinales b), c) y d) del artículo 62 del

Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 4667-93 de 14 de mayo de 1993, proferida por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALEXIS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 15 DE ENERO DE 1996, SUSCRITO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, LA RESOLUCIÓN N° 169 DE 28 DE MARZO DE 1996 DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 180 DE 29 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Ramírez actuando en nombre y representación de Juan Alexis Rodríguez, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa para que se declare nula, por ilegal, la nota de 15 de enero de 1996 dictada por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social, contra la Resolución N° 169 emitida por el Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social, contra la Resolución N° 180 de 29 de abril de 1996 emitida por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social y para que se haga otras declaraciones.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado Ramírez solicita que la Sala decrete la suspensión provisional de la nota de 15 de enero de 1996 dictada por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social por medio del cual se adjudica definitivamente al señor Juan Alexis Rodríguez por un monto de B/.57,446.55 la cotización comunitaria del proyecto N° 4078 para la "Rehabilitación Camino Las Lomitas-Las Marías", la Resolución N° 169 emitida por el Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social por medio de la cual se revoca la nota de 15 de enero de 1996 y en sustitución de lo decidido en ella se adjudica definitivamente la cotización comunitaria del Proyecto N° 4078 para la "Rehabilitación del camino Las Lomitas- Las Minas, Corregimiento de Sabana Grande, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos", al Ingeniero Javier Medina por el monto de B/.47,825.30, y la Resolución N° 180 de 29 de abril de 1996 emitida por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social por la cual se declaró inadmisible el Recurso de Reconsideración presentado por el licenciado Julio Ramírez, en representación del señor Juan Alexis Rodríguez, contra la Resolución N° 169 de 28 de marzo de 1996.

El apoderado judicial de la parte actora considera que los actos impugnados causan un perjuicio notoriamente grave "... al Estado, al derecho y a nuestro representado." (f. 36).

La Sala pasa a examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir, conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera

(Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Procede la Sala a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

Observa la Sala que el demandante no detalla los perjuicios potenciales que sufriría, ni presentan pruebas acreditando la existencia de los mismos. La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) ha sido clara y reiterativa en establecer la necesidad de que la parte actora alegue y compruebe que el posible perjuicio sea notoriamente grave e irreparable. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la nota de 15 de enero de 1996 dictada por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social, contra la Resolución N° 169 emitida por el Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social, contra la Resolución N° 180 de 29 de abril de 1996 emitida por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. IRLENA BROWN VILLALOBOS, EN REPRESENTACIÓN DE AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 18 DE MAYO DE 1995, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Irlena Brown Villalobos**, en representación de **AZAEL BOLÍVAR VILLALOBOS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 18 de mayo de 1995, suscrita por el Director Nacional del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el proceso en estado de resolver, este Tribunal considera que para tener más elementos de juicio que permitan decidir el fondo de la presente controversia debe dictarse este Auto Para Mejor Proveer, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 62: Es potestativo del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo dictar auto para mejor proveer, con el fin de aclarar los puntos dudosos u obscuros de la contienda. Para hacer practicar las correspondientes pruebas, se dispondrá de un término que no podrá pasar en ningún caso de treinta días, más las distancias."

Con base en lo anterior, la Sala estima necesario incorporar al expediente copia autenticada del Resuelto N° 1102 de 1980, que regula lo concerniente a los nombramientos y traslados del personal docente al Ministerio de Educación, así como también del Decreto Ejecutivo N° 382 de 4 de mayo de 1971, que reglamenta la contratación de maestros y profesores supernumerarios o jubilados, con sus respectivas modificaciones, en caso de que hayan sido objeto de las mismas.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley SOLICITA al Ministerio de Educación remita a la mayor brevedad posible, la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ALEJANDRO QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DE DAVIS PERALTA CHECA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 98 DE 29 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Quintero, actuando en representación de **Davis Peralta Checa**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción con el fin de que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 98 de 29 de enero de 1996, emitido por la Alcaldesa del Distrito de Panamá, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado en vías de determinar si el mismo cumple con los requisitos legales pertinentes que hagan viable su admisión.

En este punto se percata quien suscribe, que la demanda presentada adolece de vicios que impiden darle curso legal a la misma, y que se indican al actor a continuación:

En primer término tenemos que señalar que en el escrito de demanda (foja 9-14), encontramos defectos formales que impiden la admisión del libelo como lo es la omisión de acompañar la copia autenticada del acto impugnado. Así se observa a fojas 1-2 del expediente, copia del Decreto N° 98 de 29 de enero de 1996, contentivo de la declaración de insubsistencia del cargo del señor Davis Peralta Checa; sin embargo el referido documento no esta revestido por el sello de autenticidad que se exigen a los documentos aportados al proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 820 del Código Judicial, y extensivamente en el artículo 44 de la ley 135 de 1943 que a continuación citamos:

> "A la demanda deberá acompañar el actor copia del acto acusado ..."
> El artículo 820 del código judicial por su parte sostiene:
> "Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias ...
> Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público de la custodia original"...

La copia simple del acto acusado es pues, en virtud de la aplicación de las normas legales precitadas y en la reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera, inidónea para los efectos de la admisión de la demanda presentada.

Además del defecto indicado, se percata el Magistrado Sustanciador que la presente acción de Plena Jurisdicción no puede ser admitida por falta de agotamiento de la vía gubernativa, como queda expuesto de seguido.

En efecto a fojas 5-7 se aprecia copia del recurso de reconsideración con

apelación en subsidio, presentado ante el Municipio el 5 de febrero de 1996. Luego de este acto procesal y transcurridos más de cuatro meses desde que se interpuso dichos recursos el afectado solicitó a la Asesoría Legal del Municipio de Panamá la expedición de la certificación sobre la configuración del silencio administrativo. Ese mismo día fue presenta la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción (f. 10-14).

De lo anterior que se desprende que no fue agotada la vía gubernativa, al quedar pendiente la interposición del recurso de apelación ante la Gobernación, tal como se establece en el artículo 41 de la Ley 135 de 1943 que a continuación citamos:

> "Ante el gobernador se surtirán las apelaciones contra las decisiones definitivas de ... los Alcaldes Municipales ..."

Por su parte el artículo 4 de la Ley 2 de enero de 1987, que señala las funciones de los Gobernadores de la República establece en el numeral 19:

> "Los Gobernadores tendrán las siguientes atribuciones:
> ...
> 19. Conocer en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones ... que impongan los alcaldes como funcionarios de primera instancia."

Como vemos, la omisión del recurrente contraría lo previsto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que preceptúa:

> "Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, ..."

En atención a los defectos señalados, quien sustancia debe negarle el curso legal a la demanda instaurada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 135 de 1943.

En consecuencia el Magistrado sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licdo. Alejandro Quintero en representación de Davis Peralta Checa, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 98 de 29 de enero de 1996 dictado por la Alcaldesa del Distrito de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 026.92 DE 1O. DE SEPTIEMBRE DE 1992, PROFERIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Watson y Asociados**, en representación de **CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 026-92 de 1° de septiembre de 1992, proferida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de

Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Mediante la acción encausada el apoderado judicial de la parte demandante solicita a esta Superioridad declare nula, por ilegal, la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante la cual la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social no accedió a la solicitud que le presentara la sociedad demandante **CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A.**, a la Caja de Seguro Social a fin de que procediera a cancelar la suma de seis mil setecientos veintisiete balboas con sesenta y nueve centésimos (B/.6,727.69) por los servicios médicos brindados al señor **HELIODORO LORENZO**, el día 3 de febrero de 1990. Consecuentemente, se declare que la Caja de Seguro Social está obligada a pagar a **CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A.**, la suma correspondiente a B/.6.727.69 por los servicios médicos y hospitalarios brindados al señor **HELIODORO LORENZO**, asegurado 73-2675 empleado de la empresa **VENDOMÁTICA, S. A.**

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El representante legal de la parte demandante sustenta sus pretensiones argumentando básicamente que: el día 3 de febrero de 1990, su representada **CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A. (Hospital Paitilla)**, brindó servicios médicos y hospitalarios al señor **HELIODORO LORENZO** asegurado por la Caja de Seguro Social, debido a que este requería de dichos servicios con urgencia y que le impedían acudir a un centro de salud del Estado. Posteriormente, su representada le presentó a la Caja de Seguro Social de conformidad con los trámites previstos, la cuenta por los servicios médicos y hospitalarios brindados al señor **HELIODORO LORENZO.**

Que mediante la precitada Resolución 026-92 de 1° de septiembre de 1992, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social resolvió no acceder a cancelar la cuenta correspondiente a la suma de B/.6,727.69, en concepto de los mencionados servicios de salud, por cuanto, el asegurado **HELIODORO LORENZO** debió ser atendido en un centro de salud del Estado y no en uno privado. Sobre este último punto, alega el demandante que mediante resolución 046-94 sin fecha, que resolvió el recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 026-92 de 1° de septiembre de 1992, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social pese a que confirmó en todas sus partes la precitada Resolución 026-92, reconoció que en efecto, **CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A.**, prestó servicios de salud al fenecido señor **HELIODORO LORENZO**, por razón de la urgencia que ello ameritaba, sin embargo, no podía pagar la cuenta toda vez que el patrono del aludido asegurado, no comunicó de este hecho a la Caja de Seguro Social.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La entidad administrativa demandada, procedió a rendir su informe explicativo de conducta indicando que la razón por la cual la Caja de Seguro Social no accedió a pagar la cuenta de los servicios médicos de salud a la empresa solicitante se dio en virtud de que "tanto el patrono (Vendomática, S. A.) como el CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A., (CENTRO MÉDICO PAITILLA); no cumplieron con el procedimiento legal y reglamentario vigente de la Caja de Seguro Social para estos casos y eventualidades". Cfr. fojas 46-50 del expediente.

Añade el referido ente gubernamental que en el presente caso, el patrono del asegurado al cual se le dispensaron los servicios médicos, no informó del hecho acaecido a la Caja de Seguro Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales, desatendiendo el procedimiento prescrito en las normas rectoras de esta materia que claramente señalan la obligación por parte del patrono de informar a la Dirección Ejecutiva de la Caja de Seguro Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social. Por ende, añade dicha entidad, que estas razones constituyen mérito para que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social no accediera a pagar a la sociedad demandante la suma de dinero reclamada en concepto de servicios médicos dispensados al asegurado señor **HELIODORO LORENZO**, con seguro social N°

73-2675, el día 3 de febrero de 1990. Cfr. fojas 46-50 del expediente.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 514 de 27 de noviembre de 1995, la Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones del recurrente, y solicitó a esta Sala desestimar el cargo de ilegalidad a que hace referencia el demandante ya que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social no podía acceder a la solicitud formulada por el **CENTRO MÉDICO PAITILLA**, para que se le hiciera efectivo el pago de la suma correspondiente al B/.6,727.69 en concepto de atención médica prestada al asegurado **HELIODORO LORENZO**, el día 3 de febrero de 1990, quien falleció ese mismo día, a causa de un accidente de trabajo por infringirse el artículo 12 del Reglamento General de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social, en concordancia con el artículo 18 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970.

Añade la Señora Procuradora que en el caso del fallecido asegurado señor **HELIODORO LORENZO**, es evidente que fue trasladado al **CENTRO MÉDICO PAITILLA**, pero de conformidad con lo establecido en las precitadas disposiciones legales y reglamentarias, debió ser trasladado a la Caja de Seguro Social, sin embargo, es entendible que no se hubiese hecho dada la urgencia que presentaba el aludido asegurado. En estas circunstancias, añade la Procuradora, el Patrono del trabajador debió informar de este hecho a la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales, en atención al literal a) del artículo 3 de la Ley 16 de 1986, ya que al no informar el patrono del señor **HELIODORO LORENZO** que éste había sido conducido de urgencia al Centro Médico de Paitilla, la Caja de Seguro Social no podía acceder a hacer efectivo el pago reclamado por ese centro médico.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala procede a resolver la controversia. Sostiene el apoderado judicial de la sociedad demandante que el acto administrativo acusado de ilegal, es violatorio del artículo 3 literal a) de la Ley 16 de 1986, "Por la cual se dictan normas para garantizar la Asistencia Médica de Urgencia a las personas que se encuentren en grave peligro de muerte", cuyo texto es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 1:** Los costos de los servicios médicos y de hospitalización de una persona que haya sido asistida en una institución de salud privada, por alguna de las situaciones de urgencia a las que se refiere el artículo 1 de esta, serán cubiertos así:
>
> a) **Si el paciente está cubierto por la Caja de Seguro Social, ésta pagará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica y en los reglamentos respectivos de esta institución.**
>
> b) Si el paciente está cubierto por alguna póliza de Compañía Aseguradora privada, que cubra gastos de atención médica, hospitalización, etc., los gastos de la atención de urgencia serán pagados por la compañía aseguradora.
>
> c) Si el paciente es o no asegurado y por alguna razón no tiene derecho a ser atendido o no califica como beneficiario ni del Seguro Social, ni de ninguna Compañía Aseguradora privada, los gastos serán cubiertos así: El Estado cubrirá el 50 por ciento de los gastos de hospitalización tomando como base los costos fijados por el Ministerio de Salud; el paciente será responsable ante la institución que prestó el servicio, por un 20 por ciento del costo de hospitalización, y la propia institución absorverá el 30 por ciento restante más los gastos médicos. En caso de comprobarse que el paciente no posee los medios económicos para hacer frente a esta obligación, la institución de salud que haya brindado el servicio absorberá el costo de la atención brindada. Estos costos le serán computados como gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta."...

Sostiene el demandante que la violación a la precitada disposición legal se ha dado en forma directa por omisión, en virtud de que esta norma señala claramente que si el paciente es atendido por una institución de salud privada por una situación de emergencia como las que se describen en el artículo 1 de la Ley ibídem, la cuenta que se genere por razón de los servicios médicos y hospitalarios será cubierta por la Caja de Seguro Social de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica y sus Reglamentos. Este es el caso, manifiesta el recurrente, del señor **HELIODORO LORENZO**, quien, dado que sufrió un accidente grave, e incluso falleció el mismo día, tuvo que ser atendido en el Centro Médico de Paitilla (**CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A.)**.

Agrega el demandante, que el hecho de que dicha institución haya decidido no pagar la cuenta en virtud de que el empleador del asegurado no comunicó a la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social que el mismo había sido atendido con carácter de urgencia en el Centro Médico de Paitilla, es un hecho que escapa del control de su poderdante, y que es a todas luces ilegal, ya que ello sería dejar al libre arbitrio del empleador la posibilidad de que CLÍNICAS Y HOSPITALES, S. A., pueda cobrar su cuenta por los servicios médicos y hospitalarios brindados.

MOTIVACIONES DEL TRIBUNAL

De conformidad con las constancias procesales que reposan en el expediente gubernativo, efectivamente el difunto asegurado **HELIODORO LORENZO** quien laboraba para la empresa **VENDOMÁTICA, S. A.**, recibió servicios médicos y de hospitalización con carácter de urgencia en el Centro Médico de Paitilla, el día 3 de febrero de 1990, a las 11:50 a. m. por razón de una herida de gravedad por arma blanca penetrante en el tórax que le fuera ocasionada en horas laborables cuando fue objeto de un asalto. Cabe destacar que el mismo día en que fue atendido en dicho centro hospitalario, falleció como consecuencia de una Hemorragia Toraco Abdominal, a causa de la herida que le fuera ocasionada, tal como desprende del certificado de defunción, legible a foja 8 del expediente.

El precitado artículo 3 de la Ley 16 de 1986, establece en su literal a) que tratándose de una persona que haya sido asistida en una institución de salud privada por alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 1 de dicha ley, que esté cubierto por la Caja de Seguro Social, **ésta pagará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y en los respectivos reglamentos de esta institución**. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la referida Ley 16 de 1986, "Los hospitales, clínicas, establecimientos privados que cuenten con las facilidades adecuadas para atender casos de urgencia que funcionan en la República, están en la obligación de prestar asistencia médica de urgencia, entendiéndose por casos de urgencia, los de personas víctimas de infartos, politraumatismos, **accidentes graves**, catástrofes **y que por razón de su gravedad no puedan acudir a los centros de salud sin grave riesgo para sus vidas**"

Por su parte, el Reglamento General del Seguro de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social en su artículo 12 establece lo siguiente:

> "**Artículo 12°** Cuando, por la gravedad de un accidente de trabajo, la víctima sea conducida a un centro hospitalario que sea de propiedad del Seguro, ni contratado por éste, **el patrono deberá informar de este hecho a la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales**.
>
> La Caja procederá a enviar un médico al lugar de reclusión de la víctima con el fin de que le sea practicado un reconocimiento. Si de dicho reconocimiento se desprende que el accidentado puede ser trasladado sin peligro de su vida, y de que la movilización no ocasionará un agravamiento de la lesión, se procederá, por los servicios médicos de la Caja, a efectuar el traslado a un centro asistencial de ésta. Si el traslado no es aconsejable, la Caja asumirá los costos a que diere lugar la atención del paciente mientras no se encuentre en condiciones de ser movilizado.
>
> En el primer caso, el valor de la asistencia prestada por la entidad

particular, con anterioridad al traslado, será de costo del patrono, salvo que por los servicios médicos del Seguro se compruebe la urgencia del tratamiento, ya que, de otro modo, deberá considerarse esta situación, dentro de la denominación de "Primeros Auxilios" de que trata el artículo 16 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970. "(Lo resaltado es de la Sala).

En el caso en examen no existe duda alguna de que se trataba de un caso de extrema gravedad al punto de que a pesar de que al asegurado se le prestaron los servicios médicos con carácter de urgencia falleciera. Sin embargo, **no consta en el expediente que el patrono de la empresa VENDOMÁTICA, S. A. procediera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el supratranscrito artículo 12 del Reglamento General de Prestaciones, es decir, de que procediera a informar de este hecho a la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social.**

Si bien es cierto, que en el texto del artículo 3 de la Ley 16 de 1986, se establece que corresponde a la Caja de Seguro Social pagar los costos de los servicios médicos y de hospitalización de una persona que haya sido asistida en una institución de salud privada por situaciones que tengan el carácter de urgente de las contempladas en el artículo 1 de dicha Ley, al que hemos hecho referencia en líneas anteriores, y así lo estableció la Sala Civil en Sentencia de 28 de mayo de 1991, no debemos perder de vista el hecho de que esta misma excerta legal sujeta dicho pago a lo dispuesto en la Ley Orgánica y en los reglamentos respectivos de esta institución. En tal sentido, y como bien expresáramos en líneas anteriores, el patrono del trabajador herido no informó del accidente ocurrido al asegurado a la Dirección Ejecutiva de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social, incumpliéndose así el procedimiento establecido en el aludido artículo 12 del Reglamento General de Prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales.

Los razonamientos expuestos motivan a la Sala a considerar que al no ceñirse la solicitud formulada por el Centro Médico Paitilla en el sentido de que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social procediera a cancelar la suma correspondiente a seis mil setecientos veintisiete balboas con sesenta y nueve centésimos (B/.6,727.69) en concepto de los servicios médicos de salud brindados al fallecido asegurado **HELIODORO LORENZO**, el día 3 de febrero de 1990, al procedimiento señalado en el artículo 12 del Reglamento de Prestaciones Económicas, no es procedente acceder a las pretensiones del recurrente.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 026-92 de 1° de septiembre de 1992, proferida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. JUAN M. CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN DE MARTÍN FERRARA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 27 DE 15 DE MAYO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El **licenciado Juan M. Cedeño**, en representación de **MARTÍN FERRARA**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el **DECRETO N° 27 de 15 de mayo de 1990**, dictado por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 220 de 21 de mayo de 1996, que reposa a folios 31-33 del expediente, al notificarse del Auto calendado 18 de abril de 1996, mediante la cual se admitió la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra el mismo, argumentándo básicamente que dicha demanda **no debió ser admitida** por razón de que la parte actora no ha cumplido con uno de los requisitos exigidos para la admisión de este tipo de demandas, establecidos en el artículo 44 de la Ley 33 de 1946, concerniente a la debida autenticación del acto acusado.

Al respecto, señaló la Procuradora de la Administración:

> "Nuestra inconformidad radica en el hecho que el demandante no aportó copia autenticada del Acto Acusado. Si bien el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, indica que la demanda deberá ser acompañada de una copia del acto acusado, se entiende que dicha copia debe estar debidamente autenticada, porque así lo exige expresamente el artículo 820 del Código Judicial, que dice:
>
> "**ARTÍCULO 820.** Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copia, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. **Las reproducciones** por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos de que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa". (Las negrillas son nuestras)."

Encontrándose el proceso en estado de resolver, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a externar las siguientes consideraciones:

Estima esta Superioridad que efectivamente el recurrente no cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, de llevar a cabo todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea a la que alude el mencionado artículo, y es así puesto que no consta en el expediente que el recurrente haya tratado de acompañar el libelo contentivo de la demanda con la documentación necesaria, o que haya gestionado ante el respectivo ente administrativo la correspondiente autenticación de la misma.

Ya la Sala ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar debidamente autenticado el acto que se acusa de ilegal, y en caso de que se le imposibilite obtener la documentación requerida previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado dentro de la demanda, expondrá el hecho y solicitará al Magistrado Sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia.

Si bien es cierto a fojas 2 del expediente, donde aparece copia del acto impugnado, el Decreto N° 27 de 15 de mayo de 1990, se observa impreso **un sello** del Director Administrativo del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por el cual se certifica que la firma que antecede es correcta, el mismo no es suficiente para considerar autenticada dicha copia.

El incumplimiento de este requisito es motivo suficiente para inadmitir la demanda.

El licenciado Juan Manuel Cedeño, presentó escrito de objeción al recuso de apelación interpuesto y sustentado por la Honorable Procuradora de la Administración, tal cual consta a fojas 38-39 del expediente, toda vez que lo

considera injusto y no pertinente, el cual fundamentó en parte, bajo las siguientes consideraciones: "Si bien es cierto que no se presentó copia autenticada del Decreto N° 27, también es cierto que el Director Administrativo del Ministerio de Hacienda y Tesoro, quien es el funcionario público y encargado del documento por el cual él entregó personalmente a mi mandante, haciéndose válido y confiable, de acuerdo al artículo 820 del Código Judicial ... Hay que ser justo, y en base a ésto invoco el Séptimo Mandamiento del Juez, expresado por **JUAN CARLOS MENDOCA**, Profesor de Derecho, que dice: "Antes que nada, averigua en los conflictos dónde está la justicia, luego, fundaméntala en derecho ... En base a lo anterior, pido justicia a fin de que se considere la posibilidad de llamar al funcionario expedidor del Decreto N° 27 para que responda sobre la entrega de ese documento a mi representado y se tenga en consideración como aceptable, el tantas veces mencionado Decreto, por el Ministerio de Hacienda y Tesoro."

Al respecto, debe señalar este Tribunal como anteriormente ha destacado, que si bien es cierto la jurisdicción contencioso administrativa tiene como objetivo primordial brindarle a los administrados la revisión judicial de los actos emitidos por la autoridad administrativa, y así minimizar los agravios que muchas veces se comete en esa instancia, no es menos cierto que al solicitar la intervención de la autoridad judicial, que en este caso corresponde a los Magistrados de la Sala Tercera, debe cumplirse con ciertos requisitos estatuídos en la ley para que el Tribunal pueda conocer de la pretensión. Así las cosas, no le es permisible a esta Corporación Judicial pasar por alto los **defectos** de forma, que presenta muchas veces el libelo de las demandas (en este caso la copia no habilitada del acto acusado) en virtud de que las **formalidades** son de **orden público y deben ser acatadas obligatoriamente por las partes que intervienen en el proceso**. Por esto ninguna consideración fuera de las establecidas en la ley, puede ser invocada por el afectado para que sea conocida su reclamación.

Por tanto, no está de más reiterar que la parte actora pudo evitar la presente situación si hubiese demostrado que efectivamente llevó a cabo las gestiones pertinentes a fin de obtener dicha documentación y de ser aquellas infructuosas hubiese en el libelo de la demanda presentado solicitud especial de previo y especial pronunciamiento, a fin de que el Magistrado Sustanciador dispusiera solicitar al funcionario responsable copia autenticada del mencionado Decreto N° 27 de 15 de mayo de 1990, en virtud del artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que a letra dice:

> **"ARTÍCULO 46.** Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de el Auto 18 de abril de 1996, NO ADMITEN la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por el Licenciado Juan Manuel Cedeño, en representación de MARTÍN FERRARA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. HERNÁN GARCÍA APARICIO, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR O. ORTEGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 30 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL SILENCIO

ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Hernán García Aparicio**, en representación de **HÉCTOR O. ORTEGA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la NOTA de 30 de enero de 1995, emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas, y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente solicita a esta Sala que declare la nulidad, por ilegal, de la precitada **NOTA de 30 de enero de 1995**, por la cual el profesor Pascual Leguias Q., Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas, notificó al señor **HÉCTOR O. ORTEGA C.** que ha sido separado del cargo de Agente de Seguridad 1, puesto que desempeñaba en la sección de Seguridad/San Miguelito de Obras Públicas. Que como consecuencia de esta declaración, se le reintegre a las labores que desempeñaba en el Ministerio de Obras Públicas, como agente de Seguridad, más el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde el treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), fecha de su destitución.

De la acción encausada se le dio traslado al Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas a los efectos de que rindiera el respectivo informe de conducta en relación a la demanda propuesta por el señor **HÉCTOR O. ORTEGA**. Dicho informe lo sustentó en los siguientes términos:

> "3. Esta decisión de destitución se basa en la reorganización administrativa efectuada en el Ministerio de Obras Públicas como parte de la política de profesionalización del cuerpo de servicios públicos de este Ministerio.
>
> 4. Que de conformidad con la ley y la jurisprudencia panameña, la única forma de que un funcionario adquiera estabilidad en el cargo es que su nombramiento esté amparado por la Ley de carrera administrativa, circunstancia que no se da en el caso del recurrente ...". (Fs. 19-20 del expediente).

De igual manera se le corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien mediante Vista N° 299 de 17 de julio de 1995, que corre a folios 21-29 del expediente, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones del recurrente, en atención a los siguientes razonamientos.

Sostiene la Procuradora de la Administración que si bien es cierto la nota de 30 de enero de 1995, emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas, no expresó los recursos que en la vía Gubernativa le correspondían al señor Ortega interponer, como a la vez en aquella no se señaló el término dentro del cual debían interponerse los mismos, dichas omisiones son en la práctica una deficiencia generalizada, y que hay que tener presente que los vicios aquí apuntados, son perfectamente saneables, por lo que en realidad producen una nulidad relativa del acto emitido.

Además, señala la Procuradora de la Administración que el principio finalista en materia de nulidades, es el que obliga a replantear la ilegalidad de un acto administrativo, cuando no se ha garantizado el incontrovertido derecho de defensa, es decir, que la teoría finalista auspicia el saneamiento de los vicios procesales que no tengan directa incidencia con el derecho de defensa, y en el presente caso, el acto administrativo que se acusa de ilegal, no contradice el principio de debida defensa. Que actuaciones procesales subsanables y que de hecho fueron subsanadas por el propio actor, no pueden acarrear la declaratoria de ilegalidad impetrada por el mismo.

Por otro lado señala la Señora Procuradora que la sanción adoptada por el Ministerio de Obras Públicas, es de carácter disciplinario, es decir, está relacionada con la potestad administrativa de disciplinar a los funcionarios públicos que dependan de ella, y el artículo 829 del Código Administrativo, el cual es invocado como fundamento de derecho a favor del señor **HÉCTOR ORTEGA** se refiere a penas correccionales, que son una forma de sanción de orden policivo (Policía del Orden).

Cumplidos los trámites legales, esta Superioridad procede a resolver el fondo del presente negocio.

Primeramente, se consideran infringidas las siguientes normas: artículo 29 de la Ley 135 del 30 de abril de 1943; párrafo primero del artículo 829 del Código Administrativo; artículo 295 de la Constitución Política de Panamá.

El artículo 29 de la Ley de 30 de abril de 1943 establece:

> "ARTÍCULO 29. Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente".

Sobre el concepto de la violación, sostiene el recurrente que dicha disposición ha sido infringida por la Nota sin número de 30 de enero de 1995 contentiva de la notificación de destitución del señor **HÉCTOR ORTEGA**, por razón de que la misma no indica ni los recursos que por vía gubernativa proceden en contra de dicha nota, ni señala el período o término dentro del cual deben interponerse los recursos que caben contra la misma, por lo que el funcionario correspondiente incurrió en violación directa de la norma transcrita. También alega la parte actora que aunque el afectado haya hecho uso oportuno de uno de los recursos que consagran la Ley (Reconsideración y Apelación) no se trata, de una convalidación, ya que el Señor Ortega no estaba facultado ni por la Ley, ni por el Ministerio de Obras Públicas, para convalidar ningún acto jurídico emanado de ese Ministerio, que por lo tanto la nota impugnada es de por si irregular; que la decisión de destitución debió haber venido en un decreto o en una resolución o acción de Personal fundamentada en un acto jurídico similar.

Al respecto, debe reiterar esta Superioridad, lo que ha venido sosteniendo en situaciones como las que nos ocupa, en el sentido de que el artículo 29 de la Ley 135 de 1943 contiene dos garantías procesales básicas: 1- que el afectado no quede en indefensión por no conocer de una actuación que pueda afectarle; y 2- que pueda impugnarla si no se encuentra conforme con la medida administrativa adoptada.

Estas garantías se han respetado en el caso del señor **HÉCTOR ORTEGA**, dado que debidamente fue puesto en conocimiento de la Nota de Personal que declaraba su destitución y contra tal acto promovió los recursos de reconsideración y apelación en subsidio, en tiempo oportuno. Con ello subsanó cualquier vicio que hubiese podido producirse por la omisión de mencionar los recursos que procedían en la vía gubernativa, tal como lo preceptúa el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, cuando señala:

> "Artículo 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte enterada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo oportuno los recursos legales."

En atención a las razones aducidas considera la Sala que no se ha producido violación alguna al texto del artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

En lo que concierne al artículo 829 del Código Administrativo que a la

letra dice así:

> "ARTÍCULO 829: Para imponer una pena correccional es necesario probar primero la falta, bien con una certificación escrita del Secretario o con declaración de dos o más testigos presenciales. Obtenida esta prueba, el empleado dicta su resolución y la manda notificar al penado".

Al fundamentar el concepto de la violación alegada, el actor sostiene que "el acto administrativo impugnado, no individualiza la Comisión de falta alguna que amerite la imposición de una sanción tan severa como es la destitución, en otras palabras, el acto impugnado, ni ningún otro, señala cuáles son los elementos o fundamentos o actos que sirvieron de sustento jurídico para que el Director de Administración de Personal, tomara la decisión de destituir de un cargo público a un funcionario que había estado cumpliendo con esmero, eficiencia, puntualidad y honradez las funciones a él encomendadas".

Con relación a este punto le asiste la razón a la Procuradora de la Administración al señalar que la separación administrativa en el presente caso, se produce en virtud de la voluntad discrecional de la Administración activa que lo nombró, según el régimen de libre nombramiento y remoción.

Significa esto que la medida adoptada con relación al señor **ORTEGA**, es de carácter disciplinario y no correccional, la cual es la consagrada en el artículo 829 del Código Administrativo, razón por la que los argumentos del actor no prosperan en el presente caso dado que el señor **ORTEGA** no estaba sujeto a la carrera administrativa, es decir aquella a la que se ingresa por concurso de mérito y no por libre nombramiento.

El señor **HÉCTOR ORTEGA** no estaba amparado por una ley de carrera administrativa, por lo que la separación de que fue objeto deriva de la voluntad discrecional de la Administración activa que lo nombró, según el régimen de libre nombramiento y remoción.

Por las razones expuestas, no prosperan los cargos de violación endilgados al artículo en referencia.

Finalmente, se alega infringido el artículo 295 de la Constitución Nacional.

Es preciso recordarle al recurrente, lo que la Sala Tercera ha reiterado en innumerables ocasiones a raíz de la inclusión en las demandas contencioso administrativas, de normas de rango constitucional que sólo corresponde al Pleno de esta máxima Corporación de Justicia, conocer del control de la constitucionalidad, tal como dispone el artículo 203 numerales 1 y 2 de nuestra Carta Magna, y los artículos 87 y 98 del Código Judicial.

Al quedar reservada la guarda de la integridad de la Constitución al Pleno de la Corte Suprema, escapa de la esfera de la Sala Tercera conocer de la supuesta violación al artículo 295 de la Constitución Nacional, citado por el demandante.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la NOTA 30 de enero de 1995, emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO AMAYA A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4823-92 DE 3 DE JULIO DE 1992 DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera, actuando en nombre y representación de **GUILLERMO AMAYA AMAYA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 4823-92 de 3 de julio de 1992 dictada por la Comisión de Prestaciones, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora solicita además que, como consecuencia de la nulidad de la Resolución N° 4823-92 de 3 de julio de 1992, dictada por la Comisión de Prestaciones y la Resolución N° 11,293-95-J. D. de 1° de noviembre de 1995, se condene a la Caja del Seguro Social a pagar las mensualidades de la pensión de invalidez no pagadas al señor Guillermo Amaya Amaya, por efecto de las mencionadas resoluciones, y se le siga otorgando la pensión por incapacidad.

Antes de admitir la demanda es necesario examinarla para comprobar si la misma cumple con todos los requisitos legales.

La Resolución N° 11,293-95-J. D. con fecha 1 de noviembre de 1995, emitida por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, por medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución N° 4823-92, de 3 de julio de 1992, con la que se agotó la vía gubernativa, fue notificada al señor Guillermo Amaya Amaya el 20 de marzo de 1996 y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue presentada el día 10 de junio de 1996. Como la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción prescribe en dos meses a partir de la notificación del acto impugnado o el acto confirmatorio, tal como lo establece el artículo 27 de ley 33 de 1946, debe concluirse que, cuando se ejerció, la misma estaba prescrita.

Además, el apoderado legal del demandante señaló como parte demandada a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, la cual emitió el acto confirmatorio, y no a la Comisión de Prestaciones de la Caja del Seguro Social que dictó el acto originario impugnado que es la Resolución N° 4823-92 de 3 de julio de 1992.

Los hechos comentados hacen inadmisible la demanda, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 33 de 1996.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Herrera, en nombre y representación del señor Guillermo Amaya Amaya, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4823-92 de 3 de julio de 1992, expedida por la Comisión de Prestaciones, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CONSORCIO DE JURISTAS, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1404 DE 10 DE MARZO DE

1994, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Consorcio de Juristas, actuando en representación de RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 1404 de 10 de marzo de 1994, dictada por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

En el acto impugnado se destituye al señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN del cargo de Operador de Computadora que desempeñaba en el Departamento de Informática del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. Igualmente, en el acto acusado se le inhabilita para trabajar en la Caja de Seguro Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65, literal e) del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social-Ministerio de Salud.

La firma apoderada judicial de la parte demandante solicita que se declare nulo el acto administrativo contenido en el Decreto N° 1404-94-DNP de 10 de marzo de 1994 expedido por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social y, como consecuencia de ello, los siguientes acto administrativos contenido en las Resoluciones N° 5396-94-DNP de 29 de julio de 1994 suscrita por la misma funcionaria y la Resolución N° 10,395-95-JD de 18 de mayo de 1995, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Finalmente, la parte actora igualmente solicita se orden el pago de todos los salarios dejados de percibir por su representado desde la fecha de su separación, el día 5 de agosto de 1993, hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro.

La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

"A. El señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN ingresó a laborar en la Caja de Seguro Social el día 1 de julio de 1967, prestando los servicios en forma continua e ininterrumpida.

B. El señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN, al momento de su destitución, se desempeñaba como Operador de Computadora en el Departamento de Informática del Complejo Metropolitano "Dr. Arnulfo Arias Madrid."

C. En virtud de la Resolución N° 4414 - 93DNP, de 5 de agosto de 1993, suscrita por ELIZABETH MEDINA, se suspendió al señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN del cargo que ocupaba mientras se realizaban las investigaciones del caso, consistente en un conato de riña y amenazas con arma de fuego en contra del señor DAGO VANEGAS también funcionario de la institución, hecho que se suscitó dentro de las instalaciones u oficinas del Departamento de Informática del Complejo Hospitalario Metropolitano.

D. Mediante Resolución N° 1404-94 DNP de 109 de marzo de 1994, se resolvió destituir a nuestro representado del cargo, al igual que se le inhabilita para trabajar en la Caja de Seguro Social.

La anterior resolución fue mantenida a través de la número 5,396-94 D. N. P. de 29 de julio de 1994, suscrita por ELIZABETH MEDINA, y confirmada por la Resolución N° 10,395-J. D. de 18 de mayo de 1995, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

E. El señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN, durante el tiempo que tenía de prestar servicios en la Caja de Seguro Social, no se vio involucrado en actos de indisciplina, desobediencias, ausencias y tardanzas injustificadas, ni cualquier otro acto que vulnera las leyes, decretos y resoluciones que rigen los destinos de la Caja de Seguro

> Social, observando y manteniendo dignidad en el desempeño del cargo, con una conducta en su vida privada cónsona con el orden y la moral pública y el prestigio de la Caja de Seguro Social, evidenciando lo antes descrito el por qué nuestro representado prestó servicios a la institución por más de veintiséis (26) años de manera continua e ininterrumpida, con lo cual se ganó el derecho a la estabilidad como Servidor Público, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
>
> F. Las investigaciones del caso concreto, realizadas por los funcionarios de la Caja de Seguro Social, carecen de objetividad, pues no se concretan a analizar estrictamente las declaraciones vertidas por los funcionarios HABITZEL TEJADA, RUBÉN RODRÍGUEZ Y HUMBERTO MONTEVERDE, funcionarios de la Caja de Seguro Social presentes en el momento en que se suscitó el incidente, pues, por el contrario, tales funcionarios (encargados de hacer las investigaciones pertinentes) tergiversan el contenido de las declaraciones.
>
> G. Las sanciones establecidas al señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN son violatorias al Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, puesto que omiten la aplicación de las normas establecidas por violación de dicho reglamento, contenidas en el cuadro de aplicación de sanciones, razón por la cual negamos y nos oponemos a la sanción."

Observa la Sala, que la parte actora aduce como violados el artículo 22 literal e) del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, y la Resolución N° 768 de 16 de marzo de 1977, Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social cuyos textos respectivamente son los siguientes:

> ARTÍCULO 22: Son atribuciones y deberes del Director General:
> ...
> e. Nombrar, trasladar y remover a los empleados, determinar sus deberes e imponerles sanciones ..."
>
> "NUMERAL 27: Naturaleza de la falta. Portar armas ilegalmente en horas de trabajo y proferir amenazas con armas de cualquier naturaleza. Por primera vez: Suspensión de tres (3) a diez (10) días. Reincidencia: Destitución.

A juicio de la firma forense Consorcio de Juristas, el artículo 22 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 ha sido violado de manera directa, toda vez que las órdenes de suspensión y posterior destitución del señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN contenidas en las Resoluciones N° 4414-93 DNP de 5 de agosto de 1993 y la Resolución N° 1404-94 de 10 de marzo de 1994, fueron suscritas o firmadas por ELIZABETH MEDINA sin haber existido delegación de tal función de parte del Director General o de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por lo que se atribuyó funciones no concedidas por la Ley. En cuanto al Numeral 27 de la Resolución N° 768 de 16 de marzo de 1977, que contiene el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, específicamente el Cuadro de Aplicación de Sanciones, opina la parte que ha sido igualmente violado en el concepto de violación directa, ya que se dejó de aplicar un texto claro de ley que debió aplicarse. En relación con lo antes anotado, añade el recurrente que las infracciones supuestamente cometidas por el señor DE LEÓN según el Cuadro de Aplicación de Sanciones no dan origen a la destitución, sino que, por el contrario se establecen como sanciones las amonestaciones orales o escritas, multas y suspensiones tal como se observa en los numerales 7, 27 y 28.

Mediante resolución de 3 de agosto de 1995, se admite la demanda que nos ocupa y se corre traslado de la misma, al Director de la Caja de Seguro Social y a la Procuradora de la Administración.

El Director de la Caja de Seguro Social envió el informe explicativo de conducta fechado el 23 de agosto de 1995 visible de fojas 81 a 85 del expediente.

En dicho informe el Director de la Caja de Seguro Social se opone a las pretensiones de la parte actora y afirma, entre otros aspectos, que la Resolución N° 1404-94-DNP de 10 de marzo de 1994 suscrita por la Subdirectora de la Caja de Seguro y su acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 10,395-95-J. D. de 18 de mayo de 1995 suscrita por la Junta Directiva de las misma entidad, fueron expedidas una vez que las irregularidades en la conducta del hoy demandante, fueron debidamente analizadas e investigadas por el Departamento de Personal del Complejo Hospitalario Metropolitano, quien además, llevó a cabo las entrevistas necesarias para determinar la veracidad de las faltas cometidas. Por otro lado, en cuanto al cargo de ilegalidad que la parte actora le imputa al acto acusado por ser violatorio del artículo 22 del Decreto Ley 14 de 1954 toda vez que fue suscrito por quien carecía de facultad para ello, estima el Director de la Caja de Seguro Social que no puede perderse de vista que Elizabeth Medina ostentaba en esa fecha, es decir el 10 de marzo de 1994, el cargo de Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, y de acuerdo con el Artículo 19 del Decreto Ley 14 de 1954, el Subdirector General de la Caja de Seguro Social tiene entre otras facultades, la de sustituir al Director General en casos de ausencias temporales de éste último. En cuanto a la violación por omisión del numeral 27 del Cuadro de Aplicación de Sanciones contenido en el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, opina que es necesario tener presente que de acuerdo con el propio Cuadro de Aplicación de Sanciones, las sanciones allí establecidas, se aplicarán en forma racional y de acuerdo a la gravedad de la falta. No obstante, igualmente alega que al funcionario demandante se le aplicó la causal de destitución contemplada en el Artículo 47, numeral e) del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, en el cual se prevé la destitución "por conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasione perjuicio al funcionamiento o prestigio de la Institución."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, contestó la demanda mediante la Vista N° 372 de 30 de agosto de 1995 visible de fojas 86 a 94 del expediente y en ella solicita que se denieguen las pretensiones de la parte actora.

Evacuados los trámites de ley la Sala procede a examinar las infracciones que el demandante imputa al acto acusado cuya declaratoria de nulidad demanda.

Una vez efectuado el estudio del expediente, concluye la Sala que los motivos por los cuales se procedió a la destitución del señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN del cargo de Operador de Computadoras que desempeñaba en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social, fueron efectivamente probados, tal como se evidencia en el informe de investigación expedido a raíz del incidente suscitado entre los funcionarios RAMÓN H. DE LEÓN y DAGO VANEGAS y de las declaraciones efectuadas (ver de fojas 44 a 77 y de fojas del expediente). Mediante dicho informe, se corrobora la conducta desordena e incorrecta en que incurrió el señor RAMÓN H. DE LEÓN, pues, agredió violentamente y amenazó con arma de fuego al señor Dago Vanegas. Vale destacar, que una vez que el señor DE LEÓN fue convencido a que entregara el arma de fuego, asumió nuevamente una actitud desafiante incitando al otro funcionario involucrado a una riña a fin de dirimir sus diferencias. Lo anterior, evidencia a la Sala que la conducta asumida por parte del señor RAMÓN H. DE LEÓN, no sólo representa un mal ejemplo y un peligro para la seguridad de los que allí laboran sino que pone en entredicho la buena imagen que toda entidad pública debe proyectar.

Aunado lo anterior, igualmente observa la Sala que mediante la investigación efectuada, también se pudo determinar que el señor RAMÓN HUMBERTO DE LEÓN se dedica a atender asuntos personales en horas de trabajo, habida cuenta que los sucesos a raíz de los cuales se produjo la destitución del señor DE LEÓN, tuvieron su génesis en el cobro de una comida por parte de éste al señor Dago Vanegas, dado que se dedicaba a estos menesteres dentro de la institución, cuando el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social en su artículo 22 literales a) e i) lo prohibe expresamente y, más aún, si se toma en consideración que el incidente de agredir y amenazar a un compañero con un arma de fuego, se suscitó en horas de la mañana del día 15 de julio de 1993, lo que indica que ocurrió en horas laborables. Se desestima, pues, la violación que se le imputa al Numeral 27 del Cuadro de Aplicación de Sanciones que contiene el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.

Finalmente, en relación a la violación al artículo 22 literal e) del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 que se le endilgada al acto acusado y que hace referencia a las atribuciones y deberes del Director de la Caja de Seguro Social, Sala desea aclarar, que en el libelo contentivo de la demanda la parte actora no lo tanscribe en los términos correctos contemplados en la ley, no obstante, procederemos a la confrontación del artículo en mención con los argumentos expuestos. En relación con lo antes anotado, no coincide la Sala con las aseveraciones de la parte demandante, toda vez que la Subdirectora de la Caja de Seguro Social no se subrogó de manera arbitraria en las funciones que privativamente le corresponden al Director de la Caja de Seguro Social, pues el artículo 19 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, la faculta plenamente para asumir esas funciones en los casos de ausencia del Director de la Caja de Seguro Social y, esa ocasión, era un hecho conocido que el cargo de Subdirectora de la Caja de Seguro Social lo ostentaba la señora ELIZABETH MEDINA. Se desestima, pues, este último cargo.

En razón de todo lo antes expuesto, lo procedente es, pues, desestimar las pretensiones de la parte demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 1404 de 10 de marzo de 1994, dictada por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 5/94 DEL 11 DE ENERO DE 1994 Y LA RESOLUCIÓN N° 7/94 DEL 29 DE ABRIL DE 1994, DICTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución N° 5/94 del 11 de enero de 1994 y la Resolución N° 7/94 del 29 de abril de 1994, dictadas por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda fue admitida y, oportunamente, el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, mediante Nota S/N° del 24 de agosto de 1994, rindió su informe de conducta (fs. 56-59), mientras que el entonces Procurador de la Administración contestó la demanda a través de la Vista N° 474 del 28 de octubre de 1994 (fs. 60-77).

De acuerdo con los hechos de la demanda, al señor FABIO JOSSFRE MATOS PERIGAULT se le adjudicó provisionalmente la Solicitud de Precios N° 142-146-93 (segundo llamado) convocada por el IPAT, luego de ofrecer a dicha institución, como oferta más favorable, la suma de mil setecientos veinticinco balboas con 55/100 (B/.1.725.55), en concepto de canon de arrendamiento de las instalaciones del Turiscentro de la Playita de Amador. Posteriormente, la Comisión Evaluadora del acto público rindió su informe fuera del término legalmente previsto y

recomendó la adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios a la empresa Agro Ganadera Santa Fe, S. A. que había propuesto un canon de arrendamiento mensual de mil quinientos siete balboas (B/1.507.00), es decir, inferior a la propuesta de la demandante. Dicha recomendación fue acogida por la Junta Directiva del IPAT mediante Resolución N° 5/94 del 11 de enero de 1994 y confirmada por el mismo ente a través de la Resolución N° 7/94 del 29 de abril del mismo año.

LAS NORMAS ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

En la demanda se cita como infringido el artículo 37 del Código Fiscal, el cual establece que el Ministerio o entidad respectiva formulará un pliego de cargos en el cual se expresará claramente las condiciones del contrato, en el que, cuando sea del caso, se fijará el precio que haya de servir de base para la licitación.

A juicio de la apoderada de la demandante, la norma citada se infringió porque aún cuando en el pliego de cargos se fijó las bases para la adjudicación definitiva que era de obligante acatamiento para la Comisión Evaluadora y para la Junta Directiva del IPAT, estos organismos rebasaron ese marco de legalidad al omitir, la primera, hacer el juicio de valor que sentara las bases para la adjudicación definitiva, limitándose a formular cifras subjetivas y sin fundamentación. Por su parte, el IPAT aceptó esa evaluación, sin tomar en cuenta que en ella no se consultaba el interés público de sentar las bases para que la adjudicación obedeciera a los mejores intereses de la entidad.

En la demanda se cita como infringido el literal d) del artículo 40-A del Código Fiscal, que expresa lo siguiente:

> **"Artículo 40-A:** Para participar como Postor de la licitación pública es necesario que la persona haya comprobado su idoneidad a ese efecto para lo cual el Estado por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro procederá en la siguiente forma:
> ...
> d) Una vez examinados los documentos y encontrándose éstos en regla, se procederá a emitir certificación en la que se acredite la idoneidad para participar en licitaciones públicas que incluirá el ramo de actividad en que se ha calificado como también le período en que es válida tal certificación. ..."

A juicio de la apoderada de la demandante, la norma transcrita fue violada porque la Comisión Evaluadora y el IPAT no respetaron la certificación que se le expidió a su representado con fundamento en la citada norma y que significaba su idoneidad en el ramo de actividad a que se refiere dicho acto público, por lo que al evaluar la propuesta del señor MATOS PERIGAULT debió dársele el valor que correspondía en los renglones de experiencia previa, capacidad administrativa y técnica.

El numeral 9 del artículo 47 del Código Fiscal, que se cita como infringido, expresa en su parte pertinente lo siguiente:

> **"Artículo 47°:** En la celebración de la licitación se observarán las siguientes reglas:
> ...
> 9. Al día siguiente de celebrado el acto público, el expediente pasará a la consideración de la Comisión Evaluadora de las propuestas, la cual deberá concluir su labor dentro de un término no mayor de ocho días calendarios, salvo que causas extraordinarias justifiquen que el jefe de la entidad encargada de la licitación le conceda, por escrito, una sola prórroga. La Comisión Evaluadora recomendará la forma en que debe adjudicarse la licitación. El dictamen de la Comisión se pondrá en conocimiento de los interesados que así lo soliciten.
>
> Dentro de los ocho (8) días siguientes a la expiración del término anterior, los interesados podrán presentar por escrito las

> observaciones y aclaraciones que consideren oportunas, las que serán incorporadas al expediente. El dictamen de la Comisión Evaluadora no es obligatorio para la autoridad que debe decidir, siempre que ésta justifique técnica y económicamente, mediante resolución motivada, que el dictamen no consulta los mejores intereses del Estado."

Estima el apoderado del actor que la norma citada fue violada porque la Solicitud de Precios tuvo lugar el 29 de septiembre de 1993 y la Comisión Evaluadora no rindió su informe hasta el 22 de diciembre de 1993, es decir, casi dos meses después y sin que exista evidencia de que se haya cumplido con la regla de oportunidad a que se refiere dicho precepto. Adicionalmente, el informe de la Comisión Evaluadora no es en sí un dictamen porque está carente de fundamentación, de juicios de valor que permitan establecer la razón y el por qué se asigna el porcentaje con que aparece cada proponente en los renglones correspondientes, conducta que impide establecer que la recomendación responde la mayor beneficio para la entidad encargada y a los objetivos del acto público.

También se considera infringido los dos primeros párrafos del artículo 50 del Código Fiscal, que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 50: El Ministro del ramo o el representante de la entidad pública correspondiente, que han cumplido las formalidades establecidas en la Ley, mediante resolución motivada adjudicará definitivamente la licitación a la persona cuya propuesta represente el mayor beneficio para el Estado.
>
> La adjudicación de la licitación tomará en consideración, para determinar el mayor beneficio para el Estado señalado en la Constitución, la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes. La decisión final se adoptará para adjudicar la licitación a la propuesta que represente mayor calidad al menor precio, según los reglamentos que se dictan al efecto. ..."

En el concepto de la infracción, la apoderada del demandante expresa que el informe de la Comisión Evaluadora no puede servir de base para determinar el mayor beneficio para el Estado, ya que no explica cómo y por qué atribuye las puntuaciones que se le asigna a cada proponente en los renglones que tuvo como referencia. la falta de fundamentación impide una apreciación valorativa correcta porque la función no se limita a un examen formal, ella requiere juicio u opinión razonada y fundada, que haga emerger el fin que se persigue.

Finalmente, se cita como infringido el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N° 33 del 9 de mayo de 1985, cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 27. La Comisión Evaluadora de las Propuestas que se establece en el artículo 47 numeral 9 del Código Fiscal, subrogado por el artículo 12 de la Ley 31 de 8 de noviembre de 1984, será nombrada por el respectivo Ministro o titular de la entidad licitante. La Comisión estará presidida por un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro o en su defecto por el funcionario respectivo de la entidad licitante y, además, integrada por servidores públicos y, en los casos que lo requiera la entidad licitante, por personas particulares, todos de idoneidad acreditada como expertos en la materia de que trata la licitación que, a juicio de quien deba nombrar la Comisión, se requiera a los efectos de garantizar una adecuada recomendación para el escogimiento de la propuesta que más convenga al Estado y sea justa su adjudicación. La Comisión estará integrada por no menos de tres (3) ni más de cinco (5) miembros.
>
> La Comisión considerará y evaluará las propuestas y dictaminará sobre la Licitación Pública, así como también sobre el Concurso de Precios que previamente haya obtenido la exención de licitación Pública, con sujeción al procedimiento, plazos, recursos y reservas establecidos en las normas pertinentes y aplicables del Código

Fiscal.

Para la evaluación, el valor oficial estimado servirá de referencia a la Comisión para determinar si las admitidas son gravosas o riesgosas para el Estado."

De acuerdo con la apoderada del actor, de la norma transcrita se desprende que la función de la Comisión Evaluadora no consiste en un simple examen formal, sino que requiere de consideraciones de fondo y de orden técnico, lo cual no se cumplió en el presente caso porque la Comisión Evaluadora de la Solicitud de Precios N° 142-146-93 se limitó a establecer unos renglones y a atribuirles una puntuación a cada participante en relación con dichos renglones. No existe opinión fundada ni juicio de valor que justifique o fundamente la recomendación, lo que significa que dicho informe no cumple con lo que exige la norma aludida.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La primera norma que se considera violada es el inciso 1° del artículo 37 del Código Fiscal, la cual obliga a la entidad licitante a formular un pliego de cargos en el que se expresen claramente las condiciones del contrato, entre las que está el precio. La Sala estima que la infracción del citado precepto no se ha dado, pues, en el expediente contentivo de la Solicitud de Precios para el arrendamiento del Turiscentro de La Playita de Amador, se observa que el Instituto Panameño de Turismo cumplió exactamente con lo dispuesto en la norma que se invocada como violada, es decir, con la formulación del respectivo Pliego de Cargos (Cfr. fs. 308-326). En el Capítulo I del Pliego, se establecen las "Condiciones Generales" del citado acto público, tales como: el lugar y fecha para la recepción de las propuestas, así como su período de validez; la responsabilidad del proponente; el formulario de propuesta; el certificado de postor; la aceptación del Pliego de Cargos y especificaciones; la adjudicación del acto público; la fianza de cumplimiento; etc.

Asimismo, el Capítulo II regula lo concerniente al "Modelo de Fianzas y Documento de Propuesta" y, el Capítulo III, alude a las "Condiciones Especiales" del contrato de arrendamiento, entre las cuales están: el uso de las instalaciones y facilidades; el término de duración y prórroga del contrato; el impuesto a pagar; las inspecciones; la instalación de mejoras, diseños, mobiliario y equipo de locales; los servicios públicos; la entrega del Turiscentro; las causas de terminación anticipada del contrato; la prohibición de venta, traspaso subarriendo o transferencia del contrato; la fianza de cumplimiento; la responsabilidad del arrendatario ante el Estado; la prevención de accidentes; etc.

Como aparece probado en autos, la entidad demandada cumplió con formular claramente el Pliego de Cargos de la Solicitud de Precios para el arrendamiento del Turiscentro de La Playita de Amador y la adjudicación de dicho acto público se hizo tomando en consideración las especificaciones contenidas en el pliego de cargos. Así se desprende claramente del Acta de Evaluación de las Propuestas (Cfr. fs. 7-15), en la que se mencionan cada uno de los aspectos que se evaluaron y que habían sido determinados previamente en el Pliego de Cargos. Por tanto, estima la Sala que no le asiste la razón a la demandante y debe desestimarse el primer cargo.

Con relación a la violación del artículo 40-A del Código Fiscal, este precepto exige que todo el que ha de participar en una licitación pública, compruebe su idoneidad mediante un certificado de postor otorgado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, que debe incluir el ramo de actividad en que se ha calificado y el período en que es válida tal certificación.

En opinión del actor, la norma mencionada se violó porque en el momento en que se evaluó su propuesta no se le dio el valor que correspondía en los renglones de experiencia previa, capacidad administrativa y técnica.

A juicio de la Sala, el artículo 40-A del Código Fiscal tampoco se violó, porque el mismo simplemente se limita a establecer uno de los requisitos que debe llenar toda persona natural o jurídica que pretende participar en una licitación

pública, cual es la obtención de un certificado de postor. De acuerdo con el literal f) del mismo artículo, dicho certificado tiene el propósito de acreditar la idoneidad de cada persona natural o jurídica "**como licitante**" y su otorgamiento, supone que quienes lo han obtenido gozan de la idoneidad para desarrollar las actividades a que se refiere el acto licitatorio. En el presente caso, consta a foja 235 que la empresa ganadora de la Solicitud de Precios N° 142-146-94, al igual que la demandante, cumplió con el artículo 40-A del Código Fiscal al presentar para participar en dicho acto, su respectivo certificado de postor.

Por lo anterior, la Sala comparte la opinión del entonces Procurador de la Administración expuesta en el sentido de que la expedición del Certificado de Postor a favor del demandante no implicaba en modo alguno "que previo a la expedición de este certificado había que evaluar o calificar el beneficio económico, financiero, administrativo, técnico de inversiones o los planes y programas de desarrollo que se tenían para el Turiscentro por parte del Sr. Matos Perigault, todo lo cual se efectuó en actos posteriores por la Comisión Evaluadora, a la adjudicación definitiva" (fs. 66). Por las razones expuestas, la Sala descarta la infracción del artículo 40-A del Código Fiscal.

Con relación a la infracción del artículo 47 ibídem, la Sala considera que la misma tampoco se ha dado, ya que esta norma no se aplica en las Solicitudes de Precios en las que el Ministro del ramo o el representante de la entidad pública respectiva adjudica definitivamente dicho acto público a quien haya presentado el mejor precio y ofrezca mejores condiciones al Estado, sin nombrar a la Comisión Evaluadora a que se refiere el numeral 9 de aquélla norma, tal como expresan la propia demandante en su alegato y el funcionario demandado en su informe de conducta. Por tanto, estima la Sala, que la entidad que celebra la Solicitud de Precios no está sujeta al término establecido en la norma que se invoca como violada, pues, dicho término se estableció en función de la Comisión encargada de evaluar las propuestas en las licitaciones públicas y en los concursos de precios, la cual debe contar con término máximo para desarrollar esa labor evaluadora.

El propio Decreto Ejecutivo N° 33 del 3 de mayo de 1985, vigente en el momento en que se celebró la solicitud de precios, reafirma lo indicado cuando expresa en el segundo párrafo del artículo 27, relativo a la Evaluación de las Propuestas, que "La Comisión considerará y evaluará las propuestas y dictaminará sobre la **Licitación Pública**, así como también sobre el **Concurso de Precios** que previamente haya obtenido la exención de Licitación Pública, **con sujeción al procedimiento**, **plazos**, **recursos y reservas establecidas en las normas pertinentes y aplicables del Código Fiscal**".

La Sala considera que aun cuando en el presente caso se designó una Comisión Evaluadora para estudiar cada una de las propuestas presentadas, ello no constituye una violación al ordenamiento jurídico, ya que su nombramiento contribuyó a que se cumpliera con el fin primordial de la ley fiscal de garantizar el mayor beneficio para el Estado mediante la elección del postor que más conviene a sus intereses.

En la demanda se cita como violado el artículo 50 del Código Fiscal, en virtud de que, a juicio del demandante, no se cumplió con las formalidades legales porque la Comisión encargada de evaluar las propuesta entregó su informe tardíamente, además de que también se omitió la fundamentación y el juicio de valor que debió dar la Comisión Evaluadora en su dictamen.

La Sala considera que tampoco le asiste la razón al demandante porque, como se indicó anteriormente, no existía obligación de parte del Instituto Panameño de Turismo de someterse al término que establece el numeral 9° del artículo 47 del Código Fiscal para el caso específico de las licitaciones públicas y los concursos de precios, en los que sí es imperante la designación de la aludida Comisión Evaluadora de las propuestas.

Con respecto a la alegada omisión de las razones de juicio que sustentan la asignación de la puntuación a cada uno de los proponentes, la Sala debe

indicar, en primer lugar, que en la etapa de evaluación de las propuestas el Código Fiscal no establece reglas en cuanto al sistema o mecanismo mediante para la ponderación o calificación de cada una de las propuestas (Cfr. art. 47, N° 9), limitándose a señalar ciertos aspectos que necesariamente deben considerarse para determinar el mayor beneficio para el Estado, tales como: la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los postores.

El hecho de que la ponderación de las propuestas se haya hecho mediante la asignación de una puntuación a cada una de ellas no viola el artículo 50 del Código Fiscal, ya que, tal como se desprende del Acta de Evaluación de las mismas (fs. 7-15), esta puntuación corresponde precisamente a la calificación otorgada a cada proponente en función del **cumplimiento u observancia** de los aspectos previamente identificados en el Pliego de Cargos y a los cuales también se les señaló un determinado puntaje. De acuerdo con la referida Acta, los aspectos evaluados fueron: el beneficio económico para el IPAT (20 puntos); la capacidad financiera del proponente (10 puntos); la experiencia previa en negocios similares (15 puntos); la capacidad administrativa del uso o destino de las instalaciones (25 puntos); la capacidad técnica y mercadeo turístico a nivel nacional e internacional (15 puntos); la inversión adicional financiera, activos y mobiliarios (5 puntos) y los planes y programas de desarrollo en el turiscentro (10 puntos).

La Sala no comparte la opinión que expuso la demandante en relación con la evaluación de las propuestas en las que, según ella, se omitió toda fundamentación o juicio para asignar una puntuación a cada proponente, pues dicha fundamentación se desprende del cuadro de evaluación de las propuestas que reposa de la foja 11 a la 15, en el que se identifican con detalles los aspectos evaluados y el puntaje otorgado a cada proponente, tomando como base para esa ponderación la documentación que adjuntaron los mismos al presentar su propuesta.

Por las razones anotadas, la Sala considera que el cargo de infracción del artículo 50 del Código Fiscal no se ha dado.

En cuanto a la alegada infracción del artículo 27 del Decreto Ejecutivo N° 33 del 3 de mayo de 1985, la Sala estima que esta norma no es aplicable en el presente caso, pues, la misma regula exclusivamente aspectos relativos a la Comisión Evaluadora de las Propuestas y, como se dejó dicho, la designación de esta Comisión sólo es obligatoria en el caso de las licitaciones públicas y concursos de precios.

Por todo lo expuesto, la Sala Tercera concluye que no se han producido ninguna de las infracciones que se alegan y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO SON ILEGALES la Resolución N° 5/94, del 11 de enero de 1994 y la Resolución N° 7/94, del 29 de abril de 1994, expedidas por el Gerente General y por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, respectivamente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HERACLIO SANJUR MARCUCCI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 204 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDA POR EL PROCURADOR DE LA NACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, actuando en su propio nombre y representación, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 204 de 15 de febrero de 1993, emitida por el señor Procurador General de la Nación.

La parte actora solicita además que se le restituya al cargo que ocupaba como Fiscal Auxiliar de la República en el Ministerio Público, y se le pague los salarios caídos, gastos de representación y demás emolumentos dejados de percibir en ese cargo desde el 16 de febrero de 1993 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; más una indemnización equivalente a tres veces y media (3 1/2) el sueldo y gastos de representación mensuales, por cada mes que ha estado destituido. (Fs. 94-97).

Por medio del acto impugnado se declaró insubsistente el nombramiento del licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, en el cargo de Fiscal Auxiliar de la República en el Ministerio Público, a partir del 15 de febrero de 1993. (Fs. 5 y 9).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 438 de 1° de octubre de 1993, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 175-187); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 47-49).

I. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 288, 289, 377 y 1966, todos del Código Judicial, cuyo texto transcribimos a continuación:

CÓDIGO JUDICIAL

> **"288.** La jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados será ejercida por el respectivo superior jerárquico.
>
> **289.** El procedimiento consistirá en:
>
> a. Dar vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda;
>
> b. Admitir las pruebas conducentes que se presenten a favor del acusado o en su contra, cuando alguien quiera hacerlo;
>
> c. Señalar un término no menor de tres días ni mayor de quince para su práctica;
>
> d. Procurar de oficio la comprobación de los hechos que constituyen la falta disciplinaria; y,
>
> e. Oír de palabra o por escrito al acusado y, a juicio del funcionario sustanciador, a cualquier persona que desee hacerlo, en un término común de cinco días. ...
>
> **377.** Los Agentes del Ministerio público no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino en los casos y con la formalidades que determina la Ley, ni podrán ser destituidos, sino en virtud de sentencia por delito o por falta grave contra la ética judicial."
>
> **"1966.** Toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a

toda denuncia se presume su inocencia."

Al exponer el concepto en que las normas transcritas han sido violadas, el demandante alegó que el Código Judicial consagra la presunción de inocencia frente a toda denuncia; que el licenciado **HARACLIO SANJUR MARCUCCI** fue destituido sin ser oído, no se le siguió proceso penal alguno por razón de delito, ni tampoco el superior jerárquico o la autoridad nominadora (Procurador General de la Nación encargado) probó en un proceso disciplinario, previo al despido, la comisión de infracciones o faltas a la ética judicial. Expresa el demandante que los artículos 288, 289, 377 y 1966 del Código Judicial han sido violados en concepto de violación directa por omisión o falta de aplicación. (Fs. 105-111).

Finalmente, el demandante considera que se ha violado el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, el cual exige que las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional se notifiquen personalmente al interesado y que se expresen los recursos que por la vía gubernativa proceden y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente. La infracción de esta norma se ha dado porque el acto impugnado omitió indicar los recursos que procedían y el término dentro del cual se debían interponer los mismos, por lo que, el funcionario demandado al dictar el acto impugnado, quebrantó las formalidades contenidas en esta norma.

A estos cargos se opuso el señor Procurador de la Administración expresando que, el licenciado **SANJUR MARCUCCI** no estaba amparado por el artículo 271 del Código Judicial, y por tanto, al no haberse implementado la Carrera Judicial en el Ministerio Público, dichos funcionarios pueden ser removidos, suspendidos o destituidos discrecionalmente por la autoridad nominadora. Según el señor Procurador, tampoco se ha violado el artículo 1966 del Código Judicial, porque la separación del licenciado **SANJUR MARCUCCI** del cargo de Fiscal Auxiliar de la República no se debió a una denuncia de naturaleza penal como supone el artículo que se dice infringido, sino a una medida o sanción de carácter disciplinario, por negligencia en el ejercicio de sus funciones y clara desatención a las normas de la ética judicial. En cuanto al artículo 29 el señor Procurador expresó que no ha sido violado porque, conforme el artículo 19 de la Ley 33 de 1946 "el demandante se dio por enterado de la resolución y accionó contra ella." (Fs. 178-186).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

En cuanto a este último cargo de violación, la Sala comparte el criterio del señor Procurador de la Administración al afirmar que, si bien la autoridad que dicta un acto administrativo debe indicar los recursos que proceden y el término dentro del cual éstos pueden interponerse, esta omisión fue subsanada de conformidad con el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, que dispone como excepción a esta regla, el hecho de que "la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ello o utilice en tiempo los recursos legales".

En el caso que nos ocupa, el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** se notificó del acto impugnado el 16 de febrero de 1993 (fs. 10), e interpuso recurso de reconsideración el 25 de febrero de 1993 (fs. 25), el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 407 de 21 de abril del mismo año (fs. 45-52). Una vez agotada la vía gubernativa la parte actora interpuso ante la Sala Tercera la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción objeto de este proceso. Por tanto, no se ha violado el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, porque se ha probado que se ejercieron en tiempo oportuno los recursos correspondientes.

A continuación los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a confrontar el resto de las normas que se citan como violadas con la Resolución impugnada en esta demanda.

La Resolución impugnada N° 204 de 15 de febrero de 1993, fue dictada con fundamento en los artículos 22, 23, 269, 271, 346 numerales 3, 12 y 14, 347 numeral 5, 350 numeral 3 y demás concordantes del Código Judicial (fs. 5), los cuales disponen, en su orden, lo siguiente:

1. Que además de los requisitos generales exigidos para ocupar un cargo en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, se debe aportar un certificado médico en que conste una prueba negativa en el uso de drogas ilícitas y esta prueba puede ser exigida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en cualquier tiempo mientras el funcionario judicial ejerza el cargo;

2. Que los cargos de voluntaria aceptación se pierden por delito o falta grave contra la ética judicial, decisión que debe ser tomada por la autoridad nominadora previa comprobación de los hechos;

3. Que no forman parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y el personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de la carrera judicial; y que para ingresar a la Carrera Judicial es preciso cumplir con los requisitos exigidos por la Ley o los reglamentos para ocupar el cargo respectivo;

4. Que sólo gozarán de los derechos y garantías consagradas en el Código para la Carrera Judicial, los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha Carrera; no obstante esta disposición, tendrán también estabilidad en el cargo quienes no cumplan con los requisitos señalados en el Código pero que hayan sido nombrados, por lo menos, cinco años antes de la promulgación de la Ley N° 19 de 1991 (Art. 271 del Código Judicial);

5. Que es función de los Agentes del Ministerio Público vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y rendir informe sobre la marcha de la administración de justicia en relación a sus respectivas circunscripciones; y,

6. Que es atribución del señor Procurador General de la Nación cuidar que los demás servidores del Ministerio Público desempeñen fielmente sus cargos, exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes.

El señor Procurador General de la Nación, señaló en los considerandos del acto impugnado las razones por las cuales declaró insubsistente del cargo al licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, expresando lo siguiente:

> "Que el Lic. Heraclio Sanjur, Fiscal Auxiliar de la República, desde la fecha de su designación el 28 de febrero de 1992 hasta el 15 de febrero de 1993, no ha presentado ninguna relación de expedientes pendientes y/o tramitados en la Fiscalía a su cargo, de acuerdo con nota de 12 de febrero de 1993 del Jefe del Departamento de Informática del Ministerio Público, lo que denota una manifiesta y prolongada morosidad, incurriendo así en violación directa y flagrante de la Ley.
>
> Que se ha desaparecido en las oficinas de la Fiscalía Auxiliar el expediente que contiene el sumario seguido a él o los responsables de la explosión ocurrida el día viernes 6 de noviembre de 1992, en el estacionamiento de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el oficio N° 1261 de 27 de enero de 1993, dirigido por el Fiscal Auxiliar al Procurador General de la Nación, Encargado, lo que denota una total negligencia y falta de cuidado en el manejo de los expedientes, incurriendo así en violación directa y flagrante de la Ley.
>
> Que la Procuraduría General de la Nación el día 20 de enero de 1993, en base en el artículo 22 del Código Judicial conceptúa que se debe destituir a aquellos funcionarios que en la prueba de detección de drogas resultaron positivo.
> ...
> Que el Fiscal Auxiliar, sin tener en cuenta el artículo 22 del Código Judicial promueve procedimiento para aplicar una medida disciplinaria, que de acuerdo con el artículo 297 del Código Judicial que no conlleva la pena de destitución.

...
Que este despacho le requirió personal y verbalmente ante testigos al señor Fiscal Auxiliar de la República que le informara diariamente de los casos y hechos de su conocimiento y trámite, y, este funcionario ha hecho caso omiso a tales requerimientos, tanto más que expresó que no tenía porque hacerlo.

Que es atribución especial del Procurador General de la Nación:

"Artículo 347: ...
...
5. Cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes;
..."

Que en virtud de lo anterior el señor Fiscal Auxiliar no goza de la confianza de este despacho.

Que el Lic. Heraclio Sanjur no está amparado por Carrera Judicial y se justifica su remoción de conformidad con el artículo 271 del Código Judicial por haber incurrido en las causas antes mencionadas, que ameritan su declaración de insubsistencia como Fiscal Auxiliar de la República, posición que es de libre remoción del Procurador General de la Nación." (Fs. 3 -10).

Además de las razones invocadas en el acto impugnado, la autoridad demandada señaló en la Resolución No. 407 de 21 de abril de 1993, mediante la cual resolvió el recurso de reconsideración presentado por el recurrente, que se probó la morosidad, negligencia e irresponsabilidad del licenciado **SANJUR MARCUCCI**, en relación con cinco Habeas Corpus enviados desde el 2 de febrero de 1993 para su informe, y que al 16 de febrero aún no habían sido contestados, según consta en la Nota N° PCSJ-021-93 de 1993, suscrita por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; que en cuanto a la pérdida del expediente de la bomba, desaparecido en la oficina del señor Fiscal Auxiliar, este hecho denota, por más argumentos que se aduzcan, negligencia en el manejo de ese expediente y falta de cuidado porque el jefe del despacho es el responsable directo de todo lo que en el sucede, y reponer el expediente no lo exime de responsabilidad penal por la pérdida del mismo y amerita una investigación sumarial que ya está en proceso; que ante el requerimiento de informes y una relación mensual de expedientes por la Procuraduría General de la Nación, el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** manifestó el día 22 de enero de 1993, que "él no tenía por qué hacerlo" (fs. 168); que a pesar de la libertad de religión que consagra nuestra Constitución, sancionó a una humilde empleada de su despacho a cinco (5) días de suspensión con el descuento respectivo, por el hecho de no acudir a una misa con motivo del estallido de la bomba; y que como Fiscal no debió conceder medida cautelar al detenido Ángel Hardin Cáceres sin haber rendido declaración indagatoria.

En relación con los cargos y las faltas mencionadas en el acto originario impugnado y en la resolución confirmatoria, el demandante alegó que sólo existen dos causas legales de despido para los Agentes del Ministerio Público, conforme al artículo 377 del Código Judicial, cometer delito o falta grave contra la ética judicial, y en este caso no ha sido probada ninguna de las faltas que se le imputan en proceso penal o disciplinario, ni tampoco en este proceso contencioso administrativo, como lo exige la Ley (fs. 312); y que las nuevas causas de destitución que se le imputan en la Resolución N° 407 de 1993 constituyen una actuación contraria a la Ley, porque el funcionario demandado tenía que limitarse a confirmar, revocar o reformar el acto original, imponiendo una sanción menor (no aumentándola) o sustituyéndola por otra. (Fs. 309).

En cuanto a la acusación de morosidad en rendir los informes y presentar la relación mensual de expedientes pedidos al Fiscal Auxiliar por la Procuraduría General de la Nación, consta a foja 140 la nota DPG-311-93 dirigida por el Procurador General de la Nación al licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, de 5 de

febrero de 1993, en la que reitera la nota N° DPG-217-93, enviada el 28 de enero de 1993, solicitándole el movimiento de expedientes de la Fiscalía a su cargo; y señala la nota que, el Departamento de Informática no ha recibido el citado informe, y que lo requiere a la mayor brevedad posible. También consta a foja 141 la nota de 12 de febrero de 1993, dirigida por el Jefe del Departamento de Informática Jurídica al Procurador General de la Nación, en la que le notifica que desde el nombramiento del señor **MARCUCCI** y lo que va del presente, no se ha recibido ninguna relación de expedientes pendientes o tramitados.

El licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** no niega la existencia de esta primera falta, sino que aporta como prueba el oficio N° 1477 de 3 de febrero de 1993 (fs. 24-26 del cuadernillo de pruebas) dirigido al Procurador General de la Nación, en el que expresa las inconveniencias que enfrenta su oficina para rendir los informes; y presenta además, los testimonios de los señores TOMÁS PÉREZ, quien ejercía el cargo de Secretario de segunda categoría en la Fiscalía Auxiliar de la República (fs. 266-267); JOSÉ EDUARDO AYU PRADO quien fungía a la fecha de su destitución como Secretario General de la Fiscalía Auxiliar de la República, y quien aceptó que en conversación con el señor Procurador General de la Nación y el Fiscal Auxiliar de la República, en la que se habló de la relación mensual de expedientes, expresó lo siguiente: "Señor Procurador, con todo el respeto que usted se merece, debo decirle que ni ayer, ni hoy ni mañana se le va enviar una relación mensual de los negocios de la Fiscalía Auxiliar de la República, porque eso nunca se hace ni nunca se ha hecho"; y el testimonio de SALOMÓN DÍAZ, Analista Programador de Computadoras y Jefe Encargado del Departamento de Informática del Ministerio Público desde 1987, departamento responsable de suministrar al Procurador General de la Nación los informes estadísticos que se recopilan y procesan en ese departamento, y quien al rendir declaración jurada, expresó lo siguiente:

> "Desde que yo trabajo en ese Depto. allí se reciben informes de las Fiscalías Superiores de todo el país, Fiscalías de Circuito, Personerías Municipales y desde 1990 recibimos también informes de las Fiscalías Delegadas. PREGUNTADO: Diga el testigo si antes de 1991 la Fiscalía Auxiliar de la República ha remitido a Informática o a la Procuraduría General de la Nación lo que se llama la "Relación Mensual de Expedientes" o el informe de movimiento de lo que se llama "Expedientes Pendientes y/o Tramitados"? CONTESTADO: No PREGUNTADO: A partir de 1993 la Fiscalía Auxiliar de la República ha estado remitiendo al Depto. de Informática Jurídica del Ministerio Público o a la Procuraduría General de la Nación la relación mensual de expedientes o el informe relativo a expedientes pendientes y/o tramitados? CONTESTADO: No PREGUNTADO: Diga el testigo cuándo comenzó la Fiscalía Auxiliar de la República a remitir al Depto. de Informática Jurídica del Ministerio Público o a la Procuraduría General la relación mensual de expedientes y o el informe de expediente pendientes y/o tramitados? CONTESTADO: Hasta la fecha no se ha recibido ni se recibe este tipo de información de la Fiscalía Auxiliar PREGUNTADO: De conformidad con sus expedientes y conocimientos en ese Depto. de Informática, le pregunto si en los registros o archivos de esa oficina existe constancia de que alguna vez en el pasado o en el presente la Fiscalía Auxiliar haya confeccionado esa relación mensual de expedientes? CONTESTADO: Desde que yo estoy allí en 1987, a la fecha yo no tengo conocimiento de que se haya enviado ningún informe de ese tipo al Depto. de Informática. PREGUNTADO: El testigo ha expresado en respuesta anterior, que él le dijo al Procurador General JORGE R. VALDÉS CH., que la Fiscalía Auxiliar jamás había remitido el informe de relación mensual de expedientes; le pregunto al testigo de acuerdo con su experiencia y conocimientos, porqué razón o a qué atribuye usted que jamás ni actualmente la Fiscalía auxiliar de la República remita a Informática esta relación mensual de expedientes? CONTESTADO: Yo lo atribuyo primeramente al volumen de información que allí se maneja, ya que la confección de ese tipo de relación que se nos envía al Depto., es bastante detallada, además, dicha información es un tipo de datos que le llamamos nosotros muy volátil, o sea allí la mayoría

> de la información el cambio es constante, a mí me parece que utilizando los métodos mensuales que es lo que se llevaba y lo que se lleva en la actualidad sería sumamente difícil la confección de esa relación mensualmente." (Fs. 256-259).

A juicio de la Sala, se ha probado la existencia de la falta que se imputa al licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, a quien su superior jerárquico le requirió el informe de los expedientes pendientes o tramitados, sin recibir respuesta alguna por parte de dicho funcionario. El artículo 346 del Código Judicial consagra los deberes de todos los Agentes del Ministerio Público, entre los cuales está el de rendir un informe sobre la marcha de la administración de justicia en relación a sus respectivas circunscripciones e indicar las reformas que convengan hacer, y este informe debe ser dirigido al superior jerárquico respectivo durante el mes de agosto de cada año a partir de la vigencia del Código. Además los informes o relación de casos tramitados o en trámite, son un instrumento mediante el cual el superior supervisa la actuación del inferior en cumplimiento de los artículos 347 numeral 5 del Código Judicial.

Estima la Sala que ha sido probado el cargo que guarda relación con la desaparición del expediente instruido para determinar los responsables de haber colocado la bomba que explotó en la Procuraduría General de la Nación el viernes 6 de noviembre de 1992, el señor Procurador General de la Nación considera que como jefe del despacho, y superior jerárquico de su personal, el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** es responsable de dicho incidente; y que no lo exime de dicha responsabilidad haberle notificado al señor Procurador mediante el oficio N° 1261 de 27 de enero de 1993 (fs. 139), que por medio de la resolución de 27 de enero de 1993 se había decretado la reposición de dicho expediente.

La Sala estima que al señor Procurador le asiste la razón cuando afirma que el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** debió destituir a los funcionarios FRANCISCO CERRUD Y JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, porque al practicarle las pruebas de laboratorio para determinar si consumían drogas ilícitas, éstas resultaron positivas, y el consumo de esas drogas, además de constituir una grave falta a la ética judicial, es incompatible con el desempeño de funciones en el Órgano Judicial.

Consta en el expediente las resoluciones N° 82 y 86 de 19 de enero de 1993, dictadas por el Procurador General de la Nación, mediante las cuales se declara insubsistente los nombramientos de FRANCISCO CERRUD Y JUAN PAULINO RODRÍGUEZ, con fundamento en el informe del Doctor Urbano Martínez de 5 de enero de 1993 que certifica que estos funcionarios usan drogas, comportamiento incompatible con las funciones y conducta propia de los empleados del Ministerio Público; que estas resoluciones fueron revocadas por las resoluciones N° 2 y 4 respectivamente, por falta de competencia del señor Procurador para aplicar la medida disciplinaria; al resolver el recurso de reconsideración presentado por estos funcionarios, y en las que se señaló que, con fundamento en el dictamen médico en que se fundamentó la destitución, se hacía necesario que fuera la autoridad nominadora quien asumiera la responsabilidad de coadyuvar en la profilaxis iniciada por ese despacho. (Fs. 17-20 del cuadernillo de pruebas). Estas resoluciones señalan en su artículo 1 que se recomienda al superior jerárquico y nominador de CERRUD Y RODRÍGUEZ, adoptar la medida disciplinaria que el caso amerita, y el licenciado **SANJUR MARCUCCI** no lo hizo. Alega a su favor que como superior de estos funcionarios nunca recibió y ni siquiera se le dejó ver el resultado de los exámenes y de allí que no podía proceder a destituirlos sin prueba del cargo; no obstante le instruyó proceso disciplinario a ambos funcionarios, tal como lo comunica al Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el oficio N° 1642 de 8 de febrero de 1993 (fs. 28 del cuadernillo de prueba), y no hay constancia en autos si estos procesos fueron o no resueltos.

En cuanto al cargo que guarda relación con la morosidad del licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, en rendir los informes de 5 Habeas Corpus que estaban en la Corte Suprema de Justicia durante ese período, consta la nota de queja enviada por el entonces Magistrado Carlos Lucas López al Procurador General de la Nación, acompañada de la Nota N° 163 de 16 de febrero de 1993 en la que el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Cuestas, comunica

al Magistrado Presidente la morosidad inusual en que ha incurrido el licenciado **HERACLIO SANJUR**, Fiscal Auxiliar de la República, al no rendir informe en 5 Habeas Corpus entre el 2 y el 16 de febrero de 1993. Si bien la destitución se dio el 15 de febrero, la morosidad se había dado antes de esa fecha.

En cuanto a la falta que se le imputa al licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** de sancionar a la señora GENOVEVA SAAVEDRA DE WALKER violando el derecho a la libertad de culto que le otorga la Constitución Nacional, él se excepciona afirmando que dicha funcionaria fue sancionada por otras causas y no por las que aduce el Procurador interino (fs. 103) y aduce como prueba la Resolución N° 82 de 9 de noviembre de 1992, que no reposa en el expediente porque no fue remitida por el Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República, a pesar de solicitársele mediante el oficio que consta a foja 320 del expediente. Además, como descargo presentó los testimonios de la licenciada MARIELA CORRO, TOMÁS PÉREZ y AYU PRADO quienes afirman que esta trabajadora tuvo problemas en el despacho donde estaba nombrada, razón por la cual la trasladaron a la Fiscalía Auxiliar de la República, y que además la sanción nunca se cumplió y el descuento no se hizo efectivo. (Fs. 287, 267, 302 y 303) Este cargo, por tanto no ha sido plenamente probado.

Finalmente, en cuanto a la falta que se le imputa al licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** por haberle concedido una medida cautelar sustitutiva de la detención preventiva al detenido Ángel Harding Cáceres, antes de que rindiera declaración indagatoria, quien estaba sindicado por posesión ilícita de drogas (fs. 169), consta a foja 285 la declaración del apoderado del señor HARDING, licenciado HORACIO RAMSEY MORALES, en la cual afirma que el delito de posesión ilícita de drogas que se imputaba a su defendido no ameritaba la detención preventiva por lo que se solicitó la medida cautelar en reemplazo de la detención preventiva, y que además, el Juzgado Décimo Segundo del Circuito de Panamá, Ramo Penal, ratificó la medida cautelar que le había otorgado la Fiscalía Auxiliar, pero esta decisión, que constituye la plena prueba de la referida actuación del Ministerio Público, no consta en autos. Este cargo, a juicio de la Sala debe desestimarse porque, por decisión de la Sala, las pruebas pedidas por el demandante no fueron allegadas al proceso.

El licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** alega también que el acto confirmatorio, Resolución N° 407 de 21 de abril de 1993, introdujo nuevas causas de despido y sólo se ocupó de cuatro de los cargos formulados en el acto originario, y que por tanto no la podía confirmar en todas sus partes como lo hizo. Según el demandante estos actos están viciados por desviación de poder porque el Procurador General de la Nación procedió con animosidad contra el suscrito, por rencor y para vengarse de él, violando así el orden legal. (Fs. 314). En cuanto a este cargo, que se formula extemporáneamente en el alegato, el demandante no cita norma alguna violada por ese motivo, por tanto la Sala no puede examinar este cargo.

Consta en autos, que el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** fue nombrado como Fiscal Auxiliar de la República, en virtud del Decreto número 4105 de 28 de enero de 1992 (fs. 53-54), y fue destituido el 15 de febrero de 1993, mediante la Resolución N° 204 de esta fecha, impugnada en el presente proceso.

El Código Judicial regula la Carrera Judicial en su Título XII, de sus artículos 269 al 300; entre estas normas están los artículos 288 y 289 que el demandante estima violados y que corresponden al Capítulo IX intitulado "De las Correcciones Disciplinarias". El artículo 271 de esta excerta legal preceptúa que, sólo gozarán de los derechos y garantías consagradas en este Código para la carrera judicial los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a la Carrera.

Por el Acuerdo N° 46 de 27 de septiembre de 1991 (G. O. N° 21,895 de 16 de octubre de 1991) se desarrolló la Carrera Judicial para los funcionarios del Órgano Judicial, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Judicial vigente. Por su parte, el Ministerio Público reglamentó el ingreso de sus funcionarios a la Carrera Judicial mediante la Resolución N° 13-94 de 25 de mayo de 1994,

promulgada el 29 de agosto de 1994 (G. O. 22.610), y esta resolución se dejó sin efectos mediante la Resolución N° 1 de 3 de enero de 1995 promulgada el 4 de enero de 1995 (G. O. 22.696).

Consta en autos, que el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** fue nombrado en el cargo de Fiscal Auxiliar de la República para llenar la vacante que se había producido al momento en que su titular pasó a ocupar otra posición dentro del Ministerio Público. (Fs. 53). Por tanto, su nombramiento no fue hecho con arreglo a la Carrera Judicial como lo dispone el artículo 221 de la Constitución Política y el Código Judicial. "Los funcionarios del Ministerio Público que por ley pueden formar parte de la Carrera Judicial, podrán ser funcionarios de carrera cuando ésta sea debidamente reglamentada e ingresen a la misma cumpliendo todos los requisitos señalados en la Ley y el reglamento que la desarrolle." (Sentencia de 12 de agosto de 1994, al resolver Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Diógenes Arosemena en su propio nombre y en contra del artículo 331 del Código Judicial, Registro Judicial, Agosto de 1994, p. 111).

Por tanto, a juicio de la Sala, al no haberse implementado las normas de Carrera Judicial para los funcionarios del Ministerio Público, estos funcionarios no están amparados por las normas de la Carrera Judicial y no les son aplicables las normas de la Carrera Judicial entre las cuales están los artículos 288 y 289 del Código Judicial, que consagran el procedimiento disciplinario a seguir a los funcionarios de carrera. Por tanto, estos cargos deben desestimarse.

En cuanto al cargo de violación del artículo 377 del Código Judicial que el licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** estima infringido por el acto impugnado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia al analizar su sentido y alcance, expresó lo siguiente:

> "De acuerdo con el Artículo 377 del Código Judicial, los Agentes del Ministerio Público no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino en los casos y con las formalidades que determina la Ley, ni podrán ser destituidos, sino en virtud de sentencia por delito o falta grave contra la ética judicial (Artículo 377 del Código Judicial). El conocimiento de estas causas por faltas a la ética judicial compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia si son seguidas al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración; y compete a la autoridad nominadora, quien es el superior jerárquico, si se trata de causas por faltas a la ética cometidas por los Fiscales y Personeros.
>
> En todas las causas por faltas a la ética judicial, seguidas a funcionarios del Órgano Judicial o del Ministerio Público, éstas deben aparecer probadas en un proceso, ya sea disciplinario o penal, que se haya seguido al funcionario investigado." (Sentencia de 3 de mayo de 1993, dictada en Consulta hecha por el Magistrado Arturo Hoyos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de los Artículos 441 y 449 del Código Judicial, Registro Judicial, mayo de 1993, p.103). (Subraya la Sala).

La norma citada otorga competencia a la autoridad nominadora para el conocimiento de las causas por falta a la ética cometidas por fiscales y personeros, y señala que éstas deben aparecer probadas en un proceso penal o disciplinario. El demandante invoca como violada esta norma, y el acto impugnado invoca como fundamento jurídico el artículo 23 del Código Judicial, norma cuyo sentido y alcance la Sala aclaró en la misma sentencia que venimos comentando, expresando que es una norma de carácter general que **faculta a la autoridad nominadora para destituir a sus subalternos, previa comprobación de los hechos y permitiéndole al afectado hacer uso de los recursos que la ley le otorga y dispone que los cargos de voluntaria aceptación se pierden, entre otras causas, por falta grave contra la ética judicial.** (Ídem, Sentencia de 3 de mayo de 1993, p. 101).

Procede entonces determinar si la destitución del licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI**, quien como ya se ha expresado no estaba amparado por la Carrera

Judicial, fue decretada por la autoridad competente; si se comprobaron los hechos y si se le dio al afectado la posibilidad de hacer uso de los recursos que le otorga la ley.

El acto impugnado fue dictado por el Procurador General de la Nación, encargado, JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS, autoridad competente para conocer de las faltas a la ética judicial cometidas por el Fiscal Auxiliar de la República (fs. 9); quien consideró probadas y suficientes las faltas que se le imputan en el acto impugnado, juicio que comparte la Sala tal como ha quedado expresado en esta resolución al analizarlas detenidamente, y además el afectado tuvo la oportunidad de ser oído e interponer los recursos correspondientes (fs. 12 a 25 y 164 a 171).

Por tanto, la Sala desestima el cargo de violación del artículo 377 del Código Judicial.

Considera la Sala que no resulta aplicable al caso, el artículo 1966 ibídem, porque la destitución del cargo del licenciado **HERACLIO SANJUR MARCUCCI** no se fundamentó en una denuncia de naturaleza penal, sino en la comisión de graves faltas a la ética judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 204 de 15 de febrero de 1993, dictada por el Procurador General de la Nación, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VALDÉZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE TOTAL COMUNICATION, INC. PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Valdés, actuando en nombre y representación de TOTAL COMUNICATIONS, INC., interpuso ante la Sala Tercera demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, los Resueltos N° 16 del 26 de septiembre de 1995 y N° 71 del 2 de febrero de 1996, expedidos por el Señor Ministro de Gobierno y Justicia.

En su demanda, el licenciado Valdés pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados "basado en el hecho de que si dicho Ministerio procede a interrumpir el normal funcionamiento y operación del sistema radial de comunicación concedida a la empresa TOTAL COMUNICATIONS, INC., no podría prestar sus servicios a los clientes con los cuales a (sic) celebrado los contratos de servicios correspondientes (32 contratos celebrados) y dejaría de percibir los montos de las mensualidades pactadas y es evidente que tal situación ocasionaría daños notoriamente graves que no la (sic) dar el mantenimiento al sistema y la competencia de otras empresas llevarían a la demandante irremediablemente a la quiebra". Para acreditar su afirmación, el apoderado de la demandante aportó copia de 9 de los 32 contratos de arrendamiento que reposan en los archivos de la oficina de aquélla empresa (f. 37).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la

Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

De acuerdo con las constancias de autos, la empresa TOTAL COMUNICATIONS, INC. obtuvo del Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante el Resuelto N° 571 del 29 de agosto de 1994, la concesión para usar y explotar una serie de frecuencias radioeléctricas en UHF, para operar un sistema de radiocomunicación en la Banda de 470 a 512 MHz y brindar el servicio de radiocomunicaciones comerciales en la República de Panamá. Como resultado de dicha concesión y tal como aparece probado en autos, la demandante celebró varios contratos con distintas empresas con el fin de prestarles servicios de radiocomunicación y radioteléfono, entre otros.

Tomando en consideración estos hechos, la Sala estima que los actos acusados deben suspenderse, toda vez que con su puesta en ejecución, la empresa demandante no podría prestar los servicios contratados con sus clientes, dos de los cuales fueron contratados dentro del período de seis meses que se le concedió para instalar y poner en funcionamiento sus equipos de radiocomunicaciones. Además, dejaría de percibir el monto de las mensualidades previamente pactadas en dichos contratos, todo lo cual constituyen perjuicios notorios y graves que ameritan la suspensión de los efectos de aquéllos actos.

Por las razones anotadas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de los Resueltos N° 16 del 26 de septiembre de 1995 y N° 71 del 2 de febrero de 1996, dictados por el Señor Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE EN REPRESENTACIÓN DE EDITH M. DE GIROLDI, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL MEMORANDO IDENTIFICADO CON EL N° DAFP/026/96 DE 2 DE FEBRERO DE 1996 SUSCRITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), el 23 de abril de 1996 y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos George, actuando en representación de Edith M. de Giroldi con el objeto que se declare nulo, por ilegal, el Memorandum N° DAFP/026/96 de 2 de febrero de 1996, emitido por el Director Administrativo del Ferrocarril de Panamá, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda por considerar que la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

La Procuradora de la Administración solicita la revocatoria de la resolución impugnada sustentándolo en los siguientes términos:

"Al analizar el expediente contentivo de la demanda, en referencia,

> nos percatamos que la Resolución N° 003-96 emitida por el Director General del Ferrocarril de Panamá (fs. 2-5), que contesta el Recurso de reconsideración, le fue notificada a la demandante el día diez (10) de febrero de 1996, mediante dos testigos, en la forma que lo dispone el artículo 991 del Código Judicial (fs. 5 vta.).
>
> A partir de la fecha, comienzan a contarse los dos meses para la interposición de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, que culminan el día diez (10) de abril de 1996.
>
> La demanda se presentó el día doce (12) de abril de 1996, de conformidad con el sello que corre a fs. 19 vta., por lo que la demanda es extemporánea por dos días."

Por su parte, el apoderado judicial del demandante en el escrito de oposición al recurso de apelación, objeta los términos expresados en la diligencia de notificación, ya que, según su opinión, la fecha en que se perfeccionó la notificación fue el 23 de febrero de 1996 cuando se presentó poder ante la institución demandada y su poderdante se informó de la resolución de segunda instancia, y no el 10 de febrero de 1996 como señala la Procuradora de la Administración. Además, señala que el artículo 991 del Código Judicial señala con claridad que "En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se notifique" y no fue hasta el 23 de febrero de 1996 que se le entregó dicha copia.

Coincide la Sala con lo expuesto por la Procuradora de la Administración, toda vez que, efectivamente, la demanda es extemporánea. Ello es así, debido a que la demanda fue presentada ante la Secretaría de la Sala Tercera el doce (12) de abril de 1996, excediéndose del término de dos meses contados a partir de la fecha en que le fue notificada, mediante dos testigos, la decisión administrativa, es decir, desde el 10 de febrero de 1996. En relación a lo anterior, el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, señala lo siguiente:

> "ARTÍCULO 42b: La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda." (El subrayado es nuestro).
>
> En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 23 de abril de 1996, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos George actuando en nombre y representación de Edith M. de Giroldi.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAFAEL E. COLLINS EN REPRESENTACIÓN DE VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° 95 (361-01)063 DE 4 DE ABRIL DE 1995, EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Rafael E. Collins**, en representación de **VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 95 (361-01)063 de 4 de abril de 1995, emitida por el Gerente General de la Caja de Ahorros, y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Mediante la acción encausada la parte demandante solicita a este Tribunal que declare la nulidad, por ilegal, del acto administrativo contenido en la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante el cual se le niega el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha en que por orden judicial fue suspendido temporalmente de su cargo, hasta el momento en que fue reintegrado a su puesto de trabajo, en virtud de orden emanada de autoridad competente por haberse dictado sobreseimiento provisional a su favor. Que en consecuencia, se declare la obligación por parte de la Caja de Ahorros, entidad demandada, de abonar todas las sumas que en concepto de salarios caídos u otras prestaciones debía recibir, por razón de la función que desempeñaba desde el momento en que se ordenó su suspensión hasta la fecha en que se le reintegró a su puesto de trabajo. De igual manera, que se ordene a la referida institución equiparar su salario al que venía desempeñando al momento de la separación del cargo.

INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, se le remitió copia de la presente acción a la institución demandada que en su informe explicativo de conducta, que reposa a folios 32-34 del expediente, indicó a esta Superioridad que la actuación administrativa a seguir en el caso del señor **VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA** obedeció básicamente, a que la Caja de Ahorros no puede acceder a lo pedido por el recurrente dado que no existe ninguna disposición legal u orden judicial que faculte a dicho ente a pagar salarios caídos.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 415 de 3 de octubre de 1995, legible de fojas 35-44, la Procuradora de la Administración objetó las pretensiones de la parte actora y solicitó a este Tribunal no acceder a lo pedido, dado que al señor **VICENTE RODRÍGUEZ** se le separó de su cargo como presunto implicado en las irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, lugar donde se desempeña, por ende, no es viable solicitar el pago de salarios caídos.

En este punto, agrega la Procuradora de la Administración que para los casos de los servidores públicos que han sido suspendidos de su cargo, por motivos de investigación judicial, y luego son sobreseídos; ya sea en forma provisional o definitiva, en principio no les corresponde recibir el pago de los mismos, salvo que la Ley y no los reglamentos, faculte para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución Nacional.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala procede a resolver la controversia encausada.

Como primer cargo de ilegalidad el recurrente aduce infringido el artículo Décimo Primero del Decreto de Gabinete N° 137 de mayo de 1969, que reforma la Ley 4 de 1961 y el Decreto Ley 7 de 1962, cuyo texto es el siguiente:

> **"Artículo décimo primero**: El sueldo del empleado contra el cual se tramite un expediente de despido será suspendido a partir de la fecha en que sea separado del cargo. Si el fallo correspondiente fuere absolutorio, el empleado será de inmediato reintegrado al puesto y se le pagarán los sueldos que dejó de percibir."

Sostiene el demandante que la misma ha sido infringida en el concepto de infracción directa por omisión, porque a pesar de su existencia, el funcionario se ha negado a cumplir con esta disposición y pagarle los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que se encontraba suspendido.

En segundo término se aduce la infracción del artículo 19 de Reglamento Interno de la Caja de Ahorros, que establece:

> "ARTÍCULO 19: Se concederá licencia con derecho a sueldo, por el tiempo que se requiera, a todo funcionario citado oficialmente a comparecer ante cualquier tribunal de justicia u organismo administrativo para servir como testigo, jurado o parte en cualquier acusación de forzosa asistencia o aceptación. En los casos en que el funcionario comparezca como acusado dicha ausencia se descontará de su sueldo, salvo que salga absuelto de los cargos."

El demandante alega que la precitada norma legal ha sido infringida en forma directa por omisión, toda vez que hasta la fecha la Caja de Ahorros no le ha cancelado los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que duró su suspensión, así como tampoco se le ha reconocido el salario que tenía al momento de producirse dicha suspensión.

CONSIDERACIONES FINALES DEL TRIBUNAL

A fs. 39 del expediente gubernativo existe copia debidamente autenticada de la Nota N° 95 (334-02)176 de la Gerencia de Recursos Humanos de la Caja de Ahorros en la cual se establece que el señor **VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA** ingresó a dicha institución estatal crediticia el 01 de agosto de 1969. De igual forma se establece en dicha nota que el mismo fue separado del cargo en que se desempeñaba como Jefe de Grupo de Finanzas, el 29 de mayo de 1991, por orden de la Fiscalía Séptima del Circuito Judicial de Panamá, contenida en el Oficio N° 1581 de 1991, por haber sido acusado como supuesto responsable del delito de peculado contra la Administración Pública, en este caso la Caja de Ahorros. Dicha suspensión se mantuvo hasta el 30 de noviembre de 1994, fecha en la cual ingresó nuevamente a la Institución con base al Decreto N° 94-279. Esta decisión se fundamentó en el oficio N° 781 de 27 de octubre de 1994, legible a f. 14 del expediente, emitido por el Juez Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal en la cual se le ordenó al Gerente General de la Caja de Ahorros reintegrar al señor **RODRÍGUEZ MENDOZA** en el cargo que desempeñaba en dicha entidad por razón de que mediante Auto calendado 14 de octubre de 1994, dicho Tribunal procedió a Sobreseerlo Provisionalmente.

Con fundamento en la anterior resolución judicial, tal como se aprecia a f. 1 del expediente, el representante legal del señor **RODRÍGUEZ MENDOZA** solicitó al señor Gerente General de la Caja de Ahorros que se procediera formalmente al pago de los salarios dejados de percibir por su representado desde el momento en que fue suspendido del cargo hasta la fecha en que fue reintegrado al mismo, así como también se le hiciera un reajuste salarial por razón de que no se le estaba pagando el salario que devengaba al momento en que se ordenó su suspensión. Esta solicitud fue denegada tal como se observa en al Nota N° 95 (361-01)063 de 4 de abril de 1995.

Ante tales circunstancias, a juicio de este Tribunal no es procedente acceder a la solicitud de pago de salarios caídos al señor **VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA**, como bien lo han señalado la institución demandada y la señora Procuradora de la Administración, en virtud de que únicamente procede el pago de los sueldos dejados percibir a los funcionarios que han sido destituídos de manera ilegal, principio que de igual manera, es de aplicación al caso de los servidores públicos que hayan sido suspendidos del cargo y posteriormente sean reintegrados, cuando exista una ley específica que le otorgue al funcionario público el derecho de percibir los salarios caídos. En este sentido, vemos que ni la Ley N° 87 de 23 de noviembre de 1960 "Ley Orgánica de la Caja de Ahorros", ni ninguna otra disposición legal, establecen en su normativa la obligación por parte de la entidad estatal crediticia de pagar los sueldos dejados percibir a funcionarios de dicha entidad que hayan sido separados de su posición y

reintegrados posteriormente.

En el caso súbjudice el recurrente alega tener derecho a los salarios caídos con base en el supratranscrito artículo 19 del Reglamento Interno de la Caja de Ahorros, sin embargo, esta disposición no le es aplicable.

La Sala considera necesario reiterar el criterio que al respecto ha establecido en fallos anteriores; esto es, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Código Civil y el artículo 757 del Código Administrativo la Sala debe inaplicar las disposiciones de un reglamento en cuanto no sean conformes con las de la ley, ver Sentencias de 10 de junio y de 16 de agosto, ambas de 1991. Ante esta situación, es de lugar indicar que pese a que este Reglamento prevé el pago de dichos salarios a los funcionarios de la Caja de Ahorros que comparezcan como acusados en el caso de que salgan absueltos de los cargos, esta condena en pago de salarios caídos no está consagrada en la ley, razón por la cual la Sala no puede aplicar un reglamento que crea una carga económica para la Administración Pública y un derecho en favor de los servidores públicos en atención a una destitución o separación del cargo, ya que dicho derecho sólo puede establecerse mediante una **ley**, según se desprende del artículo 297 de la Constitución Nacional cuando en su párrafo primero establece que "Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones cesantía y jubilaciones serán determinadas por la Ley".

El criterio expresado ha sido sostenido por esta Sala en reiteradas ocasiones, inclusive para el caso de funcionarios públicos con estabilidad. Al respecto cfr. Sentencias de 4 de mayo de 1990, de 17 de enero de 1992, y recientemente en Sentencia de 24 de abril de 1996. Consideramos oportuno traer a colación el contenido de esta última para mayor ilustración:

> "En lo que respecta a la pretensión para que se ordene el pago de los salarios caídos, la Sala considera del caso reiterar el criterio ya establecido en fallos anteriores; esto es, que no existe disposición legal específica que le otorgue al funcionario del Ministerio Público el derecho de recibir los salarios caídos reclamados, por lo que debe negarse esta pretensión de la recurrente aún en los casos de que, como en el de la Sra. de Martín, la destitución es consecuencia de un acto arbitrario e ilegítimo. (Véase fallo de esta Sala de fecha 3 de octubre de 1995).
>
> Esta posición de la Sala Tercera es incluso referente a los funcionarios que gozan de estabilidad en su cargo. Conviene citar aquí lo que nos explica el Magistrado E. Molino Mola en su obra "Legislación Contencioso-Administrativa Actualizada y Comentada con Notas, Referencias, Concordancias y Jurisprudencia" Panamá, Agosto de 1993:
>
> `En cuanto a los salarios caídos que se piden en una demanda en que ha sido destituido un funcionario público nombrado por tiempo indefinido con estabilidad, y que luego es restituido, la Corte dijo lo siguiente: La Sala no puede acceder sin embargo a la condena en concepto de salarios caídos por no disponer la norma infringida que se tiene derecho a los salarios dejados de percibir. La regla general es que un empleado público sólo tiene derecho a recibir salario como retribución al trabajo efectivo y salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. (sentencia de 17 de enero de 1992, ponente, Molino Mola). (Pág. 140)."

Aunado a lo expresado, pertinente es señalar que el derecho al reintegro con salarios caídos contemplado en el Artículo Décimo Primero del Decreto de Gabinete N° 137 de 30 de mayo de 1969, únicamente era de aplicación para los empleados de públicos de Carrera Administrativa contra el cual se tramitase un expediente de despido, no para el caso de que el funcionario público fuese separado de su puesto por razón de investigación de un hecho punible, como lo es el caso del señor **VICENTE RODRÍGUEZ MENDOZA**. Además, la ley a que se refiere el

precitado artículo 297 de la Constitución Nacional es la ley formal expedida por la Asamblea Nacional, y no una ley material como es el caso de un Decreto de Gabinete expedido por un gobierno de facto.

También es necesario acotar que el recurrente no ha demostrado haber ingresado a la Caja de Ahorros en base al sistema de méritos, mediante concurso de oposición amparado en una ley especial o de Carrera Administrativa, que es lo que lo le daría estabilidad en su cargo, con los consiguientes derechos y prerrogativas que normalmente derivan de aquélla a su favor. Cabe destacar que a pesar de que en la actualidad la Carrera Administrativa ha sido instituida en nuestro ordenamiento positivo mediante la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, aún no ha sido implementada eficazmente, dentro de su ámbito de aplicación estatal. Imperando por tanto, el principio de que en la esfera de las destituciones, separación o suspensión del cargo de los funcionarios públicos, el acto que decida la remoción de quienes ocupen un cargo no protegido o amparado por ley especial, carrera administrativa, concurso de oposición o estabilidad relativa, es simplemente de libre nombramiento y remoción, producto del ejercicio de un poder o facultad discrecional del ente nominador, salvo disposición legal en contrario.

Basados en este principio, y dado que el demandante no se encuentra protegido por ley especial, estabilidad, carrera o concurso que garantice relativamente su posición dentro del engranaje gubernamental, no sólo era facultad discrecional de la Caja de Ahorros restituir al mismo a su cargo en dicha institución, sino también la de equiparar su salario al que venía devengando al momento en que fue separado de su cargo en virtud de la investigación de que era objeto por la comisión de un hecho punible en perjuicio de la referida institución estatal crediticia.

Por lo expresado, no prosperan los cargos de ilegalidad endilgados al acto administrativo acusado, y no es procedente acceder a las pretensiones del recurrente.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota N° 95(361-01) 063 de 4 de abril de 1995 expedida por el Gerente General de la Caja de Ahorros.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. LUIS FELIPE MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL OFICIO N° A. L. 1778-95 SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 1995, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Felipe Muñoz, en representación de **ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Oficio N° A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995, expedido por la Secretaría General de la Policía Técnica Judicial.

El Magistrado Sustanciador procede a revisar el libelo de la demanda para verificar si la misma cumple con los requisitos legales que hagan procedente su admisión.

De inmediato, advierte el suscrito Sustanciador que la acción incoada no debe ser admitida dado que ha sido enderezada contra varios actos administrativos consistentes en el Oficio A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995, suscrito por el Secretario General de la Policía Técnica Judicial, el A. L. 0315-96 de 7 de marzo de 1996 suscrito por el Director General de la Policía Técnica Judicial y el A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996, suscrito por el Secretario General de la Policía Técnica Judicial, tal como consta a foja 4, 14 y 20 de la demanda de Plena Jurisdicción.

En este punto se observa que el apoderado judicial de la parte actora presentó ante la Policía Técnica Judicial una solicitud de reintegro a favor del señor Ariel Castillo González el 25 de octubre de 1995, la cual fuera negada mediante Oficio A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995 (f. 4). Contra esta decisión la parte actora presentó el 26 de febrero de 1996, recurso de reconsideración (f. 9). Dicho recurso gubernativo fue resuelto mediante Oficio A. L. 0315-96 de 7 de marzo de 1996 (f. 14), y notificado al apoderado judicial de la parte recurrente el 11 de abril de 1996.

Pese a lo expuesto, se observa que el recurrente no ha individualizado de manera categórica el acto cuya ilegalidad se solicita; en este sentido, a juicio de quien suscribe, una vez resuelto dicho recurso de reconsideración con el cual se agotaba la vía gubernativa, a tenor de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991 que aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial, y desde el momento en que se le notificó del mismo el día 11 de abril de 1996, le asistía el derecho para recurrir ante esta Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y por ende, encausar su acción contra el acto original contenido en el Oficio N° A. L. 1778-95 de 26 de diciembre de 1995.

No obstante, se constata que el actor insiste nuevamente ante la Policía Técnica Judicial con una solicitud de reintegro presentada el 20 de mayo de 1996, dicha institución nuevamente lo niega mediante oficio A. L. 0705-96 de 27 de mayo de 1996 (f. 20).

El hecho de no individualizar el acto administrativo cuya ilegalidad se acusa imposibilita que la Sala emita algún pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones del demandante, en atención a lo que dispone el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, cuyo texto es el siguiente:

> "Artículo 43a: Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trata de indemnizaciones o de modificaciones o reformas del acto demandado o del hecho u operaciones administrativas que causa la demanda." (Lo resaltado es nuestro).

El criterio expuesto constituye reiterada jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que las acciones contencioso administrativas no deben encausarse contra varios actos administrativos, aunque estos se encuentren estrechamente relacionados entre sí. Debe entenderse que en este caso, los actos deben ser individualizados con toda precisión de lo contrario, esta circunstancia imposibilitaría emitir un pronunciamiento de fondo. Así se pronunció este Tribunal en Autos de 18 de noviembre de 1994, 9 de mayo de 1995, y de 12 junio de 1995.

De conformidad a los artículos 43a y 51 de la Ley 135 de 1943, lo procedente es no darle curso legal a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el

Licdo. Luis Felipe Muñoz en representación de ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ROGER, EN REPRESENTACIÓN DE VICTORIA FRANCO DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DNP-437-90, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Roger, actuando en representación de la señora Victoria Franco de Cedeño, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DNP-437-90 de 1° de agosto de 1990, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Se trata de una nota expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social por medio de la cual se le niega el pago de ciento ochenta (180) días de vacaciones reconocidas en la Acción de Personal N° 1741-88 de 1988 y como consecuencia de la nulidad se le paguen al demandante las vacaciones adeudas.

El licdo. Roger señala que el acto impugnado viola los artículos 796 del Código administrativo, 28, 31 del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social.

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 471 de 2 de diciembre de 1995 y solicita a la Sala Tercera no acceder a las pretensiones de la parte demandante al no asistirle el derecho a las vacaciones reclamadas puesto que ya había hecho uso de las mismas.

La demandante, Victoria Franco de Cedeño, demanda "el pago de ciento ochenta (180) días de vacaciones reconocidas por la Acción de Personal 1741-88 de 1988" y señala respecto a la infracción del artículo 796 del Código Administrativo, lo siguiente:

> "En este caso en particular, teniendo en cuenta que a nuestra poderdante se le reconoció el derecho a sus seis meses de vacaciones mediante la Acción de Personal 1741 de 31 de mayo de 1988, pero que ella fue separada de su puesto en 1990 sin hacer uso de dichos meses, y sin que tampoco se le pagara el importe de las mismas, resulta claro que al negársele este pago, los actos impugnados violan la disposición citada, dándose así el motivo de ilegalidad, consistente en la infracción literal del precepto por violación directa por comisión, toda vez que dichos actos disponen una medida contraria al artículo reproducido, en abierto desconocimiento del derecho que el mismo consagra."

Sobre las violaciones al Artículo 28 del Reglamento Interno señala lo siguiente:

> "En nuestro caso, si bien la Acción de Personal N° 1741 de 31 de mayo de 1988 reconoció formalmente el derecho de nuestra representada a seis (6) meses de vacaciones, por el período laborado del 5 de febrero de 1982 al 5 de agosto de 1987, cumpliendo así en

> forma parcial con la norma citada, no obstante, ello, mediante los actos impugnados se omitió la cancelación o pago a nuestra poderdante de la suma de B/.8,680.44, equivalente al monto de las vacaciones reconocidas, con lo cual se dio el motivo de ilegalidad consistente en la infracción literal de la ley, al violarla directamente, por comisión, el tenor literal de la norma, por desconocerse un derecho claramente consignado en ella."

Con relación al artículo 31 del reglamento de Personal, el actor señala lo siguiente:

> "En la situación que se examina, la norma anterior ha sido desconocida prácticamente en la totalidad de sus supuestos, toda vez que la administración, no obstante haber dictado la Acción de Personal N° 1741 de 31 de mayo, de contenido conocido, omitió la aplicación de la norma al incurrir en las siguientes conductas:
>
> a) Reconoció el derecho a las vacaciones, pero no señaló la fecha del inicio del goce de las mismas.
>
> b) Pospuso tácitamente las vacaciones reconocidas mediante la referida acción de personal, porque omitió dictar la resolución autorizando la posposición, no obstante que el funcionario siguió trabajando, se le siguió asignando trabajo, e incluso fue objeto de un traslado, y continuó devengando el salario normal correspondiente a esas labores.
>
> c) Al finalizar la relación de trabajo con la institución, no se hizo efectivo el pago del salario equivalente a sus vacaciones, como lo prevé el último párrafo de la norma."

Las infracciones señaladas se estudiarán en conjunto pues guardan relación entre sí y se refieren al derecho a recibir ciento ochenta días de vacaciones que supuestamente tiene la demandante.

La Sala no concuerda con las apreciaciones de la demandante puesto que, efectivamente se le concedieron los ciento ochenta días de vacaciones reclamados a partir del 3 de junio de 1988, como lo ordena la Resolución N° 1741 de 1° de junio, correspondientes al período del 5 de febrero de 1982 al 5 de agosto de 1987. Esto es así por cuanto se deduce del informe de conducta y las pruebas presentadas, lo siguiente:

> ". En la planilla de pago del 1° de junio al 30 de noviembre de 1988 consta que le fueron pagadas las vacaciones reclamadas y concedidas mediante la Acción de Personal N° 1441-88 del mismo año. Las cuales fueron pagadas quincenalmente debido a la crisis existente en ese entonces.
>
> 2. La imposibilidad de ejercer las funciones que habitualmente desempeñaba en el Departamento de Préstamos Hipotecarios de la Caja de Seguro Social después del 1° de junio de 1988, al ser revocado el poder para ejercer tales facultades y funciones inherentes al cargo. Así aparece en la Escritura Pública N° 5498 de 2 de junio de 1988, y por medio de la cual, se le otorgan las mismas facultades y funciones al licenciado Guillermo Crismatt.
>
> 3. Respecto a la nota suscrita por Nitzia Morales, en la cual certifica que la demandante no hizo uso de las vacaciones de 180 días, el informe de conducta emitido por el Director General de la Caja de Seguro Social, señala que la citada funcionaria emitió tal certificación en su condición de Directora Administrativa de la Policlínica Alejandro de La Guardia Hijo, cuando ya no trabajaba y por lo tanto, no tuvo acceso a los archivos de la Dirección de Asesoría Legal, en la cual se encuentran los expedientes, archivos y registros correspondientes para verificar tal información y dar fe del asunto. Además, señala el Informe de Conducta "como Directora

> Administrativa de la Policlínica de la referencia, no le correspondía expedir una nota en este sentido, por lo cual los hechos que plasma la señora Morales, son de dudosa credibilidad".

La Sala considera que no se debe perder de vista el contenido de la Nota N° 5413-Leg de 21 de septiembre de 1994 emitida por el Sub-Contralor General de la República y dirigida a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, la cual en su parte pertinente señala lo siguiente:

> "Con sumo respeto, debemos manifestarles nuestra preocupación respecto a un asunto que desde hace ocho meses se encuentra pendiente de la decisión por parte del Organismo superior que hoy día ustedes integran.
>
> Nos referimos específicamente al reclamo formulado por la exfuncionaria **VICTORIA FRANCO DE CEDEÑO**, en cuanto al supuesto adeudo de vacaciones correspondientes al período comprendido entre el 5 de febrero de 1982 y el 5 de agosto de 1987."
> ...
> "Se observa que existen constancias de la cancelación en su oportunidad, de las vacaciones de la exfuncionaria y un cúmulo de pruebas; 8 en total, que desvirtúan no sólo la pretensión del cobro por segunda vez del derecho de vacaciones, sino también el contenido del informe o Proyecto de Resolución presentado por la Comisión Laboral. Por esta razón, el Pleno de la Junta Directiva debe proceder al conocimiento inmediato de este asunto, que aún no se define y guarda relación con el manejo o disposición de fondos públicos de la Caja de Seguro Social.
>
> En razón de las circunstancias y hechos manifestados, debemos expresarles que, según se observa, la única prueba testimonial en que se fundamenta la Comisión Laboral para presentar su recomendación, la constituye un documento suscrito por la señora NITZIA MORALES, ... Además no se explica cómo, careciendo de acceso a los registros y archivos correspondientes de la referida unidad ejecutora donde laboraba la exfuncionaria VICTORIA FRANCO DE CEDEÑO, pretende hacer constancias de hechos y detalles que no le correspondía dar fe ..."

La nota arriba citada, es emitida por el Sub-Contralor General de la República, en ocasión a un proyecto de la Comisión Laboral de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que pretendía favorecer las vacaciones reclamadas. Pues bien, la nota emitida por el Sub-Contralor, no solo confirma que las vacaciones reclamadas han sido pagadas, como lo señala el Informe de Conducta del Director General de la Caja de Seguro Social, sino que de acceder, la pretensión del demandante la entidad que él dirige, estaría haciendo un segundo pago del derecho a vacaciones.

Por otro lado, la Sala Tercera no encuentra que la resolución N° 1741-88 de 1° de junio de 1988 haya sido revocada, como para que carezca de valor la nota del contralor, el informe de conducta o las demás pruebas que demuestran que se hizo el pago de las vacaciones reclamadas.

De todo lo anteriormente expuesto, concordamos con el Sub-Contralor, en cuanto a que se coligue del cúmulo de elementos que se encuentran en el expediente, tales como certificaciones, notas, planillas y otros, demuestran que las vacaciones reclamadas fueron efectivamente otorgadas y pagadas y desvirtúan el valor probatorio de los testimonios o cualquier otra prueba presentada por la parte actora. No proceden, pues, los cargos alegados.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el acto administrativo contenido en la Nota 437-90 de 1° de agosto de 1990, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, ni tampoco el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 10.460-95-J. D. de 15 de junio de 1995 emitido por la Junta Directiva de la Caja de Seguro

Social y rechaza las pretensiones del actor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ RUIZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE MATERIALES EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4058 DE 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La sociedad denominada Materiales en General, Sociedad Anónima, ha presentado, por intermedio de su apoderado judicial especial, la firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá.

En la demanda se formula pretensión consistente en petición dirigida a la Sala Tercera para que sean declaradas ilegales y, por lo tanto nulas, las resoluciones N° 213-4058 de 1° de noviembre de 1993 y N° 213-4151 de 31 de marzo de 1994, ambas proferidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y la Resolución N° 205-061 de 29 de agosto de 1994 proferida por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos y se hagan otras declaraciones.

Alega la parte demandante que mediante la Resolución N° 213-4058 de 1° de noviembre de 1993, la Administración Regional de Ingresos le expidió liquidación adicional por deficiencias en las Declaraciones Juradas de Renta de los años de 1990 y 1991.

El demandante objeta de la liquidación adicional únicamente, lo referente bajo los rubros de **bonificación**, **gastos de representación y gastos de fianza**. Bajo el rubro de bonificación objetó la suma de B/.22,100.00 y B/.1,150.00 para los años de 1990 y 1991, respectivamente. Bajo los rubros de gastos de representación y fianza se objetó la deducibilidad de B/.97,000.00 y B/.90,000.00, respectivamente.

Asimismo solicita la demandante a ésta Sala que, una vez reconozca que son deducibles del impuesto sobre la renta las partidas objetadas, se declare, como consecuencia, que "Materiales en General, Sociedad Anónima no está obligada a pagar al Tesoro Nacional las obligaciones tributarias dimanantes de las supuestas deficiencias", y se le devuelva la suma depositada ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro para iniciar el proceso que aquí nos atañe.

Como normas violadas se señalan los artículos 3 del Decreto de Gabinete N° 60 de 27 de noviembre de 1968, 697 del Código Fiscal, 34 y 35 del Decreto N° 60 de 28 de Junio de 1965, 40 y 5 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991 y 698 del Código Fiscal.

El Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá rindió su informe de conducta mediante la Nota N° 213-937 de 25 de noviembre de 1994.

Por su parte, la Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 11 de 13 de enero de 1995. Dicha funcionaria se opone a las

pretensiones de la parte demandante por considerar que no le asiste la razón.

El cargo endilgado, por indebida aplicación, en relación al artículo 3 del Decreto de Gabinete N° 60 de 1968, se explica así:

> "... el artículo 3 del precitado Decreto de Gabinete N° 60 del 27 de noviembre de 1968, establece que en el caso de ganancias distribuidas a trabajadores cuyos parientes dentro del 4° grado de consanguinidad y de afinidad tengan más del 15% de las acciones o de la participación en la empresa, la deducibilidad quedará limitada al equivalente de un mes de sueldo. El citado artículo 3° no es aplicable al caso que nos ocupa, puesto que el mismo se refiere única y exclusivamente a los supuestos en que el empleador, a título de mera liberalidad distribuye entre sus empleados parte de sus utilidades. Solamente en este caso (mera liberalidad), proceden las limitaciones contenidas en el artículo 3° del Decreto N° 60 del 27 de noviembre de 1968, no así en aquellos casos en que la "bonificación" o "participación en la utilidades" resultan de obligaciones del empleador, según lo pactado entre el empleador y el empleado, en el correspondiente contrato de trabajo, como parte de su remuneración o salario. En este último caso, dicha "bonificación o "participación en las utilidades" forma parte del concepto "salario", y no constituye un acto de mera liberalidad por parte del empleador, que es a lo que se refiere exclusivamente la disposición citada por el Fisco"
> ...
> "... la totalidad de las sumas pagadas por Materiales en General, S. A. al señor Robert Eder en concepto de bonificación, durante los años 1990 y 1991, constituyen parte del salario del mismo, y así consta en el acta de una reunión de la Junta Directiva de nuestra representada, celebrada el día 2 de febrero de 1990, en la cual se le reconoce al señor ROBERT EDER el derecho a recibir en concepto de salario una bonificación de las utilidades de la empresa. Además, el contrato celebrado por Materiales en General, S. A. con el señor Robert Eder, establece que el salario incluye una bonificación de las utilidades de la empresa. Por lo anterior, debemos concluir que al expedir liquidación adicional contra nuestra representada, pretendiendo que solo una porción equivalente a un mes de salario y no la totalidad de las bonificaciones pagadas al señor Robert Eder durante los años 1990 y 1991, por razón de lo pactado en el contrato de trabajo celebrado por el contribuyente con el señor Eder, son deducibles para el patrono Materiales en General, Sociedad Anónima, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, violó en forma directa por aplicación indebida el artículo 3 del Decreto de Gabinete N° 60 del 27 de noviembre de 1968 ..."

La resolución impugnada con respecto a lo anteriormente señalado por el actor dispone los siguiente:

> "**BONIFICACIÓN:**
>
> Para el año 1990, el contribuyente declaró bajo este concepto la suma de B/.44,640.00.
>
> Al efectuarse el análisis a los libros y documentos de contabilidad se determinó que el mismo fue pagado como sigue:
>
> | | |
> |---|---|
> | Robert Eder | B/.24,100.00 |
> | Alejandro Domínguez | 18,000.00 |
> | Empleados Varios | 2,540.00 |
> | Total deducido | B/.44,640.00 |
>
> Para el año 1991 declaró la suma de B/.3,800.00.
>
> Al solicitar la documentación respectiva, se comprobó que el señor Robert Eder es empleado de la empresa y, según el Artículo 3° del

decreto de Gabinete N° 60 de 27 de noviembre de 1968 dice así:

> Artículo 3° Los incentivos otorgados mediante este decreto de Gabinete, en los casos de trabajadores cuyos parientes dentro del 4° grado de consanguinidad y de afinidad tengan más del 15% de las acciones o de participación en la empresa, quedarán limitados al equivalente de un mes de sueldo.
>
> Por lo tanto sólo se reconoce un mes de sueldo del total del gasto de bonificaciones pagadas al señor Robert Eder, en vista que dicho señor es hijo de la señora Ana de Eder quien posee más del 15% del total de acciones de la compañía y en este sentido guarda un parentesco en primer grado de consanguinidad con dicha accionista.
>
> Por tal razón se procede a objetar la suma de B/.22,100.00 y B/.1,150.00 para los años 1990, 1991 respectivamente que representa el saldo no deducible del monto pagado a Robert Eder, tal cual se detalla a continuación: ..."

Del análisis a los libros y documentos de contabilidad de la demandante, la Dirección Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, determinó que Robert Eder, hijo de la dueña de más del 15% del paquete accionario de la sociedad Servicios Generales, Sociedad Anónima, había recibido la suma de B/.24,640.00 en concepto de bonificación y decidió aplicar el artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 60 de 1968 y objetar la suma pagada en concepto de bonificación.

Considera la Sala necesario resaltar que el Decreto de Gabinete N° 60 de 1968 se creó con el propósito de otorgar incentivos a las empresas que **distribuyan parte de las ganancias entre los trabajadores**.

En el presente caso, la suma que se objeta por parte de la Dirección General de Ingresos y así se especifica en la resolución impugnada, fue pagada por la citada empresa a Robert eder en concepto de bonificación.

De ser así, todo parece indicar que la suma otorgada en éste concepto, no se contempla en el Decreto de Gabinete N° 60 de 1968, pues, como señaláramos, trata sobre incentivos a las empresas que repartan utilidades entre los trabajadores y estamos un pago efectuado en concepto de bonificación.

Veamos el contenido del Decreto de Gabinete N° 60 de 27 de noviembre de 1968:

> "DANSE INCENTIVOS PARA QUE SE REPARTAN ENTRE LOS TRABAJADORES PARTE DE LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS
>
> DECRETO DE GABINETE NUMERO 60
> (DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1968)
>
> Por el cual se dan incentivos para que se distribuyan entre los trabajadores parte de las ganancias de las empresas.
>
> La Junta Provisional de Gobierno,
>
> CONSIDERANDO
>
> 1° Que la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa la cual sirven constituye un estímulo efectivo para la mayor producción;
>
> 2° Que para la paz social es conveniente darle participación a los trabajadores en las ganancias de las empresas;
>
> 3° Que muchos patronos han expresado su deseo de distribuir parte de sus ganancias con sus trabajadores; pero que han surgido algunas circunstancias que han dificultado dicho propósito;

4° Que las dificultades más serias con que han tropezado obreros y patronos ha sido la obligación de pagar la cuota de Seguro social sobre la suma de participación que distribuye el patrono al asalariado, y que no es deducible dicha suma para los fines del impuesto sobre la renta.

5° Que es conveniente facilitar a los patronos y obreros la participación de éstos en las ganancias generales por el esfuerzo común del capital y el trabajo,

DECRETA

Artículo 1° Las ganancias que distribuyan los patronos a sus trabajadores estarán exentas del pago de las cuotas del Seguro Social.

Artículo 2° Serán deducibles para el patrono las ganancias que éste distribuya a sus trabajadores.

Artículo 3° Los incentivos otorgados mediante este Decreto de gabinete, en los casos de trabajadores cuyos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y afinidad tengan más del 15% de las acciones de la participación en la empresa, quedarán limitados al equivalente de un mes de sueldo."

De lo anterior se colige que el Decreto de Gabinete N° 60 de 1968 trata exclusivamente sobre incentivos fiscales para que las empresas repartan o distribuyan ganancial obtenidas dentro del período fiscal, entre sus trabajadores. El artículo tercero limita al máximo de un mes de salario la distribución que se otorgue a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, de los dueños de más del 15% de acciones de la empresa. Este decreto, no hace mención alguna cuando la empresa hace algún pago en concepto de bonificaciones a sus trabajadores, sean o no parientes de los accionistas.

Pues bien, la Dirección Regional de Ingresos, Zona Oriental determinó que la suma que recibió Robert Eder es en concepto de Bonificación, y no ha hecho explicación alguna del porque calificó tal bonificación dentro del rubro de "repartición de utilidades" y consecuentemente aplicó el artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 60 de 1968. Lo anterior nos lleva a la conclusión que es correcta la aseveración del demandante y no se debió aplicar el precitado artículo 3° del Decreto 60 de 1968 al expedir la liquidación adicional.

Por otro lado, cabe señalar que si bien existen otras normas que limitan las sumas que se pagan en concepto de dividendos -como podría ser el caso del artículo 35 del Decreto 60 de 1965-, no podemos hacer alusión a dichas normas puesto que, tanto la resolución como el informe de conducta son claros y explícitos en cuanto al fundamento jurídico utilizado para el alcance hecho a la empresa Servicios Generales, Sociedad Anónima, el cual fue el precitado artículo 3° del Decreto de Gabinete N° 60 de 1968.

Ahora veamos las otras infracciones referentes a los rubros de gastos de representación y gastos de fianza.

Señala el demandante que se ha violado el artículo 40 de la Ley 31 del 30 de diciembre de 1991 puesto que la ley no es de carácter retroactiva y tiene sus efectos a partir del momento de su promulgación y hacia el futuro.

El artículo 40 de la ley 31 de 1991, dispone lo siguiente:

"Artículo 40. Esta Ley comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 1991."

Sobre el concepto de la violación, la parte actora sostiene lo siguiente:

"De conformidad con la norma antes transcrita, la entrada en

vigencia de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, se da a partir del 31 de diciembre de 1991, por lo que sólo puede regir para aquellas actuaciones que se den a partir de esta última fecha.

La Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá pretende aplicar de manera retroactiva las disposiciones de la Ley citada, en el caso que nos ocupa, el artículo 5 de dicha ley, por el cual se adiciona los literales a y b al artículo 698 del Código Fiscal. La pretendida aplicación retroactiva de las disposiciones de la Ley 31 de 1991, es a todas luces ilegal, ya que el legislador no le dio el carácter de tal a las normas en mención.

Conviene apuntar que la única disposición de la Ley 31 de 1991 a la cual el legislador le dio el carácter de retroactivo fue el artículo 7 de dicha ley, por el cual se modificó el artículo 699 del Código fiscal. El artículo 7 en mención fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, la cual fue resuelta por nuestra Corte Suprema de Justicia en fallo fechado 25 de septiembre de 1992. En el fallo en mención, la Corte Suprema de Justicia estableció que el artículo 7 de la Ley 31 de 1991 tenía efectos retroactivos por razón de que el legislador en forma precisa le dio tal carácter a dicho artículo en específico. El fallo mencionado en ningún momento establece que la totalidad de las disposiciones de Ley 31 de 1991 tienen carácter retroactivo, puesto que el legislador no lo estableció de esa manera, con la única excepción del artículo 7 de la precitada Ley.

También se aduce infringido el artículo 5 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, que por estar estrechamente vinculado al anterior cargo de violación, la Sala estima procedente analizarlos en su conjunto.

Al referirse al concepto de la violación de esta disposición, el recurrente señala:

"Artículo 5. Se adiciona al artículo 698 del Código Fiscal, lo siguiente:

... No obstante lo anterior, el contribuyente no podrá deducir las siguientes partidas sino en el período fiscal en que efectivamente las pague:

a) En el caso de que el contribuyente sea persona jurídica, los gastos deducibles en que se incurra frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas o frente a otras personas jurídicas subsidiarias del contribuyente o afiliadas a éste.
b) ...
2 ... Las normas contenidas en el párrafo segundo y siguientes de este artículo no son aplicables en el caso de que los contribuyentes a que se refieren sigan el mismo sistema habitual de contabilidad y registren las partidas de que se trate en el mismo período fiscal.

Al referirse al concepto de la violación de esta disposición, el recurrente señala:

"La disposición antes descrita adicionó los literales a y b al artículo 698 del Código fiscal. A los efectos de la actuación objeto del presente recurso, debemos circunscribirnos al literal a y el párrafo final del artículo 5 de la Ley 31 de 1991.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, el artículo 698 del Código Fiscal estaba redactado de forma tal que no establecía condiciones para que el contribuyente pudiera deducir ciertas partidas de gastos deducibles en que incurriera frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas. En virtud de la reforma introducida por el artículo 5 de la Ley 31 de 1991, los gastos deducibles que el contribuyente que sea persona jurídica, incurra frente a sus directores,

> dignatarios, ejecutivos y accionistas, no podrán deducirse sino en el período fiscal en que efectivamente se paguen, a menos de que los contribuyentes a que ellas se refieren sigan el mismo sistema habitual de contabilidad y registren las partidas de que se trate en el mismo período fiscal.
>
> La Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, al expedir la liquidación adicional en contra de nuestra representada, pretende aplicar el artículo 5 de la ley 31 de 1991 a una situación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley. Si bien los "Gastos de Representación y gastos de Fianzas" deducidos por MATERIALES EN GENERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA en su declaración de renta de 1991, fue producto de asientos de diario registrados en los libros del contribuyente el día 31 de diciembre de 1991, no implica de (sic) fue una decisión tomada esa fecha. Aseverar o pensar tal cosa, implica un desconocimiento total de las transacciones y prácticas comerciales tal como se llevan a cabo en el desenvolvimiento de los negocios.
>
> La Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá pretende justificar su posición sosteniendo la tesis de que en el caso de un período fiscal normal de un contribuyente, que va del 1° de enero al 31 de diciembre del año calendario, la obligación tributaria nace el último día del mismo año calendario o período fiscal de doce (12) meses y por lo tanto la Ley aplicable es la vigente en el momento del nacimiento de la obligación tributaria. Como consecuencia de esta tesis, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, sostiene que la Ley 31 de 1991, en base a su artículo 40, rige a partir del 31 de diciembre de 1991, precisamente el último día del cierre del período fiscal, por lo que considera es perfectamente aplicable desde el 1° de enero de 1991."

Esta Superioridad estima que no le asiste razón a la parte actora al señalar que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, aplicó retroactivamente las disposiciones legales contenidas en la Ley 31 de 1991, al proceder a gravar hechos económicos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, en virtud de los siguientes planteamientos.

En materia de impuesto sobre la renta, es conveniente indicar que se trata de un impuesto correspondiente al período que de conformidad con el artículo 705 del Código Fiscal comprende el período general que comienza el 1° primero de enero y termina el 31 de diciembre del año fiscal en curso. El legislador fue claro en señalar a qué período se refiere el artículo 5 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, y dispuso que "el contribuyente no podrá deducir las siguientes partidas sino en el período fiscal en que efectivamente las pague". Por lo tanto, no necesita la Ley 31 enunciar su carácter retroactivo, puesto que implícitamente está señalando el período en que debe ser deducida la suma pagada -en los casos señalados-, y no es otro que en el **período que sean efectivamente pagados**.

Dado lo expuesto, debe entenderse entonces que la Administración Regional de Ingresos, al emitir una liquidación adicional del impuesto sobre la renta a la demandante y no permitir la deducibilidad solicitada, fue porque aplicó la ley vigente al correspondiente período fiscal, puesto que los hechos económicos se rigen por la ley vigente al momento que concluye dicho período, en este caso la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, que en su artículo 40 estableció que **entraría a regir a partir del 31 de diciembre de 1991**, y su artículo 5° dispuso que el período en que se debe hacer la deducción reclamada por el actor es cuando se haga efectivo el pago que se desea deducir.

Sobre este punto es conveniente traer a colación la Sentencia de 25 de septiembre de 1992, en la que el Pleno de esta Corporación de Justicia, al pronunciarse sobre la Inconstitucionalidad o no del artículo 7 de la Ley 31 de 1991 y el parágrafo 2 (transitorio) del mismo artículo, de la misma ley, estableció que esa Ley, es decir, la Ley de 30 de diciembre de 1991, que entró

en vigencia el 31 de diciembre de 1991, es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991. Para mayor ilustración veamos lo que al respecto se señaló en aquella ocasión:

> "No obstante, el problema se plantea frente a dos aspectos: en primer lugar, si la disposición legal, que es de orden público, cumple con el mandato constitucional en el cual es obligante, para producir efectos retroactivos, consignarlo en la misma ley; en segundo lugar, en caso de considerarse que no existe expresamente la retroactividad, si efectivamente esta ley, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1991, es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991, por efectos retroactivos, o si, por el contrario, su vigencia se inicia el 31 de diciembre de 1991, y el cobro de la tarifa allí señalada se realiza en función de que el impuesto de renta se produce al finalizar el año, esto es, a las doce de la noche de ese día 31 de diciembre, por lo que nada tiene que ver con la retroactividad.
>
> El texto de la norma expresamente establece `Las personas jurídicas pagarán por su renta neta gravable del año fiscal de 1991 ... . De su redacción pudiera surgir la duda si el legislador le da a esta norma el carácter retroactivo a que se refiere el artículo 43 de la carta fundamental. La verdad es que el legislador le está dando carácter retroactivo a esta disposición, ya que no, en otra forma, pudiera entenderse la transcripción anterior que ordena a las personas jurídicas pagar su renta gravable del año fiscal de 1991, de acuerdo a la tarifa allí establecida. Como anteriormente se ha expresado, la retroactividad no es más que la aplicación de la norma a hechos pasados cuando ella no existía y, por lo tanto, si en la disposición atacada se ordena que se aplique al año fiscal de 1991 sin distinción, se cumple con el mandato del artículo 43 constitucional cuando se expresa que tendrá efecto o vigencia sobre una situación que se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 1991.
>
> La norma atacada como inconstitucional, por infractora del artículo 43 de la Constitución Política de la República, tal como sostiene la demandante, no lo es por las razones valiosas que exponen el señor Procurador General de la Nación y el Dr. Mario J. Galindo H., sino porque se está frente a una norma de orden público en donde se expresa su alcance al año fiscal de 1991. No es menester, como aparentemente se esboza en las alegaciones formuladas por quienes han argumentado en este negocio, el uso de la palabra retroactiva como indispensable para considerar la aplicación a casos anteriores a su vigencia de una disposición legal de orden público o interés social, cuando, en casos como en el presente, el legislador, en forma precisa e indubitable, se refiere al período sobre el cual recae el gravamen establecido en la nueva ley. El mandato de aplicación de la ley al período fiscal iniciado el 1 de enero de 1991, es expreso, por lo que, consecuentemente con lo expuesto, se desestima la violación del artículo 43 de la Constitución Política de la República."

No proceden pues, los cargos de violación endilgados al artículo 40, y al literal a) y numeral 2 del literal b) del artículo 5 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991.

En conclusión, únicamente prosperan los cargos de violación endilgados al acto acusado, sólo en lo concerniente al renglón Bonificación para el año de 1990 y 1991 pagados al señor Robert Eder.

En acatamiento a esta resolución judicial, la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro deberá proceder a la expedición de un nuevo alcance adicional, computándose a favor de la empresa demandante los gastos de bonificación antes mencionados como **efectivamente deducibles** para el período fiscal del año 1990 y 1991, y en vista de que la empresa Servicios

Generales, Sociedad Anónima ya había procedido al pago de la totalidad del alcance expedido en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Complementario (según consta en recibos N° 326.419.21 y 326.420.32, ambas de 11 de noviembre de 1994 visibles a foja 31 del expediente), le asiste igualmente el derecho al contribuyente de que la administración tributaria le reconozca el crédito correspondiente.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE ILEGAL, la Resolución N° 213-4058 de 1° de noviembre de 1993, la Resolución N° 213-4151 del 31 de marzo de 1994, ambas expedidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y la Resolución N° 205-061 del 29 de agosto de 1994 dictada por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro en el sentido de que se le permita hacer la deducción de la suma de veintitrés mil doscientos cincuenta balboas (B/.23,250.00) a la empresa Servicios Generales, Sociedad Anónima en concepto de pago de bonificación hecha al señor Robert Eder correspondiente a los años de 1990 y 1991.

Cópiese, Comuníquese y Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE KINNEY SHOE CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 86 DE 26 DE MAYO DE 1992, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

KINNEY SHOE CORPORATION una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, por intermedio de sus apoderados legales Arias, Fábrega y Fábrega presentó demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare como ilegal la Resolución No.86 de 26 de mayo de 1992 dictada por la Directora General de Comercio Interior, por medio de la cual se negó la demanda de cancelación del registro de la marca de fábrica Foot Locker N° 035379 y contra la resolución N° 106 de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la resolución de primera instancia.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE

Considera la parte demandante que las resoluciones consideradas como ilegales violan los artículos 3 y 9 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934; los artículos 8, 14 (literal "e"), 15 y 20 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939; el artículo 2014, (N° 2) del Código Administrativo; y el artículo 337 del Código Civil. Asimismo considera la parte actora como infringidos el artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, y los artículos 9 del Código Civil y el artículo 770 del Código Judicial.

INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

La Dirección General de Comercio Interior rindió el siguiente informe explicativo de conducta:

"Mediante Resolución N° 86 de 26 de mayo de 1992, esta Dirección

General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias resolvió negar la demanda de cancelación del Certificado de Registro N° 035379, correspondiente a la marca de fábrica denominada FOOT LOCKER, que ampara productos dentro de la Clase 25, expedido a favor de la sociedad BASSAN, S. A.

El basamento central de la decisión adoptada mediante la Resolución N° 86 en referencia tomó en consideración los siguientes elementos de juicio:

El derecho a solicitar la cancelación de un registro marcario en nuestro país debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales, se encuentran la necesidad de gozar de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL firmada en Washington el 2 de febrero de 1929, la cual fue aprobada en la República de Panamá por Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, requisito que cumplió a cabalidad la sociedad demandante.

Empero, el Artículo 8° de la citada CONVENCIÓN exige la necesidad de cumplir con otros requisitos adicionales, es decir, que no basta lisa y llanamente que el demandante demuestre tener protección legal en uno de los Estados Contratantes de dicha CONVENCIÓN. Por el contrario, en forma adicional, es menester demostrar al tribunal uno de dos supuestos:

A. Que el propietario de la marca cuyo certificado de registro se desea cancelar tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito de la misma en cualquiera de los Estados Contratantes de la CONVENCIÓN; o,

B. Que el que solicite la cancelación del certificado de registro haya comerciado o comercie en la República de Panamá los productos amparados con su marca.

Pues bien: el análisis de las pruebas aportadas al expediente revela que la parte demandante sólo probó que gozaba de protección legal en uno de los Estados Contratantes de la comentada CONVENCIÓN, tal como quedó afirmado UT SUPRA; sin embargo, la demandante no logró probar ninguno de los otros dos supuestos mencionados que están contemplados en el Artículo 8° de la Ley 64 de 1934 ya citada.

Sin las pruebas de rigor exigidas por la ley, esta Dirección General de Comercio Interior conceptuó improcedente la solicitud de cancelación de registro presentada por la demandante, razón por la cual se negó la demanda de cancelación del Certificado de Registro 035379 correspondiente a la marca de fábrica FOOT LOCKER."

POSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración es del criterio que le asiste razón a la parte actora y en consecuencia solicita acceder a las pretensiones de las sociedades demandantes, con base en que **en estos casos interviene en interés de la ley** de acuerdo con el numeral 3 del artículo 348 del Código Judicial, y por tanto tiene libertad de concepto para opinar a favor o en contra del acto acusado.

POSICIÓN DEL AFECTADO

El licenciado Ramón Malca B. en representación de la parte afectada **BASSAN, S. A.** se opone a la declaratoria solicitada por los demandantes.

ANÁLISIS DE LOS CARGOS CONTRA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

La Sala Tercera, de la Corte Suprema, después de un análisis del

expediente, entra a analizar el cargo de violación del artículo 8 de la ley 64 de 28 de diciembre de 1934, por considerar que es el artículo base sobre la cual gira todo el problema legal, y que si bien los otros artículos citados como infringidos también tienen relación con el fallo, el criterio jurídico sobre el artículo 8 citado es el determinante de la decisión del conflicto jurídico planteado.

El artículo 8 de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 dice así:

"Artículo 8°: Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y

b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o

c) que el propietario de la marca que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en el país en que éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende o de la adopción y uso de la misma."

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

La parte actora explica el concepto de la infracción de la norma transcrita de la siguiente manera:

"En el proceso de cancelación quedó plenamente probado el supuesto establecido en el literal a) de la norma arriba transcrita, mediante la presentación del Certificado de registro N° 1,126,857 de 20 de noviembre de 1979 de los Estados Unidos de América de la marca de fábrica `FOOT LOCKER' a nombre de KINNEY SHOE CORPORATION, que demuestra que dicha sociedad gozaba de protección legal para su marca en un Estado Contratante de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Ley 64 de 28 de diciembre de 1934), desde mucho antes que BASSAN, S. A. registrara su marca en Panamá. En efecto, la marca `FOOT LOCKER de KINNEY SHOE CORPORATION se encuentra registrada en los Estados Unidos de América desde el 20 de noviembre de 1979 y aún antes, mientras que el registro de la marca `FOOT LOCKER de BASSAN, S. A. se otorgó en Panamá el 8 de noviembre de 1984.

En el juicio de cancelación, se probó asimismo, mediante anuncios publicitarios publicados en revistas de extensa circulación en la República de Panamá y muestras de productos, que la demandante viene usando su marca `FOOT LOCKER desde hace muchos años, mientras que BASSAN, S. A., no aportó una sola prueba que muestre que ha hecho uso en algún momento de la marca cuyo registro detenta.

Es claro, por tanto, que la demandante posee un mejor derecho sobre

la marca `FOOT LOCKER , toda vez que BASSAN, S. A. no probó haber usado jamás la marca impugnada ni en Panamá ni en ninguna otra parte.

En vista de lo anterior, tenemos, en primer lugar, que la demandante probó a cabalidad, que su marca goza de protección legal en por lo menos un Estado Contratante de la referida Convención Interamericana, con mucha anterioridad a la fecha del registro panameño de la marca de BASSAN, S. A., que se pretende cancelar. Por otra parte, en el juicio de cancelación quedó también plenamente demostrado que, mientras KINNEY SHOE CORPORATION viene usando desde hace muchos años su marca `FOOT LOCKER , no consta en autos el menor indicio de que la marca de BASSAN, S. A. haya sido usada en Panamá ni antes ni después de su registro.

En consecuencia, es lógico concluir, que si la demandante ha registrado y viene usando en el comercio su marca `FOOT LOCKER , que goza de fama y prestigio internacional (ver anuncios publicitarios que constan en autos), desde mucho antes que BASSAN, S. A. obtuviera el registro de su marca en Panamá, tanto la Directora General de Comercio Interior como el Señor Ministro de Comercio e Industrias, han infringido el Artículo 8° de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, en concepto de interpretación errónea, pues le han dado un sentido que desvirtúa y desnaturaliza el espíritu y la voluntad abstracta de esta disposición legal, en particular, y de la Ley 64 de 1934, en general, que es la de proveer al propietario legítimo de una marca previamente registrada en otro Estado Contratante de dicha Convención, los medios para hacer valer sus derechos y lograr la protección y reconocimiento legal de los mismos en Panamá. En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que este tipo de infracción: `se produce cuando se da a un precepto legal un sentido distinto del contenido en su texto, o cuando se le da una interpretación extraña a su espíritu y finalidad. El proceso mental del juzgador se desenvuelve independientemente de toda cuestión de hecho, es decir del aspecto probatorio del negocio ... .

Efectivamente, en el caso que nos ocupa, al apegarse tercamente a una interpretación errónea del texto legal, despreciando los hechos debidamente probados, los actos administrativos impugnados desconocieron la voluntad y naturaleza de la referida norma y, en consecuencia, dieron a la misma un sentido limitado y muy distinto del espíritu y la intención con que se adoptó la citada Convención. Por todo ello, el artículo 8° de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 ha sido infringido en concepto de interpretación errónea."

ARGUMENTOS DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración sobre este mismo punto expone lo siguiente:

"Concordamos con el criterio esgrimido por la demandante, porque la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adoptada mediante Ley N° 64 de 1934, es clara al señalar (en su artículo 8° bajo estudio) que cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al de origen de la marca, y se le niegue su inscripción por existir un registro o depósito previo de otra marca que se lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado; siempre y cuando se cumpla con los requisitos en él consignado.

En el caso subjúdice, la sociedad KINNEY SHOE CORPORATION posee un registro de la marca FOOT LOCKER en los Estados Unidos de América, (país miembro de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial) identificado con el registro número 1,126,857

de 20 de noviembre de 1979 y, bajo el amparo de dicho registro, solicitó en la República de Panamá la inscripción de su marca de fábrica FOOT LOCKER, mediante memorial presentado el día 7 de julio de 1988, para amparar ropa deportiva especialmente trajes para calentamiento, chaquetas, camisetas T, sudaderas, jerseys para fútbol y avíos para tenis. La solicitud de la demandante fue negada, por la Resolución N° 5529 de 15 de diciembre de 1988, visible a fs. 32 del expediente administrativo.

La causa que motivó la negación se debe precisamente a la existencia de un registro, en el Ministerio de Comercio e Industrias, de la marca FOOT LOCKER a nombre de la sociedad BASSA, S. A., bajo el número 035379 de 8 de noviembre de 1984, cuya igualdad con la marca nacional es evidente (ver fs. 30 vuelta y 33 del expediente administrativo), no sólo en su denominación, sino en cuanto a los productos que ampara, dado que la sociedad BASSAN, S. A., también utiliza su marca FOOT LOCKER para productos de la clase internacional 25 que incluye vestidos, botas, zapatos y zapatillas para deportes, lo que crea confusión en el público consumidor.

Siendo ello así, el Ministerio de Comercio e Industrias debió cancelar la marca nacional, porque se cumplió con los requisitos y directrices del artículo 8 de la Ley N° 64 de 1934. Sin embargo, ello no fue así toda vez que se erró en la interpretación del artículo 8 de la citada Ley, al no analizarse de forma conjunta los literales a y b, por estar unidos con la conjunción copulativa "y", además de obligarse a aplicar el literal c, cuando este requisito está precedido por la conjunción disyuntiva "o".

La conjunción copulativa "y" tiene el `oficio de unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Cuando son varios los vocablos o miembros que han de ir entrelazados, sólo se expresa, por regla general, antes del último. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 1970, pág. 1358).

En consecuencia, de tomarse como válido el requisito a) del artículo 8 de la Ley 64 de 1934, debe exigirse también de forma conjunta el requisito consignado en el literal b) de la misma norma en referencia, por estar unidas por esta conjunción copulativa que implica unión; es decir, la "y".

En cambio, el requisito que dispone el literal c) del artículo 8° de la Ley N° 64 de 1934 está precedido por una "o", lo que gramaticalmente hablando constituye una conjunción disyuntiva, que `denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas." (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 1970, pág. 931).

Esto significa que de no utilizarse la primera alternativa señalada en los literales a y b- debe procederse a aplicar la segunda alternativa que en la norma utilizada lo constituye el literal c, pero no es obligatorio aplicar ambas opciones al mismo tiempo. Ello es así, porque sólo debe aplicarse una alternativa "o" la otra, pero no ambas.

En el caso que nos ocupa se observa que el demandante cumplió con los requisitos de los literales a y b.

El literal a) del artículo 8 in comento se refiere a la protección legal que debe gozar la marca en uno de los Estados Contratantes, con fecha anterior al registro de la marca que se desea anular.

A fs. 33 del expediente administrativo observamos claramente la inscripción de la marca FOOT LOCKER en Estados Unidos, el día 20 de noviembre de 1979, avalado por las autenticaciones consulares de rigor.

La inscripción de la marca nacional aparece a fs. 30 vuelta del expediente administrativo, fechada 8 de noviembre de 1984.

La marca FOOT LOCKER nacional de la República de Panamá es posterior a la inscripción realizada en Estados Unidos (país miembro de la Convención de Washington), por lo que se da cabal cumplimiento al literal a) del artículo 8 de la Ley N° 64 de 1934.

El literal b) de esta disposición legal indica que el procedimiento de la marca que se desea cancelar tenía conocimiento que la misma se estaba utilizando, debidamente registrada, en uno de los Estados Contratantes.

Del expediente administrativo se puede colegir que la sociedad BASSAN, S. A. tenía conocimiento que la marca FOOT LOCKER estaba ya registrada en los Estados Unidos de América. Fundamento nuestro criterio en lo siguiente:

1. El registro norteamericano es anterior al registro panameño, el primero data de 1979 y el segundo de 1984.

2. La marca FOOT LOCKER de origen panameño es idéntica a la marca FOOT LOCKER de procedencia norteamericana.

3. Ambas marcas amparan productos de la clase internacional 25 para vestimenta y calzados deportivos.

4. Los recortes de revista visibles a fs. 48, 49 y 50 del expediente administrativo que contienen la marca norteamericana FOOT LOCKER son de circulación internacional.

5. Además, FOOT LOCKER, de registro norteamericano, es internacionalmente conocida y está provista de un goodwill, buena fama o reputación de la que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca. Desde 1979 la marca en referencia goza de la preferencia o reconocimiento del público consumidor, lo que permite que prevalezca sobre otros productos o servicios similares.

Lo anterior se obtiene de la definición de goodwill que expone el autor CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA, en su obra Fundamento de Derecho de Marcas, que dice:

`Doctrinalmente se entiende por `goodwill : `La buena fama o reputación al que gozan los productos o servicios deferenciados a través de una marca. Buena fama que implica la preferencia o el reconocimiento que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes. (Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, pág. 58) (Resolución N° 324 de 30 de noviembre de 1990, Ministerio de Comercio e Industrias).

Esta exposición ofrece tres factores que conforman el goodwill o la buena fama, que son:
`-La buena calidad de los productos o servicios diferenciados.
-La publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma.
-La Potencia Publicitaria (selling power de la marca).

(Resolución N° 324 de 30 de noviembre de 1990, del Ministerio de Comercio e Industrias).

La sociedad KINNEY SHOE CORPORATION ha probado la calidad de su marca, por el tiempo que lleva en el mercado compitiendo con otras que amparan iguales productos. La publicidad consta en el expediente administrativo en revistas cuya difusión es internacional, así como su potencial publicitario, demostrado en los story board y la

pautación en los medios de comunicación, visibles a fs. 44, 46 y 47 del expediente administrativo.

A propósito de marcas conocidas o notorias, JESÚS CARRILLO BALLESTEROS Y FRANCISCO MORALES CASAS en su obra La Propiedad Industrial, nos dicen:

`Las marcas notoriamente conocidas ... (son) las que están registradas en un país para un producto cuya fama lo hace conocido en todo el mundo. (Editorial TEMIS, S. A., pág. 81).

Abundando sobre este tópico, los citados autores, expresan lo siguiente:

`1. Marca notoria. De acuerdo con el mayor o menor grado de conocimiento y de amplitud que haya logrado el signo distintivo, las marcas se pueden clasificar en simples y notorias. Las primeras están sometidas al régimen legal ordinario; las segundas tienen aspectos particulares, de los cuales nos ocuparemos a continuación.

La marca notoria es la que aún no está registrada en determinado país, sin que esta pueda ser utilizada o registrada para productos análogos o similares a aquellos para los cuales se le destina. Puede decirse también que es la marca notoriamente conocida por el público.

La notoriedad se predica de un hecho generalmente conocido e indiscutible, con sujeción a la relatividad que ofrece el círculo social dentro del cual se desarrolla la actividad cognoscitiva.

Para que una marca sea notoria -se agrega- tiene que ser única y de novedad absoluta, o, lo que es lo mismo, que sea netamente original. Única, en cuanto su notoriedad sea adquirida en relación con determinado producto; los otros dos elementos no ofrecen dificultad, por integrar su gran poder distintivo y, precisamente, allí radica su diferencia con la marca vulgarizada, que estudiaremos más adelante.

La marca notoriamente conocida es aquella que, conservando su valor distintivo, llega ampliamente al conocimiento del público que consume los artículos que ella distingue, en tanto que la marca vulgarizada ha perdido su poder distintivo, pues el público la identifica con el producto que distingue, pasando a ser una denominación pública ...

La explicación de estos aspectos escapa al puro campo del derecho marcario, y concierne a la teoría general del derecho.

A veces se afirma que constituyen un derecho de la personalidad o de la empresa, que llega a convertirse en un bien independiente e inmaterial, pero de innegable trascendencia en la vida económica.

También se dice que ellos deben encuadrarse dentro de la protección general de los actos y derechos contra la competencia o concurrencia desleal, ya que quien la practica interfiere un derecho, obtiene un provecho indebido de la reputación ajena y origina errores y confusiones.

No faltan quienes quieren ver un enriquecimiento sin causa justa, mediante la utilización de propaganda de otra persona y la clientela ajena. El correspondiente empobrecimiento sería para esta explicación, el debilitamiento del poder distintivo de la marca'. (Ver CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. La Propiedad Industrial, Editorial TEMIS, S. A., Bogotá 233-234).

Es preciso advertir que la teoría de las marcas notorias, para

aquellos países que forman parte de la Convención de País, (de la cual Panamá no es signataria) no es necesario que la marca se encuentre registrada en los demás Estados Contratantes, porque su registro es automático.

Si bien la República de Panamá no es signataria de la Convención de París, su ordenamiento jurídico en torno al derecho marcario contempla una serie de disposiciones legales tendientes a proteger la preferencia y la exclusividad en el uso de una marca, por lo que es necesario tomar en cuenta que al momento de registrarse en Estados Unidos (país miembro de la Convención de Washington) la marca FOOT LOCKER era novedosa, única, original y distintiva, elementos éstos que deben considerarse al analizar el derecho de propiedad sobre la marca.

En este conflicto, entre la marca de origen americano y la marca nacional de la República de Panamá, ha ocurrido lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman la usurpación en las marcas. Este concepto se ha planteado de la siguiente manera:

En la doctrina:
`El objeto principal de la ley de las marcas es proteger el exclusivo uso de las que están registradas conforme a las prescripciones establecidas; este derecho se halla garantizado por normas y autoridades protectoras.

Generalmente, las confusiones que se presentan en las marcas no son el resultado de la casualidad sino obra preconcebida, activada con intención dolosa y provocada mediante maniobras engañosas y deliberadas ... (JESÚS M. CARRILLO BALLESTEROS y FRANCISCO MORALES CASAS. La Propiedad Industrial, Editorial TEMIS, S. A., Bogotá, 1973, pág. 245).

En la jurisprudencia:
`La Sala observa, que ambas marcas amparan productos de la Clase 25, fundamentalmente ropa, zapatos y zapatillas. También observa que ambas marcas usan la palabra POLO como distintivo para identificar sus productos, si bien la última marca que desea registrase le añade la palabra CLUB. Considera la Sala, que la marca POLO BY LAUREN inscrita hace 17 años, es una marca de ropa y zapatos de reconocida fama mundial y que la demandada tiene por costumbre, como se ha visto en otros casos en esta misma Corte, en los casos de TRIUMPH Y GRAND MARNIER, y el presente, de utilizar el nombre de marcas extranjeras para registrarlas como nacionales, que no existe la menor duda que la marca POLO CLUB puede prestarse a confusión en la mente del consumidor en cuanto al auténtico fabricante, con la Marca POLO BY LAUREN, por cubrir productos iguales bajo la misma clase 25, en nuestra clasificación marcaria. Por tanto considera la Corte, que efectivamente se produce la violación del literal f) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939 y por ello se hace innecesario considerar las otras violaciones alegadas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que es nula, por ILEGAL la resolución N° 35 de 3 de mayo de 1988 dictada por el Ministro de Comercio y en consecuencia se ordena al Ministro de Comercio e Industrias que NIEGUE la solicitud de registro de la marca POLO CLUB. (Auto de 17 de noviembre de 1990) (Lo subrayado es nuestro).

Por tanto, consideramos que sí se ha producido la violación de la norma invocada."

ARGUMENTOS DE LA PARTE AFECTADA

La parte afectada funda su rechazo a la solicitud de cancelación con los

siguientes argumentos:

> "La norma legal cardinal para la resolución de la litis es según nuestra opinión el artículo N° 8 de la ley N° 64 de 1934, el cual es claro en su redacción y a esta se acogieron los anteriores juzgadores y aplicando un claro principio universal de hermenéutica legal, mal puede acusarse las resoluciones de apegarse tercamente a una interpretación errónea del texto legal, o haber procedido con extrema rigidez y apego al tenor literal de la ley, pues de haber hecho lo contrario entonces si se pudiera acusar de infracción las precitadas y acusadas resoluciones.
>
> En el punto K en el que se acusa a las resoluciones bajo discusión de violar el artículo N° 770 del Código Judicial, introduce la demandante un concepto que no es procedente en estos juicios porque lo que en el fondo alega, es que hubo un error en la apreciación de la prueba, alegato que confirma nuestro anterior planteamiento de que la cuestión en cuanto a la prueba de los requisitos exigidos en el artículo (sic) N° 8 de la ley 64 de 1934, para que proceda la cancelación es fundamental para resolver este caso y que la demandante en vista que no lo hizo en las instancias pertinentes pretende aprovechar este proceso para hacerlo.
>
> La carga de la prueba, en el proceso cuya decisión final es impugnada, correspondía a la demandante y Bassan, S. A., no tenía nada que probar, aquella debía probar la existencia de todos los requisitos para tener derecho a pedir la cancelación, pero que además de haber cumplido con estos se habían dado las condiciones para que se procediera a la cancelación, según lo exigido en el artículo # 8 de la ley 64 de 1934, cosa que no ocurrió, es pues lógico, que las resoluciones fueran del tenor que tuvieron, en correcta aplicación de la ley a un hecho concreto."

MOTIVACIONES DE LA CORTE

Expuestas las razones del demandante, el informe del funcionario demandado, la opinión de la Procuradora de la Administración y la contestación de la parte afectada, pasa la Sala a desatar la controversia legal planteada.

Considera la Corte que el demandante **KINNEY SHOE CORPORATION** ha demostrado que es dueño de la marca de fábrica **FOOT LOCKER** que ampara calzados para damas y niños, medias, ropa deportiva, específicamente, trajes para calentamiento, chaquetas, camisetas, sudaderas, camisetas para jugar fútbol, vestidos para jugar tenis, en la Clase 25 Internacional, desde el 22 de marzo de 1977 y el 20 de noviembre de 1979 contenido en los Certificados de Registros de los Estados Unidos de América N° 1,061,754 y N° 1,126,857 respectivamente, que es un Estado Contratante de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. También ha demostrado la parte demandante que ha usado por diecinueve (19) años su marca **FOOT LOCKER** la cual se ha convertido en una marca notoriamente conocida, no sólo por comerciantes e industriales, sino por el público en general. En cambio, **BASSAN, S. A.** parte afectada en este proceso obtuvo el registro de la marca **FOOT LOCKER** en Panamá el 8 de noviembre de 1984, para vestidos, botas, zapatos y zapatillas, en la clase 25 Internacional, que como se puede apreciar, muchos años después de ser propietario de dicha marca **KINNEY SHOE CORPORATION.**

Es un hecho notorio la existencia de la marca **FOOT LOCKER** por el conocimiento que se tiene de ella a través del uso de dicha marca, por la publicidad que recibe a través de anuncios y publicaciones de los productos **KINNEY SHOE CORPORATION**, que distinguen la marca **FOOT LOCKER**, plenamente demostrado en este proceso. **BASSAN, S. A.** a pesar de haberla registrado en nuestro país, no ha podido demostrar **el uso** de dicha marca en Panamá, y no hay la menor duda que tenía conocimiento de la existencia de dicha marca antes de registrarla a su favor, por la notoriedad de la marca **FOOT LOCKER** en los Estados Unidos de América y en otros países, por lo que en base al artículo 773 del

Código Judicial este conocimiento de la existencia de la marca por la parte afectada, se encuadra perfectamente en el artículo 773 del Código Judicial que estima que no requieren pruebas los hechos notorios, como es el caso entre comerciantes, industriales y público en general de la marca **FOOT LOCKER.**

Por lo expuesto, la Corte considera que efectivamente ha habido una interpretación errónea de parte de la Dirección de Comercio y del Ministro respectivo, del artículo 8 de la Ley 64 de 1934 y por consiguiente prospera el cargo de ilegalidad de las Resoluciones impugnadas.

En consideración a las motivaciones que preceden, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGALES la Resolución N° 86 de 26 de mayo de 1992 de la Dirección General de Comercio Interior y la Resolución N° 106 de 13 de diciembre de 1993, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, que negaba la demanda de cancelación del registro de la marca de fábrica FOOT LOCKER N° 035379, interpuesta por KINNEY SHOE CORPORATION contra la sociedad BASSAN, S. A., y en consecuencia se ordena la cancelación del registro de la marca de fábrica FOOT LOCKER de BASSAN, S. A. contenido en el certificado de registro N° 035379 de 8 de noviembre de 1984 y ORDENA que se restituyan los derechos de KINNEY SHOE CORPORATION sobre la marca FOOT LOCKER.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° GG 25-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro del proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesto por Tecnología Aplicada, S. A., para que se declare nula por ilegal la Resolución N° GG 25-95 de 16 de agosto de 1995, emitida por la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones, la firma Morgan y Morgan actuando en nombre y representación de dicha sociedad y el licenciado Francisco Vásquez Quintero apoderado del Banco Nacional de Panamá, han presentado escrito de desistimiento fechado 31 de mayo de 1996, en el cual declaran lo siguiente:

> "**PRIMERO:** TECNOLOGÍA APLICADA, S. A. desiste de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena jurisdicción interpuesta contra la Resolución del Gerente General y de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, que se reseñan al margen superior derecho de este escrito.
>
> **SEGUNDA:** El Banco Nacional de Panamá, acepta el desistimiento simple y sin condición a que se refiere el Hecho anterior, y declara que no ha sufrido ningún perjuicio por razón de esta acción y de su desistimiento.
>
> **TERCERO;** Declaran los apoderados de ambas partes, que ninguna de

éstas ha sufrido perjuicios por razón de esta acción, ni por la cancelación del Contrato N° 90021-10-258 efectuada por el Banco mediante los actos administrativos demandados de ilegales dentro de este Proceso; lo que precluye cualquier petición tendiente a causar cualquier perjuicio a las partes por los argumentados incumplimientos de sus obligaciones. Así también declaran las partes, la inexistencia de reclamos presentes o futuros. ..." (Fs. 333 y 334).

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1080 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesto por Tecnología Aplicada, S. A., para que se declaren nulos por ilegales la Resolución N° GG 25-95 de 16 de agosto de 1995, emitida por la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones, presentado por la Firma Morgan y Morgan en representación de Tecnología Aplicada, S. A., con el asentimiento del licenciado Francisco Vásquez Quintero apoderado del Banco Nacional de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. COCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO N° 18 DE 10 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado 5 de junio de 1996, el licenciado Guillermo A. Cochez, actuando en nombre y representación de TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., ha desistido del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado el 7 de agosto de 1995, para que se declare nula, por ilegal la Resolución N° 18 de 10 de mayo de 1995, dictada por el Ministro de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones, dentro del proceso administrativo de adjudicación de la Licitacación Pública N° 1-95 para la adquisición de equipo de informática para la modernización del Centro de Cómputo del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1080 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Guillermo A. Cochez, actuando en nombre y representación de la sociedad TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 18 de 10 de mayo de 1995, emitida por el Ministro de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE NORBERTO LEZCANO ROQUE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N° DRH-437 DE 16 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDA POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Emilio De León Lokee, actuando en representación de NORBERTO LEZCANO ROQUE, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Nota N° DRH-437 de 16 de mayo de 1995, expedida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La parte actora solicita en su demanda, que la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) declare que es nula la Nota N° DRH-437 de 16 de mayo de 1995, expedida por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante la cual fue destituído; que se restablezca la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 108 de 4 de abril de 1990, mediante el cual se nombró en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario al Ing. LEZCANO en el cargo de Ingeniero Agrónomo 1-3. Finalmente, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita que el Ministro de Desarrollo Agropecuario reintegre al Ing. NORBERTO LEZCANO ROQUE, en el cargo de Ingeniero Agrónomo I-3 en dicho ministerio y se ordene que se le paguen todos los sueldos que ha dejado de percibir como Ingeniero Agrónomo I-3, desde la fecha de su destitución hasta el día en que efectivamente se le restituya.

El Lcdo. Emilio De León fundamenta su solicitud basado en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Desde el 1° de abril de 1976 al 26 de julio de 1984, y nuevamente del 4 de abril de 1990 hasta el 17 de mayo de 1995, el Ing. LEZCANO ROQUE se ha desempeñado como Ingeniero Agrónomo en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
>
> SEGUNDO: Mi representado es Licenciado en Ingeniería Agronómica con Especialización en Fitotecnica, tal como consta en el Diploma expedido, el 2 de agosto de 1978 por la Universidad de Panamá.
>
> TERCERO: El Ingeniero LEZCANO ROQUE ingresó como profesor, desde el 22 de agosto de 1977, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá.
>
> CUARTO: El Consejo Técnico Nacional de Agricultura, el 7 de febrero de 1979, confirió a mi representado el Certificado de Idoneidad N°

11-79.

QUINTO: El 2 de febrero de 1984, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario seleccionó a mi representado para realizar estudios de post grado en el campo de extensión agrícola.

SEXTO: Asimismo, el 21 de octubre de 1988, mi mandante es titulado como Profesor de Segunda Enseñanza con Especialización en Ingeniería Agronómica.

SÉPTIMO: Mi representado, como profesional y funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, demostró su competencia física, moral y técnica.

OCTAVO: Mediante Decreto Ejecutivo N° 108 de 4 de abril de 1990, mi mandante fue reintegrado en el cargo de Ingeniero Agrónomo en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

NOVENO: El 17 de mayo de 1995, mi patrocinado fue destituído, vía fax, del puesto que ocupaba en dicho ministerio; por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a través de la Nota N° DRH-437 del 16 de mayo de 1995.

DÉCIMO: El 22 de mayo de 1995, el Ing. LEZCANO interpuso un recurso de reconsideración, con apelación en subsidio, contra la premencionada Nota N° DRH-437 del 16 de mayo de 1995.

DÉCIMO PRIMERO: El 22 de julio de 1995, se verifica la negativa tácita, por silencio administrativo, al recurso de reconsideración interpuesto en contra del acto impugnado. Así las cosas, para dicha fecha, quedó agotada la vía gubernativa.

DÉCIMO SEGUNDO: El 14 de agosto de 1995, solicitamos la certificación del silencio administrativo. Hasta la fecha no hemos recibido contestación a dicha petición, por lo que nos ha sido imposible acompañar la certificación correspondiente a la presente demanda."

En cuanto a las disposiciones alegadas como infringidas, la parte actora afirma en el libelo contentivo de la demanda que han sido violados el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, "Por la cual se dictan disposiciones relativas a la prestación de Servicios Profesionales en Ciencias Agrícolas", el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946; el artículo I, artículo II párrafo 1°, y el artículo III del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del MIDA, en concordancia con el artículo 841 del Código Administrativo. Los anteriores artículos en su orden respectivo son del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 10: Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituídos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si su hubiere cometido infracción al presente artículo de este Ley."

"ARTÍCULO 29: Las resoluciones que pone término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recurso que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

"RTÍCULO I: La condición de empleado cesa por alguna de las siguientes razones:

a. Por renuncia voluntaria propia del empleado.
b. Por expiración del período para el cual fue nombrado o por desahucio del contrato especial.
c. Por suspensión o fusión del cargo (cesantía).
ch. Por Jubilación.
d. Por Destitución.
e. Por Fallecimiento.
f. Por abandono del cargo."

"ARTÍCULO II: ... La renuncia o destitución del funcionario, deberá ser comunicada por la parte correspondiente, por escrito y por conducto regular con 15 días de anticipación, a la fecha de su actividad."

"RTÍCULO III: Todo empleado que ocupe un cargo permanente al entrar a regir el presente Reglamento de Personal, gozará de estabilidad en el cargo, siempre que sus servicios hayan sido calificados satisfactoriamente.

Igualmente, tendrán derecho a estabilidad todos los empleados que sean nombrados a partir de la vigencia del presente Reglamento, de conformidad con el mismo, siempre que ocupen cargos permanentes y terminen satisfactoriamente el período de prueba."

"ARTÍCULO 847: Los empleados públicos deberán sujetarse estrictamente a los reglamentos que dicte la autoridad competente para el buen servicio interior de las respectivas oficinas."

En cuanto al artículo 10 de la Ley 22 de 1961, estima la parte actora que ha sido violado de forma directa por comisión, dado que, en su opinión, se desconoció el derecho que le asiste a su representado de que el Consejo Técnico Nacional de Agricultura investigara la veracidad de la causal de destitución consignada en la nota demandada. En lo que concierne a la violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, opina que ha sido vulnerado dado que su representado no fue notificado personalmente. Por último, en cuanto a la violación al artículo I, al artículo II párrafo 1° y al artículo III del Reglamento Disciplinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estima la parte actora que han sido violados toda vez que el acto impugnado presenta una causal de separación del cargo no contemplada en el reglamento porque no se cumplió con los trámites reglamentarios para ejecutar una destitución y porque se desconoce el derecho a la estabilidad y al debido proceso que dicho reglamento reconoce a los empleados respectivamente.

Mediante resolución de 12 de diciembre de 1995, se admitió la presente demanda y se corrió traslado de la misma al Ministro de Desarrollo Agropecuario y a la Procuradora de la Administración quien contestó la demanda mediante la Vista N° 64 de 31 de enero de 1996 visible de fojas 27 a 42 del expediente. La Procuradora de la Administración se opone a las pretensiones de la parte demandante y afirma que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario puede despedir al demandante, fundamentado en la discrecionalidad que posee para nombrar y remover a los servidores bajo su dependencia, sin tener que agotar trámite alguno, ni hacer de conocimiento de ningún ente fuera de la institución, como lo es el Consejo Técnico Nacional. Aunado a ello, igualmente afirma en cuanto a las normas relativas al Reglamento Disciplinario del MIDA alegadas como infringidas, que los términos y condiciones de los reglamentos de personal disciplinarios de las entidades estatales se supeditan a una ley general de los servidores públicos, que es la Ley de Carrera Administrativa, la cual no ha sido implementada, razón por la que las normas a que hace alusión, no tienen ninguna eficacia ni jurídica ni fáctica en este caso.

Evacuados los trámites de ley, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, la Sala concluye que le asiste la razón a la parte demandante por las razones que exponemos a continuación.

En primer lugar, observa la Sala que en el acto impugnado contenido en la Nota N° DRH-437 de 16 de mayo de 1995, mediante el cual al Ing. NORBERTO LEZCANO se le declara "insubsistente" del cargo que ocupa en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por "Reorganización de la Estructura de Personal Técnico Administrativa", no se fundamenta en disposición constitucional o legal que sirva de base para la declaración de insubsistencia.

En segundo lugar, observa la Sala, que no obran en el expediente el informe explicativo de conducta ni constancia alguna que demuestre a esta Sala que en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se hubiese implementado alguna restructuración, reorganización o remoción dentro de la estructura Técnico Administrativa. A criterio de la Sala, si se toman como base los anteriores supuestos para la destitución de un funcionario que presta servicios profesionales en Ciencias Agropecuarias en la República de Panamá, como sucede en este caso, no puede pasarse por alto el contenido del artículo 10 de la Ley 22 de 1961, que fue alegado por la parte actora como infringido. En el mencionado artículo claramente se enuncia que los profesionales idóneos podrán ser destituídos por razones de incompetencia física, moral o "técnica". No obstante, para que ello se configure, se requiere que en cada caso en particular el Consejo Técnico Nacional haga las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos. Se observa, pues, que se trata de un servidor público con estabilidad en el empleo en razón de una ley que expresamente lo prevé. Criterio similar sostuvo esta Sala en sentencia fechada el 29 de mayo de 1996 (RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ -vs- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA -IDIAP-).

En virtud de lo antes señalado, concluye la Sala que, efectivamente, el acto acusado viola el artículo 10 de la Ley 22 de 1961 en forma directa, dado que mediante el mismo fue destituído el Ing. Norberto Lezcano, sin haber probado la causa invocada por la Administración relativa a la reorganización de la estructura de personal técnico administrativa.

Vale aclarar, que dentro del expediente reposa documentación relativa a la hoja de vida del Ing. Lezcano, entre las que figuran copia autenticada del certificado de culminación de estudios como Licenciado en Ingeniería Agronómica con Especialización de Fitotecnia, el certificado expedido por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura que lo faculta para prestar servicios profesionales en Ciencias Agrícolas a nivel universitario entre otros certificados de participación en diversos cursos y seminarios relativos a su profesión.

Finalmente, en cuanto a la violación que se le imputa al artículo 29 de la Ley 135 de 1943, el artículo I, el artículo II párrafo 1° y el artículo III del Capítulo XIV del Reglamento Disciplinario del MIDA en concordancia con el artículo 847 del Código Administrativo, la Sala se abstiene de efectuar su análisis, toda vez que la ilegalidad del acto acusado efectivamente ha sido probada, con la violación directa al artículo 10 de la Ley 22 de 1961 alegado por la parte actora como infringido.

Finalmente, con relación al pago de los salarios dejados de percibir solicitados por el demandante, la Sala no accede a los mismos, pues, la regla general es que servidor público sólo tiene derecho a percibir salarios como retribución al trabajo efectivo, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario como en los eventos de enfermedad o licencia remunerada, que no ocurre en este caso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL la Nota N° DRH-437 de 16 de mayo de 1995, expedida por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante el cual se declara insubsistente el nombramiento del Ing. NORBERTO LEZCANO, SE ORDENA reestablecer la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 108 de 4 de abril de 1990, mediante el cual se nombró en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el cargo de Ingeniero Agrónomo I-3 y, finalmente, SE DECLARA que el Ministro de Desarrollo Agropecuario debe reintegrar al Ing. NORBERTO LEZCANO ROQUE en el cargo de Ingeniero Agrónomo I-3 de dicha institución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. RAMÓN ANDRADE EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN ARDINES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LOS FISCALES DE CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Ramón Andrade ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 20 de mayo de 1996 el cual NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el recurrente en nombre y representación de SEBASTIÁN ARDINES en contra de la Resolución N° 14 de 5 de diciembre de 1995, dictada por los Fiscales del Circuito Judicial de la Provincia de Colón, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora al notificarse del Auto de 20 de mayo de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador, decidió NO ADMITIR la demanda, presentó formal recurso de apelación en los siguientes términos:

> "1. Que el acápite E, numerales 2 y 3 de los hechos de la acción instaurada por el suscrito en representación del señor Sebastián Ardines, hemos señalados (sic) el concepto de la violación dentro de la norma infringida, incluyendo las modalidades en que se produjo la infracción. Reiteramos que la misma están explícitas en los hechos 2 y 3. Esta claro que hubo una violación directa.
>
> 2. Que en el numeral 3 de los hechos expresamos que al momento de su remoción, mi poderdante tenía 6 años y 3 meses de estar laborando con la institución como Personero Municipal del distrito de Santa Isabel y es obvio que hubo caducidad para los efectos de despedirlo por no ser graduado en derecho.
>
> 3. En el acápite f, mencionamos la norma infringida, la cual es el artículo N° 271 del Código Judicial, Reformado por la Ley N° 19 de 9 de julio de 1991 en su artículo N° 27 y la transcribimos y está claro que una violación directa de la norma trncrita (sic).
>
> 4. Que mi poderdante ha cumplido con todos los requisitos y procedimiento exido (sic) por la norma que rige la materia de lo Contencioso Administrativo."

Por su parte la Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones del apelante, tal como se observa a fs 24-26, argumentando:

> "Estimamos que la resolución imugnada (sic) debe mantenerse en todas sus partes, ya que el libelo de la demanda no observa el cumplimiento de un requisito legal indispensable para ser admitida ante la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que en la misma no se expresa el concepto de la violación de la norma que se estima violada.
>
> En efecto, el recurrente sólo se limita a expresar que la Resolución N° 14 de 5 de diciembre de 1995, emitida por los Fiscales de Circuito Judicial de la Provincia de Colón infringe el artículo 271

> del Código Judicial y que dicho acto es "injusto grave e Ilegal ", y tal señalamiento no constituye la relación entre el vicio o vicios de ilegalidad demandados y su justificación jurídica, lo cual no le permite al juzgador precisar certeramente si se produce o no la violación legal demandada y cuya nulidad se pretende."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de esta Corte, entran a resolver la controversia planteada.

Considera este Tribunal que no asiste razón al recurrente, en virtud de un análisis exhaustivo del expediente que nos demuestra claramente, y, como bien señaló el Sustanciador en el Auto por el cual se inadmitió la demanda, que el mismo no señaló el concepto de la violación, ni los motivos de ilegalidad, incumpliendo de esta manera el artículo 28, numeral 4, de la Ley 33 de 1946 que a continuación citamos:

> "ARTÍCULO 28: Toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa contendrá ...
>
> 4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación."

Como ha sido jurisprudencia de esta Sala es un requisito formal y fundamental para la admisión de la demanda el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 28, en este caso, en su numeral 4; al no expresarle claramente al Tribunal el concepto de la violación y los motivos de su ilegalidad, no podrá este emitir pronunciamiento alguno.

En consecuencia el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa , de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el Auto fechado de 20 de junio de 1996, que NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Ramón Andrade, en representación de SEBASTIÁN ARDINES,para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 14 de 5 de diciembre de 1995, dictada por los Fiscales del Circuito Judicial de la Provincia de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ISAAC LADRÓN DE GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D. N. 6-2024 DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Isaac Ladrón de Guevara**, en representación de **EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D. N. 6-2024 de 13 de octubre de 1993, expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

Con la presente acción el apoderado judicial de la parte actora pretende que esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, del acto administrativo contenido en la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante el cual el Director Nacional de Reforma Agraria resolvió: "Adjudicar definitivamente a título oneroso, a DORINDO PIMENTEL SÁEZ una parcela de terreno baldío, ubicado en el Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocú, Provincia de Herrera, con una superficie de DIECISÉIS HECTÁREAS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (has+4175.29 m2) comprendida dentro de los siguientes linderos generales, correspondientes al Plano N° 63-03-3888 del 16 de octubre de 1992, aprobado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria:

NORTE: CALLEJÓN A LAS TRANQUILLAS,
SUR: CAMINO A LOS CARATES Y A LOS POTREROS DE TRINIDAD GÓMEZ,
ESTE: PEDRO PIMENTEL E HIPÓLITO FRANCO,
OESTE: CALLEJÓN A LAS TRANQUILLAS Y CAMINO A LOS CARATES Y A LOS POTREROS."

De igual manera, que como consecuencia de la declaración anterior, este Tribunal declare la nulidad de la inscripción en el Registro Público de la Finca #17723, inscrita al Rollo 14593 Complementario Documento 9 de la sección de propiedad, provincia de Herrera desde el 1° de noviembre de 1993.

LOS HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

La parte actora fundamenta sus pretensiones básicamente, en los siguientes hechos:

"1. El día 3 de marzo de 1986, mi representada solicitó a la COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, la adjudicación de un lote de terreno de treinta y dos (32) hectáreas ubicadas en LOS LLANOS de Ocú, Provincia de Herrera, ...

2. La Sra. MARÍA AURELIA SÁEZ PERALTA, presentó ante el Juzgado Primero de Circuito de Herrera, JUICIO ORDINARIO DE OPOSICIÓN contra DELIA MUÑOZ RODRÍGUEZ ó EVELIA MUÑOZ RODRÍGUEZ, quien es la misma persona, y luego del trámite legal correspondiente el doce (12) de agosto de 1987, el Tribunal de la causa se pronunció así; `Por todo lo expuesto, quien suscribe, Juez Primero del Circuito de Herrera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA las pretenciones (sic) de la parte actora en el presente caso. Una vez se haya ejecutoriado esta sentencia, remítase este expediente a la Oficina de Reforma Agraria, Renglón 3 de Herrera, para que se le de continuidad a la titulación formulada por la hoy demandada. Se condena en costas a la parte actora en la suma de B/.300.00. ...

3. En consideración a lo anterior, el Juzgado Primero de Circuito de Herrera, practicó el día 25 de octubre de 1988, diligencia de REMATE del terreno de marras, ADJUDICÁNDOLE EN FORMA PROVISIONAL el mismo a mi representada EVELIA MUÑOZ RODRÍGUEZ, hoy EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ, el globo de terreno de 32 hectáreas, motivo de esta ACCIÓN DE NULIDAD. ...

5. En torno al REMATE mencionado en el punto 3 de este libelo, MARÍA AURELIA SÁEZ PERALTA, no conforme con lo ya dispuesto por los Tribunales de Justicia, presentó ante el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, JUICIO ORDINARIO DE OPOSICIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, donde el Tribunal de la causa, manifestó: `Por lo tanto, la suscrita Juez Primero del Circuito de Herrera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA en todas sus partes la diligencia de remate efectuada en este negocio el día 25 de octubre de 1988, ADJUDICA el bien rematado a la compradora y por el valor ofrecido, el siguiente bien ... se describe el bien que ha motivado esta demanda. Este auto tiene fecha

de 21 de septiembre de 1991."

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El Director Nacional de la Reforma Agraria mediante su informe de conducta, legible a fs. 62-65, procedió a explicar su actuación básicamente en los siguientes términos:

"FUNDAMENTO DE DERECHO DE LA RESOLUCIÓN NUMERO D. N. 6-2024 DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA:

PRIMERO: La adjudicación y distribución de las tierras estatales rurales a particulares es una competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, conforme está consignado expresamente en los artículos 55 y 95 del Código Agrario Patrio y la Ley 12 de 1973.

SEGUNDO: El globo de terreno adjudicado tenía carácter de estatal rural baldío, por tanto, de competencia de la Dirección Nacional y respecto al cual, previamente a la expedición de la Resolución de Adjudicación se observó el procedimiento establecido por la Ley 32 de 1962 o Código Agrario.

TERCERO: En este, como en todo Proceso de Adjudicación, agotado como resulten las etapas del mismo, resulta imperativo para la Reforma Agraria la expedición de la resolución, en donde los interesados o presuntos afectados disponen de la oportunidad de objetar u oponerse dentro del período señalado por el Código Agrario, a fin de que éstos puedan demostrar o acreditar mejor derecho que el peticionario, oportunidad en la que, por la vía administrativa en la que por mandato legal está la Reforma Agraria facultada para resolver las controversias que se susciten sobre tierras a adjudicar se hubiese pronunciado sobre el mérito de la acción, hecho que en este proceso no ocurrió, antes por el contrario, el término inclusive para la acción de oposición por la vía ordinaria, precluyó, sin que la Reforma Agraria, tuviese más alternativa que proceder a la adjudicación impetrada.

CUARTO: Finalmente debemos advertir que en ejercicio de la función distributiva de las tierras la Reforma Agraria no garantiza la calidad de Baldíos de los terrenos que adjudica y que por consiguiente, no está sujeta al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones, conforme lo establece claramente el artículo 71 del Código Agrario. De modo que en circunstancias como ésta en la que se cumplieron con todas las formalidades legales, y se presentasen reclamos fundados, ésta misma excerta legal prevee el procedimiento y los mecanismos a observarse, empero, en todo caso debe mantenerse la validez de las adjudicaciones hechas."

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 449 de 25 de octubre de 1995, se opuso a las pretensiones del recurrente, argumentando medularmente que para la adjudicación de los aludidos terrenos, la entidad demandada siguió el procedimiento señalado en el Código Agrario, toda vez que, "se notifica a los colindantes, los señores Trinidad Gómez, Pedro Pimentel e Hipólito Franco. Se realizan publicaciones en la Gaceta Oficial y en el Diario Nacional, La Prensa. Se avalúa el terreno solicitado por el señor Dorindo Pimentel y se fija el valor en B/.102.00" (Ver f. 77 del exp).

Además, sostiene la precitada funcionaria, que si bien la demandante señora Evelia Muñoz Rodríguez solicitó mediante formulario N° 6-7098 de 3 de marzo de 1986, la adjudicación de tierras ubicadas en Los Llanos, Distrito de Ocú, no consta que la señora sea la propietaria de las 32 hectáreas como tampoco existen

evidencias de que la Dirección de Reforma Agraria haya realizado la mensura del terreno, la notificación a los colindantes, la inspección del terreno, el levantamiento de planos, las publicaciones respectivas, tal como lo prevé el Título III de "La Distribución de la Tierra" en el Capítulo Segundo sobre "Adjudicaciones a Particulares", del Código Agrario. A estos efectos, señala la Procuradora de la Administración que sólo existen constancias procesales de la titularidad de la señora Evelia Muñoz sobre un bien inmueble de ocho (8) hectáreas, cuestión contraria a lo que sucede con las 32 hectáreas de las cuales sólo consta la solicitud realizada en el año de 1986, por esa misma persona.

EXAMEN DEL CASO. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de proceso, la Sala procede a externar las siguientes consideraciones finales en torno a la controversia.

Sostiene la parte demandante que la Resolución impugnada es violatoria de los artículos 337 del Código Civil, el artículo 1021 del Código Judicial y los Artículos 29 y 72 del Código Agrario, los cuales la Sala procede a examinar en su conjunto.

El texto de las precitadas disposiciones legales en el orden establecido, es el siguiente:

> **"Art. 337.** La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
>
> El propietario tiene acción contra el poseedor de la cosa para reivindicarla."
>
> **"Art. 1021.** Toda resolución ejecutoriada debe cumplirse y podrá exigirse su ejecución, a menos que en ella se haya fijado plazo o condición para su cumplimiento, curso, en el cual será indispensable que ésta o aquél se haya cumplido.
>
> También podrá exigirse la ejecución de toda resolución ejecutoriada, aunque esté pendiente algún proceso intentado para obtener su invalidación; pero si se tratare de una resolución que haya sido invalidada, podrá oponerse la invalidación correspondiente al intentarse su ejecución."
>
> **"Artículo 29.** Todas las personas naturales o jurídicas que tuvieren tierras en propiedad tienen el derecho a su uso, goce, y disposición plena, con las limitaciones que impone la función social de la tierra y en tal condición deben recibir del Estado la protección necesaria y deben cumplir con lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales vigentes."
>
> **"Artículo 72.** En ningún caso tendrán valor alguno contra la Nación o contra terceros, los títulos expedidos o que se expidan en contravención a las disposiciones que regulen la adjudicación o venta de tierras estatales. En consecuencia, las inscripciones hechas en el Registro Público de los títulos expedidos o que se expidan desde la vigencia de este Código con tales defectos podrán cancelarse a solicitud del representante de la Nación o a petición de parte interesada. Tal cosa se hace mediante demanda ordinaria ante los tribunales competentes."

Sostiene el apoderado judicial de la parte demandante que las precitadas disposiciones legales han sido infringidas en el concepto de violación directa, por omisión, ya que a pesar de existir pronunciamientos jurisdiccionales y competentes sobre la propiedad que le asiste a su representada sobre el globo de terreno adjudicado mediante la Resolución acusada de ilegal, la Dirección de Reforma Agraria adjudica a título oneroso, al señor **DORINDO PIMENTEL SÁEZ**, dieciséis hectáreas con cuatro mil ciento setenta y cinco metros cuadrados con

veintinueve decímetros cuadrados (16 has.+4175,29 m2) del mismo globo de terreno que según consta en las resoluciones judiciales ejecutoriadas y adjuntadas al proceso, son de propiedad de la demandante.

En tal sentido, agrega el recurrente que al proceder el Juzgado Primero de Circuito de Herrera, en Juicio Ordinario de Oposición presentando contra la señora EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ, en Sentencia de 12 de agosto de 1987, a NEGAR las pretensiones de la parte opositora, y señalar que una vez ejecutoriada dicha sentencia, se remitiese el expediente a la oficina de Reforma Agraria, Región 3 de Herrera, para que se le diese continuidad a la titulación formulada por su representada, le transmite la propiedad del globo de terreno en comento a la señora EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ, en forma inmediata, conforme lo disponen las precitadas disposiciones acusadas de ser infringidas.

MOTIVACIONES DE EL TRIBUNAL

A juicio de esta Superioridad, no se ha producido violación alguna a las precitadas normas legales, en virtud los siguientes planteamientos.

A foja 1 del expediente gubernativo, consta copia debidamente autenticada de la solicitud N° 6-0295 de 31 de enero de 1992, mediante la cual el señor **DORINDO PIMENTEL SÁEZ** solicitó a la Dirección Nacional de Reforma Agraria de la Provincia de Herrera la adjudicación a título oneroso, de una parcela de tierra estatal adjudicable, con una superficie aproximada de 16 hectáreas con 4175.29 metros cuadrados ubicada en la localidad de los Potreros del Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocú, de la Provincia de Herrera, tal como lo dispone el artículo 96 del Código Agrario. De igual forma, se observa a f. 2, autorización por parte del Funcionario Sustanciador del Departamento de Reforma Agraria, quien en atención a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Agrario, procedió a autorizar al solicitante señor **DORINDO PIMENTEL SAEZ** a abrir las trochas correspondientes, según los linderos generales indicados en su solicitud. Esta mensura efectivamente, fue hecha por el solicitante tal como se constata a f. 3 del expediente.

También se evidencia a f. 3, copia del Acta de Inspección Ocular al globo de terreno solicitado, con fecha de 26 de junio de 1992, en la cual el Inspector de Tierra en asocio con el Agrimensor de Reforma Agraria, y de conformidad con lo indicado en los artículos 100, 101 y 104 del Código Agrario, establecieron entre otras cosas, los linderos del mismo, de la siguiente manera:

"NORTE: Callejón a las Tranquillas,
SUR: Trinidad Gómez,
ESTE: Hipólito Franco, y Pedro Pimentel,
OESTE: Camino de los Potreros a los Caratales.

Aunado a lo anterior, en el precitada Acta de Inspección Ocular, se estableció que no hubo oposición, ni trabajadores ajenos, que eran tierras adjudicables, y que cumplía con la función social. Que igualmente, tenía cultivadas aproximadamente, 15 has. con pasto faragua con árboles esporádicos de laurel, nance, espavé y su actividad principal consistía en la ganadería. Por otro lado, se le dio cumplimiento a la diligencia de notificación a los colindantes, en atención a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Agrario, tal como se observa a fs. 6-8 del expediente administrativo.

Finalmente, se constata a fs. 11-17, la publicación de los Edictos, exigida en el artículo 108 del precitado Código Agrario, que de dicha solicitud hiciera el Funcionario Provincial Sustanciador de Reforma Agraria, tanto en el Departamento de Reforma Agraria, Región 3 de la Provincia de Herrera, y en la Alcaldía del Distrito de Ocú, lugar donde se solicitó el terreno, así como también la publicación que se efectuase de los mismos, en el Diario La Prensa los días 10, 11 y 12 de enero de 1993. Cumpliendo así con la exigencia establecida en el artículo 108 del aludido Código Agrario. Observándose que a la fecha de vencimiento de la publicación de los mismos, no se anunció ni se interpuso en ningún momento oposición a la referida adjudicación de dichas tierras, conforme a lo establecido en el artículo 133 del aludido Código Agrario.

Por tanto, al no haber oposición, y surtidos los anteriores trámites legales, observa esta Sala que la Dirección Nacional de Reforma Agraria en atención a la facultad que le confiere el artículo 95 del Código Agrario, procedió a adjudicar definitivamente a Título Oneroso al señor **DORINDO PIMENTEL SAEZ** la referida parcela de terreno baldío, la cual se dio a través de la Resolución N° 6-2024 de 13 de octubre de 1993, cuya ilegalidad se acusa.

En cuanto a la propiedad que alega la señora **EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ**, sobre las 16 hectáreas de terreno adjudicadas al señor **PIMENTEL SÁEZ**, observa este Tribunal que la misma no ha sido comprobada. Únicamente consta en autos que el día 3 de marzo de 1986, mediante formulario N° 6-7098, la prenombrada señora solicitó a la Reforma Agraria la adjudicación de una parcela de terreno de aproximadamente 32 hectáreas, ubicadas en el Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocú, no hay constancias de que la Dirección de Reforma Agraria le haya adjudicado la propiedad sobre dichos terrenos, mediante el cumplimiento de los trámites legales correspondientes a los que se hizo referencia en párrafos anteriores.

En el presente proceso sólo consta que a la demandante señora **EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ**, se le adjudicó mediante diligencia de remate efectuada el día 25 de octubre de 1988, la cual fuere aprobada por la Resolución fechada 21 de noviembre de 1991, legible a fs. 37-38, el siguiente bien:

> "Derechos posesorios pertenecientes a María Aurelia Sáez, que limita al norte con terreno de Hipólito Sáez; Sur, Quebrada El Limón y terreno de Isabel Gómez; Este, terreno de Hipólito Franco, y Oeste, terreno de Isabel Gómez y Quebrada El Limón ... Este globo de terreno tiene una extensión de 8 hectáreas, por la suma de OCHO-CIENTOS BALBOAS (B/.800.00)."

De acuerdo con lo expuesto, se observa que tanto la cantidad de hectáreas de terreno, como los linderos establecidos en la precitada resolución judicial, no concuerdan con la cantidad ni con los linderos establecidos en la Resolución N° 6-2024 de 13 octubre de 1993, mediante la cual la Dirección Nacional de Reforma Agraria adjudicó definitivamente la parcela de terreno baldío en referencia, al señor **PIMENTEL SAEZ**. Mediante la referida diligencia de remate se le adjudicó a la señora **EVELIA MUÑOZ** los derechos posesorios sobre un globo de terreno con una extensión de ocho (8) hectáreas, y la adjudicación definitiva al señor **DORINDO PIMENTEL SÁEZ**, por parte de la Reforma Agraria se dio sobre un globo de terreno baldío de con una superficie de dieciséis hectáreas con cuatro mil ciento setenta y cinco metros cuadrados y veintinueve decímetros cuadrados (16 has+4175.29 m2).

Se infiere entonces que no existen evidencias de que la señora **EVELIA MUÑOZ DE SÁNCHEZ** sea propietaria de la parcela de terreno baldío adjudicada definitivamente a título oneroso al señor **DORINDO PIMENTEL SÁEZ** por la Reforma Agraria, previo el cumplimiento de los trámites legales de rigor, como ha quedado demostrado en líneas anteriores.

Por lo expuesto, no prosperan los cargos de ilegalidad endilgados al acto administrativo consistente en la Resolución N° D. N. 6-20-24 de 13 de octubre de 1993, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

En cuanto a la infracción del Artículo 44 de la Constitución Nacional, este Tribunal desea indicar al recurrente que se encuentra inhibido de conocer de la misma, en virtud de que las mismas no son revisables ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que esta es una competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema.

Finalmente, en lo que respecta a la violación del artículo 15 del Código Civil, que recoge el principio de que: "Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a las leyes", la Sala estima que no es de aplicación al presente negocio, en razón de que dicha disposición únicamente es aplicable a los actos u órdenes de

carácter ejecutivo expedidos por el Gobierno en ejercicio de la potestad reglamentaria, no a actos de naturaleza jurisdiccional como lo constituyen las resoluciones judiciales que según alega, fueron desconocidas por el acto administrativo impugnado. Por ende, no prospera el cargo de ilegalidad.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° D. N. 6-2024 de 13 de octubre de 1993, expedida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE EXPRESO VERAGÜENSE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 45 DE 9 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, actuando en representación de **EXPRESO VERAGÜENSE, S. A.**, promovió demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, dictada por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, por la cual se regula el uso del Centro Municipal de Trasbordo de Transporte, ubicado en el Corregimiento de El Chorrillo.

A petición de la demandante, mediante auto fechado el 2 de febrero de 1996, la Sala suspendió provisionalmente, los efectos de la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, por medio de la cual se decide (fs. 120):

> "**ARTÍCULO PRIMERO:** Centralizar en el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas de Transporte Concesionarias de Las Rutas que operan desde la ciudad de Panamá hacia las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa.
>
> **ARTÍCULO SEGUNDO:** Una vez concluido el proceso de privatización las Organizaciones o Empresas de Transporte Concesionarias que operan en las rutas comprendidas en la provincia de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa deberán utilizar como centro de llegada o salida de sus vehículos, el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo. Por tanto no se autorizará el funcionamiento de otras piqueras en el servicio interurbano desde la ciudad de Panamá hacia las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa.
>
> **ARTÍCULO TERCERO:** Se concede un plazo de treinta días (30) hábiles, una vez entrado en operación el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas Concesionarias de Las Rutas que operan en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Viceversa a fin de hacer uso de las instalaciones de dicho Centro.

ARTÍCULO CUARTO: Se permitirá el servicio en el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo a todas las Organizaciones o Empresas de transporte Concesionarias que presten el servicio en otras rutas, siempre que manifiesten su interés de utilizar dicho Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo para lo cual deben dirigirse al dueño del prenombrado Centro previa autorización de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

ARTÍCULO QUINTO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. ..."

Al suspender este acto administrativo la Sala se motivó su decisión así:

"En la "Sección V" de la Ley 14 de 1993, bajo el título "Terminales y Piqueras", el artículo 46 establece literalmente lo siguiente:

"**ARTÍCULO 46.** El Ente Regulador, **previa consulta a los Consejos Técnicos Provinciales de Transporte,** determinará la ubicación de las estaciones terminales, los sitios y paradas intermedias y las piqueras que regirán el transporte terrestre público de pasajeros. Cuando el interés público lo exija, el Ente Regulador podrá modificar el señalamiento de las estaciones terminales, los sitios de paradas y las piqueras, quedando los concesionarios y los transportistas obligados a sujetarse a estos cambios, en un plazo no mayor de seis (6) meses." (El resaltado es de la Sala).

En la parte motiva de la Resolución N° 45 de 9 de junio de 1995, se señala que mediante la Resolución N° 11 del 30 de mayo de 1995, el Consejo Técnico Provincial de Transporte de Panamá emitió opinión favorable al proceso de privatización del Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo, pero no consta en la misma que el Ente Regulador haya consultado al Consejo Técnico Provincial para que emitiera su opinión en cuanto a la modificación del señalamiento de las estaciones terminales que ya estaban funcionando antes de que se privatizara el Centro Municipal de Trasbordo de Transporte de El Chorrillo; omisión que, a juicio de la Sala, constituye una violación al ordenamiento jurídico que amerita la suspensión de la resolución atacada en la presente demanda de nulidad. ...

Aunado a lo anterior, la parte actora acreditó la inversión de una considerable suma de dinero para la construcción de una terminal de trasbordo de pasajeros con oficinas ubicadas en el Marañón, Corregimiento de Calidonia, oficinas a las cuales el Municipio de Panamá extendió permiso de ocupación el 14 de marzo de 1995, por lo que la sociedad demandante probó que de implementarse la Resolución impugnada con el presente recurso contencioso de nulidad, se podría producir un perjuicio notoriamente grave de difícil o imposible reparación que debe evitarse hasta tanto se resuelva sobre el fondo del presente negocio luego de tramitarse este proceso." (Fs. 122-123).

Por medio de un escrito fechado el 30 de mayo de 1996, la parte actora presentó nueva solicitud de suspensión (fs. 179 a 181), esta vez de la Resolución N° 69 de 9 de abril de 1996 y de los efectos de la Nota N° ALT/095/96 de 21 de mayo de 1996, por medio de la cual se comunica esa decisión, con fundamento en el artículo 75 de la Ley 135 de 1943, el cual preceptúa lo siguiente:

"**ARTÍCULO 75.** Cuando estando pendiente un juicio se hubiera ordenado suspender provisionalmente un acto administrativo, y la misma corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibición del artículo 54, bastará solicitar la suspensión, acompañando copia del nuevo acto.

Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del juicio, y en la sentencia definitiva se resolverá si se levanta o mantiene la suspensión."

A juicio de la actora el nuevo acto administrativo, la Resolución N° 69 de 1996 emitida por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuya suspensión solicita, reproduce el acto original cuyos efectos han sido suspendidos.

El contenido de este nuevo acto, Resolución No. 69 de 1996, emitida por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en lo pertinente, es el siguiente: "Acoger en forma favorable la Resolución proferida por el **CONSEJO TÉCNICO DE PANAMÁ** en Resolución N° 5 de 18 de abril de 1996 y determinar la modificación de las actuales estaciones terminales que utilizan las empresas concesionarias que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros desde la ciudad de Panamá hacia las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Viceversa hacia la Terminal **ÚNICA** de **EL CHORRILLO".**

Esta resolución fue comunicada al demandante, mediante la Nota N° ALT/095/96 de 1996, la cual le solicita al Representante Legal de **EXPRESO VERAGÜENSE** tomar las medidas necesarias para que los concesionarios del servicio de transporte terrestre de pasajeros, reglamentadas en la resolución N° 69, se ajusten a la modificación de las estaciones terminales actuales hacia la terminal **ÚNICA DE EL CHORRILLO**, conforme al artículo 46 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993.

De lo expuesto se infiere que, tal como lo afirma el demandante, a pesar de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 45, de 9 de junio de 1995, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre dictó la Resolución N° 69 de 1996, que es un nuevo acto que reproduce el acto impugnado originalmente ya que ambos producen los mismos efectos los cuales han sido suspendidos por la Sala. Al comunicarle el nuevo acto a la demandante, mediante la Nota N° ALT/095/96 de 1996 queda clara la intención de la autoridad demandada de ejecutar los efectos suspendidos del acto administrativo impugnado en este proceso.

Además de lo expuesto, la Resolución N° 5 de 18 de abril de 1996, que acoge el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en la nueva Resolución N° 69 de 1996, fue proferida por el Consejo Técnico de Panamá, y no consta que hayan sido consultados los otros Consejos Técnicos de las provincias afectadas con la medida, ya que la estación terminal la utilizarían las empresas concesionarias que prestan servicio de transporte desde Panamá hacia las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Viceversa.

Las fojas 157 a 179 están formadas por un ejemplar de la Gaceta Oficial N° 23,022 de 24 de abril de 1996, en la que aparece publicada la Resolución N° 69 de 9 de abril de 1996, y el original de la Nota N° ALT/095/96 de 21 de mayo de 1996, enviada por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre al Representante Legal de **EXPRESO VERAGÜENSE, S. A.**.

En virtud de lo anterior, a juicio de la Sala el peticionista ha motivado adecuadamente la solicitud de suspensión provisional y ha suministrado al Tribunal los elementos probatorios que permiten decretar la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 75 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución N° 69 de 9 de abril de 1996 y de la Nota N° ALT/095/96 de 21 de mayo de 1996, ambas dictadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO MARIO CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA Y PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA DE 23 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN PANAMEÑA DE BALONCESTO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Olmedo Mario Cedeño actuando en su propio nombre ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acta de 23 de marzo de 1996 expedida por la Federación Panameña de Baloncesto.

Encontrándose el presente negocio pendiente a resolver su admisibilidad, el resto de la Sala observa que se ha presentado escrito de desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra los mencionados actos administrativos, por lo que procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado OLmedo Mario Cedeño, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO O. CABREDO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS SAYAVEDRA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 16 DE 26 DE ABRIL DE 1995, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE PROVEEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alberto Cabredo actuando en representación de Carlos Sayavedra, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 16 de 26 de abril de 1995, emitido por el Director General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario incorporar al expediente copia autenticada de las fojas 15, 16 y 17 del pliego de cargos de la licitación pública N° DC-02-94 realizada por la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para el suministro de Materiales

y útiles de aseo que usaran las agencias consumidoras del gobierno central, instituciones autónomas, semi-autónomas, y municipales del estado, durante el año 1995.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOLICITA a la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro que le remita a la mayor brevedad posible la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN PROPIA PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA SOBRE SOLICITUD DE PRECIOS PARA ADQUIRIR VIVIENDAS EN RESIDENCIAL ESPINAR, PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz actuando en representación propia, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 13 de mayo de 1996, en la que no se admite la demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, todos los actos públicos celebrados por la Autoridad de la Región Interoceánica sobre solicitud de precios para adquirir viviendas en Residencial Espinar, Provincia de Colón y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda corregida por considerar que el demandante, no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, ya que los avisos de convocatoria publicados en distintos periódicos dentro de la República son actos preparatorios y no actos definitivos que son los impugnables mediante la vía contencioso administrativa.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El doctor Rolando Villalaz, sustenta su apelación en los siguientes términos:

> "1. Los Avisos de convocatoria de la Autoridad de la Región Interoceánica no son susceptibles de ser atacados mediante recursos de reconsideración o apelación, para agotar la vía gubernativa.
>
> 2. Dichos Avisos de Convocatoria de solicitud de precios para viviendas en Residencial Espinar, son de alcance general, su publicación es hecha para que todos se enteren de la posibilidad de entrar en una licitación pública de carácter fiscal y donde todos pueden recurrir contra ella.
>
> 3. El procedimiento que se da después de la convocatoria, es una licitación pública que es de alcance individual y a la cual solamente pueden recurrir administrativamente (agotando esa vía), aquellos que participaron en dicho acto público y que consintieron y consideraron que las pautas de la licitación y convocatoria eran legales.

4. Los avisos de convocatoria son actos originarios de actos públicos para solicitud de precios.

5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, son varios los actos o resoluciones que pueden ser impugnados, y en dicha norma no se señalan frases copulativas "y", sino "o" alternativos. Lo anterior quiere decir que se puede recurrir en los siguientes casos, cuando:

a. Los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 de dicha Ley.

b. Actos o resoluciones ya decididos, porque son actos o resoluciones definitivos.

c. Providencias de trámite decididas, si éstas deciden directamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, se opone al recurso de apelación, mediante la Vista N° 254 de 11 de junio 1996, en la que señala que, efectivamente, la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible y solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que confirmen la resolución apelada.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema consideran que no le asiste la razón a la parte actora, puesto que incumplió con lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, ya que los avisos de convocatoria no son actos definitivos, son actos preparatorios.

En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 18 de mayo de 1996, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por el doctor Rolando Villalaz en su propio nombre y representación contra el Administrador de la Región Interoceánica.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ORLANDO MORENO Y EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL REGLAMENTO SOBRE SERVICIOS MÉDICOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CITADA INSTITUCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado ORLANDO MORENO y el Doctor ROLANDO VILLALAZ interpusieron ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulos, por ilegales, los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento sobre Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social, adoptado por la Junta Directiva de esa Institución a través de

la Resolución N° 598 del 9 de febrero de 1973.

Al contestar la demanda mediante Vista N° 49 del 23 de enero de 1996, el Procurador de la Administración Suplente solicitó a la Sala que no accediera a lo pedido por los demandantes, ya que no se ha producido ninguna de las infracciones que se alegan (fs. 89-101). Asimismo, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, a través de su Presidente, remitió el informe de conducta que le solicitó la Sala, a través de su Nota S/N° del 11 de diciembre de 1995 (fs. 85-88).

I. LAS NORMAS ACUSADAS

Los demandantes impugnan las normas consagradas en el Capítulo V del citado Reglamento (artículos 26 al 35), las cuales tienen el contenido siguiente:

> "**Artículo 26.** Toda falta cometida por un médico debe ser conocida en primera instancia por el Director Médico de la Unidad Ejecutora correspondiente, quien determinará en un plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles si la misma es de orden administrativo o de ética profesional, a partir del conocimiento del caso. En caso de duda, consultará a la Junta Asesora Médica, quien se guiará por los principios de la Ética Médica, según han sido adoptados por la profesión médica."
>
> "**Artículo 27.** Cuando la falta incurrida sea de orden administrativa, será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Personal de la Caja de Seguro Social."
>
> "**Artículo 28.** Cuando la falta cometida sea de ética profesional, corresponderá su conocimiento al Tribunal de Honor, integrado por el Presidente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social y el Jefe del Departamento al cual corresponda el médico que ha incurrido en la falta."
>
> "**Artículo 29.** El Tribunal de Honor, al tener conocimiento de la acusación por falta a la ética profesional, designará a uno de sus miembros para que lleve a cabo una investigación con la intervención de un Médico, Odontólogo, Optometrista o Quiropráctico, en representación del profesional afectado. Para tal efecto, notificará personalmente a el o a los acusadores para que se ratifiquen las denuncias y se dictará una providencia para que comparezcan las demás personas que puedan declarar sobre la falta acusada y se agregarán al expediente todos los documentos que tengan relación con la misma. Este procedimiento se agotará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles."
>
> "**Artículo 30.** Terminada esta parte de la investigación se hará comparecer al profesional investigado y se le informará sobre los cargos que se le hayan hecho; se le tomará declaración escrita y se le concederá un término de cinco (5) días hábiles para que aporte todas las pruebas de descargo."
>
> "**Artículo 31.** Se dejará constancia escrita de todas las declaraciones, las cuales deberán ser hechas siempre en presencia del Director Ejecutivo Médico o del funcionario designado por él y el Médico, Odontólogo, Optometrista o Quiropráctico que actúe en representación del profesional afectado."
>
> "**Artículo 32.** Una vez terminada la investigación se presentará el expediente al Tribunal de Honor para su estudio y se determinará si son necesarias nuevas pruebas. En este último caso, el Tribunal de Honor podrá conceder un plazo extraordinario hasta de cinco (5) días hábiles para la aportación de las mismas."
>
> "**Artículo 33.** Una vez que el Tribunal de Honor tenga pleno

conocimiento de la investigación, recomendará a la Dirección Ejecutiva Médica en un plazo de tres (3) días hábiles, las medidas que al respecto deberá adoptar la Dirección General."

"**Artículo 34.** Comprobadas las acusaciones contra cualquier Médico, Odontólogo, Optometrista o Quiropráctico, el Director General impondrá las sanciones siguientes, según la gravedad de la falta:

1. Amonestación en privado por el Director Ejecutivo Médico, dejando constancia escrita en el expediente del funcionario acusado.
2. Suspensión del cargo hasta por quince días.
3. Separación definitiva del cargo."

"**Artículo 35.** El funcionario sancionado podrá solicitar la reconsideración de su caso ante el Director General o apelar ante la Junta Directiva. Agotada la vía administrativa ante la Institución, el sancionado podrá recurrir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia."

II. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Los demandantes estiman que las disposiciones acusadas infringieron los artículos 17 (literal b) y 29-C de la Ley N° 30 del 26 de diciembre de 1991, normas cuyo contenido es el siguiente:

"**Artículo 17:** Son facultades de la Junta Directiva:

...
b) Dictar y reformar los reglamentos y los acuerdos de carácter normativo.
..."

"**Artículo 29-C:** Los profesionales y técnicos de la salud al servicio de la Caja de Seguro Social gozarán de estabilidad y no podrán ser removidos o suspendidos sin que haya una razón justificada, debidamente comprobada en investigación especial llevada a cabo por el Director Nacional de Servicio y Prestaciones Médicas, un miembro de la Junta Asesora Médica y un profesional o técnico de la salud en representación del afectado. Tampoco podrán ser trasladados de una ciudad a otra sin el consentimiento del interesado.

La Junta Asesora Médica, después de estudiar el informe de la Comisión, recomendará a la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas las medidas que al respecto deben adoptarse por la Dirección General.

Las sanciones que se impongan serán clasificadas, según la gravedad de la falta, así:

a) Amonestación en privado, pero se dejará constancia escrita en el expediente del profesional;
b) Suspensión hasta por quince (15) días;
c) Remoción.

Parágrafo 1°:

El Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas será el superior jerárquico en todo lo concerniente a los servicios y prestaciones médicas.

Parágrafo 2°:

Los profesionales de la salud al servicio de la Caja de Seguro Social tendrán derecho a ejercer libremente su profesión fuera de las horas de servicio, con excepción del Director General o del

Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas.

El incumplimiento de este parágrafo acarreará la insubsistencia inmediata del cargo."

Con respecto a la norma invocada, debemos indicar, en primer lugar, que las frases "con excepción del Director General o del Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas" y "El incumplimiento de este parágrafo acarreará la insubsistencia inmediata del cargo", fueron declaradas inconstitucionales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 26 de junio de 1992 (Registro Judicial de junio de 1992, págs. 255-260).

Consideran los demandantes que los preceptos acusados violan el citado literal b) del artículo 17 ibídem, porque hacen distinciones que ésta última no consagra, reconociendo así una potestad no establecida en la ley. De este modo, se desconoce la estabilidad del profesional de la salud, ya que se permite a un funcionario que determine cuándo dicho profesional puede acogerse o no a un procedimiento que la ley no ha establecido. La facultad que la Ley Orgánica concede a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ha sido indebidamente interpretada, en este caso, para aprobar una serie de normas del Reglamento sobre Servicios Médicos que contradicen y chocan abiertamente con lo establecido en el artículo 29-C de la misma excerta legal.

A juicio de los demandantes, la infracción del artículo 29-C se dio porque el procedimiento especial que esta norma consagra para el despido, suspensión o traslado de todo profesional de la salud no distingue en cuanto a si el mismo sólo aplica cuando se trate de faltas a la ética profesional y no para las administrativas, ni tampoco concede facultades a ningún Director Médico para determinar si se aplica o no la misma.

Los demandantes también consideran que se han violadolos artículos 10 y 15 del Código Civil, los cuales preceptúan lo siguiente:

"**Artículo 10**. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal."

"**Artículo 15**. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a las leyes."

Los demandantes estiman que el artículo 10 del Código Civil ha sido violado porque los preceptos acusados desconocen el sentido natural y obvio de las palabras contenidas en el artículo 29-C de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que consagra el derecho a la estabilidad del profesional de la salud y el procedimiento aplicable en los casos de despidos, suspensiones y traslados.

En cuanto al artículo 15 del Código Civil, éste se considera violado porque las normas impugnadas consagran un procedimiento contrario al de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, para sancionar a los profesionales de la salud.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La primera disposición que se cita como violada es el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la cual faculta a la Junta Directiva de esa entidad para dictar y reformar los reglamentos y acuerdos de carácter normativo.

La Sala considera que la aludida norma no ha sido infringida porque los preceptos acusados, que integran el Capítulo V del Reglamento sobre Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social, se dictaron, precisamente, en cumplimiento de la atribución establecida en el precepto que se invoca como violado, es decir, en desarrollo de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Lo que habría que determinar, en todo caso es si, al ejercer dicha atribución legal, la Junta

Directiva de la aludida institución violó otras normas como las citadas por los demandantes. Por estos motivos la Sala desestima el primer cargo.

El artículo 29-C del Decreto-Ley N° 14 del 29 de agosto de 1954, subrogado por el artículo 21 de la Ley N° 30 del 26 de diciembre de 1991, también se consideró violado por las normas acusadas, ya que éstas instituyen un procedimiento distinto al que éste consagra. Para establecer si los artículos 26 al 35 del Reglamento sobre Servicios Médicos (Resolución N° 598, de 9 de febrero de 1973) infringen el artículo 29-C subrogado por el artículo 21 de la Ley N° 30 del 26 de diciembre de 1991, cuya vigencia es posterior al Reglamento citado, es necesario referirnos al procedimiento que contiene cada una de estas excertas legales, tomando en consideración que la Ley prevalece sobre el Reglamento por razón de su superioridad jerárquica.

El citado artículo 29-C establece el procedimiento que debe seguirse para que los profesionales y técnicos de la salud al servicio de la Caja de Seguro Social puedan ser removidos, suspendidos o trasladados de sus respectivos cargos. Para que tal remoción o suspensión proceda es necesario, en primer lugar, que exista **"una razón justificada"**, que no puede ser otra que la comisión de alguna falta que amerite la adopción de alguna de las mencionadas medidas.

La comprobación de la falta debe realizarse mediante una investigación especial llevada a cabo por una Comisión integrada de la siguiente manera:

a) el Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas;
b) un miembro de la Junta Asesora Médica; y,
c) un profesional o técnico de la Salud en representación del afectado (Inciso 1° del art. 29-C).

Posteriormente, la Junta Asesora Médica (compuesta por siete (7) miembros escogidos entre los distintos Jefes de Departamentos y Servicios Médicos de las Policlínicas y Hospitales de la Caja de Seguro Social, según el artículo 29-B), debe estudiar el informe que le rinda la Comisión y recomendar a la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas las medidas que al respecto debe adoptar la Dirección General.

Finalmente, el Director General de la Caja de Seguro Social podrá adoptar, de acuerdo con la gravedad de la falta, alguna de las sanciones que se establecen en el tercer párrafo del artículo en cita.

El Capítulo V del Reglamento demandado, contentivo de las normas impugnadas también consagra un procedimiento para la aplicación de las faltas en que incurran los médicos. De acuerdo con el artículo 26, la falta será conocida en primera instancia por el Director Médico de la Unidad Ejecutora correspondiente, quien determinará en un plazo de cinco días hábiles si la misma es de orden administrativo o contra la ética profesional.

El artículo 27, que examinaremos separadamente, dispone que cuando la falta sea de orden administrativa, será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Caja de Seguro Social. Si la falta cometida es de ética profesional el conocimiento de la misma corresponderá a un Tribunal de Honor integrado por el Presidente de la AMOACSS y el Jefe del Departamento al cual pertenece el médico que incurrió en la falta (art. 28). Para comprobar la falta, dicho Tribunal debe designar a uno de sus miembros para que, junto con un médico, odontólogo, optometrista o quiropráctico en representación del afectado, realice una investigación de los hechos. Se notificará a los denunciantes y a las personas que deban declarar y todos los documentos que tengan relación con la investigación se agregarán a un expediente. Las declaraciones deben hacerse siempre por escrito y en presencia del Director Ejecutivo Médico o del funcionario designado por él y del Médico, Odontólogo, Optometrista o Quiropráctico que actúa en representación del profesional afectado (arts. 29 y 31).

Después de la fase instructoria, deben informarse personalmente al profesional investigado los cargos; se le tomará declaración escrita y se le concederá un término de cinco (5) días hábiles para que aporte las pruebas de

descargo (artículo 30). Completada la fase de descargos, se presentará el expediente al Tribunal de Honor para que lo estudie y determine si son necesarias nuevas pruebas o, en caso contrario, para que recomiende a la Dirección Ejecutiva Médica en un plazo de tres (3) días hábiles las medidas que al respecto deberá adoptar la Dirección General (artículos 32 y 33).

Finalmente, el Director General de la Caja de Seguro Social podrá imponer cualquiera de las sanciones establecidas en el transcrito artículo 34 del reglamento (Cfr. f. 2), dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Expresa el artículo 35, que el sancionado podrá reconsiderar ante el Director General o apelar ante la Junta Directiva de la mencionada institución y, una vez agotada la vía gubernativa, recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

De la confrontación que ha hecho la Sala de los procedimientos consagrados tanto en el artículo 29-C ibídem como en las normas demandadas, se desprenden claras infracciones al texto de aquél, las que para mejor ilustración se pueden esbozar así:

I. COMPETENCIA PARA INVESTIGAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA FALTA:

De acuerdo con el artículo 29-C, la investigación para comprobar los hechos constitutivos de la falta en que incurra un profesional o técnico de la salud corresponderá a una Comisión integrada por el Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, un miembro de la Junta Asesora Médica y un profesional o técnico de la salud en representación del afectado. Sin embargo, según los artículos 26, 28, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento parcialmente demandado, es el Director Médico de la Unidad Ejecutora quien, en primera instancia, determina la naturaleza de la falta, consultando para ello, cuando fuere necesario, a la Junta Asesora Médica. Además, la investigación de los hechos corresponde al Presidente de la AMOACSS y al Jefe del Departamento al cual pertenece el médico que incurrió en la falta, como integrantes del Tribunal de Honor al que se refiere el artículo 28. Dicha investigación se realizará con la intervención de un Médico, Odontólogo, Optometrista o Quiropráctico, en representación del profesional afectado.

II. RECOMENDACIÓN DE LA SANCIÓN A APLICAR:

El segundo párrafo del artículo 29-C preceptúa que la Junta Asesora Médica, después de estudiar el informe de la Comisión, recomendará a la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas las medidas que al respecto debe adoptar la Dirección General. Como se indicó anteriormente, la aludida Junta Asesora está compuesta por siete (7) miembros escogidos entre los distintos Jefes de Departamentos y Servicios Médicos de las Policlínicas y Hospitales de la Caja de Seguro Social.

El artículo 33 del Reglamento, por su parte, dispone que la recomendación de la sanción que debe aplicarse al profesional o técnico de la salud que incurrió en la falta, corresponde también al Tribunal de Honor.

Con fundamento en estas observaciones, la Sala considera que los artículos 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento sobre Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social violan el artículo 29-C de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, tal como sostienen los demandantes.

En lo que concierne a los artículos 27, 34 y 35 de dicho Reglamento, la Sala estima que los mismos no son contrarios al texto de aquélla norma, por las razones que en adelante anotaremos.

Como se ha visto, el artículo 29-C regula el procedimiento que debe seguirse cuando los profesionales y técnicos de la salud incurren en un hecho que requiere la aplicación de medidas disciplinarias como la suspensión, el traslado o la remoción del cargo. Estima la Sala, que el referido procedimiento se aplica a los casos de faltas contra la ética profesional, negligencia e incompetencia manifiesta en el ejercicio profesional, mencionadas en la parte final del artículo 29-B ibídem, lo que se desprende de la forma en que debe llevarse a cabo

la investigación; de la composición o integración de los miembros de la Comisión que debe realizarla; del hecho de que la norma regule específicamente lo relativo a la estabilidad de los profesionales y técnicos de la salud; y, muy particularmente, de la intervención de la Junta Asesora Médica en la recomendación de la sanción que debe aplicarse al profesional o técnico que cometió la falta. De acuerdo con la parte final del supracitado artículo 29-B de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la mencionada Junta Asesora Médica tiene entre sus funciones la de **"conocer los casos relativos a la ética profesional, negligencia en el desempeño profesional e incompetencia manifiesta en el ejercicio profesional"**.

La Sala coincide así el señor Procurador de la Administración Suplente, cuando indicó que en los casos de faltas administrativas cometidas por profesionales y técnicos de la salud se aplica el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social. Lo anterior es así, en primer lugar, porque el primer párrafo del artículo 21 de este Reglamento dispone la aplicación de sus normas a todo servidor público que labore para la Caja de Seguro Social. El contenido de esta norma es del tenor siguiente:

> **"Artículo 2:** Las personas de nacionalidad panameña que laboran para el Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, ya sea por contrato o nombramiento, son servidores públicos; por consiguiente, están sujetos a las disposiciones del Código Administrativo y a las leyes que lo adicionan o modifican, así como también, **a las disposiciones contenidas en este Reglamento**.
> ..."
> (Las negrillas son de la Sala; en lo que concierne la Ministerio de Salud, el Reglamento Interno de Personal, adoptado a través del Resuelto N° 767 del 1° de junio de 1970, fue declarado inconstitucional mediante Sentencia del 30 de noviembre de 1995, Registro Judicial de noviembre de 1995, págs. 143-145).

Entre las numerosas faltas administrativas que puede cometer el personal administrativo y los profesionales y técnicos de la salud, consagradas en el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva mediante la Resolución N° 768 del 16 de marzo de 1977, están las siguientes:

> -ausencias y tardanzas injustificadas;
> -marcar o firmar por otro el registro de asistencias;
> -incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias;
> -abandono del lugar de trabajo;
> -desobediencia o negativa a cumplir una orden dada por el superior jerárquico inmediato;
> -pérdida o daños en los instrumentos, objetos, útiles, equipo o maquinarias de trabajo;
> -conducta irrespetuosa y uso de lenguaje insultante o soez hacia los miembros de la Junta Directiva, del Director General ... o hacia los compañeros de trabajo;
> -divulgación de asuntos confidenciales de la institución;
> -asistir al trabajo bajo los efectos del alcohol o bajo cualquier otra forma de narcosis, o conducir vehículos propiedad de la institución bajo este estado;
> -falsificación o adulteración de registros o documentos relacionados con las institución;
> -solicitar o recibir dádivas o gratificaciones de cualquier clase, por la ejecución de trabajos propios del cargo;
> -discutir o hablar en voz alta dentro de la oficina o comer frente al público.
> -sacar de la oficina equipo o materiales de la institución;
> -no respetar las líneas de autoridad establecidas;
> -portar armas ilegalmente en horas de trabajo y proferir amenaza con armas de cualquier naturaleza;
> -comprar, vender o promover la venta de rifas, mercancías, lotería, chances clandestinos, dentro de la institución; etc.

Tal como se ha visto, los profesionales y técnicos de la salud al servicio de la Caja de Seguro Social pueden incurrir en cualquiera de las faltas que a título de ejemplo se han citado. Sin embargo, en estricta lógica jurídica, sería inconcebible que para sancionar las tardanzas o ausencias injustificadas, el abandono del cargo, la solicitud o recepción de dádivas, etc. se aplique el procedimiento que contempla el artículo 29-C ibídem, que requiere la intervención de un personal especializado como lo son los médicos que integran la Junta Asesora Médica.

Todo lo anterior es cónsono con el segundo párrafo del artículo 28-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social que textualmente expresa que la Junta Directiva de esta institución "establecerá los requisitos generales para ser funcionario de la Institución y dictará las normas reglamentarias para los nombramientos y traslados, **los procedimientos de investigación, medidas disciplinarias y sanciones que se impondrán en caso de violaciones cometidas por los funcionarios, de acuerdo al reglamento interno de personal y al manual de clasificación de puestos vigente.**" Si bien la parte inicial de esta norma se refiere a los funcionarios administrativos, en su segundo párrafo no distingue la clase de servidor público a los que se les debe aplicar el reglamento interno de personal, sino que alude en forma general a las **"violaciones cometidas por los funcionarios"**, dentro de los cuales deben entenderse incluidos a los profesionales y técnicos de la salud cuando cometan faltas de esta naturaleza.

La aplicación de las sanciones contempladas en el Reglamento de Personal corresponde al Director General de la Caja de Seguro Social y, en segunda instancia, a la Junta Directiva, según preceptúan los artículos 22 (literal e) y 17 (literal k) del Decreto-Ley N° 14 de 1954.

En base a los razonamientos hechos, la Sala considera que el artículo 27 del Reglamento demandado no viola el artículo 29-C en cita, porque cuando esta norma expresa que el Reglamento Interno de Personal se aplicará en los casos de faltas administrativas cometidas por los profesionales y técnicos de la salud, no hace más que ajustarse al contenido de las disposiciones legales anteriormente comentadas, que así lo autorizan. Cabe agregar, que este criterio lo expresó la Sala Tercera en su Sentencia del 30 de noviembre de 1992 (Registro Judicial de noviembre de 1992, págs. 45-93).

Asimismo, la Sala considera que el artículo 34 del Reglamento demandado no viola el artículo 29-C del Decreto-Ley N° 14 de 1954, porque las sanciones contempladas en ambas normas son idénticas. Cabe aclarar, sin embargo, que la denominación "Director Ejecutivo Médico" a que se refiere el numeral 1° del Reglamento demandado corresponde ahora a la de Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, según se desprende del parágrafo 1° del artículo 29-C ibídem, en concordancia con el literal h) del artículo 8 y el artículo 7 del Reglamento demandado, norma ésta que preceptúa que el Director Ejecutivo Médico de la Caja de Seguro Social será el superior jerárquico en todo lo concerniente a los Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social y en su carácter de tal, será el jefe del personal médico y afines de dichos servicios".

Finalmente, la Sala estima que el artículo 35 del Reglamento impugnado tampoco se ha violado, porque esta norma no hace más que señalar los recursos que el profesional afectado puede interponer contra el acto administrativo en que se le impone la sanción. Como se indicó anteriormente, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social faculta al Director General de la referida institución para imponer sanciones a todo su personal y las resoluciones o decisiones que con este fin adopte dicho funcionario, pueden ser conocidas en segunda instancia por la Junta Directiva, tal como preceptúa el literal e) del artículo 22 y el literal k) del artículo 17 de la Ley Orgánica del aludido ente de seguridad social. Además, como es sabido, tales resoluciones o decisiones constituyen actos administrativos susceptibles de ser impugnados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según establece el artículo 98 del Código Judicial.

Los demandantes también estiman violados los artículos 10 y 15 del Código Civil. Sostienen que las normas impugnadas desconocen el sentido natural y obvio de las palabras contenidas en el artículo 29-C de la Ley Orgánica de la Caja de

Seguro Social, que expresamente consagra el derecho a la estabilidad del profesional de la salud y los procedimientos e investigaciones especiales que se les debe seguir a los mismos. A juicio de la Sala, esta norma no ha sido violada porque la misma se aplica exclusivamente cuando un funcionario encargado de interpretar y aplicar una ley encuentre en su contenido palabras o términos de significado dudoso, oscuro o ambigüo, caso en el cual debe atender al significado dado por el legislador y, en su defecto, al sentido natural y obvio de las palabras, según el uso general de las mismas y, en el presente negocio, mediante el acto impugnado, no se está interpretando ni aplicando norma alguna. El acto impugnado es un Reglamento dictado para ejecutar una Ley. El artículo 29-C ibídem no contiene definiciones de palabras o términos, por lo cual mal han podido ser desconocidas por las normas demandadas.

La Sala considera que los artículos 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de Reglamento demandado también violan el artículo 15 del Código Civil, todas vez que, como normas expedidas en ejercicio de la potestad reglamentaria, son contrarias al artículo 29-C de la Ley Orgánica de la Caja de Seguros Social. El artículo 15 del Código Civil, como se ha expresado, exige que las normas reglamentarias que dicten los funcionarios o corporaciones públicas investidas de esta potestad, no sean contrarias a la Constitución ni a las leyes. Lo que ha ocurrido en el presente caso es que normas de un Reglamento anterior son contrarias a una Ley posterior y, en consecuencia, han devenido en ilegales.

Por las razones anotadas, la Sala considera que únicamente son ilegales los artículos 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento sobre Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social y así debe declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON ILEGALES los artículos 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento sobre Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social y que los artículos 27, 34 y 35 del mismo Reglamento, adoptado por la Junta Directiva de la referida Institución, mediante Resolución N° 598, del 9 de febrero de 1973, NO SON ILEGALES.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ARSENIO GARCÍA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE EMIGDIO MURILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 165 PROFERIDA POR EL CORREGIDOR DE CANTO DEL LLANO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Arsenio García Valdés, actuando en nombre y representación de Emigdio Murillo, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° 165 proferida por el Corregidor de Canto del Llano y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el licenciado García Valdés solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala debe examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

El acto acusado lo constituye la resolución N° 165 emitida por el Corregidor de Canto del Llano en la que se prohibe al señor Emigdio Murillo, propietario del bus N° 25, de la ruta Forestal-Mercado, estacionarse frente a la propiedad del señor Hermel Cruz.

Al resolver sobre la admisión de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, ya que la resolución impugnada no es un acto acusable ante la jurisdicción contencioso-administrativa por ser el mismo un acto de policía, tal como lo preceptúa el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943.

En virtud de lo anterior, lo procedente es no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Arsenio García Valdés, actuando en nombre y representación de Emigdio Murillo para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° 165 proferida por el Corregidor de Canto del Llano y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LCDO. DONALDO SOUSA GUEVARA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 362 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Donaldo Sousa Guevara, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 362 de 17 de noviembre de 1993, emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.

Dentro del libelo la parte actora formula una solicitud de suspensión del acto impugnado.

El Magistrado Sustanciador procede a estudiar la presente demanda a fin de determinar si el acto impugnado constituye una violación a un "Derecho Humano Justiciable".

Observa quien suscribe que el acto impugnado es la resolución N° 362 de 17 de noviembre de 1993 emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, mediante la cual se aprueba el cambio de uso de suelo R2B (residencial de mediana densidad) a R-E (Residencial Especial).

El recurrente considera que dicho acto constituye una violación a el derecho de protección del medio ambiente y el derecho de propiedad.

El proceso contencioso de protección de derechos humanos esta dirigido a obtener la protección de los derechos humanos justiciables previstos en las Leyes de la República y aquellas que aprueben Convenios Internacionales, que se estiman

han sido lesionados pro la autoridades administrativas. De acuerdo con estos planteamientos, vemos que el objeto de este proceso es fundamentalmente la protección de los derecho civiles y políticos que son innatos, propios y naturales al hombre como persona y no como ocurre en el caso bajo examen, en el cual se aduce que la protección del medio ambiente y la propiedad son derechos humanos.

Quien suscribe, considera que, en primer lugar, el derecho a la protección del medio ambiente, regulado en nuestro país por leyes como la Ley N° 2 de 12 de enero de 1995 y la Ley 24 de 7 de junio de 1995, entre otras, constituye un derecho que tiende a la protección, conservación, restauración...de los recursos genéticos, así como de especies, razas y variedades de vida silvestre, para beneficio y salvaguarda de los ecosistemas naturales ... (artículo 1 de la Ley 24 de 7 de junio de 1995, G. O. N° 22,801), lo que equivale a un derecho programático, es decir, que va a depender del desarrollo de una serie de programas y políticas, tendientes a lograr la protección conservación y salvaguarda del ecosistema, y no un derecho humano justiciable.

Por otro lado, quien suscribe no está de acuerdo con los criterios vertidos por el apoderado judicial de la parte actora con respecto al derecho de propiedad, como derecho humano justiciable, pues el mismo tal y como lo establece nuestra legislación, es un derecho real de índole económico-jurídico que confiere las prerrogativas de uso, abuso y disfrute, a quien sea titular del mismo. El contencioso de protección a los derechos humanos no se estableció para reparar derechos de carácter patrimonial o económicos. Para estos últimos casos existe la acción de plena jurisdicción.

En cuanto a la solicitud de suspensión, el Magistrado Sustanciador considera que esta solicitud sólo es procedente, por razones de economía procesal, cuando la demanda cumple con los presupuestos procesales necesarios para su admisibilidad. De lo contrario se estaría efectuando un trámite preliminar sin objeto.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de protección a los derecho humanos para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 362 de 17 de noviembre de 1993, emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL A QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma De Obaldía & García de Paredes, en representación del BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), ha interpuesto tercería excluyente dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE SEGURO SOCIAL a QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC.

La tercerista solicita a esta Sala que se excluya del embargo decretado

mediante el auto de 22 de mayo de 1995, por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, los bienes muebles de propiedad de Queen Chemical Industry, Inc., S. A., descritos en el hecho segundo del escrito de tercería presentado y en la escritura pública N° 2,743 de 17 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Público el 5 de mayo de 1995, hipotecados, mediante la referida escritura a favor del Banco Panamericano, S. A. (PANABANK), además fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

> "**PRIMERO:** Mediante Escritura Pública N° 2743 de 17 de marzo de 1995, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, el BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK), celebró contrato de préstamo con la sociedad QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIEN DÓLARES (US $175,100.00).
> ...
> **TERCERO:** La Escritura Pública 2743 de 17 de marzo de 1995, fue presentada a las oficinas del Registro Público el día 30 de marzo de 1995, e inscrita a la ficha 69604, rollo 14764, imagen 0073 de la Sección de Micropelículas (Hipotecas sobre Bienes Muebles), desde el 5 de mayo de 1995.
>
> **CUARTO:** El 5 de septiembre de 1991, la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social libró mandamiento de pago en contra de QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., por la suma de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES CON 93/100 (US $75,500.93), sin que mediase un Auto Ejecutivo que precidiera dicha orden.
>
> **SEXTO:** Mediante Auto de 22 de mayo de 1995, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, decretó formal embargo sobre los bienes muebles e inmuebles, de la sociedad QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., hasta por la suma de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON 47/100 (US $80,883.47), en concepto de morosidad en el pago de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social.
>
> **SÉPTIMO:** Los días 15, 16, 19, 20, 21 de junio de 1995, se efectuó la diligencia de Inventario y Avalúo de los bienes muebles propiedad de la sociedad QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., por parte del Alguacil Ejecutor de la Caja de Seguro Social. No fue sino hasta esa fecha en que se hizo una descripción detallada de los bienes muebles propiedad de la demandada.
>
> **OCTAVO:** La Caja de Seguro Social no ha ingresado a la oficina del Registro Público, Orden de Inscripción del Secuestro o Embargo en contra de la sociedad QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., por lo que la Escritura Pública 2743 de 17 de marzo de 1995, pudo inscribirse sin advertencia de medida cautelar o embargo alguno. ..." (fs. 35 a 40).

Admitida la tercería, se corrió en traslado a la ejecutada, a la Procuradora de la Administración y al Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, por el término de Ley, y se ordenó suspender el remate.

La representante judicial del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social contestó la tercería y señaló que conforme al artículo 77 del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, la Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de cualesquiera otros acreedores en relación con sus créditos. (Fs. 48 y 49).

Mediante la Vista Fiscal N° 431 de 13 de octubre de 1995, la señora Procuradora de la Administración contestó el traslado y se manifestó en desacuerdo con la pretensión de la tercerista, porque no cumple con lo establecido en los numerales 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, según los cuales el título de dominio o derecho real en el que funda su pretensión debe ser de fecha anterior al auto ejecutivo dictado por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social contra el ejecutado, el 5 de septiembre de 1991.

Consta a foja 1 del expediente que mediante Auto de 5 de septiembre de 1991, notificado el 17 de septiembre de 1991, el Juzgado Ejecutor de la Caja de

Seguro Social libró mandamiento de pago en contra de Queen Chemical Industry Inc., por la suma de B/.75,541.93 en concepto de cuotas obrero patronales dejadas de pagar a la Caja de Seguro Social, recargos e intereses legales hasta la cancelación de la deuda más el incremento de las planillas regulares que no sean canceladas a partir del próximo estado de cuenta emitido por la Dirección de Ingresos, Departamento de Apremio y Trámite al Cobro de la Morosidad Patronal.

Mediante Resolución de 22 de mayo de 1995, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social decretó formal embargo sobre todos los bienes muebles e inmuebles, dineros, créditos, valores, registros contables, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas por cobrar en cualquier concepto propiedad de QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC., así como la Administración hasta la suma provisional de B/.80,883.47, más los intereses legales que resulten a la fecha de la cancelación.

De acuerdo con lo previsto en los ordinales 1, 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en una título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; y si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso; y para ello son admisibles todas las pruebas con que pueda acreditarse los derechos reales en bienes de esa clase.

En el presente caso la tercerista presentó la Escritura Pública N° 2,743 de 17 de marzo de 1995, por la cual "el BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK) declara cancelados los gravámenes hipotecarios constituidos a su favor por el señor ALEXIS BLASSER STANZIOLA sobre las Fincas N° 121,867 y N° 133,563, ambas de la Provincia de Panamá, y el BANCO PANAMERICANO, S. A. (PANABANK) celebra Contrato de Préstamo con la sociedad QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC. garantizado con Primera Hipoteca sobre bienes muebles y nuevas Primeras Hipotecas y Anticresis sobre las Fincas N° 121,867 y N° 133,563, todas de la Provincia de Panamá, de propiedad del señor ALEXIS BLASSER STANZIOLA.", y cuya cláusula quinta del contrato de préstamo detalla los bienes muebles propiedad de la empresa Queen Chemical Industry Inc. hipotecados a favor del Banco Panamericano, S. A. La Escritura Pública N° 2743 fue inscrita en el Registro Público el 5 de mayo de 1995.

Como quiera que se ha probado en autos que el derecho real constituido por el Banco Panamericano, S. A. (PANABANK) sobre los bienes muebles hipotecados a su favor, y su inscripción es posterior al auto mediante el cual el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social libró mandamiento de pago contra Queen Chemical Industry, Inc., el cual fue oportunamente notificado a la ejecutada, la tercería excluyente promovida debe declararse no probada porque no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la tercería excluyente promovida por Banco Panamericano, S. A. (PANABANK), dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE SEGURO SOCIAL, S. A. a QUEEN CHEMICAL INDUSTRY, INC.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN

EN REPRESENTACIÓN DE ORAFLA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS LE SIGUE A DARCY I. DICKERAY DE ISMAY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La sociedad denominada ORAFLA, S. A., ha presentado, por intermedio de su apoderado judicial especial la firma de abogados Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Hacienda y Tesoro a Darcy Iona Dockeray de Ismay.

El tercerista fundamenta su petición en los hechos que se transcriben a continuación:

"PRIMERO: Mediante Escritura Pública N° 3,590 del 20 de octubre de 1965, extendida en la Notaría Primera del Circuito de Panamá, la señora Darcy Iona Dockeray de Ismay, S. A. celebró un contrato de préstamo con la sociedad ORAFLA, S. A., de conformidad con la cual la primera reconoció adeudar a nuestra representada la suma de DOCE MIL BALBOAS (B/.12,000).

SEGUNDO: En el instrumento público descrito en el hecho anterior la señora DARCY IONA DOCKERAY DE ISMAY, con el objeto de garantizar el pago de la suma adeudada a ORAFLA, S. A., constituyó a favor de esta última primera hipoteca y anticresis sobre la finca de su propiedad número 12,305 inscrita al Tomo 353, Folio 62 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá del Registro Público.

TERCERO: La Escritura Pública indicada en el hecho Primero de este escrito consta inscrita en el Registro Público al Tomo 220, Folio 400, Asiento 96,658 de la sección de la hipoteca y anticresis desde el 22 de octubre de 1965.

CUARTO: A pesar de que la señora DARCY IONA DOCKERAY DE ISMAY realizó abonos a la deuda contraída con la sociedad ORAFLA, S. A., aún adeuda a ésta la suma de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN BALBOAS (B/.5,521.00) en concepto de capital, más los intereses calculados a la tasa de nueve (9%) anual, conforme quedó acordado en la cláusula segunda de la escritura pública número 3,590 de 20 de octubre de 1965 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá.

QUINTO: La primera hipoteca y anticresis otorgada a favor de ORAFLA, S. A. en relación con la finca 12,305 de propiedad de la señora DARCY IONA DOCKERAY DE ISMAY, se encuentra vigente a la fecha, tal como lo acredita la certificación expedida al efecto por la Dirección General del Registro Público.

SEXTO: El documento en el cual consta la obligación que adeuda la señora DARCY IONA DOCKERAY DE ISMAY, a la sociedad ORAFLA, S. A. presta mérito ejecutivo a tenor de lo que establece el numeral cuarto del artículo 1639 del Código Judicial y dicho título se encuentra inscrito y vigente en el Registro Público desde el 22 de octubre de 1965, es decir es anterior al auto ejecutivo de fecha 10 de abril de 1980, dictado por la Administración Regional de Ingresos, Zona Oriental del Ministerio de Hacienda y Tesoro, dentro del proceso ejecutivo que por jurisdicción coactiva ha promovido dicha dependencia en contra de la señora DARCY IONA DOCKERAY DE ISMAY, en atención a la morosidad causada en concepto de impuesto de inmueble respecto de la finca 12,305, inscrita al tomo 353, Folio 62 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, perteneciente a la ejecutada.

SÉPTIMO: La primera hipoteca y anticresis constituida sobre la finca

12,305 a favor de ORAFLA, S. A. le confiere a esta última derecho a percibir con prelación y preferencia las sumas que produzca el remate público a del mencionado inmueble, a fin de satisfacer la acreencia en cuanto a capital, intereses, costas y gastos."

El suscrito Magistrado Sustanciador corrió traslado de la tercería al Administrador Regional de Ingresos y al Procurador de la Administración Suplente.

El Procurador de la Administración Suplente, contestó mediante Vista Número 35 de 15 de enero de 1996, y solicitó acceder a la Tercería Coadyuvante en cuestión.

Consta en el expediente la escritura 3590 de 20 de octubre de 1965 expedida por la Notaría Primera del Circuito de Panamá en la cual la señora Darcy Iona Dockeray de Ismay, para garantizar el préstamo que la sociedad denominada le otorga, constituye, en la cláusula 4ª, primera hipoteca y anticresis por la suma de doce mil balboas (B/.12,000.00) a favor del Banco Nacional de Panamá sobre la finca 12,305.

Es evidente, pues, que le asiste razón al apoderado judicial de la sociedad ORAFLA, S. A. por lo que debe la Sala acceder a la petición formulada por el mismo.

Por último cabe señalar que de acuerdo al artículo 1661 del Código Civil gozan de preferencia sobre los bienes inmuebles y derechos reales "los créditos a favor del estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de los impuesto que graviten sobre ellos". Por lo tanto, la Dirección General de Ingresos, una vez cancelada la morosidad del pago de impuestos que existe sobre la finca en cuestión, debe pagarle a la sociedad ORAFLA, S. A. la suma que se le adeuda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la Tercería Coadyuvante presentada por la sociedad denominada ORAFLA, S. A. dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue la Administración Regional de Ingresos a Darcy I. Dickeray De Ismay y DECLARA que una vez satisfecho el crédito del Estado por morosidad del impuesto de inmueble que goza de preferencia sobre el crédito de la sociedad ORAFLA, S. A., éste debe recibir, como acreedor hipotecario, el pago de su deuda con el producto de la venta del bien embargado.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR EL DOCTOR JACINTO JAVIER ESPINOSA GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO HIPOTECARIO POR COBRO COACTIVO QUE LA CAJA DE AHORROS LE SIGUE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jacinto Javier Espinosa González, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto excepción de prescripción de la acción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE AHORROS.

La presente excepción está en la etapa procesal de resolver en el fondo y

antes de emitir un pronunciamiento, la Sala estima necesario dictar auto para mejor proveer, a fin de comprobar la fecha y la cuantía del último pago que el señor Jacinto Javier Espinosa González hizo a la Institución acreedora.

Con este fin se dispone solicitar a la Caja de Ahorros que, con base en los documentos que reposan en esa institución, informe a la Sala la fecha y monto del último abono a la obligación contraída con la Caja de Ahorros por Jacinto Javier Espinosa, con cédula de identidad personal N° 7-54-304, mediante el contrato de línea de crédito garantizado con segunda hipoteca sobre la finca N° 29,013, celebrado el 29 de diciembre de 1986, y protocolizado en la Escritura Pública N° 13,454 de 29 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Público el 12 de febrero de 1987.

Esta prueba de informe se solicita con fundamento en el artículo 1801 del Código Judicial, el cual preceptúa que en los procesos por cobro coactivo se procederá conforme a las disposiciones que regulan, los juicios ejecutivos y demás normas legales sobre la materia; el artículo 1712 del Código Judicial, el cual señala que el Juez decretará pruebas de oficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 782; y el artículo 782 ibídem, el cual establece que el Juez de segunda instancia practicará aquellas pruebas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se requiera a la Caja de Ahorros que remita, en el término de diez (10) días, un informe en el cual conste la fecha y monto del último abono a la obligación contraída por el señor Jacinto Javier Espinosa González, con cédula de identidad N° 7-54-304, con esa institución, mediante el contrato de línea de crédito de 29 de diciembre de 1986, protocolizado en la Escritura Pública N° 13,454 de 29 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Público el 12 de febrero 1987.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALFONSO FRAGUELA EN REPRESENTACIÓN DE DANIEL A. CASTAÑEDA CAYÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, A DANIEL CASTAÑEDA C. Y BLANCA CONTRERAS DE CASTAÑEDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alfonso Fraguela, en representación de **DANIEL A. CASTAÑEDA CAYÓN**, ha promovido incidente de nulidad, en el proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Daniel Alfonso Castañeda Cayon y a Blanca Contreras de Castañeda.

La parte actora ha solicitado ante esta Sala, que se decrete nulo todo lo actuado por la Caja de Ahorros, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue a Daniel A. Castañeda Cayon, debido a la falta de notificación personal de la diligencia de reconocimiento de firma y del Auto de mandamiento de pago a la señora Blanca Contreras de Castañeda codeudora hipotecaria.

El incidentista ha fundamentado su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que la señora **BLANCA CONTRERAS DE CASTAÑEDA** y el señor

DANIEL ALFONSO CASTAÑEDA CAYON celebraron contrato de **COMPRA Y VENTA** con la **SOCIEDAD ANÓNIMA KALLESIN, S. A.**, y que a su vez aquellos celebraron contrato de **PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y ANTICRÉTICA** con la **CAJA DE AHORROS;** grabando así el **inmueble objeto de la transacción, y constituyéndose ambos compradores en CODEUDORES HIPOTECARIOS DE LA ENTIDAD CREDITICIA ARRIBA MENCIONADA.**

SEGUNDO: Que toda la operación descrita en el hecho anterior, fue elevada a Escritura Pública a través de la **NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO**, y distinguida como la **ESCRITURA N° 2308 DE 25 DE MARZO DE 1987.**

TERCERO: Que por diversas razones incluyendo la invasión de 1989, la entrada que percibía nuestro representado le imposibilitó hacerle frente a la cuota parte de la deuda adquirida con la **CAJA DE AHORROS.**

CUARTO: Que por todo lo arriba detallado **LA CAJA DE AHORROS,** procedió a ejecutar a los **CODEUDORES HIPOTECARIOS DEL INMUEBLE** distinguido como la Finca **16259 PH**, Rollo **1328**, Documento **2**, consistente en el apartamento 4-b, del Condominio Ketty.

QUINTO: Que una vez promovido **El Juicio Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo**, se notificó a nuestro representado de la **Diligencia de Reconocimiento de Firma,y del Auto que ordena el Mandamiento de Pago**, de la deuda originada por medio del préstamo antes aludido, más sin embargo se obvió **LA NOTIFICACIÓN PERSONAL** a la otra **CODEUDORA** del inmueble, en este caso la señora **BLANCA CONTRERAS DE CASTAÑEDA."**

En el caso en estudio, el Juez Ejecutor de La Caja de Ahorros mediante Auto N° 754 de 20 de julio de 1994, libró mandamiento de pago contra DANIEL ALFONSO CASTAÑEDA CAYON Y BLANCA CONTRERAS DE CASTAÑEDA, hasta la concurrencia de B/.78,595.65 en concepto de capital, intereses vencidos y pólizas de seguro. Adicionalmente decretó embargo sobre la finca N° 16259, inscrita al rollo complementario 1328, documento 2, Asiento 3, de la Propiedad Horizontal, propiedad del señor Castañeda Cayón, la cual fue dada en garantía en la presente obligación (foja 20).

A foja 30 del expediente reposa el Auto N° 162 fechado 9 de marzo de 1995, por el cual el Juez Ejecutor resolvió hacer uso del derecho de anticresis con fundamento en la cláusula cuarta del contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética contenido en la Escritura Pública N° 2308, otorgada por el Notario Segundo el 25 de marzo de 1987.

Como las resoluciones dictadas en el proceso ejecutivo, tal y como queda demostrado, están pendientes de notificación y no han sido ejecutadas, el incidente de nulidad interpuesto es manifiestamente improcedente y debe rechazarse de plano, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 697 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, el incidente de nulidad interpuesto por el licenciado Alfonso Fraguela dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Daniel Castañeda C y Blanca Contreras de Castañeda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, PLAZO VENCIDO DE LA FIANZA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA LICDA. LENIS ORTEGA CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **LENIS ORTEGA** actuando en representación de **RICARDO DE LA ESPRIELLA**, ha interpuesto, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a la empresa **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.**, las siguientes incidencias:

1. Excepción de Prescripción de la obligación cuyo pago se requiere;

2. Excepción conforme al artículo 812 del Código de Comercio en relación a la liberación de la fianza solidaria;

3. Excepción de inexistencia de la obligación.

ANTECEDENTES INMEDIATOS

Según consta en autos, la empresa **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.** celebró un contrato de préstamo, y línea de crédito hasta 30 mil balboas para sobregiro con el Banco Nacional de Panamá, el 6 de enero de 1982. En dicha obligación, signaron en calidad de fiadores solidarios de la obligación contraída los señores EMANUEL ARIAS CHIARI, **RICARDO DE LA ESPRIELLA JR.** y GALO PINTO DE LA OSSA. (cláusula décimo quinta del contrato visible a folios 17-23 del cuaderno principal).

Las condiciones medulares del convenio establecían que el contrato de sobregiro tendría un plazo de vigencia de un año, pero era susceptible de ser prorrogado por el Banco, aceptando los fiadores solidarios "anticipadamente" cualquiera o cualesquiera prórrogas que el Banco decidiera conceder a la Empresa contratante.

Según narra el incidentista, la sociedad deudora utilizó la totalidad del sobregiro aprobado en el mismo año 1982, y por dificultades económicas cerró operaciones sin llegar a honrar el compromiso con la entidad bancaria.

Se advierte sin embargo, que no fue sino hasta el año 1993 que la entidad acreedora inicia los trámites de recuperación del crédito, expidiéndose Auto de Secuestro N° 399 contra la Empresa deudora y los fiadores solidarios de la obligación, y Auto Ejecutivo N° 409 de 25 de mayo de 1993 librándose mandamiento de pago por vía ejecutiva en contra los prenombrados.

En ese momento, uno de los fiadores, señor GALO PINTO compareció ante el Juzgado Ejecutor el 27 de mayo de 1993, notificándose del libramiento ejecutivo, reconociendo la totalidad de la deuda, y solicitando un arreglo de pago con el Banco Nacional de Panamá. Dicha propuesta de pago obra a foja 38 del expediente administrativo y fue sometido a la consideración del Comité de Crédito con vías de evaluar la solvencia del mismo (f. 41).

El 26 de agosto de 1993 el Banco continuó realizando gestiones contra los otros dos fiadores solidarios, tal como se desprende del Memorándum visible a foja 45 del expediente de ejecución, luego de percatarse que la sociedad deudora no poseía bienes inmuebles y parecía resultar insolvente, expediéndose un segundo auto de secuestro N° 953 de 24 de septiembre de 1993 sobre cualesquiera otros bienes de la empresa deudora y sus fiadores.

Con posterioridad, en el año 1994, se accede finalmente a un arreglo de pago entre el Banco y los representantes de la Sociedad deudora, señores PINTO y ARIAS CHIARI, quienes según el contenido del documento visible a folio 1 del legajo actuaban no en su calidad de fiadores solidarios, sino en representación de la empresa, toda vez que EMANUEL ARIAS CHIARI fungía como Presidente y Representante legal de la misma.

Debemos destacar que los términos de la propuesta inicial para el Acuerdo presentada por la sociedad deudora consistían en que los señores PINTO y ARIAS CHIARI concertaran préstamos individuales y personales para pagar la deuda en proporciones de 50% y 25% respectivamente, y el 25% restante se pagaría en efectivo al liberarse la fianza otorgada por el señor RICARDO DE LA ESPRIELLA. (F. 1-2 y 27 del cuaderno principal).

Sin embargo, se advierte que el arreglo aceptado por el Banco el 16 de mayo de 1994 establecía tres condicionamientos, distintos a los propuestos, a saber (f. 2):

1. negar la distribución de la deuda;
2. negar la liberación de fianza de RICARDO DE LA ESPRIELLA
3. aceptar arreglo de pago por B/.475.00 mensuales

Se observa que según documento fechado 10 de junio de 1994, los representantes de la empresa suscribieron una nota dirigida al Banco ejecutante, **aceptando sin excepción, todas las condiciones impuestas por el Banco Nacional** para aceptar el arreglo de pago.

Sin embargo, este Acuerdo fue igualmente incumplido, tomándose la determinación en el año 1995 de reactivar las acciones legales suspendidas durante la vigencia de este Acuerdo, tal como se desprende de los documentos visibles a fojas 55-65 del expediente de ejecución, incluyéndose en la misma al licenciado DE LA ESPRIELLA en su calidad de fiador solidario de la obligación principal contraída.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA Y
OPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Habida cuenta que obran en el expediente tres incidentes distintos, esta Superioridad procede a examinar los argumentos del excepcionante en cada caso, y la opinión jurídica vertida por la Procuraduría de la Administración a través de la Vista Fiscal N° 475 de 8 de noviembre de 1995, que coincide con los planteamientos de la entidad ejecutante, al solicitar al Tribunal se nieguen las peticiones formuladas por el excepcionante.

a) EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

El excepcionante manifiesta a esta Superioridad que en este caso ha operado el fenómeno jurídico de prescripción de la obligación, toda vez que se trata de un contrato de préstamo y línea de crédito para sobregiro firmado en el año 1982, y siendo que la empresa hizo uso de la totalidad del sobregiro a mediados de ese mismo año cuando cerró operaciones y dejó de pagar la obligación convenida, ésta se convirtió en una obligación de plazo vencido en esa misma fecha, por lo que a la fecha del auto ejecutivo, había operado la prescripción de la obligación.

En efecto, según el incidentista, el término de prescripción aplicable en este caso es el previsto en el artículo 1650 del Código de Comercio, sobre la prescripción ordinaria de las obligaciones que opera a los cinco años contados a partir del momento en que la obligación se hace exigible o de plazo vencido, lo que ocurrió, según el excepcionante, a mediados del año 1982.

El argumento central que funda la excepción se traduce en la circunstancia de que el Banco Nacional de Panamá no notificó dentro de esos cinco años ni a la empresa deudora, ni al fiador solidario sobre la exigencia de pago.

En oposición a estos planteamientos, la Procuraduría de la Administración ha indicado a esta Sala que:

"La supuesta prescripción sucedida según el recurrente, no se ha originado en ningún momento, puesto que hay manifestaciones evidentes que traen como consecuencia jurídica la interrupción de la alegada prescripción. ...

Por otro lado, consta tanto en el expediente contentivo de este Incidente de Excepciones como en el Juicio Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, hechos que indubitablemente interrumpieron cualquier período de prescripción que se haya podido dar. Al efecto, señalamos la notificación de uno de los fiadores, Galo Pinto De La Ossa del auto Ejecutivo, visible a fojas 25 de este expediente. En esta misma diligencia de notificación, el señor DE LA OSSA, solicita un arreglo de pago, el cual formaliza mediante Nota de ese mismo día, 27 de mayo de 1993.

Posteriormente, conjuntamente con el representante legal de la empresa Internacional de Servicios Ejecutivos y Empresariales, S. A. y también fiador solidario, Emanuel Arias Chiari, solicitan según Nota de 14 de abril de 1994, el precitado arreglo de pago al Banco. ...

Indiscutiblemente que todos estos hechos, indican fehacientemente, que la empresa deudora y los fiadores solidarios aceptaron las obligaciones contraídas en el banco ejecutante, razones por las cuales, el hecho de que uno de los fiadores solidarios, Ricardo De La Espriella Jr. no haya manifestado su aceptación a las obligaciones generadas, al igual que su no participación en el arreglo de pago, en el cual convinieron tanto la empresa ejecutada como los otros dos fiadores, no es razón para que el excepcionante quede excluido de toda responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el contrato de línea de crédito, antes indicado.

Afirma, el incidentista, además, que el Banco Nacional de Panamá no requirió el pago de los fiadores solidarios incluyéndolo a él, y que sólo requirió a los deudores, no obstante, ni aún esto exime de responsabilidad a los fiadores solidarios, tal y como lo determina el artículo 810 del Código de Comercio, el cual sólo dispensa al fiador solidario del pago de los intereses en el período de la omisión de dicho requerimiento."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Corporación Judicial advierte que el ejecutado se opone al auto ejecutivo, considerando que le asiste y favorece la excepción de prescripción de la obligación, esto es, que invoca un hecho extintivo para enervar la pretensión.

El punto a determinar por parte del Tribunal para resolver la cuestión enderezada, es cuándo se hizo exigible o de plazo vencido la obligación, puesto que es a partir de ese momento en que se inicia el cómputo del término de prescripción de la obligación.

Los hechos acreditados en el negocio indican que la obligación contraída en el año 1982 tenía un plazo de vencimiento de un año, pero era renovable a opción del Banco, esto es, que el acreedor podía prorrogar el plazo del contrato, y los afianzadores personales y solidarios de la obligación, entre los que se encontraba el señor **DE LA ESPRIELLA** habían aceptado anticipadamente, en la cláusula décimo quinta del contrato, cualquier prórroga que el Banco Nacional decidiera conceder a la sociedad deudora.

Esta Superioridad tropieza con el obstáculo de que no consta en el expediente, escrito sobre la concesión de esta prórroga; sin embargo, existe documentación que apunta hacia la indubitable conclusión de que el Banco Nacional efectivamente accedió a prorrogar el plazo de duración del contrato, en vías de que la parte beneficiada con la línea de crédito para sobregiro, pagase lo adeudado.

Del material probatorio remitido al Tribunal por el Banco Nacional, consistente en los recibos de pago de la cuenta de sobregiro de la empresa **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.** (fs. 58-60 del cuaderno principal), se colige que efectivamente, la prórroga o extensión tuvo lugar, puesto que existen comprobantes sobre los abonos efectuados a la cuenta, que aunque en intervalos irregulares, se realizaron desde el año 1982 hasta el mes de agosto de 1991.

Otra razón valedera para considerar que la prórroga sí se verificó, descansa en la circunstancia de que no existe evidencia de que el Banco Nacional haya enviado carta de aviso a la sociedad deudora **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.**, manifestándome su decisión de dar por terminado el contrato, exigiéndose el pago inmediato de la obligación, modalidad para la exigencia del pago prevista en el propio contrato.

En todo caso, lo más significativo es que la empresa continuó realizando pagos al Banco Nacional de Panamá hasta el mes de agosto de 1991. Según la documentación aportada por el Banco, es después de esta fecha que no se realizaron más abonos a la cuenta, considerándose que desde entonces entra en mora en el pago de su obligación.

Dos años más tarde, y ante el evidente incumplimiento de la obligación contraída, la entidad acreedora declara de plazo vencido la obligación, e inicia los trámites ejecutivos para la recuperación del crédito.

Cabe indicar entonces, que la obligación no se hizo exigible y de plazo vencido en el año 1982 como invoca el excepcionante para fundar la prescripción, sino en el año de 1991 en que entró en mora con la entidad bancaria.

Por otro lado, luego de expedido el mandamiento ejecutivo en el año 1993, (sin que hubiesen transcurrido cinco años desde el momento en que la obligación se hizo exigible), el representante legal de la empresa deudora y uno de los fiado-res solidarios han realizado en dos oportunidades **reconocimientos de la deuda**, tal como obra a folios 1 y 25 del expediente principal.

Se concluye a partir de estas premisas que:

1. que la deuda no se hizo exigible en el año de 1982, sino en 1991, en que la empresa entra en mora con el Banco Nacional;

2. los pagos voluntarios realizados por la empresa constituyen sin lugar a dudas un reconocimiento de la obligación que mantenía con el Banco Nacional como vigente, lo que interrumpe la prescripción de la obligación conforme lo establece el artículo 1649-A del Código de Comercio.

3. emitido el auto de libramiento de pago en el año 1993, se produce el reconocimiento expreso de la deuda por parte de la empresa deudora, por lo que tampoco se verifica la prescripción. Como en este caso no habían transcurrido los 5 años que para los actos de comercio exige el artículo 1649, ni los 5 años que para los fiadores exige el artículo 812 del Código de Comercio como término de prescripción, la obligación no se encontraba prescrita.

Tienen sin embargo cabida en este punto dos consideraciones adicionales. La primera de ellas dice relación con la circunstancia de que conforme al artículo 808 del Código de Comercio, el fiador puede ser ejecutado con preferencia al deudor principal, en cuyo caso el primero puede ofrecer al embargo bienes del deudor. Sin embargo el artículo 811 claramente establece que el acreedor no podrá exigir al fiador el cumplimiento de la obligación afianzada sin acreditar que ha requerido de pago al deudor principal.

En este sentido, la entidad bancaria ha realizado investigaciones tendientes a resarcir su crédito, orientando la ejecución primero hacia la empresa deudora, determinándose en este punto que ésta tiene una capacidad de pago limitada por no aparecer registrados bienes a su haber (f. 44 del cuaderno de ejecución). Por ende, también ha realizado investigaciones tendientes a

determinar la solvencia y liquidez de los fiadores solidarios, encaminando contra éstos la ejecución, en vías de poder resarcir la totalidad de su crédito que en la actualidad supera los 40 mil balboas.

Por otra parte, el contenido del artículo 810 del Código de Comercio establece que el fiador solidario tiene derecho a ser requerido al pago desde que el deudor se encuentra en mora. En este caso, se expidió el mandamiento de pago en el año 1993 y dos autos de secuestro, uno del año 1993 y otro del año 1994, que sin embargo no le fueron notificados, y no es sino hasta el año 1995, según notas visibles a fojas 61 y siguientes del cuaderno de ejecución, cuando se iniciaron los trámites de notificación de RICARDO DE LA ESPRIELLA. Por tanto, en caso de que la ejecución afecte los bienes del fiador excepcionista, no deben computarse en su contra los intereses ocasionados durante el tiempo en que no se le notificó la exigencia de la obligación.

La Corte concluye por todo lo expuesto, que no se ha probado la excepción de prescripción alegada.

b) EXCEPCIÓN EN CUANTO A LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 812 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

El incidentista considera que es oponible en este caso una excepción accesoria de vencimiento de plazo de la fianza, con base en el artículo 812 del Código de Comercio, puesto que han transcurrido más de cinco años desde que se realizó el afianzamiento y en tal período no se requirió el pago.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Al examinar la incidencia en comento esta Superioridad considera que la misma deviene en su absoluta improcedencia, toda vez que el texto legal invocado contiene la previsión de que el fiador pueda exigir al deudor principal la exoneración de la fianza. El texto legal no ha establecido de manera alguna que esta facultad del fiador solidario pueda hacerse valer ante el acreedor de la obligación, lo cual responde a la naturaleza jurídica del contrato accesorio de afianzamiento, cuya relación jurídica vincula al fiador con el deudor de una obligación, no así con el acreedor.

Por otra parte, recordemos que se trata de una obligación afianzada de manera solidaria por tres personas, por lo cual el banco podía pedir a cada uno de ellos el cumplimiento total de la deuda de manera simultánea. (Cfr. arts. 1024 y siguientes del Código Civil).

El Banco Nacional de Panamá, desde el inicio de la ejecución, ha entablado la misma contra el deudor principal y los tres fiadores solidarios. Si bien el deudor principal, la empresa **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.**, en momentos en que negociaba la suspensión de la ejecución a través de un compromiso de arreglo de pago propuso la idea de liberar al fiador solidario RICARDO DE LA ESPRIELLA de la fianza otorgada, el Banco Ejecutante se negó a esta propuesta, estableciendo que para consolidar el arreglo de pago, las garantías personales otorgadas debían mantenerse idénticas. Esta condición fue aceptada sin reparos por la empresa deudora, lo que evidencia su negativa a liberar al afianzador.

Estas razones jurídicas evidencian la imposibilidad de reconocer la excepción propuesta sobre liberación de la fianza.

c) EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

La tercera y última incidencia planteada es la de inexistencia de la obligación reclamada contra el fiador RICARDO DE LA ESPRIELLA.

El excepcionante considera en este punto que al haberse entablado un arreglo de pago entre deudor y acreedor, estableciéndose un plazo para completar el pago, se ha extinguido la obligación contraída por el fiador, quien no participó en el arreglo.

La Procuraduría de la Administración considera por su parte, que resulta contradictorio que se alegue por una parte la excepción de prescripción de la obligación, lo que constituye un reconocimiento de la que la obligación existe o existió, y simultáneamente se invoque la excepción de inexistencia de la obligación.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Analizados los argumentos presentados, la Sala Tercera está en condiciones de externar lo siguiente:

En primer término, de la exposición del actor se desprende que la verdadera orientación procesal de la incidencia apunta hacia una supuesta extinción de la obligación principal contraída, donde RICARDO DE LA ESPRIELLA fungía como fiador solidario, por el surgimiento de una nueva relación contractual dentro de la cual el prenombrado no tuvo participación, ni figura como parte integrante del mismo.

Como se ha invocado la prescripción de la obligación, misma que no ha sido reconocida por el Tribunal, es menester determinar si se ha producido la extinción de la obligación por otro medio procesal. El Código Civil establece en el artículo 1043 y de manera específica en el artículo 1538 los medios de extinción de las obligaciones, particularmente cómo ésta puede afectar al fiador. Reproducimos el tenor de la normas para mayor ilustración:

> "Artículo 1043. Las obligaciones se extinguen: por pago o cumplimiento; por la pérdida de la cosa debida; por la condonación de la deuda; por la confusión de los derechos de acreedores y deudores; por la compensación; por la novación".
>
> "Artículo 1538. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones".

Si observamos las normas transcritas, podemos percatarnos que la obligación que según el excepcionante es inexistente, no se ha extinguido por ninguna de las causales antes descritas.

Nos referiremos particularmente a la posibilidad de extinción por novación, dado que aunque el incidentista no la denomina técnicamente, está sugiriendo en su exposición, la novación o renovación de la obligación cuyo cumplimiento se pretende exigir por vía ejecutiva.

Sin embargo, si por novación se entiende la sustitución o cambio de una obligación por otra posterior, que extingue o modifica la primera, sea variando su **objeto o sus condiciones principales**, **o sustituyendo la persona del deudor o subrogando a un tercero en los derechos del acreedor**, podemos colegir que no se ha producido novación de la obligación suscrita entre la empresa **INTERNACIONAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS Y EMPRESARIALES, S. A.** y el Banco Nacional de Panamá, beneficiando con tal extinción al fiador solidario RICARDO DE LA ESPRIELLA.

Los arreglos de pago suscritos entre empresa y acreedor no variaban el objeto; sólo le concedían a la primera, la oportunidad razonable de honrar su compromiso crediticio sin que se completara la ejecución de sus bienes y la de sus fiadores solidarios en la obligación contraída, ejecución que ya se había iniciado.

Las partes del contrato también se mantuvieron idénticas, al punto que cuando el deudor propuso la liberación de uno de los fiadores solidarios que garantizaban la obligación, el Banco le negó la propuesta, condicionando el arreglo de pago a la circunstancia de que se mantuvieran los mismos afianzadores que se pactaron en el contrato suscrito el 6 de diciembre de 1982.

Finalmente, debemos hacer énfasis en la circunstancia de que conforme al texto del artículo 1090 del Código Civil, la voluntad de las partes es requisito esencial de la novación extintiva, sin la cual la misma no puede operar. Así,

debe darse por terminada expresamente la antigua obligación, manifestando las partes que la obligación primitiva queda extinguida, sustituyéndola **ex novo** por la posterior. La voluntad de novación manifestada de manera implícita dice relación con el hecho de que surja una palmaria e indefectible incompatibilidad entre ambas obligaciones. Ninguna de estas dos condiciones acontece en este caso.

Por tanto, no se ha probado la excepción propuesta, y subsiste en consecuencia la obligación principal así como la obligación de fianza del excepcionante, RICARDO DE LA ESPRIELLA.

PARTE RESOLUTIVA

Examinadas de manera acuciosa cada una de las incidencias propuestas, el enjuiciamiento jurídico de esta Superioridad hace concluir que las excepciones invocadas no pueden ser reconocidas, y así procede a declararlo esta Corporación Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADAS las Excepciones de Excepción de Prescripción de la obligación cuyo pago se requiere; Excepción conforme al artículo 812 del Código de Comercio en relación a la liberación de la fianza solidaria y Excepción de inexistencia de la obligación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA DELTA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS, CONTRA SANTIAGO JUSTO ARAÚZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rosas y Rosas, actuando en representación de FINANCIERA DELTA, S. A., ha presentado incidente de rescisión de secuestro dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a SANTIAGO JUSTO ARAÚZ.

El apoderado judicial de Financiera Delta, S. A., solicita el levantamiento de la medida de secuestro que pesa sobre el automóvil marca LADA VAS, tipo camioneta, modelo 2104-3, motor 2787354, chasis 403911, del año 1994, con placa N° 8-113229/95, de propiedad del señor SANTIAGO ARAÚZ, portador de la cédula de identidad personal N° 8-111-220, decretado mediante Auto N° 2527 del 22 de noviembre de 1995 dentro del proceso ejecutivo de cobro coactivo interpuesto por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros en contra de dicho señor y otros. El incidentista fundamenta su solicitud en el hecho de que el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, decretó embargo del automóvil a favor de su poderdante, en proceso ejecutivo hipotecario en virtud de garantía hipotecaria la cual estaba vigente e inscrita en el Registro Público con anterioridad a la fecha en que el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros decretó el secuestro.

El incidentista argumenta su solicitud en los siguientes términos:

PRIMERO: Con base en la Escritura Pública N° 2957 de 22 de abril de 1994, mi poderdante y el señor SANTIAGO JUSTO ARAÚZ suscribieron

contrato de préstamo con garantía hipotecaria (derecho real) sobre bien mueble por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (US$ 5,822.29).

SEGUNDO: El señor SANTIAGO JUSTO ARAÚZ constituyó hipoteca a favor de nuestro representado para garantizar el contrato de préstamo descrito en la cláusula anterior sobre el automóvil de su propiedad marca LADA VAS, tipo camioneta, modelo 2104-3, motor 2787354, chasis 403911, del año 1994, con placa N° 8-113229/95 y dicho gravamen se encuentra inscrito en el Municipio de Panamá desde el 28 de abril de 1994.

TERCERO: La Escritura Pública N° 2957 de 22 de abril de 1994 que contiene el préstamo y gravamen hipotecario a favor de mi poderdante sobre el automóvil de propiedad del señor SANTIAGO JUSTO ARAÚZ, ya descrito, fue presentada al Registro Público para su debida inscripción el 9 de mayo de 1994 y fue inscrita a la Ficha 61362, rollo 5363, imagen 0028 de la Sección de Hipotecas de bienes muebles desde el 9 de mayo de 1994.

CUARTO: En virtud que el señor SANTIAGO JUSTO ARAÚZ incumplió las obligaciones de pago con nuestro poderdante, éste interpuso un Proceso Ejecutivo Hipotecario de Bien Mueble en contra del citado señor, el cual quedó radicado en el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

QUINTO: El Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en base a la demanda Ejecutiva Hipotecaria de Bien Mueble interpuesta por FINANCIERA DELTA, S. A., en contra de SANTIAGO ARAÚZ y otros mediante Auto 530 del día 25 de mayo de 1994.

SÉPTIMO: El gravamen que pesa sobre el automóvil de propiedad del señor SANTIAGO JUSTO ARAÚZ a favor de nuestro poderdante, de acuerdo al artículo 1761 del Código Civil y el artículo 67 del Código de Comercio, comenzó a surtir efectos para terceros desde la fecha de la presentación de la Escritura Pública N° 2957 al Registro Público, es decir, desde el 9 de mayo de 1994.

El título por el cual se otorgó la garantía hipotecaria que pesa sobre el automóvil con placa N° 8-113229/95, en mención, a favor de FINANCIERA DELTA, S. A., constituye un derecho real y fue inscrito con anterioridad a la fecha en que el Juzgado a su cargo decretó secuestro sobre dicho vehículo.

OCTAVO: Por razón de la garantía hipotecaria que pesa sobre el automóvil con placa N° 8-113229/95, en mención, a favor de FINANCIERA DELTA, S. A. inscrita con anterioridad a la fecha en que el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros decretara secuestro sobre dicho vehículo, solicitamos con la sola audiencia del Juez Ejecutor, secuestrante, que se levante la medida de secuestro decretada sobre el automóvil."

Mediante auto de 12 de enero de 1996, se admitió el incidente y se corrió traslado del mismo al Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros y a la Procuradora de la Administración.

El apoderado judicial de la Caja de Ahorros mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Tercera el 22 de enero de 1995, se opone al incidente interpuesto tal como es legible de foja 20 a 21 del expediente.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 60 de 30 de enero de 1996, solicita a esta Sala que se acceda a lo pedido en este caso por el incidentista dado que en el expediente consta que Financiera Delta, S. A., tiene una garantía real hipotecaria de bien mueble, antes que la Caja de Ahorros emitiera el auto de secuestro sobre el bien hipotecado. Asimismo, afirma la Procuradora de la Administración que reposa en las piezas procesales, copia

autenticada del auto de embargo del Juzgado Séptimo del Circuito Civil de Panamá, sobre el automóvil cuyas especificaciones antes anotamos, por lo que se cumple con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 549 del Código Judicial.

Observa la Sala que a foja 9 del expediente aparece copia autenticada del Auto N° 2527 de 22 de noviembre de 1995, en el cual el Juez Séptimo del Primer Circuito de Panamá, Ramo Civil, ordena el pago de la obligación exigida y decreta embargo a favor de FINANCIERA DELTA contra SANTIAGO JUSTO ARAÚZ, con cédula de identidad N° 8-111-220, sobre el vehículo marca Lada Vas placa N° 8-113229-95, motor N° 27873534, del año 1994, de propiedad del demandado, hasta la concurrencia de cuatro mil quinientos un balboas con noventa y ocho centésimos (B/.4501.98) desglosada así: Capital B/.3,632.82, costas B/.826.56 y gastos B/.42.60. Finalmente, se ordena la venta en pública subasta del bien mueble embargado, a fin de que satisfaga el crédito pendiente.

Del estudio del expediente, la Sala arriba a la conclusión de que no le asiste la razón al incidentista toda vez que del Auto N° 2527 de 22 de noviembre de 1995 dictado por el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, se desprende claramente que la hipoteca fue inscrita con posterioridad al auto de secuestro de 25 de mayo de 1994, decretado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a SANTIAGO JUSTO ARAÚZ y otros. Igualmente observa la Sala que el auto de embargo proferido por el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contiene certificación de fecha 19 de diciembre de 1995, tanto del Juez Ejecutor como del Secretario, que el gravamen hipotecario constituido sobre el vehículo Lada Vas se encuentra inscrito y vigente en la ficha 61362, rollo 5363, imagen 0028, desde el 3 de junio de 1994, tal como consta en la Escritura Pública N° 2957, de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es, pues, es no acceder a las pretensiones del incidentista toda vez que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 549 numeral 2° del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADO el incidente de rescisión de secuestro interpuesto por la firma Rosas y Rosas, en representación de FINANCIERA DELTA, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a SANTIAGO JUSTO ARAÚZ y otros.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO POR CONSIGNACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO VILLARREAL ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE EUGENE CHARLES MCGRATH RENAULD, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Villarreal Alvarado, ha interpuesto en representación de EUGENE CHARLES McGRATH RENAULD, excepción de pago por consignación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

La presente excepción está en la etapa procesal de resolver y antes de emitir un pronunciamiento, la Sala estima necesario dictar auto para mejor proveer. Esta declaración puede tomarse con fundamento en el artículo 1801 del

Código Judicial, en relación con los artículos 1712, 782 y 699 ídem, este último aplicable por mandato del artículo 1708 del Código Judicial. La última norma citada preceptúa que las excepciones se harán valer por medio del incidente y se sujetarán a las normas de los incidentes, siempre que no existan reglas especiales para las excepciones.

De conformidad con los citados preceptos en los procesos por cobro coactivo se aplicarán las disposiciones que regulan los juicios ejecutivos y demás normas legales sobre la materia; en las excepciones que se promuevan en estos procesos el Juez podrá decretar pruebas de oficio; si las pruebas obran en el expediente principal, basta que el incidentista las mencione, sin necesidad de que sean aportadas en el cuaderno de incidente, sin perjuicio de que el Juez tome en cuenta cualquier prueba que repose en el expediente principal aunque no haya sido identificada o mencionada por las partes.

En el caso en estudio ha sido aportado como prueba el expediente del proceso sumario de pago por consignación, iniciado por Eugene McGrath Renauld contra el Banco Nacional de Panamá, por la suma de B/.8,000.00, para que se obligue a dicha institución bancaria a recibir este dinero en concepto de canon de arrendamiento correspondiente al primer año. En este proceso está pendiente de resolución, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación civil interpuesto por el Banco Nacional de Panamá contra la decisión emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

A juicio de la Sala, además del mencionado antecedente, debe examinar el proceso seguido por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá contra Eugene McGrath Renauld para determinar, en qué concepto se libró mandamiento de pago en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se requiera al Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, que, en el término de diez (10) días remita el expediente que contiene el proceso ejecutivo por cobro coactivo que dicha institución bancaria le sigue a Eugene Charles McGrath Renauld, dentro del cual se propuso la presente excepción de pago por consignación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DE BERNARDINO RODRÍGUEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A BERNARDINO RODRÍGUEZ, JOSEFINA CORALIA DE RODRÍGUEZ Y CECILIA MARÍA RODRÍGUEZ ANGELINI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Arosemena y Arosemena, actuando en nombre y representación del señor Bernardino Rodríguez, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Bernardino Rodríguez, Josefina Coralia de Rodríguez y Cecilia María Rodríguez Angelini.

Los apoderados judiciales del demandante fundamentan el incidente de nulidad en los siguientes términos:

"PRIMERO: La Caja de Ahorros inició proceso HIPOTECARIO POR COBRO

COACTIVO en contra de nuestro patrocinado, aproximadamente el 26 de septiembre de 1994, conforme se puede constatar por motivo del poder conferido, visible a foja 12 del proceso en mención.

SEGUNDO: El mandante busca, a través del proceso que se menciona al margen superior, incoado en contra de nuestro poderdante, que por medio de la Jurisdicción especial, Juicio Hipotecario por Cobro Coactivo, se reconozca, por medio de sentencia, el pago al cual considera el demandante tiene derecho y el cual debe satisfacer nuestro apoderado.

TERCERO: En este proceso se pretende reclamar que nuestro poderdante satisfaga obligación hipotecaria que, previamente ha debido ser establecida en proceso y para lo cual incluso se hace necesaria la incorporación al Juicio Hipotecario por Cobro coactivo de la certificación de propiedad y vigencia de Hipoteca que, supuestamente, nuestro patrocinado, mantiene morosa con la demandante. Hacemos la salvedad que el documento en cuestión fue solicitado posterior al inicio del proceso, ver foja 134 del juicio, y a la fecha no ha sido incorporado en tiempo oportuno.

CUARTO: El derecho que pretende reclamar el demandante, la morosidad en el pago hipotecario, no sólo debe ser demostrado en proceso, sino que el supuesto derecho de propiedad del demandado, en virtud de la certificación registral, tiene también que comprobarse procesalmente.

QUINTO: Entendemos este derecho de propiedad con gravamen hipotecario, como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley, tal y como lo señala el artículo 337 del Código Civil, llegando a la conclusión que ese título de propiedad que por motivo del presente proceso hipotecario por cobro coactivo se pretende adjudicar la Caja de Ahorros, quitándoselo a nuestro patrocinado, no ha sido probado en proceso sin la prueba medular que debió aportar el demandante.

SEXTO: De igual manera el demandante ha tenido que comprobar en proceso que tiene la condición, capacidad o LEGITIMIDAD DE PERSONERÍA para interponer el presente proceso de cobro por jurisdicción coactiva, situación que no aparece comprobada en el proceso, toda vez que inexiste la CERTIFICACIÓN REGISTRAL que pueda establecer no sólo la existencia del préstamo hipotecario que se aduce moroso, sino la condición del señor JAVIER ARTURO VINCENSINI MORAL, como Gerente General y supuestamente REPRESENTANTE LEGAL de la Caja de Ahorros. Como se podrá apreciar de fojas 12 en adelante del proceso, la certificación de rigor comprobatoria de la condición que VINCENSINI MORAN dice tener en nombre de la CAJA DE AHORROS INEXISTE."

La Sala debe examinar si procede la interposición del incidente de nulidad.

Observa la Sala que a foja 5 del expediente que la Caja de Ahorros le sigue a Bernardino Rodríguez, Josefina Coralia de Rodríguez y Cecilia María Rodríguez Angelini, aparece la Escritura Pública N° 9406 de 28 de agosto de 1985, en cuya cláusula undécima la deudora renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. En este sentido el artículo 1768 del Código Judicial prevé claramente esta situación y señala:

"Artículo 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la

demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.

Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681." (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, se colige que en caso de renuncia a los trámites del proceso ejecutivo, como sucede en este caso, no se podrán proponer incidentes ni otras excepciones que la de pago y prescripción.

En virtud de lo antes expuesto, estima la Sala que el incidente de nulidad que se ventila en esta oportunidad, es manifiestamente improcedente y como tal, según lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, debe ser rechazado de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad interpuesto por la firma Arosemena y Arosemena en nombre y representación de Bernardino Rodríguez dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Bernardino Rodríguez, Josefina Coralia de Rodríguez y Cecilia María Rodríguez Angelini.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICDO. ROGELIO CRUZ EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
VISTOS:

El licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS**, actuando en su propio nombre, ha presentado recurso de apelación contra el auto de mandamiento de pago N° 120 de 20 de septiembre de 1995 librado por el Banco Nacional de Panamá, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la citada entidad bancaria.

El documento contentivo del auto ejecutivo reposa a folio 34 del expediente de ejecución remitido por el Banco Nacional a esta Superioridad, y en el mismo se deja constancia de que el licenciado **CRUZ** adeuda al Banco Nacional la suma de B/.15,960.98 en concepto de capital más intereses vencidos, siendo que la obligación que origina la deuda es de plazo vencido y el deudor no había cancelado la misma, pese a las gestiones adelantadas por el acreedor para el resarcimiento del crédito.

Notificado el mandamiento de pago en fecha 25 de marzo de 1996, el licenciado **CRUZ** apeló del mismo, recurso que fue acogido por la institución bancaria, y cuya decisión se somete a la Sala Tercera de la Corte.

ARGUMENTOS DEL APELANTE

Las razones medulares en que se funda la alzada descansan en que según el recurrente: "el auto ejecutivo se fundó aunque no lo señala así en forma expresa,

en un `alcance definitivo' expedido en la ciudad de Panamá, República de Panamá, por el Gerente de la Casa Matriz del Banco Nacional, por supuesta deuda a saldos de cuentas por cobrar 121 transferidos a la cuenta 170-002 y posteriormente a la Cuenta 173-002 de Préstamos Personales."

Continúa expresando el apelante que basados en la circunstancia de que el título ejecutivo en que se basa la ejecución es un alcance líquido, el auto no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 1803 del Código Judicial, particularmente en lo previsto en el numeral 3° del citado cuerpo legal, toda vez que no se acompaña con el libramiento de pago, el documento público o privado constitutivo de la obligación por la cual se deduce el referido alcance definitivo.

La norma legal en comento preceptúa que prestarán mérito ejecutivo los alcances líquidos definitivos deducidos contra responsables por la oficina encargada de examinar y fenecer dichos estados de cuenta, acompañados en todo caso del documento público o privado legalmente constitutivo de la obligación por la cual se deducen.

OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

El Banco Nacional de Panamá, a través de apoderado debidamente designado, ha comparecido ante la Sala Tercera de la Corte con el fin de oponerse a la apelación interpuesta, sosteniendo sus posición en dos premisas:

1. que la suma adeudada por el licenciado **CRUZ RÍOS** es producto de un adelanto a préstamo por la suma de diez mil balboas y saldo de B/.5,960.98 del plan vehicular de dicha institución bancaria, tal como consta en CERTIFICADO DE ALCANCE DEFINITIVO fechado 1° de septiembre de 1995, suscrito por el Licdo. Norman Vanegas, Contador Público Autorizado y funcionario del Banco Nacional de Panamá.

2. la entidad acreedora señala de manera enfática que el título que presta mérito ejecutivo descansa en el **Certificado de Alcance Definitivo** establecido en el artículo 1639 numeral 15 del Código Judicial, que prevé como títulos ejecutivos las certificaciones expedidas por los Bancos, Cajas de Ahorro y Asociaciones de Ahorro y Préstamos, debidamente autorizados para explotar sus actividades económicas de conformidad con la ley, que cumplan con dos requisitos básicos:

a) que dichas entidades hagan constar los saldos acreedores que arrojen sus libros de contabilidad contra el demandado; y **b)** que tales certificaciones sean revisadas por Contador Público Autorizado.

La entidad bancaria sostiene que el título hecho valer es perfectamente válido y cumple con los condicionamientos de ley, por lo que solicita al Tribunal que se niegue el recurso de apelación incoado, confirmándose el auto de mandamiento de pago N° 1120 de 20 de septiembre de 1995, toda vez que carecen de fundamento los argumentos del apelante que parten de una base errónea al considerar que el título ejecutivo recae en este caso en el "alcance" contemplado en el artículo 1803 numeral 3° del Código Judicial, cuando, se reitera, el título ejecutivo en que se basa la ejecución es la certificación del Banco Nacional de que consta en sus libros de contabilidad un saldo pendiente contra el demandado, certificación respaldada por Contador Público Autorizado.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración, a través de Vista Fiscal N° 257 de 12 de junio de 1996, objeta el recurso de apelación presentado, arguyéndose que el licenciado **CRUZ** ha confundido el título ejecutivo que se ha hecho valer, presumiendo que se trata del alcance líquido contemplado en numeral 3° del artículo 1803, cuando el documento que efectivamente sirve de base para la ejecución responde al supuesto contenido en el numeral 2° de ese mismo texto legal, que establece que prestan mérito ejecutivo: las copias de los reconocimientos y estados de cuenta a cargo de los deudores por créditos a favor

del Tesoro nacional, de los Municipios, de las entidades públicas del Estado, etc.

Así, considera la letrada, que el Banco Nacional cuenta con un título idóneo para adelantar la ejecución (certificación sobre el estado de cuenta emitido por la gerencia de operaciones visible a folios 4 del expediente contentivo del proceso por cobro coactivo), por lo que solicita se desestime el recurso de apelación presentado, y se confirme el auto ejecutivo impugnado.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Conforme a las prescripciones del Código de procedimiento civil, el derecho a promover el proceso ejecutivo está estrechamente ligado a la posesión de un título ejecutivo. El título es pues, la fuente inmediata y directa de la pretensión ejecutiva: **nulla executio sine titulo**.

La base del proceso ejecutivo es precisamente el título ejecutivo, documento en el que consta el derecho que ha de hacerse efectivo por la ejecución. Se percibe sin embargo en el negocio sub-júdice, que la disconformidad del apelante encuentra sustento, no en la inexistencia de título ejecutivo, sino en que la calidad del documento que sirve de recaudo o título (alcance líquido del artículo 1803 num. 3°) exige que el mandamiento de pago se complemente con otros documentos que hacen prueba sobre la fuente de la obligación supuestamente incumplida, y que en este caso no fueron aportados.

Como ha quedado expuesto, la entidad ejecutante se opone a este razonamiento y considera que no le asiste razón al apelante, en vista de que el título que sirve de recaudo ejecutivo en el caso particular de la ejecución iniciada contra **ROGELIO CRUZ** es el previsto en el numeral 15° del artículo 1639 del Código Judicial, es decir, la certificación contentiva del saldo pendiente del licenciado **CRUZ**, revisada por un Contador Público.

La Procuraduría de la Administración, aunque coincide en el punto relativo a la confusión del apelante en torno al título que se invoca para fundar la ejecución, manifiesta por su parte, que se trata del documento contemplado en el numeral 2° del artículo 1803 del Código Judicial, esto es, la copia del estado de cuenta del deudor a favor del Banco Nacional.

Atendidas las consideraciones de las partes, este Máximo Tribunal conceptúa que, contrario a lo esbozado por el apelante, el título ejecutivo que funda el mandamiento de pago no es el alcance líquido definitivo contenido en el numeral 3° del artículo 1803 del Código Judicial, sino la certificación sobre el saldo adeudado, revisado por Contador Público Autorizado, tal como señalara la propia entidad ejecutante.

A folio 25 del expediente administrativo reposa la certificación de "Alcance definitivo" signada por el lic. NORMAN VANEGAS en su condición de Contador Público Autorizado, relativa al saldo que mantenía pendiente en los libros de contabilidad del Banco Nacional el lic. ROGELIO CRUZ.

Es con base a este documento que inmediatamente se inicia la ejecución contra el prenombrado, decretándose mediante Auto N° 1118 de 20 de septiembre de 1995 el secuestro sobre bienes del deudor, y librándose en esa misma fecha el mandamiento de pago.

En este contexto cabe indicar que si bien el artículo 1803 del Código Judicial, en atención a la calidad de las partes intervinientes y por razón de la especialidad de la ejecución (proceso ejecutivo por cobro coactivo) le asigna a determinados documentos el mérito o valor de título ejecutivo, el procedimiento ejecutivo por jurisdicción coactiva se surte conforme a los procedimientos establecidos en la ejecución común, y también prestan mérito ejecutivo en estos procesos los documentos señalados en el artículo 1639 del Código Judicial, razón por la cual la divergencia entre la opinión de la Procuraduría de la Administración y la entidad bancaria sobre cuál es el título que funda la ejecución, no afecta el punto medular debatido, esto es, que por no tratarse del alcance

líquido contenido en el numeral 3° del artículo 1803 del Código Judicial, no requería acompañar la prueba del documento constitutivo de la obligación.

Perfectamente aceptable es la explicación brindada por la entidad ejecutante en el sentido que el recaudo ejecutivo se encuentra contenido en la certificación sobre el saldo moroso que se desprende del alcance realizado por el Contador Público autorizado, tal como lo prevé el artículo 1639 numeral 15 del Código Judicial, razón por la cual el auto de mandamiento ejecutivo impugnado se ajusta a derecho, y debe ser confirmado.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de mandamiento ejecutivo N° 1120 de 20 de septiembre de 1995 librado contra el licenciado ROGELIO CRUZ RÍOS por el Banco Nacional de Panamá, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la entidad bancaria.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANÍBAL TEJEIRA ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA TEZU, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Aníbal Tejeira Araúz, en nombre y representación de Constructora Tezu, S. A., ha promovido recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

El recurrente fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El proceso de cobro coactivo incoado por la Caja de Seguro Social, se enderezó originalmente contra dos empresas: COMPAÑÍA FIDUCIARIA Y DE SERVICIOS, S. A. y Constructora Tezu, S. A., vista la relación de fiadora solidaria de la primera respecto de las obligaciones adquiridas por la segunda frente a la Caja; a pesar de esa realidad procesal, reconocida sobradamente en el expediente, el auto calendado 3 de enero de 1996, omite en su estructuración formal a uno de los demandados y sujetos pasivos de la ejecución, omisión que, a la luz de la legislación vigente, impone su corrección, tal como, en consecuencia, ahora lo impetramos. (Véase, sobre el tema, la estipulación legal contenida en el ordinal primero del artículo 1667 del Código Judicial, aplicable al caso que nos ocupa).

SEGUNDO: El artículo 1762 del Código Judicial, conforme fue reformado en 1991, establece la facultad para el juzgador de dictar la orden de remate trascurridos tres días desde la notificación del auto ejecutivo, previsión temporal que, en el caso subjúdice, no se produjo. Ello, toda vez que el mismo auto ejecutivo -conforme fue modificado en su quantum económico, aunque omitiendo a uno de los demandados- incluye la orden de remate cuestionada, orden que, entonces, y de manera evidente, se habría dictado antes de tiempo.

TERCERO: Las omisiones referidas en los hechos anteriores, son susceptibles de producir -en el evento que no se corrigieren oportunamente- vicios de nulidad procesal. Sobre todo, la falta de

> notificación al deudor perseguido en juicio del auto de corrección del recaudo ejecutivo, a fin de que, de acuerdo a la Ley, pueda ejercer las excepciones que eventualmente le favorezcan en su defensa." (Fs. 5 a 6).

Presentado el escrito de sustentación de la apelación, la Sala señaló un término de tres (3) días para que se presentaran las objeciones.

El representante del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social solicitó a esta Sala que desestime la apelación propuesta, ya que el Auto N° 002-96 de 3 de enero de 1996, fue notificado personalmente al apoderado legal de Constructora Tezu, S. A., sociedad propietaria de la Finca N° 83798, inscrita al Folio 474, Tomo 1798, y dicho auto modificó el valor y fijó el embargo decretado sobre la finca, por la suma de B/.1,418,457.74, en concepto de capital, prima de seguro de vida e incendio, más los intereses vencidos hasta el 30 de septiembre de 1995, sin perjuicio de los intereses que se causen hasta el total pago de la obligación, más los gastos procesales.

Señaló además, que en el Auto de 3 de enero de 1996, se ordenó la venta en pública subasta de la finca hipotecada N° 83798, lo cual no es contradictorio a lo dispuesto en el artículo 1762 del Código Judicial, sino que dicho remate se anunció en el auto recurrido por razones de economía procesal, y finalmente indicó que no existen las omisiones que el recurrente le endilga al auto de 3 de enero de 1996, por lo que no está viciado de nulidad procesal, según lo dispuesto en los artículos 721 y 722 del Código Judicial.

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 116 de 13 de marzo de 1996, señaló que el auto de 3 de enero de 1995 apelado, debe confirmarse, porque "... las únicas vías procesales con las que cuenta el afectado, son 'las excepciones de pago y de prescripción', y la presente apelación contra el Auto de 3 de enero de 1996 se constituye en una dilación innecesaria del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que le sigue la Caja de Seguro Social a la empresa Constructora Tezu, S. A." (Fs. 12 a 15).

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver el presente negocio, previas las siguientes consideraciones.

La Sala observa que de fojas 10 a 12 del expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo, consta copia de la Escritura Pública N° 6,092 de 13 de octubre de 1982, en la cual Constructora Tezu, S. A. reconoce haber recibido de la Caja de Seguro de Seguro Social en calidad de simple préstamo, la suma de B/.81,412.50 en efectivo, para desarrollar el proyecto de urbanización "El Pináculo", en San Miguelito, Provincia de Panamá y además, constituye obligaciones y gravamen hipotecario a favor de la Caja de Seguro Social sobre la finca de su propiedad N° 83,798, inscrita al Tomo 1798, Folio 474 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá (Cfr. cláusulas quinta y octava). Las cláusulas décimo segunda, décimo cuarta y décimo sexta de la Escritura Pública N° 6,092 de 13 de octubre de 1982, establecen lo siguiente:

> "Duodécima: Declara LA DEUDORA, que renuncia a los trámites del juicio ejecutivo y al domicilio y acepta que en caso de remate sirva de base para la venta de la finca hipotecada, la suma por la cual se presente la demanda.
>
> Décimo Cuarta: LA DEUDORA expresa que en caso de divergencia, en relación a las sumas debidas o en el cómputo de los intereses, será plena prueba, los asientos o registros contables de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, y a ello se atienen.
>
> Décimo Sexta: LA DEUDORA expresa finalmente que las manifestaciones expuestas en este instrumento no constituyen ninguna obligación para la CAJA DE SEGURO SOCIAL y declara que el estado de cuenta que expida la CAJA DE SEGURO SOCIAL sobre cualquier morosidad relativa al principal y a los intereses devengados, prestará mérito ejecutivo para los efectos de su cobro, ya sea por la vía de la jurisdicción coactiva o por vía de la jurisdicción ordinaria." (Fs. 13 y 14).

El 9 de diciembre de 1982, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social dictó auto mediante el cual libró mandamiento de pago contra la Empresa Constructora Tezu, S. A. y ordenó el embargo por la suma de B/.1,047,673.31, sobre la Finca N° 83,798, inscrita al Folio 474, Tomo 1798 del Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá en concepto de capital, primas de seguro de vida y de incendio, más los intereses al 31 de diciembre de 1990 y gastos de cobranza coactiva. Dicho auto de 9 de diciembre de 1982 fue posteriormente modificado por Auto de 11 de abril de 1983 y Auto 182-91 de 12 de junio de 1991.

A foja 292 del expediente del proceso ejecutivo, consta el estado de cuenta DPH-SEC. CONT. de 16 de noviembre de 1995, suscrito por las jefas de la Sección de Contabilidad y del Departamento de Préstamos Hipotecarios de la Caja de Seguro Social y por el Director Nacional de Contabilidad Central, en el cual consta que al 30 de septiembre de 1995, el saldo de la deuda contraída por Constructora Tezu, S. A. con esa institución era de B/.1,418,457.74, en concepto de capital más intereses. Posteriormente, y de acuerdo a este último estado de cuenta, se dictó el Auto de 3 de enero de 1982, el cual se MODIFICA el valor, FIJANDO el EMBARGO decretado sobre la Finca N° 83798, inscrita al Folio 474, Tomo 1798, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, de propiedad de la Empresa Constructora Tezu, S. A., en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 74/100 (B/.1,418,457.74) en concepto de capital, primas de seguro de vida y de incendio, e intereses vencidos hasta el día 30 de septiembre de 1995 sin perjuicio de los nuevos intereses que se produzcan hasta el día de su cancelación", en dicho auto se ordenó además la venta en pública subasta de la finca hipotecada.

Conforme lo establece el artículo 1768 del Código Judicial, en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites no procede la interposición de incidentes, ni excepciones, excepto las de pago y prescripción.

Aunque según el artículo 1666 del Código Judicial, el auto ejecutivo es apelable, en el presente caso no procede la apelación, porque hay renuncia de trámites del juicio ejecutivo.

El artículo 1772 del Código Judicial preceptúa que los derechos que tengan los ejecutados o los terceros contra el acreedor por cuenta de la venta sin trámite del proceso ejecutivo, los harán valer mediante proceso sumario.

En igual sentido se pronunció esta Sala en resolución de 19 de mayo de 1995, con motivo de la excepción de inexistencia parcial de la obligación, interpuesta por la Compañía Constructora Tezu, S. A. dentro del mismo proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social. Dicha resolución señaló lo siguiente:

> "Estamos ante un proceso ejecutivo con renuncia de trámites cuya cuantía se determinó en la forma convenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre las partes contratantes.
>
> Las pruebas documentales allegadas al proceso respaldan los estados de cuenta de la ejecutada emitidos por la CAJA DE SEGURO SOCIAL y cualesquiera error en que se haya incurrido o cualesquiera agravio que haya sufrido la ejecutada con motivo del proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites puede reclamarla el acreedor mediante el proceso sumario, de conformidad con el artículo 1772 del Código Judicial, que a la letra dice:
>
> "Artículo 1772. Los derechos que tengan los ejecutados o el tercero propietario con título inscrito contra el acreedor por causa de la venta sin trámite de proceso ejecutivo, los harán valer mediante proceso sumario".
>
> Le asiste la razón a la parte ejecutante y al señor Procurador de la Administración cuando afirman que en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites sólo pueden promoverse las

excepciones de pago y prescripción, tal como lo preceptúa el artículo 1768 del Código Judicial que textualmente dice:

"Artículo 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla del Artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero **no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción**. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.

Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681." (Destaca la Sala).

En mérito de lo expuesto lo excepción promovida por la ejecutada deviene improcedente en el presente proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites."

Por lo expuesto, la Sala debe desestimar el recurso de apelación interpuesto en el presente proceso ejecutivo por cobro coactivo y confirmar el auto recurrido.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA el Auto de 3 de enero de 1996, dictado dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social a CONSTRUCTORA TEZU, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERNESTO SELLES EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Ernesto Santiago Selles, actuando en representación de Héctor Ramiro Quintero Girón, ha interpuesto excepción de prescripción de la acción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Chitré.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario a fin de que sea incorporado al expediente, que la Juez Ejecutora del Banco Nacional de Panamá, Área Central, expida un informe detallado y adjunte copia autenticada de los abonos efectuados a los intereses generados en razón del monto adeudado, pues, de la copia del auto de mandamiento ejecutivo visible a foja 19 del expediente, se observa que el mismo fue librado contra el señor HÉCTOR QUINTERO GIRÓN hasta

la concurrencia de B/.34,996.00 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BALBOAS), en concepto de capital, más los intereses generados y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de **B/.400.00 (CUATROCIENTOS BALBOAS).**

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITA a la Juez Ejecutora del Banco Nacional de Panamá, Área Central, que le remita a esta Sala a la mayor brevedad posible la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HIPÓLITO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GREGORY BURICH, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GREGORY BURICH -VS- PANAMÁ TUG SERVICES, S. A. Y PETROTERMINAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Hipólito Martínez ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 29 de febrero de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por su representado, el señor Gregory Burich Salgado, contra Panamá Tug Service, S. A. y Petroterminal de Panamá, S. A.

Se trata de un proceso laboral en el cual el demandante reclama prestaciones laborales no pagadas, tales como salarios, vacaciones, décimotercer mes, horas extraordinarias y ordinarias, domingos y días de fiesta o duelo nacional. El juzgador de primera instancia condenó a Panamá Tug Services, S. A. al pago de B/.57,990.85 en concepto de prestaciones laborales debidas y absolvió a Petroterminal de Panamá, S. A., por considerar que no existía solidaridad entre las empresas demandadas. El Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia en el sentido de que condenó a la sociedad Panamá Tug Services, S. A. a pagar únicamente la suma de B/.11,490.85 en concepto de décimotercer mes e igualmente consideró que no existía responsabilidad solidaria entre las partes y por lo tanto absolvió a la sociedad Petroterminal de Panamá, S. A. de las reclamaciones en su contra.

El presente recurso tiene como finalidad que la Sala Tercera case la resolución impugnada y condene a las demandadas solidariamente.

El apoderado judicial de las empresas demandadas se opuso al recurso de casación mediante escrito con fecha de 28 de marzo de 1996, en el cual explicó los motivos de su oposición.

Según el recurrente se han infringido los artículos 525, 872, 90, 53, 140 y 169 del Código de Trabajo.

La Sala considera que a pesar de que el presente recurso no está presentado con ciertas formalidades que exige la ley y el mismo no está expuesto de una manera comprensible, el artículo 926 del Código de Trabajo señala que el recurso de casación se rechazará sólo cuando los defectos u omisiones hagan imposible el conocimiento de la cuestión de fondo. La Sala considera que a pesar de la mala

presentación, se puede entender el problema de fondo que no es otro que el reclamo de actor de la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas y el pago de prestaciones adeudas.

Con respecto a la infracción señalada a los artículos 525 del Código de Trabajo el actor se limita a transcribir las normas acusadas, pero no señala en qué consiste la infracción o como se ha producido la violación de la norma por parte del Tribunal Superior de Trabajo, lo que imposibilita el estudio de las normas citadas.

En relación a la violación del artículo 90 del Código de Trabajo, el recurrente señala que el Tribunal Superior de Trabajo ha errado en la interpretación de la norma al considerar que la responsabilidad solidaria entre las empresas se da cuando la "la empresa que presta el servicio a otra ejecuta los trabajos de manera exclusiva **y** principal".

Añade el recurrente que la infracción a las normas citadas en el párrafo anterior se debe a que "consta en el proceso sentencia debidamente ejecutoriada por la Junta de conciliación y decisión N° 4 en la cual se condena solidariamente a pagarle al trabajador salarios adeudados, por lo que "la responsabilidad solidaria ya fue objeto de pronunciamiento judicial y pasa a ser cosa juzgada, pues concurren todos los elementos de dicha figura". Además, según el recurrente, el Tribunal ignoró los testimonios de Ricardo Augusto Pinzón y Carlos Gorrichategui, los cuales atestiguaron que la empresa Panamá Tug Services, S. A. podía prestar servicios excepcionales de salvamento a otras naves únicamente con la anuencia de Petroterminales. Por último, en relación con la violación de este artículo, señala el recurrente que el citado tribunal no ha hecho mención alguna a los comprobantes de pago mediante los cuales Petroterminal de Panamá, S. A. pagaba los salarios al trabajador cuando Panamá Tug Services no lo hacía.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo señaló que las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar la solidaridad alegada.

Cabe señalar que en diferentes ocasiones esta Sala ha manifestado que el presente recurso no es una tercera instancia. El recurso de casación laboral se limita a confrontar la sentencia de segunda instancia con las normas substantivas de la legislación laboral que se puedan haber violado. Sin embargo, cuando se trata de errores en la interpretación o valoración de las pruebas, errores que salten a la vista sin mayor esfuerzo, como por ejemplo, ignorar la existencia de un documento o suponer que existe uno que no está acreditado en el proceso, puede entonces la Sala Tercera entrar a conocer del cargo, pero es obligante que el recurrente explique cómo y por qué dichas pruebas acreditan su pretensión para que la Sala entre a conocer del mismo y de comprobarse los cargos, casar la sentencia.

En el presente recurso, los cargos endilgados por el actor se refieren a pruebas que no se tomaron en cuenta, tales como los testigos presentados y los comprobantes de pago del salario.

Según el recurrente se ha violado el artículo 872 del Código de Trabajo, puesto que el fallo de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 se debió considerar como cosa juzgada. El artículo 872 dispone que "se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el proceso", de lo que se infiere que la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 puede servir como otro elemento de convicción pero no debe condicionar la decisión del Tribunal Superior de Trabajo en el proceso que a el atañe. La decisión de la Junta hace Tránsito a cosa juzgada en cuanto a la condena por la prestación ante ella debatida, pero no en cuanto a la valoración de las pruebas e interpretación de la norma legal que prevé la solidaridad.

Referente a los testimonios que supuestamente fueron ignorados por el Tribunal Superior de Trabajo, cabe señalar que solamente uno de los testigos hizo las declaraciones aludidas por el recurrente, y según el artículo 812 del Código de Trabajo un solo testigo no hace plena prueba, al ser esto así, el Tribunal Superior desestimó tal testimonio.

En cuanto a los talonarios de cheques, los mismos fueron objetados por el apoderado de las demandadas, pues si bien se presentaron talonarios en los cuales se lee Petroterminales de Panamá, S. A., no contienen la firma del señor Gregory Burich, y no prueban lo dicho por el actor.

De todo lo anterior, se deducen los motivos por los cuales para el Tribunal Superior de Trabajo no existió prueba suficiente para probar la solidaridad alegada por el actor. Por lo tanto, no se ha infringido el artículo 90 del Código de Trabajo.

Con respecto a la violación de los artículos 53 y 8° del Código de Trabajo, el recurrente alega que cualquier acuerdo en el cual se hubiese pactado la renuncia de las vacaciones es nulo.

No concuerda la Sala con el planteamiento del actor, puesto que el acuerdo pactado entre las partes ante el Ministerio de Trabajo, el cual otorga un mes compensatorio de vacaciones por cada tres meses de a bordo de la nave, supera en demasía los derechos reconocidos al trabajador en nuestro ordenamiento laboral. Por lo tanto, al no existir "estipulación, actos o declaraciones que implique disminución, adulteración, dejación o renuncia" de derechos reconocidos a favor del recurrente, mal se pueden haber violado tales normas.

También se señala que fueron violados en forma directa los artículos 140 y 148 del Código de Trabajo, al ser ignorado por el Tribunal Superior de Trabajo que el salario que debió haber recibido el sr. Gregory Burich no fue pagado en su totalidad, sino que se hizo un adelanto del salario, lo que se infiere del talonario de pago que señala "adelanto de salario". Es claro que el demandante no indica en que consiste la errónea interpretación que el Tribunal Superior de Trabajo le diera a la norma, y mas bien no está de acuerdo con el valor que le dio a las pruebas, por lo que debió demostrar en qué se separó el Tribunal Superior de la sana crítica, tema que se ubica en otra norma.

Por último, en cuanto a la violación al artículo 169 del Código de Trabajo, el cual dispone que cuando se trate de condena, ya sea por mora o falta de pago de salarios, prestaciones, vacaciones e indemnizaciones, se causarán intereses a una tasa de diez por ciento (10%) anual. Por lo tanto, consideramos que es correcta la aseveración del recurrente en cuanto a que el Tribunal Superior de Trabajo al condenar a la empresa Panamá Tug Services, S. A. al pago del décimo tercer mes, no incluyó los intereses que se causaron desde el momento en que fue exigible la obligación, a una tasa del 10% de interés anual.

A foja 250 del expediente contentivo del proceso se observa el desglose por período de la suma condenada a pagar en concepto del décimotercer mes. A esta suma a pagar, que es la cantidad de B/.11,490.85 le hemos agregado el 10% de interés anual correspondiente por período, desde el momento en que se debió cancelar la obligación, veamos:

17/07/81 a 15/8/81	B/.584.00
16/8/81 a 15/12/81	B/.2,170.00
16/12/81 a 15/4/82	B/.2,015.00
16/8/82 a 15/12/82	B/.2,015.00
16/12/82 a 15/4/83	B/.1,860.00
16/4/83 a 15/8/83	B/.1,860.00
16/8/83 a 15/12/83	B/.1,860.00
16/12/83 a 31/1/84	B/.268.26
Total	B/.14,547.48

En conclusión, sólo nos resta decir que de todos los cargos endilgados concordamos únicamente con el recurrente en cuanto a que el Tribunal Superior de Trabajo no aplicó el citado artículo 169 del Código de Trabajo. De todo lo demás consideramos que no prosperan los cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 29 de febrero de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo y CONDENA a PANAMA TUG SERVICES, S. A. a pagar a GREGORY

BURICH SALGADO la suma de B/.14,547.48 en concepto de 10% de intereses anual causados por falta de pago del décimotercer mes desde el momento en que era exigible la obligación y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo en todo lo demás.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL INTERPUESTA POR EL LICDO. JORGE PLATA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDAS EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HGO32-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA(HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA). DE 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **ARTURO HOYOS** ha presentado solicitud para que se declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Interpretación Prejudicial interpuesta por el Licdo. Jorge, Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera, de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda en su propio nombre y representación, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la Sentencia N° HCO32-96 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. (Habeas Corpus del señor Manuel Simanca).

Sostiene el Magistrado Hoyos, para fundar su solicitud de impedimento que:

> "Como la resolución antes mencionada fue emitida por los nueve magistrados que integramos el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, considero que estoy impedido para conocer de la presente causa,de conformidad con lo preceptuado en el 2 del artículo 78 de la Ley 33 de 1946, y se declare el impedimento manifestado."

Al respecto el artículo 78 numeral 2 de la Ley 135 de 1943 efectivamente estatuye entre sus causales de impedimentos el haber dictado el acto o providencia sometido a examen o haber contribuido a dictarlo, situación que obviamente se verifica en este negocio a tenor de los motivos arriba transcritos.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ARTURO HOYOS para conocer de la demanda Contencioso Administrativa de Interpretación Prejudicial interpuesta por el Licdo. Jorge Plata Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera, de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda en su propio nombre y representación, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la Sentencia N° HCO32-96 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (Habeas Corpus del señor Manuel A. Simanca) de 22 de enero de 1996.

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 78 del Código Judicial se designa al Magistrado RAFAEL A. GONZÁLEZ, en reemplazo del Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTA POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A JOSÉ M. REDONDO, ANTONIO VILLARREAL, FLORENCIO DE LEÓN, ELIDA DE NEWELL, ARQUIMEDES RODRÍGUEZ, PEDRO A. JIMÉNEZ. (PAGOS INDEBIDOS A LA CORPORACIÓN OBARRIO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, **Kaliope Tsimogianis** ha presentado solicitud de impedimento para que se le separe del conocimiento del proceso que por Responsabilidad Patrimonial se le sigue la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a José M. Redondo, Antonio Villarreal, Florencio De León, Elida De Newell, Arquimedes Rodríguez, Pedro A. Jiménez (pagos indebidos a la Corporación Obarrio).

La Magistrada **Kaliope Tsimogianis**, fundamenta su solicitud de impedimento básicamente, en los siguientes términos:

> "Mediante escrito presentado ante la Secretaría General de este Tribunal, el señor José María Redondo ha conferido Poder Especial al Lcdo. Pablo Azael Tsimogianis Villalobos, hermano de la suscrita, para que asuma su representación y defensa en el presente proceso.
>
> Por lo anterior y en atención a lo que dispone el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, en concordancia con los artículos 749, numeral 1,754 y 768 del Código Judicial, tengo a bien solicitar a la honorable Corte Suprema de Justicia, que declare la legalidad del impedimento manifestado en líneas anteriores".

La Magistrada sustenta su impedimento en el artículo 749, numeral 1 del Código Judicial, el cual estable que será causal de impedimento "el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el juez o su cónyuge, y algunas de las partes".

De igual manera, la Magistrada hace alusión al Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 "Por el cual se crea dentro de la Contraloría General de la República la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento". Este Decreto en su artículo 2, faculta a dichos magistrados a declararse impedidos por las mismas razones que lo hacen los jueces y los magistrados tal como lo establece el Código Judicial.

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera el impedimento invocado por la Magistrada **Kaliope Tsimogianis**, se ubica dentro de la causal antes citada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, corresponde nombrar al Magistrado Suplente designado, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada Kaliope Tsimogianis, para actuar dentro del proceso que por Responsabilidad Patrimonial le sigue la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a los señores José M. Redondo, Antonio Villarreal, Florencio De León, Elida De Newell, Arquimedes Rodríguez, Pedro A. Jiménez, lo separa del conocimiento del mismo, y con base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, nombra al Magistrado Suplente

designado, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTA POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ALBERTO LACRESPO PURCELL Y JOSÉ MARÍA REDONDO (COBRO ILEGAL DE SALARIOS). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Kaliope Tsimogianis ha solicitado que se le separe del conocimiento del proceso que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a los señores Alberto Lacrespo Purcell Sarria y José María Redondo por supuesta lesión causada al patrimonio de los Casinos Nacionales, como consecuencia del cobro ilegal de salarios por el monto total bruto de seis mil quinientos balboas (B/.6,500.00) por parte del señor Purcel Sarria, durante el período comprendido entre el 1° de mayo y el 15 de noviembre de 1989.

La Magistrada Kaliope Tsimogianis, fundamenta su solicitud de impedimento en los siguientes términos:

> "Mediante escrito presentado ante la Secretaría General de este Tribunal, el señor José María Redondo ha conferido Poder Especial al Lcdo. Pablo Azael Tsimogianis Villalobos, hermano de la suscrita, para que asuma su representación y defensa en el presente proceso.
>
> Por lo anterior y en atención a lo que dispone el artículo 2° del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, en concordancia con los artículos 749, numeral 1, 754 y 768 del Código Judicial, tengo a bien solicitar a la Honorable Corte Suprema de Justicia, que declare la legalidad del impedimento manifestado en líneas anteriores. Para tales efectos, le remito el expediente del caso, el cual consta de doscientas doce (212) fojas útiles." (Fs. 1 y 2).

A juicio de la Sala, los hechos planteados por la Magistrada Kaliope Tsimogianis configuran la causal de impedimento contemplada en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial el cual establece que constituye impedimento "el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el juez o su cónyuge, y algunas de las partes", en concordancia con el artículo 768 del Código Judicial el cual establece que "lo que en este capítulo se dice de las partes sobre impedimento y recusaciones, se entiende dicho también de los apoderados", ambos aplicables en virtud de lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, por lo cual debe declararse legal el impedimento manifestado y designar al Magistrado Suplente para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada Kaliope Tsimogianis y la separa del conocimiento del proceso de responsabilidad patrimonial seguido a Alberto Lacrespo Purcell y José María Redondo por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y procede a llamar al Magistrado Suplente para que conozca del negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN MANUEL CASTULOVICH, EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO CÁCERES, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ROGELIO CÁCERES -VS- TEXACO PANAMÁ, INC. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El Magistrado **ARTURO HOYOS** a presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento del Recurso se Casación Laboral interpuesto por el Licdo. Juan Manuel Castulovich, en representación de **ROGELIO CÁCERES** contra la Resolución de 13 de mayo de 1996, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: **ROGELIO CÁCERES -VS- TEXACO PANAMÁ, INC.**

Sostiene el Magistrado **HOYOS**, para fundar su solicitud de impedimento que:

> "Como lo he manifestado en ocasiones anteriores laboré en la firma de abogados Arias Fábrega y Fábrega desde el mes de marzo de 1976 hasta el 2 de enero de 1990. Durante mi permanencia en la firma Arias Fábrega y Fábrega fui asesor legal en muchos procesos laborales de la Compañía Texaco Panamá, S. A.
>
> Por ello considero que me encuentro en la causal de impedimento prevista en el numeral 10 del artículo 647 del Código de Trabajo.
>
> Solicito, pues, a los Honorables Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera, que declaren legal el impedimento invocado."

Considerando la solicitud del Magistrado **HOYOS** a la luz del numeral 10 del artículo 647 Código de Trabajo es dable acceder a la solicitud de impedimento en este caso.

En los casos como éste la precitada disposición legal en su numeral 10 del artículo 647 de Código de trabajo es claro al establecer que son causales de impedimento:

> "Artículo 647: Son causales de impedimento:
> ...
> 10. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, perito, depositario,auxiliar de la jurisdicción, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron margen al mismo;"

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre del República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento del Magistrado ARTURO HOYOS, para conocer de este caso propuesto por el Licdo. Juan Manuel Castulovich en representación de ROGELIO CÁCERES contra la Resolución de 13 de mayo de 1996 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: ROGELIO CÁCERES VS TEXACO PANAMÁ, INC.

De acuerdo con el artículo 78 del Código Judicial se designa al Magistrado ELIGIO A. SALAS, para que reemplace al Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO INTERPUESTO POR LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A JOSÉ MARÍA REDONDO, ANTONIO VILLARREAL, FLORENCIO DE LEÓN, ELIDA PANIZA, ARQUÍMEDES RODRÍGUEZ, PEDRO JIMÉNEZ, GILBERTO COLOCHO Y OSVALDO AYALA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Kaliope Tsimogianis, Magistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ha manifestado impedimento para conocer del proceso que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a José María Redondo, Antonio Villarreal Solís, Florencio De León, Elida Gertrudis Paniza Newell, Arquímedes Rodríguez, Pedro Jiménez, Gilberto Colocho Jaén y Osvaldo Ayala Cedeño en la supuesta lesión causada al patrimonio de los Casinos Nacionales, como consecuencia de pagos irregulares efectuados a la sociedad Alficel Panamá, S. A. en concepto de participación de las utilidades obtenidas del Casino Tragamonedas Marvil, durante el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1985 y el 30 de noviembre de 1989.

La licenciada Kaliope Tsimogianis fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Mediante escrito presentado ante la Secretaría General de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el señor José María Redondo ha conferido Poder Especial al Lcdo. Pablo Azael Tsimogianis Villalobos, hermano de la suscrita, para que asuma su representación y defensa en el presente proceso."

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por la licenciada Tsimogianis, se adecua a lo establecido en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990.

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada Kaliope Tsimogianis para conocer del proceso que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a José María Redondo, Antonio Villarreal Solís, Florencio De León, Elida Gertrudis Paniza Newell, Arquímedes Rodríguez, Pedro Jiménez, Gilberto Colocho Jaén y Osvaldo Ayala Cedeño en la supuesta lesión causada al patrimonio de los Casinos Nacionales, como consecuencia de pagos irregulares efectuados a la sociedad Alficel Panamá, S. A. en concepto de participación de las utilidades obtenidas del Casino Tragamonedas Marvil, durante el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1985 y el 30 de noviembre de 1989 y, en base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA N° HC032-96 DICTADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (HABEAS CORPUS DEL SEÑOR MANUEL A. SIMANCA) DE 22 DE ENERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **EDGARDO MOLINO MOLA** ha solicitado que se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa de interpretación prejudicial interpuesta por el Licenciado **JORGE PLATA**, Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la sentencia N° HC032-96, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 1996, que decidió acción de Habeas Corpus a favor del señor Manuel Simanca.

El Magistrado MOLINO MOLA señala que la resolución objeto del presente proceso fue dictada por los nueve Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que se encuentra impedido para conocer del mismo, al tenor de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 33 de 1946.

En efecto, la disposición citada señala que es causal de impedimento el haber dictado el acto o providencia sometido a examen o haber contribuido a dictarlo, situación que se verifica en el presente caso.

En consecuencia, EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, para conocer de la demanda contencioso administrativa de interpretación prejudicial interpuesta por el licenciado JORGE PLATA, Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que la Sala se pronuncie sobre el alcance y sentido de la sentencia N° HC032-96, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 1996, por medio de la cual se resolvió la acción de habeas corpus presentada a favor del señor Manuel A. Simanca.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 78 del Código Judicial, se designa al Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., en reemplazo del Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

JUNIO 1996

CARTA ROGATORIA

COMISIONES ROGATORIAS SIN NÚMERO DE 1° DE JUNIO DE 1995, LIBRADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE RIBEIRA LA CORUÑA, ESPAÑA, DENTRO DE LOS AUTOS DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA NÚMERO 469/94 PROMOVIDO POR DON ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA GANGERRAL ENTERPRISES, S. A. Y MELFAR MARITIME LTD. SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de Nota N° DGPE/DCL/N° 0747/96, remitió para los trámites pertinentes, las Comisiones Rogatorias libradas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Ribeira, La Coruña, España, dentro de los autos del proceso de menor cuantía número 469/94 promovido por DON ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ contra GANGERRAL ENTERPRISES, S. A. Y MELFAR MARITIME LTD. sobre Reclamación de Cantidad.

Al examinar las Comisiones Rogatorias en referencia, esta Sala observa que el objeto de la misma es que las autoridades panameñas competentes realicen las siguientes diligencias:

> "Certificar, que empresa es la actual propietario o titular del buque TAGAR (de bandera panameña), así como quién era cuando el buque se denominaba DOMAR I, antes de que fuera cambiado el nombre al mismo, y ello por ser ahí el lugar donde el mismo se halla registrado.
>
> Certificar o confirmar por dos jurisconsultos de este país (Doctor Don Iván Robles y Doctora Doña Celma Moncada) si la regulación vigente se contiene en el Código de Comercio Panameño, respecto a los créditos marítimos privilegiados es la siguiente:
>
> Artículo 1507, número 0 Apartado 8°: Tendrán privilegio sobre el buque y concurrirán sobre precio en el orden que expresa el siguiente artículo los créditos siguientes: Las sumas debidas en virtud de obligaciones contraías para las necesidades y aprovisionamiento del buque.
>
> Artículo 1508, Apartado 0 n° 2, inciso 1°: La nave enajenada extrajudicialmente se traspasará al comprador sujeta a todos los créditos marítimos que la afectan".

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, a la Sala Cuarta le corresponde recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Del estudio de las Comisiones Rogatorias en cuestión, se observa claramente que el mismo se encuentra legalizado en virtud de que fue remitido a esta Corporación por medio de Agente Consular.

La Sala estima conveniente acceder a lo pedido en torno a solicitar a la Dirección de Consular y Naves el nombre de la empresa propietaria del buque TAGAR basándonos en los principios de reciprocidad y cooperación internacional que rigen las relaciones internacionales entre los países. Y en relación a la pretensión basada en la opinión de los jurisconsultos panameños Doctor Iván Robles (ROBLES y ROBLES) República de Panamá; con domicilio en el Edificio Bank of América, piso 19, apartado 4912, Panamá, 5, Panamá; Doctora Doña Celma Moncada (MONCADA y MONCADA) República de Panamá, con domicilio en la Urbanización Campo Alegre, calle Samuel Lewis, Edificio Comosa E. P. 1, oficina N° 2, apartado 5035 Balboa, esta Alta Magistratura desea señalar de manera expresa no accede a lo

pedido por las autoridades españolas en virtud que estos profesionales de derecho no son autoridad pública, facultada por los instrumentos legales correspondientes, para interpretar la ley en nuestro país; además nuestro ordenamiento jurídico no contempla la opinión de abogados, como fuente del derecho panameño tal como se desprende del Código Civil Panameño que en su artículo 13 expresa lo siguiente: "Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales de derecho, y la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana"; no obstante lo anterior, en aras de colaborar con la comunidad internacional en este tipo de negocios, esta Sala le enviará los artículos 1507 y 1508 del Código de Comercio Panameño autenticados por el Secretario General de esta Corte Suprema de Justicia.

En general las solicitudes de auxilio internacional a que se ha hecho referencia no son contrarias a nuestro derecho interno, aunque no existe entre ambos Estados convención alguna que regule los exhortos y comisiones rogatorias, el procedimiento a seguir en cuanto al diligenciamiento de la carta rogatoria será conforme a lo estipulado en nuestro Código Judicial y Código Civil como fuente supletoria en este caso.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento de las Comisiones Rogatorias libradas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Ribeira, La Coruña, España, dentro de los autos del proceso de menor cuantía número 469/94 promovido por DON ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ contra GANGERRAL ENTERPRISES, S. A. Y MELFAR MARITIME LTD. sobre Reclamación de Cantidad y ORDENA a las Direcciones del Registro Público y de Consular y Naves que expidan las certificaciones solicitadas por las autoridades españolas en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizadas las diligencias, REMÍTASE el expediente a la Cancillería para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 5 DE IBIZA, ESPAÑA RELATIVA A TIRCAL HOLDING, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Ibiza Baleares, España de los autos de menor cuantía N° 208/94 seguidos contra D EDGARDO BATHICH VILLAROEL.

El propósito del exhorto expedido por las autoridades de las islas Baleares, España es solicitar a las autoridades panameñas le proporciones una serie de pruebas documentales en las que se encuentra la protocolización de Acta de Junta de Accionistas N° 8971 autenticada por el Notario panameño D. CARLOS GARCÍA MARTÍN; prueba pericial al mencionado documento por un perito calígrafo; certificación de la firma de abogados Troncoso, Lacayo & PORRAS de los libros de la sociedad que se encuentran allí depositados, para acreditar que el señor

EDGARDO BATHICH VILLAROEL no figura ni ha figurado jamás como accionista de la empresa, nunca ha asistido a Junta General alguna en calidad de accionista, y en definitiva, que no tiene relación con tal entidad mercantil.

Es necesario aclarar, por parte de esta Superioridad, que entre Panamá y España existe convención que regula la materia de exhorto o cartas rogatorias. Aunque las partes en estos casos pueden tramitar las comisiones rogatorias en virtud del principio de reciprocidad. Sin embargo, cuando los exhortos o cartas rogatorias se tramitan en base a este principio es necesario que los documentos estén debidamente autenticados por la autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente o en su defecto, la legalización de las firmas de la autoridad que emite el exhorto; si se opta por la supresión de la exigencia de la legalización para los documentos públicos extranjeros, se debe incorporar el sello de la apostilla, tal como lo señala el Convenio por el cual se suprime esta Legalización que entró en vigencia para Panamá el 4 de agosto de 1991.

En el mismo orden de ideas se requiere que la solicitud no sea violatoria del orden público interno y en el caso que se requiera, se traduzca el suplicatorio al idioma español.

Observa la sala que la documentación procedente del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Ibiza Baleares, España en los autos de menor cuantía N° 208/94 seguidos contra D EDGARDO BATHICH VILLAROEL ha sido remitida a esta Sala por el Ministro de Asuntos Exteriores de España sin la mencionada autenticación consular, de igual forma se observa que no se ha incorporado el sello de la apostilla que suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Ibiza Baleares, España de los autos de menor cuantía N° 208/94 seguidos contra D EDGARDO BATHICH VILLAROEL y ORDENA el retorno del expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Lamento no compartir el criterio de mayoría.

Este exhorto tiene por objeto:

(1) Obtener una copia auténtica de la Escritura Pública N° 8971, de 5 de octubre de 1992, abrogada ante el Notario Carlos García Martín, del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocoliza Acta de Junta de Accionistas de la sociedad TIRCAL HOLDING, S. A. de 2 de octubre de 1992.

(2) Obtener Certificación de la firma de abogados, que se encarga de los servicios jurídicos de TIRCAL HOLDING, S. A., TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, que acredite que EDGARDO BATHICH VILLARROEL no figura ni ha figurado jamás como accionista de la empresa nunca ha asistido a Junta General alguna como accionista, y en definitiva, que no tiene relación con tal entidad mercantil.

Además que TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS suministren en forma que el Tribunal respectivo pueda autenticar, copias de las actas de las Juntas de Accionistas de la sociedad en que se acuerde la compra

"del inmueble en Ibiza", y de la que decide la venta apoderando para ello al demandado.

La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (Ley 13 de 1975) establece en su artículo XIII que cuando los exhortos se tramitan por vía consular o diplomática o por conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización de firmas.

Este exhorto se tramita por la vía diplomática.

A pesar de lo anterior la resolución en estudio expresa:

"Observa la Sala que la documentación procedente del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Ibiza, Baleares, España en los autos de menor cuantía N° 208/94 seguidos contra D. EDGARDO BATHICH VILLARROEL ha sido remitido a esta Sala por el Ministro de Asuntos Exteriores de España sin la mencionada autenticación consular, de igual forma se observa que no se ha incorporado el sello de la apostilla que suprime la exigencia legalización para los documentos públicos extranjeros".

Por esta razón se declara no viable el exhorto. Pienso, por el contrario, que es viable.

Salvo, pues, el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

SAMUEL A. BENT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DEL CONDADO DE NUEVA YORK, PARTE MATRIMONIAL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO ENTRE SAMUEL A. BENT Y ELICIA DUNCAN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

SAMUEL A. BENT, mediante apoderado especial el licenciado Carlos R., Ayala Montero, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por la Corte Superior del Estado de Nueva York, Condado e Nueva York, que declara disuelto el matrimonio contraído con Elicia Duncan.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: Mi cliente y la señora Elicia Mercedes Duncan Edmonds, contrajeron nupcias el 1° de agosto de 1991, en Colón, República de Panamá.

SEGUNDO: El matrimonio se inscribió al tomo 202, asiento 43, del libro de matrimonio de la provincia de Colón.

TERCERO: Los cónyuges se trasladaron posteriormente a Nueva York, en donde inscribieron el matrimonio habido entre ellos.

CUARTO: Mediante sentencia del 12 de septiembre de 1994, La Corte

Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, de declaró disuelto el matrimonio, de conformidad con la subdivisión (2) de la Sección 170 de la Ley de Relaciones Domésticas.

QUINTO: La sentencia fue dictada como consecuencia del ejercicio de una pretensión personal y no fue dictada en juicio de ausentes es decir, en rebeldía.

SEXTO: La sentencia se encuentra debidamente autenticada y legalmente traducida".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron como prueba los siguientes documentos: Copia auténtica de la Sentencia de 12 de septiembre de 1994 expedida por La Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, traducción oficial de la sentencia, poder autenticado y certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 20 de mayo de 1996 señala que es procedente que se sea declarado el reconocimiento y ejecución de la Sentencia de Divorcio de 12 de septiembre de 1994, ya que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial.

Una vez que el señor Procurador ha emitido su Vista, pasa la Sala a emitir sus consideraciones al respecto de la sentencia en mención.

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal y que demanda de divorcio fue notificada personalmente a la señora Elicia Duncan tal y como se desprende de la propia sentencia de divorcio y visible a foja 6 del expediente, cumpliendo con lo establecido en el numeral segundo del citado artículo 1409 del Código Judicial. Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 12 de septiembre de 1994, expedida por la Corte Suprema del condado de Nueva York del Condado de Nueva York, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre Samuel A. Bent y Elicia Duncan.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ERVIN E. GOLDSON, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO EXPEDIDA POR LA CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE LOS ÁNGELES,

QUE DECLARA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA CON PATRICIA E. GOLDSON. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Alberto S. Barrow N., actuando en representación de ERVIN E. GOLDSON, formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que se declare ejecutable en Panamá la sentencia de 10 de enero de 1983, caso N° D933354, expedida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial de Patricia E. Goldson y Ervin E. Goldson.

El peticionario apoya su solicitud en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Los señores ERVIN EMANUEL GOLDSON BRATHWAITE y PATRICIA ELENA MARQUIS TROTTMAN contrajeron matrimonio el día 24 de julio de 1964, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.
>
> SEGUNDO: El matrimonio de ERVIN EMANUEL GOLDSON BRATHWAITE y PATRICIA ELENA MARQUIS TROTTMAN fue declarado disuelto mediante sentencia de 10 de enero de 1983, caso N° D933354. expedida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles.
>
> TERCERO: La sentencia de disolución del vínculo matrimonial de ERVIN EMANUEL GOLDSON BRATHWAITE y PATRICIA ELENA MARQUIS TROTTMAN fue producto de una pretensión personal y legítima de PATRICIA E. GOLDSON, y no fue decretada en rebeldía del demandado, éste fue notificado personalmente."

El apoderado judicial de ERVIN E. GOLDSON adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma, debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General de Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre Ervin Emanuel Goldson Brathwite y Patricia Elena Marquis Trottman.

Una vez admitida la solicitud presentada, se corrió traslado al señor Procurador de la Nación para emitir concepto. En su Vista N° 18 de 17 de mayo de 1996 consideró que "el recurrente ha observado todos los requisitos exigidos por el artículo 1409 del Código Judicial ... que es procedente que se declare ejecutable en la República de Panamá".

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en Panamá.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 24 de julio de 1964 ante el Juez Cuarto Municipal de la República de Panamá, y su disolución se llevó a cabo en el extranjero, ante el tribunal competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho. En cuanto a la rebeldía, no se configura, pues, el demandado fue notificado personalmente.

Por todo lo antes expuesto considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte Superior de California, Condado de Los Ángeles, Estados Unidos de América el 10 de enero de 1983, caso N° D933354, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a PATRICIA ELENA GOLDSON y ERVIN E. GOLDSON, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ DE BLAKE, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA 92-3-01365-2 FECHADA EL 7 DE JULIO DE 1993 LA CORTE SUPREMA DE WASHINGTON, CONDADO DE KITSAP, DECLARÓ DISUELTO EL MATRIMONIO DE LOS SEÑORES SHANE P. BLAKE Y MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ DE BLAKE, mediante apoderado especial Danitza del C. Vásquez Ortega, solicita a la Sala Cuarta de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio extranjera 92-3-01365-2 fechada el 7 de julio de 1993 la Corte Suprema de Washington, Condado de Kitsap, que declaró disuelto el matrimonio de los señores SHANE P. BLAKE Y MARÍA MARGARITA GRISELDA MARTÍNEZ.

La apoderada de la peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "PRIMERO:La señora MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ y el señor SHANE P. BLAKE, contrajeron matrimonio el 21 de marzo de 1991 ante el Juzgado Tercero Municipal de Colón.
>
> SEGUNDO: Este hecho se encuentra registrado al Tomo 206 de Matrimonios de la Provincia de Colón, Asiento 446.
>
> TERCERO: El señor SHANE P. BLAKE, solicito a la Corte Suprema de Washington, Condado de Kitsap la disolución del vínculo matrimonial que la unía con MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ.
>
> CUARTO: Que mediante Sentencia 92-3-01365-2 fechada el 7 de julio de 1993 la Corte Suprema de Washington, Condado de Kitsap, declaró disuelto el matrimonio de los señores SHANE P. BLAKE Y MARÍA GRISELDA MARTÍNEZ".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: copia autenticada de la resolución de divorcio, debidamente autenticada por el Cónsul General de Panamá en Washington D. C:, así como la certificación de la firma del Cónsul. Certificado de matrimonio de los señores Shane P. Blake y María G. Blake, emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 22 de 3 de junio de 1996 señala que debe accederse a lo solicitado, toda vez que se cumplen las exigencias contempladas en el artículo 1409 del Código Judicial.

Una vez expuestas la opinión del señor Procurador General de la nación, pasa la Sala a presentar sus consideraciones:

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que, efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. No se presenta la rebeldía en virtud que es la propia demandada quien solicita el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera.

Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares y certificada, la firma del cónsul, por el Departamento de Consular y Legalizaciones del ministerio de Relaciones Exteriores. La sentencia en examen se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio 92-3-01365-2 de fecha 7 de julio de 1993, dictada por la Corte Suprema de Washington, Condado de Kitsap, que declaró disuelto el matrimonio de los señores Shane P. Blake y María Griselda Martínez Morán.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAQUEL HOMSANY ESSES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE SANTA FE DE BOGOTÁ, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE MAX ABADI HARARI Y RAQUEL HOMSANY ESSES. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La licenciada Leonor Alvarado Garrido, actuando como apoderada especial del señora Raquel Homsany Esses ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio extranjera dictada por el Juez Noveno de Familia de Santa fe de Bogotá, Colombia, por el cual se disuelve el vínculo matrimonial entre Max Abadi Harari y Raquel Homsamy Esses celebrado en la Provincia de Panamá, República de Panamá en fecha 30 de agosto de 1979.

Observa la Sala, que la solicitud, reúne las formalidades de ley, pues en ellos se aprecia la copia autenticada de la sentencia de divorcio y la autenticación proveniente la Encargada de Asuntos Consulares, que legaliza los documentos surtidos en Bogotá, República de Colombia, lugar donde se emitió la sentencia de divorcio, además de la correspondiente certificación de dicha firma expedida por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

La petición fue admitida por lo que de acuerdo al trámite para estos negocios, se le corrió traslado al señor Procurador General de la República, tal como lo dispone el artículo 1410 del Código Judicial.

El señor Procurador General de la República, mediante Vista N° 23 de 3 de junio de 1996, consideró que se debe acceder a la ejecutabilidad de la sentencia extranjera toda vez que cumple con los requisitos de ley.

El análisis de los documentos aportados, permite señalar que la sentencia que nos ocupa, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, toda vez que Raquel Homsany de Abadi y Max Marvin Abadi Harary concurrieron personalmente a la Diligencia de Audiencia celebrada el día 24 de noviembre de 1995, fecha misma en que se dicta la sentencia de divorcio, visible a foja 16 del expediente.

En cuanto a la licitud de la obligación, la misma no viola nuestro ordenamiento jurídico, por lo que esta Sala coincide con la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación, en cuanto a que la sentencia objeto de estudio, cumple con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Santa fe de Bogotá, República de Colombia, de 24 de noviembre de 1995, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial entre la señora Raquel Homsamy Esses y el señor Max Marvin Abadi Harari, celebrado en la Provincia de Panamá el 30 de agosto de 1979.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALEJANDRO MARTÍN DAWSON FIELDS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL DEPARTAMENTO PRIMERO I-90 EN LA PARTE MATRIMONIAL DE LA SUPREMA CORTE DEL ESTADO DE NEW YORK EN LA CORTE DEL CONDADO DE NEW YORK EL DÍA 22 DE JUNIO DE 1993, EL CUAL DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE EL SEÑOR DAWSON FIELDS Y GLADYS GONZÁLEZ PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ALEJANDRO MARTÍN DAWSON FIELDS, mediante su apoderado legal el licenciado Víctor Chan Castillo solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada por el Departamento Primero I-90 en la parte Matrimonial de la Suprema Corte del Estado de New York, del 22 junio de 1993, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente con GLADYS GONZÁLEZ DE DAWSON.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mi mandante ALEJANDRO MARTÍN DAWSON FIELDS y GLADYS GONZÁLEZ PÉREZ contrajeron matrimonio en la Ciudad de Panamá, el día

de agosto de 1980, conforme consta en el Tomo 219, de matrimonios de la Provincia de Panamá, bajo la Partida 2308.

SEGUNDO: El juicio de Divorcio A 265 de la Suprema Corte del Estado de New York del Condado de New York, conforme consta en la misma fue notificada personalmente.

TERCERO: Que la audiencia en el Juicio de Divorcio se verificó el día 22 de junio de 1993.

CUARTO: Como quiera que la parte demandada fue debidamente notificada de la Demanda esta Sentencia resulta ejecutable en Panamá".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 22 de junio de 1993, expedida en la Suprema Corte del Estado de Nueva York, en la Corte del Condado de Nueva York, Estados Unidos de América debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 21 de 3 junio de 1996 señala lo siguiente:

"Confrontadas las pruebas aportadas en el expediente con los requisitos exigidos por el artículo 1409 del Código Judicial, este Despacho considera viable la pretensión solicitada, ya que por tratarse de un proceso de divorcio estamos ante una pretensión de naturaleza personal. Por otra parte, aunque la demandada se encontraba fuera del Estado de New York, la misma fue notificada personalmente de la demanda de divorcio en su contra y, a pesar de ello, no compareció al proceso. En nuestra opinión se da cumplimiento con el presupuesto básico que señala el numeral 2 del artículo 1409 del Código de Procedimiento, el cual consiste en que el demandado tenga la posibilidad de defenderse de la pretensión en su contra. El hecho de haber sido la notificación de manera personal le proporcionó la oportunidad de hacerse representar en el juicio. Por ello, a nuestro juicio, no se configuran los presupuestos relativos a la rebeldía o estado de indefensión del demandado. Igualmente, la obligación para cuyo cumplimiento se ha procedido en la sentencia es lícita en Panamá y la copia de la sentencia está autenticada por los funcionarios nacionales y extranjeros correspondientes. La firma del cónsul panameño en New York, fue legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la sentencia aparece traducida al español de su original en inglés."

"En consecuencia de lo antes señalado, consideramos que procede que se reconozca y se declare ejecutable en Panamá la sentencia de divorcio proferida el 22 de junio de 1993 por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, sección matrimonial, en el Juzgado del Condado de New York que disolvió el matrimonio entre el señor ALEJANDRO MARTÍN DAWSON y la señora GLADYS GONZÁLEZ DE DAWSON."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada fue notificada personalmente. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable

la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 22 de junio de 1993, expedida en la Suprema Corte del Estado de Nueva York en la Corte del Condado de Nueva York, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre ALEJANDRO MARTÍN DAWSON FIELDS y GLADYS GONZÁLEZ DE DAWSON.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DIAMANTINA CHONG DE BAHRS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA N° 17875 PROFERIDA EN LA CORTE DE CIRCUITO DEL CONDADO DE MONTGOMERY MARYLAND, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 1986 QUE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE DAVID LEROY BAHRS Y DIAMANTINA CHONG DE BAHRS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Harmodio Ernesto Mariscal Ruiz, actuando en nombre y representación de la señora DIAMANTINA CHONG DE BAHRS, formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que se declare ejecutable en Panamá la sentencia de divorcio N° 17875, proferida por la Corte de Circuito del Condado de Montgomery Maryland, el 28 de noviembre de 1986.

El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mi mandante y el señor DAVID LEROY BAHRS, contrajeron matrimonio civil, el día 11 de septiembre de 1948, ante el Juzgado de Cristóbal en Colón, y el mismo se encuentra inscrito en el Tomo N° 26, Asiento N° 482, del libro de matrimonios de la Provincia de Colón.

SEGUNDO: La solicitud formulada cumple los requisitos exigidos en los artículos N° 114 y 1409 numeral 2 y siguientes del Código Judicial, puesto que es de efecto lícito y es la demandada quien solicita el EXEQUÁTUR."

El apoderado judicial de la señora Diamantina Chong de Bahrs adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma, debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General de Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República entre Diamantina Chong Bernal y David Leroy Bahrs.

Se corrió traslado al señor Procurador de la Nación para emitir concepto una vez admitida la solicitud presentada. En su Vista N° 25 de 3 de junio de 1996, consideró que "de acuerdo a las constancias de autos y al análisis de los elementos estructurativos del caso que nos ocupa, se establece que la petición endilgada cumple con los requisitos de ley, por lo cual conceptuamos que debe

accederse a la pretensión que origina este negocio".

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en Panamá.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 11 de septiembre de 1948, ante el Juez Corte Distrital-Zona del Canal, Distrito de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá, y su disolución se llevó a cabo en el extranjero, ante el tribunal competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho, además, no consta que la sentencia fue dictada en rebeldía al haberse considerado todo el procedimiento como manifiesta la misma.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio N° 17875, proferida por la Corte de Circuito del Condado de Montgomery Maryland el 28 de noviembre de 1986, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a DAVID LEROY BAHRS y DIAMANTINA CHONG DE BAHRS, y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE VALENCIA ESPAÑA, EN LOS AUTOS DE DIVORCIO CONTENCIOSO N° 01245/1995 PROMOVIDO POR D. MIGUEL RAMÍREZ SUÁREZ CONTRA D. EDICTA SOLÍS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia N° Nueve de Valencia, España.

El Mencionado Tribunal de Justicia español solicita:

"Que, con entrega de las copias y cédula que se acompañan, se emplace a la demandada señora EDICTA SOLÍS GONZÁLEZ con domicilio en las Tablitas aldea a 45 km. de Colón, domicilio postal Entrega general zona 3 Panamá, confiriéndole traslado de la demanda para que, en el improrrogable plazo de VEINTE DÍAS comparezca en autos por medio de Abogado y Procurador, y la conteste formulando en su

caso reconvención, bajo los apercibimientos legales."

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones.

Observa la Sala Cuarta, que tanto el Estado panameño, como el Estado español, están actualmente adscritos al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, Ley de la República N° 6 de 25 de junio de 1990(publicada en la Gaceta Oficial N° 21.571 de 3 de julio de 1990), y, a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada a través de la Ley N° 12 de 23 de Octubre de 1975 (publicada en la Gaceta Oficial N° 18.072 de 23 de abril de 1976).

El Convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículo 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente."
>
> "Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento, y de corresponder la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una anotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización."

Se colige palmariamente de los artículos antes transcritos, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "**acotación o apostilla**" como única formalidad exigida y aplicable en todo documento público proveniente del extranjero, el cual es el caso del negocio que nos ocupa.

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se trasmitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo no establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que surtir en el Estado requiriente.

La sala observa que en el presente exhorto en cuestión no se aprecia el sello de la apostilla o acotación que legaliza los documentos expedidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o carta rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que

los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que emitió dichos documentos.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que "las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, preferentemente. Es una regla de conducta obligatoria para los Estados que los suscriben y ratifican. La teoría de la fuerza obligatoria de los pactos internacionales ha sido muy amplia y se ha orientado hacia los más variados criterios ..., pero la esencia de ellas es la afirmación del carácter obligatorio de los mismos, cualquiera que sea el fundamento que las informa" (Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, pág. 135).

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia No. Nueve de Valencia, España, y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO SIN NÚMERO DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, LIBRADO POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR EL SUPUESTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES CONTRA EUGENIO PRADO BUGALLO Y ODALYS VIANETH RIVERA DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior, ha ingresado en la Sala de la Corte Suprema de Justicia, mediante nota N° DGPE/DCL/N° 0748/96, exhorto de 18 diciembre de 1995, librado por el Juzgado Central de Instrucción Número Uno de Madrid, España, dentro del proceso seguido por el supuesto delito de Blanqueo de capitales Procedente del tráfico de estupefacientes contra EUGENIO PRADO BUGALLO Y ODALYS VIANETH RIVERA DE GRACIA.

El objetivo del presente exhorto es **"Que se reciba declaración judicial a** Odalys RIVERA DE GRACIA, con requerimiento de que aporte sus declaraciones de la renta y patrimonio desde 1990 hasta la actualidad y documentación justificativa de la existencia de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DE PESETAS, en la cuenta que compartía con EUGENIO PRADO BUGALLO en el Banco Hapoalim de ginebra y específicamente la que se refiera a las actividades, capital social, patrimonio, titularidad, accionistas y apoderados de la entidad mercantil domiciliada en Panamá RIPRA CORPORATION. Se adjunta al presente pliego de posiciones que deberá contestar la mencionada Sra. RIVERA DE GRACIA".

La solicitud del Juzgado Central de Instrucción, número Uno, de Madrid, España, se siguen las Diligencias Previas por un presunto delito de Blanqueo de Capital procedente del Tráfico de Estupefacientes donde aparecen imputados la mencionada Odalys Vianeth Rivera de Gracia y Eugenio Prado Bugallo. En la investigación efectuada aparece una cuenta corriente conjunta número 300258 abierta en el Banco Hapoalim de Ginebra (Suiza) con un capital de ciento veintitrés millones de pesetas sin que haya podido justificarse el origen de

dicha cantidad. (Lo subrayado es de la Sala).

La Sala atendiendo lo pedido por las autoridades españolas, considera lo siguiente:

En importante señalar que la señora Odalys Vianeth Rivera de Gracia, aparece como imputada de un presunto delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes.

El artículo 2036 del Código Judicial establece lo que se entiende como imputado.

> "Artículo 2036: El Sujeto pasivo de la acción penal es el imputado y es toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito".

El artículo 2115 señala los presupuestos bajo los cuales se puede efectuar la indagatoria.

> Artículo 2115: "La indagatoria tendrá, como presupuesto, la existencia del hecho punible y la probable violación del imputado. El funcionario de instrucción determinará ésta en resolución razonada, bastando para este efecto, que resulte del proceso, al menos prueba indiciaria". (Lo subrayado es de la Sala).

De la transcripción del artículo anterior, se colige que para que se pueda realizar la indagatoria es un requisito indispensable que se acredite el hecho punible, así como las pruebas que vinculan a la señora Odalys Vianeth Rivera de Gracia al delito que se le imputa. Dicha documentación no consta dentro de la relación de los hechos proporcionada por las autoridades españolas y visible a foja 5 del expediente.

Declarar el presente suplicatorio viable implica que a una ciudadana panameña se le diera un tratamiento de inferioridad al de otros ciudadanos panameños frente a una autoridad extranjera. La Sala de Negocios Generales, puede autorizar la indagatoria de la señora Odalys Rivera De Gracia, sólo si se acredita cuál es el delito y se facilitan a las autoridades panameñas las pruebas que demuestren que en efecto se efectuó el delito de Blanqueo de Capital Procedente del Trafico de Estupefacientes y la vinculación de la señora Odalys Rivera De Gracia con dicho delito.

Es importante señalar las garantías procesales que se establecen en el Código Judicial para la toma de indagatorias, éstas se señalan en el artículo 2113 del Código Judicial.

> "Artículo 2113: Terminado el interrogatorio de identificación, el funcionario de instrucción informará al imputado cuál es el hecho punible que se le atribuye, que puede abstenerse de declarar y que tiene el derecho de nombrar defensor.
>
> Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en acta suscrita por él. Si se rehusare suscribirla, se consignará el motivo".

Por los motivos antes expuesto la Sala procede a declarar no viable lo solicitado por las autoridades españolas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto sin Número de 18 de diciembre de 1995, librado por el Juzgado Central de Instrucción Número Uno de Madrid, España dentro del proceso seguido por el supuesto delito de Blanqueo de Capitales Procedente del tráfico de estupefacientes contra Eugenio Prado Bugallo y Odalys Vianeth Rivera De Gracia y ORDENA la devolución del expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales españolas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR TOMÁS ARTURO GÓNDOLA DÍAZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 25-95 DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (1995), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por el licenciado Silverio Rodríguez Dixon en representación del señor Tomás Arturo Góndola Días, en contra de la Resolución N° 25-95 de fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), emitida por la Comisión de Personal del Tercer Distrito Judicial de Panamá.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el apoderado judicial del recurrente, se pueden resumir de la siguiente manera:

> "...
> CUARTO: Si bien es cierto que mi representado se siente conforme con la evaluación, no menos cierto es que el concurso de marras es **INTERNO** y solamente pueden participar aquellas personas que ostenten la calidad de funcionarios del Órgano Judicial, al momento de presentar la documentación respectiva. (El subrayado es de la Sala).
>
> QUINTO: Que observamos que la persona que obtuvo mayor puntuación lo es el licenciado **GERARDO CARRILLO**, quien fue evaluado con 58.21, Puntos.
>
> SEXTO: Sin menospreciar las virtudes del colega, somos conocedores que el citado letrado al momento de presentar su documentación no ostentaba la calidad de funcionario del Órgano Judicial, situación que es fácilmente comprobable con la respectiva certificación que de oficio debe solicitarle al Departamento de Personal del Órgano Judicial".

Una vez transcrita la parte esencial del recurso de reconsideración, esta Sala pasa a conocer el presente recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Observa la sala que el licenciado Rodríguez fundamenta en su recurso de apelación en el hecho de que en la lista de los elegibles obtuvo el máximo puntaje el señor Gerardo Carrillo, quien al momento de concursar no era funcionario del Órgano Judicial, por lo tanto no era apto para participar en el concurso #272 (interno) para Juez de Circuito-Mixto (pos #129) de Bocas del Toro. Sin embargo, en el hecho cuarto manifiesta expresamente "Si bien es cierto que mi representado se siente conforme con la evaluación", es decir que el señor Tomás Arturo Góndola Díaz, no se siente menoscabado en la apreciación que realizó, sobre los documentos presentados, la Comisión de Personal del Tercer Distrito Judicial de Panamá y se manifiesta conforme con el puntaje obtenido de la misma.

El Código Judicial en este caso utilizada como norma supletoria contiene los presupuesto en los cuales opera en recurso de apelación. En el Título XI denominado Medios de Impugnación y Consulta, Capítulo I Normas Generales, artículo 1104, párrafo tercero, establece quienes pueden impugnar las resoluciones judiciales:

> **"ARTÍCULO 1104:**
> ...
> **Los recursos pueden ser interpuestos por la parte agraviada, por el tercero agraviado o por el respectivo agente del Ministerio Público en los casos en que por disposición de la ley interviene".**

Es decir que es necesario que la parte que interpone el recurso de apelación se vea afectada o agraviado por el fallo o decisión de la autoridad.

El Código Judicial en el artículo 1117, Capítulo III, denominado Apelación, avala lo expuesto en líneas anteriores cuando establece:

> "Artículo 1117: La parte que se creyere agraviada tiene derecho de apelar en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a la notificación, si fuere sentencia y dos días si fuere auto ..."

Por lo expuesto en líneas anteriores, la Sala manifiesta que, al recurrente expresar su conformidad con el fallo emitido por la Comisión de Personal del Tercer Distrito Judicial de Panamá, no existen presupuestos los procesales por los cuales, el recurrente pretenda acudir ante esta Magistratura como funcionario de mayor jerarquía, con el propósito de modificar o revocar la decisión tomada en primera instancia.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la apelación interpuesto por Tomas Arturo Góndola Díaz contra la Resolución N° 25-95 de fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), emitida por la Comisión de Personal del Tercer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR JORGE LUIS CALZUDES T. EN CONTRA DEL ACUERDO N° 353 DRH-96 DEL 12 DE MARZO DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE LE DESTITUYE DE SU CARGO DE INSTRUCTOR VOCACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El señor **JORGE LUIS CALZUDES T.**, actuando en su propio nombre, presentó ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, recurso de reconsideración en contra de la decisión contenida en el Acuerdo N° 353 DRH-96 de fecha 12 de marzo de 1996, mediante el cual se le destituye del cargo de **INSTRUCTOR VOCACIONAL I.**

El señor Calzudes fundamenta su recurso, básicamente, en los siguientes hechos:

"... Segundo: Parcialmente cierto. Debido a que le presenté personalmente a la Lic. Edilsa Pinto una nota en donde le informé sobre mi situación y la preocupación que sentía debido a la misma. Ver copia adjunta. Asimismo le solicité solamente dos días de licencia y no quince como pude leer en nota en que ella le enviase a la Lic. Maruquel la cual está adjunta en el file que me presentaron éste viernes.. Con voz alta y muy alterada y señalándome con el dedo índice la Lic. Pinto me contestó "haga lo que usted crea conveniente. Ese permiso lo da Orozco, anda y pídaselo a él. Por la forma violenta en que fue su trato para conmigo recogí mis constancias y me dirigí para continuar mis diligencias. Ya que temí porque esas constancias podrían perderse en el camino o extraviarse intencionalmente ya que se rumoraba que el Sr. Guerra regresaría para el COD ...

El día jueves 28 de febrero me presenté a la secretaria (sic) administrativa para plantearle mi situación y solicitarle el debido permiso, pero los Licenciados Orozco, Priscila y Maruquel estaban ausentes de sus puestos. ver (sic) fotocopia de constancia en dicha oficina. Desde allí llamé a la lic. Pinto y le informé que estaba en la secretaria (sic) administrativa. Acto seguido, siendo las 11:20 a. m. aproximadamente la lic. Pinto de (sic) presentó a la planta baja de la institución para retirar los cheques del COD y me pagó mi cheque correspondiente a la segunda quincena de Febrero. Allí mismo me preguntó cómo yo iba a pagar ésos días? A lo que le contesté que para semana Santa o descontar de mis vacaciones. Motivo por la cual afirmo que la Lic. Pinto siempre se mantuvo informada de mi posición y no como deja ver.

Tercero: Que a partir de (sic) día 04 de marzo me reintegro a mis labores y durante las horas de la tarde la Lic. Pinto me llama para que atienda una llamada telefónica del Depto. de Recursos Humanos. La secretaria me informa que dice la lic. Maruquel que lo que tenga que decirle, se lo mande por escrito. A lo que le respondí que sería durante la semana. Ya que estaba reorganizándome.

Que durante la semana del 4 al viernes 8 de Marzo (sic) hubo una serie de movimientos internos en el COD ... Se me dificultó escribirle a la Lic. Maruquel.

El día (sic) doce de Marzo (sic) envié a mi señora a la institución para que llevase todos (sic) las constancias originales a recursos humanos (sic). Casualmente es en esa fecha que se firma mi destitución. Mi cheque es retenido y al presentarme al departamento de planillas me presentan mi baja.

Señores magistrados (sic) primeramente la lic. Pinto siempre estuvo enterada de mi situación. Segundo, que al reintegrarme a mis labores cumplí con mi trabajo ... Nunca imaginé mi destitución de lo contrario las hubiese enviado mucho mas antes, ya que pensé que como la lic. Pinto estaba enterada no habría ése problema. No soy hombre de declarme (sic) días libres. Todas mis constancias reposan en el depto. de planillas (sic) porque yo pude percatarme de ellas el viernes 15 de marzo. Motivo por el cual solicito que se me reconsidere."

Una vez transcrita la parte medular del recurso de reconsideración presentado por el recurrente, así como vistas las pruebas aducidas, corresponde a esta Superioridad emitir sus consideraciones sobre el particular.

En el hecho segundo del considerando del Acuerdo N° 353 DRH-96 del 12 de marzo de 1996, se afirma "que el Sr. Calzudes se ausentó de sus labores desde el viernes 23 hasta el jueves 29 de febrero sin que a la fecha se tenga **excusa justificada** de ello" razones éstas que motivaron la destitución del señor Calzudes de la posición de Instructor Vocacional I, por abandono de cargo.

Vistas las pruebas aducidas por el señor Calzudes, esta Sala observa, que no son contentivas de una causa o excusa justificada, que prueben la imposibilidad de asistir a su trabajo durante los días en que se ausentó.

Faltar al trabajo equivale a incumplir la obligación fundamental que todo trabajador tiene, cual es la de prestar el servicio.

La justificación impide de todo punto conceptuar las faltas de asistencia como causa de destitución.

Por justificación habrá que entender, a juicio de la Sala, la existencia de hechos independientes de la voluntad del trabajador, y de los cuales no sea, en manera alguna culpable, que le impiden asistir al trabajo, no encontrando estos elementos determinantes en el caso que nos ocupa.

Comprendemos la situación en que se encontraba el señor Calzudes, no obstante, no se justifica que abandonara el trabajo, y que se dirigiera a realizar diligencias de índole personal, sin contar con un **permiso previo**, que, de haberse solicitado oportunamente, acreditara su ausencia; siendo a través de esa situación administrativa, que se busca que los servidores públicos puedan atender apremiantes circunstancias de orden personal o familiar.

Consideramos que su conducta se aparta de todo principio de responsabilidad o de deber que se tiene con la institución.

El numeral 2 del artículo 23 del Código Judicial, establece que "los cargos de voluntaria aceptación se pierden para sus titulares por abandono del cargo por tres días o más sin causa justificada", y en el caso del señor Calzudes, aunado a esto el hecho de que no es funcionario de Carrera Judicial, por lo que no está amparado por la misma.

La Sala ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que la autoridad nominadora puede terminar la relación laboral en cualquier momento siempre y cuando existan méritos que justifiquen tal decisión.

El señor Jorge Luis Calzudes T. no presta servicios a la institución a través de un concurso, y por lo tanto, no forma parte de los funcionarios de Carrera Judicial, según lo dispuesto en el artículo 271, que a continuación transcribimos:

> "Artículo 271: Para los efectos de todos los derechos y garantías en este Código para la Carrera Judicial, solo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha Carrera.
>
> No obstante esta disposición, los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan."

De lo anterior se desprende, que el recurrente no posee estabilidad en el cargo, ya que ésta sólo se adquiere una vez ingresa al Órgano Judicial y es funcionario de Carrera Judicial por medio del sistema de concursos, y se supera el período probatorio al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de Carrera Judicial, aprobado mediante Acuerdo N° 46 de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de septiembre de 1991, salvo las excepciones que contempla el párrafo segundo del artículo 271 del Código Judicial.

Por lo tanto, el señor Calzudes no está amparado por la estabilidad contemplada en las normas de Carrera Judicial, es decir que el puesto que ocupaba al momento de la declaratoria de insubsistencia es de libre remoción y nombramiento, siendo ésta una facultad discrecional de la autoridad nominadora, que puede ser ejercida sin ningún procedimiento previo.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la reconsideración presentada por el señor JORGE LUIS CALZUDES T., actuando en su propio nombre, en contra del Acuerdo N° 353 DRH-96 del 12 del 12 de marzo de 1996, mediante el cual se le destituye del cargo de Instructor Vocacional I.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR LESLIE SAAVEDRA GARCÍA, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96, DE FECHA 27 DE MARZO DE 1996, MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, ESTABLECE LA LISTA DE PERSONAS SELECCIONABLES, PARA LA POSICIÓN N° 198 PARA EL CARGO DE OFICIAL MAYOR II DEL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO, RAMO CIVIL DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Venancio Villalaz en representación de la señora Leslie Saavedra García ha presentado recurso de hecho contra la resolución N° 01-96 de 27 de marzo de 1996, dictada por la Comisión de Personal del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se establece la lista de personas seleccionables para la posición N° 198 de Oficial Mayor II del Juzgado Primero del Circuito, Ramo Civil de Herrera.

El apoderado judicial de la señora Saavedra García sustenta el recurso de hecho alegando que la Comisión de Personal no se ha pronunciado con respecto al recurso de reconsideración y apelación en subsidio que como apoderado, interpusiera en favor de la señora Saavedra García; que tanto la Comisión como el Departamento de Personal se niegan a explicar donde se encuentra el recurso, lo cual a su juicio constituye una denegación de justicia.

Y es que la Comisión de Personal del Cuarto Distrito Judicial, no se ha pronunciado al respecto porque de acuerdo con la copias autenticadas que se aprecian a fojas 13 y 14 del cuadernillo resulta palmario el hecho que la señora Leslie Saavedra García no forma parte de la lista de no selecionables que integran la Resolución N° 01-96, razón por la cual carece de fundamento jurídico el recurso de reconsideración interpuesto.

Lo anterior motivó a la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Carrera Judicial, a devolver la documentación de la señora Saavedra García al Magistrado Dulio Arrocha del Cuarto Distrito Judicial mediante Nota DCJ-148-96 de fecha 17 de abril y recibida en la ciudad de las Tablas el 18 de abril del presente, toda vez que la señora Saveedra fue excluida del proceso de concurso por la Directora de Recursos Humanos, en virtud de que la misma no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el concurso, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Carrera Judicial.

Lo expuesto en líneas anteriores nos lleva a concluir que el recurso de hecho interpuesto por el licenciado Villalaz carece de asidero jurídico, pues no existe la negación de un recurso de apelación previo. De acuerdo al artículo 1137 del Código Judicial, el recurso de hecho sólo podrá ser interpuesto una vez se haya negado el recurso de apelación o la concesión del recurso de casación. Dicho artículo es del tenor siguiente:

> **1137: La parte que intente interponer el recurso de hecho pedirá al juez que negó la apelación o la concesión del recurso de casación, antes de vencerse los dos días siguientes al día en que se notificó o se tuvo por notificada la negativa**, copia de la resolución, su notificación, si la hay, la apelación, su negativa y las demás piezas que estime conveniente.

De la transcripción anterior se desprende que el recurso de hecho sólo podrá ser presentado una vez haya sido negado el recurso de apelación. En el caso particular la señora Saavedra García no forma parte de la resolución N° 01-96, no es concursante seleccionable, ni tampoco no seleccionable, por lo que a todas luces resulta imposible que la misma pueda recurrir sobre una resolución de la cual no forma parte.

Ante esta realidad procesal debe esta Superioridad, resulta imposible admitir este medio de impugnación por ser manifiestamente improcedente.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por la señora Leslie Saavedra García contra la resolución N° 01-96 de 27 de marzo de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA INTERPUESTA POR LYDIETTE CASTRO CONTRA EL LICENCIADO ABDIEL GONZÁLEZ POR FALTAS A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó el cuaderno contentivo de la denuncia por falta a la ética profesional presentada por la señora LYDIETTE CASTRO contra el licenciado ABDIEL GONZÁLEZ.

En nota remisoria visible a foja 12 y 13 del cuadernillo, en la que aparece como Sustanciador el licenciado Laurentino Arjona O., se resuelve los siguiente:

> "... En consecuencia el Tribunal de Honor solicita a los Honorables Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que declare la prescripción de la acción disciplinaria dentro de este proceso".

Una breve revisión del cuaderno permite apreciar que en el formulario de denuncia del Colegio Nacional de Abogados, visible a foja 1 del expediente, se constata la fecha del 20 de septiembre de 1990, como la fecha en la cual se interpuso la denuncia, y en la cual se hace referencia sólo al año de 1988, como la fecha de la falta cometida por el abogado Abdiel González, sin precisar fecha exacta.

Por otra parte, el Tribunal de Honor reconoce que no es hasta julio de 1993 cuando se le imprime el trámite legal a este negocio, dada la cantidad de expedientes pendientes del Tribunal anterior y luego de restablecido el Capítulo

Quinto de la Ley 9 de 1984.

La denuncia presentada el 20 de septiembre de 1990 sobre una falta cometida en 1988 sin aún poder determinar una fecha cierta, se tiene por prescrita, puesto que ha transcurrido más de un año luego del último hecho constitutivo de la falta, aún a pesar que el Tribunal de Honor no le dio el trámite inmediato.

Observa la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se restituyó con modificaciones el Capítulo V, de la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, las acciones disciplinarias que se sigan contra los profesionales de la abogacía por faltas a la ética e infracción de la responsabilidad profesional de la abogacía, prescriben en un año y este lapso, se ha cumplido en exceso en este caso, por lo que a todas luces resulta prescrita la acción disciplinaria.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRESCRITA la acción disciplinaria promovida por la señora LYDIETTE CASTRO contra el licenciado ABDIEL GONZÁLEZ, por faltas a la Ética y a la Responsabilidad Profesional del Abogado.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=